

Corresponden a los Procuradores Generales:

Dr. Francisco Pico (1862 - 1875)*

Dr. Carlos Tejedor (1875 - 1878)

Dr. Eduardo Costa (1878 - 1890)

Dr. Antonio Malaver (1890 - 1892)

RELATOR GENERAL:

Abogado, D. Arturo Alonso Gómez
Oficial 6.º de la Dirección General
de Informaciones, Biblioteca y Estadística

AUXILIAR:

Sra. María Esther Pearson de Olavarria
Auxiliar 2.º

A D V E R T E N C I A

Con la publicación del Tomo 1.º de los «Dictámenes en lo Administrativo de los Procuradores Generales de la Nación» se da a conocer la primera parte de la labor que se encomendara a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca, por Resolución de fecha 29 de abril de 1943. — (Ver texto de la Resolución pág. 7).

En el plan de trabajo que esta Dirección General propuso a la Superioridad, aprobado por Decreto de fecha julio 21 de 1943 (ver pág. 15), se detallan los antecedentes y la necesidad de llevar a cabo esta publicación, que constituirá sin duda alguna, una obra de ~~jurisprudencia administrativa~~ de verdadera utilidad para las diversas ~~reparaciones~~ de la Administración Pública.

La compilación comprende solamente los dictámenes de los Procuradores Generales de la Nación, expedidos en ocasión en que les es requerido su asesoramiento en expedientes administrativos, y en virtud del carácter que la ley les asigna de Asesores Legales del Poder Ejecutivo. Los dictámenes que emiten como Procuradores ante la Corte Suprema, en causas judiciales, se publican desde tiempo atrás en la colección de «Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

La labor realizada supuso un intenso trabajo de selección y ordenación, pues no se trata de dar a publicidad la totalidad de los dictámenes desde su primera época, sino los que realmente contribuyan a formar una jurisprudencia administrativa de actual aplicabilidad, sin descartar por ello, los expedidos en causas que pueden revestir en la actualidad carácter de antecedentes históricos.

Cada dictamen está encabezado con su correspondiente sumario, que extracta en forma sintética la doctrina que en el caso

sostiene el Procurador General firmante. En la redacción de estos sumarios se ha tratado en lo posible de conservar la misma terminología empleada en el dictamen, de manera de evitar cualquier alteración de su texto, consiguiéndose en esta forma, pequeñas síntesis, que reflejan fielmente el contenido de los dictámenes, lo que facilita la búsqueda del caso que por analogía se quiera aplicar.

A continuación de la mayor parte de los dictámenes, se hace referencia a la resolución recaída en el caso, indicándose la fecha de la misma. Si la resolución lo ha sido de conformidad con los dictaminado o contraria al mismo, así se expresa, y cuando sólo se indica la fecha, se trata de cuestiones resueltas apartándose de lo aconsejado en el dictamen, sin que implique ello que sea contraria al mismo. La transcripción íntegra de cada resolución se ha estimado innecesaria, por cuanto la misma ya figura en otras publicaciones oficiales y, al darse la fecha, la búsqueda resulta fácil en cualquier colección en que se encuentre.

La mención de «Tomo» y «pág.» seguida de las abreviaturas «Inf. de los Consej. Leg. del P. E.», se refiere al tomo y la página de la colección «Informes de los Consejeros Legales del Poder Ejecutivo», de donde se han copiado la mayor parte de los dictámenes que forman el Tomo 1.º con que se inicia esta obra. Esta indicación se reputa útil para el lector, por cuanto lo remite a la anterior publicación en la que cada caso aparece relacionado con sus antecedentes y contiene el texto completo de la resolución recaída.

Los dictámenes han sido compilados siguiendo un estricto orden cronológico, que en la edición anterior no se guardó. Cuando no ha sido posible conocer la fecha exacta de cada uno, sólo se menciona mes y año, o año solamente.

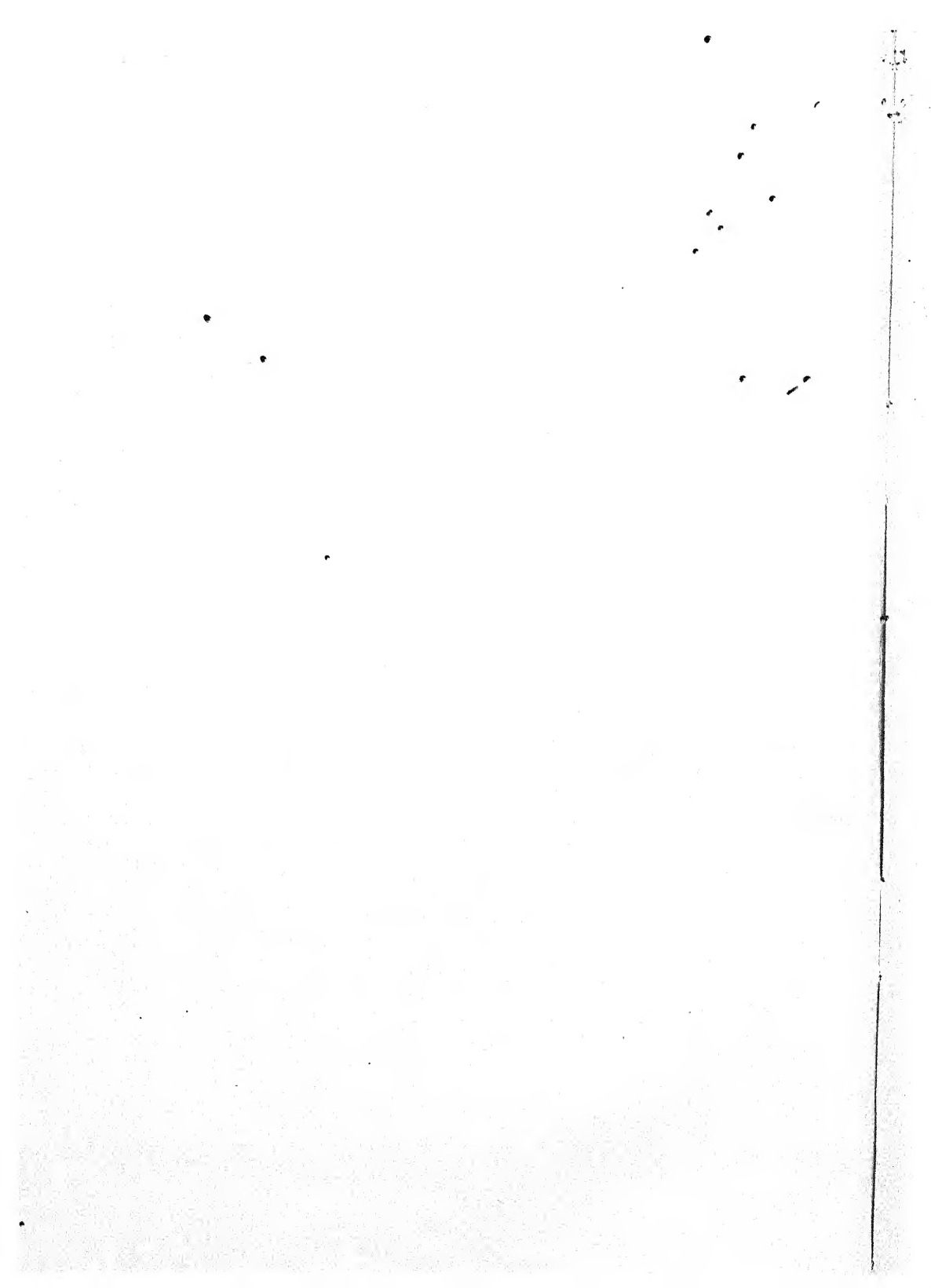
Se han confeccionado dos índices alfabéticos; el primero por los nombres de las partes o de las Instituciones intervinientes en las causas que originaron los dictámenes y el segundo, por materias, referido a los sumarios, siguiendo al respecto, el método adoptado por las diversas compilaciones de fallos judiciales y en especial por el «Digesto de los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación». En este último índice, los rubros que contie-

nen numerosos casos, están a su vez encabezados por índices sumarios.

La segunda parte del trabajo, siguiendo el plan a que hicimos referencia anteriormente, comprende el ordenamiento y compilación de los dictámenes suscriptos por los Dres. Sabiniano Kier y Julio Botet, material con el que trabajamos en la actualidad, y que en buena parte se encuentra ya ordenado para su publicación en breve plazo. Los correspondientes al Dr. Botet son numerosos y hasta ahora inéditos en su mayor parte. Las copias originales fueron conservadas privadamente por el propio Dr. Botet, cuya viuda, la Sra. Rosa del Campo de Botet, gentilmente nos las ha facilitado. En la preparación de estos dictámenes, tropezamos con la dificultad de que en su mayoría son manuscritos, cuyos textos aparecen en partes borrados por el transcurso del tiempo y a veces con caracteres que hacen difícil su lectura.

Manuel Villada Achával

Director General de Informaciones, Biblioteca y Estadística



Buenos Aires, 29 de abril de 1943. —

Visto:

El decreto de fecha 7 de setiembre de 1874, que ordena a todos los Ministerios y reparticiones que por razón de su oficio intervengan en asuntos informados por el Procurador General de la Nación, obtengan copia autorizada de los informes, vistas u otras piezas a que diera lugar la intervención mencionada, haciéndolos preceder de una relación sucinta del caso a los efectos de su compilación y publicación periódicas, y

CONSIDERANDO:

Que las vistas del Procurador General de la Nación, en cuanto le son requeridas por la Excm. Suprema Corte de Justicia Nacional en asuntos de su jurisdicción y competencia, son publicadas por el alto Tribunal nombrado en su colección de fallos, lo que no ocurre cuando el funcionario mencionado informa al Poder Ejecutivo de la Nación o a sus dependencias en aquellos asuntos de orden administrativo cuyo asesoramiento le es requerido en virtud de las Leyes o Reglamentos;

Que tales informes son producidos y corren transcritos en los expedientes respectivos cuya guarda posterior en las oficinas o archivos, cuando no su destrucción, son causa de que no puedan debidamente consultarse para la resolución de casos análogos, perdiéndose así una fuente doctrinaria rica, por lo ilustrada, en valor y sugerencias y la posibilidad de que la labor administrativa presente la necesaria unidad y coherencia;

Que en cumplimiento del mencionado decreto de 7 de setiembre de 1874, se inició la publicación, continuada hasta 1894, de los informes del Procurador General de la Nación en asuntos administrativos, labor esta que hubo de quedar interrumpida por diversas circunstancias, entre ellas, la de no contar el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, al que le está encomendada la tarea por el referido Decreto, con los elementos de organización necesarios para realizar una tarea de tal naturaleza;

Que con la creación posterior de la Dirección General de Informaciones y Biblioteca, que tiene a su cargo por sucesivas resoluciones, el atender la redacción, impresión y distribución de varias publicaciones oficiales del Departamento, existe ya la posibilidad de que pueda continuarse la compilación, anotación y publicación de los informes del Procurador General de la Nación, cuyo conocimiento es de la mayor importancia en cuanto a la intervención de dicho funcionario en los asuntos administrativos es requerida con creciente insistencia en virtud de Leyes y Decretos que han ido aumentando la naturaleza y número de los asuntos en los que sus informes le son requeridos, entre ellos, los que motivan la aplicación, especialmente en todos los grados de la instrucción pública, del Decreto de 7 de abril de 1933 sobre Recurso Jerárquico y su posterior extensión a las reparticiones autárquicas;

Por ello,

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública—

RESUELVE:

1.º) — Encárgase a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, la compilación, ordenación y anotación de los informes, vistas y demás asesoramientos del Procurador General de la Nación en asuntos de índole administrativa y a partir de la fecha en que dicha labor quedó interrumpida, de acuerdo con su iniciación por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 7 de setiembre de 1874.

2.º) — Las diversas Reparticiones del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública prestarán a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca la colaboración que les sea solicitada por la misma, a los efectos del cumplimiento de esta Resolución.

3.º) — Por intermedio de quienes corresponda se solicitará de las restantes dependencias del Poder Ejecutivo y de las Reparticiones autárquicas la colaboración necesaria para que de los expedientes respectivos puedan transcribirse los informes en que el Procurador General de la Nación haya intervenido y resulte la importancia del conocimiento de dichos informes.

4.º) — La Dirección General de Informaciones y Biblioteca mencionada elevará al Ministerio, en su oportunidad, el trabajo que se le encomienda en esta Resolución a los efectos de su aprobación, impresión y distribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.º del Decreto de 7 de setiembre de 1874 mencionado.

5.º) — Comuníquese, anótese y archívese.

• ROTHE.

Buenos Aires, 15 de junio de 1943. —

Al Señor Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Doctor Don Enrique Gómez Palmés. —

S/D. —

Tengo el agrado de someter a S. S. el plan al que, de acuerdo con los antecedentes consultados y estudios hechos sobre la materia, podría ajustarse la tarea de compilar, ordenar y anotar los informes en lo administrativo del Procurador General de la Nación, encomendada a esta Dirección General por Resolución de 29 de abril ppdo.

I — ANTECEDENTES. —

El Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 7 de setiembre de 1874, citado por S. E. el Señor Ministro en las vistas de su Resolución de 29 de abril ppdo., ordenaba la publicación de los dictámenes en lo administrativo del Procurador General de la Nación y de otros consejeros legales del Poder Ejecutivo, encargándose al Señor Subsecretario de Justicia la inmediata impresión de 1 ó 2 volúmenes que contuviesen los informes recolectados en las distintas Oficinas Públicas según el procedimiento de copia, autenticación y envío que en el mismo Decreto se prescribía. —

II — LA EDICION DE 1878. —

Esta primera fase de la compilación originó la impresión de 7 volúmenes que contenían tanto las vistas del Procurador General como la de otros Consejeros Legales del Poder Ejecutivo en los más diversos expedientes. —

La edición con el título de *Informes del Procurador General de la Nación e Informes y Resoluciones del Poder Ejecutivo*, abarca los años 1874 a 1878 inclusive; fué impresa en la Imprenta Americana de Buenos Aires, bajo la dirección de don Clodomiro Quiroga.

III — DECRETO DE 27 DE DICIEMBRE DE 1889.—

En el año 1889 el Departamento de Instrucción Pública, por iniciativa de su titular el doctor Filemón Posse, creyó conveniente modificar el sistema adoptado para la impresión de los informes del Procurador General y demás Consejeros Legales. A esta iniciativa responde el Decreto de 27 de diciembre de 1889 que, con respecto a su anterior de 7 de setiembre de 1874 citado, importaba las modificaciones siguientes:

- a) — La impresión de los 7 tomos anteriormente aparecidos.
- b) — Inclusión en la obra de los asuntos únicamente de marcada importancia para la jurisprudencia administrativa.
- c) — Fijación en 2.000 del número de ejemplares a imprimirse de cada tomo de la obra.

IV — LA EDICION DE 1890-1902

De conformidad con el Decreto de 27 de diciembre de 1889, fueron publicados 10 tomos que contenían:

- a) — La reimpresión de los dictámenes suscritos de 1862 a 1892 para los Procuradores Generales:

Dr. Francisco Pico 1862 a 1875

Dr. Carlos Tejedor 1875 a 1878

Dr. Antonio E. Malaver 1890 a 1892

- b) — La transcripción de los primeros informes del Procurador General doctor Sabiniano Kier, quien actuó entre los años 1892 a 1905.

Esta edición fué impresa, con carácter de Publicación Oficial, en el Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires en 1894, con el título de *Informe de los Consejeros Legales del Poder Ejecutivo*.

V — EL PLAN ACTUAL.—

El tiempo transcurrido entre la edición de 1890 y la resuelta por S. E. el Señor Ministro con fecha 29 de abril ppdo., no ha hecho sino acentuar la conveniencia de reducir la compilación a los dictámenes que presenten una importancia real y actual para la jurisprudencia administrativa.

El temperamento adoptado por el Poder Ejecutivo en 1889 se impone en este caso con mayor fuerza por cuanto el no aplicar un criterio selectivo podría conducir a la impresión de una obra cuyo número de volúmenes (50 ó más en relación con las ediciones de 1878 y 1890-1902) no estaría en consonancia con el contenido realmente aprovechable de la misma.

Desaparecida también la necesidad de publicar los informes de otros Asesores Legales distintos del Procurador General, así como las resoluciones recaídas en cada caso ocurrente, la compilación actual quedaría específicamente circumscripita al objeto fijado por la mencionada Resolución de S. E. el Señor Ministro de fecha 29 de abril ppdo., es decir, la de los informes, vistas y asesoramientos del Procurador General de la Nación.

El plan trazado por esta Dirección General comprendería los siguientes puntos:

a) — La reimpresión de la edición de 1890-1902, agotada e incompleta en sus colecciones, debido al tiempo transcurrido, adaptándola al doble criterio selectivo expuesto: el de la importancia real para la jurisprudencia administrativa de los informes transcritos; y el que la única fuente de los mismos sean los dictámenes del Procurador General de la Nación.

b) — La limitación de la obra a unos 10 tomos de tamaño igual al del Digesto de Segunda Enseñanza; cuyos volúmenes, de acuerdo con la experiencia de la reimpresión de 1890-1902, de la hecha por iniciativa particular de sus propios dictámenes por el Doctor José Nicolás Matienzo, y de cálculos aproximados del actual Procurador General, Dr. Juan Alvarez, cuya opinión ha sido recogida por el suscrito en sucesivas conferencias habidas sobre este asunto, serían de 300 páginas, en más o en menos, distribuídos en la siguiente forma:

Tomos	Procuradores Generales	Años
I y II	Dr. Francisco Pico	1862-1875
(reimpresión seleccionada	Dr. Carlos Tejedor	1875-1878
de los 10 tomos de la ed.	Dr. Eduardo Costa	1878-1890
1890-1902)	Dr. Antonio E. Malaver	1890-1892

Tomos	Procuradores Generales	Años
III y IV	Dr. Sabiniano Kier	1892-1905
V y VI	Dr. Julio Botet	1905-1917
VII	Dr. José Nicolás Matienzo	1917-1922
VIII y IX	Dr. Horacio Rodríguez Larreta	1922-1925
X	Dr. Juan Alvarez	1935-1942

- e) — La edición actual para su más fácil y cómodo manejo sería acompañada de índices generales confeccionados:
- 1) — Por el nombre de los funcionarios, Procuradores Generales de la Nación, que suscriben los dictámenes.
 - 2) — Por razón de materia, adoptándose para ello el nomenclátor de los más modernos diccionarios y repertorios administrativos y de legislación.
 - 3) — Por razón de las personas intervinientes en los asuntos causantes de las vistas compiladas.
- d) — La fijación de los ejemplares a imprimirse en número de 2.000, que es el mismo contemplado en el Decreto de 1889, y que no existen motivos racionales para modificarlo.
- e) — La impresión de la obra en los talleres de la Penitenciaría Nacional junto con la transcripción de sus antecedentes como aquí se detallan.

Saluda al Sr. Subsecretario con su más distinguida consideración.

Manuel Villada Achával

Director General de Informaciones, Biblioteca y Estadística

Buenos Aires, julio 21 de 1943. —

Visto:

Las notas del Señor Director General de Informaciones y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en la que propone a la Superioridad el plan de trabajo para la compilación, ordenación y anotación de los informes en lo administrativo del Procurador General de la Nación, tarea encomendada a la Dirección General de Informaciones y Biblioteca mencionada por Resolución Ministerial de 29 de abril ppdo., y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 7 de setiembre de 1874, se ordenó la compilación de los informes del Procurador General de la Nación y Asesores Legales del Poder Ejecutivo según un plan modificado por posterior Decreto de 27 de diciembre de 1889;

Que dicha modificación respondió a un criterio de selección de acuerdo con el cual la nueva reimpresión que se ordenaba de los dictámenes incluídos en la primera edición de 1878, así como los que hubieran de incluirse en la edición segunda, debían responder al concepto de su mayor importancia para la jurisprudencia administrativa;

Que el tiempo transcurrido desde 1890, fecha inicial de la segunda edición de los informes compilados, no ha hecho sino acentuar la conveniencia de seleccionar los informes compilados, reduciéndolos a los de mayor importancia actual, así como la de circunscribir la recopilación de dichos informes a los asesoramientos del Procurador General de la Nación;

Que el plan preparado por la Dirección General de Informaciones y Biblioteca consulta ambas conveniencias y coordina los trabajos a realizarse dentro del concepto de unidad de la obra, de conformidad con los decretos de 7 de setiembre de 1874 y 27 de diciembre de 1889 mencionados;

Que resulta conveniente también la asignación de tareas al personal designado al efecto, por decreto de 4 de mayo del corriente año y la confirmación que se solicita en las notas de referencia;

Por tanto:

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Art. 1.º — Apruébase el plan de trabajo y la asignación de funciones y tareas al personal, propuestos por la Dirección General de Informaciones y Biblioteca de Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para el cumplimiento de la tarea de compilar, de ordenar y anotar los dictámenes en lo administrativo del Procurador General de la Nación que le fuera encomendada por Resolución Ministerial de 29 de abril ppdo.

Art. 2.º — Fijase en tres mil (3.000) el número de ejemplares a imprimirse de cada uno de los diez (10) tomos de la compilación ordenada cuyas características responderán al plan precedentemente aprobado: Mil (1.000) ejemplares con destino al servicio oficial y dos mil (2.000) para ser puestos en venta en la Inspección General de Justicia — Sección Boletín Oficial — al precio que oportunamente se fijará.

Art. 3.º — La Penitenciaría Nacional procederá a la impresión de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.º de este Decreto y el art. 4.º de la Resolución Ministerial de 29 de abril ppdo.

Art. 4.º — Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

Decreto N.º 2.967. —

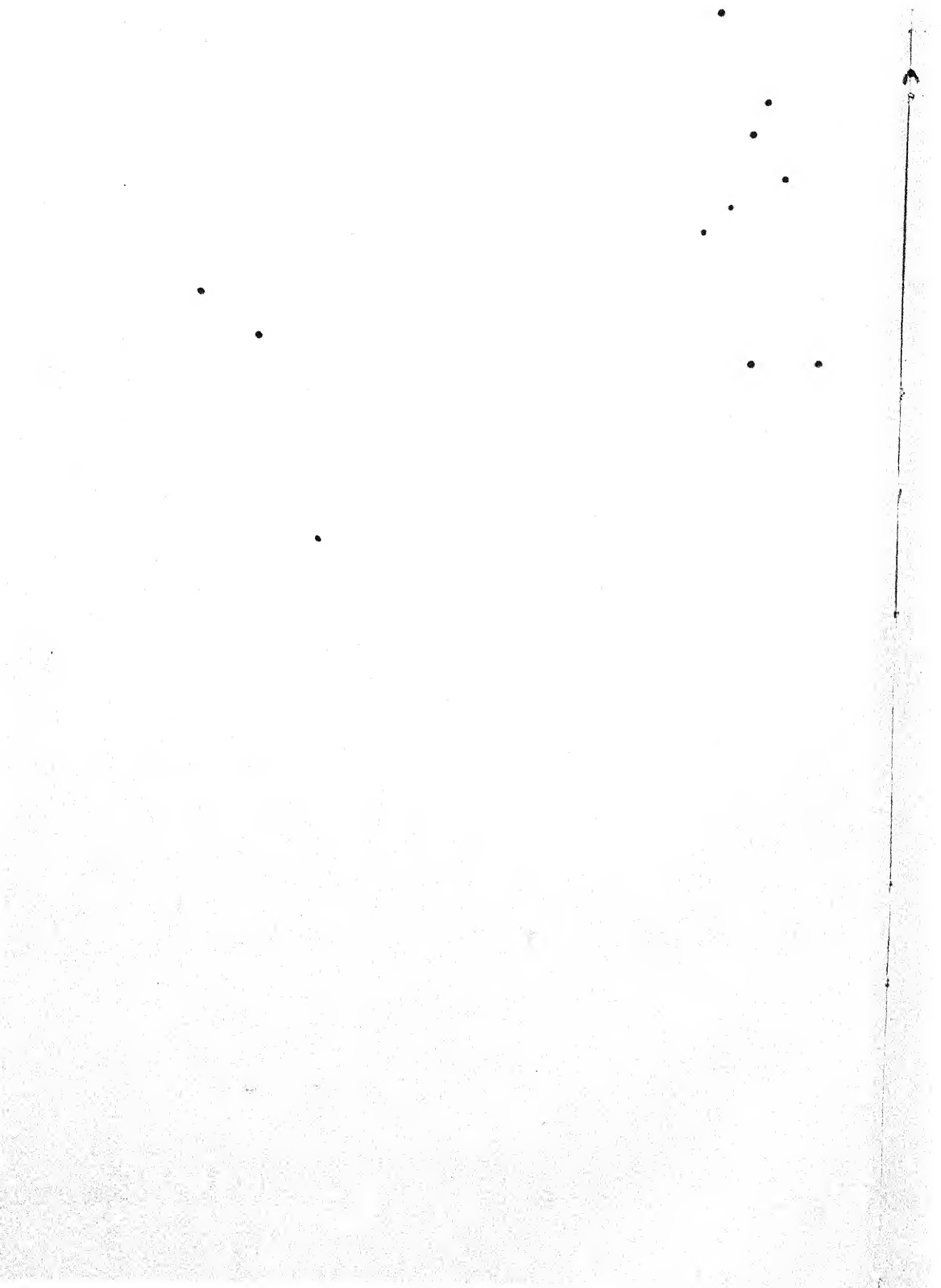
RAMIREZ

ELBIO CARLOS ANAYA

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Dr. FRANCISCO PICO

1862 - 1875



Por disposición del art. 20 de la ley de 16 de octubre de 1862, compete exclusivamente al Poder Judicial el conocimiento de todas las causas contenciosas-administrativas; por ello los Administradores de Rentas han cesado en sus funciones de jueces interinos de hacienda.

La Administración de Rentas del Rosario—sobre letras protestadas.

Excmo. Señor:

Si para dar cumplimiento exacto a la Ley de Aduana en cuanto ordena que los derechos sean proporcionales al valor de las mercaderías que se introducen o exportan, el Poder Ejecutivo ha decretado que los derechos se paguen en la misma moneda a que está arreglada la tarifa de Avalúos o con proporción a su valor, la presente cuestión judicial no puede ser en qué clase de moneda deberán pagarse los derechos en la Aduana de Rosario, que es el punto de vista bajo el cual lo ha mirado el Señor Fiscal de Gobierno.

Esa cuestión no puede ser sometida en abstrato a una decisión judicial, porque ella estaría ya resuelta por la Ley y los reglamentos de autoridad competente.

Sea que conozca de esta causa el Juez de Sección o el Administrador de Rentas del Rosario, la decisión debe ser conforme a las reglas establecidas, porque las funciones judiciales no se extienden a reformar las leyes o reglamentos establecidos, sino a aplicarlos en los casos que sobrevengan.

Sobre esto no puede haber duda.

Pero la cuestión actual es muy distinta; ella es puramente de jurisdicción y se reduce a saber si compete al Administrador de Rentas o al Juez Nacional de Sección el seguir un juicio para obligar a los deudores del Fisco al pago que resisten.

Después del establecimiento del Poder Judicial de la Nación, a quien compete el conocimiento de las causas contenciosas-administrativas, según la disposición del artículo 20 de la ley de 16 de octubre de 1862, los Administradores de Rentas han cesado en el ca-

rácter que interinamente investían de Jueces de Hacienda y han quedado reducidos a sus facultades meramente administrativas.

En esta calidad pueden pronunciarse sobre todas las materias de pura administración; pero, desde que por ocasión de sus decisiones sobrevienen debates o se engendra una oposición de derechos o de intereses, bien o mal entendidos, la materia se modifica entonces y haciéndose contenciosa entra en la atribución de los Jueces de Sección.

Toda oposición de derechos da lugar a un juicio, que sólo puede ser resuelto por un Juez con jurisdicción suficiente.

Es muy común oír decir que tal pleito debe ser juzgado administrativamente, y este dicho se apoya en la práctica de estos países desde el tiempo de la Colonia, en que los Administradores han reunido la jurisdicción contenciosa. Pero esa locución es viciosa y hoy no puede dejar de infundir confusión en las ideas.

La administración reglamenta, dispone, ordena; pero jamás juzga. Cuando con motivo de sus reglamentos sobreviene un pleito, sea entre dos particulares, sea entre un particular y el Fisco, es al Poder Judicial a quien compete decidirlo.

Esta doctrina que está claramente consignada en la Ley de jurisdicción de 14 de septiembre último, repugna al Señor Fiscal, si se aplica en toda su extensión, pareciéndole sumamente inconveniente el que el Fisco, para el cobro del impuesto esté obligado a seguir un pleito con cada contribuyente.

El inconveniente sería gravísimo, pero él tiene dos remedios que se hallan en práctica.

El Poder Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar la recaudación del impuesto, de modo que se haga muy difícil la resistencia.

Así es que a los deudores morosos no se les admite a despacho de Aduana, o se les obliga a pagar los derechos al contado, y aun tienen los Administradores la facultad de retener en prenda las mercaderías que les pertenecen.

El segundo remedio está en la Ley 5 tit. 7.º, lib. 9, R. C., hoy vigente por la disposición del artículo 374 de la Ley de Procedimientos de 14 de Setiembre último. Esa Ley ordena a todos los Jueces que hayan de conocer de pleitos sobre rentas públicas los libren breve y sumariante de plano y sin figura de juicio, sabida solamen-

te la verdad, y en juicio verbal siempre que sea posible. Cualesquiera que sean los trámites establecidos para los demás juicios, la Ley 12 título 1.º del mismo libro autoriza a los Jueces a que prescindan de ellos en estos juicios de excepción.

De este modo queda desvanecido el inconveniente práctico que se opone a la conservación íntegra del principio conque la Ley ha deslindado las jurisdicciones.

En virtud de las razones expuestas, creo que el conocimiento de las causas consultadas compete al Juez de Sección de Santa Fe, y que el Administrador de Rentas del Rosario debe nombrar un procurador que, munido de los documentos necesarios, bajo su dirección y por sus instrucciones, demande a los deudores ante dicho Juez, promoviendo el juicio verbal y sumario que la Ley citada recomienda.

De otro modo, si hubiera el Administrador de Rentas de seguir sosteniendo su jurisdicción, competiría por la Ley a la Corte Suprema el decidir la competencia. — 18 de Diciembre de 1863.

Departamento de Hacienda. Resolución en Enero 24 de 1864.

Tomo 3, pág. 412. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley de 20 de octubre de 1863 —que mandó consolidar en fondos públicos la deuda contraída por la Nación hasta el 1.º de abril de 1861— comprende toda la deuda líquida y reconocida, tanto los cupones de renta que dejó impagos el Gobierno de la Confederación como los Bonos, libramientos o billetes de Tesorería adjudados y que no pudieron ser cubiertos por la Ley de 23 de octubre de 1862 y Decreto de 5 de noviembre del mismo año.

No corresponde pagar intereses por la falta de pago de la renta en los plazos designados en los cupones, si éstos no llevan interés escrito, por haberlo así determinado la Ley de 20 de octubre de 1863.

Maña y Cía. Piden el abono de varios cupones de la deuda interior.

Excmo. Señor:

La deuda que cobran los Señores Maña y Cía., se compone de todos los intereses del empréstito de tres millones autorizado

por la Ley de 1.º de octubre de 1860, que han quedado sin pagarse desde el trimestre que venció en 1.º de Agosto de 1861, hasta el que venció el 1.º de Noviembre de 1862, es decir, seis trimestres. Esta es una deuda líquida reconocida y mandada pagar por la Ley de 23 de Octubre de 1862, y el Decreto de 5 de Noviembre del mismo año.

Para el pago de este empréstito y de los bonos, Billetes de Tesorería y libramientos emitidos por el Gobierno de la Confederación, asignó la Ley el producido de los derechos adicionales de importación y exportación, reservados a disposición del Congreso. Pero no alcanzando esta renta para cubrir todos los objetos a que era destinada, como lo declaró el Gobierno en su Mensaje de 1863, sólo se pagaron los intereses corrientes desde la fecha de la Ley quedando rezagados e impagos los seis trimestres mencionados, así como los demás créditos a que había sido destinada la renta.

Esta fué una de las razones que tuvo el Congreso para dictar la Ley de 20 de Octubre de 1863, que mandó consolidar en Fondos Públicos toda la deuda emitida hasta el 1.º de Abril de 1861. El art. 1.º de la Ley sólo menciona los Bonos, Libramientos y Billetes de Tesorería, pero por las razones emitidas en la discusión y por el espíritu mismo de la Ley, no puede dudarse que su objeto fué comprender toda la deuda líquida y reconocida que no podía ser cubierta en la forma ordenada por la Ley de Octubre de 1862.

De estos antecedentes resulta que la deuda que se cobra es legítima, y que el Gobierno está debidamente autorizado para mandarla inscribir en los Fondos Públicos creados por la Ley de 16 de Noviembre de 1863. El único punto cuestionable, es si debe cargarse intereses por la falta de pago de la renta en los plazos designados en los cupones. La citada Ley de 20 de Octubre ordenó que se hiciera la liquidación de los créditos, agregando a los capitales el interés de uno por ciento hasta 30 de Setiembre, *en aquellos títulos que llevarán interés escrito*, y en esto se conformó a los principios de legislación universal. Para tener derecho a cobrar intereses, no basta que esté vencido el plazo de la obligación: es preciso que haya una estipulación expresa, o una interpelación judicial, o una protesta, o un acto equivalente. No sería, pues, conforme a las prescripciones de la Ley, el abonar intereses a los cupo-

nes retardados que no tienen tal obligación escrita aunque se diga que la renta de una deuda consolidada, es un verdadero capital.

Así los reclamantes pretenden que su crédito no está comprendido ni en la Ley de 20 de Octubre de 1863, ni en las de 1.º de Noviembre de 1862 y 6 de Noviembre de 1863; porque estas Leyes mandaron consolidar la deuda flotante, y los cupones que ellos cobran pertenecen a una deuda consolidada de antemano. Su argumentación consiste en que debiendo abonarse estos cupones en dinero efectivo, según la Ley de 23 de Octubre de 1862 y Decreto de 5 de Noviembre del mismo año, es equitativo que se le indemnice el perjuicio que sufren por la conversión en Fondos Públicos, abonándoseles los intereses que cargan.

Si fuera cierto que el crédito que reclaman no está comprendido en las Leyes de consolidación de la deuda, el Gobierno no estaría autorizado para mandarlo inscribir en Fondos Públicos; y así esta demostración tiene el defecto de destruir la misma petición que se trata de apoyar con ella. Si ella es admisible es precisamente porque los cupones que dejó impagos el Gobierno de la Confederación, son una deuda tan legítima como los Bonos, Libramientos o Billetes de Tesorería que *se hallan* en el mismo caso y tienen la misma fuerza obligatoria.

Unos y otros han debido ser pagados en dinero efectivo. A unos y otros comprendió la Ley de 23 de Octubre de 1862, cuando destinó el producto de los derechos adicionales para su parcial amortización, mientras que se tomaba una medida general sobre la deuda. Y unos y otros deben, por consiguiente, ser comprendidos en la consolidación que autorizó la Ley de 20 de Octubre de 1863, porque todos ellos constituían la deuda flotante que no podía ser cubierta con la renta que se había destinado para su amortización. Prescindiendo del origen en cuyo examen no se encontraría razón para dar preferencia a los cupones retardados, una vez que toda esta deuda fué reconocida por la Ley de 23 de Octubre, debe aplicarse a todos los títulos la misma regla de liquidación.

Si sus herederos tuviesen razón para decir que son perjudicados en recibir Fondos Públicos en lugar de un pago parcial, lento, indefinido e incierto como el que le asignaban las Leyes anteriores, todo lo que se diga en favor de los cupones será aplicable a los títulos de la verdadera deuda flotante y aun con mayor razón.

El Decreto de 5 de Noviembre de 1862 que invocan los reclamantes como muy favorable a su pretensión, ordenaba que con el producto de los derechos adicionales se pagaran en primer lugar los intereses corrientes del empréstito, en segundo, 17.000 pesos mensuales para la amortización de Bonos, Libramientos y Billetes de Tesorería, en tercero la amortización del empréstito, en cuarto los cupones retardados, etc. Luego se vió que, después de pagados los intereses corrientes del empréstito, el sobrante de la renta no alcanzaba a cubrir los 17.000 pesos del 2.º artículo y por consiguiente, si se hubiera continuado esta forma de pago, es fuera de duda que se habría amortizado toda la deuda flotante antes que se empezara a pagar los cupones retardados del empréstito. De modo que si hubiera habido perjuicios en la consolidación de la deuda, serían mayores los que hubieran sufrido los tenedores de Bonos, Libramientos y Billetes de Tesorería. Y aun puede decirse con seguridad, que si los reclamantes aceptan e invocan la Ley de 23 de Octubre de 1862 y el Decreto que la reglamenta; la posterior consolidación les ha hecho un beneficio, dando a los cupones retardados un valor que no tenían en las condiciones de esa Ley, aun cuando por ella el pago hubiera de hacerse en metálico.

No creo, pues, que haya razones ni de justicia ni de equidad para hacer en este caso una excepción a la regla de liquidación, que estableció la Ley de 20 de Octubre.

En resumen, mi opinión es que el Gobierno está debidamente autorizado para mandar inscribir en Fondos Públicos el importe de los cupones retardados, pero que no debe agregarse a él la partida de intereses que se cobra. — Junio 22 de 1864.

Departamento de Hacienda. Resolución de junio 19 de 1865 que expresa: «Con copia autorizada de la Ley del Congreso Nacional aprobando la liquidación anterior, pase a la Junta del Crédito Público para los fines que corresponden, previa toma de razón por la Contaduría.

Corresponde a los Gobiernos de Provincia, la administración de los bienes de comunidades religiosas extinguidas, dentro de sus territorios, debiendo en caso de enajenación de los mismos, requerir acuerdo del Prelado Diocesano.

Sobre administración de bienes de Comunidades Eclesiásticas extinguidas

Excmo. Señor:

Habiéndose extinguido en La Rioja la Comunidad de la Merced, no puede dudarse que corresponde al Gobierno administrar los bienes que le pertenecieron, y que no puede darse a sus productos aplicación más legítima que los objetos piadosos de dotar curatos, hospicios o escuelas.

Pero no creo que corresponda al Gobierno Nacional resolver administrativamente en este asunto, sino que debe dejarlo a las Autoridades Provinciales para que resuelvan sobre el modo más conveniente de administración solicitando el acuerdo del Prelado Diocesano en el caso de ser necesaria la enajenación de los bienes. — 17 de Agosto de 1864.

Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 9 de 1864.

Tomo 3, pág. 449. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las multas por infracción a las leyes nacionales, deben ingresar al Tesoro Nacional.

Multas impuestas por los Juzgados de Sección.

Excmo. Señor:

Las multas impuestas por infracciones de la Ley de elecciones deben oblar en el Tesoro Nacional, según está dispuesta por el artículo 55 de la Ley de 13 de Noviembre de 1863.

El mismo destino deben tener todas las multas o penas pecuniarias que se impongan por crímenes de rebelión u otros de que

trata la Ley de 14 de Setiembre de 1863, cuando son cometidos contra la Nación.

Por consiguiente, puede V. E. dar el correspondiente aviso al Ministerio de Hacienda para que reciba o disponga de las cantidades que el Juez de Sección de La Rioja dice tener depositadas en su poder. — 17 de Agosto de 1864.

Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 17 de 1864.

Tomo 3, pág. 450. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se justifique con la presentación de las Letras Patentes un nombramiento de Visitador General de Orden Religiosa, para el ejercicio de su ministerio.

Fray Pedro P. Bulacia. Pide autorización para ejercer su ministerio.

Excmo. Señor:

Es muy justo y conforme a nuestras leyes que V. E. dé su autorización y protección necesaria en su caso para que el Visitador General de la Orden de Franciscanos pueda ejercer su ministerio, pero para esto era preciso que el Reverendo Padre Bulacia hubiera justificado la regularidad de su nombramiento presentando las Letras Patentes a que hace referencia. — 14 de Junio de 1865.

Ministerio de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Julio 7 de 1865.

Tomo 3, pág. 491. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Por el artículo 4.º del Tratado con España, el Gobierno Nacional se hizo responsable de todas las deudas de las Tesorerías Públicas, contraídas por el Gobierno Español y sus autoridades hasta el 25 de Mayo de 1810.

El Tratado beneficia a todos los españoles y a sus herederos universales, cualquiera que sea la nacionalidad de estos últimos. Para privar del derecho a los herederos no españoles, hubiera sido necesaria una estipulación expresa en el Tratado.

La obligación del Gobierno, en virtud del Tratado, es la de devolver los bienes que fueron «confiscados o secuestrados» por el derecho de beligerancia. Los empréstitos y contribuciones están excluidos de su letra.

Al Gobierno Nacional corresponde el pago del valor de las confiscaciones, mas si las mismas fueron percibidas y gastadas en interés exclusivo de una Provincia, procede hacer reembolsar a ésta el valor de la erogación.

Camilo Uriburu. Reclamación por empréstitos forzosos y contribuciones impuestas por el Gobierno de San Juan.

Excmo. Señor:

Las deudas que el Gobierno se obligó a pagar por el Tratado con S. M. C. son de dos categorías. 1.ª. Las deudas de Tesorería, contraídas por el Gobierno Español y sus autoridades antes del 25 de Mayo de 1810 en las Provincias que forman el territorio de la República Argentina. Contraída esta obligación sin contemplación alguna, y la nacionalidad de los acreedores, no hay duda que la deuda debe pagarse, cualesquiera que ellas sean. La consulta sólo puede referirse a la segunda categoría contenida en el artículo 5.º del Tratado en que se estipula que los bienes secuestrados o confiscados a súbditos españoles, durante la Guerra o después de ella, serán restituidos a sus antiguos dueños, o a sus herederos, o legítimos representantes. En esta estipulación la República se reconoció obligada a indemnizar a aquéllos, a quienes había despojado cuando eran sus enemigos, siguiendo el principio sumamente conciliado que dictó la Ley de la Provincia de Buenos Aires de Noviembre de 1821, por la cual se había pagado ya la mayor parte de esta deuda.

El derecho fué reconocido a favor de los españoles confiscados, pero para que él sea transmitido a sus herederos universales, no creo necesaria la continuación en éstos de la ciudadanía espa-

ñola, porque la regla general es que, las obligaciones que nacen de contrato, y con mayor razón los derechos, se transmiten a los herederos, aun cuando no tengan la misma condición civil de sus causantes, y por consiguiente, para privar del derecho a los herederos no españoles, habría sido necesaria una estipulación expresa en el Tratado, que limitara la generalidad de su expresión o a sus herederos. Así lo entendió también el Gobierno de Buenos Aires en 1822 en que pagó todos los secuestros y confiscaciones hechas a los españoles, sin hacer distinción de nacionalidad, en los actuales poseedores de estos derechos, procediendo espontáneamente sólo por los consejos de una política conciliadora, sin estar ligado por el vínculo de un Tratado. — Febrero 8 de 1867.

Excmo. Señor:

El presente reclamo es para cobrar en virtud del artículo 5.º del Tratado con España las cantidades que el español don Juan Antonio Uriburu entregó al Gobierno de la Provincia de San Juan, en dinero y especies por *contribuciones, empréstitos y confiscaciones*.

Ya he manifestado anteriormente a V. E. cuál es mi dictamen sobre este género de reclamos. En el Tratado sólo se obligó el Gobierno de la República a devolver a los españoles los bienes que les hubiesen sido *confiscados o secuestrados* en virtud del derecho de la guerra; para hacer esta devolución era necesario que se conviniera en el Tratado, porque la República no tiene obligación alguna de hacerlo, habiendo usado de su derecho de beligerante. Esta es la razón de la estipulación. Pero en ella no se habla de empréstitos y contribuciones.

¿Por qué? Porque los empréstitos hay obligación de pagarlos y no había necesidad de una estipulación especial para que esta obligación se reconociera. La Nación no se ha negado ni puede negarse a ello. Sólo falta que el Congreso autorice la consolidación de esta deuda; y entonces serán pagados no sólo los españoles, sino los nacionales y todos los extranjeros que sean acreedores por empréstitos.

En cuanto a las contribuciones, no hay razón alguna para devolverlas. Estas se exigen de los habitantes para sostener las cargas públicas, como el cumplimiento de un deber social, no como un empréstito, ni como rédito de ningún género. Es absurdo pretender

que haya obligación de devolver las contribuciones, aunque su distribución o su modo de percepción no hayan sido perfectos.

Mi dictamen, pues, es que deben separarse de este reclamo todas las partidas por *empréstitos y contribuciones* como no incluídas en el Tratado, y que sólo debe abonarse el valor de los efectos secuestrados o confiscados al autor de los reclamantes. Por lo demás, este caso es regido sólo por el Tratado con España. Nada tiene que ver con él las reclamaciones celebradas en 1859 con Inglaterra, Francia e Italia, ni hay para que tomarlas en cuenta. Aquel Tratado dice que serán devueltos los bienes «que hubiesen sido secuestrados o confiscados a súbditos españoles, durante la guerra sostenida en América o después de ella». Esta exposición comprende todas las confiscaciones hechas desde que empezó la guerra hasta la fecha del Tratado, y esto es lo que el Gobierno Nacional está obligado a pagar, sean hechos antes o después del año 1820. La fijación de esta fecha sólo puede servir para que el Gobierno Nacional, después de haber cumplido su obligación internacional, haga cargo al Gobierno de la Provincia donde la confiscación se hizo en la época en que estaba separada la Nación. En este caso se halla la última partida de la cuenta del Señor Uriburu, importando 2230 pesos por una tienda de mercaderías que le confiscó el Gobierno de San Juan en el año 1829. — Diciembre 22 de 1868.

Excmo. Señor:

Reproduzco mi informe de 22 de Diciembre último, porque no se ha dado razón alguna para que pueda alterar sus fundamentos.

En consecuencia, creo que no es justo que la Contaduría haya reconocido como legítimas las partidas 10, 11, 19, 20, 21 22, y 23 de la cuenta de f. 4, ni que haya suprimido todas las posteriores al año 1820; para hacer una liquidación arreglada, es preciso que el Gobierno fije las bases de ella, declarando si han de devolverse o no las contribuciones, empréstitos y las confiscaciones hechas después de 1820. — Enero 18 de 1869.

Excmo. Señor:

Sobre la competencia de Don Camilo Uriburu para hacer el reclamo, creo que está justificada por los dos testimonios que afirman que era hijo legítimo de Don Juan Antonio Uriburu, y

habiendo aquél dado en el escrito de f. 3, caución de rato et grato por sus hermanos y sobrinos, su personería es arreglada. En cuanto al fondo del reclamo, reproduzco mis dictámenes de 22 de Diciembre de 1868 y 18 de Enero de 1869. — Julio 26 de 1869.

Excmo. Señor:

La copia de f. 4 en que se apoya el reclamo de los herederos del español Don Juan Antonio Uriburu, contiene partidas de distinto origen y naturálea.

Hay pequeñas contribuciones que se le exigieron como habitante del país para sostener la administración pública, las cuales no tienen el carácter de créditos reembolsables, ni deben pagarse atendidos los términos del Tratado y el buen sentido. Hay empréstitos forzosos y confiscaciones que se impusieron por ser español, los cuales deben abonarse atendida la estipulación del artículo 5.º del Tratado, y la Ley de 22 de Setiembre de 1870. Pero la mayor parte de estas confiscaciones, fueron hechas después de 1820 por el Gobierno de San Juan, exclusivamente para emplearse en objetos provinciales, y es por eso que aparecen sentadas en los libros como deuda de la Provincia. Sería necesario resolver si esta deuda debe ser pagada por la Nación, o si debe remitirse al verdadero deudor.

Mi dictamen es que la Nación debe pagarla, por que ella se obligó en el Tratado a devolver el valor de las confiscaciones hechas a españoles por la autoridad pública, sin reserva alguna. Pero será justo que haga cargo de este pago al Gobierno de la Provincia, y procure reembolsar la erogación.

Por lo demás, este reclamo no se apoya en los documentos originales de crédito que ha debido recibir Uriburu cuando hizo los empréstitos, sino en un extracto de los libros de Tesorería de San Juan. Por lo cual no sería extraño que este crédito haya sido pagado, al menos en parte, en la consolidación de la deuda pública hecha por la Provincia de Buenos Aires en 1822; lo cual sería necesario investigar, o exigir que el reclamante presentara un certificado del Jefe de la Oficina del Crédito Público Provincial. — Diciembre 15 de 1871.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución en Setiembre 27 de 1872.

Las leguas de tierras, concedidas al Ferrocarril Central Argentino, a lo largo de la vía, en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la Ley de 23 de Mayo de 1863, con el propósito de ayuda económica a la Empresa, están sujetas al pago de la contribución Territorial, no estando comprendidas en consecuencia, en la exención de derechos acordada por el art. 4 de la Ley citada.

La Empresa del Ferrocarril Central Argentino, sobre excepción de pago de Contribución Directa de las tierras cedidas a la Compañía.

Excmo. Señor:

Por el artículo 3.º de la Ley de la materia, el Gobierno Argentino dió a la Compañía del Ferro-Carril Central todos los terrenos que se requerían para el camino, muelle, depósitos, almacenes y demás *dependencias*.

El artículo 4.º excluyó de derechos los materiales, útiles y artículos importados del exterior, y de contribución la propiedad del Ferro-Carril y sus *dependencias*, durante el período de 40 años.

La gracia de que aquí se trata fué otorgada, pues, a los materiales y útiles, a las tierras necesarias para el camino y todas sus construcciones y nada más.

La legua de tierra en toda la extensión del Ferro-Carril y las otras cuatro leguas de las tierras fiscales en Santa Fe y Córdoba, concedida también en plena propiedad, a condición de poblarlas, por el artículo 12, no son una *dependencia*, sino valores con que se quiso ayudar a la Empresa, y que como todas las situadas en el país, están sujetas a los impuestos o contribuciones establecidos por sus leyes. — Agosto 23 de 1867.

Tomo 5, pág. 427. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las riberas de los ríos son de uso público. Las concesiones del Congreso para la erección de muelles, no implican ceder a los concesionarios derechos permanentes de posesión o la propiedad sobre la ribera.

Eduardo A. Hopkins, Concesionario del Muelle de San Fernando, pidiendo la entrega del terreno necesario para esas obras.

Excmo. Señor:

Si hubiera alguna autoridad o persona particular que impidiera al Señor Hopkins construir los muelles, se comprendería que solicitara la intervención del Gobierno para remover el obstáculo. Pero no siendo este el caso, no hay razón para pedir anticipadamente el derecho de posesión sobre los 1800 metros que deben ocupar los muelles.

La ribera es de uso público. Cuando para facilitar este uso a la navegación y comercio del río, concedió el Congreso la facultad de erigir muelles, no entendió ceder al concesionario derechos permanentes de posesión o propiedad sobre la ribera. Cuando los muelles existan, él tendrá el derecho de cobrar lo que se imponga por su uso; pero mientras ellos no se erigen, o cuando dejen de existir, la ribera será del público, y ningún particular puede pretender su posesión. Creo, pues, que no hay motivo para que el Gobierno tome en consideración esta solicitud. —
Octubre 5 de 1867.

Tomo 1, pág. 592. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Justicia Federal es competente para entender en todas las causas que se originan de la concesión hecha por el Congreso al F. C. Central Argentino o en todas aquéllas que sean regidas por las leyes que el Congreso sancione para la regularidad del tráfico en el mismo camino. No es competente en los pleitos particulares que la Compañía pueda tener por razón de sus contratos u otros actos independientes de la concesión.

Consulta del Director del Ferrocarril Central Argentino, sobre si en los casos contenciosos que tenga la Empresa, debe dirigirse a los Tribunales Ordinarios o a los Federales.

Excmo. Señor:

En todas las causas que se originan de la concesión que hizo el Congreso a la Compañía del Ferro-Carril Central Argentino, o

en todas aquéllas que sean regidas por las leyes que el Congreso sancione para la regularidad del tráfico en el mismo camino, la Justicia Nacional tiene plena jurisdicción, porque se trata de la interpretación o aplicación de las Leyes Nacionales. Pero en los pleitos particulares que la Compañía pueda tener por razón de sus contratos u otros actos independientes de la concesión, ella estará sujeta a las justicias provinciales, porque su personalidad es la de una compañía anónima, que por la ley es considerada como un vecino de provincia; y el haber sido autorizada por el Gobierno Nacional no le confiere el fuero nacional en la universalidad de sus causas. — Octubre 12 de 1867.

Tomo I, pág. 595. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — Por la Ley de 22 de Septiembre de 1870, el Gobierno Nacional debe devolver los empréstitos forzosos exigidos durante la Guerra de la Independencia.

Los empréstitos hechos al Gobierno Provincial de Córdoba e invertidos en provecho exclusivo de esta Provincia, no están comprendidos en la Ley citada y no habiendo ninguna otra, que autorice al Gobierno Nacional a reembolsar el empréstito, debe la Provincia hacer frente al mismo.

- II — Las contribuciones, por naturaleza, no son susceptibles de devolución.

Por el Tratado con España de Setiembre 4 de 1863, el Gobierno Nacional debe devolver los bienes que fueron «confiscados o secuestrados» por el derecho de beligerancia. Los empréstitos y contribuciones están excluidos de su letra.

Agustín San Millán, reclama el pago de empréstitos forzosos y contribuciones, impuestas a su finado padre en la guerra de la Independencia.

Excmo. Señor:

En Marzo 7 de 1867 la Comisión de Créditos Extranjeros mandó devolver este expediente al Apoderado del Señor San Millán para que pueda reclamar las partidas regidas por el Tratado que son las que alcanzan hasta el año de 1819 inclusive, pues las restantes han sido reconocidas ante la Comisión.

Pero ni aquellas partidas están regidas por el Tratado con España, ni éstas que se dicen reconocidas, pueden por razón alguna ser consideradas como deuda nacional. Todos los documentos presentados por el Señor San Millán son por contribuciones o empréstitos entregados al Gobierno de Córdoba desde el año de 1813 hasta el de 1841. Ellos pueden y deben ser considerados, cuando se liquide la deuda general de la República; pero estas clases de créditos no están comprendidos en el artículo 5.º del Tratado, que sólo habla de bienes confiscados a españoles, en virtud del derecho de beligerante, y que no habrá obligación de devolver, a no ser por la estipulación contenida en ese artículo.

En cuanto a los empréstitos hechos por el Gobierno de Córdoba, desde 1820 hasta 1841, de los cuales aparece pagada una parte por el mismo Gobierno, no es fácil descubrir la razón que puede haber tenido la Comisión para no reconocerlos como deuda nacional.

Por qué Ley o por qué razón está obligado el Tesoro Nacional a pagar las obligaciones contraídas por el Gobierno de una Provincia particular, durante la época del aislamiento? No hay ninguna. Toda obligación debe cumplirse por el que la contrajo, y la Provincia de Córdoba, en cuyo exclusivo beneficio se invirtió el dinero del empréstito, es la única responsable de su pago.

Mi dictamen, en consecuencia, es que V. E. no haga lugar a este reclamo. Pero repitiéndose diariamente otros de igual naturaleza, me atrevo a indicar a V. E. la conveniencia de resolver estos casos por punto general y dar por consiguiente a las Comisiones las instrucciones convenientes. — Marzo 5 de 1868.

Sancionada la Ley de 22 de Septiembre de 1870, volvió al Procurador General, quien informó:

Excmo. Señor:

Después de sancionada por el Congreso la Ley citada en el Decreto anterior, es necesario atender a este reclamo, por que en él hay algunos empréstitos forzosos, exigidos al Señor San Millán como español durante la guerra de la Independencia, que son los que aquella Ley ha mandado pagar.

Pero hay en el reclamo otras partidas que no son de abono, como son los empréstitos hechos al Gobierno Provincial de Cór-

doba en los años de 1828 a 1840, y las contribuciones impuestas a todos los vecinos de Córdoba, sin distinción de nacionalidad, por la cual aparece haber pagado San Millán cuatro pesos mensuales durante algún tiempo.

Los empréstitos hechos al Gobierno Provincial de Córdoba, no están comprendidos en la Ley de 22 de Setiembre, y no habiendo otra alguna que autorice al Gobierno Nacional para pagar las deudas de esta Provincia, no tiene facultad de hacerlo. El Gobierno de Córdoba ha reconocido justamente este cargo como deuda propia, y ha pagado a cuenta de ella muchas cantidades, como se vé en el informe de foja 24. El debe, pues, pagar el resto, porque es el único deudor.

En cuanto a las contribuciones, es absurdo cobrarlas. Ellas se exigen de todos los vecinos para sostener la sociedad, y no se devuelven en ningún país del mundo. Sobre todo, la Ley de 22 de Setiembre, que es la que rige este caso, no habla de contribuciones. En cuanto a las hechas a la Nación por el español San Millán, sólo están justificadas las que refieren los documentos de foja 7.^a, foja 8.^a y foja 9.^a, a saber, 84 ponchillos a peso cada uno y 400 pesos en dinero, que hacen la suma de 484 pesos a que considero acreedor al reclamante. — Enero 10 de 1872.

Tomo 1, pág. 559. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — Corresponde al Gobierno Nacional, velar por que la ribera de los puertos, quede perteneciendo al público y sólo destinada a la construcción de las obras necesarias a la navegación, considerando esta facultad como comprendida en la disposición constitucional que le autoriza para habilitar puertos y crear Aduanas.
- II — Puede el Gobierno Nacional mandar que se trace la línea que demarque la ribera, fuera de la cual no es lícito que se extienda la propiedad privada.

El Representante de la Empresa del Ferrocarril de la Boca, Barracas y Ensenada, solicita la demarcación de los terrenos de la Ensenada a fin de delinear los que pertenezcan a la Nación y a la Provincia y propone la construcción de un puerto entre Punta Lara y Banco Santiago.

Excmo. Señor:

El Gobierno Nacional no es dueño, como dice el Empresario, de parte alguna del territorio de la Ensenada. Pero siendo una de sus atribuciones constitucionales habilitar Puertos y crear Aduanas, se considera comprendida en ella la obligación de velar por que la ribera de los puertos quede perteneciendo, como pertenece, al público, y sólo destinada a la construcción de las obras necesarias a la navegación. Le corresponde asimismo la designación de los lugares en que han de establecerse las Aduanas y demás oficinas fiscales.

Creo, pues, que el Gobierno debe mandar que se trace la línea que demarque la ribera, fuera de la cual no sea lícito extenderse a propiedad privada; y designarse, si es posible, el lugar donde ha de establecerse la Aduana.

Pero si esto último no es conveniente hacerlo hasta que no esté elegido el lugar que han de ocupar los muelles, y trazados los caminos, podría hacerse la reforma conveniente en la expropiación que se intenta.

Esta expropiación, por lo demás, en la parte que se refiere al Ferro-Carril, corresponde ordenarla al Gobierno de la Provincia, bajo cuya jurisdicción están esos terrenos. — 23 de Marzo de 1868.

Departamento del Interior. Resolución en Agosto 20 de 1868.

Tomo 2, pág. 5. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Se llaman «espolios» los bienes que dejan los Obispos a su fallecimiento, deducidos lo que tenían antes de ser instituídos.

No pueden los Obispos disponer de sus «espolios» por actos de última voluntad, dado que pertenecen a la Iglesia y a las Instituciones Pías de sus Diócesis.

El Gobierno de San Juan, sobre espolios dejados por el finado Obispo de la Diócesis de Cuyo.

Excmo. Señor:

Los bienes que los Obispos dejan al tiempo de su muerte, deducidos los que le pertenecían antes de ser instituídos, se llaman espolios. De ellos no pueden disponer por última voluntad, porque pertenecen a su Iglesia y a las instituciones pías de sus Diócesis. De esta naturaleza deben ser todos los que poseía el finado Obispo de Cuyo; porque siendo un religioso mendicante, no podía tener bienes antes de ser promovido a la Prelacia. El Vicario Capitular ha tenido, pues, razón de reclamar la entrega de esos bienes, de cualquier persona que los detente, y sería muy conveniente que el Gobierno de San Juan hiciera lo posible, dentro de su esfera constitucional, para que le sean entregados. — 14 de Abril de 1868.

Se adoptó el dictamen como resolución.

Tomo 1, pág. 596. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es injusta la sentencia del Tribunal de San Juan que declaró procedente la libre disposición de los «espolios» por acto de última voluntad que hizo el Obispo de Cuyo, ya que por las leyes canónicas y civiles, éstos pertenecen a la Diócesis del Obispo fallecido, con destino a escuelas y obras de beneficencia y es el Gobierno Civil quien debe administrarlos.

No obstante, por haberse dictado sentencia definitiva, contra la que no se interpuso recurso alguno, no puede el P. E. modificar el estado de cosas, salvo que intente nuevo pleito, a nombre del Gobierno.

El Obispo de Cuyo reclama los «espolios» del finado Obispo Aldazor.

Excmo. Señor:

Los bienes que los Obispos dejan al tiempo de su muerte, deducidos los que le pertenecían antes de ser instituídos, se llaman

espolios. De ellos no puede disponer por última voluntad, porque pertenecen a su Iglesia y a las instituciones pías de su Diócesis. De esta naturaleza deben ser todos los que poseía el finado Obispo de Cuyo, porque siendo un religioso mendicante, no podía tener bienes antes de ser promovido a la Prelacia. El Vicario Capitular ha tenido, pues, razón de reclamar la entrega de esos bienes, de cualquier persona que los detente, y sería muy conveniente que el Gobierno de San Juan hiciera lo posible, dentro de su esfera constitucional, para que le sean entregados. — 14 de Abril de 1868.

Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Mayo 2 de 1868.

Excmo. Señor:

La sentencia del Tribunal de San Juan que ha remitido en copia el Señor Obispo, es notoriamente injusta, porque viola las leyes canónicas y las leyes civiles, que declaran que los bienes adquiridos por razón de la Mitra, que dejan los Obispos a su fallecimiento, que es lo que se llama *espolios*, pertenecen a su Diócesis para escuelas y obras de beneficencia.

Desde el principio del Cristianismo, ésta ha sido una verdad reconocida y practicada en todos los pueblos católicos. No se ha suscitado sobre ella otra duda, que la que motivaron los Papas, pretendiendo adjudicar a la Curia Romana la administración de los *espolios*, pretensión que fué siempre rechazada por los Reyes, y finalmente empleados por ellos los sobre dichos *espolios* en los mencionados usos.

Este concordato, ratificado y promulgado en el Código de las Recopiladas, es una Ley del país, y el Tribunal de San Juan no ha podido, sin injusticia notoria, decir en su sentencia que *ninguna disposición prohíbe testar a los Obispos*. Hay en esta sentencia un olvido tan completo de las Leyes del caso, que parece evidente que el Vicario Capitular de aquel Obispado no ha sabido defender la causa que tomó a su cargo. Pero es el caso que ya hay una sentencia definitiva, contra la que no se ha deducido ningún recurso, que priva a las Escuelas de Cuyo de los bienes del Obispo Aldazor, que legítimamente le pertenecían. Y no sé que haya remedio a este mal; a no ser que V. E. crea justo empezar de nuevo el pleito a

nombre del Gobierno, a quien únicamente pertenece la administración de los *espolios*. — Julio 1.º de 1871.

Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Julio de 1871.

Tomo 2, pág. 183. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — La imposición de excomuniones contra personas indeterminadas, es facultad exclusiva del Poder Legislativo de la Iglesia, los Concilios o los Papas.
- II — No tienen competencia los Gobernadores de Provincias para corregir los errores de derecho canónico cometidos por los Eclesiásticos.
- III — No entran en las facultades del Vice-Patronato, la suspensión de Prelados Eclesiásticos.
- IV — Los nombramientos o destituciones hechos por los Prelados, deben serlo con acuerdo del Patrono y a propuesta del mismo.
- V — Es deber inherente al Patronato, cuyo ejercicio corresponde al Presidente de la Nación, el garantizar a los Prelados y Sacerdotes el libre desempeño de sus facultades canónicas.

Incidente entre el Gobierno de Mendoza y el Vicario Capitular de la Diócesis de Cuyo, con motivo de la excomunión fulminada por éste contra el Gobierno y pueblo de dicha Provincia.

Excmo. Señor:

En este asunto ha habido una serie de violencias cometidas, tanto por el Vicario Capitular de Cuyo, como por el Gobernador de la Provincia de Mendoza, que es preciso revocar cuanto antes para destruir precedentes perniciosos y hacer cesar el conflicto en que se encuentran ambas potestades.

Primeramente el Vicario lanzó una Excomunión Mayor contra el autor desconocido de un impreso en que se dice se ultrajaba su persona, contra los que lo leyeron y contra los que no declararan su existencia.

Pero un libelo semejante, no es causa que justifique la pena de excomunión por ninguna ley canónica, y además, el lanzar ex-

comuniones originalmente contra personas indeterminadas, es facultad exclusiva del Poder Legislativo de la Iglesia, los Concilios o los Papas. Los Prelados subalternos no pueden imponer esta pena, sino cuando una persona cierta ha incurrido en ella por la violación de un canon precedente, previo juicio y tres amonestaciones. Pero el corregir este error cometido por el Vicario en el ejercicio de su jurisdicción espiritual, no competía en manera alguna al Gobernador de la Provincia, sino a la autoridad superior eclesiástica, que reside en el Señor Arzobispo. El Gobierno ultrapasó sus facultades, pasando al Vicario las notas de 11 y 18 de Febrero. Sea por esta razón, o por el tono amenazador y sumamente inconveniente en que esas notas están redactadas, nada puede extrañar que el Prelado las dejara sin contestación, y aun que fingiera ignorar el carácter público que investía el Ministro López Torres, que firmaba las notas. Esta falta de contestación, la convirtió el Gobernador por un argumento tan sutil como infundado, en un crimen de sedición, y sin más trámite, redujo a prisión al Vicario Capitular, y le declaró suspenso en el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica en el territorio de la Provincia.

Esta es una violencia injustificable. Ni ha habido causa de prisión, ni el Gobernador tiene facultad para prender a nadie, y mucho menos a un Prelado que gobernaba una Diócesis compuestas de tres Provincias; ni entra en las atribuciones del Vice-Patronato la jurisdicción de suspender los Prelados eclesiásticos. Es verdad que ocho días después el Gobierno pretendió explicar su Decreto, diciendo que no había intentado privar al Vicario de sus facultades espirituales *sino de aquellas que afectan los actos internos de las vicarías, o más claro, de todo aquello que se relacionase con el orden público.*

Cualquiera sea el sentido y alcance de esta explicación, que no está claramente expresado, el hecho es que el Gobierno no tiene facultad para despojar al Prelado de parte alguna de la jurisdicción que le compete por su carácter oficial. El Vicario por su parte se vengó del acto de su prisión, lanzando una Excomunión Mayor contra el Gobernador Villanueva, y poniendo en entredicho a toda la Provincia de Mendoza. Para lo primero invoca la disposición del Concilio de Trento en el capítulo II de la Sección 22, haciendo una aplicación completamente errada de este Canon. El capítulo citado tiene por epígrafe: *Castígase a los que ocupen los bienes de cualquiera*

Iglesia o de un lugar pío, y a eso sólo está contraída su disposición. Pero haciendo la enumeración de los bienes eclesiásticos dice: el que presumiere invertir en su propio uso y usurpar por sí o por otros . . . las jurisdicciones, censos y derechos, los frutos, emolumentos o cualquiera oblación de alguna Iglesia o de cualquiera beneficio secular o montes de piedad que deben invertirse en socorrer las necesidades de los Ministros y los pobres . . . quede sujeto a excomunión mientras no restituya etc., etc., etc.

El Vicario ha supuesto que el Gobernador de Mendoza le ha usurpado la jurisdicción, y juzgado que por este hecho ha incurrido en la excomunión decretada por el Concilio.

Este raciocinio se funda en dos errores. Es evidente por el objeto y tenor del artículo citado, que al enumerar el Concilio entre los bienes materiales de la Iglesia la palabra *jurisdicción*, la ha empleado en la acepción que significa territorios, los cuales son susceptibles de propiedad, son capaces de producir renta y de mantener a sus Ministros, y no en su acepción de facultad moral de administrar justicia y gobernar lo que nadie puede contar entre los bienes materiales. El Decreto, pues, del Concilio estaría mal aplicado, aun cuando fuera cierta la supuesta usurpación de jurisdicción. Pero esa usurpación es también incierta, y este es el segundo error. El Gobernador hizo muy mal sin duda en suspender al Prelado del ejercicio de una parte de su jurisdicción. Pero no es usurparla o tomarla para sí. A no ser que el Vicario califique de este modo a la reposición que hizo el Gobierno de un Cura que había sido ilegalmente destituido por el Vicario, por su sola voluntad, sin juicio alguno y sin noticia del Patrono, habiendo nombrado otro con los mismos defectos. Ya que los Prelados de nuestras Diócesis han tomado la costumbre de no nombrar Curas propietarios con las formalidades establecidas en el Concilio y en las Leyes de Indias, contentándose con nombrar interinos sin término (lo que es anticánónico), deberían hacer estos nombramientos y destituciones con acuerdo del Patrono; porque ningún beneficio puede proveerse sino a propuesta del Patrono.

Si el Vicario procedió mal haciendo esta variación de Curas, el Gobernador tuvo razón de impedirlo, mientras no se hiciera en la forma debida. Por este proceden no ha sido una usurpación de jurisdicción, sino establecer las cosas a su estado legal. Pero si

la excomunión Villanueva está fundada en razones, el entredicho decretado contra toda la Provincia de Mendoza no se funda en nada, porque el Vicario no se ha dignado justificarlo en su proclamación; ni es posible presumir en qué gran pecado, en qué herejía ha incurrido el pueblo de Mendoza para merecer que se le prive de los oficios divinos, y de la administración de sacramentos por un tiempo determinado. Esta enormidad no puede explicarse sino por la ceguedad de la pasión y el despecho que ofuscaba la mente del Vicario. El Gobernador en su nota de 2 de Marzo, dice que el entredicho ha sido levantado por el clero. Pero ni de los documentos que acompañan a la nota aparece tal cosa ni el clero puede levantar un entredicho impuesto por su Prelado.

De todo esto resulta que ni el Gobernador ni el Vicario se han contenido en la esfera de sus deberes, y que ni uno ni otro están animados por el espíritu de concordia que engendra buenos y concedidos procederes, sin el cual es imposible que se sostenga la armonía entre ambos poderes.

Para remediar estos males, creo necesario que el Patrono se ponga de acuerdo con la Superior Potestad Eclesiástica, en la forma que crea más conveniente: que V. E. desapruebe todos los actos del Gobernador de Mendoza en este asunto, ordenándole ponga inmediatamente en libertad al Prelado, si aun permaneciere preso, y que el Señor Arzobispo por su parte absuelva de las excomuniones injustamente impuestas por el Vicario Molina, levantando el entredicho lanzado sobre la Provincia de Mendoza. — 15 de Abril de 1868.

Excmo. Señor:

Diciéndome V. E. en su nota de 16 de Agosto que considera injusta y arbitraria la prisión del Vicario Capitular Don Rizzerio Molina, creo innecesario rebatir las razones con que pretende justificar su conducta el Gobierno de Mendoza.

Pero no puedo dejar de hacer notar que ha andado muy desacertado al negar al Presidente de la República la facultad de mezclarse en este asunto y mandar poner en libertad al Vicario, diciendo que esto es intervenir en negocios propios de la Provincia, no delegados a la Nación.

El artículo 2.º de la Constitución Nacional previene que el Gobierno Federal sostiene el Culto Católico Apostólico Romano. Esto no solo importa la obligación de sufragar los gastos que él exija, sino la de mantener el Culto, garantizando a sus Prelados y Sacerdotes el libre ejercicio de sus facultades canónicas. Este es por otra parte el primer deber inherente al Patronato que la Constitución confiere al Presidente de la República por el artículo 86.

Es sin duda excesiva la intervención que la Constitución ha dado al Poder Civil en los asuntos religiosos, siguiendo nuestras costumbres y nuestros preceptos de la antigua legislación. Y debemos esperar que el movimiento de la opinión que hoy se manifiesta en todo el mundo, vengán pronto a separar los asuntos de conciencia de los que pertenecen a los poderes temporales.

Pero mientras este régimen subsiste, el Presidente de la República no puede excusarse de cumplir los deberes que la Constitución le impone, empleando su poder en que se mantenga incólume el ejercicio del Culto Católico.

Del ejercicio de este deber nace naturalmente la facultad que ha ejercido de examinar si el Gobierno de Mendoza ha procedido justamente al aprisionar al Prelado de la Diócesis de Cuyo, y dejar en acefalia esta Diócesis; y habiendo encontrado que la prisión es injusta porque el cargo de sedición que el Gobierno le hace, es una falsa imputación desmentida por los documentos de este expediente, y que es además ilegal porque ningún Gobierno tiene la facultad de aprisionar a quien se le antoje, sin violar la seguridad individual que prescribe la Constitución Nacional, contra la cual no puede subsistir la Ley particular de Mendoza que el Gobierno cita en su nota, y que a ser cierta aquella Provincia viviría en un estado completo de sitio.

El Presidente no puede prescindir de hacer poner inmediatamente en libertad al Vicario Molina, ya que el Gobernador de Mendoza desobedece sus órdenes, exponiéndose a incurrir en el delito de sedición, que define el artículo 20, Inciso 2.º de la Ley Penal Nacional.

Para esto es de necesidad usar los medios propios de la Nación, y dar orden a un jefe militar para que saque al Vicario Molina de la cárcel y lo lleve a su residencia de San Juan, siendo a cargo del Gobierno de Mendoza los gastos de esta expedición. Se

ría necesario al mismo tiempo declarar que este acto que el Gobierno no está en la necesidad de practicar, en nada perjudica el derecho del Gobierno de Mendoza para perseguir al Vicario por su pretendida sedición, ni el derecho del Vicario para pedir la indemnización que creyese justa por la prisión que ha sufrido, pues la acción del Gobierno Nacional, en cumplimiento de sus deberes de Patrono de la Iglesia, no es el juicio de la causa, cuyo conocimiento sólo compete a los Tribunales. — 7 de Setiembre de 1868.

Tomo 2, pág. 10. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La orden dada por el Capitán del Puerto de Rosario al Capitán de un barco, para que diera pasaje a fuerzas armadas «por cuenta del Superior Gobierno Nacional», obliga a éste último, aunque dichas fuerzas respondieran a movimientos dispuestos por autoridades provinciales, sin conocimiento del Gobierno Nacional, ya que la orden del Capitán del Puerto, fué dada en la esfera de su competencia. Lo que procede, en el caso, es exigir el reintegro de lo pagado al Gobierno Provincial, en cuyo exclusivo provecho se llevó a cabo el transporte.

Guillermo Matti, sobre indemnización de perjuicios.

Excmo. Señor:

La intervención nacional no ha podido autorizar ni tener conocimiento del transporte de tropas en que se funda este reclamo, porque él tuvo lugar antes que el Gobierno resolviera mandar un Interventor a la Provincia de Santa Fe.

El embarco de la tropa en el Rosario, se hizo el 23 de diciembre, y yo llegué a ese Puerto por la primera vez el 1.º de Enero siguiente.

Allí tuve conocimiento de estos sucesos sólo por la notoriedad pública.

El Gobierno de Santa Fe había sido atacado por una guarnición de la frontera al mando del Mayor Denis. El Jefe Político del Rosario, Dr. Don Martín Ruiz Moreno, resolvió prestarle un auxilio eficaz, y le remitió por el vapor «Tala» una parte del batallón de guardias nacionales de aquella ciudad, al mando del Jefe de Policía, Don Eugenio Ruiz.

Llegados a Santa Fe, no desembarcaron por que los sublevados los hostilizaban desde la costa; y regresaron al Rosario.

Pero llegando a este puerto, en la noche del 24 de Diciembre, cuando el Jefe Político abandonaba la ciudad a los revolucionarios, siguieron viaje hasta San Nicolás, donde desembarcaron.

Todos estos movimientos fueron, pues, ordenados por las autoridades provinciales, sin autorización ni noticia del Gobierno Nacional y sin que intervinieran en ellos tropas o Jefes nacionales. Su costo debiera, pues, ser a cargo de la Provincia.

Pero encabeza este expediente una orden del Capitán del Puerto del Rosario, Don Juan Martín, al Capitán del Vapor «Tala», ordenándole diera pasaje a la tropa que mandaba el Jefe Político *por cuenta del Superior Gobierno Nacional*.

Ignoro por qué razón o con qué autorización se ha gravado así la responsabilidad del Gobierno en una operación no ordenada ni aprobada por él.

Pero el hecho es que el Capitán del vapor ha obrado en este concepto, y que el Capitán del Puerto era competente para dar una orden semejante.

Aquí debería concluir el informe que me pide V. E.; si se deseara aún oír mi dictamen legal, añadiría que, por los términos de la orden del Capitán del Puerto, el Gobierno Nacional es responsable a la cuenta que se presenta hacia el dueño del vapor. Pero que, siendo ella causada por meras revoluciones de las autoridades provinciales, debe exigir su reintegro del Gobierno de la Provincia, salvo el más acertado juicio de V. E. — 8 de Mayo de 1868.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución ordenando que se liquide solamente el valor de los pasajes. — Mayo 13 de 1868

No corresponde al Gobierno Nacional, sino al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el pago de los alimentos y efectos que se dieron a las milicias de dicha Provincia asiladas en San Nicolás de los Arroyos, por tratarse de fuerzas que respondieron a órdenes de las autoridades provinciales y que si bien fueron utilizadas por la intervención nacional, ello fué, con posterioridad a la fecha en que se dieron los suministros, objeto del reclamo.

Gastos de guerra de carácter nacional.

Excmo. Señor:

Cuando los revolucionarios de Santa Fe se apoderaron de la Ciudad del Rosario, fueron a asilarse a San Nicolás como cien hombres de las milicias de Santa Fe, con sus Jefes y Oficiales, que habían permanecido fieles al Gobierno.

Era preciso que estos hombres vivieran; y fué muy recomendable la conducta del Juez de Paz, Don Julio Jonas, que cumplió con los deberes de las hospitalidad haciéndoles dar alimentos y artículos necesarios para la vida.

Pero en este caso urgente era preciso que él procediera por sí, sin esperar la autorización de ningún Gobierno, no habiéndose resuelto aún la intervención nacional, que no llegó allí hasta seis días después.

El día 31 de Diciembre llegué yo a San Nicolás; y aunque allí tuve conocimiento de que esta provisión se hacía, nadie solicitó mi autorización oficial para continuarla. Si se me hubiera pedido, no habría tenido inconveniente en darla bajo la reserva de hacer el cargo debido a quien fuera de derecho.

Extraño mucho que el Gobierno de Santa Fe haya declarado que no le compete hacer este pago. Los asilados eran santafecinos organizados en cuerpo de milicia con sus Jefes y Oficiales, dependientes de la autoridad de la Provincia y que habían dejado sus hogares por efecto de la revolución. ¿Quién sino su Gobierno podía estar obligado a costear su manutención?

La intervención no movilizó estas milicias ni las tomó a su servicio hasta el 27 de Enero en que salieron de San Nicolás, como lo dice el General Conesa en su informe.

Pero si el Gobierno de Santa Fe insistiera en no pagar esa cuenta, sería muy injusto que el Proveedor perdiera sus desembol-

sos, y mucho más que ellos recayeran sobre el Juez de Paz que los mandó hacer.

Sobre el modo de hacer pagar esta cuenta, V. E. resolverá lo que considere más conveniente. — Mayo 11 de 1868.

Ministerio de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Junio 5 de 1868

Tomo 4, pág. 67. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No entra en la competencia del Gobierno Civil la supresión de los días festivos instituidos por la Iglesia y si el Poder Ejecutivo cree conveniente la supresión del precepto de no trabajar en algunos de estos días corresponde que con acuerdo del Prelado Eclesiástico dirija en este sentido, una súplica al Sumo Pontífice.

La Bolsa de Comercio sobre supresión de días festivos.

Excmo. Señor:

En un Pueblo Católico, la supresión de los días festivos instituidos por la Iglesia no compete al Gobierno; es materia reservada al Pontífice.

En el año de 1833, Su Santidad, a petición del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Prelado de esta Diócesis suprimió ya muchos días festivos, dejándolos reducidos, fuera de los Domingos, a las fiestas del Nacimiento, Circuncisión, Epifanía y Cuerpo de Cristo: a las de la Concepción, Anunciación, Purificación y Asunción de la Virgen, y a las de los Santos San Pedro y San Pablo, San Martín y Santa Rosa.

A éstos el Sr. Obispo agregó la de San Juan Bautista, de que no hablaba el Breve del Pontífice.

Es indudable que la prohibición de trabajar en estos días trae grandes perjuicios a la riqueza y moralidad del país; y también lo es que la Iglesia puede celebrar estas fiestas y los fieles asistir a los oficios divinos, sin que sea necesario abstenerse de trabajar en esos días. El descanso sólo es necesario y de precepto divino los domingos.

Si V. E. cree que sea conveniente suprimir el precepto de no trabajar en los otros días festivos, sería necesario ponerse de acuerdo con el Prelado Eclesiástico y dirigir con ese objeto una súplica al Sumo Pontífice. — Julio 2 de 1868.

Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Octubre 9 de 1868.

Tomo 4, pág. 105. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe expresarse en el «pase» de una Bula Pontificia, que instituye Obispo en la Diócesis de San Juan, la circunstancia de que hubo presentación del Prelado para la dignidad Episcopal, por parte del Gobierno Argentino en el ejercicio de su derecho de Patronato, antecedente que la Santa Sede ha omitido señalar en la Bula.

Bulas instituyendo Obispo de Cuyo al R. P. Wenceslao Achával.

Suprema Corte de Justicia:

No encuentro razón alguna que pueda impedir el pase de las Bulas expedidas por Su Santidad instituyendo al R. P. Fray Wenceslao Achával, Obispo de la Diócesis de San Juan de Cuyo.

Sólo puede notarse la omisión que comete el Sumo Pontífice no expresando que aquel Prelado ha sido presentado para la dignidad episcopal por el Gobierno de la República, como Patrono de la Iglesia; pero siendo este un hecho cierto basta con que se consigne en el pase. — Setiembre 22 de 1868.

Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Octubre 9 de 1868

Tomo 4, pág. 123 Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — No corresponde que se abonen los sueldos a un Juez Federal por el tiempo en que estuvo separado del servicio, debido a la tramitación de un juicio político en su contra del que resultó absuelto.
- II — No tiene derecho a cobrar costas, daños y perjuicios en razón de haber sido absuelto, por no considerarse que fué temeraria la acusación de la Cámara de Diputados.

El Juez de Sección de Mendoza pide se le abonen los sueldos devengados durante el tiempo de su separación temporaria.

Excmo. Señor:

El sueldo que se paga a los empleados es una compensación del servicio que prestan. Si pues, el Doctor Palma dejó voluntariamente de desempeñar el Juzgado de Sección mientras estaba pendiente su acusación, no hay causa que justifique el abono del sueldo por todo el tiempo que no ha servido.

Pero él se cree también acreedor a que se le abonen costas, daños y perjuicios por haber sido absuelto de la acusación. Pero esta condenación en costas, no está contenida en la sentencia del Senado y no lo está por que aunque no se creyera merecedor de pena, no ha podido juzgarse que fuera temeraria una acusación sancionada y hecha por la Cámara de Diputados que fué la parte acusadora, y no el Gobierno ni el Comisionado Nacional, como equivocadamente lo dice el Doctor Palma. V. E. no puede, pues, tomar en consideración esta pretensión. — 7 de Octubre de 1868.

Departamento de Justicia. Se adopta como resolución el dictamen. Octubre 16 de 1868

Tomo 2, pág. 85 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Deben extenderse en papel sellado provincial, los certificados parroquiales, por así disponerlo la Ley Provincial de Sellos, hasta tanto la Ley Nacional de la materia no sea completada, determinándose el valor en sellado nacional que deben corresponderles.

El Arzobispo de Buenos Aires consulta en qué clase de papel sellado nacional o provincial, deben extenderse los certificados que otorgan los párrocos.

Excmo. Señor:

Se comprende que los Jueces exigían que los certificados de los Curas se den en papel sellado Provincial, porque la Ley de la

Provincia dice: *corresponde el sello de cinco pesos a toda copia de partida de bautismo, matrimonio o muerte.*

Pero la Ley Nacional no contiene ni directamente ni por analogía una disposición semejante; y no habiendo el Congreso extendido a esos actos el impuesto, creo que las autoridades nacionales no están autorizadas para cobrarlos. Si no existiera la disposición citada de la Ley Provincial, los Curas podrían legalmente extender sus certificados en papel común. Solamente cuando estos documentos hayan de presentarse en un pliego ante un Juez Nacional, habrá razón de exigir la reposición del sello, porque la Ley ordena que las actuaciones se hagan en papel sellado.

Encuentro por otra parte muy justas las observaciones que hace el Procurador del Tesoro, en su precedente vista; pero ellas no pueden tener otro alcance que solicitar del Congreso la enmienda de la Ley en los años siguientes; nunca el de cobrar un impuesto que él no ha autorizado.

Mi dictamen es por consiguiente que los Curas deben extender sus certificados en papel sellado de la Provincia, mientras el Congreso no resuelva esta cuestión. — 19 de Octubre de 1868.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Abril 9 de 1869.

Tomo 2, pág. 40. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — Por el Tratado con España, el Gobierno sólo está obligado a devolver los bienes secuestrados o confiscados, a súbditos españoles, durante la guerra de la Independencia.
- II — Los empréstitos y contribuciones no están comprendidos en los términos del Tratado; los primeros serán reembolsables cuando la Nación disponga la consolidación de su deuda general, no así los segundos, que se exigen a todos los habitantes del país con carácter obligatorio para hacer frente a los gastos públicos.
- III — Debe justificarse el crédito que se reclama, mediante el documento que por resoluciones de la Asamblea o por órdenes del Director Supremo, se otorgaba a todo prestamista y que en las Provincias asumía la forma de libranza contra la Tesorería de Buenos Aires.

Ludovina Marturel. Reclamación por empréstitos forzosos y contribuciones.

Excmo. Señor:

El artículo 5.º del Tratado con España, sólo impone al Gobierno la obligación de volver los bienes que hubiesen sido secuestrados o confiscados a Españoles durante la guerra, sin hablar de empréstitos ni contribuciones.

La razón es muy obvia. El pagar los empréstitos es una obligación evidente, y no se necesitaba una estipulación en el Tratado para que se cumpliera. Algo más, habría sido una injuria recíproca entre los Gobiernos contratantes, el estipular que cumplieran las obligaciones contraídas por ambos.

En cuanto a contribuciones, no hay razón alguna para devolverlas, porque todos los habitantes de un país están obligados a pagarlas para sostener los gastos públicos aunque ellas no sean bien distribuidas, como no lo eran en los primeros tiempos del Gobierno Patrio. Pero para devolver los bienes confiscados, era necesario una estipulación especial en el Tratado de paz, porque estas confiscaciones que se hacen a enemigos durante la guerra, son autorizadas por el derecho de gentes, y no hay obligación de devolverlas, si no media una estipulación en contrario.

Fundándose, pues, el reclamo de Doña Ludovina Marturel en empréstitos y contribuciones, él no se halla comprendido en el artículo 5.º del Tratado. En cuanto a las contribuciones, no tiene derecho a recabarlas de modo alguno. Pero para ser pagada de

los empréstitos, debe esperar la consolidación de la deuda general, y entonces probar cuáles son las cantidades entregadas por esta razón; y si las devoluciones que se hicieron a su padre han dejado sin pagar algún resto del empréstito, lo que no se explica en el certificado del Contador en Córdoba de f. 3 vuelta. — Diciembre 4 de 1868.

Excmo. Señor:

Este reclamo no se apoya en otro documento que el informe del Contador de Córdoba, según el cual, consta en los libros que Don Gerónimo Marturel, entregó en Tesorería por empréstitos forzosa la cantidad de 1502 pesos, en los años de 1815 a 1819.

Pero según las resoluciones de la Asamblea y las órdenes expresas del Director Supremo, a todo prestamista debía dársele un documento de crédito para su cobro, el cual en las Provincias tenía la forma de una libranza contra la Tesorería de Buenos Aires. Estas libranzas han sido pagadas de diversos modos, y según el informe, en los libros de la Contaduría de Córdoba, consta que fueron pagadas por la Tesorería dos libranzas y parte de otra de las que se entregaron a Marturel. Pero de los pagos que se hicieron por la Aduana en cuenta de derechos, por el Gobierno de Buenos Aires en la consolidación de la deuda de 1822, no podía tener noticia oficial la Contaduría de Córdoba. Si ellas no hubieran sido pagadas, existirían el poder de la reclamante. De todos modos, estos son los únicos documentos justificativos del crédito, y éste no puede pagarse sin su presentación.

Mi dictamen por consiguiente, es que V. E. no haga lugar a este reclamo por falta de justificación de crédito. — Diciembre 22 de 1871.

Tomo 1, pág. 470 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El antiguo Convento de Beletmitas y la casa contigua a la de Expósitos que se llama «Cuna» no pertenecen a la Municipalidad de Buenos Aires. No le fueron adjudicadas ni por la Ley de 16 de Octubre de 1854 ni por la de 3 de Noviembre de 1865, ambos edificios pertenecen a la Provincia de Buenos Aires.

Frente al reclamo que esta última presenta, corresponde que el P. E. la incite a reconsiderar el asunto, ya que la Pcia. ocupa a su vez edificios nacionales, y conviene que continúe el estado actual de cosas para no alterar el regular desempeño de los servicios públicos que ambas construcciones prestan, máxime si se tiene en cuenta que, cuando en 1862, se hizo la división de lo que pertenecía a la Nación y a la Provincia, el Gobierno de Buenos Aires tuvo el buen sentido de limitarse sólo a la división de negocios que, según la Constitución, pertenecían a uno y otro Gobierno, sin tocar para nada los intereses materiales y sin hacer división de los edificios que respectivamente les pertenecían.

La Municipalidad de Buenos Aires pide la devolución del Hospital Viejo.

Excmo. Señor:

Sírvase V. E. preguntar al Señor Presidente de la Municipalidad en virtud de qué título, que no conozco, han pasado a ser de la propiedad de aquella Corporación el «Antiguo Convento de los Beletmitas» y la finca perteneciente a la Casa de Expósitos. En vista de este informe daré a V. E. el dictamen que se sirve pedirme. — Diciembre 21 de 1868.

Excmo. Señor:

En mi dictamen de 21 de Diciembre último solicité el título con que la Municipalidad se decía dueña del antiguo Convento de Beletmitas y de la casa contigua a la de Expósitos que se llama «Cuna», porque no habiéndole adjudicado la propiedad de estas fincas la Ley de su institución, debía creer que ellas habían sido adquiridas posteriormente por alguna razón particular. Pero ahora veo por el informe del Señor Presidente que todo su título se funda en la disposición de aquellas leyes, y me es necesario demostrar que hay en esto una equivocación palpable.

El art. 43 de la Ley de 16 de Octubre de 1854 dice: Pertenecen a la Municipalidad de Buenos Aires las casas y temporalidades

del extinguido Cabildo: las casas de la Cuna, Huérfanas y todas las que están alquiladas a nombre del Estado; *o no sean o estén apropiadas a su servicio.*

Por la cláusula de exclusión con que finaliza este artículo, no entraron entonces a la propiedad de la Municipalidad, ni la casa del Cabildo en que están los Tribunales de Justicia, ni las de Temporalidades en que están la Legislatura, la Biblioteca y el Departamento Topográfico, ni el Convento de los Beletmitas en que había un cuartel, ni la casa contigua a la de Expósitos en que había un almacén de Aduana desde 1853, según consta del informe del Señor Administrador de Rentas.

Esa Ley, pues, no puede ser invocada como título de que arranque la propiedad que se pretende sobre esas fincas.

La de 3 de Noviembre de 1865 que dió nueva organización a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, le adjudica las fincas y establecimientos públicos que existen actualmente bajo su administración y los que adquiera en adelante.

Pero como las fincas de que se trata jamás han estado bajo la administración municipal, ni el Gobierno se las ha transferido, esta Ley tampoco puede servir de título de propiedad.

Esas fincas han estado siempre en el dominio del Gobierno de la Provincia, y lo están hoy mismo, porque no hay acto alguno que las haya transferido a la Municipalidad.

De él las recibió el Gobierno Nacional para continuar el servicio público a que están destinadas, y no podrá por consiguiente devolverlas a nadie, sino al mismo de quien las recibió.

No creo por tanto que el Gobierno deba aceptar los convenios que le propone el Presidente de la Municipalidad, ni reconocer en esta Corporación la capacidad para tratar en este asunto. — Diciembre 17 de 1869.

Excmo. Señor:

Cuando en 1868 pretendió la Municipalidad cobrar alquileres al Gobierno por la ocupación que hacía, con almacenes de Aduana, del antiguo Convento de Beletmitas y la casa llamada de Aduana V. E. se contentó con decir a la Municipalidad que no podía tratar con ella este asunto, porque ninguno de esos edificios era ni había sido nunca propiedad municipal.

Eso mismo le dijo cuando posteriormente pretendió vender una

parte del edificio que ocupa el Gobierno Nacional. Pero hoy que el Gobierno de la Provincia pide a V. E. el desalojo del Convento de Beletmitas, a título de ser propiedad de ese Gobierno, es necesario encarar la cuestión bajo otro punto de vista.

La Autoridad Nacional de estas Provincias ha residido siempre en la Ciudad de Buenos Aires antes y después de la revolución.

Nada podrá por consiguiente extrañar que el Gobierno Nacional tuviera dentro de esta Ciudad varias propiedades exclusivamente suyas, unas por haberlas construído, como el Fuerte, el Parque y los Cuarteles del Retiro; otras por haberlas adquirido de sus legítimos dueños como las casas de Temporalidades, que fueron confiscadas a la extinguida Compañía de Jesús en 1766.

Todas estas propiedades estaban destinadas al servicio público. Cuando en 1862, se hizo la división de lo que pertenecía a la Nación y a la Provincia, el Gobierno de Buenos Aires tuvo el buen sentido de limitarse sólo a la división de negocios que, según la Constitución, pertenecían a uno y otro Gobierno, sin tocar para nada los intereses materiales, y sin hacer división de los edificios que respectivamente les pertenecían. Proceder sumamente sensato, porque todos estos edificios que estaban dedicados al servicio público, para entregarlos a sus legítimos dueños habría causado un profundo trastorno en el servicio público, que de ningún modo podría ser compensado por un interés material de mínima importancia. Así fué que el Gobierno Nacional siguió ocupando el Convento de Beletmitas, primero con un Cuartel y después con Almacenes de Aduana; la casa llamada Cuna y las que ocupan hoy las oficinas de Aduana, cuyos edificios son de propiedad provincial; mientras que este Gobierno ocupaba edificios nacionales como la Universidad, el Museo, el Departamento de Escuelas, el Departamento Topográfico, la Sala de la Legislatura, la Administración de la Vacuna, la del Crédito Público y la Biblioteca.

Así han seguido las cosas desde entonces sin alterar en nada el servicio público.

Pretende ahora el Gobierno de la Provincia alterar este orden de cosas y recuperar los edificios provinciales que ocupa el Gobierno Nacional. Pero entonces deberá reconocer la justicia de devolver los edificios nacionales que él ocupa, y causar un inmenso trastorno en el servicio público de ambas autoridades.

No es posible creer que tal haya sido su intención, porque la

determinación tomada en 1862, debe prescindir de los respectivos derechos de propiedad, y es la más conveniente para ambas autoridades, y la más propia para que continúe el servicio público sin interrupción alguna.

Mi persuasión es que la actual reclamación es el efecto de un olvido o de una inadvertencia, a que han conducido a ese Gobierno los impertinentes reclamos de la Municipalidad.

Mi dictamen por consiguiente sería que V. E. incitara al Gobierno de la Provincia á reconsiderar este asunto, y a meditar sobre la conveniencia de que las cosas permanezcan y sigan como se arreglaron en 1862 por el mismo Gobierno de la Provincia. — Marzo 2 de 1872.

*Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad
con lo dictaminado. Marzo 8 de 1872.*

Tomo 2, pág. 228 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley de 13 de noviembre de 1863, sólo autoriza al Gobierno a reconocer como deuda, los «suplementos y auxilios» prestados en forma directa a los ejércitos que combatieron contra Rosas.

Juan Francisco de La Serna reclama 46.985 pesos fuertes 60 centavos por perjuicios sufridos a causa de la guerra contra Rosas.

Excmo. Señor:

En 1839, Don Juan Francisco de la Serna consiguió por intermedio de la Comisión Argentina en Montevideo, que el Almirante Francés le diera un pasavante para el bergantín Fígaro, fletado por él, para que viniera al Tuyú y sacara un cargamento de frutos del país, en contravención al bloqueo que entonces existía.

El pasavante que corre a f. 4 sólo tenía esta especificación: «ver la carta de 5 de Diciembre de 1839», es decir se refería a las instrucciones que sobre este punto había dado el Almirante a los jefes de Estación.

Estando cargando el buque en el Tuyú, un Oficial que mandaba la goleta francesa «Ana», que sin duda no tenía conocimiento de aquellas instrucciones, lo apresó y llevó al puerto del Salado,

donde su jefe lo puso inmediatamente en libertad. Ni el capitán ni el piloto quisieron seguir cargando, y regresaron a Montevideo. De esta conducta se originaron al fletador considerables perjuicios, cuyo importe pretende hoy cobrar, como deuda de la Nación, y, como si fuera un auxilio dado a los ejércitos libertadores. Es una pretensión excesivamente extraña.

La Ley de 13 de Noviembre de 1863 sólo autoriza al Gobierno a reconocer como deuda los *suplementos y auxilios* directos a los ejércitos que combatieron contra Rosas, y no hallándose en este caso el presente reclamo, el Gobierno no tiene autorización para admitirlo. El reclamante pretende que el servicio consiste en no haber reclamado de las autoridades francesas el pago de los perjuicios por consideración a la Comisión Argentina. Pero si alguna vez tuvo semejante idea, era una idea injusta y temeraria.

La detención del buque fué momentánea, el tiempo que necesita para ir de Tuyú al Salado, y allí fué obedecido el pasavante y puesto el buque en libertad. El origen de los perjuicios no fué esta detención, sino el no encontrarse el capitán a bordo, y su atolondrada conducta de regresar inmediatamente a Montevideo, llevándose la lancha y haciéndose imposible la continuación de la carga.

Se alega también que Serna hizo un servicio mandando un buque a la costa para salvar a algunos rezagados de la revolución del Sur. Pero este servicio lo hizo para que se le diera el pasavante, que en efecto se le dió, y que no tuvo buen resultado por culpa de las personas que él empleó para llevar a cabo su especulación. El servicio, pues, fué pagado de modo convenido. Así, pues, bajo cualquier aspecto que se mire este negocio, la Nación no tiene responsabilidad alguna en los perjuicios que produjo al especulador.

En consecuencia, mi dictamen es que el Gobierno no está autorizado para reconocer este reclamo como deuda nacional. — 24 de Febrero de 1869.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con el dictamen. Febrero 27 de 1869.

Tomo 2, pág. 59 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Es insuficiente la prueba testimonial, para probar suministros hechos a ejércitos en campaña. Deben acompañarse documentos que justifiquen el crédito.

Reclamo sobre cobro de ganado, cuya entrega se justificaba por prueba testimonial.

Excmo. Señor:

El sistema que se sigue para abastecer a las divisiones militares en campaña, es el de proveedores contratados, a quienes el Gobierno abona el abasto.

Cuando éstos no pueden hacerlo, deben abonar a los particulares los ganados que se han tomado por su cuenta, y cuando ni una ni otra cosa es posible, los Jefes Militares dan invariablemente documentos de los efectos que han consumido y que son pagados a su presentación. De este modo, todo consumo es siempre representado por un documento que lo acredita, bien en favor del proveedor o del particular que lo ha suministrado, y por consiguiente la prueba testimonial, no sólo es inútil sino perniciosa.

No debe en ningún caso admitirse, porque aun prescindiendo de las falsedades que se cometen en ella, daría origen a pagar dos veces un mismo consumo: una en vista del documento dado por el Jefe, y otra en virtud de lo que dicen los testigos.

En este reclamo se cobran ganados consumidos por las divisiones de los Coronoles Sandes, Loyola y Rivas. ¿Acaso estas divisiones no tenían proveedor? ¿Acaso estos Jefes no daban recibo de lo que consumían? No puedo creerlo y hubiera sido de desear que la Contaduría hubiera contraído su informe a estos puntos.

En todo caso mi dictamen es que V. E. deseche la prueba testimonial que se presenta, como insuficiente, y ordene que el reclamante presente los recibos que han debido dar los Jefes que consumieron los ganados. — 24 de Febrero de 1869 .

Departamento de Guerra y Marina. Resolución elevando el reclamo al Honorable Congreso. Agosto 10 de 1869.

Tomo 2, pág. 63 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No es procedente el reclamo hecho al Gobierno por perjuicios sufridos por vivanderos en un campamento militar, ya que su posición los coloca en la situación de aceptar con conocimiento, los riesgos propios del lugar.

Miguel Umbert reclama el importe de varios créditos por auxilios forzosos.

Excmo. Señor:

El reclamo de Don Miguel Umbert se funda en dos razones distintas: 1.º Por 325 pesos de empréstito forzoso que se le exigió en 1839 por el Gobernador de Corrientes Don Genaro Berón de Astrada, para sostener el ejército que había levantado contra Rosas, y que fué deshecho en Pago Largo; 2.º Porque en 1846, hallándose con un negocio mercantil en el campamento del ejército Correntino en Villanueva, donde tenía un billar, tuvo que abandonar sus intereses, cuando el General Urquiza invadió la Provincia, y se vendieron todos, cobrando ahora su valor.

Ninguno de estos créditos está comprendido en el Tratado con España, pero el primero justificado como está, por el recibo de las autoridades correntinas, debe abonarse con arreglo a la Ley de 13 de Noviembre de 1863, y para ello debe pasar el expediente a la Comisión clasificadora. El 2.º no está comprendido en ninguna Ley, ni hay razón alguna para que constituya una deuda nacional. Los vivanderos establecidos en un campo militar, tienen que aceptar los riesgos de su posición, y no tienen derecho para reclamar los daños que les cause el enemigo, a cuyas hostilidades se exponen voluntariamente. V. E. pues, debe no hacer lugar a esta parte de la reclamación, que por otra parte no está debidamente probada. — 5 de Marzo de 1869.

*Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad
con el dictamen. Octubre 10 de 1869.*

Tomo 2. pág. 42 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No puede considerarse como «confiscación» a los efectos del Tratado con España, los ganados que los ejércitos libertadores tomaron a particulares, sin distinción de nacionalidad, con cargo especial de abonar su valor. Esta es deuda de la Nación, que deberá pagarse cuando se liquide y consolide la deuda general de la República.

Los herederos de Don José de Urquiza piden indemnización por ganados, efectos, etc., confiscados.

Excmo. Señor:

Lo que han probado en este expediente los herederos de Don José de Urquiza, es que los Generales de los Ejércitos de la Patria sacaron de las estancias que su causante tenía en Entre Ríos, considerable cantidad de ganado y caballos para el sostén de sus tropas. Esta es sin duda una deuda de la Nación, y es justo que se pague cuando se liquide y consolide la deuda general de la República. Pero ella no está comprendida en el artículo 5.º del Tratado con España, donde se ha estipulado la devolución de los bienes que se confiscaron a españoles en su calidad de enemigos.

Los ganados se sacaron de la Estancia de Urquiza no como confiscación sino con cargo de abonar su valor, como lo dicen todos los documentos presentados, no porque aquél fuera español, pues lo mismo se hizo en la Estancia del Doctor Díaz Vélez, que le era lindera, y en la de todos los estancieros nacionales de aquellos parajes. No estando ese reclamo comprendido en el Tratado con España, considero que el Gobierno no debe hacerle lugar, y mandar que se devuelvan los documentos al interesado para que ocurra cuando se liquide la deuda general de la República. Debo advertir a V. E. que sólo hace tres días que este expediente ha sido traído a mi despacho. — Marzo 11 de 1869.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Octubre 25 de 1870.

Tomo 1, pág. 588 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley de 13 de Noviembre de 1863, no ordenó que fueran reembolsados todos los gastos hechos en el equipo y mantención de los ejércitos que combatieron contra Rosas, sino los empréstitos de dinero que se hicieron con cargo de reintegro. No entran en la clasificación de la Ley, los donativos particulares hechos por los ciudadanos, ni los gastos de los Gobiernos Provinciales que levantaron tropas para engrosar aquellos ejércitos.

El Gobierno de Salta cobra una suma, precedente de gastos en auxilio de los Ejércitos Libertadores.

Excmo. Señor:

La Ley de 13 de Noviembre de 1863 no ordenó que fueran reembolsados todos los gastos hechos en el equipo y mantención de los ejércitos que combatieron contra la tiranía de Rosas, cuyo concepto parece haber sido el origen de este reclamo.

Su objeto está claramente expresado en el art. 1.º. *La deuda*, dice, procedente de suplementos y auxilios a los ejércitos que combatieron por la libertad y contra la tiranía de Rosas desde 1838, queda reconocida como deuda a cargo de la Nación. Lo que constituye esa deuda son los empréstitos de dinero que se hicieron a los Generales para ser devueltos; los auxilios que se les dieron con cargo de reintegro, porque todo préstamo debe ser devuelto y toda renta debe ser pagada.

Pero los numerosos donativos particulares que hicieron voluntariamente los ciudadanos, no entran en la clasificación de la Ley, porque no son *deuda*. Y lo mismo debe decirse de los gastos que hicieron algunos Gobiernos Provinciales para levantar tropas que engrosaran aquellos ejércitos, porque no los hicieron con la mira de ser reembolsados, ni los Generales ni persona alguna contra la obligación de devolverlos. No hicieron esos gastos como un empréstito, sino como desembolsos de la administración hechos en contemplación del bien de los pueblos que administraban.

No siendo pues los gastos que reclama el Gobierno de Salta una deuda existente, no entran en el concepto de la Ley citada, y mi dictamen es que V. E. no haga lugar al reclamo, sin necesidad de examinar la legitimidad de las partidas que lo forman. — 12 de Abril de 1869.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución elevando el reclamo al Honorable Congreso. Agosto 10 de 1869

Tomo 2, pág. 68 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

No corresponde que el Gobierno pague intereses, por sumas que adeude en concepto de suministros, si hubo demora en la presentación de las cuentas, exclusivamente imputable a los interesados.

**Rafael Bilbao y Cía. cobran suministros al Regimiento
N.º 3 de Línea**

Excmo. Señor:

Por Decreto de 21 de Diciembre de 1865, se declaró que las planillas presentadas no eran suficiente justificativo de la provisión hecha por los reclamantes en 1861, y se mandó que éstos adelantaran la prueba. Lo que se ha dado no se refiere directamente a la legitimidad de las planillas, y sólo puede considerarse pertinente el informe de Don José María Bombal; porque de él resulta que la Compañía del Regimiento que trajo el Coronel Videla a Mendoza después del terremoto, no fué provista por la Comisión de Socorros, como lo suponía el Decreto citado, sino por los proveedores Bilbao y Cía.

Con esto ha quedado destruido uno de los fundamentos de aquel Decreto, pero aun subsiste la justa desconfianza que inspira la palabra de un Jefe que da a los proveedores cuentas dobles, sin la nota de «duplicados», y el no haberse explicado esta irregularidad sino con una falsedad. Si la desconfianza del Gobierno aun subsiste, el medio más directo de averiguar la verdad sería pedir informes al actual Jefe del Regimiento sobre la realidad de la provisión en los meses citados, y el número de plazas que en ellos tenía su cuerpo.

En todo caso nunca deben abonarse los intereses que reconoce la Comisión Clasificadora, porque estas cuentas no se presentaron para su pago hasta 1864. Y la demora que ha sufrido el expediente desde entonces, ha sido ocasionada por culpa exclusiva de los reclamantes, habiendo pedido el pago doble de cuentas que se les había abonado en 1861. — Abril 22 de 1869.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Junio 5 de 1869.

Si hay alza o baja de la moneda antes del pago, el deudor cumple su obligación entregando moneda corriente, al cambio en el día del pago.

Los herederos de Don Manuel Sola reclaman el cobro de la deuda ocasionada por el empréstito negociado por el Gobierno de Salta para hacer la guerra a Rosas.

Excmo. Señor:

El Decreto Superior de 2 de Enero es perfectamente justo y arreglado a derecho.

El artículo 702 del Código de Comercio establece terminantemente que si hay alza o baja de la moneda antes del pago, el deudor cumple con entregar la suma numérica representada en la moneda corriente al tiempo de verificarse el pago.

Si, pues, los préstamos del Señor Solá fueron hechos en bolivianos, hoy se cumple entregándole esta moneda al cambio actual, aunque este cambio haya tenido alteraciones desde que se contrajo la obligación. El Gobierno ha respetado en su contra este principio, pagando todos los libramientos de la antigua Confederación a razón de diez y siete pesos en onza de oro, porque estaban girados en moneda nacional a este tipo, a pesar de que la moneda que realmente representaban era la cordobesa, que se cambiaba en el comercio a 20 y 21 pesos por onza.

El reclamante dice que otras obligaciones, como la presente, contraídas a bolivianos, se han pagado a razón de 17 pesos por onza. No lo dudo; porque tengo conocimiento de otras contraídas en los antiguos pesos corrientes de Montevideo, pagadas también a ese tipo. Pero estos descuidos, que sólo prueban la poca atención prestada a los intereses públicos, no pueden ser una razón para que el abuso se perpetúe.

Mi dictamen, en consecuencia, es que V. E. mande llevar adelante el Decreto de 2 de Enero último. — 3 de Mayo de 1869.

Departamento de Hacienda. Tuvo resolución esta causa en Setiembre 16 de 1869.

Las confiscaciones ordenadas por el Gobierno de Corrientes por Decreto de 7 de octubre de 1844, sobre embarcaciones que provenían de Buenos Aires, en concepto de represalia por la medida tomada por el Gobierno de Rosas contra Corrientes, en principio no son indemnizables ya que fueron hechas en virtud del derecho de beligerancia, mas ellas deben ser pagadas porque fueron posteriormente reconocidas por el Gobierno y Legislatura de Corrientes y utilizadas en beneficio del Ejército del General Paz en su acción contra Rosas; están ellas, por lo tanto comprendidas en la Ley de 13 de noviembre de 1863.

Los herederos de don Luis Pondal reclaman el importe de la confiscación de un cargamento de yerba y tabaco, destinado al Ejército Libertador.

Excmo. Señor:

Mi dictamen es que sería justo reconocer como deuda nacional el reclamo del Señor Pondal, pero por razones muy distintas de las que expresa la Comisión Clasificadora.

Cuando la Provincia de Corrientes se pronunció contra el tirano Rosas, éste expidió un Decreto mandando confiscar todos los cargamentos que vinieran de aquella Provincia, y lo puso en efecto inmediatamente; de tal suerte que buques que estaban entrando al Puerto de Buenos Aires, y otros que venían en camino cuando se publicó el Decreto, fueron confiscados, aunque una gran parte de los cargamentos pertenecían a neutrales.

Así, pues, el Decreto del Gobierno de Corrientes de 7 de Octubre de 1844, no fué una exacción injusta, ni el modo de practicarlo envolvía injusticia alguna; fué simplemente una justa represalia sostenida por ese cruel derecho de beligerante que hace sufrir a los inocentes, pero que su enemigo se había anticipado a ejercer sobre el comercio de Corrientes.

La confiscación del cargamento de Pondal, siendo hecha legalmente y con razón, no constituiría deuda que debería pagarse por el hecho de haberse verificado. Pero cuando el poder de Rosas se restableció en aquella Provincia, su Legislatura y su Gobierno reconocieron como deuda las confiscaciones hechas en virtud del Decreto de 7 de Octubre, y dieron por ellas boletos, como el que corre a foja 2 de este expediente. Esta fué solamente una medida dictada por el espíritu de partido, sin otra razón que haber sido hechas las

confiscaciones por el *salvaje unitario Joaquín Madariaga*, como se dice en el documento de foja 7. Pero habiéndose tomado por las autoridades competentes, el hecho es que hoy es una deuda legítima de la Provincia.

Y constando de los informes prestados, que el producto de esta confiscación fué empleada en auxilio del Ejército del General Paz que en 1845 operaba contra Rosas, creo que el presente reclamo está comprendido en la Ley de 13 de Noviembre de 1863.

En cuanto a la liquidación que ha hecho la Contaduría, la considero arreglada a la orden superior. Pero ella debe limitarse al cargamento de yerba y tabaco de la Goleta «Diana», que era el que pertenecía a Don Luis Pondal, a cuyo nombre se hace el reclamo.

En cuanto al cargamento de la Goleta «Luis María», perteneciente a Don Pedro Pondal, de que se hace mención a foja 16 vuelta, ni se ha hecho reclamo por parte legítima, ni hay evidencia en autos de que él fuera confiscado y destinado al Ejército Libertador. El valor de este cargamento no debe, pues, incluirse, como no se ha incluido, en la liquidación. — Junio 3 de 1869.

Excmo. Señor:

Don Miguel Pondal, reclama del Decreto de V. E. de 10 de Junio último por dos razones que no me parecen atendibles.

1.º, Porque no se ha incluido en la liquidación el valor de los efectos que tenía Don Pedro Pondal, y que dice fueron también confiscados por el Gobierno de Corrientes. Pero no se han incluido porque en este expediente no hay prueba clara de que en efecto fueran confiscados, ni el menor dato de que fueran empleados en auxilios al Ejército Libertador, que es la única razón que pueda justificar la deuda. Todas las actuaciones y pruebas de este expediente se refieren únicamente al cargamento de la Goleta «Diana», de la propiedad de Don Luis Pondal, y por consiguiente la liquidación no podía comprender sino el valor de este cargamento. Pero si los efectos que están a nombre de Don Pedro Pondal, se hallan en igual caso, nada puede impedir que el reclamante adelante la prueba para justificar que fueron empleados en auxilios al Ejército.

2.º Que en la liquidación se ha puesto la yerba a cuatro pesos y el tabaco a seis, cuando si el cargamento hubiera venido a Buenos Aires, habría obtenido un valor doble. La Contaduría ha liquidado con razón a aquellos precios; porque en los documentos ori-

ginales que corren agregados consta que el Gobierno de Corrientes vendió la yerba a 4 pesos y el tabaco a 6, y como esta es la tasa del auxilio dado al Ejército Libertador, el Gobierno Nacional no ha podido reconocer ni más ni menos.

Son completamente fuera del caso los cálculos que hace Pondal de los productos del cargamento, si no le hubiera sido embargado, por cuanto el Gobierno Nacional no reconoce esta deuda porque fuera injusta una confiscación de que él no es responsable, sino porque su producto se empleó en auxiliar al Ejército Libertador, y no puede reconocer más de lo que se entregó a ese ejército. Fuera del que esos cálculos son bastante aventurados, porque si el cargamento hubiera venido hasta Buenos Aires, se habría encontrado con la interdicción de comercio decretada por Rosas contra Corrientes y el Paraguay, y no hubiera podido ser vendido.

Después de estas objeciones infundadas que el Señor Pondal hace contra la liquidación, concluye su escrito invocando las convenciones de 1859, y diciendo que su padre, Don Luis Pondal, como súbdito español, debe ser pagado íntegramente del valor del cargamento confiscado, según esas convenciones.

Si hubiera de prescindirse de la Ley de Noviembre de 1863, y mirarse el asunto bajo este aspecto, entonces mi dictamen sería que nada se debe al Señor Pondal, porque habiéndose hecho las confiscaciones en virtud del derecho de beligerante y por una justa y legítima represalia, no sería esta una deuda reembolsable, como lo dije en mi dictamen de 3 de Junio último.

Creo por estas razones, que V. E. debe mandar observar lo resuelto en 10 de Junio, sin perjuicio de que el Señor Pondal puede renunciar a este pago, si así cree conveniente. — Septiembre 2 de 1869.

Departamento de Guerra y Marina. Resoluciones de conformidad con lo dictaminado, Junio 10 de 1869; Septiembre 20 de 1869; y Septiembre 25 de 1869.

Tomo 2, pág. 91 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No puede acogerse a la Ley de 14 de agosto de 1868, quien sostiene haber sido inutilizado en la guerra del Brasil, si luego resulta que ha participado en nuevas campañas, adquiriendo ascensos en las mismas, lo que prueba que no ha habido la inutilización por acción de guerra que invoca.

Manuel Ubierna, inválido, sobre aumento de sueldo.

Excmo. Señor:

El Teniente Coronel Don Manuel Ubierna tiene ya su pensión de retiro, que es la única que le corresponde por la Ley.

Su nueva pretensión de que se le asigne el sueldo íntegro de su clase por haber quedado inutilizado para el servicio a consecuencia de una herida que dice recibió en la guerra del Brasil, carece de todo fundamento. Si fuera cierto que recibió tal herida, lo que no está debidamente probado, y que por ella quedara inutilizado, le correspondería una pensión equivalente al sueldo de Alférez, que era el grado que tenía en aquella época, la que sería muy inferior a la que hoy disfruta.

Pero es evidente que no ha quedado inutilizado por aquella herida; y la prueba es que ha hecho varias campañas después de aquella época, y ha adquirido ascensos hasta el grado de Teniente Coronel. Un inválido verdadero no puede hacer campañas ni ascender.

El informe también del cirujano, dice que la enfermedad que tiene es de *ser varicóso en las piernas*, lo que quiere decir que sufre una dilatación de las venas, enfermedad que nunca proviene de heridas.

Por lo cual considero que el Jefe no se halla en el caso de la Ley de 14 de Agosto de 1868, y que V. E. no debe hacer lugar a su solicitud. — 8 de Junio de 1869.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Junio 11 de 1869.

Tomo 4, pág. 133 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe el Juez Federal —a quien el Gobierno de la Provincia ha prestado el uso de fuerza pública— dirigirse directamente al Gobernador si considera que la misma no se presta debidamente en lugar de presentar reclamos al Jefe de Policía de la misma Pcia. y al Presidente de la República.

El Juez de Sección de Santiago del Estero, que no puede ejercer su jurisdicción por las causas que invoca.

Excmo. Señor:

En los documentos que ha remitido el Juez de Sección de Santiago, no encuentro razón para que el Presidente de la República intervenga en este asunto.

El Juez dice haber decretado la prisión de Don Julián Games; y este individuo se halla en efecto preso a su disposición en el edificio que sirve de Cárcel en Santiago. Pero parece que el edificio tiene dos patios; en el primero hay algunas oficinas del despacho de la Administración, y en el segundo están los calabozos y caballerizas.

Estando Games detenido en el primer patio, el Juez insiste en que esté en un calabozo y con centinela. Pero si cree tener razón para este rigor, ha debido pedirlo al Señor Gobernador de la Provincia con claridad y sencillez, usando del lenguaje atento que corresponde a la dignidad del Juzgado, y al respeto que merecen las autoridades provinciales.

En lugar de esto ha elegido el mal medio de dirigir notas desatempladas contra el Jefe de Policía, que a nada conducen, aunque sean ciertos los datos en que ellas se fundan.

De ellas no resulta de modo alguno que el Gobierno de la Provincia haya negado al Juez la cooperación a que está obligado por la Ley, y éste sería el único caso en que el Gobierno Nacional debiera intervenir.

No encuentro en los documentos remitidos razón alguna para que el Gobierno deba intervenir, ni para que el Juez haya suspendido el curso de la causa, que anuncia, y mucho menos para que diga que no puede ejercer su jurisdicción. — Julio de 1869.

Departamento de Justicia. Se adopta como resolución lo dictaminado. Julio 17 de 1869.

La Ley de 24 de setiembre de 1868, autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar pensiones únicamente a Oficiales de línea que formaron parte de los Ejércitos de la República en la Guerra de la Independencia, debiendo probarse este requisito por medio de despachos, diplomas o fojas de servicios, según lo establece su Decreto reglamentario. Los que integraron los Ejércitos de referencia, en calidad de simples voluntarios, están excluidos de los beneficios de la Ley.

El Coronel Don Evaristo Uriburu pide ser comprendido en los beneficios de la Ley de 24 de setiembre de 1868

Excmo. Señor:

Por Decreto de 30 de Setiembre de 1868, reglamentaria de la Ley del 24 del mismo mes, se ordena que los Jefes y Oficiales que se consideren con derecho a la gracia otorgada por la Ley, deberán comprobar sus servicios, presentando despachos, diplomas o fojas de servicios, disposición muy conforme al espíritu de la Ley, que sólo se refiere a los oficiales de línea que formaron parte de los Ejércitos de la República en la Guerra de la Independencia.

El Coronel Uriburu dice que no presenta despachos, porque los Generales Güemes y Gorriti, a cuyas órdenes sirvió, no los daban, lo que no es exacto según aparece del informe de la Contaduría.

Estos Jefes daban despachos a los oficiales de línea que los acompañaban; y es probable que no los dieran a los voluntarios de que en su mayor parte se componían sus divisiones; porque estos voluntarios, muchos de ellos no regimentados, seguían al General, o se retiraban a sus casas, según su voluntad, sin estar sujetos a un servicio constante y obligatorio. Si el Coronel Uriburu no obtuvo despachos fué, pues, porque no era oficial de línea, sino voluntario.

En cuanto a la realidad de los servicios no hay en el expediente otro comprobante que merezca fe, que el informe del Coronel Don José F. Boedo. Los otros tres testigos hablan de oídas, refiriéndose a sucesos que tuvieron lugar antes de haber nacido los testigos. Pero así mismo, ninguno de ellos afirma el hecho esencial de que el Coronel Uriburu fuera oficial de línea, cuando servía con el General Güemes.

En consecuencia, mi dictamen es que dicho reclamo no está debidamente justificado. — Julio 5 de 1869.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución en contra de lo dictaminado. Julio 29 de 1870.

- I — La Ley de 1826, que ordenaba la consolidación de la deuda pública, no tuvo efecto alguno por haber caído y desaparecido el Gobierno Nacional en virtud de los trastornos políticos de 1827.
- II — El Juez Provincial de Mendoza no tiene facultad propia ni delegada para reconocer créditos Nacionales, los que sólo pueden ser reconocidos por el Presidente de la Nación.

Manuel Chopitea reclama por una confiscación de bienes hecha en 1814 en Mendoza.

Excmo. Señor:

Aunque Don Manuel Chopitea sostiene que el crédito que hoy reclama, debe considerarse reconocido y mandado pagar desde 1826, éste es un error, porque la Ley de aquel año, que ordenaba la consolidación de la deuda pública, no tuvo efecto alguno por haber caído y desaparecido el Gobierno Nacional en virtud de los trastornos políticos de 1827, y porque el Juez Provincial de Mendoza, que en 1826 declaró legítima la deuda de Chopitea y que se debía abonar f. 23, no tenía facultad alguna propia, ni delegada para reconocer créditos Nacionales. Este Juez tuvo conocimiento del asunto, porque el Decreto del Presidente de la República de 15 de Marzo decía en su artículo 2.º «Queda al arbitrio de los mismos acreedores presentarse directamente al Presidente de la República, o ante los Gobernadores de las Provincias donde se hallen establecidos».

Pero en los artículos siguientes se previene que los Gobiernos o autoridades provinciales sólo estaban facultados para sustanciar los expedientes que sirvieran a esclarecer la legitimidad de las acciones y que una vez puestos en estado de resolución, debían remitirlos al Ministro de Hacienda para que recaiga lo que corresponde f. 31.

La resolución definitiva, el reconocimiento del crédito, sólo debía expedirse como era de razón, por el Presidente de la República, y así la que expidió el Juez de Mendoza, fué un avance ineficaz de facultades, que hace de ella una completa nulidad. En aquella época por otra parte, este reclamo no constituía un crédito legítimo, porque el secuestro hecho en 1814 de los bienes del español Chopitea, que fugó de Mendoza y se incorporó a los enemigos, era hecho justamente por el derecho de beligerante. La

obligación de devolver estos secuestros ha nacido recién ahora por una concesión generosa hecha en el artículo 5.º del Tratado con España; y es sólo invocando esta estipulación que puede sostenerse este reclamo .

Hecha esta advertencia, paso a ocuparme del modo cómo ha sido hecho el crédito. Parece indudable que en 1814 -el General San Martín, siendo Gobernador de Mendoza, secuestró los bienes del español Don Pedro Nicolás Chopitea que consistían en dos estancias y algunos artículos de comercio, depositando el todo en manos de Don José Pescara. Hecho el embargo, el Gobernador ordenó que se vendieran en moneda pública. En este estado, se presentó Don José Antonio Villota, hermano de la esposa de Chopitea haciendo presente que, si se llevaba a cabo la confiscación y el remate, quedarían reducidos a una espantosa miseria la mujer y nueve hijos pequeños, que eran americanos, pidiendo que se suspendieran estos procedimientos, mientras ellos hacían una reclamación al Supremo Director del Estado. El General San Martín, con dictamen de su Asesor, mandó entonces que el remate se limitase a aquellos efectos que no podían conservarse cómodamente, y que se diera cuenta al Director como parece que se hizo.

En consecuencia, se reembolsaron en dos ocasiones distintas varios efectos de comercio que produjeron 1.485 pesos 3 reales, y hay una nota en que se dice que en 14 de setiembre de 1815 se remitía al Supremo Director testimonio del expediente. Aquí concluye toda la prueba que se ha exhibido en esta confiscación. No hay vestigio alguno de la resolución que tomó el Director sobre la consulta del Gobernador de Mendoza, ni del resultado de los reclamos, que indudablemente debió hacer la familia de Chopitea. No se sabe si se le devolvieron los bienes embargados o parte de ellos, siendo al menos muy probable que algo se le diera para subsistir, pues es evidente que permaneció en Mendoza, y no pereció de miseria. Estos son puntos que deben esclarecerse para saber la extensión de la responsabilidad del Gobierno en este secuestro. No diré como la Contaduría, que la prueba incumbe al reclamante; porque ésta ha probado cuanto le pertenece, presentando los documentos en que consta que todos los bienes fueron secuestrados en 1814. Pero el Gobierno debe tomar los informes necesarios para saber qué parte de estos bienes fueron devueltos a la fa-

milia Chopitea. Yo he registrado el Archivo General de 1815 y 1816 y no he encontrado dato alguno, ni aun referencia de este asunto. Pero en Enero de 1816 el General San Martín nombró en Mendoza una Comisión de vecinos respetables encargada de administrar y llevar cuenta de los bienes confiscados a españoles. Si el archivo de esta Comisión está hoy en poder del Gobierno de Mendoza, se podrá informar detalladamente sobre el destino que tuvieron los bienes secuestrados a Chopitea.

Creo necesario que V. E. solicite un informe del Gobernador de Mendoza para proceder justamente. Si por este u otros medios no se prueba qué parte de estos bienes fueron devueltos a sus dueños y si no es posible recuperar los raíces del poder de los actuales poseedores lo que me parece fácil y justo, no habiendo sido vendido por el Gobierno, que era el único que podía hacerlo, entonces el Gobierno estaría obligado por el artículo 5.º del Tratado con España a pagar al heredero de Chopitea el valor de los bienes secuestrados. Pero en este caso, no podría tomarse por base para la liquidación de esta deuda la tasación hecha en Mendoza en 1826, sin tener a la vista los efectos que se tasaban.

Los vicios que a primera vista se notan, son los siguientes:

1.º) Una pequeña partida de efectos que se vendió en 1814, y por la cual, después de tres días de remate sólo se pudo obtener 316 pesos 7 rls. está incluida en la tasación por un valor de más de seiscientos pesos.

2.º) 8000 cabezas de ganados de cría de todas edades están tasados a 6 pesos por cabeza! ¿Puede suponerse que en 1814 el ganado valía el doble de lo que vale hoy?

Es verdad que los tasadores, para paliar esta enormidad, dicen que la mayor parte era novillada, toros de edad y vacas de vientre; pero ¿cómo sabían esto después de doce años que los ganados habían desaparecido y sin tenerlos presentes? Así mismo el precio sería excesivo, pues pocos renglones antes tasan 233 vacas al mismo precio de 6 pesos, siendo mansas y tamberas, según el inventario.

3.º) Cuando se hizo el secuestro, el Juez comisionado inventarió todo lo que encontraba en las casas, incluyendo los muebles de la familia y como la tasación se ha hecho por el inventario, se

verá figurar en ella esos muebles: una caja, unas mesas, sillas usadas, petacas, ollas y asadores usados, un estuche de navajas, un banco de amasar, un mate, una jeringa de estaño, y hasta un sombrero elástico galoneado. Pero como es evidentemente imposible, que a la familia se le confiscara los muebles y hasta el lecho, estos objetos no deben figurar en la tasación.

4.º) En el momento que se hizo el secuestro, un socio de Chopitea, Don Luis Mont, al entregar los objetos que tenía en su poder presentó también su cuenta, que corre de f. 5 a 7 del expediente por la cual tenía Mont un saldo a su favor de 1.393 pesos, los que sin duda fueron pagados con el producto de la venta de aquellos efectos; y por consiguiente esa suma debe deducirse del total. En el caso pues, que el Gobierno se encuentre obligado a pagar los bienes secuestrados, debe mandarse hacer una valuación justa de estos bienes y una liquidación arreglada. — Julio 13 de 1869.

Excmo. Señor:

Los informes remitidos por el Juez de Sección de Mendoza han aclarado un punto importante, aunque no ha sido posible averiguar otros detalles importantes por haberse perdido los archivos en el terremoto.

Parece ya evidente que los terrenos en que el Señor Chopitea tenía sus estancias de Manzanos y Melocotones fueron vendidos en remate público en el año 1817 por el Gobernador de Mendoza, dependiente del Gobierno Nacional, y adjudicados a Don José Pescara por la cantidad de *seis mil* pesos, que éste entregó en las cajas públicas; y que los ganados fueron también vendidos en subasta y adjudicados a un Don Antonio Ermida, aunque no se dice el precio que dió por ellos.

Se completó, pues, la confiscación de estos bienes; y no hay duda que, atenta la disposición del artículo 5.º del Tratado con España, el Gobierno debe abonar su valor a los herederos de Chopitea. La única duda que hoy se presenta es sobre el verdadero valor de esos bienes; porque la tasación hecha en Mendoza en 1826, a solicitud de Chopitea, no puede servir de base a la liquidación, no sólo por haber sido hecha doce años después de haberse hecho el secuestro, y sin tener presente los artículos que se tasaban, sino prin-

principalmente por la notoria y enorme exageración de los precios que se les ha asignado.

Como prueba de esta exageración pondré los ejemplos siguientes: 8000 cabezas de ganado de cría de todas edades están tasadas a seis pesos c/u, más del doble de lo que realmente valían. Una pequeña cantidad de azúcar está tasada a 15 pesos arroba, más del triple de su valor. Unos objetos que se vendieron en remate en 1814, por los cuales después de tres días de pregón sólo pudo obtenerse la cantidad de 316 pesos, están tasados en más de 600. Los terrenos, edificios y plantíos de Manzano y Melocotones, por los cuales en 1817 sólo pudo obtenerse la oferta de 6.000 pesos, por los cuales se adjudicaron, figuran en la tasación por 22.028 pesos (veintidos mil veintiocho pesos) a saber: por el casco de la estancia 7.080, por los edificios 1.100, por un Molino 600, por pared y tapiales 4.205, por potreros y huerta 2.069, por alfalfa y viña 6.974. Total 22.028.

Sin embargo el verdadero valor de todo esto eran 6.000 pesos, porque este fué el mejor precio que pudo obtenerse en el remate. Esta exageración sólo puede remediarse hoy, por una prudente valuación que se acerque lo más posible a la verdad, de todos aquellos objetos que constan del inventario, y cuyo justo precio no puede hoy subirse, como se sabe el del terreno, edificios y plantíos de la estancia. De esta valuación que se practique, deben también hacerse las siguientes deducciones: 1.393 pesos que pertenecían a Don Antonio Mont y que sin duda le fueron pagados en 1815; el valor de las camas y muebles de la familia de Chopitea que de ningún modo pudieron entrar en la confiscación, y que figuran sin embargo en la tasación hecha en Mendoza; y finalmente una cantidad que se estime prudencialmente por los alimentos de esa familia, que debieron necesariamente prestarse, porque ella no fué arrojada a la mendicidad. En esta virtud, mi dictamen es que V. E. mande hacer por la Contaduría la prudente valuación de los objetos confiscados y la liquidación del crédito con las deducciones anteriormente expresadas. — 28 de Diciembre de 1869.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resoluciones de conformidad con lo dictaminado. Marzo 17 de 1870 y Mayo 18 de 1870.

- I — Por el artículo 4.º del Tratado con España, el Gobierno Nacional se hizo responsable de todas las deudas de las Tesorerías Públicas, contraídas por el Gobierno Español y sus autoridades, únicamente hasta el 25 de Mayo de 1810.
- II — Las deudas contraídas por los agentes del Gobierno Español, con posterioridad, no deben ser pagadas por el Gobierno Argentino, no así las confiscaciones a súbditos españoles, que deben reintegrarse según lo ordena el art. 5 del Tratado.

Los herederos de Don Manuel Isidoro Gutiérrez cobran un crédito por secuestros.

Excmo. Señor:

En el año 1810 los herederos de Don Manuel Isidoro Gutiérrez, residentes en España, dieron poder a su coheredero Don Pelayo Gutiérrez Santander para que cobrara y percibiera la herencia que aquél dejó en la Ciudad de Córdoba f. 51. En Enero de 1827 el apoderado substituyó el poder en Don Mariano Fragueiro f. 59; y en Febrero del mismo año Fragueiro lo substituyó en Don Juan Albano Castro f. 61. Aquí concluyen las substituciones legales de este poder.

Don Luis Lamas pretende ser representante de los herederos de Gutiérrez en virtud de un poder general que Don Mariano Fragueiro dió al Doctor Quintana f. 67; y que este substituyó en su persona f. 62. Pero este poder en nada se refiere a la representación de Gutierrez sino exclusivamente a la representación personal de Fragueiro, «en todos los asuntos causas y negocios civiles o comerciales, que hoy tengo, o en adelante se le ofrezcan, así a la casa que administra, como al otorgante en particular». El habilitó a Lamas para hacer la personería de Fragueiro en sus negocios propios, pero de ningún modo en los de Gutiérrez; porque esto no lo dice el poder, y no puede suponerse facultades que él no ha conferido.

Sería necesario que Fragueiro substituyera expresamente en Lamas el poder de los herederos de Gutiérrez; pero, para que esta substitución fuera legal debería Fragueiro asegurar y declarar que el poder estaba aún en toda su fuerza, es decir que no le había sido revocado y que viven algunos de los otorgantes, lo que es muy inverosímil, pues eran mayores de edad en 1810, cuando lo otorgaron.

Por estas razones, soy de dictamen que V. E. no debe reconocer la representación de Don Luis Lamas; absteniéndose por tanto de las observaciones que tendría que hacer sobre el fondo del negocio. — Setiembre 6 de 1869.

Excmo. Señor:

La copia de las cuentas de la personería de Córdoba que se ha agregado últimamente al expediente, ha venido a confirmar el juicio que había yo formado de la importancia de este reclamo y de la responsabilidad que toca en él al Gobierno Argentino.

Los hechos, en que se funda, están perfectamente probados. En Enero de 1809 falleció repentinamente en Córdoba el comerciante Español Don Manuel Isidoro Gutiérrez, siendo soltero y sin disposición testamentaria. El Gobernador Intendente hizo levantar un inventario de todos sus bienes, mandó depositar en la Tesorería el dinero y alhajas que se encontró, lo cual ascendía a 13.650 pesos en dinero y 70 marcos de plata labrada usada, según consta del certificado de la Tesorería a f. 34; y los demás bienes y artículos de comercio se remataron en subasta pública, vendiéndose a Don Lorenzo Antonio Maza, en la cantidad de 16.280 pesos 21/4 reales, según la liquidación de f. 39, y f. 40, por cuya cantidad el rematador extendió una escritura de adeudo al plazo de diez y ocho meses.

Este era el estado del negocio en 25 de Mayo de 1810. Desde ese día el Gobernador Intendente de Córdoba, Brigadier Don Juan Gutiérrez de la Concha y el General Liniers, que se hallaba en la misma Ciudad, empezaron a organizar fuerzas militares para sofocar la revolución de Buenos Aires. V. E. encontrará en las cuentas agregadas que en montar la artillería, fabricar balas y granadas, componer el armamento, comprar caballos y carros, mantener y vestir a los soldados que habían reunido bajo el nombre de Voluntarios y otros gastos extraordinarios de guerra gastaron, en los meses de Junio y Julio cerca de 79.000 pesos, y emplearon todos los fondos que existían en la Tesorería, de modo que el día 31 de Julio cuando salieron a campaña, hacia el Norte, se llevaron todo el dinero que existía, entregándose al Tesorero de la expedición, Don Joaquín Moreno, la cantidad de 34.097 pesos 6 reales en moneda acuñada y barras de plata.

No sólo dispusieron del Depósito que había en la Tesorería perteneciente a Don Manuel Isidoro Gutiérrez sino que obligaron al rematador de sus bienes a que les entregara la cantidad de 8.600 pesos, el 31 de Julio antes de vencerse el término de su obligación, según consta a f. 48.

Bien, pues, de lo que tomaron de estos bienes los Generales Concha y Liniers en los meses de Junio y Julio de 1810 no debe ser responsable el Gobierno Argentino; porque en el artículo 4.º del Tratado con España, que establece la responsabilidad del Gobierno por todas las deudas de las Tesorerías Públicas, se dice expresamente: «no formarán parte de esta deuda las cantidades que el Gobierno de S. M. C. invirtiese después de la completa evacuación del Territorio Argentino por las autoridades Españolas»; y en el primer párrafo de ese artículo se ha fijado la época de la completa evacuación, para los objetos del Tratado, en 25 de Mayo de 1810. Nada es más justo, porque después de ese día el Gobierno Patrio no podría responder de los actos de los Agentes del Gobierno Español, que no lo reconocían, ni estaban bajo su dependencia.

De lo que sí debe responder el Gobierno Argentino es de las cantidades que posteriormente confiscó, pertenecientes a Don Manuel Isidoro Gutiérrez, y que eran el resto que debía el rematador de sus bienes Don Lorenzo Antonio Maza; a saber 4.000 pesos entregados por éste en 31 de Agosto de 1810 al Coronel Don Juan Martín de Pueyrredón, Gobernador entonces de Córdoba; y 3680 pesos 21/4 reales que de la misma procedencia secuestraron en 29 de Marzo de 1813, según consta de la cuenta de la Tesorería corriente a f. 48.

En virtud de la estipulación del artículo 5.º del Tratado, el Gobierno Argentino está obligado a devolver estas confiscaciones; y por consiguiente, soy de dictamen que V. E. debe reconocer en favor de los herederos de Don Manuel Isidoro Gutiérrez la deuda de 7.680 pesos en los términos del Tratado. — 25 de Julio de 1870.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 26 de 1870 y Agosto 1.º de 1871.

El Poder Ejecutivo no tiene facultades para extender a otros nacionales que los de los países contratantes, los beneficios de las Convenciones celebradas en Paraná en 1859 sobre reparación de perjuicios ocasionados en la guerra civil. Debe requerirse una autorización expresa del Poder Legislativo para proceder en consecuencia, ya que se trata de la disposición de fondos del Tesoró Nacional.

Mariano Rosquellas reclama el importe de un establecimiento de campo embargado por Rosas.

Excmo. Señor:

Don Mariano Rosquellas, súbdito Brasileño, reclama el abono de los perjuicios que le causó un embargo que el Gobernador de Buenos Aires, Don Juan M. Rosas, hizo de una pequeña estancia de su propiedad, situada en el Partido de San Vicente, el cual embargo duró desde 1840 hasta 1843.

Es la primera vez que veo hacerse al Gobierno Nacional un reclamo semejante. El Congreso no ha reconocido como deuda nacional las violencias que Rosas hizo en las Provincias que gobernaba, y por consiguiente el P. E. no está autorizado para hacerlo. Es el Gobierno de Buenos Aires que desde 1853 llamó a todos los que tuvieran créditos de este género legítimamente comprobados, y los ha liquidado y pagado, y sólo a él toca esta responsabilidad, porque las violencias cometidas por Rosas dentro del Territorio de su Provincia, las hizo como Gobernador de ella; los productos de las estancias embargadas se remitían a su Tesorería, a la llamada Caja de Depósitos, y los animales que de ellas se sacaban, se consumían por sus tropas. Así es que aunque los Brasileños hubieran de considerarse incluídos en las Convenciones de 1859, este reclamo no debería ser tomado en consideración.

Pero además, es necesario tener presente que esas Convenciones celebradas con la Francia, la Italia y la Inglaterra sólo tuvieron fuerza por la Ley del Congreso que las aprobó, y, que el P. E. no tiene facultad para extender sus beneficios a otras nacionalidades, sin una autorización expresa del Congreso, porque no puede disponer de fondos sin esta autorización. Por consiguiente, mi dictamen es que V. E. declare no estar autorizado para reconocer este reclamo. — 17 de Setiembre de 1869.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resoluciones en contra de lo dictaminado. — Noviembre 3 de 1870 y Julio 17 de 1873.

Tomo 2, pág. 100 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe considerarse nula la donación de un buque de guerra hecha por el Gobierno a un particular; el Poder Ejecutivo no está autorizado para hacer tales donaciones en compensación de servicios.

Servando del Castillo reclama la donación hecha a su señor padre de un buque del Estado, como remuneración por servicios prestados.

Excmo. Señor:

La donación hecha a Don Prudencio del Castillo de un buque de guerra nacional el 10 de Diciembre de 1861, sólo puede explicarse por el desorden que había en la Administración del Paraná en las últimas horas de su Gobierno.

Esta donación es evidentemente nula, porque el P. E. no estaba autorizado para regalar los buques del Estado, ni aun en compensación de servicios, ni se han expresado, ni liquidado, ni conocido como deuda. Hizo, pues, muy bien el Jefe de la Escuadra de apoderarse del buque, porque éste no había dejado de ser de propiedad nacional por virtud de aquella donación nula. Basta esta razón para que V. E. no haga lugar a esta solicitud.

Pero debe también llamar la atención lo que dice la Contaduría en su informe, que Don Prudencio del Castillo recibió una cantidad de dinero para el pago de tropas, de que no ha dado cuenta. Sus herederos deben ser obligados a rendirlas, con tanta más razón, porque parece que estos herederos han creído que los fondos que había recibido su autor como Comisario de Guerra para objetos de servicio, les pertenecía, habiendo el infrascripto despachado algunos reclamos por libramientos, dados para el pago de tropas, descontados y endosados por el albacea de Castillo, como si pertenecieran a la herencia. — Octubre 6 de 1869.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 5 de 1869.

Tomo 1, pág. 429 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Por el hecho de que al Rey de España pertenecieran una gran parte de las acciones de la Real Compañía de Filipinas, no debe considerarse que los fondos de ésta, perteneciesen al Gobierno Español. La Cia. constituyó una personalidad distinta del Gobierno de la Península, gobernada con independencia de éste, por un Directorio elegido por sus miembros.

Por esta razón es procedente el cobro de los créditos a favor de la Compañía Filipinas, que por concepto de empréstitos, confiscaciones y secuestros, debidamente probados, se reclaman al Gobierno Argentino y por ser deudas de la Tesorería del Virreynato contraídas legítimamente antes de 1810, que deben pagarse de conformidad a lo convenido en el art. 4.º del Tratado con España.

Francisco Ramos de Udaeta reclama el embargo impuesto en 1810 por la Junta Gubernativa, a las pertenencias de las Compañía Filipinas.

Excmo. Señor:

Con la presentación que se ha hecho últimamente de un testimonio auténtico, se ha dado la prueba que justamente exigió el Señor Procurador del Tesoro, de haberse adjudicado judicialmente los créditos que se reclamaban a nombre de la Compañía de Filipinas, en favor de los herederos de Don Lorenzo Calvo y Mateo, a quienes representa Don Ramón Udaeta. De consiguiente, esta personería, está perfectamente legitimada.

En cuanto al fondo del reclamo, son varios los créditos que se cobran. En 1.º de Enero de 1808 el agente de la Compañía Don Martín de Sarratea, prestó al Virrey la cantidad de 200.000 pesos, que entraron en cajas con la garantía del Cabildo de Buenos Aires. El asiento de los libros de Tesorería que prueba esta partida, y se encuentra a fs. 87 vta., dice que fueron entregados por el Síndico Procurador del Cabildo: pero a fs. 49 y 51 está el tes-

timonio de dos actas del Cabildo por las que consta que ese dinero fué pedido a Don Martín de Sarratea, y entregado por éste el mismo día que se recibió en Tesorería en manos del Síndico. Esta intervención del Cabildo en el préstamo, se explica por haber garantido esta Corporación su reembolso.

El Señor Procurador del Tesoro dice que este crédito no está comprendido en el art. 4.º del Tratado con España, porque fué una contribución forzosa, una confiscación impuesta por el Virrey, y porque esos fondos se destinaron a sofocar el alzamiento de los naturales en Bolivia que fueron la anticipación de la revolución de 1810.

Yo creo lo contrario. Esa transacción no fué una contribución forzosa, ni una confiscación, sino un «empréstito de la Real Hacienda, para sus atenciones, con cargo de reintegro a la llegada del primer situado», como se dice en el asiento de los libros. Era pues deuda de la Tesorería del Virreynato, contraída legítimamente antes del 25 de Mayo de 1810, y como tal, comprendida en el art. 4.º del Tratado. Este dinero no pudo tampoco ser empleado por el Virrey Liniers en sofocar los movimientos del Alto Perú, como cree el Señor Procurador; porque en Enero de 1808 no habían aun aparecido esos movimientos que sólo empezaron en 1809, cuando gobernaba el Virrey Cisneros quien mandó al General Nieto a sofocarlos.

La observación sólo puede recaer sobre el segundo crédito que se cobra, y fué empréstito que pidió el Virrey para habilitar las tropas de Nieto.

2.º Crédito. Un empréstito que hizo el Virrey al agente de la Compañía de Filipinas, importando 120.248 pesos que entregó en Tesorería desde 18 de Setiembre hasta primero de Diciembre de 1809, con cargo de reintegro. Este es dinero que se empleó en prestar la expedición de tropas al Alto Perú. Pero este destino no le quita su calidad de deuda legítimamente contraída por la Tesorería del Virreynato, y como tal, comprendida en el artículo 4.º del Tratado, aunque se suponga, lo que es sumamente dudoso, que los movimientos de Chuquisaca tuvieran una influencia en la Revolución de 1810, que ya estaba organizada y convenida cuando aquello sucediera. Este crédito se halla debidamente comprobado por el asiento de los libros, de que da testimonio el Archivero General en su informe presentado últimamente, y por el oficio testimoniado del

Virrey Cisneros, corriente a f. 54. Lo creo por esta razón de legítimo abono.

He creído inútil pedir al Archivero me informe sobre si habrán hecho algunos pagos a cuenta de estos dos empréstitos, porque en el citado oficio del Virrey, se excusa de que las urgencias del Erario no le han permitido hacer pago alguno por esta deuda, y ese oficio tiene la data de 16 de Marzo de 1810, dos meses antes de la revolución.

3.º Crédito. Por *sesenta mil quinientos ochenta y ocho pesos*, pertenecientes a la Compañía de Filipinas, que trajo a esta Ciudad desde Potosí el Conductor de Caudales del Comercio, Don Pedro Pablo Zabaleta, en el año de 1811, y que la Junta de Gobierno confiscó e hizo entregar en la Tesorería Nacional. La prueba de este hecho está en el asiento del Libro Manual de la Real Caja de Buenos Aires de 1811, que el Archivero copia en su informe a f. 88. Esta confiscación está comprendida en el artículo 5.º del Tratado, y debe pagarse según sus términos.

4.º Crédito. El Gobierno secuestró una casa de la misma Compañía de Filipinas, situada en esta Ciudad, y en 1822 la vendió a Don Diego Brittarin en la cantidad de *nueve mil pesos*, que éste entregó en Tesorería en 23 de Noviembre del mismo año, según consta del informe del Archivero a f. 89. La propiedad de la finca está acreditada por la escritura que corre a f. 60, de la cual consta que la Compañía compró esa finca en 13 de Diciembre de 1787. El crédito, plenamente probado está igualmente comprendido en el artículo 5.º del Tratado, y es de legítimo abono.

5.º Crédito. Por *dos mil catorce pesos, dos y tres cuartos reales*, que importó un remate de efectos pertenecientes a la Compañía, que entregó su Agente Don Martín Sarratea, como pertenencias extrañas, según consta del testimonio sacado del Archivo, que corre a f. 100, y del informe del Archivero a f. 92 vuelta. Esta fué una confiscación que como las anteriores, está comprendida en el artículo 5.º del Tratado, y la creo de legítimo abono. Otros varios créditos enumera el reclamante en su memorándum de f. 29; pero como no se ha dado prueba alguna de su verdad, es inútil tomarlos en consideración, no existiendo tampoco en los libros de Tesorería, dato alguno que los compruebe.

Pero los créditos bien probados y de legítimo abono, son los que he enumerado más arriba, a saber: por el primero pesos 200.000, por el segundo 120.248, por el tercero 60.588, por el cuarto 9.000, por el quinto 21.143 $\frac{3}{4}$ reales. Total, pesos 391.959, 2 $\frac{3}{4}$ reales. Cuyo total debe ser considerado como de pesos corrientes o sencillos, porque esta era la moneda en que se llevaba la cuenta y porque del asiento del tercer crédito consta que se había abonado un 3 % para reducir los pesos fuertes a sencillos, que era entonces el estilo del comercio. No debe abonarse tampoco el interés que el reclamante carga en su memorándum, porque él está prohibido por el Tratado, y porque la Nación sólo ha estado obligada a pagar este género de deudas desde la época del Tratado y sólo en virtud de sus estipulaciones. Este es mi dictamen, salvo el más acertado juicio de V. E.
— Octubre 21 de 1869.

Excmo. Señor:

El Contador General tiene razón cuando asegura que el Gobierno Español tenía acciones en la Real Compañía de Filipinas, aunque es muy inexacto cuando designa la cifra del capital de esta Compañía y la del interés que el Rey tenía en ella. El verdadero monto de una y otra está designado en la Real Cédula de 12 de Julio de 1803, que dió a la Sociedad su forma definitiva.

Yo no podía dejar de tener presente este hecho público, y al que se hace referencia en varios documentos de este expediente. Pero creí inútil considerarlo en mi dictamen, porque a mi juicio en nada varía los términos de la cuestión actual. El Rey era accionista, pero fuera de este interés, había 34.000 acciones que pertenecían a particulares. La Compañía era persona completamente distinta del Gobierno Español, que se gobernaba con independencia por un Directorio elegido por sus miembros.

Hay, pues, una grande inexactitud, al decir que los fondos de esta Compañía pertenecían al Gobierno. Y es mayor la inexactitud si se considera lo siguiente: Cuando venció el término de la concesión, la Compañía estaba en quiebra, y no pudiendo pagar sus deudas, se presentó como fallida al Tribunal de Comercio de Madrid, donde se radicó la quiebra, como consta a f. 5 de este expediente, y en el estado de su activo presenta los créditos, que hoy se cobran. Desde este momento, sus bienes, créditos y acciones no pertenecían

ya al Rey ni a ninguno de los demás accionistas, pertenecían únicamente a sus acreedores, y uno de ellos a quien representa hoy Don Ramón Udaeta, obtuvo que el Tribunal le adjudicara estas acciones en pago de sus créditos.

En vista de estos hechos que constan del expediente ¿cómo puede decir el Contador que estos fondos tal vez pertenecen al Rey de España? Hay evidencia de que no pertenecen sino a Don Lorenzo Calvo y Mateo, a quien fueron legítimamente adjudicados. Si los fondos de la Compañía hubieran pertenecido al Rey, o hubieran estado bajo su administración, indudablemente no habría deuda, porque por el artículo 4.º del Tratado, el Gobierno Nacional sólo se comprometió a pagar las deudas en favor de particulares que las autoridades españolas contrajeron antes de 1810; ni entonces el Virrey hubiera tomado esos fondos como empréstito reembolsable, sino que los hubiera tomado y empleado como pertenecientes a la Hacienda Pública.

Pero yo he considerado, como consideró el Virrey, que la Compañía de Filipinas era una personalidad particular, distinta del Gobierno, que aunque el Rey pudiera percibir los dividendos correspondientes a sus acciones, no por esto le pertenecían los fondos de la Compañía; y que hoy, en el estado de quiebra en que ésta se halla, esos fondos no pertenecen tampoco a la Compañía, sino a sus acreedores. En este concepto, encontrándose en los libros de caja una deuda contraída por los Virreyes Liniers y Cisneros, en favor de la Compañía de Filipinas por dos empréstitos, he creído que el Gobierno debía dar, leal cumplimiento al artículo 4.º del Tratado, mandándola pagar. Bien veo que es considerable la suma que se cobra, y otros créditos se han presentado tan importantes como éste, pero esta consideración debería haberse tenido presente antes de ajustar el Tratado. Hoy es completamente inoportuna. Es preciso cumplir lo pactado.

Tal es mi opinión, sobre la cual puede V. E. consultar a los demás consejeros oficiales del Gobierno. — Noviembre 6 de 1869.

Excmo. Señor:

Los 391.950 pesos que cobraba anteriormente don Ramón Udaeta, como entregados en la Tesorería General por préstamos y confiscaciones, eran *pesos sencillos*, porque esta era la moneda en que

se llevaba la cuenta. Los pesos fuertes de 17 en onza que se recibían, se aumentaban con un 3 o/o. para reducirlos a sencillos en las cuentas, como consta del asiento de fs. 88.

Posteriormente Udaeta redujo sus pretensiones, y ofreció contentarse con la suma de 200.000 *pesos plata*, por toda cancelación. La expresión de que se valió al hacer esta oferta, muestra que lo que pretendía, eran 200.000 pesos de 17 en onza. Pero el Gobierno al aceptar la propuesta, dijo que reconocía *a favor del reclamante la cantidad de 200.000 pesos corrientes o sencillos*; cuya expresión inusitada hoy, si se refiere al valor que tenía la moneda cuando se hicieron los empréstitos, importa decir que de los 200.000 pesos debe rebajarse el 3 o/o. como lo ha hecho la Contaduría en su liquidación.

Evidentemente éste no fué el sentido de la propuesta de Udaeta; pero como ese mismo Decreto se refiere a conferencias verbales tenidas con el interesado, en que éste renunció a los intereses que según el Tratado, le correspondían desde 1864, y que importan más del 3 por ciento, V. E. está en mejor aptitud de juzgar cuál fué el verdadero sentido en que se admitió la oferta de Udaeta, si había de hacerse o no una rebaja de 3 por ciento en los 200.000 pesos ofrecidos. Si había de hacerse este descuento, entonces no había convenio, porque ambos contrayentes habían procedido en conceptos distintos: Udaeta ofreciendo recibir por cancelación 200.000 *pesos plata*, es decir de 17 en onza, y el Gobierno dándole aquella cantidad con la rebaja de un 3 por ciento. Solo V. E. puede decidir cuál fué el concepto del Gobierno en este caso, y resolver en consecuencia. — Junio 17 de 1872.

Departamento de Relaciones Exteriores. Recayeron resoluciones en las siguientes fechas: Abril 7 de 1870, Abril 25 de 1872 y Julio 4 de 1872.

Tomo 1, pág. 573 y 577 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El Gobierno es responsable y debe el flete de fardos de pasto, que si bien llegaron podridos a su destino lo fué por culpa de los empleados del Gobierno que los embarcaron mojados, aunque luego se pusieran bajo cubierta.

En cambio no debe flete alguno, por los que quedaron sobre cubierta, a la intemperie, sin que el Capitán tomara medida alguna para preservarlos.

El Cónsul General de los Países Bajos sobre cobro de fletes adeudados al bergantín «Ferschelling».

Excmo. Señor:

Este ha sido un negocio mal dirigido desde el principio.

En primer lugar, se cometió la imprudencia de fletar un buque holandés para que empleara cinco meses en llegar a Corrientes; y luego, en el contrato de fletamento, no se tomó precaución alguna para asegurar la responsabilidad del Capitán por la carga. El resultado ha sido que el Gobierno ha perdido 117 fardos de pasto.

En cuanto al flete, creo que el Gobierno sólo debe abonar el correspondiente al carbón y a los 34 fardos de pasto que se embarcaron mojados y se pusieron bajo de cubierta, porque la culpa de su avería recae exclusivamente sobre los empleados del Gobierno que hicieron el embarque en esta mala condición.

Pero por el resto del pasto que llegó enteramente podrido no se debe flete alguno, porque el Capitán no ha probado que tomara precaución alguna para preservarlo de la humedad, como era de su deber; y mientras no se pruebe lo contrario, él es culpable de la avería.

El reclamante dice que los fardos que se embarcaron mojados debieron contagiar a los sanos. Esta es una suposición suya, y suposición inadmisible, porque los fardos mojados iban bajo cubierta, y yendo los otros encima, el contacto era imposible.

En cuanto a los intereses que se cobran, ellos no pueden admitirse sino desde el momento que se liquide y reconozca el flete que se debe. — Noviembre 23 de 1869.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Diciembre 6 de 1869.

Los informes de un Jefe de Estado sobre actos oficiales, merecen entera fe y hacen plena prueba.

Manuel Rillo reclama el importe de unos bueyes.

Excmo. Señor:

Este reclamo por el valor de 83 bueyes, tiene por fundamento el documento de fs. 28, (un recibo del General Virasoro), y la declaración del General don Benjamin Virasoro, que dice haber tomado para completar el número de animales que se necesitaban para arrastrar hasta el Rosario las carretas del Ejército Federal que quedaran abandonadas en el campo después de la batalla de Pavón.

Pero don Pascual Rosas, que era entonces Gobernador de la Provincia de Santa Fe, informa que luego que llegaron esas carretas, se citó por edictos a todos los dueños de los bueyes, y se les devolvieron, con excepción de la dotación de diez carretas que se mandaron a Santa Fe.

Don Manuel Rillo, que se hallaba entonces en el Rosario y que se había quejado al Gobernador de los destrozos cometidos por don Juan Saa en su estancia, no pudo dejar de recibir los bueyes que le pertenecían. Su reclamo en esta parte envuelve la mala fe de haber ocultado la devolución que se hizo, y esta ocultación maliciosa, le quita todo derecho para reclamar, si es que algunos de sus bueyes fueron hasta Santa Fe, pero que no hay prueba ni indicación alguna.

La mayoría de la Comisión ha creído sin embargo que debían abonarse los 83 bueyes, considerando sin valor alguno el informe del Gobernador, porque no ha exhibido documento alguno que lo compruebe. Pero la doctrina legal es que cuando el jefe de un Estado informa sobre sus actos oficiales no necesita presentar documentos para que su declaración merezca entero crédito y haga plena prueba. Debemos, pues, creer que los bueyes fueron devueltos a sus dueños, desde que lo afirma el Gobernador Rosas.

En este concepto, de acuerdo con el miembro disidente de la Comisión, mi dictamen es que el Gobierno no debe hacer lugar a este reclamo. — 30 de Diciembre de 1869.

Resolución de conformidad con el dictamen.

Tomo 2, pág. 119 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No procede el recargo de intereses, si ha habido mora en el pago de los derechos aduaneros por culpa exclusiva de la Aduana.

Sobre tardanzas en el pago de derechos de Aduana.

Excmo. Señor:

Si la tardanza en el pago ha sido causada por culpa exclusiva de la aduana, que no completó la liquidación de los derechos, no hay razón para imputar la demora al comerciante, a quién no se le notificó la cantidad que debía, y por consiguiente no la hay para cargarle intereses. Tal es mi dictamen, etc. — 3 de Enero de 1870.

Departamento de Hacienda. Resolución de acuerdo con el dictamen. — Enero 13 de 1870.

Tomo 2, pág. 115 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La declaración del Congreso de 26 de Setiembre de 1868, en respuesta a la Consulta que le formuló el P. E. acerca de la interpretación que debería darse a la Ley de Pensiones de 1867 implica la derogación del art. 36 de la ley general de Pensiones de 1865.

Josefa Martínez de Massini sobre pensión.

Excmo. Señor:

Si en esta materia sólo rigiera la Ley General de Pensiones Militares, sancionada en 1865, la señora reclamante tendría razón. La pensión debería arreglarse por el sueldo que disfrutaba su esposo al tiempo de su fallecimiento. Esto es además lo justo y lo lógico.

Pero otras sanciones posteriores del Congreso han venido a destruir el sistema regular, establecido por la Ley, y puesto al Gobierno en la precisión de cometer injusticias.

En 1867 se derogó la primera parte del artículo 40, ordenándose que las pensiones acordadas por leyes anteriores se arreglaran a la Ley de 1865.

Esto puso al Gobierno en el caso de suprimir aquellas pensiones existentes que no estaban conformes con la Ley actual, y disminuir

otras, sujetándolas a la nueva escala, lo que motivó la consulta hecha al Congreso en 7 de Septiembre de 1868.

A ella se contestó declarando que la mente del Congreso no había sido suprimir ni rebajar las pensiones existentes, sino igualar las pensiones según su escala, sobre la base de los sueldos que se pagaban en 1865.

Esta declaración resolvía las dudas anteriores; pero es claro que por ella se derogaba el artículo 36 de la ley; pues si en los años posteriores los sueldos militares eran mayores o menores que en 1865, el Gobierno no podría conceder pensión, según el sueldo que disfrutaba el causante al tiempo de su fallecimiento, sin faltar a la igualdad que ha sido la mente del Congreso establecer.

Esto es lo que sucede en el presente caso, y yo creo que la liquidación de la contaduría está arreglada a la declaración del Congreso, de 26 de Septiembre de 1868, aunque del proceder resulta una injusticia.

Mi dictamen, por consiguiente, es el que el Gobierno declare que no está en sus facultades acceder a la petición de la señora viuda de Massini, quien podrá acudir con su solicitud al Congreso. 3 de Mayo de 1870.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución en contra de lo dictaminado. — Octubre 14 de 1870.

Tomo 4, pág. 245 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La exoneración de derechos a la importación, que en el contrato de Concesión del F. C. Central Argentino se establecen, para los efectos destinados a éste, debe interpretarse con carácter restringido y convendría para evitar nuevos reclamos que el P. E. especifique qué artículos deben considerarse libres de derechos.

La Empresa del Ferro-Carril Central Argentino, — sobre exoneración de derechos para objetos destinados a su consumo.

Excmo. Señor:

El Señor Wheelwright entiende que por su contrato se le ha concedido la importación libre de derechos de todos los artículos

que se empleen en la administración del Ferro-Carril Central; el papel en que han de escribir los empleados, las sillas en que han de sentarse, las camas en que han de dormir, etc.

Esta interpretación, que debería extenderse a todos los Ferro-carriles que tienen concesiones análogas, importaría conceder a sus administradores la facultad de introducir, sin pagar derechos, todo género de artículos, con los que podrían negociar, pues la Aduana no tiene los medios de investigar si ellos eran realmente consumidos por los empleados del Ferro-carril.

Entiendo que el espíritu de la concesión no ha tenido tal extensión, sino que ella se ha limitado a liberar del pago de derechos los rieles, máquinas, carros y artículos de construcción, y el coque que se introdujera para su servicio. Así lo demuestra la letra del artículo 40, que dice: «Los materiales, útiles y artículos que fuere necesario importar del exterior para la construcción y *uso exclusivo* del Ferro-carril, serán libres de todo derecho de introducción».

Uso exclusivo del Ferro-carril, quiere decir, artículos que sólo pueden usarse en un Ferro-Carril, y de ningún modo artículos de uso común, aunque ellos sean dedicados para el mantenimiento y conveniencia de sus empleados, o para el mejor desempeño de sus funciones.

Creo, por consiguiente, que las sillas de que se trata no están comprendidas en la concesión, y que V. E. debe ordenar al Administrador de Rentas que exija y verifique su pago.

Pero como estos reclamos podrían repetirse por otro género de artículos en que no fuera tan clara la decisión, tal vez V. E. encuentre conveniencia en determinar desde luego con conocimiento del Sr. Wheelwright cuáles son los artículos específicos que deben considerarse libres de derechos, para que las Aduanas puedan tener una regla fija a este respecto. — 16 de Mayo de 1870.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Mayo 19 de 1870.

Tomo 4, pág. 242 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El Gobierno Nacional es responsable por la pérdida de un buque, habiéndose probado que el mismo se incendió, por hechos imputables a las tropas nacionales que transportaba.

La indemnización debe comprender solamente el valor del barco, excluyendo el precio de los pasajes, ya que el viaje no se terminó y por que recibiendo el damnificado el valor del buque, no puede tener derecho a sus productos.

No se deben tampoco intereses, por la demora en el pago, si ésta tuvo lugar por culpa del peticionante.

Cándido A. Galvan cobra el vapor «Buenos Aires» incendiado

Excmo. Señor:

En este expediente no hay prueba alguna de los hechos esenciales para apoyar este reclamo, a saber: cómo se produjo el incendio, quién lo causó, en qué lugar empezó.

Los testigos, que han sido examinados por petición del dueño del vapor, ignoran todos estos hechos; el Sr. Coronel Elía, dice «que no ha podido descubrir la procedencia del incendio, sin embargo de haber tomado suficiente declaración a los oficiales y tropas de servicio».

El Sr. Procurador del Tesoro da por probado que el fuego empezó en las cocinas de la tropa, como dice el Capitán en su protesta; pero no hay un solo testigo que afirme semejante cosa. Muy lejos de eso, el Capitán Don Domingo Ferreira, dice que las cocinas estaban en *la misma popa* del buque; y el Señor Coronel Elía dice que cuando acudió él con el Capitán del vapor, «la humareda salía al parecer de la *bodega*, y que inmediatamente procedió el Capitán a poner las bombas en la puerta de las escotillas, haciendo bajar a un marinero con las bombas, lo cual todo fué inútil, porque no pudo soportar el humo y el calor».

Si, pues, el fuego estaba en la bodega y las bombas se pusieron en las escotillas, él no venía de las cocinas, que estaban en la misma popa del buque.

Pero aunque no haya podido averiguarse la procedencia del incendio, paréceme imposible que no pueda esclarecerse, si él empezó o no en lugar donde estaban las cocinas, porque, según declara el Sargento Mayor Don Fernando Sosa, «para la vigilancia de las cocinas de la tropa había una guardia de dieciséis hombres, un Ca-

pitán y un Oficial subalterno»; y los centinelas de esta guardia no podrían dejar de haber notado si el fuego de la cocina se había comunicado al buque, porque era precisamente para impedir esto que habían sido puestos.

Soy, por tanto, de dictamen que V. E. pase este expediente al Sr. Coronel Elía para que, examinando a los soldados que el 25 de Enero estaban de guardia a bordo del vapor, informe si el incendio empezó en la cocina de la tropa, cuál era el lugar que estas cocinas ocupaban, y el lugar dónde estaba el fuego cuando fué advertido.

O sí V. E. no cree conveniente pedir oficialmente este informe, puede devolver el expediente al interesado para que adelante la prueba. Junio 25 de 1870.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución no haciendo lugar. — Noviembre 4 de 1870.

Excmo. Señor:

En mi dictamen de 25 de Junio de 1870, pedí nuevos esclarecimientos, porque no encontraba probado cómo se produjo el incendio del Vapor «Buenos Aires», quién lo causó o en qué lugar empezó hechos que reputaba esenciales para la justa resolución de este asunto.

Ahora que se han presentado nuevas pruebas, las declaraciones dadas ante el Juez Nacional, del Coronel Don Francisco Elía y del Mayor Don Melchór Suasnabal, y los partes de los dos Capitanes que estaban de servicio a bordo cuando ocurrió el siniestro, no puede dudarse que el incendio tuvo origen a popa, en el lugar que ocupaban las cocinas de la tropa, o en la bodega que estaba inmediatamente contigua a las cocinas, y como en esta bodega no había más individuos que la tropa del batallón 3.º de Entre Ríos, es evidente que sólo ellos han podido causar el incendio, lo que se ratifica por lo que dice el Coronel Elía en su declaración, que cuando fué al lugar del siniestro oyó a algunos soldados que culpaban al Cabo de guardia como autor del incendio, que por esto lo hizo arrastrar en la toldilla del Vapor, de donde se tiró al agua y se ahogó, lo que hacía suponer alguna culpabilidad en él.

El Coronel tomó esta muerte como excusa de no haber podido averiguar la causa del incendio, pero allí estaban los soldados que acusaban al Cabo, y toda la Guardia, que debió presenciar el he-

- cho. ¿Por qué no examinó a estos individuos? porque los principales culpables son los Jefes, por su poca vigilancia y por la falta de disciplina que no había sabido imponer a la tropa que mandaban,
- la cual hacía fuego con aguardiente al lado mismo de sus camas de pasto seco.

Habiéndose incendiado el Vapor por culpa de la tropa que traía a bordo, el Gobierno no puede excusar la responsabilidad de abonar el valor del buque.

- Pero solamente el valor del buque. Los pasajes que cobra el Señor Galvan no se le deben; no sólo porque el viaje no estaba terminado, sino porque recibiendo el valor del buque, no puede tener derecho a sus productos. Y en cuanto a los intereses, la obligación de pagarlos sólo recae sobre el culpable de la demora, y ésta sólo debe imputarse al Señor Galvan, que no ha presentado desde el principio las pruebas que hoy presenta, y sin las cuales el Gobierno no podía atender su reclamo. 28 de Octubre de 1871.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 26 de 1871.

Tomo 4, pág. 238 y 239 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde conceder el pase a Bulas Pontificias instituyendo Obispos en Diócesis en poder de infieles, aunque en ellas la Santa Sede se arrogue derechos exclusivos en los nombramientos, debiendo hacerse valer los derechos que por el Patronato le corresponde al Gobierno Argentino, cuando se trate de nombramientos en Diócesis del país.

Doctor Federico Aneiros — pide el pase a la Bula que lo instituye Obispo de Aulon.

Excmo. Señor:

No encuentro impedimento alguno para que se otorgue el pase a la Bula presentada. No siendo el Doctor Aneiros nombrado para una Diócesis de la República, sino para una que se halla en poder de infieles, no es oportuno mencionar las bases que contienen la mencionado Bula, por las cuales pretende el Sumo Pontífice que

él tiene la exclusiva facultad de nombrar Prelados, sin que ninguna autoridad pueda mezclarse en estos nombramientos. Los Obispos de este país nunca se han provisto sino por presentación y nombramiento de la autoridad civil, en virtud de un derecho nunca disputado ni desmentido. Pero tratándose de la Diócesis de Aulon, no hay oportunidad en hacer valer este derecho, y así creo que no hay inconveniente en dar a la Bula el pase que se pide. Julio de 1870.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 20 de 1874.

Tomo 2, pág. 146 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los Cuerpos de Milicias, reclutados por las Provincias durante la Guerra de la Independencia no tienen carácter de Ejércitos de Línea, por lo que sus integrantes no pueden acogerse al régimen de pensiones de la Ley de 24 de Setiembre de 1868. Los componentes de la Guardia Nacional sólo alcanzan los beneficios de la Ley cuando han sido inutilizados o muertos en acción de guerra, pudiendo en éste último caso, transmitirlos a sus familias.

María Josefa Medina — pide pensión como viuda del Teniente Coronel Don Felipe Royo.

Excmo. Señor:

Lo que consta evidentemente por los despachos y declaraciones que forman este expediente, es que Don Felipe Royo, vecino hacendado de Salta, nunca perteneció al ejército de línea de la República, sino que sirvió en los cuerpos de milicia de aquella Provincia en la Guerra de la Independencia.

Así es que el despacho de Sargento Mayor y el de Teniente Coronel no son dados por autoridad nacional, sino por los Generales Güemes y Arenales, como Gobernadores de Salta, y el Regimiento de la Caldera en que ha servido, es un Regimiento de milicia de aquella campaña.

Los certificados del General Don Manuel Puch, y del Teniente Coronel Ubierna, solo dicen que sirvió en los cuerpos de Gauchos de aquella Provincia, en tiempo de Güemes. Por esto cuando

pidió su baja en 1827, lo hizo al Gobernador de la Provincia, y fué éste quien se la negó, lo que no hubiera sucedido si hubiera sido oficial de línea, perteneciente al Ejército Nacional.

Ahora bien, las pensiones establecidas por la Ley son sólo para los Jefes y Oficiales del Ejército de Línea y los de Guardia Nacional sólo pueden obtenerla o trasmitirla a sus familias cuando son inutilizados o muertos en acción de guerra en servicio de la Nación, según la disposición de los artículos 8.º y 10.º de la Ley. En consecuencia creo que V. E. no está autorizado para conceder la pensión que se pide. — 20 de Octubre de 1870.

Excmo. Señor:

Nunca ha considerado el Gobierno que los Oficiales de Guardia Nacional tengan derecho a dejar pensión a sus familias.

La Ley General de Pensiones dice que sólo tendrán este derecho los Jefes y Oficiales del Ejército de Línea, así como los Oficiales y Tropa de la Guardia Nacional, *en su caso*. Este caso está determinado en el art. 10, en que sólo se les da este derecho a los que se inutilicen o mueran en acción de guerra. La Ley de 1868 que premió a los Guerreros de la Independencia, habla sólo de los Jefes, Oficiales y soldados que hallan formado parte de los Ejércitos de la Nación, es decir, Oficiales de Línea.

La doctrina que sostiene la Contaduría, la Inspección y el Auditor, de que un Oficial de milicias puede dejar pensión a su familia es una enormidad que concluiría con todas las rentas del Tesoro, porque no hay un solo ciudadano que no esté o haya estado inscripto en la Guardia Nacional, y todos, absolutamente todos seríamos pensionista. Esto es contra la ley y contra el buen sentido.

¿Acaso Royo es el único que ha servido en los cuerpos de Gauchos de Salta? Toda la juventud de Jujuy, de Salta y Tucumán, han prestado los mismos servicios que él contra los españoles. Las milicias nunca prestan un servicio continuo y permanente. Están ocupadas en sus trabajos y quehaceres personales y sólo por accidente son llamados a una función de guerra.

Así es que la Inspección calculando el tiempo de servicio de Royo desde 1811 hasta su muerte como un servicio continuo de un Oficial de Línea, no sabe lo que dice, y falta a todas las reglas del buen sentido. Se citan dos casos de Oficiales de milicias, a quienes

el Gobierno ha concedido pensión. Temo que estas citas sean falsas. Pero si son ciertas será porque la Inspección y la Contaduría, faltando a sus deberes, han inducido en error a V. E. Mas un error no puede servir de precedente, ni justificar otros. Por conclusión, reproduzco en todo mi dictamen de 20 de Octubre de 1870.
26 de Enero de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de conformidad, en Febrero 10 de 1863; y en contra, en Octubre 9 de 1863.

Tomo 2, pág 109 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No debe computarse, para el otorgamiento de pensiones militares los servicios prestados en campañas que se llevaron a cabo contra las órdenes y deseos del Gobierno Nacional.

Mercedes Torres, — pide pensión como viuda del Coronel Don Ciriaco Díaz Vélez.

Excmo. Señor:

Creo que el cómputo que ha hecho la Inspección General del tiempo de servicio del Coronel Díaz Vélez, es exacto, porque es arreglado a su foja de servicios y despachos presentados, y no consta que haya hecho jamás servicio de campaña; y no habiendo servido sino en el cuerpo de Húsares del Orden, que no salió a campaña, y en el Estado Mayor, no era posible que lo hiciera.

La Contaduría y el Sr. Procurador del Tesoro han supuesto, sin embargo, que hizo algún servicio de campaña, porque en la cédula de retiro se dice que había quedado inútil a consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra. Pero no se han fijado en que la batalla del Tala, en que fué gravemente herido, en 1827, según consta del certificado de f. 4, que es verdadero, no fué dada en servicio nacional, sino contra las órdenes y los deseos del Gobierno.

En aquella época, el Presidente de la República, hallándose en guerra con el Brasil, había mandado al entonces Coronel La Madrid a formar en Tucumán el Regimiento de Caballería número

17 y traerlo a campaña, y este Jefe, olvidándose de su comisión, se entretuvo en hacerse nombrar Gobernador de la Provincia, y reunir fuerzas para atacar a Quiroga, que aún no se había rebelado.

Púsose, en efecto, en campaña, dando principio a la desastrosa guerra civil, y en la batalla del Tala, él y su cuñado Díaz Vélez, que lo acompañaba, quedaron por muertos en el campo de batalla.

Esta, pues, fué una campaña no ordenada por el Gobierno, y por la cual no debe contarse doble el tiempo de servicio.

Por consiguiente, creo, como la Inspección General, que la pensión que corresponde a su viuda es la cuarta parte del sueldo de Coronel. 25 de Octubre de 1870.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 28 de 1870.

Tomo 4, pág. 258 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las reclamaciones por violación de la propiedad eclesiástica que se dicen causadas por una Ley Provincial — que ordenó la redención de Capellanías y ocupación de los bienes de conventos extinguidos, — deben plantearse ante los Tribunales Nacionales, argumentando la inconstitucionalidad de la Ley y no ante los Poderes Ejecutivos, Provincial o Nacional.

Habiendo el Obispo de Cuyo ordenado el cumplimiento de un rescripto de la Santa Sede que no ha sido presentado para obtener el «pase», ha cometido el delito previsto y penado en el artículo 8.º de la Ley Penal de 14 de Septiembre de 1863, por lo que debe ordenarse al Fiscal de San Juan que lo acuse y persiga con arreglo a derecho.

El Obispo de Cuyo, pide la jurisdicción eclesiástica sobre personas y bienes pertenecientes a Capellanías y Conventos extinguidos.

Excmo. Señor:

En cuanto a la Ley de la Legislatura de San Juan que ordenó la redención de Capellanías y ocupación de los bienes pertenecientes

a Conventos extinguidos, el Provisor de aquella Diócesis, si cree que ella viola la propiedad eclesiástica, no es al Gobierno de la Provincia ni a V. E. a quien ha debido dirigirse, porque ninguno de los dos tiene facultad para derogar la Ley, sino a los Tribunales Nacionales, para que, si existe la pretendida violación de propiedad, la reparen, a pesar de la Ley Provincial, que en ese supuesto, sería inconstitucional.

Pero además, el Gobierno de San Juan denuncia el hecho de que aquel Provisor ha reunido al clero, y le ha intimado un rescripto de la Penitenciaría de Roma, en que se declara que los compradores de bienes eclesiásticos no pueden tener absolución de sus pecados, sino devuelven esos bienes. Y como tal rescripto no ha sido presentado a V. E., para obtener el pase, el Provisor ha cometido el crimen definido y penado por el artículo 8.º de la Ley Penal de 14 de Septiembre de 1863, y V. E. se halla en el deber de ordenar al Fiscal Nacional de San Juan que lo acuse y persiga con arreglo a derecho, a no ser que V. E. prefiera obtener la reparación de este agravio, teniendo una conferencia con el Señor Obispo de Cuyo que se halla accidentalmente en esta ciudad. 27 de Octubre de 1870.

Se ordenó el archivo. Junio 14 de 1872.

Tomo 2, pág. 133 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las disposiciones de los Generales de órdenes monásticas radicadas en nuestro país, cuando ellas vienen del extranjero, deben seguir el trámite legislado para las Bulas Breves y Rescriptos en el inciso 9.º del artículo 86 de la Constitución Nacional.

Fray Bernardino Orellana, solicita el pase a una patente para presidir el Capítulo Provincial Franciscano.

Excmo. Señor:

Por el inciso 9.º, art. 86 de la Constitución, el Presidente de la República concede el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma con Acuerdo de la Suprema Corte.

Aunque en este artículo no se mencionan las disposiciones de los Generales de órdenes monásticas, también residentes en Roma,

yo creo que deben también sujetarse al pase del Patrono, porque ellas son siempre tomadas con acuerdo del Santo Padre, porque proceden de una autoridad extranjera, y finalmente, porque así ha sido siempre la costumbre en el ejercicio del Patronato.

Creo por lo tanto que en este caso V. E. debe seguir el mismo procedimiento que en la presentación de Bulas Pontificias, solicitando previamente el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, con tanta mayor razón, cuanto la patente presentada viene a destruir la práctica establecida en los conventos de la República desde hace 50 años. — 10 de Noviembre de 1870.

Excmo. Señor:

El procurador General no encuentra inconveniente alguno en que Fray Bernardino Orellana presida el futuro Capítulo General de la Orden de San Francisco, con tal que todos los Conventos de la Orden, existentes en la República, estén representados en la Orden; pues no debe permitirse que alguno de ellos dependa de superiores situados en país extranjero. Con esta condición, creo que debe darse el pase a la patente del General de la Orden que se había presentado. 23 de Junio de 1874.

Se otorgó el pase a la expresada patente, en Junio 27 de 1871.

Tomo 2, pág. 157 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley de Pensiones de 1865, solo da derecho a los Oficiales de Línea del Ejército y declara que los que no revisten este carácter sólo tienen derecho a transmitirla a sus familias cuando mueran en acción de guerra en servicio nacional.

Melchora Bessabe Blasco — pide pensión como hija del Alférez Don José Blasco.

Excmo. Señor:

Por informes de los Coroneles Ruíz de los Llanos y Saravia, se sabe que Don José Blasco fué solo Oficial de milicias de Salta, y esto se confirma por el despacho que se le dió en el año 1813, en

que el Gobierno de aquella Provincia lo nombra Alférez de un escuadrón de gauchos en el que parece que sirvió.

Pero la Ley de Pensiones de 1865 sólo da derecho a los Oficiales de Línea del Ejército, declarando que los que no lo son, sólo tendrán derecho a transmitirla a sus familias cuando mueran en acción de guerra en servicio nacional.

Por consiguiente, soy de dictamen que V. E. no haga lugar a esta solicitud. — Noviembre 15 de 1870.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Noviembre 18 de 1870.

Tomo 4, pág. 261 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los documentos otorgados por las autoridades, como títulos de honor por el celo y patriotismo desplegado en las Invasiones Inglesas, no pueden invocarse como documentos de obligación ni pueden legalmente servir como prueba de un crédito, aunque en ellos se hable de entregas de dinero.

La sucesión de Don Francisco Antonio Letamendi — solicita el pago de fondos suministrados para gastos de la Reconquista.

Excmo. Señor:

1.º) Es evidente que los documentos de f. 1 y 2, no son documentos de obligación, ni pueden legalmente servir como prueba de un crédito. Ellos son literalmente certificados del celo y patriotismo que desplegó en 1806, Don Francisco Antonio Letamendi, para promover y ayudar a la Reconquista de Buenos Aires, dados uno y dos años después de los sucesos, en 1807 y 1808, como un título de honor personal y nada más.

2.º) Si las entregas de dinero de que ellos hablan, fueron realmente un préstamo, y no el resultado de las suscripciones voluntarias con que contribuyeron en aquel tiempo todos los vecinos de Buenos Aires, han debido darse al acreedor documentos de crédito en la fecha de la entrega, no por el General Liniers, que ninguna intervención tenía en el manejo de fondos, sino por el Cabildo, que era la

única autoridad existente, estando la plaza ocupada por los Ingleses. El Cabildo fué el que reunió y distribuyó los fondos, y fué el que pagó luego todos los créditos contraídos con las rentas municipales, sin intervención de la Tesorería, o de las Cajas Reales, como se las llamaba entonces.

3.º) Como los documentos presentados no son documentos de crédito, no se explica en ellos a quien se entregaron los fondos, ni a quien pertenecían, ni las condiciones de la entrega. De modo que se ignora quien es el acreedor, quien el deudor, y si es o no un crédito reembolsable.

4.º) En cuanto al acreedor, los documentos sólo dicen que la entrega se hizo en sociedad con Don Martín de Sarratea; y los herederos de este señor dicen que siendo Letamendi un dependiente de Sarratea, los fondos debían ser exclusivamente suyos, y que si hay crédito, les pertenece a ellos. Y yo digo que todas las entregas de dinero que en esa época hizo Sarratea para las necesidades públicas, las hizo de los fondos que manejaba de la Compañía de Filipinas por la parte que tenía el Rey en esta Compañía. De modo que si en este caso hubiera un acreedor, no sería el dependiente Letamendi, ni el patrón Sarratea, sino el Rey de España.

Pero no siendo documentos de obligación legal los que se han presentado, mi dictamen es que V. E. no haga lugar a la reclamación sin más investigaciones, por ser inútiles. — noviembre 26 de 1870.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución en contra de lo dictaminado. Mayo 16 de 1871.

Tomo 2, pág. 445 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — Es improcedente el pago del «Income-tax» británico sobre la renta de acciones de Ferrocarriles, suscriptas por el Gobierno Argentino.
- II — Las leyes inglesas no pueden obrar fuera de su territorio, ni afectar a capitales que no existen ni produzcan renta en Inglaterra.
- III — El hecho de que las cuentas de la Compañía se llevan en Inglaterra y que allí se declaren los dividendos, no es razón que justifique la aplicación del impuesto, por cuanto éste no se impone sobre las cuentas sino sobre la renta, que no se produce en Inglaterra, sino en la República.
- IV — La circunstancia anterior implica por otra parte, que la Cía. tiene constituido su domicilio en Londres, lo que viola el contrato de concesión que especifica expresamente que ella debe tener su domicilio constituido en la República.
- V — El que se lleven las cuentas en Inglaterra y en libras esterlinas, causa perjuicio a los accionistas argentinos, por cuanto los pesos fuertes —producto de la línea férrea— se cambian primero en libras y luego éstas nuevamente se cambian en pesos fuertes, restándose los descuentos por cambios y recambios de los dividendos que perciben los argentinos.

Compañía del Ferrocarril Central, sobre si debe pagarse el impuesto británico «Income-Tax» de la renta de las acciones a que está suscripto el Gobierno.

Excmo. Señor:

Creo que es evidentemente indebido el impuesto británico, impuesto sobre las rentas de las 16.500 acciones suscritas por el Gobierno Argentino en la Compañía del Central, para darle estímulo y hacer posible la realización de este camino.

El *Income tax* no puede ser impuesto sino sobre capitales ingleses, o capitales empleados en Inglaterra, porque las leyes inglesas, y mucho más las de impuesto, no pueden obrar fuera de su territorio, ni afectar a capitales que no existen, ni producen renta en Inglaterra.

El capital suscrito por el Gobierno y el que han entregado los accionistas argentinos, no ha salido del territorio de la República, se ha empleado en una obra construída en él, y aquí es donde produce la renta.

El Gobierno Inglés no tiene derecho alguno para establecer impuestos sobre esta renta. La razón por que se ha cometido esta ano-

malía, es que las cuentas de la Compañía se llevan en Inglaterra, y allí se declaran los dividendos. Esta razón no la justificaría en ningún caso, porque no es sobre las cuentas que se impone el derecho, sino sobre la renta efectiva que no se produce en Inglaterra, sino en la República Argentina.

Pero noto que esta razón se funda en una violación de una de las condiciones más esenciales del contrato de concesión de esta obra. Según él, la Compañía debía necesariamente tener su domicilio en la República, lo que importa decir que aquí debe estar su escritorio, aquí sus cuentas; y este es el sistema regular, tratándose de un camino de la República y recibiéndose aquí los fondos que produce. Se ha violado la condición, llevándose las cuentas en Inglaterra y en libras esterlinas, de lo que resulta otro enorme perjuicio para los accionistas argentinos; pues los productos del camino, colectados en pesos fuertes se cambian primero en libras y luego las libras se cambian en pesos fuertes, suprimiendo aquellos accionistas el descuento de cambios y recambios en los dividendos que perciben.

En esta virtud, soy de dictamen que V. E. proteste contra el pago indebido del impuesto *income-tax* y exija de la Compañía el cumplimiento del contrato, haciendo que establezca su domicilio en la República y por consiguiente, su escritorio y sus cuentas.— Noviembre 30 de 1870.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad al dictamen. Diciembre 5 de 1870.

Tomo 2, pág. 160 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El término señalado en el art. 20 de la Ley de 24 de Setiembre de 1868 —Pensiones Militares— es sólo una presunción que debe ceder ante la comprobación de que la muerte, aunque ocurrida pasado dicho término, tiene por causa las heridas sufridas en acción de guerra.

Cándida Falques pide pensión como viuda del Sargento 1.º Don Mateo Gómez.

Excmo. Señor:

Según la disposición del artículo 10 de la Ley de Pensiones Militares, los Guardias Nacionales sólo pueden transmitirlos a sus

familias cuando mueren en acción de guerra, o por consecuencia de heridas recibidas en ella, o en servicio militar ordenado. Por el art. 20 debe considerarse que han muerto a consecuencia de las heridas cuando «la muerte ocurra dentro de los primeros seis meses subsiguientes, o dentro del año, según sean las circunstancias».

Estando pues a la letra de la Ley, no tendría derecho a pensión la viuda del Sargento Gómez, porque fué herido en la acción del Boqueron en 18 de Julio de 1866, y falleció tres años después, el 16 de Agosto de 1869.

Pero considero que siguiendo en este caso estrictamente la letra, se violaría el espíritu y la intención de la Ley. En ella se establece justamente el principio de que lo mismo es quedar muerto en el campo de batalla, que morir a consecuencia de las heridas recibidas en ella. El término de seis meses o un año, que señala el artículo veinte, es sólo una presunción para considerar que la muerte ha provenido de las heridas. Pero ésta como toda presunción, debe ceder siempre a la verdad. Y así como un herido que muriera a los cuatro meses en una riña particular, o de una enfermedad extraña, no debería ser considerado como muerto en acción de guerra, así también cuando consta que la muerte ha sido ocasionada por las heridas, debe considerarse como muerto en acción de guerra aunque ella ocurra después de un año de ser herido.

Leyendo el informe del Coronel Martínez, y el certificado del médico que lo asistió, se viene en conocimiento de que el Sargento Gómez recibió una herida que no le ocasionó la muerte, y además la contusión de una metralla que le produjo un aneurisma, de la que falleció a los tres años después.

Creo por esto que atendiendo el principio de la Ley, debe reputarse como muerto en acción de guerra, y acordarse a su viuda la pensión de la mitad del sueldo de Alférez con arreglo a la Ley de premios de 28 de Septiembre de 1866. — 25 de Febrero de 1871.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con el dictamen, Febrero 25 de 1871.

Los Capitanes de Puertos o Subdelegados, tienen jurisdicción para decidir una cuestión entre partes, únicamente en los casos previstos en el art. 8 de la Ley sobre competencia de los Tribunales Nacionales.

Competencia de jurisdicción entre el Juez de Paz de Las Conchas y la Sub-delegación del Tigre.

Excmo. Señor:

Los Capitanes del Puerto, o los Subdelegados, que tienen sus mismas facultades, en sus distritos respectivos, no son otra cosa que Jefes de Policía del Puerto, y no tienen más jurisdicción que la que expresamente les ha conferido la Ley, a saber: levantar sumarios en caso de un crimen cometido en el Puerto, y decidir en las cuestiones que se susciten entre los tripulantes de un buque, cuya importancia no pase de \$ 60, según lo previene el artículo 8.º de la Ley sobre competencia de los Tribunales Nacionales. Fuera de estos casos, no tienen jurisdicción para decidir ninguna cuestión entre partes, porque no son Jueces. Si la cuestión que ha suscitado este conflicto fuera una cuestión marítima, el único Juez competente sería el Juez de Sección. Pero se trata de una canoa que un vecino llevó desde la playa a su casa, la deshizo y se aprovechó de sus tablas. Es un simple robo, cuyas acciones civiles, por su poca importancia, caen bajo la jurisdicción del Juez de Paz. Mi dictamen es, pues, que se ordene al Subdelegado de Las Conchas, se abstenga de conocer en este asunto, y no haga embarazos al ejercicio de la Justicia, y que se dé parte de ello al Gobierno de la Provincia. — 27 de Febrero de 1871.

Departamento de Guerra y Marina. Se adopta como resolución lo dictaminado. Marzo 8 de 1871.

Tomo 2, pág. 231 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Todo privilegio en las cláusulas de una concesión debe interpretarse estrictamente y con relación a sus términos, por cuanto constituyen siempre excepciones al principio general de la libertad de trabajo.

Lorenzo M. Torres y Cía. piden permiso para establecer un telégrafo de la Ensenada a Montevideo.

Excmo. Señor:

Si V. E. cree conveniente el establecimiento de la nueva línea telegráfica que se propone, no será un obstáculo para ello el privi-

legio exclusivo concedido a la línea actual entre las ciudades de Montevideo y Buenos Aires.

Todo privilegio debe limitarse estrictamente a las palabras de la concesión; ellas no deben ser ampliadas sino restringidas en su interpretación; porque son una excepción a la libertad, que es el principio general, y hay una regla de derecho que dice que las cosas odiosas no pueden ser ampliadas.

Un Telégrafo de Montevideo a la Ensenada no es un Telégrafo a Buenos Aires y con tal que V. E. declare que los proponentes no podrán poner una Oficina en esta ciudad, puede con pleno derecho hacer la concesión que se pide.— Abril 22 de 1871.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con el dictamen. Abril 29 de 1872.

Tomó 2, pág. 234 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El Presidente de la República no tiene facultades para intervenir en asuntos judiciales ni interrumpir el ejercicio de la jurisdicción de los jueces.

El Obispo de Cuyo se queja de los procederes del Juez Nacional sobre encarcelación del Provisor por defraudación de la Renta Nacional.

Excmo. Señor:

Entiendo que el Presidente de la República no debe intervenir en este asunto, porque la Constitución le prohíbe ejercer su autoridad en asuntos judiciales, o interrumpir el ejercicio de la jurisdicción de los jueces.

Teniendo el Provisor acusado plena libertad de defensa, nadie le impedirá ocurrir a la Corte Suprema, si se cree agraviado por los procederes del Juez; y según dice el Obispo de Cuyo, él ha ocurrido ya a este Tribunal, que es el único competente, sosteniendo que es el único Juez de sus canónigos.

Espere pues, la resolución del Tribunal Superior que no dudo ha de ser conforme a la razón y a nuestras leyes. Prescindo de mani-

festar a V. E. mi juicio sobre el fondo del negocio, porque no es esta la oportunidad de decirlo, y porque no debo anticipar mi dictamen en un asunto en que debo intervenir ante la Corte Suprema. — 28 de Junio de 1871.

Departamento de Culto. Se adopta como resolución lo dictaminado. Julio 29 de 1871.

Tomo 2, pág. 186 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Puede autorizarse el aumento de capital de una Compañía concesionaria del Estado, siempre que ello no implique un aumento en las tarifas que se fijaron en proporción al capital original.

La Empresa Muelle y Ramal de San Fernando (Buenos Aires)
pide se le permita aumentar el capital.

Excmo. Señor:

El principio legal es que todo individuo o compañía tiene entera libertad para emplear en una obra o empresa el capital que considere suficiente, o aumentar el que antes había determinado según sus cálculos.

El artículo 2.º de la Ley de 20 de Julio de 1863, que dice: «el capital de la Compañía no excederá de un millón quinientos mil pesos fuertes», no puede ser una limitación de este derecho que es esencial e inherente al individuo. Lo que a mi juicio significa, es que el empresario Hopkins había creído que 1.500.000 pfts., era lo que bastaba para sus obras, o tal vez una precaución para que no se gravara al público con tarifas que excedieran del 18 % de aquella suma, como se establece en el artículo 3.º, pero de ningún modo que estaba prohibido aumentar el capital, si la suma calculada no alcanzaba para concluir las obras.

Si como lo expresa el Director Armstrong, aunque el capital aumente las tarifas no excederán de un 18 % sobre 1.500.000 pfts., yo creo que no se contraviene a la Ley permitiendo que el capital anteriormente calculado se aumente hasta la cantidad que la Compañía creyese necesario para concluir las obras; y que el

Gobierno puede hacer una declaración en este sentido.— Septiembre 14 de 1871.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Septiembre 18 de 1874.

Tomo 2, pág. 217 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La exoneración de derechos a la importación, concedida en una oportunidad es susceptible de volver a otorgarse para nuevos artículos destinados al mismo fin.

La Compañía de Gas Argentino .—sobre exoneración de derechos.

Excmo. Señor:

En 25 de Febrero de 1868, se concedió a la Empresa del Gas Argentino, representada por Don Juan J. Méndez, la libre introducción de las máquinas y útiles necesarios. En 18 de Enero de 1869, se repitió esta misma concesión a la misma Empresa, representada por Don Bernardo Larroudé.

Ahora, el Señor Balbin pide que se aplique esta concesión ya hecha a las máquinas y útiles que espera la Empresa de Europa para completar su establecimiento, que, según dice, no ha estado hasta ahora, sino en la condición de ensayo. No veo que haya razón para negar a las máquinas que se esperan, la concesión concedida a todas las de la Empresa; y creo, por consiguiente, que deben introducirse libres de derechos. — 28 de Setiembre de 1871.

Departamento de Hacienda. Resolución mandando estarse a lo resuelto con fecha 28 de Julio. Octubre 6 de 1871.

Tomo 4, pág. 282 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — No corresponde al Gobierno Nacional, que ha hecho una concesión gratuita para la construcción de una vía férrea, reconocer el precio de la transferencia que posteriormente se hace de la concesión, a los efectos de la garantía que ha otorgado a la Compañía o para el caso de una expropiación.
- II — Corresponde que se imponga como condiciones expresas, antes de aprobarse la transferencia de una concesión, que el Directorio de la nueva Compañía concesionaria resida en la República, que aquí se lleve la contabilidad en moneda argentina, y que la distribución de dividendos también se opere en el país.

El apoderado de la Compañía del Ferrocarril Argentino del Este pide la aprobación del contrato de transferencia otorgado por el Señor Montravel.

Excmo. Señor:

Tengo que hacer las siguientes observaciones sobre las transferencia que Don Pablo de Montravel ha hecho en favor de una Compañía formada en Londres, de la concesión gratuita que le hizo el Gobierno para la construcción de un camino de fierro de la Concordia a Mercedes.

1.º Montravel vende la concesión por 8.000 libras esterlinas en dinero y 28.000 en acciones de la Compañía, que hacen un total de 36.000 libras esterlinas. Esta erogación debe hacerse del capital de la Compañía, y figurará en sus cuentas como parte del costo del camino. Pero el Gobierno que ha hecho la concesión gratuita, no puede cargarse con precio alguno por esa concesión; y por consiguiente no debe reconocer ese gasto, sea para los efectos de la garantía ofrecida, sea para el caso de una expropiación del camino, si llega a tener lugar.

2.º La transferencia altera considerablemente los términos de la concesión. Ella fué hecha a una persona residente en la República y domiciliada en Buenos Aires. Hoy la empresaria es una Compañía anónima formada en Londres, que constituirá un Directorio muy dispendioso en Inglaterra, que llevará allí la contabilidad en libras esterlinas, y aun tendrá que pagar al Gobierno Británico el impuesto sobre la renta (income tax) por los productos de un camino situado en la República Argentina. De estos resultados inevitables resultarán cuestiones y disgustos análogos a los que hoy tiene el Gobierno con la Compañía del Central Argentino. Los sueldos conside-

rables que se asignan los Directores, que nada dirigen, porque es imposible vigilar la administración a dos mil leguas de distancia, el indebido impuesto que se paga al Gobierno Británico, y los descuentos en la remisión y cambio de moneda, absorben una gran parte de los productos del camino, que el Gobierno tendría que subsanar con la garantía, fuera de que esta situación haría intolerable la condición de los argentinos que quisieran tomar acciones de la Empresa.

Cuando se estableció la Compañía del Central Argentino, el Gobierno creyó evitar los inconvenientes, exigiendo que la Compañía se domiciliase en la República, porque justamente creía que esto importaba que seis Directores habían de permanecer aquí, y aquí debían llevar la contabilidad y dirección del camino. Pero se ha visto que los ingleses no lo entienden del mismo modo, y todo lo que han hecho es nombrar un agente que los represente en Buenos Aires. Será pues necesario hablar con claridad, y antes que se perfeccione la transferencia hecha por Montravel, tomar las precauciones necesarias para proteger los derechos fiscales y la buena administración del camino proyectado.

En este concepto, soy de dictamen que V. E. al aprobar la transferencia que se propone, imponga como condiciones expresas que el Gobierno, ni para la garantía, ni para el caso de expropiación, reconocerá el precio en que ha sido vendida la concesión, ni otro alguno por el mismo motivo; que el Directorio de la Compañía deberá residir en la República; y aquí mismo deberá llevarse la contabilidad en moneda del país, y distribuirse los dividendos. — Noviembre 4 de 1871.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado en Noviembre 10 de 1871 y Noviembre 30 de 1871.

Tomo 2, pág. 219 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No es obligatorio para la Aduana, que ha recibido en depósito mercaderías fungibles, devolver exactamente las mismas cuando se pide su despacho, ya que por naturaleza, éstas pueden ser cambiadas por otras de igual clase, especie y cantidad.

La Aduana pide fondos para completar un pago a don Tomás Marcenaro.

Excmo. Señor:

No creo que el Guarda - Almacén Martínez tenga responsabilidad alguna por el desfaldo de 387 pesos que ha sufrido la Aduana en este caso.

El origen de este desfalco, es haberse dejado subsistir en la Tarifa el aforo de cinco pesos fuertes por arroba de yerba paraguaya, cuando en el mercado apenas puede obtenerse ese precio en el artículo despachado, lo que importa decir, que el precio de tarifa es un patacón y medio más elevado que el verdadero, por ser éste el importe de los derechos.

En esto no tiene culpa alguna el Señor Martínez.

Por esta razón es que Marcenaro ha rehusado recibir su yerba, que existía en el almacén, empeñándose en que la Aduana se la abone al precio de tarifa, bajo el pretexto de que 71 tercios no tienen la marca con que él los manifestó, a pesar de que siete comerciantes respetables declaran que esta yerba es de idéntica calidad a la que él reconoce por suya, y en algunos tercios superior a ésta.

Otra razón del desfalco, en que tampoco tiene parte el Guarda - Almacén, es haber tenido la Administración la debilidad de acceder al pedido de Marcenaro, cuando tenía derecho de obligarlo a recibir la yerba que estaba en el almacén. Las cosas fungibles que se dan por peso y medida, como la moneda, la yerba, el aceite, etc., ne se cuentan en el derecho por individualidades sino por especies. Una deuda en dinero se paga con cualquier moneda de buena ley; una arroba de yerba o de aceite de buena calidad se paga legítimamente con otra arroba de la misma clase. Y lo que sucede en las deudas sucede también en los depósitos, porque cuando se hacen de cosas fungibles, entregadas por medida, la ley no obliga al depositario a entregar la misma cosa, sino la misma especie y calidad; y por esto llama a este contrato *depósito irregular*, semejándolo al mutuo.

Aun suponiendo, pues, lo que para mí es muy difícil, que la yerba existente en el almacén no sea la misma que depositó Marcenaro, sino una de igual calidad o superior, ha podido obligársele a recibirla, y entonces la Aduana no hubiera sufrido desfalco.

La única falta del Guarda - Almacén, es no haber anotado la diferencia de marcas.

Pero si se considera el gran recargo de trabajo que hubo en ese almacén el 10 de Marzo y las pocas horas de despacho que se permitieron, se verá que no podía exigírsele ese prolijo trabajo. Por

consiguiente, mi dictamen es que V. E. mande archivar este expediente. — Noviembre 10 de 1871.

Departamento de Hacienda. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Noviembre 13 de 1871.

Tomo 4, pág. 294 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No es responsable el Gobierno Nacional, por las reparaciones de una balsa, que al ser arrastrada por orden del Capitán de Puerto a otro destino, para impedir que fuera utilizada por el enemigo, se llenó de agua y se fué a pique, correspondiendo al Gobierno, el pago solamente de los gastos de reflotamiento, ya que la embarcación no se encontraba en condiciones de navegabilidad, cuando la autoridad dispuso su remolque.

Mariano A. de Lamadrid cobra suma de pesos por una balsa.

Excmo. Señor:

Aunque en el expediente de Don Mariano M. de Lamadrid no hay decreto alguno de V. E. que pida mi dictamen, como él ha sido remitido por el Ministerio a mi despacho, considero que no puede ser con otro objeto, y paso a darlo.

La cuestión a resolver es: ¿cuál es la responsabilidad del Gobierno en el siniestro acaecido a la balsa del Señor Lamadrid?

Para saberse cómo acaeció el siniestro, no hay más datos en el expediente que los informes del Capitán del Puerto de Gualeguaychú. Este dice, que con el objeto de impedir que los enemigos se sirvieran de la balsa para pasar el río, entró con el vapor Guazú y lo tomó a remolque para llevarla a la Boca; pero que al moverla se llenó de agua y se fué a pique en el canal. Esto quiere decir que la balsa no se hallaba en estado de servicio.

Siendo esta la única intervención que la autoridad pública ha tenido en este negocio, es evidente que el único deber del Gobierno es sacar la balsa del fondo del río y ponerla donde estaba, cuando quiso moverla el Capitán del Puerto.

Esta operación ha sido ya practicada por el interesado, gastando en ella 450 pesos fuertes, los cuales considero justo que se abonen al

interesado, devolviéndole también una maroma que el Capitán del Puerto de Gualaguaychú dice tener en su poder, y a precio de otra que dice se perdió en el Guazú, las cuales pertenecían a la balsa.

En cuanto a la pretensión de que el Gobierno pague las reparaciones de la balsa, es evidentemente injusta, porque no ha sido la autoridad pública quien la ha descompuesto, estando ya en mal estado cuando se le tomó a remolque. — 21 de Noviembre de 1871.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Enero 17 de 1872.

Tomo 4, pág. 275 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I — Sólo los Jueces tienen competencia para imponer penas.

Los Jefes de tropa, sólo pueden imponer castigos correccionales por faltas a la disciplina.

II — Carece de facultad el Gobernador de San Luis para imponer penas por la violación al servicio militar.

El Gobierno de San Luis sobre jurisdicción en la condena de un ciudadano al servicio de las armas por infracción a la Ley de Enrolamiento.

Excmo. Señor:

Desde que la Constitución declaró en su artículo 18 que ningún habitante de la Nación podrá ser penado sin juicio previo, fundado en Ley anterior al hecho del proceso, quedó establecido y fuera de discusión el principio de que sólo los Jueces son competentes para imponer penas, y cualquiera otra autoridad que pretenda imponerlas, comete un abuso.

Nada sería tan peligroso como el de que los Gobernadores tuvieran esta facultad, porque no teniendo el Gobierno la organización necesaria para seguir un juicio, no habría garantía alguna para que sus sentencias fueran conformes a la verdad y la justicia.

El Gobierno de San Luis pretende sin embargo que ha podido legalmente imponer a Albornoz la pena de servicio militar por cuatro años, por falta de enrolamiento en la Guardia Nacional (cuyo

cargo ha resultado ser falso,) en virtud de las facultades constitucionales que tiene como Jefe de la Guardia Nacional de su Provincia.

Pero las mayores facultades que puede pretender por este título son las que la ordenanza da a todo Jefe de Tropa, de imponer castigos correccionales por faltas ligeras de disciplina, como desorden en un cuartel, falta a la lista, o a una guardia, y otros delitos leves que no caen bajo la jurisdicción de los consejos de guerra. Las penas que se emplean para corregirlos, son meramente correccionales, como el arresto o el recargo de servicio. Pero el imponer una verdadera pena tan grave como la de cuatro años de servicio militar, nunca entra en la jurisdicción de los Jefes de Tropa.

Habiendo pues el Juez procedido en este caso con plena jurisdicción, su sentencia debe ser obedecida, y por consiguiente mi dictamen es que V. E. se sirva ordenar al Jefe de Artillería que se halla en Villa María, que dé inmediatamente de baja al soldado destinado, Francisco Albornoz. — 7 de Diciembre de 1871.

Se ignora resolución.

Tomo 2, pág. 225 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — Debe justificarse con los documentos originales, los empréstitos forzosos hechos al Gobierno durante la guerra de la Independencia, no siendo suficiente, al efecto, los certificados que se presentan de dichos documentos.
- II — El Erario Nacional no es responsable, por los empréstitos hechos a favor de una Provincia y para objetos puramente provinciales.

Juan B. Varela y José Porbeu, reclaman préstamos forzosos.

Excmo. Señor:

Encuentro que los comisionados de la deuda y el Sr. Procurador del Tesoro, han sido ligeros al apreciar los justificativos de este reclamo.

Es preciso no perder de vista que la casi totalidad de la deuda por empréstitos forzosos y auxilios dados al Ejército de la Independencia, fué pagada por el Gobierno de Buenos Aires en la consoli-

dación de la deuda en 1822, a la presentación de los documentos originales que probaban su crédito. Los únicos que quedaron impagos fueron muy pocos, que por omisión no se presentaron en el término de la Ley.

Los únicos documentos que se presentan en este reclamo, son un certificado del Tesoro de San Juan, muy defectuoso, porque no copia los asientos de sus libros, por el cual aparece que Don Juan B. Varela hizo algunos empréstitos durante la Guerra de la Independencia; pero no se presentan los documentos originales de crédito que por prevención de la Asamblea y orden del Supremo Director, se daba a todos los prestamistas para cobrar sus créditos.

Estos documentos los tenía en su poder Varela, y en 1822 los presentó a una Comisión de la deuda establecida en San Juan, según resulta de los documentos de fs. 11 a 14, la cual tomó razón de ellos.

Los comisionados han creído que éstos últimos eran documentos de crédito; pero ellos son sólo certificados de que había otros documentos originales de crédito, los cuales no se han presentado, y sin ellos no puede ser abonado este reclamo, si no se quiere abonarlo dos veces.

En cuanto al certificado del Tesorero de Córdoba, de f. 18, y la liquidación de f. 16, ellos sólo prueban entregas hechas en aquella Tesorería en los años de 1821 a 1831, sin expresarse la razón de la entrega. Si ellos fueron empréstitos, fueron impuestos por una autoridad provincial para objetos puramente provinciales. El Erario Nacional no es responsable de ellos, ni la Ley del Congreso de 22 de Setiembre de 1870 se refiere a esta clase de empréstitos, que deben quedar a cargo de la Provincia que los hizo.

Debo además advertir, que Don Juan Benito Varela falleció en 1825, y que por consiguiente, el Tesorero de Córdoba ha cometido una falsedad al certificar que él había entregado cantidades de dinero hasta 1831.

Mi dictamen, por consiguiente, es que el Gobierno Nacional no es responsable de los empréstitos hechos a la Provincia de Córdoba de 1821 a 1831; y en cuanto a los hechos en San Juan, durante la Guerra de la Independencia, que ellos no están justificados, como debían estarlo, por los documentos originales de crédito. Por lo cual

V. E. no debe hacer lugar a este reclamo en ninguna de sus partes.
— 8 de Enero de 1872.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Febrero 4 de 1872.

Tomo 4, pág. 284 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — Debe considerarse como una violación al Tratado de nuestro país con la República de Bolivia, los impuestos al tránsito que en Bolivia se establecieron, llamados «derecho patriótico» y de «peaje».
- II — La demora indebida en poner en ejecución el Tratado por parte del Gobierno Boliviano, no puede perjudicar a terceros, ni servir de título para eludir obligaciones internacionales y si el P. E. no cree oportuna la reclamación ante el Gobierno Boliviano, es indispensable que se niegue el libre tránsito para Bolivia.

Pascual P. Blas reclama protección oficial para gestionar del Gobierno de Bolivia, la devolución de derechos de tránsito.

Excmo. Señor:

El Tratado con la República de Bolivia no ha sido promulgado oficialmente, como debió serlo, y no está inserto en el Registro Nacional.

Siéndome necesario tenerlo a la vista en este caso, en que se trata de su cumplimiento, espero que V. E. se sirva ordenar se me pase una copia de él. — Enero 22 de 1872.

Excmo. Señor:

Por las guías originales que se han presentado, consta que en Marzo de 1870 don Pascual Blas, introdujo a Bolivia, desde la Provincia de Salta, 44 mulas y 303 novillos, que iban destinados para el Perú, y debían sólo pasar de tránsito por Bolivia.

Según las claras estipulaciones del Tratado con esta República, que suprimió los derechos de tránsito, estos ganados debían haber pasado libres de todo impuesto; pero en la Aduana de Estarca, los empleados cobraron al Sr. Blas 517,68 pesos fuertes por un impuesto llamado *derecho patriótico* y 259 pesos fuertes por otro impuesto llamado de *peaje*.

En esto hubo una evidente violación del Tratado; porque los impuestos se cobraron el 16 de Marzo de 1870, un año después de haber sido ratificado y promulgado en Bolivia aquel documento.

V. E. ordenó al Cónsul Argentino en Bolivia, que hiciera las reclamaciones debidas, lo que sin duda debía haber hecho sin esperar esta incitación; pero el Cónsul no cumplió con su deber, y se contentó con comunicar el decreto del Gobierno Boliviano de 23 de Setiembre de 1861, por el cual aprobó y sostuvo la conducta de sus empleados en este negocio.

Las razones en que este decreto se funda, son bien extrañas. Dice que no se ha faltado a las estipulaciones del Tratado en haber cobrado, como se debía cobrar el derecho de peaje, que desde tiempo inmemorial pagan en las fronteras de Bolivia los ganados argentinos, *cualquiera que sea su destino*. Pero es precisamente el mal que causa a ambos pueblos la antigüedad de este injusto derecho que se paga por mercaderías que no se consumen en Bolivia, lo que indujo a suprimirlo en el Tratado, y sea o no antiguo, el hecho es que se ha estipulado su supresión para todos los efectos que sólo pasan de tránsito.

Dice también el decreto que, *aunque ese derecho no hubiera existido antes del Tratado, el Gobierno Boliviano estaba en su derecho, por el tenor del artículo 11, para establecer el de peaje*. Lo que dice ese artículo, es, que todos los efectos que vayan de tránsito, serán libres de derechos y no pagarán sino los pequeños derechos de peaje que puedan establecerse. Es evidente que aquí el Tratado ha querido referirse a los pequeños impuestos que se cobran por el paso de un puente, de un canal o de una calzada, que es lo que comúnmente se entiende por peaje. Pero el impuesto que con este nombre se cobra en Bolivia, ni es pequeño, ni tiene ninguna de las circunstancias que justifican un peaje. Es simplemente el derecho de introducción que se cobra en la Aduana a todas las mercaderías que van a entrar al territorio, sin haber pasado ningún puente ni calzada. Si se hubiera querido exceptuar este impuesto de la disposición general, como lo entiende el Gobierno de Bolivia, entonces la excepción anularía la regla; y el artículo del Tratado sólo sería una burla indigna de la seriedad del documento.

Dice también el decreto que se ha hecho bien en exigir al Sr. Blas el pago del derecho patriótico, por haberse cobrado seis meses antes de haberse abolido para los ganados de tránsito al Perú.

Parece, en efecto, que el Gobierno Boliviano no mandó suspender los derechos de tránsito desde la ratificación del Tratado, sino un año después. Pero esta demora indebida no debe en ningún caso perjudicar a un tercero, ni servir de título para eludir obligaciones internacionales. Los argentinos tenían, desde la ratificación del Tratado, el derecho de transitar con sus mercaderías libres de impuestos; y este derecho perfecto no puede ser destruido, porque el Gobierno Boliviano haya olvidado dar a sus subalternos las órdenes convenientes.

Por consiguiente las razones dadas por el Gobierno Boliviano en su decreto de 23 de setiembre último, no pueden servir de pretexto a la flagrante violación del Tratado que se ha hecho, en el caso del Sr. Blas y en otros muchos idénticos, según lo comunica el Cónsul.

Si V. E., después de la manifestación del Gobierno Boliviano, no cree oportuno abrir una negociación para reparar los perjuicios causados a ciudadanos argentinos, y dar al Tratado su verdadera inteligencia, es indispensable que en la República se niegue el libre tránsito para Bolivia, hasta que esas injurias se reparen.

En esto perderán sin duda, ambos pueblos el único objeto útil que tenía aquel Tratado, pero si Bolivia nos niega el libre tránsito, nosotros no podemos concedérselo. Tal es mi opinión, salvo el juicio de V. E. — Julio 22 de 1872.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Julio 22 de 1872.

Tomo 4, Pág. 291 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — Corresponde que se acuerde el «pase» a una Bula que instituye Obispo «in partibus infidelium», por cuanto dicha designación no afecta a los derechos del Gobierno Argentino, ya que sólo constituye un título de honor y no confiere jurisdicción alguna en la República.
- II — La Bula autoriza al Obispo para que siga desempeñando la Canonjía Magistral que ocupa en la Catedral de Salta, sin que por ello su nombramiento de Obispo se considere vacante, lo que tampoco es obstáculo para el otorgamiento del «pase».

El Presbítero Don Miguel Moisés Aráoz, solicita se le reconozca Obispo de Berissa.

Excmo. Señor:

La Bula que se ha presentado, sólo contiene el nombramiento del Presbítero Argentino Don Miguel Moisés Aráoz para la dignidad de Obispo de Berissa *in partibus infidelium*, lo que no le da jurisdicción ni preeminencia alguna en la República, sino simplemente un título de honor, finalizando la Bula con el permiso concedido al Sr. Aráoz para que pueda seguir desempeñando la Canonjía Magistral que hoy desempeña en la Catedral de Salta, sin que por ello su nombramiento de Obispo se considere vacante.

Nada de esto puede ofender los derechos del Gobierno Argentino ni los intereses de la Nación; por consiguiente, no hay inconveniente para que se conceda el *pase* a la Bula presentada.— Abril 5 de 1872.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Abril 11 de 1872.

Tomo 4, pág. 301 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No puede considerarse al Cuerpo de «Decididos» que tomó parte en la batalla de Salta, como integrante del ejército de línea, sino como cuerpo de «milicias», razón por la cual sus componentes no pueden acogerse a los beneficios de la Ley de Pensiones Militares.

Josefa Fresco de Chaves, pide pensión como viuda del Teniente Coronel Don José Manuel Chaves.

Excmo. Señor:

El Cuerpo de *Decididos* que formó el General Belgrano y de que según todos los informes hizo parte Don José Manuel Chaves,

no era un cuerpo de línea, sino de milicias, que sólo accidentalmente se reunía al Ejército.

Por esto es que no hay en el archivo toma de razón de los despachos de sus oficiales, ni listas de revista sobre los papeles de la Comisaría del Ejército, según informa el Archivero General. Por esto es que el Sr. Coronel Ruíz de los Llanos, informa que en la Batalla de Salta, Chaves no pertenecía al Ejército, aunque se halló en ella; y por eso es también que en esa Batalla pudo Chaves separarse sólo de la línea a insultar al enemigo, y adelantar cuatro cuardras hasta que lo hicieron prisionero, disparate que ningún soldado de línea hubiera podido cometer.

El Señor Coronel Uriburu dice con mucha verdad, que el Cuerpo de *Decididos* era compuesto de jóvenes de las primeras familias de Salta y Jujuy, y que por esta razón el General los hizo a todos Capitanes, en cuya clase fué reconocido Chaves. Este era pues un grado de honor, que no le impedía ser soldado del cuerpo. El grado de Teniente Coronel que obtuvo después de 1822, no fué dado por autoridad Nacional sino por el Gobernador de Salta, Latorre, lo que significa que era Jefe de Guardias Nacionales y no de línea. Y como la Ley de Pensiones sólo comprende a los Jefes y Oficiales del Ejército de Línea, que están obligados a un servicio continuo, es evidente que el Gobierno no está autorizado por esa Ley para conceder la pensión que se pide. Pero también es cierto que los jóvenes de Salta prestaron al país servicios muy importantes bajo las órdenes de Güemes y Gorriti desde 1819 a 1825, y esto podría dar lugar a que el Congreso concediera a la Señora viuda de Chaves un socorro o una pensión graciable, cosa que no entra en las facultades del Poder Ejecutivo.

Por estas razones, soy de dictamen que V. E. no haga lugar a este reclamo.— 29 de Abril de 1872.

En Mayo 3 de 1872, se adoptó como resolución el dictamen.

Tomo 2, pág. 158 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I — Debe el Poder Ejecutivo solicitar del Congreso la reforma de los arts. 404, 405 y 406 de las Ordenanzas de Aduana que autorizan a los particulares interesados, a llevar personalmente los permisos de despacho de la Oficina de Registros a la Alcaldía y de ésta al Guarda-Almacén y hasta tanto ello no ocurra, disponer que la conducción de los despachos se lleve a cabo únicamente por empleados de la repartición, en virtud de haber aparecido permisos falsos con los cuales se han sustraído mercaderías, que permiten suponer, han sido fraguados al amparo de la autorización que contienen los artículos citados. Por análogas razones debe pedirse también la reforma del art. 126 y disponer que se haga constar en los libros del almacén el nombre de la persona a quien se entregan los efectos y de quien solicita el permiso.
- II — La mala disposición de las Ordenanzas de Aduana, libera al Guarda - Almacén de responsabilidad por los efectos sustraídos, cuando el hurto tiene lugar como consecuencia de las disposiciones defectuosas.

R. y J. Carlisle y Diego C. Thompson y Cía., piden el pago de mercaderías perdidas en la Aduana.

Excmo. Señor:

Lo que descubre este expediente son graves defectos en la transmisión de los permisos de Aduana, que deben ser inmediatamente corregidos.

Parece indudable que los permisos con que se han extraído de los almacenes estos efectos, eran falsificados; porque no existen en el Archivo las copias que debían haber si la Aduana los hubiese despachado, y porque, según los apuntes de los Guarda-Almacén, ellos estaban a favor de Don Francisco de la Serra y Don Angel Méndez, no siendo ninguno de ellos dueño de los efectos perdidos, error en que la Aduana no podía haber caído.

¿Pero cómo ha podido presentarse a un Guarda-Almacén un permiso falsificado? Esto sólo puede suceder siendo el interesado el conductor del permiso. Si esta práctica se tolera, pueden cometerse todos los días mil robos, sin que los empleados puedan descubrirlos o impedirlos.

Bastaría que un cualquiera falsificara el despacho de la Oficina de Registros en un permiso de réembarco, y se presentara con él al Guarda-Almacén, para que éste le entregara los efectos contenidos en él, pues el Guarda-Almacén no tiene los medios de saber si el que presente el permiso es o no el dueño de los efectos.

Esta práctica absurda, está autorizada por los artículos 404, 405 y 406 de las Ordenanzas, siendo, según ellos, el interesado el que debe llevar los permisos de la Oficina de Registros a la Alcaldía, y de ésta al Guarda-Almacén.

De este modo ha sido muy fácil en los dos casos a que se contrae este expediente, que se hayan sacado efectos de los almacenes con permisos falsificados, sin que el Guarda-Almacén haya podido conocerlo o impedirlo.

No, señor, los permisos deben ser llevados a la Alcaldía por un empleado, y por un empleado transmitidos a los Guarda-Almacenes. De este modo se evita todo riesgo de falsificación, y yo pido que V. E. se sirva ordenar que así se haga, mientras pueda solicitar del Congreso la reforma de esos artículos y del 126, que contiene una disposición análoga en el despacho directo.

Además, los dos Guarda-Almacén sólo pueden declarar el nombre de los que firmaban los permisos, no acordándose ninguno de ellos de la persona a quien entregaron los efectos. Sin embargo es indispensable que en los libros del almacén conste a quien se entregan los efectos, además del nombre del que solicita el permiso; y es preciso que V. E. ordene expresamente que se haga esta anotación.

Me parece completamente inútil pasar este expediente al Juez, porque no hay en él el menor indicio que pueda conducir al descubrimiento del ladrón. Y me parece también muy injusto hacer abonar al Guarda-Almacén, Don Manuel J. Martínez, el valor de los efectos robados. No es él el que tiene la culpa del robo, sino la mala disposición de la Ordenanza, a que él ha debido conformarse.

Tanto él como el Guarda-Almacén Arce, después de entregar los efectos, llevaron los permisos a la Mesa de Anotaciones, y los dejaron sobre la mesa, porque no había empleado que los recibiera (falta notabilísima que el Administrador debe remediar inmediatamente). Ambos permisos han sido robados, porque no aparecen, el uno después de anotado y el otro antes de anotarse. Esta diferencia no puede hacer inocente a Arce y culpable a Martínez.

Por consiguiente, mi dictamen es que V. E. mande pagar a sus dueños el valor de los efectos robados, sin cargo a ninguno de los dos Guarda-Almacén; y que se sirva hacer al Administrador de Rentas las prevenciones arriba expuestas, para que no se repitan sucesos de esta especie. —29 de Abril de 1872.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Mayo 8 de 1872.

Tomo 4, pág. 299 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las concesiones y privilegios que se han otorgado para establecer el telégrafo entre Buenos Aires y Montevideo, no pueden ofrecer obstáculo para hacer una nueva concesión, que una telegráficamente Buenos Aires con Río de Janeiro, debiendo el Gobierno, al aceptar la propuesta de la empresa, determinar en cláusulas claras, los derechos y obligaciones que incumben a la misma.

Lamas y Cía.— solicitan permiso para establecer un telégrafo desde la embocadura del Río de la Plata a Buenos Aires.

Excmo. Señor:

La concesión que se pide es para traer un cable subfluvial telegráfico desde la estación principal situada en un punto de la costa oriental cerca de la desembocadura del Río de la Plata, hasta la costa de Buenos Aires, y de allí hasta esta ciudad por una vía terrestre. Por este medio quedaría Buenos Aires ligado directamente por el Telégrafo con Río Janeiro, sin tocar en Montevideo.

Las concesiones y privilegios que se han otorgado anteriormente para establecer el Telégrafo entre Buenos Aires y Montevideo, no pueden ofrecer obstáculo para hacer esta nueva concesión; pero es necesario que al hacerla, el Gobierno establezca claramente las condiciones que deben asegurar la comunicación directa que se propone con Río Janeiro, y las ventajas que se han reservado los Gobiernos del Brasil y del Estado Oriental, al aceptar la propuesta de esta empresa.— 24 de Mayo de 1872.

Excmo. Señor:

Los Señores Lamas y Cía. piden para sí las franquicias concedidas o que se concedieren a la línea telegráfica mas favorecida. No creo que la intención del Gobierno sea conceder a todos los beneficios que creyere justo conceder a uno. Pero la forma indeterminada en que se pide la concesión debe dar malas inteligencias y cuestiones, principalmente si hubiera de aplicarse a cosas diferentes.

Sería mucho más propio y conveniente determinar en cláusulas claras cuáles son las concesiones que se hacen a la empresa y cuáles son las obligaciones de ésta, como lo hizo el Gobierno del Brasil por su Decreto de 16 de Mayo de 1871, que fué publicado en esta Capital en el periódico «La Nación» de 7 de junio del mismo año.

Por la cláusula 2.º se establece que no se hará otra concesión para establecer cable sub-marino entre Río Janeiro y los Estados del Río de la Plata. El Gobierno no puede hacer una concesión semejante, porque ya hay un cable sub-fluvial entre Buenos Aires y Montevideo, y está concedido otro entre la Ensenada y Montevideo.

Por la cláusula 11.º se concede excepción de derechos de introducción sobre material que se necesite, debiendo la empresa presentar al principio de los trabajos, la relación de la cantidad a que debe limitarse este favor. No creo que haya inconveniente por nuestra parte en hacer igual concesión.

Otro tanto digo de lo que contiene la cláusula 12.º de poder los empresarios expropiar en la forma de la Ley los terrenos de que necesiten para sus estaciones.

Y de lo que contiene la cláusula 13.º de someter a juicio de árbitros las cuestiones que se susciten entre Gobierno y empresarios.

Mi dictamen es pues que estas concesiones y obligaciones de la empresa se redacten de común acuerdo en las cláusulas claras y precisas. — Junio 3 de 1872.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Junio 3 de 1872.

Tomo 2, pág. 235 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No debe permitir el Poder Ejecutivo que el Directorio de una Compañía de Ferrocarriles resida en el extranjero. Debe, además, exigir que la contabilidad de la misma se lleve en el país y en moneda nacional.
- II. — No tiene facultades el Poder Ejecutivo para alterar los términos de una concesión otorgada por Ley.
- III. — Los gastos hechos en el extranjero en concepto de sueldos a los Directores y Abogados, de Oficinas, o por impuestos pagados al Gobierno extranjero u otros análogos no deben recargar la garantía prestada por la Nación a los FF. CC., sino imputarse a gastos de explotación.
- IV. — Es procedente la interpretación por parte del Poder Ejecutivo, de la disposición legal referente a la intervención del Gobierno en la fijación de tarifas.

Guillermo Matti, concesionario del Ferrocarril a Campana, pide la modificación del contrato en los puntos relativos al costo y presupuesto del camino y a la intervención del Gobierno en las tarifas.

Excmo. Señor:

Antes de ocuparme de las alteraciones que Don Guillermo Matti pretende se hagan a la Ley de 10 de Octubre de 1870, que concedió la garantía del 7 por ciento al Ferrocarril que proyecta, necesito hacer a V. E. algunas observaciones.

El art. 6.º de aquella Ley dice.

Esta garantía quedará sin efecto, si el camino no se principiare en el término de un año. No tengo noticia de que este plazo se haya prorrogado por el Congreso; y habiendo corrido veinte meses sin que se haya dado principio a los trabajos, es evidente que la concesión ha caducado, y que V. E. no tiene facultad para considerar al Gobierno obligado a la garantía.

Por el art. 12 de la Ley se establece que el domicilio legal de la Compañía que se forme, debe ser en la Ciudad de Buenos Aires; lo que quiere decir que aquí debe residir su Directorio, y aquí deben llevarse las cuentas de la Compañía en moneda del país. Pero el Señor Matti dice que la Compañía se ha formado en Londres, y allí ha sido registrada, según las leyes inglesas el día 27 de Marzo. Es decir que esta Compañía sigue el mismo camino que la del Cen-

tral Argentino, que tantos disgustos y cuestiones ha ocasionado al Gobierno.

Su verdadero domicilio será en Londres, allí residirá un numeroso Directorio, que nada inspecciona ni dirige, ni puede dirigir a dos mil leguas del camino; pero sin embargo disfruta de crecidísimos sueldos, allí tendrá que pagarse al Gobierno Británico el impuesto sobre la renta, sobre los productos de un camino situado en la República Argentina; y llevándose allí mismo las cuentas, habrá que sacar de los productos del camino los gastos de remisión de fondos y cambio de moneda.

Todos estos gastos enteramente inútiles, absorben una gran parte de los productos, y recargan la garantía del Gobierno en la misma proporción.

En ningún caso debe V. E. permitir que la concesión se traspase a una Compañía que haya de proceder así, sino exigir el cumplimiento de la ley, declarando claramente que el Directorio debe residir en Buenos Aires, y aquí debe llevarse la contabilidad en moneda del país.

En cuanto a las alteraciones que solicita Matti de los términos de la concesión, no está en facultades de V. E. el concederlas, porque no puede alterar la Ley; ni las creo racionales y convenientes. El modo que establece el art. 3.º para fijar el costo del camino es el más justo y conveniente. Hoy, antes de empezar los trabajos, nadie puede fijar la suma que le costará. La designación de dos millones sería completamente arbitraria. Es verdad que el presupuesto presentado sube a 2.200.000 ps. fts., pero en él se calculan para tierras y contingencias 330.000 ps., cuya suma es muy probable que sea excesiva.

La alteración que se pide del art. 7.º sobre la intervención del Gobierno en la fijación de las tarifas, es sumamente inconveniente por las razones que da la Oficina de Ingenieros, y porque una mala administración del camino, es muy capaz de mantener tarifas altas, aun contra el interés de la Empresa, como sucede en el camino del Norte y en el Central.

Tales son mis ideas en este asunto, y V. E. tomará la resolución que crea más justa. — Junio 20 de 1872.

Excmo. Señor:

Si es cierto, como dice el Señor Matti que el contrato y escritura de concesión se extendió el 12 de Octubre de 1871, es evidente

que el plazo de un año para empezar los trabajos debe contarse desde esta fecha, y no desde la fecha de la Ley, como yo lo había entendido, ignorando esta circunstancia. De consiguiente la concesión no ha caducado aún.

Sobre los demás puntos a que se contrae mi dictamen de 20 de Junio, debo también hacer las rectificaciones siguientes:

Siempre he creído que el único modo de que estas Compañías tengan su domicilio en la República, es exigir que resida aquí su Directorio y su Oficina principal de contabilidad. Creo también que esta es una condición necesaria para la buena administración del camino; porque es evidente que un Directorio situado a dos mil leguas de distancia no puede dirigirla, ni remediar los abusos que cometan sus agentes.

El Señor Matti no desconoce mis razones; pero alega que en el camino del Este se concedió al Señor Montravel, que constituyera el domicilio de la Sociedad haciendo residir aquí uno o dos Directores, con quienes se entendería el Gobierno, y pide para él la misma concesión.

He visto en efecto en la Memoria del Ministerio del Interior de este año, publicado este Decreto.

Pero si V. E. cree necesario seguir este precedente y hacer al Señor Matti la misma concesión, al menos es necesario declarar desde luego que todos los gastos inútiles que se hagan en Londres, sea por sueldos a los Directores y Abogados, por gastos de Oficina o por impuestos pagados al Gobierno Británico, no deben recargar la garantía, sino imputarse a gastos de explotación: en una palabra, que deducido del producto bruto el 50 o/o que acuerda la Ley para esos gastos, el resto sea considerado para los efectos de la garantía como el producto líquido, sin recargo ni deducido de ninguna especie.

En cuanto a fijar desde luego el costo del camino en 2.000.000 de pesos, no me creo competente para juzgar de su justicia. Pero V. E. atendiendo al informe que ha dado la Oficina de Ingenieros, y a las razones que da el Señor Matti, podrá juzgar mejor de su conveniencia.

En cuanto a la intervención del Gobierno en la fijación de las tarifas, V. E. no puede prescindir de ella, porque el artículo 7.º de la Ley de 10 de Octubre de 1870 la prescribe expresamente.

En todo camino garantido, es indispensable esta intervención.

no para impedir, como lo teme el Señor Matti, que la empresa gane, sino principalmente para precaverse que una mala administración no rebaje los productos del camino, de modo que tenga el Gobierno que pagar crecidas sumas por la garantía.

Puede suceder en efecto, que la Empresa, con la idea de estimular el tráfico, ponga tarifas tan bajas, que el camino nada produzca; o puede por el contrario ponerlas tan altas que retraiga el tráfico natural, dando el mismo resultado. El Gobierno debe tener un medio de defenderse contra estos errores, que no pueden ser corregidos por un Directorio situado a dos mil leguas, y que nada sabe del modo como se administra el camino. Si V. E. cree que es conveniente hacer una interpretación al precepto de la Ley, podría declarar que el Gobierno intervendrá en la fijación de las tarifas sólo cuando los productos del camino no alcancen al 7 o/o, o cuando estos pasen de 15 o/o. De este modo quedarían garantidos los intereses públicos, sin perjudicar en nada las ganancias que esperan los empresarios. — Agosto 9 de 1872.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Septiembre 14 de 1874.

Tomo 2, pág. 238 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que los propietarios particulares costeen la construcción de alcantarillas en las vías férreas, para el paso de las acequias que riegan sus propiedades privadas.

La Oficina de Ingenieros — da cuenta que varios propietarios quieren abrir acequias atravesando la línea férrea de Río IV. y consulta quien debe costear las alcantarillas, que deben construirse.

Excmo. Señor:

El punto de derecho que motiva esta consulta, es sumamente sencillo. Si algunos propietarios quieren construir acequias para regar sus terrenos particulares, deben necesariamente hacerlo por su cuenta, y con sus fondos, y si pretenden atravesar con las acequias el camino de fierro, es indispensable que ellos costeen las alcantarillas, sin las cuales no puede una corriente de agua atravesar el terraplén de un ferrocarril. Siendo esta obra en provecho exclu-

sivo de los particulares, ellos deben costearlas, sin que el Gobierno deba tener otra intervención que la necesaria para que las alcantarillas se hagan con la debida solidez.

El Ingeniero que consulta, piensa que puede haber alguna variación, en este caso, por la circunstancia de no estar expropiados los terrenos. Creo que en esto se equivoca. Si los terraplenes están contruídos, el terreno en que está hecho el camino no puede ya pertenecer a sus dueños; la expropiación está hecha y consumada. Puede ser que aun no se haya pagado el precio, pero la expropiación está hecha, y el terreno es del camino.

Esta circunstancia en nada varía los términos de la cuestión. Nadie puede por su interés particular atravesar un ferro-carril con una corriente de agua sin hacer a su costa las obras necesarias para que el camino no se destruya; y de acuerdo con este principio, debe resolverse la presente consulta.

En cuanto al abuso que se denuncia, cometido por las Mensajerías que cobran fletes indebidos, este punto está resuelto por el art. 18 del Reglamento de 4 de Noviembre de 1863, donde se arreglan la tarifa de pasajes a las leguas que anden. Si las Mensajerías han cobrado de más, los individuos perjudicados han debido hacerse devolver el exceso por los Tribunales competentes. Este es un pleito entre particulares, en que el Gobierno no tiene necesidad de mezclarse.

Tal es mi opinión, salvo el juicio de V. E. — Julio 6 de 1872.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con el dictamen. Julio 8 de 1872.

Tomo 2, pág. 250 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los Capitanes de Puerto carecen de facultades —salvo autorización especial— para otorgar la posesión de las Islas del Paraná. El Presidente de la República es quien debe conceder la posesión, dándola a verdaderos cultivadores y evitando la especulación y el agio sobre dichas islas.

La Capitanía del Puerto de Buenos Aires — avisa que la del Rosario ha concedido permiso para poblar la isla «Boca del Paracito».

Excmo. Señor:

El Congreso no ha fijado todavía las bases de administración de las Islas del Paraná, las cuales son todas susceptibles de cultivo,

y de un terreno muy fértil. El Gobierno está pues en el caso, como Administrador de los bienes públicos, de fijar las condiciones con que ha de conceder la posesión de estas Islas, consultando el que ellas sean ocupadas por los verdaderos cultivadores, y no sean un objeto de especulación y de agio, pero en todo caso, es el Presidente de la República el que debe conceder la posesión, y no los Capitanes de Puerto, a no ser por una delegación especial del Gobierno. — 16 de Julio de 1872.

Tomo 2, pág. 224 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde aconsejar al Poder Ejecutivo, que apruebe la transacción hecha en un juicio de expropiación, considerando que las costas del mismo pueden llegar a ser superiores al precio objeto del litigio, aunque se tenga la seguridad de obtener sentencia favorable.

El Comisionado Nacional para la expropiación de tierras en Córdoba - pide la aprobación de un convenio sobre compra de un terreno para el Ferro Carril Central Argentino.

Excmo. Señor:

La Ley de expropiación ordena muy justamente que el precio de los terrenos expropiados sea el que tenían antes de construirse el Ferro-carril. Así es que la tasación que se hizo de este terreno a tres reales la vara cuadrada, la considero justa y aun liberal; porque el terreno de Don Orosimbo Rueda, que está contiguo, fué tasado antes del Ferro-carril en dos reales la vara. El Comisionado del Gobierno ha concedido pagar seis reales por la vara, tomando por norma una sentencia de la Corte en el caso de Rueda, sentencia injustísima, porque no sólo triplicó el precio justo del terreno; sino que abonó a Rueda una gran cantidad por movimiento de tierra que había hecho para darle forma, pagándolo así dos veces; y le abonó otra gran cantidad por supuestos perjuicios que dijo Rueda le causaba el haberle puesto la Estación principal al lado del terreno que le quedaba.

Una tal sentencia no debía haber servido de norma, sin embargo, la experiencia que tengo en estos reclamos en que siempre se sacrifica al Fisco, y la consideración de que las costas de un pleito valdrían más que el precio de este terreno, aunque se obtuviera justicia, me deciden a aconsejar a V. E. que apruebe la transacción hecha por seis reales la vara cuadrada. — Julio 27 de 1872.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con el dictamen. Agosto 7 de 1872.

Tomo 2, pág. 252 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Para que los integrantes de los Ejércitos de Línea puedan acogerse a los beneficios de la Ley de Pensiones Militares, no es necesario probar que han combatido directamente contra los españoles. La Ley comprende en términos generales a todos los que sirvian a la causa de la Independencia, sin hacer distinción alguna acerca de los servicios a que eran destinados.

La viuda del General Don Indalecio Chenaut — pide que su esposo sea inscripto entre los guerreros de la Independencia.

Excmo. Señor:

No me parece justa la doctrina que ha pretendido establecer el Señor Procurador del Tesoro, de que para pretender el premio de la Ley, deben probar los Jefes y Oficiales de la época de la Independencia, que han combatido inmediatamente contra los ejércitos españoles en Montevideo, en Chile o en el Alto o Bajo Perú. La designación que hace la Ley de 24 de setiembre de 1868, es ésta: *Los Jefes, Oficiales y soldados que hayan formado parte de los ejércitos de mar y tierra de la Nación en la guerra de la Independencia terminada en 9 de Diciembre de 1824*, sin hacer distinción alguna de los servicios a que eran destinados, con mucha razón, porque todos servían a la causa de la Independencia, cualquiera que fuese

el lugar que ocupaban. Las tropas que entonces estaban en Buenos Aires defendían estas poblaciones contra las empresas de los marinos de Montevideo, y después estaban esperando la expedición española que se organizaba en Cádiz para venir a estas playas. Sin combatir con los españoles todos los servicios que prestaban se dirigían a hacer triunfar la Independencia.

Véase la foja de servicios del General Chenaut. Su primera campaña en Enero de 1820, fué a sujetar la sublevación de un batallón del ejército de San Martín que se había amotinado en San Juan por instigaciones de sus Sargentos, la cual fué vencida y mandado el cuerpo a su destino. La segunda campaña terminó en la célebre batalla de la Punta del Médano, en que fué derrotado y hecho prisionero el caudillo Don José Miguel Carreras. Victoria tan importante a la causa de la Independencia, que sin ella el General San Martín no habría podido hacer su expedición al Perú, dejando a su espalda un enemigo tan formidable, que se aprestaba a invadir a Chile, donde tenía un partido numeroso. Así también es la única batalla de la guerra civil por la que se han dado premios y condecoraciones. En vista de estos servicios, ¿cómo puede decirse que el General Chenaut no ha servido a la causa de la Independencia? Yo creo que habiendo empezado su carrera en 1819, está incluído en la designación de la Ley de 24 de Setiembre, y que su viuda es acreedora a la pensión que designa la Ley últimamente sancionada por el Congreso. — 6 de Agosto de 1872.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con el dictamen. Octubre 12 de 1872.

Tomo 2, pág. 245 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Procede la transferencia de una concesión de una Sociedad a otra, siempre que ésta última se encuentre constituida de conformidad a los requisitos exigidos por el Código de Comercio en su parte pertinente.

Lamas y Cía. piden se apruebe el traspaso de sus derechos sobre el Telégrafo al Brasil de que son concesionarios a la Compañía Platino Brasileira.

Excmo. Señor:

No encuentro inconveniente en que el Gobierno apruebe la transferencia que los Señores Lamas y Cía. han hecho de la concesión que se les hizo por Decreto de 8 de Junio último en favor de la Compañía Anónima Platino Brasileira. Pero es entendido que esta Compañía no tendrá existencia legal en la República, hasta que no presente sus Estatutos a la aprobación del Gobierno y sean ellos registrados en el Registro de Comercio, conforme a las prescripciones del Código. — Agosto 27 de 1872.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con el dictamen. Octubre 3 de 1872.

Tomo 2, pág. 259 — Inf. de los Consej Leg. del P. E.

=====

Puede el Poder Ejecutivo autorizar la extracción de arcilla de la ribera de los ríos, sin dar ésta última en propiedad, ni conceder privilegios exclusivos, debiendo vigilar la explotación para evitar que las obras dificulten el libre tránsito fluvial.

**El Gerente de la Sociedad Anónima «Fábrica de Tejas y Baldosas»
hace denuncia de una mina de arcilla.**

Excmo. Señor:

Por la Ley Española sólo se llamaba minas y sólo eran denunciabiles los depósitos de metales o piedras preciosas.

Por el Estatuto provisorio de Hacienda de 17 de Diciembre de 1853 se repite esta disposición agregando en el art. 2.º, del Tít. 10, que no se comprende en la palabra mina las canteras, salinas, huaneras, tierras arcillosas o de tinte, etc. Estos depósitos no son denunciabiles, y pertenecen al dueño de la superficie del terreno donde existen.

Si la arcilla de que se trata en esta solicitud no está en un terreno particular sino en la ribera, entonces sería necesario que

el Señor Regunaga manifestara al Señor Capitán del Puerto del Rosario el método que se propone emplear para extraerla, a fin de que este funcionario eleve a V. E. la petición con su informe, para que se resuelva si es o no conveniente permitir estas excavaciones.

Este es mi dictamen, salvo mejor juicio de V. E.. — Setiembre 23 de 1872.

Excmo. Señor:

Resultando del anterior informe que la arcilla que se desea extraer está en la ribera del Paraná, lugar que no puede ser de propiedad particular, y que nadie tiene derecho de enajenar, porque es de uso público, no veo inconveniente en que V. E. conceda a los suplicantes la extracción de la arcilla, como un fomento a esta importante industria; pero declarando que el Puerto del Rosario entre los dos puntos que lo forman, debe quedar exceptuado de las excavaciones que se intentan, y que no pueden dejar de variar la forma de la ribera. — Noviembre 23 de 1872.

Excmo. Señor:

No encuentro inconveniente en que V. E. conceda a los solicitantes la facultad de sacar la arcilla que necesiten para su industria, pero sin darles la propiedad de ella, ni un privilegio exclusivo que el Gobierno no puede conceder.

Si V. E. así lo resuelve, sería también prudente encargar al Capitán del Puerto del Rosario que vigile que los empresarios no hagan en la ribera pozos, ni otras obras que impidan o dificulten el libre tránsito. — Enero 22 de 1873.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con el dictamen. Febrero 15 de 1873.

Los Cirujanos del Ejército no pueden considerarse como Guerreros de la Independencia a los efectos de las Leyes de Pensiones Militares, si no han sido muertos o inutilizados en acción de guerra.

Isabel Martínez pide aumento de la pensión que tiene como hija del cirujano Doctor Pedro Martínez.

Excmo. Señor:

Creo que la Señora Doña Isabel Martínez, como hija del Cirujano don Pedro Martínez, no tiene derecho a llevar su pensión al sueldo íntegro que señala la Ley de 6 de julio último para las viudas e hijas de los Guerreros de la Independencia.

El premio de esta Ley es sólo para los que derramaron su sangre por conquistar la Independencia. Pero un Cirujano no es un guerrero, y por consiguiente este caso no está comprendido en esa Ley.

Además, este beneficio es acordado a las viudas e hijas **que con arreglo a la Ley de Pensiones, tengan derecho a ellas**; y es evidente que la solicitante no se halla en este caso porque el Doctor Martínez no murió en acción de guerra, como justamente lo observa la Contaduría. Ella goza de pensión porque le fué acordada por el Gobierno de la Provincia, y la Nación ha reconocido todas las pensiones de igual origen. Pero por la Ley de Pensiones de 1865, que es a la que se refiere la de 4 de julio, ella no tendría derecho a pensión. Tal es mi dictamen, etc. — 1 de Octubre de 1872.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con el dictamen. Marzo 24 de 1873.

Tomo 2, pág. 270 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No pueden extenderse a los hijos varones, los beneficios de la Ley de 4 de Julio de 1872.

Ramón Vicente Carbajal pide se le acuerde la pensión de sueldo íntegro como hijo del Teniente Coronel Don Ramón Carbajal.

Excmo. Señor:

Por los despachos y fojas de servicios presentados, está debidamente probado que el Teniente Coronel Don Ramón Carbajal

rvió en la guerra de la Independencia, y también que el menor
on Ramón Vicente Carbajal goza de pensión como hijo legítimo
yo. Pero la Ley de 4 de julio cuyo beneficio se pretende para
reclamante dice: sólo las viudas e hijas solteras de los Guerreros,
e la Independencia, sin hacer mención alguna de los hijos varo-
es. Aunque parece injusto que sus favores no alcancen a éstos,
evidente que ellos están excluidos del sentido literal de la Ley,
que sólo una interpretación auténtica del Congreso podría exten-
er a los hijos varones el beneficio de la Ley. Por lo cual soy de
ctamen que V. E. no haga lugar a esta solicitud. — 1 de Octu-
e de 1872.

*Departamento de Guerra y Marina. Se adopta como resolución
dictaminado. Octubre 4 1872.*

Tomo 2, pág. 249 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Para gozar de los beneficios de la Ley de 4 de Julio de 1872,
es necesario tener derecho a pensión en los términos de la Ley
General de la materia.

Las hijas del Coronel don Angel M. Zerda sobre aumento de pensión

Excmo. Señor:

Cuando las hijas del Coronel Don Angel Mariano Zerda so-
licitaron la pensión de que disfrutaban, no presentaron despacho ni
ojas de servicios, ni documento alguno que justificase su causa,
arrera y grado militar. Lo único que hay en el expediente, son
arios informes de Jefes militares y ciudadanos particulares que
reditan sus servicios.

Pero de estos informes, consta que Zerda nunca fué Oficial
e línea, sino de los cuerpos de milicias de la Provincia de Salta,
londe fué ascendido hasta mandar el cuerpo de gauchos que orga-
nizó el General Güemes. Por esto es que él no tenía despachos ni
combramientos de la Autoridad Nacional.

Y como por la disposición de los artículos 8 y 10 de la Ley
de Pensiones, sólo tienen derecho a dejar pensión a sus familias,

los Jefes y Oficiales del Ejército de línea de la Nación, y los Oficiales de Guardias Nacionales que murieron en acción de guerra, en cuyo caso no se halla Zerda, es evidente que la Ley no concedía pensión a sus hijas.

Pueden haber sido muy meritorios los servicios de Zerda, como lo fueron en la época de la Independencia los de todos los jóvenes de Salta que se armaron voluntariamente para resistir al enemigo, pero la Ley no les da pensiones; y la que gozan las suplicantes, sólo debe considerarse como graciable, porque no está autorizada por la Ley.

Bien, pues, la Ley de 4 de Julio dice: Las viudas e hijas solteras de los Guerreros de la Independencia, que con arreglo a la Ley de Pensiones tengan derecho a ellas, gozan por pensión del sueldo íntegro de la clase de los causantes.

Y no teniendo, como queda dicho, las suplicantes derecho a pensión por la ley, soy de dictamen que V. E. no haga lugar a su solicitud. — Octubre 3 de 1872.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Octubre 9 de 1872.

Tomo 4, pág. 323 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La liberación de derechos que la Ley de Aduana confiere a toda clase de semilla que sólo sirva para la agricultura, procede aunque se considere a la misma artículo de comercio, cualquiera que sea la cantidad que se introduzca, por no estar estas circunstancias expresadas en la Ley, como excepciones al principio.

Rocha Hermanos — pide se despache libre de derechos una partida de semillas de alfalfa.

Excmo. Señor:

La Ley de Aduana declara libre de derechos la introducción de toda semilla que sólo sirva para la agricultura, y hallándose en este caso la semilla de alfalfa que sólo sirve para sembrar, es fuera de duda que debe ser libre de derechos, aunque ella

sea, como todas, artículo de comercio, y aunque se introduzca en grandes cantidades; porque estas circunstancias no están expresadas como excepciones en la Ley.

Si se introduce en gran cantidad, es porque hay gran demanda; porque se siembra mucho, y porque nuestros agricultores creen que es más conveniente comprar la semilla, que dejar madurar su pasto sin recogerlo. Por consiguiente soy de dictamen que V. E. declare que es libre de derechos la semilla de alfalfa, no sólo en este caso, sino por punto general. — Octubre 8 de 1872.

Departamento de Hacienda. Resolución de acuerdo con el dictamen. Octubre 26 de 1872.

Tomo 2 pág. 276 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las solas declaraciones de individuos particulares no pueden servir de prueba para alcanzar los beneficios de la Ley de Pensiones Militares. La prueba debe consistir en despachos, fojas de servicios o informes de Jefes Militares.

A los efectos de la Ley de Pensiones Militares es necesario haber formado parte de los Ejércitos de Línea.

Irene Alberro — pide aumento de pensión como viuda del Coronel Don Mariano Zabala.

Excmo. Señor:

Los servicios del Coronel Zabala no se prueban en este expediente con despachos ni fojas de servicios, ni aun con informes de jefes militares, sino con declaraciones de individuos particulares, prueba que nunca debe admitirse por lo falible que es.

Pero de esas mismas declaraciones consta que Zabala nunca fué militar de línea, sino oficial de milicias en un Escuadrón de Gauchos que creó el General Güemes. Sólo en 1856 se le agregó al Ejército por el despacho de f. 7, y en él se le da el título de Coronel de la Provincia de Salta, es decir, de milicias.

Así, pues, en la Guerra de la Independencia no ha formado parte de los Ejércitos de línea, circunstancia que exige la Ley de

24 de Setiembre de 1868 para ser considerado como Guerrero de la Independencia.

La misma calidad exige en su art. 8.º la Ley de Pensiones para poder transmitirla a su familia.

Todos los ciudadanos de Salta prestaron servicios en aquella época; pero la Ley sólo concede pensión a los militares de línea. Por lo cual soy de dictamen que V. E. no haga lugar a esta solicitud. — 15 de Octubre de 1872.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con el dictamen. Octubre 17 de 1872.

Tomo 2, pág. 263 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Para acogerse a los beneficios de la Ley de Pensiones de 1865 o para poder adquirir la calidad de Guerrero de la Independencia de conformidad a la Ley de 24 de Setiembre de 1868, se requiere la prueba de haber sido Oficial del Ejército de Línea, no ocurre así con la Ley de 2 de octubre de 1873, que no hace distinción entre Oficiales e individuos de tropa de los Cuerpos de Milicias y que dispone que para gozar de sus beneficios es necesaria la prueba de haber «combatido» contra los españoles.

Angela Muñoz de González, pide aumento de pensión.

Excmo. Señor:

Don Vicente González fué nombrado en 1811 Capitán de milicias al mando de un compañía que él había levantado.

En 1816 fué nombrado Capitán de una compañía del Regimiento número 5 de milicias de la campaña de Buenos Aires, y en 1821 se le dió la baja absoluta.

Esto es lo que consta de los documentos que hay en este expediente. Después de 1821 no hay constancia alguna de sus servicios ni ascensos. Pero yo lo he conocido de particular en 1825 en la Guardia del Monte, donde era pulpero y subsistía con la protección de Don Juan Manuel de Rosas.

Así es que durante la guerra de la Independencia sólo ha sido Capitán de milicias.

Pero para tener derecho a dejar pensión a sus familias, se necesita ser Oficial de línea, según la disposición del artículo 8 de la Ley de Pensiones; y lo mismo se necesita para tomar la calidad de Guerrero de la Independencia, según la Ley de 24 de Setiembre de 1868. Si bastara el haber sido en aquella época Oficial o soldado de milicias para obtener los premios de esta Ley y la de 4 de Junio último, habría que dar premios y pensiones a todo el mundo; porque ¿quién es aquel ciudadano que no ha hecho parte de los cuerpos de milicias?

Pero la Ley dice: los que hayan pertenecido al ejército, es decir, los Oficiales de línea, y nada más.

Por esta razón, soy de dictamen que V. E. no haga lugar a esta solicitud. — Octubre 15 de 1872.

Excmo. Señor:

El finado Coronel González, era Capitán de milicias en tiempo de la guerra de la Independencia, y no pasó a ser Oficial de línea hasta 1829, en que Rosas lo hizo Comandante y Coronel, por los muchos servicios de todo género que le había prestado.

La Ley de 2 de Octubre último, dice, que serán considerados como guerreros de la Independencia «los milicianos que a las órdenes del General Güemes y otros Jefes combatieron en defensa de la Independencia de la Nación». No dice los que eran Oficiales de milicias en esa época, sino los que **combatieron** contra los españoles.

Para optar, pues, a los beneficios de la Ley de 2 de Octubre, necesita la recurrente probar que su esposo se encontró en alguna función de guerra contra los españoles.

Tal es mi dictamen, salvo el mejor de V. E. 6 de Enero de 1874.

Excmo. Señor:

Ya dije en mi anterior dictamen que los beneficios de la Ley de 2 de Octubre último no se confieren a todos los que fueron Oficiales de milicias en tiempo de la Guerra de la Independencia, sino a aquellos que **combatieron** en ella.

La recurrente ha pretendido probar este extremo con el informe de tres Jefes; pero por muy buena voluntad que los informantes tengan hacia ella, el resultado ha sido que los Coroneles, Espejo y Guido, no conocieron al Coronel González ni fue-

ron testigos de sus servicios, y el Coronel Quesada sólo dice que lo conoció en el ejército que sitiaba a Montevideo, sin hacer mención alguna de sus servicios.

No está, pues, probado que González combatiera por la Independencia, ni es posible tomar como prueba de este hecho los ascensos por salto que obtuvo en 1829, como lo pretende su viuda, porque es de notoriedad pública que estos ascensos fueron el premio de servicios particulares prestados a Don Juan Manuel de Rosas, y no a la patria.

De consiguiente, mi dictamen es que V. E. no haga lugar a esta solicitud, por no hallarse en las condiciones de la Ley. — Mayo 19 de 1874.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Junio 19 de 1874.

Tomo 4, pág. 318 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El empresario de una obra pública que ha garantizado la misma por un término, es solo responsable durante la vigencia de éste, por los perjuicios que sufrá dicha obra, no pudiendo eludir su responsabilidad, objetando que el daño que tuvo lugar es imputable a una línea de tranway. El Gobierno, en tal caso, debe intimar al empresario y a su fiador para que procedan a la reparación, bajo apercibimiento de llevarla a cabo por cuenta y a cargo de éstos, todo ello, sin perjuicio de la acción que el empresario pueda tener contra la Cía de Tranway.

Sobre falta de cumplimiento del contrato para la compostura del muelle de la Boca.

Excmo. Señor:

El contrato celebrado con Don Santiago Calzadilla, para la compostura de la plazoleta del muelle de la Boca, decía que ésta debía estar garantida por el Empresario por el término de un año y tres meses, a contar desde el treinta de Junio de 1871, de modo que el plazo de la garantía venecía en 30 de Setiembre de 1872.

Pero en el parte del Resguardo de 7 de Setiembre, ya se dice que la plaza está intransitable para los carros, de modo que el Señor Calzadilla ha faltado a su contrato.

Este, para excusarse, dice que la culpa del mal estado del camino la tiene el tranway que se ha establecido allá lo que no es creíble, porque ningún tranway desnivela el piso ni lo descompone con sus ruedas.

Pero tampoco es excusa para haber dejado de cumplir su obligación, porque si el tranway había desnivelado el camino, él debió obligarlo a que lo compusiera o le pagara el daño, siendo él el único responsable ante el Gobierno.

Por consiguiente, mi dictamen es que se intime en el día a Don Santiago Calzadilla y a su fiador, que compongan inmediatamente la plazoleta a satisfacción del Gobierno, bajo apercibimiento de que si no empiezan los trabajos dentro del segundo día, se hará la compostura por su cuenta y a su cargo. — 22 de Octubre de 1872.

Departamento de Hacienda. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Noviembre 4 de 1872.

Tomo 4, pág. 328 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde al gobierno declarar como principio general que las autoridades provinciales de cualquier categoría, no tienen facultades para reducir a prisión a los empleados nacionales, cuando ello es susceptible de interrumpir los servicios que los mismos prestan, con la consiguiente perturbación en la Administración.
- II. — Siempre que un empleado nacional merezca alguna sanción por mal desempeño de sus funciones, debe la autoridad Provincial reclamar ante el Gobierno Nacional para que sea éste quien tome las medidas pertinentes que el caso requiera.

El Director General de Telégrafos da cuenta que el Jefe de la Oficina de La Paz ha sido preso, por negarse a entregar dos telegramas.

Excmo. Señor:

En un caso análogo al presente ya tuve ocasión de indicar al Gobierno la necesidad que había de declarar por punto general que las autoridades provinciales de cualquier categoría, no tienen facultad de reducir a prisión a los empleados nacionales, e inte-

rrumpir así el servicio, y perturbar la administración. La prisión que el Gobernador de Entre Ríos mandó hacer del Administrador de Rentas de la Concordia, produjo un desfaldo considerable en la renta, por los fraudes que se efectuaron en esa Aduana en los cuatro meses que duró la prisión.

Las autoridades provinciales no deben tener el arbitrio de causar estos perjuicios y trastornos. Siempre que un empleado nacional merezca justamente la prisión, debe darse cuenta al Gobierno, para que lo haga relevar y poner a disposición de la justicia.

En este caso, hay, además, el atentado cometido por el Jefe Político de «La Paz», queriendo violar el secreto de la correspondencia, por lo cual debe V. E. reclamar del Gobierno de la Provincia un castigo ejemplar, que haga entender la enormidad del crimen intentado. — Noviembre 8 de 1872.

Excmo. Señor:

Por los informes de las autoridades de «La Paz», resulta ser completamente falso el parte pasado al Gobierno por el Director de Telégrafos, lo que exige una reprensión seria para que en adelante no se cometan iguales faltas. En los partes oficiales, ningún Jefe de Oficina debe establecer hechos de cuya certidumbre no esté perfectamente asegurado. — 18 de Mayo de 1874.

Ministerio del Interior. Resolución ordenando el archivo. Julio 20 de 1874.

Tomo 2, pág. 282 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Para gozar de los beneficios de la Ley de 4 de Julio de 1872 es necesario que el reclamante tenga derecho a pensión en los términos de la Ley de 24 de setiembre de 1868.

Los Oficiales reformados, no pueden acogerse a la Ley de 4 de Julio de 1872.

Candelaria Lacarra, pide aumento de pensión

Excmo. Señor:

No hay razón alguna para variar mi dictamen dado en 19 de Septiembre último. Doña Candelaria Lacarra no tiene derecho

al aumento de pensión que pide, por dos principales razones; 1.^a Porque su padre fué reformado y la Ley niega expresamente a los oficiales reformados el premio acordado a los Guerreros de la Independencia, y no teniendo el Teniente Coronel Lacarra derecho a este premio, no ha podido trasmitirlo a su familia; 2.^a Porque para gozar del beneficio de la Ley de 4 de Julio, es necesario que la reclamante tenga derecho a pensión y es evidente que doña Candelaria no lo tiene porque su padre falleció estando separado del servicio por la reforma. Esta señora goza de pensión, según la Ley de la Provincia de Buenos Aires; así ha sido reconocida por la Nación y la declaratoria del Congreso de 1868 que alega, y dice que estas pensiones debían recibir el aumento de todas las demás. Pero esto no es del caso en la cuestión presente, y todas las razones que ella alega y las contenidas en el informe de la Contaduría son del todo impertinentes a la cuestión presente, que sólo debe decidirse por el tenor de las Leyes de 24 de Setiembre de 1868 y 4 de Julio de 1872. — 13 de noviembre de 1872.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con el dictamen. Noviembre 25 de 1872.

Tomo 2. pág. 272 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde declarar caduca una concesión pública por haber sido transferida sin conocimiento ni aprobación del Gobierno.

Corresponde también declarar su caducidad, si ella viola una Ley Nacional. (En el caso, la concesión otorgó en propiedad el huano de la costa Patagónica, que la Ley de 18 de Agosto de 1871, declaró libre para su explotación y extracción).

Julio Haase, pide la transferencia a su favor de la concesión hecha a los Señores Emilio Erlanger y Cía. para la extracción de huano en las costas Patagónicas.

Excmo. Señor:

El extenso pedimento que ha presentado a V. E. Don Julio Haase, está contraído exclusivamente a detallar cuales eran sus contratos con sus socios de Londres para la explotación del hua-

no en la costa Patagónica, y los malos procederes de estos socios para con él, hechos completamente impertinentes, porque no siendo V. E. el Juez que ha de decidir estas cuestiones particulares no tiene por qué imponerse de ellas, ni tomarlas en consideración.

Pero la solicitud está contraída a que V. E. transfiera a Don Julio Haase la concesión que en 22 de Julio último hizo a los Señores Emilio Erlanger y Cía., de Londres.

Si esa concesión fuera válida y conveniente para el país, el Gobierno no podría transferirla sin audiencia y consentimiento de los concesionarios, porque a nadie puede despojarse sin oírlo; y la petición del Señor Haase no se apoya en ningún fundamento legal, ni otro motivo que sus intereses heridos por sus socios.

Pero debo decir con franqueza a V. E. que, a mi juicio, la concesión de 22 de Julio es una violación flagrante de la Ley de 18 de Agosto de 1871. Esta Ley declaró libre la explotación y extracción del huano y la concesión dice que el huano existente en la costa patagónica es de la propiedad de Erlanger y Cía., es decir, que estos Señores tienen el privilegio exclusivo de extraerlo. La Ley ordena al Gobierno la creación de las oficinas que sean necesarias para la vigilancia e inspección de la explotación, y percibo del impuesto establecido; es decir que estos deberes serían ejercidos, como deben serlo, por la Administración Pública. Pero la concesión, esa vigilancia e inspección la entrega a un particular, a un extranjero residente en Londres, y lo que es peor aún, al mismo especulador en huano. ¿Qué vigilancia, ni qué lealtad puede esperarse, estando en contradicción los intereses de este especulador con los intereses del Gobierno? Por estas razones creo que la concesión de 22 de Julio es nula, y V. E. no debe consentir en que subsista por un día más, sin incurrir en graves responsabilidades ante el Congreso.

Felizmente los mismos concesionarios han dado motivos justos para que se anule la concesión; porque implicando ésta deberes personales de confianza, la han transferido en Londres a una sociedad anónima, sin conocimiento ni aprobación del Gobierno, lo que por la Ley hace caducar la concesión, no siendo responsable ante el Gobierno ninguna persona determinada.

Por estas razones, soy de dictamen que V. E. declare caduca la concesión de 22 de Julio último; y tome las medidas necesarias para vigilar con los medios propios del Gobierno la ex-

tracción del huano, ordenando al Guarda Costa que se nombre que si encuentra en esa operación buques que no tengan despachos de la Aduana, o que los tengan fraudulentos por cantidades menores que su porte, les exiga el pago inmediato del derecho triplicado, o en caso de no hacerlo, los aprese y remita a este Puerto. — 22 de Noviembre de 1872.

Excmo. Señor:

No es mi idea contradecir a V. E.; pero voy a manifestar las razones que tuve para decir que se había concedido a los Señores Erlanger y Cía., la propiedad del huano existente en la Costa Patagónica.

La concesión de 22 de Julio les adjudica la propiedad del huano existente en las Islas siguientes:

Una situada en los 50 grados 20 minutos.

Otra situada en los 50.º 10'.

Otra en los 48.º 45'.

Otra en los 48.º 20'.

La Isla llamada Penguin Island.

La llamada Shag Island.

En fin, todas las Islas de la Bahía de Camarones entre los grados 44º,50' y 45º,20'.

Es decir que se les ha concedido el huano existente en seis islas y además en una extensión de veinte leguas de costa.

Si éste no es todo el huano existente en la costa, es indudablemente una enorme cantidad, que se separa de la libre explotación contra el precepto de la Ley.

El Gobierno no puede hacer esto. No puede declarar de propiedad de un particular el huano de una sola isla. Porque habiendo declarado la Ley que la explotación es libre, todo el mundo tiene derecho para tomar el huano donde lo encuentre; y nadie puede creer que es de su propiedad sino el huano que tenga en la bodega de su buque. Pero mi anterior dictamen se funda no sólo en esta irregularidad de la concesión, sino en haber encargado la vigilancia de la explotación al mismo especulador, que no ha de vigilarse a si mismo, lo que indudablemente es ir contra lo prevenido en el art. 3.º de la Ley de 18 de Agosto de 1871. Y además, en haber los concesionarios transferido la concesión a una Compañía

Anónima, establecida en Londres, sin permiso del Gobierno, permiso que nunca debía dar, porque esa Compañía no puede ejercer la vigilancia que se le recomienda ni tiene responsabilidad personal.

Es por estas razones que no puede variar mi dictamen de fecha de ayer. Pero V. E. puede separarse de él, y tomar la resolución que considere más justa. — 23 de Noviembre de 1872.

Departamento de Hacienda. Resolución en contra, Noviembre 22/1872. Resolución de conformidad, Diciembre 5/1872.

Tomo 2, pág. 285 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde dirigir al Gobernador del Territorio Nacional del Chaco, las solicitudes para obtener tierras de conformidad a la Ley de 18 de octubre de 1872, que dispuso la forma como deben repartirse los solares y chacras en el nombrado territorio.

El Gobernador de los Territorios del Chaco consulta ante quiénes deben solicitar sus títulos de propiedad los antiguos pobladores y los que se establezcan en esos territorios.

Excmo. Señor:

La Ley de 18 de Octubre último explica clara y detalladamente el modo como deben repartirse los solares y chacras del Territorio del Chaco y aunque no dice que las solicitudes para obtenerlos deban dirigirse al Gobernador, esto se subentiende, por ser la colonización uno de los ramos de administración que le está especialmente encargada por el artículo 4.º.

La jurisdicción de este Gobierno; no estando limitada, debe extenderse a todo el Territorio del Chaco.

Por consiguiente, creo que no debe haber duda en este punto, y que al Señor General Vedia (1) corresponde repartir los terrenos, debiendo dar cuenta de sus productos. — Noviembre 23 de 1872.

Departamento del Interior. Resolución en Diciembre 5 de 1872.

Tomo 2, pág. 274 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

(1) Gobernador del Territorio del Chaco.

El Gobierno Nacional tiene facultad para regular la entrada de inmigrantes, pudiendo rechazar los que considere indeseables, debiendo al respecto los Cónsules argentinos, hacer conocer dicha facultad en los puertos extranjeros de embarque.

El Agente de Inmigración en Milán — propone se anticipen los gastos de viaje, para familias de colonos.

Excmo. Señor:

Todo Gobierno tiene la facultad de impedir que entre al país un extranjero cuya presencia es inconveniente, y esta facultad reconocida por el Derecho de Gentes, ha sido ya ejercida por nuestro Gobierno. Por consiguiente, no dudo en responder afirmativamente a la consulta que se sirve hacerme, teniendo el Gobierno el derecho de rechazar a los viejos impedidos, o pordioseros de profesión que vinieran entre los inmigrantes.

Pero como en el proyecto de artículo se impone al capitán del buque la obligación de conducirlos en su viaje de regreso, sería necesario notificar esta resolución antes que los recibieran a su bordo. Lo que puede conseguirse fijando un término de 4 ó 5 meses para la ejecución del Decreto, y comunicándolo a los Cónsules Argentinos en los puertos de embarque para que allí lo publiquen y notifiquen a todas las agencias marítimas. — Noviembre 23 de 1872.

Tom 2, pág. 253 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley de Faros de 3 de Agosto de 1872 no comprende en su letra, a los paquetes a vapor, tanto nacionales como extranjeros, de ultramar o cabotaje; estando éstos, en posesión de los derechos de exención que les reconoció la Resolución de 25 de Septiembre de 1858, es necesario que el Legislador los prive expresamente de los mismos.

Esteban D. Risso y Hermanos — piden se declare que los paquetes a vapor que navegan entre Buenos Aires y Montevideo, no están sujetos a impuestos de faros.

Excmo. Señor:

Los paquetes a vapor que hacen la carrera entre este Puerto, los del Estado Oriental y ríos interiores, han estado exentos del de-

• rechos de faros, por resolución del Gobierno de 25 de Septiembre de 1858, que con esta fecha copio en el dictamen que doy a V. E. sobre los paquetes de ultramar. Hallándose en posesión de esta franquicia, no han podido perderla por la Ley sancionada en Agosto último; porque esa Ley no les retira el privilegio, ni aun lo menciona. No debe interpretarse que contiene una restricción que ni sus palabras, ni su espíritu, expresan. Por el contrario, debe creerse que el legislador ha querido que las cosas permanezcan como están, no solo por no haber tomado disposición alguna para enmendarlas, sino porque esta franquicia es un estímulo necesario para mantener la navegación a vapor que felizmente se ha establecido en nuestros ríos a pesar de los crecidos gastos que ella exige. Por consiguiente, mi dictamen es que la Ley de Agosto no comprende a los paquetes a vapor, y que éstos deben continuar con el goce de la franquicia que han tenido de no pagar el derecho de Faros. Además, la Ley de Agosto último, sobre esta materia, no ha sido promulgada en el Registro Nacional, y es indispensable que se mande insertar en él. — Noviembre 27 de 1872.

Excmo. Señor:

Los paquetes establecidos entre este puerto y los de Inglaterra han estado siempre exentos de los derechos de puerto, tonelaje y faros. La historia de la excepción es la siguiente: Cuando en 1823 se establecieron los primeros paquetes de S. M. B. con bergantines de vela, el Gobierno les concedió el privilegio de no pagar los derechos de Puerto, por Decreto de 10 de Abril de 1824. En 1849, el Gobierno Británico contrató con una Compañía el establecimiento de paquetes a vapor, y el Ministro solicitó de nuestro Gobierno la concesión de varias ventajas, como compensación de los gastos de empresa. El Gobierno, entre otros varios privilegios, extendió a los vapores la concesión hecha en 1824 y además, que estuvieran exentos de todo derecho de tonelaje, como se ve por la copia de nota que se presenta. Estos privilegios se hicieron extensivos a todos los paquetes a vapor nacionales y extranjeros de cualquier bandera, y cuando en 1856 se establecieron los faros, la empresa no incluyó en sus tarifas a los paquetes, sin duda por recomendación del Gobierno: de modo que éstos nunca han pagado el derecho. En 1858, el Señor Cónsul de Francia pidió para las Mensajerías Imperiales los privilegios de que gozaban los paquetes británicos, y habiendo

informado el Capitán del Puerto y el Administrador de Aduana que todos los paquetes a vapor gozaban de estos privilegios, el Gobierno en 25 de Septiembre de 1858 expidió la resolución siguiente:

«Resultando del informe del Capitán del Puerto que por el sistema de franquicia que el Gobierno ha adoptado para el comercio, han dejado de ser un privilegio las excepciones del pago de derechos de Puerto acordadas a los paquetes a vapor de la línea de Southampton, porque están exonerados de ellos todos los buques nacionales y extranjeros de ultramar y cabotaje, y que las empresas de abalicio y faros últimamente establecidas, *no comprenden en sus tarifas a los buques de guerra y paquetes de cualquiera nacionalidad que sean*; que del informe del Colector de Aduana resulta también que el privilegio de no abrir o cerrar registro, descargar inmediatamente después de su arribo sin ninguna de las formalidades prescriptas a los buques mercantes y no pagar derechos de visita y reglamento acordado asimismo a los buques ingleses, a todos los paquetes que hacen la carrera de Montevideo y ríos interiores; contéstese al Señor Cónsul de Francia que el Gobierno de conformidad a sus deseos concede a la línea de paquetes a vapor franceses los demás privilegios de que aun están en posesión los paquetes de S. M. B. y los que gozándolos éstos, se han extendido a los que navegan entre este Puerto y los de la República Oriental y las Provincias Argentinas. A los efectos consiguientes, comuníquese a los Ministros de Hacienda, Guerra y Marina.

Este expediente está publicado en la «Tribuna» de 19 de Septiembre de 1858, y como esta resolución es posterior de dos años al establecimiento de faros, es indudable que todos los paquetes fueron excluidos de ese derecho; y que en esa franquicia está comprometida la palabra del Gobierno. La Ley sancionada en Agosto último no los excluye expresamente, pero hallándose en posesión de este derecho, era necesario que el legislador los hubiera privado de él expresamente para que los perdieran.

Por consiguiente, mi opinión es que los paquetes a vapor están libres de derechos de Faros. — Diciembre 18 de 1872.

Departamento de Guerra y Marina. Tuvo resolución esta causa en Enero 20 de 1873.

Para gozar de los beneficios de la Ley de Pensiones Militares es necesario estar domiciliado en la República.

Carmen Ureta de Melián, pide aumento de pensión.

Excmo. Señor:

Siendo necesaria la permanencia en la República para gozar de pensión, es indispensable que el reclamante presente un certificado auténtico, por el que conste que la Señora a quien representa reside en la República. — Diciembre 9 de 1872.

Excmo. Señor:

Es indudable que el Teniente Coronel Melián fué un guerrero de la Independencia; pero V. E. no puede conceder la pensión que su viuda solicita, porque ésta está domiciliada en la República de Chile.

La Ley del Congreso que se invoca de 17 de Septiembre de 1870, en nada varía el caso, ni revoca la disposición terminante de la Ley de Pensiones, que priva de ellas a los que se hallan fuera del país. Por aquella ley se asignó a la señora viuda de Melián, una pensión graciable de ps. fts. 25, mientras estuviere fuera del país, y esto confirma la anterior disposición; pues no se le dió la pensión que le correspondía por la Ley, sino una pequeña pensión graciable.

Por tanto, soy de dictamen que V. E. no haga lugar a esta solicitud. — 18 de Enero de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Enero 21 de 1873.

Tomo 4, pág. 329 - Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El poder Ejecutivo carece de facultades para establecer tarifas diferenciales a favor de una Compañía Naviera por el transporte de mercaderías que importen o exporten sus barcos.

Propuestas para el establecimiento de una flota para la comunicación entre la República, Europa y Estados Unidos.

Excmo. Señor:

Sólo me ocuparé de la propuesta de la Compañía Nacional Argentina; porque la de los Señores Payró y Rodó es evidentemente inaceptable, no trayendo ninguna ventaja para la República el establecer *doce* buques de vela para hacer el comercio entre Buenos Aires y Europa.

Otra cosa son las nuevas líneas de vapores que se propone establecer la Compañía Nacional entre Buenos Aires, Europa y Norte América. Las ventajas de este aumento de comunicación directa, son bien notorias. Pero el privilegio que solicitan por el artículo 10, de una rebaja de 2 % en los derechos de todas las mercancías que importen o exporten, no pueden de ningún modo acordarse; no sólo por el perjuicio que esto traería a la renta pública; sino porque él importaría dar a un particular el privilegio exclusivo del transporte marítimo, en perjuicio de todos los buques que se ocupan en él.

Yo creo que si la Empresa renunciara a esta pretensión, que nunca podrá obtener ni del Gobierno ni del Congreso, el Gobierno bien podría renunciar a las ventajas que se le ofrecen por los artículos 5, 8, 13 y aun podría además, ofrecer una compensación moderada por el transporte de la correspondencia, para que ésta girase exclusivamente por las Oficinas de Correos, sin intervención de los Cónsules extranjeros.

Como está la propuesta V. E. no debe aceptarla, ni tiene facultades para ello. Pero bien podría oír a la Empresa para saber si se conforma con retirar el artículo 10. Diciembre 10 de 1872.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Enero 24 de 1873.

Corresponde que el Poder Ejecutivo consulte al Congreso de la Nación, acerca de si las leyes de 24 de septiembre de 1868 y 4 de julio de 1872 —Pensiones Militares— se refieren sólo a «Jefes, Oficiales y Soldados» que tomaron parte en la guerra de la Independencia o si comprenden también a los que sin actuar directamente en la misma, pertenecían al ejército a la época de dicha guerra.

Arminda C. de Olazábal, pide aumento de pensión

Excmo. Señor:

No se han expedido decretos reglamentarios de las Leyes de 24 de Septiembre de 1868 y de 4 de Julio de 1872, que expliquen y fijen su sentido; y hoy existe la siguiente duda.

¿Deben ser considerados como guerreros de la Independencia los Jefes, Oficiales y Soldados que no tomaron parte alguna en aquella guerra, sólo porque eran militares en esa época?

Parece que el espíritu racional de la Ley de 1868 fué premiar sólo a los que habían hecho las campañas de la Independencia; pero en su texto no hace diferencias alguna, hablando de Jefes, Oficiales y Soldados que pertenecieron al ejército en la época de aquella guerra.

El Coronel Don Gerónimo Olazábal no ha servido de ningún modo en la Guerra de la Independencia, sino en una campaña desgraciada contra la montonera de Santa Fe y en la Guerra del Brasil, aunque parece que entró a servir en 1817.

Si V. E. no se creyese habilitado para resolver la duda propuesta, mi dictamen sería que se reservara el expediente para hacer al Congreso una consulta sobre este punto pidiendo aclaración de la Ley. — Enero 10 de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución rechazando lo solicitado. Enero 24 de 1873.

Tomo 2, pág. 267 — Inf. de los Censej. Leg. del P. E.

=====

La muerte en acción de guerra, debe considerarse que es la producida por el enemigo, y no la que tiene lugar por soldados del mismo bando.

Ignacia Reyna de Hernández, pide aumento de pensión

Excmo. Señor:

A la viuda del Coronel Hernández, corresponde por la Ley una pensión de la mitad del sueldo, por tener aquél más de treinta años de servicio: no por haber muerto en acción de guerra, como dice la Inspección; porque aunque es cierto que murió en el campo de batalla de Caseros, no fué de bala enemiga, sino asesinado por la espalda por sus mismos soldados, a quienes martirizaba cruelmente, como es público y notorio. — 13 de Enero de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Encro 15 de 1873.

Tomo 4, pág. 309 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los Oficiales y tropa de la Guardia Nacional, tienen derecho a dejar pensión de conformidad con la Ley General de Pensiones, en el único caso, de que hayan sido inutilizados o muertos en acción de guerra.

Josefa Medina, sobre pensión.

Excmo. Señor:

Nunca ha considerado el Gobierno que los Oficiales de Guardia Nacional tengan derecho a dejar pensión a sus familias. La Ley General de Pensiones nos dice, que sólo tendrán derecho los Jefes y Oficiales del Ejército de línea, así como los Oficiales y tropa de guardia nacional, *en su caso*. Este caso está determinado en el artículo 10, en que, sólo se les da este derecho a los que se inutilicen o mueran en acción de guerra.

La Ley de 1868, que premió a los guerreros de la Independencia habla sólo de los Jefes, Oficiales y Soldados que hayan formado parte de los Ejércitos de la Nación, es decir, Oficiales de línea.

La doctrina que sostiene la Contaduría, la Inspección y el Auditor, de que un Oficial de milicia puede dejar pensión a su familia, es una enormidad que concluiría con todas las rentas del Tesoro; porque no hay un solo ciudadano que no esté o haya estado inscripto en la Guardia Nacional, y todos, absolutamente todos, seríamos pensionistas.

Esto es contra la Ley y contra el buen sentido. ¿Acaso Royo es el único que ha servido en los cuerpos de gauchos de Salta?

Toda la juventud de Jujuy, Salta y Tucumán, han prestado los mismos servicios que él contra los españoles.

Las milicias nunca prestan un servicio continuo y permanente. Están ocupadas en sus trabajos y quehaceres personales y sólo por accidentes son llamadas a una función de guerra. Así es que la Inspección, calculando el tiempo de servicio de Royo, desde 1811, hasta su muerte, como un servicio continuo de un Oficial de línea, no sabe lo que dice, y falta a todas las reglas del buen sentido.

Se citan dos casos de Oficiales de milicias a quienes el Gobierno ha concedido pensión. Temo que estas citas sean falsas.

Pero si ellas son ciertas, será porque la Inspección y la Contaduría, faltando a sus deberes, han inducido en error a V. E.. Mas, un error no puede servir de precedente, ni justificar otros.

Por conclusión, reproduzco en todo, mi dictamen de 20 de Octubre de 1870. — Enero 20 de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Febrero 10 de 1873.

Tomo 4, pág. 325 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El derecho de almacenaje y eslingaje sobre el té, debe imponerse según la base 5.^a del art. 331 de las Ordenanzas de Aduana y no según la base 1.^a de la misma, disposición legal.

Varios comerciantes de Buenos Aires, piden se fijen los derechos que debe pagar el té.

Excmo. Señor:

El artículo 331 de las Ordenanzas de Aduana, que regula el modo de cobrar el derecho de almacenaje y eslingaje, no debía

ofrecer duda ni cuestión alguna en su aplicación, porque es muy claro y terminante.

La duda actual se reduce a saber si el té debe pagar según la base 1.^a de aquel artículo, como lo pretende la Contaduría General, o según la base 5.^a, como lo practica la Aduana.

Pero es evidente que la base 1.^a nada tiene que hacer en este asunto, porque en ella están especificados y nombrados los artículos que comprende, y el té no se encuentra entre ellos. La base 5.^a comprende todos los artículos de peso, y como el té se compra, se recibe y se opera por peso, es evidente que está comprendido en ella.

La Aduana no debe separarse de la Ley, ni hacer imposiciones arbitrarias que la desnaturalicen. Las razones que da la Contaduría General, si fueran buenas, lo que es muy dudoso, servirían para enmendar la Ley, pero no sirven para interpretarla ni para poner en duda una disposición que es clara como la luz.

Por consiguiente, mi dictamen es que V. E. declare extrictamente las Ordenanzas, imponiendo el derecho de almacenaje y eslingaje sobre el té, según la base 5.^a del art. 331. — 1.^o de Febrero de 1873.

Departamento de Hacienda. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Febrero 12 de 1873.

Tomo 4, pág. 340 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las Pensiones Militares, otorgadas en virtud de la Ley de la materia, corren desde el día en que se conceden o desde que se fijan en el Decreto de concesión.

Francisca Ruiz Moreno, pide pensión como viuda del Coronel Don José Ramón Ruiz Moreno.

Excmo. Señor:

Está probado que el Coronel Ruiz Moreno sirvió en la Guerra de la Independencia en el célebre Regimiento de Granaderos a Caballo, y que ha hecho parte también de los Ejércitos Libertadores.

Habiendo fallecido en 1856, nueve años antes de promulgada la Ley de Pensiones, su viuda está incluida en la disposición del art. 12 de esta Ley, y le corresponde una pensión de sueldo íntegro con arreglo a la Ley de 4 de Julio último. Pero ella sólo debe empezarse a pagar y correr desde que se acuerde por V. E.; pues sólo a fines de 1872 es que se ha pedido la pensión y el presupuesto no autoriza para pagarla por los meses en que no se ha hecho reclamo, y en que no había pensión otorgada. — 8 de Febrero de 1873.

Excmo. Señor:

Insisto en mi anterior dictamen porque me parece contrario a la razón que una persona goce de pensión antes de habérsele concedido y por el tiempo en que ningún derecho tenía a ella. La Ley acepta este mismo principio, cuando en su artículo 41 dice textualmente: **En ningún caso los que se declaren con derecho a pensión podrán exigirla en lo atrasado, sino estaba reconocida y concedida ya con arreglo a las disposiciones preexistentes.**

Esta disposición es tan clara y fundada, que no admite interpretación contraria a su letra. La Contaduría cita varios casos en que el Gobierno se ha separado de este principio por consejo del Auditor. Pero ante la disposición clara de la Ley, esos casos no pueden servir de precedente, porque ellos no tienen el poder de derogar aquélla.

Por consiguiente, soy de dictamen que V. E. mande llevar a efecto lo resuelto en 17 de Febrero, previniendo que en adelante las pensiones empezarán a correr desde el día en que se concedan, o desde que se fije en el Decreto de concesión; porque puede haber casos en que sea justo alterar el principio. — 15 de Mayo de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Febrero 8 y Abril 14 de 1873.

No habiendo la Aduana cumplido con el art. 135 de las Ordenanzas —que dispone que el Vista debe anotar en los manifestos la diferencia que encuentre en menos, de las mercaderías que afora— no es aplicable el art. 158 al reclamo que después de recibido el artículo formula el interesado, por cuanto su ignorancia es sólo imputable a la Aduana que no hizo en el manifiesto la anotación debida.

Damián Castro y Cía. — sobre diferencia de avalúo.

Excmo. Señor:

El artículo 135 de las Ordenanzas previene que cuando el Vista encontrase en un bulto mercaderías de inferior calidad o en menor número que las manifestadas, anote sobre el manifiesto la diferencia encontrada, y afora las mercaderías manifestadas.

El objeto de esta disposición es averiguar la razón de la diferencia, y castigarla si proviene de un fraude.

En este caso se manifestaron cajones de fósforos con 30 cerillas: el Vista, según su informe, vió que sólo tenían 25 pero no hizo la anotación que debía; y el interesado sólo supo la verdad cuando vendió el artículo y recibió los reclamos de los compradores. Si se ha hecho, pues, el reclamo después de recibido el artículo, no puede aplicársele el artículo 158, porque es la Aduana la que tiene la culpa de su ignorancia, no habiendo hecho en el manifiesto la anotación que debía.

En cuanto a la razón de la diferencia, está satisfactoriamente explicada por el interesado, cuya explicación está comprobada por el informe de la Contaduría, y resulta de ella que en este caso no hay ni la sombra de fraude.

En esta virtud, soy de dictamen que en el aforo de este despacho se considere que cada caja de fósforos contenía 25 cerillas, lo que es la verdad. — Febrero 13 de 1873.

Ministerio de Hacienda. Resolución no haciendo lugar a lo solicitado. Marzo 23 de 1873.

Puede concederse permiso para establecer un depósito de carbón en la ribera del río, siempre que ello no perjudique el libre tránsito fluvial. Debe considerarse esta circunstancia en cada caso que se presente, así la prohibición señalada para una zona de la ribera no puede extenderse a otros lugares que no se hallan en las mismas condiciones.

El Gobierno Nacional, no tiene la propiedad de la ribera de los ríos, mas habiendo la Ley ordenado que ésta es de uso común para todos los habitantes, puede el Gobierno hacer las construcciones necesarias a la navegación y seguridad del tránsito.

=====

Rubio y Foley — piden permiso para el establecimiento de un depósito de carbón.

Excmo. Señor:

Dos son los puntos que era necesario esclarecer para conceder el permiso que se pide: a saber, si el depósito de carbón embarazaría el tránsito, y el Resguardo puede vigilar convenientemente el depósito. Por consiguiente nada se opone a que se conceda el permiso que solicitan los Señores Rubio y Foley.

En cuanto a las cuestiones que propone el Capitán del Puerto, diré: que el gran tráfico que hay en la ribera del Riachuelo hace que no puedan depositarse en ella mercaderías sin embarazar y perjudicar el tránsito, y por eso se ha prohibido; pero esta prohibición no debe extenderse a lugares que no se hallan en las mismas condiciones.

En cuanto a la propiedad de la ribera de los ríos, ella no pertenece al Gobierno Nacional; pero siendo por la Ley de uso común para todos los habitantes, el Gobierno, y sólo él, puede hacer construcciones que sirvan a la navegación y aseguren el tránsito. — 21 de Febrero de 1873.

Departamento de Hacienda. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Febrero 28 de 1873.

- I — Corresponde que se acuerde patente de invención en los términos del art. 2 de la Ley de la materia a quienes se les hubiere acordado en país extranjero en iguales condiciones que la que solicitan en la República.
- II — El poder Ejecutivo no tiene facultades para establecer excepciones a los derechos de importación sancionados en la Ley de Aduana, materia que corresponde unicamente al Poder Legislativo.

Billinghamurst y Lumb — piden privilegio de primera introducción libre de derechos, para la materia prima y maquinaria, destinada a la pavimentación de asfalto en Buenos Aires.

Excmo. Señor:

Si los peticionarios prueban que son, como dicen, representantes de los que han obtenido en Europa patentes para el uso exclusivo del pavimento de asfalto de Val de Travers, puede concedérseles aquí igual patente con arreglo al art. 2.º de la Ley de patentes industriales; para lo cual puede V. E. mandar que este expediente pase a la Oficina correspondiente.

En cuanto a la excepción de derechos por los materiales, sería una excepción a la Ley de Aduana, que no dudo concedería el Congreso, vista la importancia de esta industria; pero que no está en las facultades del Poder Ejecutivo el conceder. — Abril 1.º de 1873.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Mayo 31 de 1873.

Tomo 2, pág. 312 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los soldados de tropa de los ejércitos de línea, pueden acogerse a los beneficios de las leyes de Pensiones Militares.

Dolores Iramain — solicita pensión de sueldo íntegro.

Excmo. Señor:

La Ley de 1868 que acordó a los Guerreros de la Independencia el goce de sueldo íntegro, dice: Los Jefes, Oficiales y Sol-

dados, sin hacer diferencia alguna entre Oficiales e individuos de tropa, y como la Ley de 4 de Julio de 1872 que habla de viudedades para las familias de los mismos, es una consecuencia de aquella y no hace diferencia de grado, debe también entenderse que las familias de los soldados tienen derecho a pensión. Por lo cual soy de dictamen que a la viuda del Sargento 1.º Herrera le corresponde la pensión del sueldo de su clase. — 1.º de Mayo de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado.. Mayo 3 de 1873.

Tomo 2, pág. 300 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La autoridad militar en un fuerte es la única competente para reprimir los desórdenes o crímenes que allí se cometan.

Expediente iniciado por el Jefe Político de Río Cuarto, pidiendo a la autoridad militar de dicho punto la entrega del individuo Clemente Medina, detenido por ésta a causa de haber herido a un soldado en un fuerte de la frontera.

Excmo. Señor:

Por la Ley los dependientes de la proveduría no gozan de fuero militar, de modo que el individuo Clemente Medina, por razón de su empleo no estaba sujeto a las autoridades militares. Pero si lo está porque cometió el crimen en un Fuerte de la Frontera.

La Ley determinó el fuero en 1822, que es la que hoy se observa en toda la República, sujetó a la jurisdicción militar todo delito cometido en los cuarteles, en marcha, en campaña o en actos de servicio, y por la misma razón deben estar sujetos a la misma jurisdicción los cometidos en los Fuertes de Frontera, puntos aislados en el desierto donde no hay población civil que no esté ligada con la guarnición, y donde el Comandante es el único responsable del orden y la disciplina. Un Fuerte que está al frente del enemigo, en continuo estado de guerra, no puede ni debe te-

ner otra autoridad que la militar; y ésta es la única competente para reprimir los desórdenes o crímenes que allí se cometan.

Por consiguiente, el Señor Coronel Roca tiene razón en pretender juzgar al individuo Medina por las heridas inferidas a un soldado de la guarnición y si V. E. se conforma con esta opinión, puede así comunicarlo al Señor Gobernador de Córdoba, dando las órdenes para que se proceda inmediatamente al juicio de Medina. — Mayo 6 de 1873.

Tomo 2, pág. 310 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los Créditos de la Provincia de Buenos Aires, si corresponden a la época del presupuesto garantido, deben ser pagados por el Gobierno Nacional de conformidad con el Acuerdo de 11 de noviembre de 1859.

El Gobierno de Buenos Aires — pide el abono de varios expedientes pertenecientes a la administración anterior al año 1862.

Excmo. Señor:

El Gobierno de Buenos Aires no explica ni aun indica en su nota de remisión la razón porque pasa al conocimiento del Gobierno Nacional los adjuntos expedientes, que según sus decretos deben ser satisfechos por la Tesorería de la Provincia.

Si su intención ha sido pedir el cumplimiento de la garantía que dió la Nación a su presupuesto en el convenio de 11 de Noviembre de 1859, debería haber presentado las cuentas para probar que estas deudas no han podido ser pagadas con los recursos ordinarios en el tiempo de la garantía, o decirlo así al menos en su nota. Si este fuera el caso, V. E. necesitaría pedir al Congreso los fondos necesarios para esta erogación que está fuera del presupuesto. Entre tanto, mi dictamen es que V. E. pida al Gobierno de Buenos Aires que explique y justifique la razón porque ha remitido estos expedientes, para proceder en consecuencia. — 9 de Mayo de 1873.

Excmo. Señor:

Después de lo informado por el Gobierno de la Provincia, creo que el Gobierno Nacional está obligado a pagar los créditos de que trata este expediente, si ellos corresponden a la época del presupuesto garantido, lo que podrá saberse por la inspección de los diversos expedientes que los justifican, y para ello deberá el Gobierno pedir al Congreso la autorización y fondos necesarios.

Entre tanto, debe V. E. pedir al Gobierno de la Provincia el saldo que resulta de la cuenta de su Contaduría, en moneda corriente y letras que se dicen incobrables. — 15 de Septiembre de 1873.

Tomo 2, pág. 317 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La madre de un oficial muerto en acción de guerra, aunque su estado civil no sea de viuda, tiene derecho a la pensión militar, si su marido se encuentra en estado de demencia.

Magdalena Correa de Grandoli — pide pensión como madre viuda del Sub-Teniente Don Mariano Grandoli.

Excmo. Señor:

Cuando la Ley de Pensiones habla de madre viuda, quiere decir madre desamparada, que no tiene el apoyo y sostén de su marido, y por eso le concede pensión por muerte de su hijo, que debe creerse la sostenía. La mujer de un demente es peor que viuda, porque sobre no tener su apoyo, tiene obligación de cuidarlo y atenderlo. Yo creo que el espíritu de la Ley dá derecho a pensión a las que se hallan en el caso de la Señora de Grandoli, y creo que el Gobierno lo ha entendido así también; porque concedió pensión a una madre que no era viuda, pero cuyo marido era un anciano paralítico, enteramente impotente. — 20 de Mayo de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Julio 10 de 1873.

Tomo 2, pág. 259 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

La separación de un Canónigo de su cargo eclesiástico no puede hacerse sin acuerdo del Gobierno, por cuanto éste en su calidad de Patrono debe conocer las renunciaciones de quienes elige y sostiene.

Nota del Obispo de Salta contestando una del Ministerio del Culto, sobre la aceptación de la renuncia de una Canonjía Doctoral.

Excmo. Señor:

El Señor Obispo de Salta procedió muy bien aceptando la renuncia que en Noviembre de 1871, hizo de su canonjía el Presbítero Don Luis B. Alfaro, porque manifestándose en ella la indeclinable voluntad de seguir residiendo en Tucumán, el Obispo no podía permitir que este beneficiado viviera ausente de su beneficio contra lo que prescriben expresos y repetidos cánones. Pero la separación definitiva de un Canónigo no puede hacerse sin acuerdo del Patrono; porque siendo el Gobierno quien los elige y sostiene debe necesariamente conocer sus renunciaciones.

V. E. resolvió por su Decreto de 6 de Abril último que el Presbítero Alfaro no debía separarse de la Canonjía, pudiendo eludirse la prohibición Canónica con el nombramiento de un excusador, que con acuerdo del Señor Obispo ocupara su puesto en el Coro de Salta, mientras durase su ausencia. Aún no se sabe si se ha hecho este nombramiento y se ha obtenido el dicho Acuerdo; y sería necesario que V. E. señalase un término fijo para hacerlo, porque mientras no se haga, el Presbítero Alfaro está canónicamente separado de su Canonjía *ipso jure*, y por la resolución del Obispo.

En cuanto a la petición que hace el señor Alfaro para que se le abonen los sueldos devengados en todo el tiempo que no ha asistido a su Coro, es completamente ilegal, porque por los Cánones un beneficiado que no asiste a su beneficio no tiene derecho a sus sueldos, y si no lo dijeran los Cánones, lo diría la razón y la justicia.

El Presbítero Alfaro no tiene derecho a sueldo alguno, desde el 29 de Noviembre de 1874 en que se admitió la renuncia indeclinable que hizo de su Canonjía, porque desde entonces no hace parte del Coro de Salta, aunque el Gobierno no conociera este asunto sino con mucha posterioridad. — Junio 25 de 1873.

- I. — No afecta las prerrogativas ni los beneficios eclesiásticos la ley que dispone la redención de Capellanías, mediante la conversión en fondos públicos nacionales de los capitales destinados al sostén del clero.
- II. — La mencionada ley no implica un avance sobre la jurisdicción eclesiástica, por cuanto los bienes afectados a Capellanías por Real Cédula de 22 de marzo de 1789 pasaron a depender de la jurisdicción civil.

El Obispo de Cuyo protesta contra el proyecto de Ley del Gobierno de Mendoza para la desamortización de los bienes afectos a Capellanías.

Excmo. Señor:

El proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Mendoza a su Legislatura en 29 de Marzo último para la desamortización de los bienes afectos a Capellanías, por el cual se manda convertir en Fondos Públicos Nacionales los capitales destinados al sostén del clero, no puede dar motivo a las alarmas que manifiesta el Señor Obispo de Cuyo, ni mucho menos a las declaraciones sin demostración que contiene el escrito publicado por el Canónigo Garramuño, que se ha remitido a V. E.

En esta Ley se respetan los derechos y los intereses de todos, de los Capellanes, porque se les asegura su renta en Fondos Públicos, que es una situación más segura y permanente, que las que tienen en las fincas, donde se halla impuesta: de los patronos, porque de simples poseedores se convierten en propietarios: y en fin, del público, porque se entrega a la circulación una masa de bienes que hoy son manos muertas.

No hay, pues, razón para que se alarmen las conciencias o se digan perjudicados los interesados, como dice el Obispo.

Pero este Señor se queja de que se invade su jurisdicción, con lo que da a entender que a su juicio los bienes afectos a Capellanías están bajo la jurisdicción eclesiástica, y en esto comete un grave error.

Lo estaban en efecto por las Leyes de Indias. Pero muy pronto advirtió el Consejo que este sistema daba lugar a continuos desórdenes y abusos, y por la Real Cédula de 22 de Marzo de 1789, derogó esas leyes y mandó que en lugar se observara la siguiente: «Todas las tierras de nuestras Indias, como propias de

nuestra real Corona, aunque hayan pasado a otras manos por repartimiento u otro cualquier título, no han podido perder ni mudar su primitivo origen y naturaleza realenga, sin nuestro expreso Real permiso, en cuya consecuencia declaramos que el conocimiento de principales y réditos de toda clase de Capellanías y obras pías, contra nuestros vasallos legos y sus bienes, no toca a los jueces eclesiásticos, sino a nuestras justicias Reales; y mandamos que así se guarde, cumpla y ejecute».

Desde que se promulgó esta Ley fué ya un principio de jurisprudencia que las fincas particulares no salían del fuero común, ni se hacían breves eclesiásticos por el hecho de fundar en ellas una Capellanía u obra pía, de cualquier naturaleza que fuese, y esa es hoy nuestra Ley.

Así pues, el Gobierno de Mendoza, legislando sobre esas fincas, trata de asuntos de su jurisdicción, y en nada invade la eclesiástica del Señor Obispo que no la tiene por la Ley sobre esas fincas.

No hay por consiguiente razón alguna de derecho o de conveniencia para que el Gobierno Nacional tome parte en este asunto, que pertenece exclusivamente a la jurisdicción del Gobierno de Mendoza. — 25 de Junio de 1873.

Tomo 2, pág. 315 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El tiempo necesario para que el Gobierno obtenga informes acerca de un pago que debe realizar — sin determinación de día fijo — no puede constituirlo en mora, y en consecuencia no debe intereses por el lapso transcurrido.

Fusoni Hnos. y Maveroff — cobran los intereses de varias cantidades que no han sido abonadas por la construcción del telégrafo del Litoral.

Excmo. Señor:

Por la Ley sólo hay obligación de pagar intereses cuando el deudor ha incurrido en mora, y desde el día en que se hace un protesto o una reclamación judicial. O bien cuando se ha contraído una obligación a plazo fijo y se ha estipulado que desde el vencimiento del término corren intereses.

El artículo 8.º del contrato con los Señores Fusoni Hnos. y Maveroff, en que se fundan los reclamantes dice textualmente: «El Gobierno pagará al Empresario la mitad del importe de cada sección, cuando llegue al Puerto el buque con todos los materiales necesarios para cada una de ellas, y la otra mitad cuando la sección esté acabada, lista para funcionar y recibida por el Gobierno». Se ve pues, que aunque se habían designado las épocas en que debían hacerse los pagos no se había determinado el día fijo, en que éstos debían verificarse, y la obligación no es a día fijo.

El Gobierno había hecho todos los pagos que le han pedido los empresarios, sea por el arribo de los materiales, sea por conclusión de los trabajos, sin más retardo que el indispensable para recibir informes y asegurarse que lo que se le pedía era justo. Esta tramitación era necesaria. El Gobierno no hace ni puede hacer pago alguno, sin que ella preceda.

Este pequeño retardo no puede constituirlo en moroso, ni sujetarlo a pagar intereses: 1.º porque su obligación no era a día fijo, ni hay en el contrato obligación de pagarlos; 2.º porque el pequeño retardo que ha habido entre el reclamo de los empresarios y el pago, ha sido necesario y observado en todos los casos análogos, no pudiendo el Gobierno prescindir de él; y en este caso no hay obligación de pagarlos, según la disposición del artículo 220 del Código de Comercio; 3.º porque no ha habido protesto de parte de los empresarios, cuando se les retardó el pago o lo exigieron. lo cual unicamente podría fijar el día desde el cual se debían esos intereses.

Este es el primer caso que se presenta de esta naturaleza y yo no trepido en dictaminar que el Gobierno no debe los intereses que se les cobran: — 12 de Agosto de 1873.

Departamento del Interior. Se adopta como resolución el dictamen. Agosto 18 de 1873.

Excmo. Señor:

Ya he dicho a V. E., que el Gobierno no debía en este caso intereses por la pequeña demora que sufrió el pago, mientras se tomaban informes de las Oficinas Públicas; porque el Gobierno no podía hacer el pago sin estos trámites; y el artículo 220 del

Código de Comercio dice que no se deben intereses *cuando el deudor no ha podido dar o hacer la cosa a que estaba obligado*. Por esta razón el Gobierno nunca paga intereses por los días que son necesarios para averiguar si el pago que se le pide es justo.

Esta es la razón principal.

Pero ahora dicen los reclamantes que ellos no piden intereses, sino que se les entregue los bonos de puentes y caminos, en que se ha de hacer el pago, con una fecha anticipada, correspondiente, no ya al día en que pidieron el pago, sino a aquel en que el buque que traía los materiales, entró en el Puerto.

Pero esta es una anfibología, pues tan intereses son los intereses que se calculan sobre una cantidad de dinero, como los que producen aquellos bonos, sin más diferencia que éstos son más altos que el corriente, siendo del 8 %.

Por consiguiente, no encuentro razón alguna para alterar la resolución de 18 de Agosto último, y mi dictamen es que V. E. mande observarla. — 25 de Septiembre de 1873.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Septiembre 26 de 1873.

Tomo 2, pág. 307 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Están comprendidos en los términos del art. 8 de la Ley de 9 de octubre de 1865, las viudas de soldados de tropa de los Ejércitos de la Independencia, cuando éstos han sido muertos o inutilizados en acción de guerra.

Brígida Elbierna, viuda del Sargento 2.º Alejo Piñero — solicita pensión.

Excmo. Señor:

Creo que la Contaduría interpreta mal la Ley de Pensiones. Esta dice en su art. 8.º que tienen derecho a pensión *todos los Jefes y Oficiales del ejército de línea de mar y tierra de la Nación, así como los Oficiales de Guardias Nacionales, y los individuos de tropa de la misma en su caso*. Este «de la misma» sólo puede referir-

se a la Nación, porque no hay en el artículo otra palabra con que pueda concordar. Luego hay un caso en que los individuos de tropa tienen derecho a pensión.

Cuál es este caso no lo dice expresamente la Ley, pero siempre se ha entendido que es el del artículo 10; pues, según él, se concede pensión a los Oficiales de Guardias Nacionales, a los ciudadanos empleados en el ejército, a los Cirujanos y Comisarios que mueren o se inutilizan en función de guerra. Ninguno de éstos tiene derecho a pensión; pero lo adquieren por haber derramado su sangre en servicio de la patria. Si los individuos de tropa entran en el art. 8.º, en el mismo caso, están los Oficiales de Guardias Nacionales, unos y otros deben tener la pensión que les acuerda el artículo 10, cuando mueren al pie de su bandera.

Por consiguiente, mi dictamen es que habiendo muerto en acción de guerra el Sargento 2.º Alejo Piñero, su viuda tiene derecho a la pensión de la mitad del sueldo de Sargento 1.º, con arreglo a la Ley de 1866; y V. E. puede declararlo así, sin necesidad de pedir previamente certificado de permanecer viuda, pues sin la presentación de ese certificado, no se le ha de abonar la triste pensión que se le acuerda. — Setiembre 3 de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Noviembre 1.º de 1873.

Tomo 2, pág. 328 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Por juez natural, debe entenderse tanto un juez de Sección, como uno Provincial, como un Consejo de Guerra en los asuntos de sus respectivas competencias.
- II. — El delito de desertión es esencialmente militar y es ante esta jurisdicción que debe ser juzgado.
- III. — El enganche de tropas en todo el territorio de la Nación, es facultad privativa del Gobierno Central, debiendo abstenerse de toda ingerencia al respecto, los Gobernadores de Provincia.

Sobre levas y enganche de menores en Jujuy.

Excmo. Señor:

En esta reclamación del Gobierno de Jujuy para que V. E. reprima los abusos que dice ha cometido el Capitán de milicias

Don Gregorio Villegas, encargado del enganche en aquella Provincia, llevando los hombres por fuerza y no voluntariamente, atados y con esposas en las manos, hay varias cuestiones que considerar.

Primera: ¿Cuál es la verdad de los hechos denunciados?

Ninguno de los individuos que se dicen violentados, se han quejado; pero el Gobernador mandó formar dos sumarios, uno en el Departamento de la Rinconada, y otro en el de Cochinoeca, resultando del primero que todos los testigos examinados, declaran que allí han formado un partido *para hacer de las suyas* el Comandante, el Juez de Paz, el Cura, el Maestro de Escuela y dos individuos más; y que éstos persiguen y explotan al vecindario de todos modos, casando el Cura a personas contra su voluntad, no queriendo enterrar los muertos, si no le pagan; y el Juez y el Comandante, tomando sirvientes sin pagarles nada, y cobrando derechos a los que traen víveres, aunque no se alojen en el mercado: que por estas y otras razones piden todos que se mude el Comandante, el Juez y el Cura. Habiéndoseles preguntado si los enganchados habían sido llevados por la fuerza todos contestaron afirmativamente, imputando esta violencia al Comandante.

Es preciso tener presente que este sumario era levantado por el Comisario de Policía Castel Fort Marin, a quien el Coronel Uriburu había citado para responder en un Consejo de guerra por el delito de haber ocultado durante tres años, un desertor a quien tenía de peón, y haber resistido entregarlo.

El segundo sumario es una acusación contra el Comisario de Policía y Jefe Militar de Cochinoeca Don Eleodoro Ursagasti, porque siendo mayordomo del Señor Campero, les cobra a todos los vecinos arrendamientos indebidos por tierras que son fiscales, y comete otra multitud de tropelías. A estos testigos se les preguntó si los enganchados habían ido contra su voluntad, y todos contestaron que no: que Don Eleodoro Ursagasti los había mandado por fuerza y en forma de castigo.

En estos ridículos sumarios y en una solicitud de Don Saturnino Calisalla que dice que han enganchado a un hijo suyo, menor de edad contra la voluntad de ambos, se funda el Gobernador de Jujuy para hacer sus reclamos; y supongo que en los mismos documentos se ha fundado un Señor Senador para interpelar al

Gobierno en la Sesión de 21 del corriente, asegurando *que en la Provincia de Jujuy, los encargados del enganche han hecho «levas» en la campaña, arrebatando hasta menores de edad, sin consentimiento de sus padres.*

Pero a pesar de la alta categoría de los acusadores, un Gobernador y un Senador, la acusación, en cuanto se refiere al enganche, es absolutamente falsa y destituida de verdad o pretexto.

Cuando el Gobernador de Jujuy hizo conocer al Señor Coronel Uriburu los cargos que se hacían al Capitán Villegas, como encargado del enganche, y le pidió que pusiera en libertad a los enganchados, este Jefe no quiso desmentirlo con una sola palabra, sino que comisionó a un oficial para que tomara declaraciones escritas a todos los enganchados que se decían forzados; y para dar al acto todas las garantías de imparcialidad, invitó al Juez de Paz de la Ciudad de Jujuy, Don Ramón Ibáñez, y al respetable ciudadano Don Víctor Games, para que fueran al cuartel a presenciar las declaraciones.

Fueron en efecto estos individuos, y en su presencia tomó el Mayor Linares declaración circunstanciada a los diez y ocho enganchados que había llevado el Capitán Villegas.

Todos ellos han declarado uniformemente: que se han enganchado por su gusto: que nadie les ha hecho fuerza: que quieren ser soldados por el tiempo de su empeño: que son muy bien tratados y están muy contentos en el cuartel: tanto más, dice uno de ellos, cuanto que donde yo vivía no tenía ni que comer; y finalmente que todos han recibido la primera cuota del enganche de noventa y ocho pesos, cantidad que jamás han visto reunida.

Ahora vamos al niño que se dice arrebatado a su padre. Este empieza su declaración diciendo que se llama Manuel Calisalla, *de veinte y dos años*, natural de Santa Catalina y soldado de enganche: que el Capitán Villegas no le ha forzado a venir: que él ha venido voluntariamente: que tiene voluntad de ser soldado y servir el tiempo que se ha comprometido: que está contento en el cuartel y se le trata bien; y que le ha sido entregada la suma de noventa y ocho pesos, como primera cuota del enganche.

Se ve, pues, por esta declaración y por la copia de su contrato que acompaña, que no es un niño menor, como dice el Señor Senador interpelante, sino un hombre mayor de edad, y que se ha engan-

chado libremente, y que está muy contento con el trato del cuartel y la suma de dinero, que jamás pudo reunir en su oficio de jornalero de Santa Catalina.

Luego que se concluyó el sumario, el Juez de Paz dirigió una nota al Coronel Uriburu, en que se encuentra el párrafo siguiente:

«En consecuencia, he presenciado y firmado todas las declaraciones tomadas por el Fiscal Señor Linares, a los soldados que han venido últimamente enganchados y conducidos por el Capitán Don Gregorio Villegas, de todas las cuales resulta que son voluntarios todos los enganchados».

El ciudadano Don Víctor Games dirigió otra nota al mismo Coronel, que contiene la declaración siguiente:

«El resultado ha sido presenciar y firmar todas las declaraciones con el Señor Juez de Paz y comisionados militares para la instrucción de la sumaria, de la que resulta que todos los enganchados declarantes han venido por su gusto con el Capitán Villegas».

Es verdad que este Capitán condujo algunos individuos atados y con esposas en las manos; pero éstos no eran enganchados, sino desertores de los cuerpos de línea, a quienes habían logrado descubrir y aprehender.

Al lado de la declaración de los mismos interesados, se ve que los datos que suministran los sumarios mandados formar por el Gobernador de Jujuy, no son sino embustes y chismes de aldea, urdidos para acusar empleados provinciales, con quienes parece que los ciudadanos estaban fastidiados. Resulta también que el Gobernador de Jujuy se halla en una situación desairada por haber procedido con una ligereza y falta de circunspección poco propia de su puesto, y por haberse mezclado en asuntos que no le importan ni le competen.

Sobre esta primera cuestión, queda pues, comprobado que en Jujuy no ha habido las *levas* que se dice; y que todos los enganchados se han comprometido voluntariamente y con mucho gusto.

Segunda cuestión: ¿tiene el Coronel Uriburu facultad para hacer juzgar en un consejo de guerra al Comisario de Policía Castel Fort Martín, por ocultación y amparo de desertores?

El Señor Gobernador de Jujuy, constituyéndose sin misión alguna en Defensor o Procurador del acusado se opone a esto dicién-

do que el Comisario debe ser demandado ante el Juez de Sección, que es su Juez natural. Y parece que el Senador interpelante participa de la misma opinión, y juzga que es un abuso someter al Comisario a un consejo de guerra, y pregunta: *Cuáles son las medidas que el Poder Ejecutivo Nacional ha tomado para castigar esos avances y evitar su repetición.*

Parece que ni el Señor Gobernador ni el Señor interpelante conocen nuestras leyes, ni el orden administrativo del país. Tan Juez natural es el Juez de Sección como el Juez Provincial, como el consejo de guerra en los asuntos de su respectiva competencia. Un Juez Civil no puede conocer del crimen de ocultación de desertores, porque ninguna Ley civil define ni castiga este delito: él sólo está designado y penado en las ordenanzas militares, que ningún Juez Civil puede interpretar ni aplicar.

Es por esto que estas Ordenanzas en el tratado 8.º, tít. 3.º, artículo 1.º disponen lo siguiente: «Toda persona de cualquier especie, sexo o calidad que sea, que contribuyere a la desertión de tropa de mi ejército, aconsejando o favoreciendo este delito, bien sea ocultando al desertor, comprándole su ropa o armamento, o dándole otro de disfraz, deberá ser juzgado por la jurisdicción militar de que dependa el desertor favorecido, y siempre que ésta reclame a los reos de semejante crimen, estará obligada a entregarlos a la justicia natural de que dependa».

El Coronel Uriburu tiene, pues, no sólo la facultad, sino el deber de sujetar a un consejo de guerra al Comisario Castel Fort Marín, y procurar que se castigue un crimen tan disoluble. Y el Gobernador, en lugar de defender al Comisario, debía haberse apresurado a entregarlo a la jurisdicción militar en cumplimiento del deber que la Ley le impone.

Ya V. E. resolvió un caso idéntico en 1869, a consulta del Señor General Arredondo, mandando que un ciudadano fuera juzgado por un consejo de guerra por haber apadrinado desertores, cuyo expediente ha remitido en copia el Coronel Uriburu al Gobernador de Jujuy.

Este es un delito esencialmente militar y él debe ser juzgado por la jurisdicción militar, bien sea militar o paisano, o funcionario o particular, mujer o clérigo el que lo cometa.

La tercera cuestión se reduce a examinar la extraña e ilegal conducta que ha observado en este asunto el Gobernador de Jujuy, de quien, como agente natural del Presidente, debía esperarse que protegiera y facilitara el enganche en su Provincia, en vez de perseguirlo, como lo ha hecho, por todos sus medios.

¿Quién ha hecho a este Gobernador, Procurador o Abogado de todos los jujeños para reclamar sus derechos que se dicen agredidos? ¿Quién le ha dado facultad para intervenir en el enganche de tropas, que por la Constitución sólo compete al Presidente de la República, y avanzarse hasta pedir oficialmente que se pongan en libertad los enganchados?

El deberá saber que el Presidente de la República gobierna a los jujeños, como a todos los ciudadanos argentinos, con plena jurisdicción constitucional en los asuntos de su competencia: que sólo a él compete reglamentar el modo cómo se han de ejecutar las leyes nacionales, y velar sobre el modo cómo se cumplen. Toda ingerencia oficiosa de los Gobernadores de Provincia en estos negocios, es una impertinencia que estorba y trastorna el orden administrativo. ¿Qué diría el Gobernador de Jujuy si el Presidente intentara darle reglas para organizar la policía de su Provincia, o se hiciera intérprete de las quejas de sus ciudadanos contra sus comisarios? Diría que se metía en cosas que no le competían. Pues eso mismo debe decirse del empeño que ha manifestado en intervenir en la forma del enganche y en hacer reclamaciones por supuestos agravios.

El Presidente de la República tiene abierto su despacho para oír las quejas de todo ciudadano que haya sido injuriado por sus agentes; y siempre ha dado pruebas de tener más respeto por los derechos individuales que muchos Gobernadores de Provincia. No hay necesidad alguna de que estos Gobernadores tomen a su cargo, el transmitir oficialmente estas quejas; ni el Gobierno Nacional debe reconocerles jamás esta calidad de procuradores oficiosos, porque ella perturbaría el orden administrativo, el respeto que se deben las autoridades públicas, y recargaría a las oficinas con mucho trabajo inútil, como ha sucedido en el caso presente.

En esta virtud, soy de dictamen que V. E. haga entender al Señor Gobernador de Jujuy, que no le compete el ingerirse en el enganche de tropas, y que en cumplimiento de la Ley que he cita-

do, debe inmediatamente poner a disposición del Coronel Uriburu al Comisario de Policía Castel Fort Marín, para que sea juzgado por el crimen de que se le acusa; previniendo al Coronel Uriburu que si el Gobernador no pone a su disposición al individuo citado, lo haga él aprehender por sí y lo sujete a un consejo de guerra ordinario. — Septiembre 18 de 1873.

Tomo 2, pág. 340 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde conceder el «pase» a una Bula Pontificia que instituye una autoridad eclesiástica en la República, no obstante que en ella el Santo Padre declara hacer los nombramientos «motu proprio».
- II. — La aprobación de las Bulas en tales condiciones no afecta la protesta que el Gobierno Nacional debe formular en defensa de los derechos del Patronato.

**Bulas instituyendo Arzobispo de Buenos Aires, al Doctor
Federico Aneiros.**

Excmo. Señor:

Habiendo sido elegido por el Gobierno de la República el Dr. Don Federico Aneiros para Arzobispo de Buenos Aires, y presentado en forma al Sumo Pontífice con arreglo a la Constitución Política, no hay inconveniente para que V. E. aconseje que se otorgue el **pase** a las Bulas que lo instituyen canónicamente en aquella calidad, fundándose en aquella presentación del Patrono.

En la Bula no se hace mención de esta intervención del Patrono, que es indispensable por derecho, y por el contrario, se dice que el Papa hace este nombramiento por su autoridad, **sin que nadie fuera de Nos haya podido o pueda mezclarse en esto**. Pero como esto no es cierto, ni conforme a la verdad de los hechos, bastaría protestar contra semejante doctrina para salvar los derechos del Gobierno Argentino, sin demorar por ello la institución del Arzobispo. — Septiembre 19 de 1873.

*Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con el dictamen.
Septiembre 26 de 1873.*

Tomo 2, pág. 349 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Corresponde que el Capitán de un barco justifique debidamente en el término que fijan las Ordenanzas la avería que invoca, a efectos de liquidar los derechos aduaneros.

E. March y Cía., piden se les exima del pago de unos derechos.

Excmo. Señor:

No habiendo el Capitán hecho protesta que justifique la avería, ni habiendo él, ni el consignatario, avisado a la Aduana de la que tenía esta partida de aceite en el término de 48 horas que fijan las Ordenanzas, la Aduana no puede reconocer la verdad ni la legitimidad de esta avería.

Es, por otra parte, inconcebible que un accidente de mar que no ha roto el buque haya podido vaciar las latas de aceite que venían dentro de 102 cajones, dejando los cajones enteros. Lo probable es que el aceite ha sido sustraído después de estar en el puerto.

En casos como éste, las Ordenanzas mandan que la Aduana no reconozca averías, sino que cobre los derechos como si los cajones estuvieran llenos, con la destara de tarifa.

Mi dictamen es que así se ordene, en cumplimiento de la Ley.
— 19 de Setiembre de 1873.

Excmo. Señor:

La protesta que ahora se presenta, y que ha debido presentarse desde el principio del reclamo, prueba que la barca «Juanita» encontró muchos temporales y malos tiempos en su viaje desde Bayona, en el que ha tardado cuatro meses: principalmente en los primeros días de su salida, en que perdió sucesivamente tres timones, una parte de su velamen, y rompió sus mástiles; siendo obligada a refugiarse en el Puerto de Pasajes para salvar las vidas.

Ha sido tan sacudido el cargamento por la violencia del mar, que por la bomba salía el vino y el aceite de que se componía.

Está, pues, debidamente justificada la avería; y por consiguiente la Aduana sólo debe cobrar derechos por los cajones que han resultado enteros después del rehínche practicado; pero sin

acordar descuento por mermas, que en este caso no tiene lugar; y así se habrá pagado el derecho por la mercancía que realmente se ha introducido. — 19 de Noviembre de 1873.

Ministerio de Hacienda. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Noviembre 23 de 1873.

Tomq 4, pág. 361 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el Poder Ejecutivo declare, que el aumento de capital de la Compañía del Ferrocarril Central Argentino, no puede hacer variar en nada las obligaciones del Gobierno en lo que se refiere a la garantía acordada por el mismo, al mencionado Ferrocarril.

El Agente del Gobierno en Londres, da cuenta de que la Compañía del Ferrocarril Central Argentino, piensa aumentar su capital.

Excmo. Señor:

El modo que emplee la Compañía Central Argentina para levantar el capital necesario para hacer las estaciones y poner el tren rodante que falta, es asunto de la exclusiva competencia e interés de los accionistas, y el Gobierno sólo puede tomar participación en él como accionista por medio de su representante en Londres.

Pero con esta Compañía es necesario entenderse con perfecta claridad para evitar luego discusiones y reclamos.

Es evidente que esta nueva suma que se intenta levantar, siendo destinada a poner el camino en estado de servicio, que nunca ha tenido, no puede ser cargada ella a sus intereses sino en la cuenta de capital, y, estando ya convenido entre el Gobierno y la Compañía que, para el efecto de la garantía sólo se reconocerá un capital de 6.400 libras por milla de camino, esta nueva erogación en nada debe variar este convenio ni figurar por consiguiente en las cuentas para deducir la garantía debida; porque debe considerarse incluida en las 6.400 libras reconocidas como capital.

Por consiguiente, mi dictamen es que V. E. se sirva declararlo así al Director Residente en Buenos Aires y comunicarlo a su Agente en Londres, encargado de representar sus acciones en la Compañía. — 7 de Noviembre de 1873.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con el dictamen. Noviembre 10 de 1873.

Tomo 2, pág. 330 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde la redacción de un contrato especial, en los términos de la Ley de 30 de setiembre de 1873 —concesión F. C. de Concordia a Gualeguaychú— en que se especifique claramente cuáles son las condiciones que los contratistas deben llenar para tener derecho a la garantía del Gobierno y el modo cómo se ha de pagar ésta.

Los concesionarios del Ferrocarril de Concordia a Gualeguaychú, piden la celebración del contrato en los términos de la Ley que les acuerda el 7% de garantía .

Excmo. Señor:

Creo más conveniente que se redactara un contrato especial, en que se especificara claramente cuáles son las condiciones que los contratistas deben llenar para tener derecho a la garantía del Gobierno, y el modo cómo se ha de pagar ésta.

Debe por ejemplo, explicarse que la garantía sólo se calculará sobre el costo efectivo de las obras, avaluadas por los Ingenieros Oficiales, con tal que éste no pase de 24.000 ps. fts. por kilómetro.

Que la garantía no podrá cobrarse sino cuando las diversas secciones estén perfectamente concluidas, con las estaciones y tren rodante necesario al servicio. Que la garantía cesará si se interrumpe el tráfico, o no se hace buen servicio del camino por culpa de los empresarios. Y finalmente, que los empresarios cumplirán las obligaciones que les impone la Ley sobre Ferrocarriles, de 1873.

El redactar un contrato con estas explicaciones y las demás que V. E. considere oportunas sobre el modo cómo han de justificar las cuentas del producto anual del ferrocarril lo considero muy conveniente para evitar cuestiones futuras, y desinteligencias desagradables. — Noviembre 20 de 1873.

Departamento del Interior. Resolución en contra de lo dictaminado. Enero 12 de 1874.

Tomo 2, pág. 357 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Para acogerse a los beneficios de la Ley de 4 de Julio de 1872, es necesario tener derecho a pensión en los términos de la ley general de la materia.

Cruz Gramajo de Zelada, pide pensión

Excmo. Señor:

Siendo mi dictamen contrario al del Señor Auditor y al de la Contaduría, necesito explicar las razones en que me fundo.

El Capitán Don Juan Zelada pidió y obtuvo en 9 de Octubre de 1816 su licencia y absoluta separación del servicio, como se prueba por la cédula de retiro, cuya copia auténtica precede a esta foja. Y disponiendo el artículo 20 de la Ley de Pensiones de 1865, que las viudas de los Oficiales que hayan sido separados legalmente o hecho dimisión de su empleo, no tengan derecho a pensión es evidente que no lo tiene la Señora viuda del Capitán Zelada.

Esta es la razón decisiva de la cuestión.

La Ley de 1868, que premió a los Guerreros de la Independencia excluyó a los reformados que no habían vuelto al servicio.

La de 4 de Julio de 1872, que invoca la reclamante, dice textualmente: «Las viudas de los Guerreros de la Independencia, que, con arreglo a la Ley de Pensiones, tengan derecho a ella, gozarán por pensión el sueldo íntegro de sus causantes» Y no teniendo Doña Cruz Gramajo derecho a pensión por la ley general, es claro que no le comprende la Ley de 4 de Julio.

Sin embargo la reclamante cree tener derecho a pensión por la letra del último inciso del artículo 12 de la Ley de 1865, y la Contaduría apoya esta pretensión, fundándose en un párrafo trunco de un dictamen mío, dado en un caso completamente diferente del actual.

El artículo 12, que se cita dice que: «tendrán derecho a retiro los militares de la guerra de la Independencia y del Brasil, y los que hayan militado en los Ejércitos Libertadores, siempre que se incorporen al Ejército Nacional dentro de un año de la promulgación de la Ley presente; y a pensión las familias de los que hubieren fallecido con anterioridad a esta Ley».

Este último párrafo quiere decir que todas las viudas de los Oficiales que han andado con Lavalle o Paz, o han hecho la campaña del Brasil, deben tener pensión, aunque no les corresponda por las demás disposiciones de la Ley?

Tal interpretación sería absurda, porque haría a la Ley contradictoria, y anularía sus demás disposiciones; siendo la primera regla de interpretación que la cláusula de una Ley debe entenderse de modo que quede incólume y válida toda su disposición.

No, Señor: lo que esta cláusula significa, es que las viudas de los Oficiales de la Independencia, del Brasil o de los Ejércitos Libertadores, tendrán derecho a arreglar sus pensiones por esa Ley, aunque sus causantes hayan muerto antes de su promulgación; y por consiguiente, aquéllas a quienes la Ley no les reconozca derecho a pensión, no deben tenerla.

Esta es la única interpretación racional de esa cláusula, porque es la única que deja subsistente la Ley.

En consecuencia, mi dictamen es que habiendo sido el Capitán Zelada separado legalmente del servicio por dimisión que él mismo hizo de su empleo, su viuda no tiene derecho a pensión alguna, y no debe hacerse lugar a su solicitud. — 26 de Noviembre de 1873.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución en contra de lo dictaminado. Abril 1 de 1874.

Las reclamaciones por perjuicios que se dicen causados por una Ley del Congreso, deben presentarse al mismo Congreso y no al Poder Ejecutivo que carece de facultades para corregir o modificar los actos del Poder Legislativo.

El empresario del Ferrocarril de Santa Fe a las Colonias del Oeste, reclama de otra concesión análoga.

Excmo. Señor:

El Señor Zimmermann se queja de que por una Ley del Congreso se han violado sus derechos adquiridos. Pero como el Poder Ejecutivo no tiene facultad para corregir o modificar los actos del Congreso, V. E. no debe tomar conocimiento de este asunto, y el Señor Zimmermann puede acudir directamente al Congreso, cuyas oficinas están abiertas a las reclamaciones de los ciudadanos.

Esto es lo que ha debido hacer desde un principio y no perder el tiempo en reclamos impertinentes al Gobierno de Santa Fe o al Nacional, que nada tiene que hacer en este asunto. — Diciembre 1 de 1873.

Departamento del Interior. Se adopta como resolución lo dictaminado. Diciembre 3 de 1873.

Tomo 2, pág. 360 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Empréstitos forzosos hechos por españoles durante la Guerra de la Independencia.

Consulta del Administrador de Rentas de Rosario

Es sabido que durante la guerra de la Independencia, ya por resolución de la Junta, del Director Supremo, del General en Jefe o del Gobernador Intendente, se impusieron contribuciones forzosas a todos los habitantes de las Provincias Unidas, sin atender a la nacionalidad a que pertenecían y que sólo se tenía en cuenta la fortuna, para que en proporción de ella hiciera un desembolso en dinero o bienes para las exigencias del ejército.

Generalmente una Comisión de ciudadanos designaba la cantidad que debía desembolsar el contribuyente dentro del tercer día.

Este impuesto recaía, indistintamente, en naturales o en españoles peninsulares.

Hecho el desembolso, la Comisión o el Tesorero daban un recibo o testimonio del préstamo.

Estos créditos de Buenos Aires, así contraídos, se han pagado unos con libranzas contra la Tesorería de Buenos Aires, otros se han consolidado en virtud de la Ley de 15 de Febrero de 1823 y Decreto de 16 de Marzo del mismo año.

Posteriormente, por el Tratado celebrado con España en 1863, se mandó pagar en Fondos Públicos la deuda de españoles que resultara de secuestros y confiscaciones hechos por el Gobierno patrio durante la guerra de la Independencia.

Creyéndose comprendidos en el Tratado con España, se presentaron muchos créditos que resultan de empréstitos forzosos hechos por españoles durante ese tiempo, pero éstos fueron rechazados por no proceder de confiscaciones o secuestros, habiéndose manifestado en las vistas fiscales del Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación que estos créditos estaban comprendidos en la liquidación de la deuda general.

Más tarde vino la Ley que mandó liquidar la deuda de la Independencia que no se hubiera liquidado en virtud de la Ley de 1826 y no obstante que en su letra ni en su espíritu no se ha excluido deuda alguna, se resolvió que los créditos de españoles, procedentes de empréstitos voluntarios o forzosos, no fueran acompañados en la Ley de 29 de Septiembre de 1873.

Véase, ahora, la consulta que a este respecto hizo el Administrador de Rentas de la Provincia de Salta y la Resolución dictada.

El caso es importante y hace jurisprudencia administrativa, para asuntos análogos.

Salta, Diciembre 9 de 1873.

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación:

Tengo el honor de dirigirme a V. E. al objeto de llevar a su conocimiento que habiéndose publicado la Ley de 29 de Setiembre del corriente año, sobre la deuda civil y militar de la Guerra de la Independencia, algunos individuos han creído que en el artículo 1.º de dicha Ley están comprendidos todos los auxilios que se dieron en aquella época por donativos o contribuciones forzosas, ya sean hechas por americanos o españoles peninsulares y es en esta virtud, que algunos de estos últimos me han presentado sus documentos, que me he abstenido de aceptarlos hasta que reciba de V. E. una autoriza-

ción expresa para ello; por creer que los créditos de españoles, aunque sean contraídos en la mencionada época, corresponden a la Ley ya citada de 29 de Septiembre último.

V. E. se servirá, si lo tuviere a bien, disponer se me aclare este asunto.

Dios guarde a V. E.

Valentín Delgadillo

Esta nota fué pasada en vista al Sr. Procurador General de la Nación quien se expidió dando el siguiente dictamen.

Excmo. Señor:

Los créditos de españoles están exclusivamente regidos por el Tratado celebrado con España, sujetos a la forma y a los términos en él establecidos.

A ellos no ha podido, por esta razón, referirse la Ley de 29 de Septiembre último.

Indudablemente no están comprendidos en ella.

Esta Ley sólo habla de los argentinos, siendo, como es, la reparación de la injusticia que se estaba cometiendo en abonar los créditos de Españoles, Ingleses y Franceses, mientras que los Argentinos estaban fuera de la liquidación.

Un régimen tan extravagante no debía subsistir por más tiempo y por eso se dictó la Ley de 29 de Septiembre. — Diciembre 22 de 1873.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Setiembre 22 de 1873.

Tomo 4, pág. 382 — Inf. de los Cons. Leg. del P. E.

=====

La Ley de 29 de Setiembre de 1873, sobre deuda civil y militar de la Guerra de la Independencia, sólo ampara a ciudadanos argentinos.

El Administrador de Rentas de Salta, sobre deuda civil y militar de la Guerra de la Independencia.

Excmo. Señor:

Los créditos de españoles están exclusivamente regidos por el Tratado celebrado con España, sujetos a la forma y a los términos en él establecidos. A ello no ha podido por esta razón referirse la Ley de 29 de Setiembre último. Indudablemente no están comprendidos en ella. Esta Ley sólo habla de los argentinos, siendo como es la reparación de la injusticia que se estaba cometiendo en abonar los créditos de españoles, ingleses, franceses y sardos, mientras que los argentinos estaban fuera de la liquidación. Un régimen tan extravagante no debía subsistir por más tiempo y por eso se dictó lo Ley de 29 Setiembre. — 22 de Diciembre de 1873.

Ministerio de Hacienda. Se adopta como resolución lo dictaminado. Enero 16 de 1874.

Tomo 2, pág. 366 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Por la Ley de 14 de Setiembre de 1863, el Gobierno Nacional debe prestar el auxilio de la fuerza pública, solicitada por los Jueces de Sección para el cumplimiento de las sentencias.

Juez Federal de Buenos Aires — pedido de fuerza para ejecutar una sentencia dictada contra la Municipalidad de Buenos Aires.

Excmo. Señor:

En virtud del artículo 13 de la Ley de 14 de Setiembre de 1863, sobre jurisdicción de los Tribunales Nacionales, el Gobierno está obligado a prestar el auxilio de fuerza que le pida el Juez de Sección para dar cumplimiento a sus sentencias.

En esta virtud y estando acampado un Regimiento de Caballería frente a la chacra de Bollini, lugar inmediato al terreno de

Roncoroni, donde se ha de ejecutar la sentencia, puede V. E. dar Orden al Jefe de aquel Regimiento preste el auxilio que se le pida en nombre del Juez de Sección Dr. Ugarriza. Enero 10 de 1874.

Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Febrero 12 de 1874.

Tomo 4, pág. 393 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley de 2 de octubre de 1873 —sobre pensión militar de sueldo íntegro— es una excepción a la regla general, porque da a los Oficiales de Milicias derechos que les niega la Ley General de Pensiones, por lo que sus disposiciones deben restringirse y no ampliarse en su interpretación.

Nicolasa Torres — pide pensión como viuda del Capitán Don Juan Bautista Hoyos.

Excmo. Señor:

El reclamante ha probado con la exhibición de los despachos, que Don Juan Bautista Hoyos fué Capitán de los Cuerpos de Milicias de Salta; siendo el primero del año 1818. Pero esto solo no basta para que su viuda tenga derecho a pensión.

La Ley de 2 de Octubre último no ha dicho que todos los que fueron Oficiales de milicias durante la guerra, deben ser considerados como guerreros de la Independencia, lo que habría sido un exceso injustificable.

Yo mismo podría pretender a este honor, porque he sido Oficial de milicias desde 1821.

Lo que esa Ley dice textualmente en su artículo 1.º es que serán comprendidos en la lista de los guerreros de la Independencia «los milicianos que a las órdenes del General Güemes y otros Jefes combatieron en defensa de la Independencia de la Nación».

Pero en este expediente no hay prueba alguna de que el Capitán Hoyos asistiera a ningún combate, o función de guerra; y esto es indispensable para que su viuda tenga derecho a pensión por la Ley de 2 de Octubre.

Esta Ley es una excepción a la regla general, porque da a los Oficiales de milicias derechos que les niega la Ley General de Pensiones, y por consiguiente, su disposición no debe ampliarse, sino restringirse en su texto.

Por consiguiente, mi dictamen es que V. E. devuelva este expediente al interesado para que exhiba pruebas suficientes de que el Capitán Hoyos se ha encontrado en alguna batalla contra los españoles. — 17 de Enero de 1874.

Excmo. Señor:

Aunque el Señor Coronel Uriburu no precisa en que combate se encontró el Capitán Hoyos, sino que se limita a decir que eran diarios los combates que sostenía la vanguardia, creo que V. E. puede dar probado el punto y conceder la pensión que se solicita. 6 de Agosto de 1875.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Agosto 9 de 1875.

Tomo 4, pág. 365 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La cláusula penal del art. 24 de la Ley de Patentes Industriales, es sólo aplicable en el caso de no cumplirse lo preceptuado en el art. 15 de dicha Ley; no es aplicable por analogía a otros supuestos.

Florentino Muñiz — reclama de una multa que le ha impuesto la Oficina de Patentes por su invento «Caño Inodorífico».

Excmo. Señor:

La Ley de Patentes industriales no autoriza la multa que se ha impuesto al Señor Muñiz en este caso.

En su artículo 24 dice: «Cuando el solicitante no cumpliera con las prescripciones del artículo 15, se le negará la patente, en cuyo caso se le devolverá la mitad de la suma oblada, perdiendo la otra mitad por vía de multa». Pero el Señor Muñiz ha cumplido exactamente con todo lo prevenido en el artículo 15. En lo que ha errado es en solicitar por un mes se le reserve el derecho de pedir

el aumento del tiempo de la patente, lo que no se puede conceder, atento lo dispuesto en el artículo 19.

El comisario, creyendo que este artículo es una ampliación del 15, se ha creído autorizado para imponer la multa. Si tal hubiera sido el espíritu de la Ley, lo habría dicho en el artículo 24. Pero como se ha visto, este artículo solo pena las violaciones del artículo 15, y las cláusulas penales no pueden aplicarse por analogía a hechos que ellas no comprenden expresamente.

No estando pues penada la violación del artículo 19, no hay razón para imponer la multa. Y por consiguiente, mi dictamen es que declarando V. E. que no debe imponerse la multa, pase el expediente a la Oficina de Patentes para que se extienda por 5 años lo que se pide en la solicitud de 23 de Diciembre último. — 6 de Marzo de 1874.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con el dictamen. Mayo 11 de 1874.

Tomo 2, pág. 368 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Deben presentarse los comprobantes originales de un crédito, para obtener su cobro del Gobierno Nacional.

Reclamo de Don Florencio Pondal — por perjuicios ocasionados por el Ejército.

Excmo. Señor:

Por lo que dispone la Ley, y por razones obvias de buena administración, no se puede pagar esta deuda sino en vista de los documentos originales que se han pedido y que el Gobierno de Corrientes no tiene derecho para retener en su poder.

En esta virtud, mi dictamen es que V. E. mande entregar al reclamante este expediente para que presente los documentos originales del crédito. — Marzo 13 de 1874.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Marzo 21 de 1874.

Tomo 4, pág. 385 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Los grados militares conferidos por autoridades Provinciales que no han sido reconocidos por el Gobierno Nacional, no pueden hacerse valer a los efectos del otorgamiento de pensión.

Las hijas del Coronel Don Gaspar López — piden pensión.

Excmo. Señor:

Las cartas del General Belgrano que se presentan y los informes de los jefes militares, prueban suficientemente que Don Gaspar López, prestó importantes servicios en la Guerra de la Independencia, en su grado de Sargento Mayor, que le confiere el despacho presentado del Director Supremo de las Provincias Unidas.

Después de concluída aquella guerra, el Gobierno de Salta le confirió el grado de Coronel de la Provincia; pero no habiendo sido reconocido por la Nación en este grado, no pueden sus hijas pretender que tuviera otro grado que el de Sargento Mayor, con que sirvió en la Guerra de la Independencia.

En consecuencia, mi dictamen es que se conceda a los solicitantes como hijas solteras de Don Gaspar López, la pensión de sueldo íntegro, de Sargento Mayor, conforme a la Ley de 2 de Octubre de 1873. — 23 de Marzo de 1874.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Marzo 27 de 1874.

Tomo 4, pág. 303 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Producida la vacante de Inspector y Comandante General de Armas, es deber del Ayudante General de la Inspección, el asumir sus funciones y si el Poder Ejecutivo cree que le corresponde a este último el sueldo del primero, debe así declararlo, ordenando que el aumento corra desde el día en que se le conceda.

Coronel Rufino Victorica — diferencia de sueldos.

Excmo. Señor:

Una vez vacante el puesto de Inspector General era del deber del Ayudante General de la Inspección el entrar a desempeñar sus funciones.

La diferencia de sueldo de uno y otro puesto es solo de 25 pesos, como lo hace notar la Contaduría en su precedente informe.

Pero si V. E. cree que el Coronel Victorica debe gozar del sueldo de Inspector porque hoy desempeña sus funciones, puede así declararlo, ordenando que el aumento corra desde el día en que se le conceda. —Abril 27 de 1874.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Mayo 4 de 1874.

Tomo 4, pág. 404 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que el Poder Ejecutivo apruebe los estatutos de una Sociedad, si en los mismos se expresa que esta última tiene su domicilio en el extranjero y en el país sólo una Oficina para que se entienda con el Gobierno.

Los Representantes del Ferrocarril de Buenos Aires a Campana — piden la aprobación de los estatutos de la Compañía.

Excmo. Señor:

Estos Estatutos establecen en Londres el domicilio de la Sociedad, lo que es contrario a la concesión hecha. Una Sociedad que pone su capital y ejerce sus operaciones en la República Argentina, no puede tener otro domicilio que esta República. En los Estatutos se dice que tendrá una Oficina en Buenos Aires para entenderse con el Gobierno. Esto no basta: es preciso que la Compañía declare que constituye aquí su domicilio y se sujeta a las leyes y autoridades del país en todas las cuestiones que puedan originarse. Tal es la letra y el espíritu de la concesión.

Se dice también que en las asambleas cada socio tendrá tantos votos cuantas acciones posea. Esto está en oposición a nuestra Ley sobre Sociedades Anónimas, que limita el número de votos que puede tener un accionista.

Corregidos estos defectos, no encuentro objeción a los presentes Estatutos. — Abril 28 de 1874.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con el dictamen. Julio 25 de 1874.

Tomo 2, pág. 372 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Entra dentro de la categoría de industria, en los términos de la Ley de Patentes Industriales, un sistema de libros para Oficinas Públicas.

Pillado y Peusser — solicitan se revoque la resolución de la Oficina de Patentes negándoles la patente que solicitaban para un sistema de libros.

Excmo. Señor:

Yo considero que el principal objeto de la Ley de Patentes es conferir a los autores de todo nuevo descubrimiento en todo género de industria, es decir, en todo lo que sea útil al hombre o a la sociedad, la propiedad exclusiva de su idea, para que la exploten por un tiempo determinado, según expresamente se dispone en el artículo 1.º.

Parece que el descubrimiento por que ahora se pide patente, mejorará considerablemente las oficinas públicas, ahorrando empleados y trabajo, y estableciendo un orden perfecto, en el despacho. Si las oficinas adoptan ese sistema, como conveniente, no veo razón para que hayan de aprovechar de la invención, sin remunerar al inventor; no veo la razón porque el inventor no sea dueño exclusivo de su idea.

Se dice que esta invención no puede entrar en la categoría de industria porque no produce productos materiales fabricados de materias primas; pero esto me parece que es restringir demasiado el espíritu de la Ley. Industria es todo lo que mejora la condición del hombre, y este invento economiza sueldos de empleados y trabajo; es indudable que da productos materiales de consideración.

Si el invento no produce las ventajas que se ofrecen, el no será adoptado por las oficinas públicas, y en ese caso la patente sería nula para el inventor. Pero si esas ventajas son positivas, el inventor debe ser remunerado.

Soy pues de dictamen que se dé a los reclamantes la patente que piden. — Mayo 5 de 1874.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con el dictamen. Julio 6 de 1874.

Las Pensiones Militares, deben correr desde el día en que se concedan.

Francisco Zacarías de la Cruz — pide se le liquiden los sueldos devengados desde la promulgación de la Ley de 24 de Septiembre de 1868.

Excmo. Señor:

Mi opinión ha sido siempre que estas pensiones solo deben correr desde el día en que un individuo es reconocido como Guerrero de la Independencia, porque solo empieza entonces su derecho a la pensión. No se oponen a esto los términos de la Ley, porque ello solo importa que no puedan cobrarse haberes anteriores al día de su sanción.

Pero si como dice la Contaduría, V. E. ha declarado por punto general que la liquidación de la pensión se haga desde la promulgación de la Ley, no hay razón para hacer una excepción en este caso. — Año 1874.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de conformidad al dictamen. Mayo 15 de 1874.

Tomo 2, pág. 323 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los interventores federales, son representantes del Presidente de la República y por ello no pueden ser demandados ante la justicia, acerca del modo como cumplen su cometido, de lo cual sólo es juez el Poder Ejecutivo Nacional.

Varios vecinos de La Rioja — se quejan de la intervención del **Interventor Nacional** en las mesas electorales.

Excmo. Señor:

Es indudable que un comisionado para intervenir por parte de la Nación en una Provincia, representa al Presidente de la República, y por tanto no puede ser demandado sobre el modo como cumple sus instrucciones, de lo cual sólo es Juez el Poder Ejecutivo.

Pero hace ya mucho tiempo que el Gobernador legal de La Rioja está en su puesto y ejerciendo su autoridad sin contradicción.

Por consiguiente, la comisión del General Ivanowski ha cesado de hecho por haber desaparecido los desórdenes que la motivaron, y ni él ni el Gobierno Nacional tienen derecho para intervenir en los negocios provinciales de La Rioja. Ese General no es hoy sino el Jefe de un Cuerpo Militar, sujeto como todos a la jurisdicción de los Jueces.

Por tanto, V. E. debe ordenarle que acate la jurisdicción del Juez, y responda a la demanda que contra él se ha interpuesto.

Pero si V. E. creyese que no debe resolver en este sentido, no por eso deben quedar impunes las graves faltas de que se acusa al citado General. La protección pública dada a uno de los partidos electorales, y el haber mandado el día de la elección, fuerza armada a todas las mesas, en contravención expresa de la Ley, sin que las mesas le pidieran auxilio, y a pesar de que le pidieron retirara la tropa, son actos que deshonoran y desacreditan al Poder Nacional. Son ellos tales, que es muy probable y justo que el Congreso declare nula la elección de La Rioja. Es preciso pues, que el Gobierno desapruebe esta conducta del General Ivanowski de un modo público imponiéndole un castigo correspondiente a su falta, o bien que lo deje juzgar por la justicia ordinaria. Tal es mi dictamen, salvo el juicio de V. E. — 8 de Junio de 1874.

Tomo 2, pág. 386 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No es procedente la reclamación hecha al Gobierno por cobro de honorarios en virtud de defensas hechas por abogados a pobres de solemnidad.

El Doctor Marcelino Aguirre, cobra honorarios como Defensor oficioso de pobres de solemnidad procesados.

Excmo. Señor:

Es la primera vez que veo cobrar honorarios por defender pobres ante los Tribunales y cobrarlos al Gobierno, que ninguna intervención tiene en este negocio.

Los únicos honorarios que la Ley manda pagar al Gobierno, son los de los Señores Conjueces de la Corte Suprema; no hay Ley alguna que le mande pagar los de los defensores de pobres acusados.

Lo que manda la Ley 16, tít. 16, lib. 2.º, de las Recopiladas, es que los Abogados están obligados a defender a los pobres gratuitamente: *de gracia y por amor de Dios* son las palabras de la Ley.

Sería curioso preguntar al Juez Ugarriza en qué fundamento legal se ha apoyado para mandar regular estos honorarios y para pretender que el Gobierno los pague.

Debo advertir a V. E. que no sólo el Doctor Aguirre es el que ha defendido en Buenos Aires pobres de solemnidad, sino muchos otros abogados y en las Provincias muchísimos; y que si el Gobierno tuviera condescendencia en este caso, levantaría una nube de acreedores inesperados y tendría que agregar al presupuesto una cuantiosa suma con este objeto.

Conociendo el carácter modesto y escrupuloso del Doctor Aguirre, no puedo creer que haya hecho esta solicitud de motu proprio, sino por malos consejos.

En consecuencia, soy de dictamen que V. E. conteste al Doctor Ugarriza que no hay Ley alguna que le obligue a pagar estos honorarios y que no puede reconocer la obligación que, arbitrariamente, quiere imponérsele. — 13 de Junio de 1874.

Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. 13 de Junio de 1874.

Tomo 4, pág. 419 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No se considera contrario a la Ley de 8 de mayo de 1874 de la Legislatura de Mendoza sobre redención de «capellanías laicas», el edicto mandado fijar en las puertas de las Iglesias por el Obispo de la mencionada Provincia, por cuanto dicho edicto que retira a los confesores la facultad de absolver de la «enajenación ilícita de bienes eclesiásticos», para nada se refiere a las «Capellanías laicas» —objeto de la ley citada,— sobre las que la autoridad civil tiene plena jurisdicción y que no constituyen bienes eclesiásticos.

Obispado de Cuyo — sobre publicación de censuras con motivo de la Ley de redención de Capellanías de la Provincia de Mendoza.

Para mayor claridad del asunto se transcriben los documentos que dieron origen al caso.

La cuestión fué iniciada por el siguiente telegrama del Gobernador de Mendoza:

Mendoza, 15 de junio de 1874.

Al Señor Ministro del Culto:

Oficial. — A fin de evitar un conflicto pido a V. E. consejo sobre el siguiente aviso mandado fijar por el Señor Obispo en las puertas de las Iglesias:

«Por disposición de S. S. I. el Señor Obispo Diocesano, se ha «ce saber a los Señores Sacerdotes de uno y otro Clero que queda «retirada a todos los confesores, sin excepción, la facultad de absolver de la enajenación ilícita de bienes eclesiásticos a todos los que «intervinieren en ella e incurrén, por consiguiente, en las censuras «y reservaciones del caso».

Mendoza, Junio 8 de 1874

Firmado: *Salvador de la Reta*, Vicario Foráneo

Este aviso ha sido dado por el Señor Obispo oponiéndose a la Ley de redención de capellanías sancionada por la Legislatura.

Dígnese V. E. ver la vista del Procurador del Tesoro y la resolución adoptada por el Gobierno Nacional en Octubre del año pasado, sobre este asunto.

Suplica a V. E. pronta respuesta, porque la censura produce gran alarma. He pedido al Obispo demore un día más su permanencia en ésta.

F. Civit

Gobernador de Mendoza

El Señor Ministro de Culto se dirigió, entonces, al Diocesano, a fin de hacer las indagaciones del caso y éste contestó así:

El Obispo de Cuyo.

San Juan, Junio 19 de 1874

Al Excmo. Señor Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Doctor Don Juan C. Albarracín:

Ayer, en momentos que acababa de llegar, recibí el telegrama de V. E., en que, avisándome que el Excmo. Gobierno Nacional sa-

be que por orden mía se ha publicado en Mendoza monitorios o censuras con motivo de una Ley de capellanías, me pide por encargo de S. E. el Señor Presidente de la República remita por telegrama el edicto íntegro que se ha publicado y como lo anuncié inmediatamente por telegrama a V. E., no se ha publicado monitorio ni censura alguna y voy a permitirme exponer lo que ha sucedido al respecto.

No creo demás sentar aquí un antecedente, que ponga de manifiesto los principios de suma prudencia y benignidad que han sido siempre y son la regla de conducta que observo en el régimen de mi Diócesis y muy especialmente tratándose de aquellas cosas que pueden turbar las conciencias, por su naturaleza misma o por interpretaciones que pudieran darlas una significación errada, aun para los que sin conocimiento exacto de semejantes materias, entrasen a juzgarlas, acaso apasionadamente.

Por esta consideración y persuadido de que las censuras y penas mayores de orden espiritual deben usarse con una parsimonia y sólo en casos extremos, he buscado siempre, aun tratándose de simples particulares, eclesiásticos o seculares, los medios de la persuasión y hasta de la amistad particular, para llevar las personas y las cosas al camino de la ley, procurando por todos los medios a mi alcance, que nunca fuese preciso ejercer la potestad necesaria, pero siempre doloroso para mí, de imponer penas de cualquier orden.

Es por esto mismo que he estado muy lejos de mandar publicar edicto alguno de monitorios ni censuras, en casos como el que actualmente se presenta en Mendoza, habiéndome limitado en casos análogos a buscar los medios que salvarsen los derechos de la Iglesia, sin que se produjese conflicto alguno entre la Autoridad Diocesana y las Provinciales, habiendo sido hasta hoy el único decreto que he dado al respecto, el de haber mandado en un caso dado en esta Provincia, que fuese acusada una ley semejante a la de Mendoza, ante la Justicia Federal, como contraria a la Constitución Nacional.

Estos antecedentes mostrarán desde luego a V. E. cuál ha sido la disposición en que me encontraba y que era muy distante de mandar publicar edicto alguno, que pudiese producir en las conciencias un conflicto mayor del que se produjera, por sí misma, una ley como la que ha sido sancionada en Mendoza, y no tengo inconveniente alguno para expresar a V. E. lo único que allí ha podido quizás clasificarse como tal, sin fundamento bastante.

Conoce perfectamente V. E. las sanciones canónicas relativas a la enajenación ilícita de bienes eclesiásticos y que comprende aún el caso en que fuera hecha la enajenación por el mismo Obispo y la reservación de éste, como de otros casos, que los pone fuera de la jurisdicción de los confesores en el fuero sacramental de la penitencia.

Facultado extraordinariamente para extender la jurisdicción de los confesores a los casos reservados de la Santa Sede, he tenido concedidas varias de esas facultades; pero reglamentado por la S. Penitenciaría el uso que debe hacerse de tales facultades extraordinarias, era necesario revocar su concesión a los confesores, como lo he hecho, especialmente desde principios de Enero del año presente, en la Provincia de San Luis, donde no hay ley alguna semejante y tantos meses antes de darse la Ley en Mendoza.

No siéndome posible practicar inmediatamente la visita en esta última Provincia, mandé que por la Vicaría Foránea se hiciese saber a los confesores dicha revocación, en la forma ordinaria y se fijó en los lugares de costumbre el aviso correspondiente a los confesores de uno y otro clero, sin referirse ni hacer mención alguna de la ley de capellanías, de la cual no me había ocupado aún y que había sido dada como he dicho, después que venía revocando facultades extraordinarias dadas a los confesores para el fuero sacramental, hacía cuatro o cinco meses.

Tal es lo que ha habido y la explicación que no he trepidado en dar confidencialmente al Señor Gobernador de Mendoza, a mi paso por dicha Ciudad en dos conferencias privadas y amigables que hemos tenido sobre esa ley, a petición de él mismo y en el interés de conciliar la ley misma con los derechos de la Iglesia, sobre los bienes cuya desvinculación se busca por ella.

Y la sanción misma de esa ley, ha venido a hacer más ostensible la conveniencia y oportunidad de la revocación de aquella facultad extraordinaria, porque sin ella las dudas y la turbación de las conciencias de los fieles, que naturalmente producen leyes semejantes, habrían quedado libradas a la sola prudencia de cada sacerdote, en aplicar las sanciones canónicas en relación con dicha ley, como habría quedado también el examen mismo de la ley y la resolución sobre su conformidad u oposición a los derechos de la Iglesia, mientras que la reservación exige, por sí misma, la resolución del Obispo, aun en cada caso particular y garante mejor la

prudencia necesaria al más acertado examen de la Ley y el que se eviten conflictos innecesarios y perjudiciales.

Esta sola reflexión bastaría para que hubiese sido dictada esa medida prudencial, aun en el caso de que lo hubiese sido con motivo de dicha Ley, o haciendo alguna referencia a ella, como no ha sucedido, y estoy seguro que el Gobierno de Mendoza, bien pesada esta reflexión, habría pedido esta u otra medida semejante, como lo prueba el hecho de haberme pedido una conferencia, en que tratado el asunto en la forma confidencial y franca que corresponde a los encargados de hacer en todo sentido la felicidad de los pueblos y en unánime propósito de procurar el bienestar de los habitantes de aquella Provincia, sin herir la justicia y el derecho que asistiere a cada una de las dos autoridades, buscamos de común acuerdo el medio de conciliar todos los intereses legítimos, que pudiera poner en oposición la ley en general y en todos sus detalles.

El Sr. Gobernador de Mendoza que pidió la Conferencia declarando su propósito de justicia y de armonía, ha podido cerciorarse que tal era también mi ánimo y mi mayor deseo y es en ese interés que de previo acuerdo confidencial con él, le dirigí, al tiempo de continuar mi viaje a esta ciudad, la nota que adjunto en copia y que es el único paso que he dado respecto de la ley citada.

Aunque el aviso, que ha sido clasificado para ponerlo en conocimiento del Excmo. Gobierno Nacional, como un edicto de monitorios o censuras con motivo de una ley, de que ni mención se hace en él y que ha sido sancionada cuatro o cinco meses después que venía dándolo en otras partes de la Diócesis, mira solamente al fuero sacramental de la penitencia, he querido explicarlo detalladamente a V. E. en el interés de que S. E. el Sr. Presidente de la República, se persuada de que sólo una interpretación errada ha podido llevar a su conocimiento hechos que no han tenido lugar y que son ajenos a mi carácter y a mi resolución de evitar todo conflicto, lejos de crearlo con medidas inconvenientes o importunas, mientras puedo de otro modo y por medios pacíficos y acaso amistosos, defender los derechos sagrados de la Iglesia, como me hacen esperar las declaraciones verbales y los sanos propósitos de justicia y de la mayor armonía que me tiene manifestados el Sr. Gobernador de Mendoza.

Quiera V. E. hacerlo presente a S. E. el Sr. Presidente de la República y aceptar las consideraciones de mi distinguido aprecio.

Dios guarde a V. E.

Fray José Wenceslao
Obispo de Cuyo

Por mandato de S. S. Illma. y Rma.

R. J. Lugones
Secretario

(Copia)

El Obispo de Cuyo — Mendoza, Junio 16 de 1874. — Al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia, Don Francisco Civit — Tengo el honor de dirigirme a V. E., cumpliendo un deber sagrado en llamar la atención del Excmo. Gobierno de la Provincia sobre la Ley de redención de capellanías, sancionada el 8 de Mayo del corriente año, que viene a afectar gravemente los derechos de la Iglesia.

Sin entrar, desde luego, en detalles ni en discusión alguna sobre los derechos que tiene la Iglesia respecto de las capellanías, memorias de misa, etc., debo hacer presente en general a V. E. que los bienes en que están fundadas las capellanías eclesiásticas son propiedad de la Iglesia, cuya enajenación no puede en manera alguna corresponder a otra autoridad que a ella misma.

Respecto de las capellanías laicas, si bien los bienes en que se fundan no se espiritualizan, pero la Iglesia tiene también derechos sagrados e inviolables, como los tiene para la ejecución misma de las disposiciones de los fundadores y para que no sean alteradas, ni cambiados los objetos piadosos a que fueron destinados en su institución.

Es de todo punto indudable la necesidad en justicia, de salvar esos derechos legítimamente adquiridos y persuadido como estoy de que V. E. tiene como regla invariable de su Gobierno, el respeto a la justicia y a los legítimos derechos de todos, no he dudado de que V.E. los tomará en consideración, y sea en la esfera de sus propias atribuciones, sea haciéndolo presente a la H. Legislatura de la Provincia, encontrará el medio de salvar esos derechos de

la iglesia, seguro de que por mi parte estoy dispuesto a cooperar aun al progreso material de este pueblo, en todo lo que no menos cabe los derechos que soy obligado a sostener y de que cualquiera gestión en este, como en todo otro asunto, sería tratada con el ánimo decidido de favorecer por mi parte todo pensamiento necesario o útil para el bien de esta Provincia, que, tengo fundamento para decir, es el único propósito que anima a V. E.

Y es esto precisamente lo que me hace esperar que V. E. aceptará mi indicación, dirigiéndome su contestación a la Capital del Obispado, donde me llaman con urgencia asuntos de todo interés para toda la Diócesis.

Reitero con este motivo a V. E. las seguridades de mi distinguido aprecio.

Dios guarde a V. E.

Fray José Wenceslao
Obispo de Cuyo

Por mandato del S. S. Illma. y Rma.

R. J. Lugones
Secretario

Con los antecedentes del caso, pasó el asunto en consulta al Sr. Procurador General de la Nación, que se expidió como sigue.

Excmo. Señor:

El Señor Gobernador de Mendoza debía haber considerado que el edicto mandado fijar por el Obispo de Cuyo, habla solo de la enajenación ilícita de bienes *eclesiásticos*, y que no tratándose en la Ley de 8 de mayo último, sino de la redención de las capellanías laicas, que no son bienes eclesiásticos, las fincas en que están fundadas ni la Iglesia a adquirido jurisdicción sobre ellos, el edicto no podía haberse referido a esa Ley; habría sido un absurdo su poner que había pecado sujeto al tribunal de la penitencia en el acto de vender o comprar una finca gravada con una capellanía laica o de dar a ésta una nueva colocación.

Si cree sin embargo el Señor Gobernador, que el citado edicto puede ser mal entendido, perturbar las conciencias o poner obs-

táculos a la ejecución de la Ley, el único medio de remediar este mal es instruir al pueblo por los periódicos o de otro modo, haciéndosele entender que no se trata de bienes eclesiásticos sino de aquellos en que la autoridad civil tiene plena y absoluta jurisdicción.

No veo, pues, que haya en este caso motivo alguno para un conflicto con la autoridad eclesiástica.

Así puede V. E. decirlo en contestación al Señor Gobernador de Mendoza. — Junio 16 de 1874.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 11 de 1874.

Tomo 4, pág. 423 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe probarse que los Oficiales de Milicias han «combatido» en acciones de guerra por la Independencia, para tener derecho a pensión de conformidad con la Ley de 2 de octubre de 1873; este requisito no lo exige para los Oficiales del Ejército de Línea, que sólo deben probar el grado alcanzado en el mismo.

Hermenegilda Risso Patrón, pide pensión como viuda del Comandante don Pedro Juan Urquiro.

Excmo. Señor:

La reclamante ha probado con la toma de razón de un despacho, que su esposo Don Pedro Juan Urquiza fué nombrado Teniente en el Regimiento de Dragones en 18 de Diciembre de 1812, y de Capitán de la misma división en 10 de Julio de 1820, por el General Belgrano.

En 26 de Setiembre de 1820, fué nombrado Comandante de escuadrón de milicias provinciales por un Don Bernabé Araoz que se titula «Presidente Supremo de la República Federal de Tucumán».

Por consiguiente, desde 1812 a 1820, ha estado sirviendo en el Ejército de línea, llegando en él al grado de Capitán, que es lo único que debe reconocerse, porque no se ha probado que en su clase de Comandante combatiera por la Independencia, circunstancia que

exige la Ley de 2 de Octubre de 1873, para reconocer los servicios de Oficiales de milicias.

Por tanto, creo que su viuda tiene derecho a pensión de sueldo íntegro en la clase de Capitán. — Junio 22 de 1874 .

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Junio 26 de 1874.

Tomo 4, pág. 347 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Procede responsabilizar a una Empresa de Navegación por una sustracción de dinero que ha tenido lugar, si no ha sido posible individualizar al autor y los hechos demuestran que la sustracción necesariamente se llevó a cabo a bordo, por alguno de los oficiales encargados de la custodia.

El Receptor de Rentas de la Esquina, sobre sustracción de \$ 2.000 remitidos en el Vapor «Taragü».

Excmo. Señor:

Por el sumario levantado en la Esquina, está perfectamente probado que los dos mil pesos fuertes se contaron y empaquetaron en la Oficina de la Administración de Rentas por el Contador auxiliar del Administrador y dos empleados más, delante de dos vecinos del pueblo que se hallaban presentes. Allí se hizo un paquete con forro de lienzo, perfectamente cosido, sellándose en las costura con cinco sellos en lacre.

En esta disposición se mandó a la Agencia del Vapor «Taragü» por el guarda Fernández, quien lo entregó al Comisario inmediatamente, según resulta de la fecha del boleto, que le dió el Comisario en prueba de haberlo recibido.

Es imposible que el guarda Fernández pudiera abrir el paquete, sacar el dinero y sustituir argollas, porque para esta operación se necesita muchas horas, tal vez un día entero y el paquete fué entregado inmediatamente al Comisario del Vapor.

Llegado éste a Buenos Aires, se mandó recoger el paquete de la Agencia por un Oficial de la Contaduría que lo entregó en la

Tesorería en la misma mañana, quien tampoco pudo hacer la sustitución del contenido por la falta de tiempo.

De aquí se deduce forzosamente que el dinero ha sido robado a bordo del vapor por los oficiales encargados de su custodia, sin que sea posible que la sustitución y colocación de las argollas haya podido hacerse en otra parte y por otras personas.

Esto es para mí de una evidencia perfecta.

Pero no pudiendo determinarse cuál es el ladrón, lo que corresponde, es entablar una acción civil contra la empresa del vapor, pidiendo los dos mil pesos fuertes, que traídos a flete fueron robados a su bordo con los intereses devengados. Y para esto puede V. E. mandar que estos antecedentes pasen al Procurador Fiscal de esta Sección. — 6 de Julio de 1874.

Ministerio de Hacienda. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Julio 8 de 1874.

Tomo 4, pág. 400 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe probarse debidamente el grado militar con que se «combatió» durante la guerra de la Independencia para poder determinar la pensión de sueldo íntegro que se solicita, de conformidad con la Ley de 2 de octubre de 1873.

Modesta Echevarría, pide aumento de pensión.

Excmo. Señor:

No hay duda que Don Fermín de la Quintana combatió contra el Ejército Español en 1817, al frente de un escuadrón de gauchos, y que en la guerrilla de Severino recibió una herida grave, que lo inutilizó para continuar sus servicios. De consiguiente, su viuda está protegida por la Ley de 2 de Octubre de 1873.

¿Pero cuál era el grado del Señor Quintana?

En 1825, después de concluída la Guerra de la Independencia, en una presentación al Gobierno de Jujuy, él se titula Teniente Coronel de gauchos; y posteriormente ha seguido llamándose él

mismo Coronel. Pero su viuda no ha presentado despacho ni documento alguno, que pueda probar su grado.

En 1830, habiéndole ordenado el Gobierno de Jujuy que justificara su grado, se pidió informe al Teniente Coronel Don Pedro Ferreira y al Sargento Mayor Don Celestino Fernández, que habían servido con él, y ambos dijeron que en la acción en que fué inutilizado servía como Capitán de la 1.^a compañía del escuadrón de gauchos, sin mencionar ascenso alguno que hubiera obtenido con posterioridad. Puede ser que obtuviera ascensos del Gobierno de la Provincia después de 1830; pero durante la guerra de la Independencia, es evidente que sólo era Capitán de gauchos. Ignoro absolutamente en qué datos ha podido fundarse la Comandancia General Armas para darle el título de Coronel.

Fundándome en las constancias de este expediente, mi dictamen es que V. E. acuerde a la Señora viuda que gestiona, la pensión de sueldo íntegro de Capitán, que es el único grado que está justificado durante la guerra de la Independencia. — 20 de Julio de 1874.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Julio 30 de 1874.

Tomo 4, pág. 367 — Inf. de los Consej. del P. E.

=====

- I — La Ley de 4 de julio de 1872, sólo concede pensión de sueldo íntegro, a las viudas e hijas solteras de Guerreros de la Independencia, excluyendo a los hijos varones, aunque éstos tengan derecho a pensión por la Ley General.
- II — Corresponde que se aumente una pensión hasta el justo límite, si por error en los cálculos del tiempo de servicios prestados, fué concedida en menor cantidad.

Dominga Monson, sobre aumento de pensión al menor Francisco Rojo.

Excmo. Señor:

Desde que la Ley de 4 de Julio de 1872, sólo concede pensión de sueldo íntegro a la viuda e hijas solteras de los guerreros de

la Independencia, el Gobierno no puede concederla a un hijo varón, aunque éste tenga derecho a pensión por la Ley General de Pensiones.

Pero no puedo ocultar que al hijo del Mayor Don Francisco Rojo le corresponde por la Ley la pensión de la mitad del sueldo de su padre y no la cuarta parte que le declaró el Gobierno, inducido en error por un erróneo cálculo de servicios que hizo la Inspección General.

Desde 1816, en que entró al servicio, hasta 1829, en que fué retirado a Inválidos, cuenta 19 años, sin advertir que desde 1810, a 1820 estuvo constantemente en campaña, en el sitio de Montevideo y en los combates que después de la rendición de la plaza, se dieron contra los anarquistas y que, por consiguiente, estos 10 años deben contarse dobles.

De modo que, de 1810 a 1829 son 29 años de servicios, y desde 1862, en que se incorporó nuevamente al servicio activo de la Nación hasta su muerte en 1867, son cinco años que, agregados a los anteriores, forman un total de 34 años de servicio activo; correspondiendo, por consiguiente, a su hijo, según la Ley, una pensión de la mitad del sueldo.

Por lo tanto, soy de dictamen que no se haga lugar a la pensión de sueldo íntegro que se pide y se mande aumentar la que disfruta este menor hasta la mitad del sueldo de Mayor, grado que tenía su padre. — 6 de Agosto de 1874.

Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. 13 de Junio de 1874.

Tomo 4, pág. 420 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La Ley de 20 de octubre de 1863 que mandó pagar la deuda de la Confederación, dispuso que se agregaran a los capitales debidos, el interés del 1 % mensual, únicamente en aquellos créditos que llevarsen interés escrito.
- II. — Habiendo la Contaduría liquidado solo capitales con anuencia y sin reclamo del acreedor, no corresponde el pedido de intereses que formulan los herederos de este último, pasado ocho años de efectuado el pago.

J. A. Quintana, en representación de los herederos de su finado abuelo don Mariano Fragueiro, sobre cobro de intereses.

Excmo. Señor:

La Ley de 20 de Octubre de 1863, que mandó pagar la deuda puesta en circulación por el Gobierno de la Confederación en bonos, libramientos y billetes de Tesorería, ordenó que se agregara a los capitales el interés de uno por ciento mensual, en aquellos créditos que llevan interés escrito, de modo que en aquéllos que no lo tuvieran, no debía hacerse este aumento, y con mucha razón.

Como en los libramientos a que se refiere esta solicitud, no constaba que hubiera interés estipulado la Contaduría cumplió con su deber, liquidando sólo los capitales que fueron pagados, con anuencia y sin reclamo del acreedor. Este es, pues, un negocio concluído, y los herederos de éste, no tienen derecho para hacer un reclamo de intereses, que no hizo su causante, hoy, después de ocho años de hecho el pago.

Sea, pues, por la disposición expresa de la Ley, sea por el silencio y anuencia del acreedor cuando se le hizo el pago, mi dictamen es que V. E. no haga lugar a esta solicitud. — Agosto 27 de 1874.

Departamento de Hacienda. Se adopta como resolución lo dictaminado. Septiembre 4 de 1874.

Tomo 2, pág. 337 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Procede otorgar el pase a un rescripto de secularización, si no existe en el país conventos de la orden monástica a que pertenece el solicitante.

Fray Pedro Pablo Boy, solicita el pase a un rescripto de secularización.

Excmo. Señor:

No encuentro inconveniente en que el Padre Boy se secularice, con tanta más razón, cuanto que no habiendo autorizado el Congreso el establecimiento de Conventos de la Merced, que no existen, no puede este religioso hacer la vida monástica en la República. Por tanto, puede V. E. dar el pase a este rescripto. — Septiembre 23 de 1874.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad al dictamen. Septiembre 23 de 1874.

Tomo 2, pág. 367 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No son indemnizables en los términos del Tratado con España, los saqueos hechos por partidas de montoneros.

Mariano Comas — Indemnización por saqueos en una casa de comercio de su propiedad, llevados a cabo en 1815 a 1818, por tropas al mando del Comandante Hereñú y otros.

Excmo. Señor:

Ya he dado mi dictamen sobre este reclamo de los herederos de Don Mariano Comas, al que no encuentro fundamento alguno, ni en la forma ni en el fondo.

Lo que la República se obligó a devolver a los súbditos españoles por el art. 5.º del Tratado con España, fué sólo los secuestros y confiscaciones hechos por el Gobierno durante la guerra de la Independencia, en cuya categoría no se halla el presente caso en que sólo se trata de saqueos hechos por partidas de montoneros, rebelados contra la Autoridad Nacional y cuyo valor por tanto no ha entrado a las cajas públicas.

Se invoca también para exigir el pago de estos saqueos las Convenciones de 1858 y 1859 con la Inglaterra y la Francia, diciéndose que debiendo ser tratada la España como la Nación más favorecida, tienen derecho los Españoles a ser tratados como los Ingleses y Franceses.

Esta alegación es muy impertinente; porque el derecho de ser tratada la España como la Nación más favorecida, se limita a que los Españoles puedan disponer de sus bienes según el art. 8.º, a que estén libres del servicio militar según el art. 9.º, y a no pagar mayores derechos que los demás extranjeros según el art. 10.º Nada de esto tiene la menor relación con el caso presente.

Después esas Convenciones caducaron en 1860, en que se venció el término para presentar los reclamos y como este término no ha sido nuevamente abierto por una sanción legislativa, es claro que esas convenciones no tienen ya valor para los Ingleses y Franceses y mucho menos para los Españoles.

Finalmente, para admitir un reclamo según esas convenciones y los principios admitidos en el arreglo, la primera condición era que el daño *fuese causado por autoridad competente, no de saqueos, de vandalaje, tropas derrotadas o desertadas.*

En efecto, ¿qué responsabilidad puede tener el Gobierno de saqueos hechos por una partida de bandidos o por montoneros rebeldes contra su autoridad? Pretender esto es un absurdo.

Ahora bien: según la prueba de testigos que ha presentado el reclamante y que advierto está trunca, habiéndose suprimido varias declaraciones que venían cuando se presentó original, como la del Señor Iriondo, —los que hicieron el saqueo completo de la tienda del Señor Comas, fueron: 1.º el Comandante de Artigas, Herreñú, que saqueó 28 días seguidos y 2.º Don Mariano Vera que la saqueó por siete días—, habiénd tirado a la calle lo que no pudieron llevar. Ambos eran jefes rebeldes y aunque los reclamantes dicen que después hicieron otro saqueo los Coronoles Balcarce y Dorrego, lo que no está probado, es evidente que los dos primeros saqueos habían dejado vacíos los estantes de la tienda y que estos últimos nada pudieron llevar.

Por todas estas razones, soy de dictámen que V. E. no debe hacer lugar á este reclamo. — 14 de Noviembre de 1874.

*Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución en Marzo
19 de 1875.*

Tomo 4, pág. 456 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe probarse debidamente el grado militar con el que se «combatió» durante la guerra de la Independencia para determinar la pensión de sueldo íntegro que se solicita, de conformidad con la Ley de 2 de octubre de 1873, no debiendo computarse los ascensos otorgados con posterioridad a dicha Guerra por las autoridades provinciales.

Trinidad Reyes, pide pensión como viuda del Coronel don Manuel Virto.

Excmo. Señor:

En este expediente está probado que Don Manuel Virto sirvió en la guerra de la Independencia como Sargento Mayor de las milicias de Salta, habiendo tenido el grado de Teniente Coronel después de concluída aquella guerra, dado por el Gobernador de la misma Provincia.

Por consiguiente, su viuda tiene derecho a la pensión de sueldo íntegro de Sargento Mayor por la Ley de 2 de Octubre de 1873. — 4 de Febrero de 1875.

Departamento de Guerra. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Febrero 12 de 1875.

Tomo 4, pág. 399 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se solicite al Gobierno de la Provincia en cuyo territorio se encuentra la mina, el permiso para su explotación, pues aunque por Ley Nacional se reglamentó la posesión de ellas, las Provincias conservan la propiedad y sus autoridades son las que deben permitir la explotación confiriendo su posesión y llevando el Registro que manda la Ley.

Esteban Peralta — autorización para explotar minas en Buenos Aires.

Excmo. Señor:

Aunque es una Ley Nacional la que reglamentó la posesión de minas, entiendo que éstas son de propiedad de las Provincias, como

es el terreno en que están situadas; y que por consiguiente son las autoridades provinciales las que deben permitir su explotación y conferir su posesión, llevando el Registro que manda la Ley.

Así se ha entendido también en toda la República; son las Provincias y no la Nación, las que otorgan estas concesiones.

Por consiguiente, mi dictamen es que V. E. ordene al solicitante que ocurra al Gobierno de la Provincia por el permiso que solicita para la exploración de minas. — Febrero de 1875.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Febrero 27 de 1875.

Tomo 5, pág. 11 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Para que los individuos de tropa puedan ser clasificados como Guerreros de la Independencia, a los efectos de la pensión militar, se requiere la prueba de haber «combatido» contra los españoles.

Josefa Ruiz Moreno — pide pensión como viuda del Teniente Coronel Don Laureano Anzoátegui.

Excmo. Señor:

Aunque el Mayor Don Franciso Pelliza, dice en su informe que el Mayor Don Laureano Anzoátegui sirvió en el Ejército del Alto Perú desde 1811 a 1813, y el Coronel Juan Isidro Quesada, que asistió a las Batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayouma y Sipe-Sipe, es evidente que estos Jefes están equivocados, y que han confundido a Don Laureano con algún otro de los Oficiales que servían en aquel ejército y tenían el mismo apellido de Anzoátegui.

Según las listas de revistas que copia la Contaduría General y el Archivero, se ve que Don Laureano Anzoátegui, Oficial de artillería estaba presente en Buenos Aires en los años de 1811, 1812, 1813, en que tuvieron lugar las Batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayouma; por consiguiente, no ha podido asistir a ellas.

El salió de Buenos Aires para el ejército del Perú en el mes de Enero de 1814, en cuyo mes revistó en Fraile-Muerto, y en él

permaneció un año, hasta que fué destituido y expelido del ejército a principios de 1815, habiéndose presentado en Junio del mismo año en Buenos Aires pidiendo ser juzgado, como consta del informe del Archivero, siendo destinado a su cuerpo, que se encontraba en esta guarnición. No ha podido por esta razón encontrarse en la Batalla de Sipe-Sipe, que tuvo lugar el 29 de Noviembre de 1815.

La Contaduría dice que ha debido encontrarse en Vilcapugio y Ayouma, porque estas batallas tuvieron lugar en 1814, en que Anzoátegui se hallaba en el ejército. Pero este es un error histórico de la Contaduría. La Batalla de Vilcapugio acaeció el 1.º de Octubre de 1813, y la de Ayouma el 14 de Noviembre del mismo año, tiempo en que Anzoátegui aun no había salido de Buenos Aires. Queda, pues, demostrado que Anzoátegui no combatió una sola vez contra los españoles en el corto tiempo que estuvo incorporado al Ejército del Alto Perú; y como para ser clasificado como guerrero de la Independencia, la ley exige que haya combatido contra los enemigos de ella, es evidente que Don Laureano Anzoátegui no se halla en este caso, ni su viuda tiene derecho a pensión de sueldo íntegro.

Por consiguiente, mi dictámen es que V. E. nó haga lugar a esta solicitud. — 1.º de Junio de 1875.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Junio 7 de 1875.

Tomo 4, pág. 379 — Inf.de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I. — Es improcedente el pedido de fuerza pública, formulado por un juez federal, para el cumplimiento de un auto de embargo contra la Municipalidad de Buenos Aires, si dicho auto, se encuentra apelado y pendiente de resolución ante el superior.

II. — Si la Municipalidad ha designado para el cumplimiento del embargo, una finca de su propiedad, no procede el embargo sobre muebles, pues aunque la Ley previene que la toma de razón ha de iniciarse sobre los muebles y luego sobre los semovientes y a falta de éstos sobre los raíces, ello constituye un beneficio acordado al deudor que puede renunciarlo haciendo vender los inmuebles en primer término, si más le conviene.

Por otra parte la Ley prohíbe terminantemente el embargo sobre la ropa y muebles del deudor.

El Juez Federal de Buenos Aires — pide el auxilio de la fuerza pública para hacer efectivo un embargo de muebles contra la Municipalidad de Buenos Aires.

Excmo. Señor:

El auto del Juez de Sección que mandó embargar los muebles de la Municipalidad, para cuya ejecución se pide ahora el auxilio de la fuerza pública, está apelado ante la Corte Suprema y presunto que el será revocado por que es injusto.

En toda ejecución de deudas, se tiene derecho para designar los bienes que han de ser embargados, y parece que en este caso la Municipalidad ha designado para la traba una finca suya y no los muebles.

Aunque la Ley previene, que se empiece el embargo por bienes muebles y semovientes, y a falta de ellos, se embarguen los raíces, esta disposición es en beneficio del deudor, que bien puede renunciar a él haciendo vender los raíces si más le conviene.

Además, la Ley prescribe terminantemente, que no se trabé embargo en la ropa y muebles de uso del deudor.

Por esas razones, creo que la Municipalidad ha tenido razón en resistir el embargo.

De todos modos, estando apelado el auto, es preciso esperar la sentencia de la Corte, para saber si es necesario emplear la fuerza

para verificar el embargo, lo que en el estado actual de la causa no debe concederse. — 3 de Julio de 1875.

Departamento de Guerra. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Julio 3 de 1875.

Tomo 4, pág. 133. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe ser demandado ante la justicia federal, el religioso que hace valer su nombramiento sin haber obtenido el «pase» de la «Patente» que lo instituye, de conformidad a lo prescripto por la Constitución Nacional.

Fray Lorenzo Morales — solicita «exequatur» para la Patente que lo acredita como Provincial de la Orden de los Mercedarios.

Excmo. Señor:

No encuentro inconveniente en que V. E. otorgue el *pase* pedido a la Patente que se presenta.

Pero debo advertir a V. E. que este religioso pretendía hacer valer su nombramiento de Provincial ante los Tribunales, sin haber obtenido el *pase*, y que habiendo pedido yo a la Corte Suprema le impusiera la pena que la Ley establece, ésta se abstubo de hacerlo, sólo porque no había sido demandado ante el Juez de Sección.

Parece que ahora ha reconocido su falta, y por tanto ya no hay lugar al castigo que antes mereció. — Agosto 10 de 1875.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Agosto 16 de 1875.

Tomo 5, pág. 147. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Dr. CARLOS TEJEDOR

1875-1878



- I. — Puede concederse la autorización religiosa que se pide para la fundación de un Colegio Religioso en Catamarca, si ello no implica el establecimiento de una nueva orden religiosa que contrarie la disposición del art. 108 de la Constitución Nacional.
- II. — No puede el Gobierno Nacional oponerse a la expansión dentro del territorio de una orden ya existente, ni negar la enseñanza de la Religión Católica que la Constitución Nacional recomienda se proteja por todas las autoridades.

El Gobierno de Catamarca — sobre el pedido de protección hecho por Fray R. Escobar para la fundación de un Colegio religioso, científico y literario.

Excmo. Señor:

La admisión de nuevas órdenes religiosas en la República, sólo puede tener lugar por un acto del Congreso.

Pero en el caso presente, parece que no se trata de eso.

La Orden de la Merced, según la solicitud del Padre Escobar, existe en varios puntos de la República ha más de 200 años, con un Padre Superior en Córdoba.

Trátase, pues, solamente, de la introducción en la Provincia de Catamarca, de un religioso recientemente llegado, que, según se expresa se propone fundar un Colegio «en que no sólo se atienda a la educación religiosa de la juventud, sino también científica y literaria.»

El Procurador cree que el Gobierno Nacional no tiene el derecho de obstar a este movimiento de expansión de una Orden ya existente; porque en materia de religión, como de Códigos, la República no reconoce límites de Estado.

Cree así mismo, que bajo el punto de vista de la enseñanza que anuncia y que entre nosotros es ejercida libremente por todos, no puede ni debe V. E. negarla a los instrumentos de una religión,

cuya protección por el contrario, está recomendada por la Constitución a todas las autoridades.

Mas si el objeto de la petición fuese introducir furtivamente la Orden en la Provincia, sin la necesaria sanción del H. Congreso, como deja sospecharlo el texto de la donación en algunas de sus palabras, corresponde prevenir terminantemente al Gobernador que esa introducción caería bajo la disposición de la Constitución, art. 108.

El Procurador prescinde de ocuparse de la donación misma, porque de parte del donante como del donatario se halla autorizado por el Código Civil y porque estas declaraciones de V. E. como Patrono, no la legitimarían, si ella afectase derechos de particulares o de la Provincia. — Octubre 18 de 1875.

Excmo. Señor:

De acuerdo en todo con mi antecesor, y en vista de la autorización que ha presentado el Padre Escobar, no veo inconveniente en que V. E. conteste la consulta del Gobierno de Catamarca, diciéndole que nada obsta a que preste la aprobación que dicho Padre Escobar solicita en su escrito de f. 5. — Octubre 1.º de 1878.

Ministerio de Culto. Al archivo por haber pasado la oportunidad de resolver. Noviembre 5 de 1883.

Tomo 5, pág 183. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La internación de extranjeros debe fundarse en tratados, y supone siempre la reciprocidad; no debe acordarse sin que se prueben los hechos ante la misma autoridad que debe proceder a la internación.

No existiendo al respecto, tratado entre los Gobiernos Uruguayo y Argentino y frente a los preparativos de invasión a la Banda Oriental, que en territorio de la Provincia de Entre Ríos tienen lugar, corresponde que el Poder Ejecutivo limite su acción, a perseguir los hechos contrarios a la neutralidad, aprehendiendo a los autores infragantes y sometiénolos a la Justicia Federal.

El Consulado de la República Oriental — sobre internación.

Excmo. Señor:

La internación, cuando no está fundada en tratados, no es un derecho perfecto que imponga deberes forzosos, sino un oficio de vecindad que depende de las leyes y soberanía propia.

Ella supone además, la reciprocidad siempre, porque de lo contrario importaría un vasallaje o una desigualdad injustificable.

Existiría, en fin, el tratado o la reciprocidad y nunca podría acordarse aquélla, sin que los hechos se estableciesen y probasen ante la misma autoridad que hubiera de tomar la medida administrativa.

Nada de esto hay entre el Gobierno Oriental y el Argentino.

Lejos de eso, aquel Gobierno, en casos iguales sostuvo que despachadas las armas, según los reglamentos de sus aduanas estaba excusado de ocuparse de su destino.

Sostuvo, así mismo, no tener el deber de impedir que un comité revolucionario, con residencia pública en Montevideo, expidiese a Entre Ríos soldados enganchados.

El Procurador, es, por lo tanto de opinión que el Gobierno Argentino limite su acción a perseguir los hechos contrarios a la neutralidad, aprehendiendo a los autores infragantes y sometiénolos a la Justicia Federal. — Noviembre 12 de 1875.

Se dirigió nota al Señor Cónsul Gral. de la República Oriental del Uruguay, de acuerdo con lo dictaminado. Noviembre 17 de 1875.

Habiendo tenido lugar una colisión entre un buque de guerra y otro mercante, se instruyó el correspondiente sumario y luego de oído al auditor de Guerra y Marina, se dictó resolución de conformidad con el dictamen de este, poniendo en libertad a los oficiales del buque de guerra y declarando responsable de la avería al barco mercante, sin haberse oído previamente a los dueños de este último. El procurador del Tesoro frente a esta irregularidad en el procedimiento opinó que debía concederse a los damnificados la venia para ocurrir ante los Tribunales, considerando en cambio el Procurador General, que este medio ofrecía inconvenientes para el Gobierno, que tendría que sostener ante la Justicia una resolución que indefectiblemente sería revocada por los vicios de forma que adolece, y este camino, además, lo privaría de tomar un conocimiento más completo de los hechos; considero también que la equidad de la venia se comprende más para cuestiones de derecho que de hecho; opinando finalmente que se deje sin efecto la resolución indicada y se de vista a los dueños del barco mercante para que aleguen o prueben lo que en derecho les corresponda.

**Reclamo de Don David Bruce, propietario del vapor «Proveedor»,
por averías sufridas en un choque con el vapor de Guerra
«Don Gonzalo».**

Hacmo. Señor:

El proceder seguido de este asunto, es sin duda irregular. Levantado el sumario y oído el Auditor, el Gobierno dictó la resolución del 18 de Junio.

Con ese sumario podía ordenarse la libertad de los oficiales arrestados; pero mediando intereses privados, no debió adoptarse resolución alguna sobre el fondo, sin oír antes a los dueños del «Proveedor», presentados desde el 31 de mayo.

El proceder ajustado estrictamente al derecho, es tanto más necesario en estos casos, cuanto que el Gobierno Nacional no puede ser demandado o llevado ante los Tribunales, sin su consentimiento.

Para salvar esta dificultad, el Procurador del Tesoro propone la concesión de la venia.

Este medio me parece contiene serios inconvenientes.

Desde luego, él presenta al Gobierno sosteniendo una resolución, que indefectiblemente está destinada a ser revocada, por irregularidad en las formas aunque en el fondo sea justa.

Prestándose el consentimiento en estado de sumario, se daría el conocimiento del asunto, no ya a la Corte Suprema en apelación, sino también al Juez Seccional.

Adoptando este camino, además, se privaría al Gobierno de tomar un conocimiento más completo de hechos cuyo castigo sería de su exclusiva competencia, si llegase a probarse que la culpa del choque la tenían los oficiales de un buque de la Nación.

La equidad de la venia, finalmente, se comprende más bien en cuestiones de hechos, en aquéllas en que los principios legales son dudosos o complicados.

Mi opinión sería, por lo tanto, que, declarando sin efecto la Resolución del 18 de junio y admitiéndose la gestión deducida por el escrito del 31 de mayo, se dé vista a los dueños del «Proveedor» en Secretaría, para que aleguen o prueben lo que a su derecho pueda convenir, antes de fallar. — Noviembre 29 de 1875.

Ministerio de Marina.

Sin declarar sin efecto la Resolución de fecha de 18 de Junio y dejando para después lo que corresponda en el escrito de Julio 17, en que se pide la venia para ocurrir a los Tribunales de la Nación, dése vista de este expediente a Don David Bruce, para que alegue o pruebe lo que a su derecho convenga. Diciembre 1.º de 1875.

Tomo 5, pág. 104. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No pueden hacer fe ante el Poder Ejecutivo, las declaraciones testimoniales tomadas en el Consulado Norte Americano. El P. E. sólo debe aceptar las que se reciben por autoridades propias.
- II. — Es improcedente el reclamo que se presenta al P. E. contra un fallo judicial, por no tener el P. E. facultades para administrar justicia, debiendo, en consecuencia, presentarse el recurso en término, ante el Superior Judicial a quien corresponda.

La Legación de los Estados Unidos, interpone reclamación por perjuicios ocasionados a la familia Hale en Santa Fe.

Excmo. Señor:

Empezaré por apartar las declaraciones tomadas en el Consulado Norteamericano, porque ante V. E. sólo hacen fe las que se reciben por las autoridades propias.

Registrándose únicamente el testimonio de una parte del proceso e informes pedidos por V. E. a las autoridades de la Provincia se ve que el Señor Ministro reclama por una familia Norteamericana, presa y juzgada el año 68, como ocultadora de ladrones en el Rosario de Santa Fe y puesta en libertad a los seis ó siete meses, por haber el Juez sobreseído en la causa principal.

Hasta aquí nada hay de irregular.

Pero el Señor Ministro, dando entera fe a las declaraciones mencionadas al principio, establece que «el caso de Mr. Hale y de su familia es de especial dureza y que su tratamiento ha sido en extremo áspero»; que «no aparece haber habido justa causa o razón para su arresto, ni para su encarcelamiento durante meses»; y concluye por esperar «que V. E. hará plena justicia a Mr. Hale».

Como antes dije, esas declaraciones no tienen para V. E. valor alguno, pero aun suponiéndoles todo el que se quiera, sería siempre a los mismos Tribunales a quienes la familia Hale debía acudir en tiempo por esa *especial dureza y tratamiento en extremo áspero*, desde que ni nuestras leyes consienten tales tratamientos contra nacionales o extranjeros, ni éstos gozan de más derechos que aquéllos, ni el Poder Ejecutivo tiene la misión de hacer justicia.

En la forma, pues, como en el fondo, creo por lo menos anticipado el reclamo deducido por la nota de 5 de Abril ppdo., y soy de opinión que V. E. la conteste en este sentido. — Diciembre 18 de 1875.

Tomo 5 pág. 72. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El Gobierno del Perú invita al Argentino a concurrir por medio de delegados al congreso de plenipotenciarios jurisconsultos, destinado a concordar las legislaciones de los Estados Americanos. 1875.

En 11 de Diciembre de 1875, el Gobierno del Perú, invitó al Argentino a concurrir por medio de delegados a un Congreso de Plenipotenciarios Jurisconsultos, que se reuniría en Lima, y se ocuparía de concordar las Legislaciones de los diversos Estados Americanos, tomando de cada una de ellas, lo que encontrara de más perfecto y poniéndose de acuerdo, especialmente en los puntos siguientes:

1.º — Como base general para todas las materias no determinadas especialmente, procurar la uniformidad de la legislación privada en cuanto lo permitan las circunstancias especiales de cada país y fijar en los respectivos Códigos, relativamente a los puntos en que esa uniformidad no sea posible, las disposiciones conforme a las cuales deban resolverse los conflictos que ocurran en la aplicación de las leyes.

2.º — Conceder en cada Estado a los miembros de los demás, los mismos derechos civiles que a los nacionales.

3.º — Uniformar en cuanto sea posible la legislación sobre matrimonios entre nacionales y entre extranjeros.

4.º — Establecer la misma uniformidad en cuanto a las formalidades externas de los actos y documentos que producen obligaciones;

5.º — Fijar reglas comunes para la ejecución de las sentencias en materia civil y para el cumplimiento de los exhortos.

6.º — Determinar en los respectivos Códigos los casos de extradición y el modo de realizarla.

7.º — Uniformar la legislación comercial, especialmente en materia de quiebra y concesión de privilegios.

8.º — Sujetar a reglas comunes la propiedad literaria.

9.º — Uniformar las leyes sobre pesas, medidas y sistema monetario.

10. — Celebrar una convención postal entre los Estados Americanos.

Pasado este asunto en consulta al Sr. Procurador General de la Nación, se expidió de esta manera:

Excmo. Señor:

V. E. es invitado a concurrir por medio de delegados a un Congreso de Plenipotenciarios Jurisconsultos, que podría ocuparse de concordar las legislaciones de los diversos Estados Americanos.

En Europa, a principios de este siglo, los guerreros como Napoleón pensaron en la unidad de la legislación por la fuerza; y después de él, muchos escritores han sostenido la conveniencia y posibilidad de este resultado por la negociación.

El pensamiento concebido en Lima, me parece de una ejecución más fácil, si ha de limitarse, como se expresa, a obtener la uniformidad en la América Española.

Las leyes procedentes de Madrid nos gobernaron a todos durante el coloniaje, legando rastros en los Códigos que posteriormente se han dado muchas de las Repúblicas.

Nuestros intereses son también comunes en materias civiles, comerciales y aun penales.

Tenemos las mismas aspiraciones y sostenemos los mismos principios, no siempre respetados por las naciones europeas.

Con un poco de buena voluntad, pues, el *desideratum* del Gobierno del Perú podría ser una realidad en bien y honor de estos pueblo nuevos.

Juzgo que V. E. no puede rehusar la invitación. — Marzo 3 de 1876.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Abril 28 de 1876.

Tomo 5, pág. 263 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La donación que en 1830 hizo el Gobierno Nacional al Encargado de Negocios Británico, para la construcción de un templo protestante, fué sólo de «uso gratuito», no implicando en consecuencia, dicho acto, el otorgamiento del dominio pleno.

La Legación de S. M. Británica — pide que se confirme la cesión hecha por el Gobierno en 1830, de un terreno para edificar una Iglesia Protestante.

Excmo. Señor:

Por los papeles que se me han remitido, me es imposible comprender la forma y el fondo de esta gestión.

Cuando el Gobierno el año 30 donó, al Encargado de Negocios Británico, el uso de un terreno para edificar el Templo Protestante, debió ser como representante de la comunidad inglesa.

Ni el encargado de Negocios, como tal, ni el Gobierno Inglés, podían adquirir así el dominio de un pedazo del territorio Argentino, para ejercer o conservar jurisdicción sobre él.

¿Que significa entonces «la guarda o tenencia de la Legación» que se invoca, y la disposición en que se halla el Gobierno de S. M. de «abandonar todo derecho al territorio que hasta ahora haya tenido»?

Si hubiera otro dueño que el Estado, serían los «Residentes ingleses» y serían ellos y no el Señor Ministro, quienes debían gestionar ante V. E. cualquier rectificación del título.

Pero en el fondo mismo no comprendo el reclamo.

Con el nombre de deficiencia del título se pretende propiamente que el Gobierno actual dé más que el del año 30, el dominio pleno del terreno, cuando éste solo otorgó el uso gratuito «para el solo y único objeto de la construcción del Templo»; lo que en derecho quiere decir que retrovertía a su primitivo dueño, sino se empleaba o seguía empleándose en el mismo objeto.

¿Cuáles son, pues, las deficiencias que han aconsejado la intervención diplomática y la solicitud de una *confirmación* de la cesión del terreno? Como cesión del uso, el título es suficiente, como cesión del dominio pleno, no sería rectificación sino nuevo título lo que habría que pedir.

V. E. sin embargo, resolverá lo que juzgue mas arreglado.
Marzo 4 de 1876.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución en Marzo 9 de 1876.

Tomo 5, pág. 279. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el Gobierno Nacional, ponga remedio a la falta de cumplimiento por parte de los contratistas, del convenio para el transporte marítimo de provisiones a colonos de Chubut y Santa Cruz, ya sea disponiendo se lleven a cabo los viajes por cuenta de los contratistas o dando por nulo el contrato, disponer la celebración de uno nuevo a los mismos fines.

La Comisaría General de Inmigración — pide provisiones para los colonos de Chubut y Santa Cruz

Excmo. Señor:

He sido informado por Secretaría que habiendo corrido ya ocho meses, desde que empezó a regir el contrato, no se ha establecido todavía el buque de vela, que debía hacer la navegación entre Chubut y Santa Cruz, siendo evidente por lo tanto, que en los cuatro meses que faltan, no podrá cumplirse la obligación de los seis viajes anuales entre aquellos puntos; y que de los mismos viajes a vapor al Chubut, sólo se han realizado tres, siendo también materialmente imposible que en los cuatro meses restantes se hagan los seis que faltan.

De los documentos acompañados resulta, además, que V. E. con fecha 1.º de Marzo ordenó al Comisario General de Inmigración, que intimase a los contratistas saliesen dentro del tercero día los buques que debían hacer la navegación al Chubut y Santa Cruz, conforme al contrato, y que hecha la notificación el 4, ni se ha obedecido esa intimación, ni se ha expuesto nada que atenúe o explique la falta.

Los altos propósitos a que sin duda se quiso atender por el contrato de 11 de Agosto próximo pasado, y especialmente la sub-

sistencia y progreso de la Colonia del Chubut, no pueden sufrir más demoras.

Sin perjuicio de hacer efectiva oportunamente la fianza del artículo 10, V. E. se hallaría autorizado a poner administrativamente remedio a esta situación, sea haciendo los viajes que faltan a cargo de la empresa, sea dando por nulo el contrato, y celebrando otro nuevo. — Marzo 31 de 1876.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 1.º de 1876.

Tomo 5, pág. 290 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley de 4 de Julio de 1872, concedió pensión de sueldo íntegro a las viudas e hijas solteras de los Guerreros de la Independencia que tuviesen derecho a ella con arreglo a la Ley General de Pensiones —1865— sin hacer referencia alguna acerca de la prueba, la que continuó regida por la Ley General.

Al año siguiente, por Ley de 2 de octubre, se extendió este mismo beneficio a las viudas e hijas solteras de los milicianos que a las órdenes del General Güemes y otros jefes, «combatieron» en defensa de la Independencia.

Los abusos cometidos en lo que a la prueba se refiere, inspiraron al legislador quien, por el art. 3.º dispuso: Que la comprobación de las condiciones necesarias para gozar de los beneficios acordados, se haría por la exhibición de los despachos, listas de revistas, fojas de servicios u otros documentos auténticos; con lo quedó excluída, como medio de prueba, la declaración testimonial, dando valor solamente a la documental, que en adelante debe ser la prueba necesaria para gozar de pensión en los términos de la Ley.

Heredero de Valverde — sobre la validez de la prueba testimonial para obtener pensión.

Excmo. Señor:

La Ley empezó por acordar pensión de sueldo íntegro a las viudas e hijas de los guerreros de la Independencia, que tuviesen derecho a ella con arreglo a la Ley General de Pensiones.

En esa ocasión nada se dijo sobre comprobantes especiales, dejando por consiguiente esta circunstancia a las disposiciones de la ley general.

Pero un año después, se extendió el mismo beneficio a las viudas e hijas solteras de los milicianos que a las órdenes del General Güemes y otros Jefes, combatieron en defensa de la Independencia de la Nación.

Los abusos punibles aconsejaron entonces al legislador tomar precauciones, y ordenó por el artículo 3.º que la comprobación de las condiciones necesarias para gozar de los beneficios acordados, se haría por la exhibición de los despachos, listas de revista, fojas de servicios u otros documentos auténticos.

Por esta disposición está excluída, pues, la comprobación por testimonios, que por lo demás tampoco han dicho nada sobre la conservación de Valverde en el servicio, (sin haber sido separado legalmente, o hecho dimisión, según la ley general del 65.

Pienso que el Poder Ejecutivo debe desechar esta solicitud, como todas las que pudiesen presentarse del mismo género. Junio 14 de 1876.

Ministerio de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Junio 17 de 1876.

Tomo 5, pág. 344. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No habiendo tratado, la extradición de criminales es voluntaria entre los Estados, y sujeta generalmente a la reciprocidad.
- II. — Ella recae sobre los autores de delitos para ser juzgados, mas no sobre condenados que cumplen sus sentencias.
- III. — Debe considerarse como defectuoso y deficiente el Tratado de Extradición con la Rep. Oriental del Uruguay de 1865 y de necesidad urgente la celebración de uno nuevo más adecuado a nuestras circunstancias y conveniencias; pero hasta tanto no sea denunciado por alguno de los dos Gobiernos contratantes debe cumplirse estrictamente por ambas partes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Entre Ríos — sobre un artículo publicado en «La Pampa» relativo al hecho de la entrega de un criminal, por el Jefe Político de Concordia al del Salto.

Excmo. Señor:

La extradición de criminales, es voluntaria cuando ningún tratado obliga a ella, exigiéndose generalmente, la reciprocidad; pero compitiendo en todo caso al Gobierno de la Nación, determinar una y otra.

La extradición, por otra parte, de que en las convenciones se trata, recae sobre los autores de delitos, para ser juzgados, en el interés de la justicia, pero no sobre condenados que cumplen sus sentencias, en cuyo caso hay simplemente evasión, que se rige por otros principios.

El tratado con la República Oriental, es, sin duda, deficiente.

El, como casi todos, no se ocupa sino de la acusación. Tampoco distingue condenados, de desertores de la guarnición de Martín García.

A pesar de la proximidad y semejanza de instituciones sus artículos 6 y 7 requieren, tantas o más condiciones que las que se usan entre naciones de distinta legislación.

El Gobierno Oriental, por otra parte, lejos de allanar estos inconvenientes, los ha exagerado con frecuencia.

Para colmo de irregularidades, el artículo segundo que dá el derecho de pedir la extradición a los Jefes Políticos del Salto, Paisandú y Soriano, no lo dá sino a los Gobiernos de Entre Ríos y Corrientes.

Pero todo esto, lo que prueba es, la necesidad urgente de celebrar otro más adecuado a nuestras circunstancias y conveniencias.

Mientras el que esté en vigencia, y lo estará, según el artículo trece, hasta que se denuncie por alguno de los dos Gobiernos, las autoridades sùbalternas de Provincia nunca deben entregar criminales, no comprendidos en el artículo primero, como debe hacerse, ni los mismos comprendidos, sin las formalidades de los artículos 6 y 7. — Junio 16 de 1876

Resolución de conformidad con lo dictaminado.

Tomo 5, pág. 293. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde se haga saber al Santo Padre que en las Bulas instituyendo Obispos en Diócesis argentinas, se haga constar la intervención que en la elección de ellos, toma el Gobierno Nacional en su calidad de Patrono, suprimiendo por lo contrario, las palabras que atribuyen al Papa la exclusividad de dichos nombramientos.

Bula — instituyendo Obispo de Córdoba al Dr. Don Manuel Eduardo Alvarez.

Suprema Corte:

Según la Constitución vigente, toca al Poder Ejecutivo, nombrar los Obispos, por la presentación a propuesta en terna del Senado.

Desde nuestra emancipación de la Metrópolis, los Obispos de este país nunca se han provisto de otro modo.

Desde el mismo tiempo sin embargo, en la Bula de institución, ninguna mención se ha hecho de esta intervención del Patronato, indispensable por nuestro derecho; y por el contrario se dice que el Papa nombra motu proprio.

Esto mismo pasa con las Bulas que instituyen Obispo de Córdoba al Señor Alvarez.

Los Poderes Públicos en todos estos casos se han limitado a llevar su protesta ante el Jefe de la Iglesia, en nombre de la soberanía y alto Patronato de la Nación, sometiendo además al nombrado en esta forma a un juramento de reconocimiento.

Era ya tiempo, y habría sido de desear que el Ministro Argentino en Londres, que ha remitido las Bulas en favor del Sr. Alvarez, hubiese gestionado su reforma.

En su defecto sería, igualmente, tiempo de hacer cesar diplomáticamente esta contrariedad de los hechos con las palabras del Soberano Pontífice.

Pero mientras esto tiene lugar, creo que la Corte se halla una vez más en el caso de prestar el acuerdo constitucional para que se conceda el *pase* con la protesta y juramento de costumbre, consultando de este modo los derechos de la Nación y los intereses religiosos que pueden depender de la pronta institución del Señor Alvarez. — Junio 26 de 1876.

Fórmula del Juramento

Juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que en el ejercicio del Obispado de Córdoba seré fiel a la Nación, reconociendo su Soberanía y Alto Patronato; que lo guardaré en todo y por todo llanamente y sin impedimento alguno; que no aceptaré dignidad alguna sin expreso consentimiento del Gobierno Nacional, y que en ningún caso haré promesa o juramento alguno que pueda considerarse opuesto al que actualmente presto, y de conformidad a la Constitución, quedando salvas las leyes de Dios y de la Iglesia.

Si así no lo hiciese; Dios y la Patria me lo demanden.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Junio 3 de 1876.

No corresponde el otorgamiento del «exequátur» a un boleto de secularización obtenido sin sujeción al procedimiento del Derecho de Patronato que el Gobierno Nacional ejerce, máxime si no está reconocido el carácter diplomático de quien suscribió dicho «boleto».

Fray Bartolomé Gabarro, pedido de exequátur.

Excmo. Señor:

El título de *negotiorum gestor* que se atribuye el Sr. Bruschetti, llama desde luego la atención; porque era sólo conocido en los tiempos en que la diplomacia Pontificia, no tenía su puesto en las relaciones internacionales.

Pero sea de esto lo que fuere, *el boleto de secularización*, presentado al exequátur, aparece obtenido sin sujeción al procedimiento del derecho de Patronato, que el Gobierno Nacional ejerce.

Entiendo, además, que el Señor Bruschetti no está reconocido en el carácter diplomático que dice revestir; y esta circunstancia sería bastante para rehusar el *pase*, aunque quisiera prescindir de aquella forma, por ser el rescripto de interés privado.

Soy pues de opinión, que el Gobierno mande devolver la solicitud. — Julio de 1876.

Tomo 5, pág. 356. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No procede la oposición formulada contra el otorgamiento de una «marca» fundándose en que tiene semejanza con una ya concedida al recurrente, si entre ellas hay diferencias sustanciales que no permiten su confusión.

Peters Hermanos, reclaman de una resolución no haciéndoles lugar a una interposición, a fin de que no se acordara a los Señores Moller y Compañía, como marca de fábrica, una etiqueta doble para la ginebra de Holanda.

Excmo. Señor:

Aunque se advierta, es cierto alguna semejanza entre las marcas obtenidas por los Señores Peters y Moller, hay entre ellas di-

ferencias substanciales que no permiten se confundan, como no puede confundirse un **tirabuzón** con una llave.

Es por la tanto mi parecer que V. E. mantenga la resolución de la Oficina Nacional. — Agosto 16 de 1876 .

Resolución de acuerdo con lo dictaminado.

Tomo 5, pág. 473 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Diligenciamiento de exhortos — consulta que hace la Legación de Italia.

En 26 de Agosto de 1876, la Legación de Italia pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores le hiciera saber las vistas del Gobierno acerca de los siguientes puntos:

1.º — Si en vista de la falta de una convención entre los dos Gobiernos que establezca y reglamente el ajuste de la ejecución de los exhortos en lo penal, que los Tribunales de uno de los Estados dirige a los del otro, el Argentino acepta, según el principio de reciprocidad, que se les dé el debido curso, exceptuando aquéllos que se refieran a procesos políticos o cuasi políticos.

2.º — Si para ser recibidos, basta que sean escritos en el idioma del Tribunal requirente, o si el exhorto debe ir acompañado de una versión a la lengua del Tribunal requerido.

3.º — Si los gastos que ocasione la ejecución de los exhortos deben ser pagados por el Estado requirente, o si quedarán compensados según la regla aceptada con más generalidad por los Estados.

Consultado el Procurador General de la Nación, dictaminó como sigue:

Excmo. Señor:

Los exhortos preden ser de dos clases:

En materia civil o criminal, por acusación de parte;

En materia criminal, por acusación seguida de oficio.

Respecto de los primeros, es regla común que sus gastos deben cubrirlos los interesados.

La duda sólo ha surgido en estos últimos tiempos respecto de los segundos.

Costeados en este caso los gastos por las administraciones, dentro de los límites territoriales se ha creído que facilitaría la

justicia general, la continuación del mismo sistema de nación a nación, mediante la reciprocidad.

Pero V. E. no puede ni debe entrar en esta vía.

No puede, por que su presupuesto no contiene partida aplicable a esos gastos.

No debe, porque la reciprocidad estaría solamente en el papel, siendo la proporción de habitantes respectivos, y por tanto de causas de mil a una, sino más. — Setiembre 4 de 1876.

En 11 de Setiembre de 1876, se transcribió en contestación, la precedente vista, a la Legación de Italia.

Tomo 5, pág. 366 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Quando un emblema se ha convertido en la designación corriente usada en el comercio, para indicar la naturaleza de un artículo, no debe concederse a ninguno en calidad de «marca» o concederse a todos los que la soliciten, buscando en este caso la diferenciación que debe caracterizar cada «marca», en las palabras que deben acompañar a dicho emblema.

C. J. Getting y Cía., solicitan la revocación de una resolución sobre derecho de propiedad a la marca «Corona» para el bramante real.

Señor Ministro:

De estos antecedentes se desprende que cuatro casas de comercio de esta plaza introducen bramantes bajo la marca «Corona»; tres han obtenido el registro de tal marca, y habiendo ocurrido una más, la Oficina de Ingenieros ha creído debía negarla.

Consideradas las «Coronas» en cuestión, aisladamente, y desligadas de los accesorios del nombre de los introductores y demás signos que las acompañan, se confunden fácilmente, y estarán en el caso del artículo 4.º.

Concedida la primera, no ha debido concederse las demás.

No alcanzo empero la razón porque concedidas tres, no haya de concederse una más.

Consideradas estas mismas marcas en su conjunto; es decir, con los nombres de los introductores y los signos o dibujos que las acompañan, la confusión es menor, si no desaparece por completo, pues no puede confundirse el nombre de Getting con el de Barclay Campbell y Cía., en este caso el nombre del comerciante y la designación convencional serían lo principal, viniendo a ser la *Corona* un simple accesorio.

La concesión de las marcas en cuestión podría, entonces considerarse autorizada por los artículos 22 y 23.

Es decir, el nombre del comerciante y el de la razón social con la agregación de la *Corona*, constituirían la marca.

Pero hay más todavía; se ha observado que el comercio inglés tiene una especial predilección por la marca *Corona*, y no es difícil que haya otras casas, a más de las cuatro que se han presentado, que introduzcan también bramantes bajo la misma marca.

En este caso, cuando la denominación de un objeto; cuando un signo cualquiera es usado por muchos a la vez, cuando esa denominación o ese signo han entrado en el comercio general —habría justicia en acordarlo al primero que los solicitase con exclusión de los demás?

No se considera como marca de fábrica o de comercio dice el inciso 5.º del artículo 3.º, las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenecen.

Paréceme que esta disposición es aplicable al caso que nos ocupa.

La marca *Corona*, según este mismo expediente lo demuestra es una designación *usualmente empleada* por muchas casas de comercio para indicar la naturaleza de un mismo artículo; y en rigor no debe considerarse como marca de fábrica de comercio. No ha debido concederse a ninguna o ha debido concederse a todas.

Podrá observarse que la previsión de la Ley salva los inconvenientes que dejo señalados. Ella ordena, en efecto, que toda solicitud sea publicada por treinta días, y dá derecho a oponerse a todos los que en ella tuvieran interés.

Este mismo caso demuestra empero, que este remedio no es bastante eficaz. No sería conveniente ni justo, además que el descuido o la negligencia de algunos viniera a establecer un monopo-

lio para la explotación de un artículo que era objeto de un comercio general.

En mérito de lo expuesto es mi parecer:

1.º Que puesto que la marca *Corona* ha sido concedida a los Señores Barclay Campbell y Cía., Torquist y Cía., y Heimendahl, no hay razón para que no se conceda a los Señores Getting, entendiéndose que en este caso las designaciones de los nombres respectivos y demás signos que lo acompañan forman parte de las marcas respectivas.

2.º Se prevenga a la Oficina de Ingenieros que en casos como el presente, y siempre que de ello obtenga conocimiento, no admita como marcas de fábrica o de comercio las designaciones de objetos, los emblemas y demás usualmente empleados y de uso general en el comercio. — Octubre de 1876.

Señor Ministro:

Si hay confusión mas o menos lamentable, en el caso de estas marcas *Corona*, ella tiene su origen en el hecho de haber sido concedidas varias con este mismo emblema, que se presta a la simple vista a una confusión mas o menos lamentable.

No será esto imputable al Departamento de Ingenieros si se quiere; pero el hecho no es por ello menos manifiesto. Las *Coronas* en cuestión se confunden visiblemente y si el distintivo de la marca ha de buscarse en la palabra *Real* o *Imperia!*, lo que parece satisfacer al expresado Departamento, no veo porque razón no basta para constituir una marca distinta al agregado de los nombres de las casas Bemberg, Barclay, Getting, etc.

La verdad es, según lo observó el Doctor Tejedor, en el caso de la misma marca *Corona*, solicitada por los Señores Bemberg, Heimendahl y Cía., que *tratándose de marcas antiguas y que el comercio ha estado acostumbrado a distinguir, es menos posible la confusión.*

Esta observación está de perfecto acuerdo con los que manifesté a V. E. en mi anterior dictamen cuando un emblema ha entrado en uso general del comercio, sirviendo a muchos a la vez: o no debe concederse a ninguno o a todos; buscando en este caso el distintivo que debe caracterizar cada marca en las

palabras que acompañen dicho emblema, como la razón social de las casas respectivas, etc.

Pienso por todo esto que, no obstante lo expuesto por el Departamento de Ingenieros, subsiste en todo su vigor la razón en cuyo mérito pedí en mi anterior dictamen se concediese a los Señores Getting y Cía. la marca *Corona* que han solicitado.

Tomo 5, pág. 389 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde en principio, que el P. E. otorgue el anticipo que se solicita, convenido en el respectivo contrato, correspondiente a un valor de 30 millas de materiales telegráficos, en razón de que, si bien se dice que éstos se encuentran listos para iniciar la obra, no se sabe con exactitud si son todos los necesarios en número, calidad y clase. Ello no obstante, si el P. E. cree conveniente el acordar dicho anticipo, debe, para mayor seguridad, declarar previamente que de conformidad a lo convenido en el contrato, la fianza dada por el contratista comprende también el anticipo que se le acuerde.

**Adolfo E. Carranza, contratista del telégrafo de Jujuy a la Quia-
ca, solicita el anticipo del valor de treinta millas de materia-
les telegráficos.**

Excmo. Señor:

La construcción de la línea hasta Tupiza debía estar terminada según la base 9.^a de la Ley, a más tardar en el término de dos años, contados desde la celebración del contrato con el P. E., hace hoy un año que se celebró y se aprobó éste, y del expediente remitido no aparece sino que en enero del corriente llegaron de Jujuy, según el testimonio del Señor Bustamante, diez carros con materiales, y que en abril había en una estancia dos mil postes y en otra algunos rollos de alambre, y según el señor Molina, contestación de mayo 11, que se habían despachado de Catamarca para Jujuy cargas de útiles para el trabajo.

Sea el que fuere, pues, el juicio que se forme de los vicios del contrato, por razón del anticipo, exoneración de derechos y fianza

sin comprobación, hay que resolver antes la oportunidad de dicho anticipo y el alcance de la fianza otorgada.

Respecto de lo primero, mi opinión, como la del Administrador de Correos y Telégrafos, es que no pueden llamarse listos, materiales que no se saben si son todos los necesarios en número, calidad y clase; y sobre lo segundo, que la fianza comprende todo el contrato y por consiguiente el anticipo, según el artículo final.

Sin embargo, si el Gobierno resolviese acordar el anticipo, debería para mayor seguridad declarar previamente este punto, y la solvencia actual del fiador.

El Gobierno, por lo demás, que hace un contrato, no puede decorosamente decidir de la nulidad de él y su deber será siempre cumplirlo, con la responsabilidad general ante el Congreso 'que dictó la Ley. — Octubre 31 de 1876.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad.
Noviembre 9 de 1876.

Tomo 5, pág. 376 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — A las Provincias corresponde el dominio y posesión de las islas fluviales anexas a sus territorios. El Gobierno Nacional tiene jurisdicción sobre las mismas, pudiendo ejecutar obras de interés público y ocuparlas permanentemente a los fines de la defensa o necesidades de la Administración Nacional.
- II. — Las islas anexas a Territorios Nacionales y las situadas en aguas marítimas de la Nación, están sujetas en un todo a las leyes y autoridades centrales.
- III. — Las posesiones de tierras otorgadas oficialmente, constituyen un título preferente para la obtención del dominio. La posesión debe otorgarse con sujeción a las reglas generales establecidas por ley o decreto.

Joaquín Carbalho y José León Cáceres, solicitan la posesión de una isla situada frente a Bella Vista.

Excmo. Señor:

La posesión y dominio de las islas fluviales es de la Provincia o Estado a que están anexas, aunque la jurisdicción corresponda a la Nación, y en virtud de ello, puede el Gobierno Nacional, ejecutar allí obras de interés público y aun ocuparlas permanentemente, al objeto de la mejor defensa o administración nacional.

Los territorios nacionales, mientras no constituyan Estados, las islas anexas y las situadas en las aguas marítimas de la Nación, están por el contrario sujetas en un todo a las leyes y autoridades generales.

La isla de que trata la anterior solicitud, se halla frente a Bella Vista, en la Provincia de Corrientes; está situada, según se dice, entre los dos canales principales del Paraná; es anegadiza en su mayor parte; y según el Gobernador del Chaco, de una extensión de una legua de largo, por media de ancho, aproximadamente; y para adquirir su posesión se promete edificar dos piezas, hacer una plantación, tener en ella dos colonos y 200 ó 300 cabezas de ganado.

Los dos canales principales son un contrasentido. La isla tiene que estar del lado de Corrientes o del lado del Chaco, correspondiendo en el primer caso, la concesión al Gobierno de Corrientes y en el segundo al de la Nación. La idea de dos piezas para lazareto es absurda y más absurda aún *la colonia de dos personas*, que depen-

derá todavía con las mismas plantaciones, de las condiciones del terreno.

Evidentemente, no se trata sino de una invernada y para esto basta ocupar la isla, si está realmente desocupada.

Las posesiones oficiales dan siempre un derecho preferente al dominio, y no pueden ni deben otorgarse, sin previo conocimiento y previas reglas generales establecidas por ley o decreto, como sucede en las islas anexas a la Provincia de Buenos Aires.

Mi opinión es por lo tanto, que no hay datos bastantes para resolver favorablemente esta solicitud en el fondo ni en la forma. — Diciembre 15 de 1876.

Ministerio del Interior. Archívese. Diciembre 5 de 1876.

Tomo 5, pág. 291 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Sobre cumplimiento de exhortos en España

Con fecha 24 de Abril de 1876, se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Encargado de Negocios de España, comunicando las disposiciones que su Gobierno había adoptado, relativas al cumplimiento de exhortos procedentes de Jueces Argentinos.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a quien se dió vista del asunto, dió a este respecto el siguiente informe:

Excmo. Señor:

La nota del Señor Encargado de Negocios de España de fecha 24 de Abril, después de expresar dificultades sentidas en la ejecución de los exhortos, participa la resolución dictada al respecto por el Gobierno Español.

Ella es, que las autoridades judiciales de ese Reino no darán curso a exhortos de los Jueces de esta República, sin que previamente se designe persona que abone esos gastos en la ordenación de pagos del Ministerio respectivo o en el punto donde ha de cumplirse el exhorto y que en las causas criminales seguidas de oficio o declaradas pobres, los gastos de su diligenciamiento se cubran por la Legación, con cargo, etc.

Como consecuencia de esas disposiciones, viene la marcada bajo el número tres. «Que en justa reciprocidad no se dé curso por esta Legación a exhorto ninguno de las Autoridades Argentinas sin que previamente se asegure el pago de los gastos que ocasione su evacuación en España, del modo que convenga con el Gobierno de la República».

Está, pues pendiente a arreglarse la manera cómo se ha de asegurar el pago de los gastos, para que se dé en España cumplimiento a los exhortos librados por nuestras autoridades, no sólo en los asuntos de interés privado, sino también en los de oficio.

Es esa la dificultad implícita, en la disposición comunicada con que tropieza el diligenciamiento de nuestros exhortos, ínterin no se verifique el arreglo que se indica.

El medio de salvarla, puede variar los detalles.

Lo más expedito podría ser que el costo del diligenciamiento, del exhorto fuese siempre satisfecho por la Legación Argentina o Consulado de la localidad, en que debiera diligenciarse, debiendo al efecto ir por su conducto; y cuya erogación la cubriría el Gobierno Nacional, siendo reembolsada por el Gobierno Provincial, en lo que respecta a sus autoridades, debiendo en el mismo exhorto, y concluidas las diligencias, anotarse el costo y percibo.

Si ese pensamiento fuese aceptado, sería conveniente dar una disposición por parte de la Provincia, que abrazase varios puntos:

Ellos serán: 1.º) Es deber del Juez que libra un exhorto, el hacer depositar en el Banco, por el particular que lo solicita, una suma prudencialmente designada, para que cuando reciba diligenciado el oficio pueda poner a disposición del Poder Ejecutivo lo que ello importe; 2.º) El que cuando esos exhortos fueran de oficio, el procedimiento que debe adoptarse para procurar el reintegro en la prosecución del juicio; y 3.º) la forma que deben llevar los librados, en causa criminal y los otros, que no requieran depósito previo, ni deba abonarse por los litigantes o enjuiciados.

La Corte deja así cumplidos, no sólo los deseos de S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, sino que indica lo que sería conveniente se adoptase, cuando se realizara el arreglo pendiente. — Buenos Aires, Agosto 17 de 1876. — Sixto Villegas. — Manuel M. Escalada. — Alejo B. González. — Sabiano Kier. — Andrés Somellera. — Ante mí: Aurelio Prado.

Pasado este asunto en consulta al Señor Procurador General de la Nación, dictaminó así:

Excmo. Señor:

La nota de 24 de Abril de 1876, del Ministro Español, supone arreglos que se intentaron y se encontraron imposibles.

Estos mismos arreglos, se pretendieron por la Legación Italiana y dieron el mismo resultado, porque la reciprocidad que se ofrecía era imposible en la práctica.

El modo de asegurar el pago, que se propone por la Suprema Corte de la Provincia, me parece lleno de trámites y de dificultades.

En mi opinión, no hay otra cosa que hacer, sino dejar que en los asuntos de interés privado los particulares mismos sean los que se ocupen por sí o por apoderados del despacho de los exhortos, y en los de interés público, las Legaciones o Consulados de la República, previa citación de los Tribunales. — Febrero '11 de 1877 .

Tomo 5, pág. 300 — Inf. de los Concej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que el Poder Ejecutivo, resuelva la cuestión de límites que plantea la Provincia de Santiago del Estero con respecto a la de Catamarca, ya que la fijación de los mismos, por precepto Constitucional, tanto en los Territorios Nacionales como en las Provincias, corresponde al Congreso; no obstante ello, puede el Gobierno Central interponer sus buenos oficios, aconsejando el sometimiento de la cuestión a un fallo arbitral, hasta tanto el Congreso no la decida.

Límites entre las Provincias de Santiago del Estero y la de Catamarca

Excmo. Señor:

La nota del Gobierno de Santiago se refiere a antecedentes oficiales, que no me han sido pasados.

En ella se menciona también, sin agregarse, una orden telegráfica del Presidente de la República, de 10 de Octubre pasado, al Gobernador de Catamarca para que respetase la posesión en que estaba Santiago, de las estaciones disputadas.

Prescindiendo de todo esto, que no conozco, debo sólo decir a V. E. que aquí no se trata de hostilidades entre dos Provincias, que pudieran justificar una intervención nacional, ni tampoco de quejas contenciosas, cuya decisión pudiera corresponder a la Corte Suprema.

La cuestión que tienen entre sí los dos Gobiernos es puramente de límites, cuya fijación tanto respecto de los territorios Nacionales, como de los de Provincia, compete al Congreso.

Ejercitando esta atribución, se declaró por el Congreso el año 62, que eran Nacionales todos los territorios existentes fuera de los límites o posesiones de las Provincias, y se ordenó al Ejecutivo

pedir a la mayor brevedad a los Gobiernos de Provincia, los conocimientos necesarios para fijarlos.

Reconociéndola por su parte casi todas las Provincias, entre ellas Catamarca, no fijan los límites en sus Constituciones sino provisoriamente, hasta tanto el Congreso resuelva.

Pero, si ni V. E. ni la Corte podrían por todo esto intervenir en el asunto, al menos en la forma indicada por el Gobierno de Santiago, juzgo que ningún inconveniente habría en que el Ejecutivo Nacional continuase sus buenos oficios.

Después del despedazamiento de las antiguas Intendencias, en virtud de la Revolución de Mayo, todos los límites de las Provincias quedaron de tal modo oscuros, que mas bien que cuestiones de derecho, lo son de hecho o arbitraje.

Santiago, Catamarca y Tucumán formaron, como se sabe, una Provincia con este último nombre por Decreto de Octubre 8 de 1814, y se mantuvieron así, hasta que un nuevo despedazamiento separó el año 20 a Santiago y el 21 a Catamarca, de Tucumán.

Es sabido también que Catamarca no toca con Santiago, sino por una línea de estancias escalonadas hasta el río Albigasta, confundiendo de este modo los límites interprovinciales, con los particulares, y haciendo dudosa las posesiones de la Provincia.

Las Cédulas, además, de merced de estos territorios y de fundación de sus pueblos, no trazaron sino líneas generales de ríos, montañas o caminos que esperan todavía el estudio práctico para ser determinados.

La acción, pues, del Gobierno General podría en esta situación, y mientras que los límites no se fijen por el Congreso, ser muy benéfica en todos los casos, y en este mismo, excitando a los Gobiernos de Santiago y Catamarca a someter su cuestión a un fallo arbitral. — Marzo 2 de 1877.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad. — Abril 9 de 1877.

- I. — Los pasaportes provisionales otorgados por los Cónsules a embarcaciones adquiridas por argentinos en el extranjero, tienen la duración que resulta del viaje que dichos barcos deben realizar a puerto argentino, a efectos de su matriculación.
- II. — El uso de la bandera, no es requisito suficiente para gozar de la nacionalidad, ello debe completarse necesariamente con la inscripción de la matrícula en el Registro del país.

Consulta que hace el Cónsul Argentino en Liverpool — sobre la duración de los pasaportes.

Excmo. Señor:

La bandera no basta para el goce de la nacionalidad en un buque.

Necesítase, además, de la matrícula o inscripción en el Registro del país, con sujeción a las leyes o reglamentos propios.

De aquí viene que los Cónsules y aun las Legaciones, sólo dan pasaportes provisionales a los buques comprados por argentinos en los puertos extranjeros.

Consecuencia de la misma regla es que este pasaporte sirve hasta que el buque llegue a puerto argentino, lo que impone que salga en derechura a completar o verificar en forma su nacionalidad.

Tal creo que debe ser la respuesta a la anterior consulta. — 8 de Marzo de 1877.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Transcribese como Resolución el dictamen del Procurador General. — Marzo 8 de 1877.

Tomo 5, pág. 404 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La autorización que debe conferirse a las Sociedades Anónimas por el art. 405 del Código de Comercio, debe serlo por los Poderes Ejecutivos de las Provincias en cuyos territorios la Sociedad haya de ejercer sus operaciones.

Andrés Schweckart, — pide autorización para establecer en esta Capital y demás Provincias una Sociedad Anónima de Seguros Mutuos.

Excmo. Señor:

Corresponde al Gobierno de Buenos Aires acordar la autorización que se solicita.

El P. E. de que trata el art. 405 del Código de Comercio es de cada Provincia, donde la Sociedad Anónima haya de ejercer sus operaciones.

La razón de que éstas puedan extenderse a toda la República, no es bastante para dar participación en estos asuntos al Gobierno Nacional.

Después de obtenida la licencia de Buenos Aires, pueden solicitarse igualmente la de las demás.

No lo es tampoco la atingencia con un Banco, por la *Sección Bancaria* que tiene según sus Estatutos.

Por la Constitución, los Poderes Públicos de la Nación sólo se ocupan de Bancos, en el caso de que hayan de emitir billetes.

Abril 17 de 1877.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad. Abril 26 de 1877.

Tomo 5, pág. 412 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — El matrimonio celebrado según los ritos de la religión a que pertenecen los contrayentes que no es la Católica Romana, produce en el país todos los efectos civiles del matrimonio válido siempre que no se oponga a las disposiciones del Código Civil.
- II. — La Ley del lugar en que se celebra el matrimonio, es la que debe determinar cuál es el Tribunal competente para conocer en los expedientes que se formen sobre celebración de matrimonios entre personas extrañas al culto católico.
- III. — Las relaciones civiles entre los esposos están regidas por el Cód. Civil.

La Legación de los Estados Unidos, — consulta sobre la validez del matrimonio entre protestantes.

Excmo. Señor:

La primera pregunta tiene su respuesta categórica en estas palabras del Código Civil: *«El matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia Católica..... produce en la República todos los efectos civiles del matrimonio válido, si fuere celebrado en conformidad a las leyes de este Código, y según las leyes y ritos de la Iglesia a que los contrayentes pertenecieran».*

La segunda recae sobre un punto de mero procedimiento, y debe contestarse que está regido por la Ley del lugar; que en Buenos Aires atribuye al Presidente de la Corte Suprema de la Provincia, el conocimiento de los expedientes sobre celebración de los matrimonios entre personas extrañas al culto Católico.

Según el Código Civil, además, común a toda la República, las relaciones civiles de los esposos entre sí son determinadas por esa ley, y resuelta, en caso de litigio, por sus Tribunales. — Mayo 18 de 1877.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad. — Mayo 24 de 1877.

- I. — Debe negarse el pase a «cartas patentes» otorgadas teniendo en cuenta la división geográfica de la época de la Colonia, en la que se considera a Asunción del Paraguay y a Buenos Aires como formando parte de la misma Provincia del Río de la Plata.
- II. — Deben ser traducidas al castellano las Bulas y Breves Pontificios antes de darles el curso que correspondan.

Fray Abraham Argañaraz, — solicita se le conceda el «pase» a dos cartas patentes expedidas a su favor.

Excmo. Señor:

Las dos patentes anteriores no pueden ni deben admitirse.

En Roma están todavía con la geografía política de las conquistas en que Asunción y Buenos Aires eran una misma Provincia, con el nombre universal de Río de la Plata.

Entonces eran del Rey también todas las posesiones españolas que administraba por sus agentes llamados primero Adelantados y Gobernadores y después Virreyes e Intendentes.

Las divisiones territoriales eran pues, simplemente administrativas, y poco importaba que la jurisdicción superior, eclesiástica o monástica, comprendiese todas o varias Provincias.

Pero hoy esas divisiones son de soberanía e independencia; y no puede consentirse se apliquen a Buenos Aires nombramientos de Presidente de Convento y a la República el de Comisarios visitadores con el nombre de Provincia de Asunción.

Además, las Bulas y Breves Pontificios acostumbran traducirse al español, antes de darle curso, como que son una especie de documentos internacionales.

De estas patentes ha debido ordenarse igualmente su traducción, o por lo menos, acompañarse por el interesado una privada. Junio 28 de 1877.

Departamento de Culto. Resolución contraria a lo dictaminado. — Agosto 21 de 1877.

La designación usualmente empleada para indicar la naturaleza de un producto o la clase a que pertenece, si viene acompañada de signos emblemáticos, puede considerarse como «marca» de conformidad con la ley de la materia y otorgarse en tal carácter al solicitante.

Perez y Corti, solicitan se les acuerde propiedad de la marca que usan para el licor «Tamarindo»

Excmo. Señor:

El Inciso 5.º del artículo 3.º de la Ley sobre marcas de fábrica, declaran que no se consideran como tales *las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenezcan.*

Fué en esta disposición en la que la Oficina Nacional se fundó para negar la patente que los Sres. Pini Hnos. y Cía. solicitaron bajo la palabra «Tamarindo».

Los Sres. Pini no se conformaron con esta resolución: V. E. la dejó sin efecto por venir aquella palabra acompañada *de signos emblemáticos y ser entonces verdadera marca.*

Hoy los mismos Sres. Pini pretenden se prohíba a los Sres. Pérez y Corti el uso de la misma palabra «Tamarindo» olvidando que viene también acompañada de signos emblemáticos que constituyen una verdadera marca.

Es soberanamente injusto que pretendan ser juzgados por una regla de criterio distinta de la que quieren se aplique a los demás.

De estos antecedentes se desprende, que hay en este caso dos patentes distintas con la misma palabra «Tamarindo», si bien con distintos signos emblemáticos. La previsión de la Ley, al no permitir se adopten para marcas de fábricas palabras genéricas, que designen productos conocidos que puedan ser elaborados por distintos procederes y ser materia de distintas patentes, queda así visiblemente en evidencia y debe servir de aviso para proceder en casos tales con prudencia a fin de evitar cuestiones enojosas. — Julio 31 de 1877.

Excmo. Señor:

La Oficina del ramo niega la marca solicitada, por lo dispuesto en el inciso 5.º artículo 3.º de la Ley; es decir, porque no hay mar-

ca, sino designación usualmente empleada para indicar la naturaleza del producto, o la clase a que pertenece.

Tendría la Oficina perfectamente razón, si la propiedad se hubiese solicitado, de la palabra «Tamarindo»; pero en el caso presente, esta palabra está acompañada de signos emblemáticos y entonces es verdadera marca.

«Son marcas de fábricas o de comercio, dice la Ley, las denominaciones de los objetos bajo una forma particular».

La denegación debe ser pues, revocada por V. E. — Setiembre 13 de 1877.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Setiembre 20 de 1877.

Tomo 5, pág. 402 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

los Internuncios Apostólicos, son los Ministros Diplomáticos de la Santa Sede, y se requiere que sean recibidos y reconocidos como tales por el Gobierno Nacional, antes de entrar a ejercer sus funciones.

Corresponde rechazar un pase de Secularización otorgado por un representante de la Santa Sede, que no ha acreditado su representación en la forma antes indicada.

Fray Bartolomé Gabarro, pide se le otorgue el pase a un Rescripto de Secularización.

Excmo. Señor:

Entiendo que el Señor César Roncetti no está reconocido aún por el Gobierno Argentino como Internuncio de la Corte de Roma, cerca de esta República.

En la Memoria del 76, sólo se encuentra una comunicación del Ministro Domínguez, remitiendo un pliego cerrado, que le dijo contener los documentos que acreditaban al Señor Roncetti en el carácter de Delegado Apostólico, y el acuse de recibo del Ministerio.

Siendo estos delegados los Ministros Diplomáticos de la Santa Sede, necesitan ser recibidos y reconocidos como tales, antes de ejercer sus funciones.

Creo, pues, que por ahora no debe darse el *pase* al breve presentado. — Agosto 13 de 1877.

Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Setiembre 4 de 1877.

Tomo 5, pág. 424 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La competencia que la Ley de Marcas, por el art. 17, acuerda al Ministro del Interior en grado de apelación, es de orden jerárquico, para corregir los errores que la Oficina de Patentes pueda cometer en la aplicación de la Ley o por diferencias de carácter administrativo en el otorgamiento de la propiedad de la «marca». Si la cuestión versa sobre usurpación de «marca» o sobre el derecho exclusivo de la usada por varios antes de la promulgación de la Ley, su juzgamiento compete a los Tribunales judiciales.
- II. — El parecido de las «marcas» no es razón para oponerse a su otorgamiento, y menos si se trata de «marcas» antiguas que el comercio está acostumbrado a distinguir.

Los señores Bemberg Heimendahl y Cía. — solicitan la propiedad de la marca de comercio del Bramante que introducen bajo la denominación «Bramante Imperial».

Excmo. Señor:

Los Señores Bemberg Heimendahl y Cía. acuden a ese Ministerio, en uso del recurso de apelación que les otorga el artículo 17 de la Ley de Marcas, según el cual toca a aquél, después de oír al Procurador del Tesoro, confirmar o revocar la denegación hecha por la Oficina de Patentes.

Creiendo que por falta de este funcionario se quiere recibir mi parecer, paso a darlo.

Es de notar, desde luego, que la apelación otorgada por la Ley, para ante el Ministerio del Interior, muestra por sí solo que no puede tratarse sino de un caso administrativo.

Si la cuestión fuera sobre usurpación de marca, o sobre el derecho exclusivo a lo usado por varios, antes de la promulgación de la Ley, su juzgamiento correspondería a los Tribunales.

En estos casos habría juicio verdadero, necesidad de pruebas y nunca podría el P. E. ser Juez competente en estos casos .

La jurisdicción que la Ley, por el artículo citado, acuerda a V. E. es puramente jerárquica, para corregir los errores que la Oficina de Patentes pudiera cometer en la aplicación, sin más que la vista de la Ley y de las diferencias también administrativas para obtener la propiedad de la marca.

En este concepto, y resultando de esas diferencias, que los Señores Bemberg Heimendahl y Cía. se han presentada en tiempo, y que la marca cuya propiedad solicitan, no es exactamente la misma que la otorgada a los Señores Barclay Campbell y Cía., mi opinión es que la resolución de la Oficina de Patentes debe revocarse.

La confusión posible no es una razón bastante para oponerse, y menos tratándose de marcas antiguas, que el comercio ha estado acostumbrado a distinguir. — Agosto 17 de 1877.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Setiembre 7 de 1877.

Tomo 5, pág. 417 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Habiendo informado el Ministro de Relaciones Exteriores que el Internuncio de Su Santidad aunque tiene su residencia en Río de Janeiro está acreditado ante nuestro Gobierno, corresponde conceder el «pase» a un boleto de secularización, otorgado por el mismo, debiendo observarse que el documento dice «Córdoba en las Indias» de lo que debe reclamarse.
- II. — Se da el nombre de «Rescriptos» a las gracias que otorga el Sumo Pontífice únicamente; las que emanan de los inferiores no llevan esta denominación y deben presentarse en papel sellado y en forma de petición.

Fray Vicente Ruiz, sobre concesión de «pase o exequátur»

Excmo. Señor:

En un caso análogo, el Señor Ministro de Relaciones Exteriores ha informado que el Internuncio César Roncetti está acreditado cerca del Gobierno Argentino, aunque su residencia es en Río de Janeiro.

En este concepto, y prescindiendo por razón del objeto de las formalidades previas que en general establecen nuestras leyes y que no aparecen llenadas por el interesado, al dirigir su pedido al Internuncio, ningún inconveniente encuentro al *pase* solicitado.

Observaré solamente, que en ese documento se dice a Córdoba en las Indias, de lo que debería reclamarse para enseñanza, aprovechando las relaciones diplomáticas establecidas, según el informe mencionado al principio.

Observaré igualmente que no se llaman Rescriptos, sino las gracias emanadas del Sumo Pontífice mismo, y que tales o no, cuando emanan de inferiores, las solicitudes para su ejecución deben presentarse en papel sellado, y en forma de petición. — Septiembre 22 de 1877.

Departamento del Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 10 de 1877.

Tomo 5, pág. 432 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente el reclamo sobre el aforo, cuando las merca-
derías ya han sido entregadas a los interesados y en consecuen-
cia, inaplicable al caso, la disposición de las Ordenanzas que
permite absolver de la pena impuesta si ha habido error eviden-
te en la declaración.

**Tomás Drysdale, pide reconsideración de una Resolución dictada
por la Aduana de la Capital en el aforo aplicado a una parti-
da de alambre.**

Señor Subsecretario:

Después de despachado, aforado y entregado un artículo, la
Aduana no admitirá reclamo sobre aforo..... dice la antigua
Ordenanza conforme en ello con la nueva.

Los alambres de que se trata no sólo fueron aforados, despa-
chados y entregados hace 2 años, sino, que sus derechos han sido
ya abonados según el último informe de la Contaduría.

Es, por lo tanto, inaplicable a este caso la disposición de la
misma ordenanza que permite absolver de una pena impuesta por

la falsa declaración proveniente de error evidente e imposible sin pasar inapercibido. — Octubre 16 de 1877

Ministerio de Hacienda. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 22 de 1877.

Tomo 5, pág. 452 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El otorgamiento de las cartas de ciudadanía argentina compete por la ley de la materia únicamente a los Jueces Federales.

El Cónsul General Argentino en Francia, pide carta de Ciudadanía Argentina para Don José Ramón del Valle

Señor Ministro:

El haber desempeñado quince años la Cancillería del Consulado de Burdeos, es sin duda un título por la Ley para obtener la Ciudadanía Argentina, pero ese hecho debe acreditarse ante el Juez Federal, que es la autoridad a quien la misma ley acuerda la facultad de concederla.

El Poder Ejecutivo no puede ni debe ocuparse de estas cosas.
Octubre 26 de 1877.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 29 de 1877.

Tomo 5, pág. 436 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El Gobierno de Nicaragua, — pide al Argentino su apoyo moral en una cuestión con el de Alemania, a lo que accede nuestro Gobierno.

En 31 de Julio de 1877 el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua puso en conocimiento del Argentino, los documentos relativos a la cuestión internacional suscitada por el Encargado de Negocios del Imperio Alemán, por pretendidas ofensas inferidas a Agentes Consulares Alemanes, para que en vista de ella el Gobierno Argentino se sirviera prestar al de Nicaragua, si lo tuviese a bien, su apoyo moral, dando instrucciones a sus representantes en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos para que concurrieran a establecer la irresponsabilidad de esa República, recabando aquellos iguales oficios de sus honorables colegas.

Señor Ministro:

No es fácil formar juicio exacto de la cuestión entre el Gobierno de Nicaragua y el Ministro Alemán, por los documentos impresos que se acompañan con la nota de 31 de Julio.

Si hemos de creer al Ministro, en el ataque violento contra el Cónsul tuvieron parte soldados del Gobierno, mientras que éste dice que el hecho no pasó de una riña entre miembros de una misma familia, sin participación alguna de tropa.

Pero sea de esto lo que fuere, desde que el Gobierno de Nicaragua se dirige al Argentino, pidiendo sólo su apoyo moral, para que nuestros Ministros en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos concurran a establecer la irresponsabilidad de dicha República, no veo inconveniente para que se acuerde, si tiempo hubiese, dejando a nuestros Ministros la libertad de proceder según las circunstancias, y el conocimiento más completo que puedan tomar del asunto. — Octubre 17 de 1877.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 27 de 1877.

Tomo 5, pág. 429 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Debe el P. E. considerar el Proyecto de Estudio de Extradición entre nuestro Gobierno y el Uruguayo, como inferior al Tratado en vigencia de 1865, razón por la cual no merece la aprobación por parte del Gobierno Argentino y convendría que el Congreso dictase una Ley en la que se especifiquen y definan los delitos susceptibles de extradición; y las formalidades para la aprehensión y entrega de los delinquentes, lo que constituirá una base cierta para los subsiguientes tratados.

Proyecto de Tratado de Extradición, celebrado entre el Encargado de Negocios de Montevideo y aquel Gobierno

Señor Ministro:

Con todos sus defectos, el Tratado de 1865 es superior al proyecto que se me ha remitido.

En aquél, sólo son materia de extradición los delitos atroces o graves: en el proyecto se descende hasta el uso de los despachos telegráficos, y destrucción de sus postes.

Según el Tratado la extradición no tiene lugar sino exhibiéndose los documentos que basten por las leyes propias para aprehender y enjuiciar, y además el reclamado puede todavía hacer oír sus descargos ante un Juez: por el proyecto la prisión que puede llegar a 15 días se ordena inmediatamente a pedido de un agente diplomático o consular, sin que se exijan documentos si no es por la extradición, ni se hable de juicio alguno para ésta.

Por el primero, los Gobernadores de Corrientes etc, están autorizados para pedirse recíprocamente la entrega de los criminales que se hubiesen evadido: por el segundo pueden pedirse y acordarse el arresto y entrega de los acusados.

Ese proyecto, además, tan prolijo en los delitos y fácil para la entrega, ha descuidado el caso de los desertores, tan ligado con la importancia de nuestra marina y la disciplina del ejército.

Mi opinión es, por lo tanto, que él no merece la aprobación del Gobierno Argentino.

Lo mejor sería excitar en la primera oportunidad al Congreso a dictar una Ley en que se especifiquen y definan los delitos susceptibles de extradición, y las formalidades necesarias para la aprehensión y la entrega.

De este modo tendría el Gobierno una base cierta para los subsiguientes tratados. — Octubre 19 de 1877.

Tomo 5, pág. 448 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La acumulación de sueldos nacionales, solo procede de conformidad a lo dispuesto por la Ley de 2 de Julio de 1856.

El Rector del Colegio Nacional de Corrientes, sobre acumulación de sueldos

Señor Ministro:

La Ley de 1856 es terminante.

«Todo empleado, dice, en que se acumulen dos o más empleos, gozará solamente el sueldo mayor de uno de ellos, y por vía de gratificación la 3.^a parte del siguiente en escala de cantidad».

Cuatro años después, (1860) una Resolución Ministerial previno también al Contador General:

«Siendo terminantes las disposiciones de la Ley de 2 de Julio de 1856, en lo relativo a la acumulación de sueldos, S. E., el Sr. Presidente ha dispuesto que no permita dicha acumulación bajo pretexto alguno, sino en los términos que la citada Ley prescribe».

Creo que la consulta anterior debe contestarse en los mismos términos. — Octubre 29 de 1877.

La Contaduría General de la Nación dictaminó con fecha Mayo 28 de 1878, adoptándose dicho dictamen como resolución con fecha 27 de Julio de 1878.

Tomo 5, pág. 425 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No procede el pedido formulado ante el Gobierno Nacional por el presidente de la Congregación Israelita de Buenos Aires, para llevar un registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones de los hebreos residentes en la Provincia de Buenos Aires, según una Constitución de la Congregación que representa, por ser la materia religiosa, de competencia de la legislación particular de los Estados, según lo dispone el Código Civil y ello es así, no obstante la nacionalización del Departamento del Culto.

Segismundo Auerbach, Presidente de la Congregación Israelita, pide permiso para llevar un registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones.

Excmo. Señor:

Sírvase ordenar V. E. previamente al solicitante presente los documentos que acrediten su carácter. — Octubre 6 de 1877.

Excmo. Señor:

El Señor Auerbach empezó por pedir del Gobierno Nacional autorización para llevar un registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones de los hebreos existentes en la Provincia de Buenos Aires y especialmente en su Capital.

En su segunda solicitud, dice que no puede exhibir documentos que lo acrediten como Ministro del Culto Israelita, porque no lo es, y aun cuando lo fuese no podría exhibirlos, puesto que entre los hebreos no se acostumbra extender diplomas a los rabinos, sino que la Congregación elige de entre sus miembros uno de los más aptos y hábiles para el cumplimiento de sus deberes en las ceremonias religiosas; y pide que el secretario de la Congregación sea autorizado para llevar un registro oficial de los matrimonios, bautismos y defunciones, según una Constitución de la Congregación que adjunta, mediante un certificado del Ministro que celebre el acto religioso.

El Señor Auerbach extravía el camino.

Aunque nacionalizado el Departamento del Culto, nada tiene que ver la Nación en esta materia, dejada por el Código Civil a la legislación particular de los Estados, porque lo contrario, dice la nota de remisión, «podría estimarse como una usurpación de los derechos de Estados independientes; pues sería necesario disponer

sobre los deberes de los Curas, de la Policía de cada pueblo y de la Municipalidad de cada Estado».

En la Provincia de Buenos Aires existe sobre el particular el Decreto citado por el Señor Auerbach, y que comprende a los Ministros de creencias distintas de la Religión Católica, Apostólica, Romana, acreditando previamente su carácter. Existe además otro de 28 de Octubre de 1857, reglamentando la forma en que han de llevarse los libros parroquiales por los Curas Católicos y Pastores de los cultos reformados.

Las solicitudes anteriores del Señor Auerbach, tampoco se ajustan a estas disposiciones, y no pueden por lo tanto ser acordadas bajo ningún respecto. Noviembre 7 de 1877.

Departamento del Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Noviembre 17 de 1877.

Tomo 5, pág. 437 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente el pedido que formula quien ha obtenido una patente por 5 años y pretende se le reserve el derecho de prórroga hasta los 15 años, máximo de la Ley, fundándose en que su situación pecuniaria no le permite abonar más que el impuesto correspondiente a una de 5 años. La Ley no admite estas reservas e indica que la solicitud debe expresar el tiempo por el que se solicita la patente, sin restricciones ni condiciones.

Joaquín Lecube, pide renovar una patente de invención

Señor Ministro:

El Sr. Lecube, después de obtener patente precaucional, antes de solicitar la definitiva, se dirigió al Gobierno para que declarase si le sería lícito pagar el impuesto correspondiente a una de cinco años, y reservarse la prórroga hasta los quince, que es el máximo de la Ley, alegando para semejante gracia su situación pecuniaria.

Según las últimas diligencias, sin haber el Gobierno resuelto el punto, aparece ya el Sr. Lecube, dueño de la patente definitiva

por cinco años; pero insiste en la resolución pendiente, diciendo que aquélla fué solicitada de la Oficina respectiva, sin perjuicio de la reserva mencionada.

La Ley es terminante. La solicitud debe expresar el tiempo, sin restricciones, condiciones ni reservas.

Además, la misión del Gobierno es cumplir las leyes y no interpretarlas.

En todo caso, finalmente, las patentes de invención envuelven un privilegio, y como tales la interpretación de ellos tiene que ser restrictiva.

Creo por todo esto que la solicitud del Sr. Lecube no es admisible. — Noviembre 12 de 1877.

Se adoptó como Resolución el dictamen. Noviembre 12 de 1877.

Tomo 5, pág. 410 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No hay ley alguna que obligue a la Nación a pagar los sueldos de los empleados en propias manos, ello tiene lugar por intermedio de los habilitados, autorizados tácitamente para recibir el importe. Por esta razón el pago hecho a un habilitado, aunque éste luego no cumpla con su obligación, hace cesar toda responsabilidad ulterior del Fisco.

Santiago Castro Feijóo y otros, reclaman sueldos como empleados del Departamento Agronómico de Tucumán

Señor Ministro:

Es una práctica general en la Administración la de los habilitados autorizados tácitamente para recibir y es consecuencia de esa práctica, que la paga a ellos se considere hecha debidamente, cesando desde ese momento toda responsabilidad del Fisco.

En el caso presente, parece haber sido el habilitado, el mismo Jefe de la Quinta Agronómica en Tucumán, quien después de recibir los sueldos, no los ha pagado. Sólo así se comprende que el Gobierno librase la orden en su favor y que los interesados no presenten su reclamo sino después que aquél se halla en Europa.

Ninguna ley, además, obliga al Gobierno a entregar sus sueldos a los empleados en propia mano, ni menos hacer sus intereses o su vigilancia.

Considero, pues, que el Gobierno no está obligado a pagar por segunda vez como se pretende. — Noviembre 30 de 1877.

Ministerio de Instrucción Pública. No pudiendo disponer de otros fondos para verificar estos pagos que los que destina el presupuesto y han sido entregados, como es de práctica, al empleado que hizo las veces de habilitado de la Escuela Agronómica de Tucumán, resérvese por ahora esta solicitud. — Noviembre 30 de 1877.

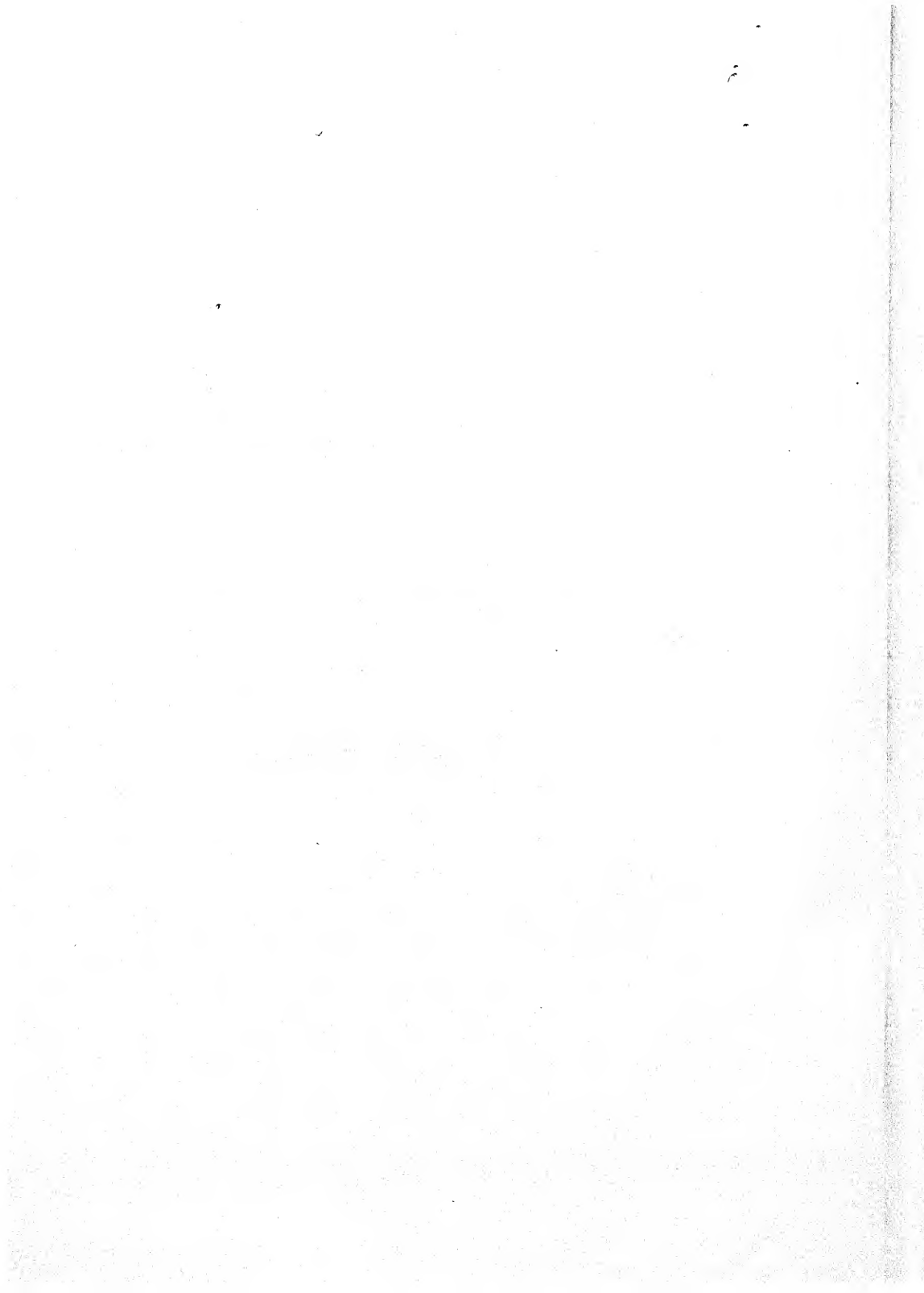
Tomo 5, pág. 392 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Dr. EDUARDO COSTA

1878-1890



Licitación para la explotación del Ferrocarril de Córdoba a Tucumán

Excmo. Señor:

Entre las 19 propuestas que se han presentado son dos las que visiblemente ofrecen mayores ventajas; la del Señor Kenny y la de los Señores Malbrán Carranza y Taylor.

El Departamento de Ingenieros encuentra más ventajosa la primera, la Contaduría General, la segunda. Me inclino al parecer de esta última Oficina.

El Señor Malbrán ofrece 38 % uniformemente sobre el rendimiento bruto del camino en los 5 años de contrato, aunque no alcance a 300.000 pesos fts.; el Señor Kenny 20 %, si el producto no excede de 300.000; 35 si excede de 300.000 hasta 400.000; 44 de 400 a 500.000; 50 de 500 a 600.000; 56 de 600 a 700.000 y 60 de 700.000 adelante.

El Departamento estima el producto del camino en el primer año del contrato en \$ 330.000. Para llegar a este resultado, toma por punto de partida el producido de 1877, que asciende a \$ 354.000 deduce primero un 20 % por las rebajas que hace en las tarifas la Ley de Octubre, y aumenta después un 10 % por el incremento que supone ha de tomar el tráfico en cada uno de los años subsiguientes y partiendo de esta base, es decir, de este aumento probable de 10 %, encuentra que la propuesta de Kenny aventaja a las de Malbrán en 22,5 y \$ 3 en el cómputo de los cinco años.

A las probabilidades o suposiciones que sirven de guía al Departamento, pueden oponerse estas otras.

Supóngase que en vez de aumentar disminuye el tráfico, aunque sea en una fracción mínima. En tal caso la propuesta de Malbrán es superior a la de Kenny en proporción de 38 a 20, lo que representa muy crecidas sumas.

Supóngase que el tráfico se conserve estacionario, o que solo aumente de manera que ni aún el último año el producto alcance a \$ 400.000. La propuesta de Malbrán sería entonces más ventajosa que la de Kenny en la proporción de 38 a 35, lo que representa mucho más que los \$ 22.000 en que en el supuesto del Departamento esta última sería superior.

Supóngase, por último, que el tráfico aumenta en la proporción que ha progresado el del Ferro-Carril Central desde que llegó a Córdoba. Aún así mismo, la propuesta de Malbrán sería más ventajosa.

¿Será o no probable que el tráfico aumente y que aumente en la proporción que supone el Departamento? Confieso que no participo de las halagüeñas esperanzas que abrigan los Señores Ingenieros.

Desde luego observaré que el mismo Departamento cree posible que el tráfico no solo no aumente, sino que las entradas no alcancen a cubrir los gastos. *El Consejo de Obras Públicas*, dice en su informe de 17 de Enero, «*considera mucho más ventajoso el primer sistema, según el cual el empresario dará siempre una parte de las entradas brutas de la línea, aun en el caso poco probable pero posible de que los gastos de explotación igualasen o excediesen las de las entradas*».

Es esto sin duda *poco probable*: no es empero más probable que aumente el tráfico en las abultadas proporciones que supone el Departamento.

Los Señores Ingenieros toman por base para sus cálculos el aumento que ha tenido el Ferrocarril Central en los 8 años corridos desde que llegó a Córdoba. Este aumento es de 6%, en los 8 años; y de 8 en los 6 primeros, *no contando los dos últimos por la paralización en los negocios a consecuencia de la crisis, dice el Departamento*. Pero esta crisis, continúa en toda su intensidad, sin que sea posible prever, cuando ha de terminar. Es entonces por demás arbitrario, tomar sólo en cuenta los años de prosperidad y prescindir de los de pobreza y retroceso.

El Departamento va todavía más allá. Supone que el Ferrocarril a Tucumán ha de prosperar más en la penosa actualidad que atraviesa la República, que no prosperó el Ferrocarril Central en la época de la prosperidad extraordinaria y sin precedente.

Dice que el Ferrocarril a Tucumán *va a centros productivos donde existen industrias importantes cuyo desarrollo empieza a producirse en gran escala.*

No conozco cuáles sean estas industrias importantes, capaces de dar alimento a un Ferrocarril. Probablemente el Departamento se refiere a la industria del azúcar. El Departamento olvida empero que industrias de este género, requieren grandes capitales, costosas máquinas a hacer venir de Europa y extensas plantaciones; todo lo que, no se improvisa en un día ni en cinco años. Por otra parte no debe olvidarse tampoco que el Ferrocarril Central ha tenido en su favor elementos de progreso con que no cuenta, ni es probable cuente el de Tucumán. Me refiero a las colonias establecidas a los costados de la línea y a la construcción del Ferrocarril a Río IV y Villa Mercedes, que no pueden estimarse en menos que los ingenios de azúcar en perspectiva.

De lo expuesto deduzco, Sr. Ministro, que los cálculos en que el Departamento se apoya para dar preferencia a la propuesta de Kenny, no están autorizados ni por la experiencia del pasado, ni por lo que prudentemente es lícito esperar del porvenir.

A lo sumo podrá admitirse que en estos tiempos calamitosos progresará el Ferrocarril a Tucumán en la misma progresión en que progresó el Central en los de prosperidad. Esto mismo no bastaría a justificar aquella preferencia.

Paso ahora a la cuestión de los durmientes.

Al llamar a licitación, no se tuvo presente especificar que los durmientes que en el transcurso de los cinco años hubieran de cambiarse, debieran ser reemplazados por durmientes de quebracho colorado, en vez de algarrobo.

Advertida esta omisión quince días después de abiertas las propuestas, el Departamento pidió a aquellos proponentes que tenían mejores probabilidades, manifestaran cómo entendían la obligación de reponer estos durmientes: si sustituyéndolos por de algarrobo o por de quebracho.

Malbrán contestó que había sido y era su intención reemplazarlos por de quebracho; Kenny que nada tenía que agregar a los términos de su propuesta; y que, si ella fuera aceptada y surgiera alguna duda al respecto, la misma ley habría previsto la manera de resolverla, es decir, por árbitros.

Posteriormente, por el Decreto de 14 de Febrero último, para que no se alegara ignorancia acerca del alcance que tenía esta cuestión de los durmientes, declaró V. E. que debieran ser de quebracho, y ordenó que los proponentes manifestaran en el término de 12 días, si entendían que esta declaración alteraba en algo sus propuestas y en tal caso, que retribución exigirían.

Malbrán ratificó su anterior declaración y Kenny se reservó el derecho de cebrar la diferencia entre el valor de los durmientes de algarrobo y los de quebracho.

Esta diferencia asciende a la suma de \$ 69.000; y es en ella que la Contaduría General se funda para considerar más ventajosa la propuesta de Malbrán, aun admitido el aumento progresivo en que el Departamento se apoya para dar preferencia a la de Kenny.

En la suposición más favorable, vendría así esta última a ser inferior a la primera en la cantidad de \$ 46.426.

Sin esta circunstancia, he manifestado a V. E. cuál es mi opinión.

Sólo diré al terminar que no es exacto que la declaración de V. E. con respecto a los durmientes, importa alterar las condiciones en que se hizo la licitación. Es simplemente una declaración tendiente a remover cuestiones en el futuro, y que ningún perjuicio infiere a los proponentes, pues todos fueron advertidos en tiempo, y colocados todos en iguales condiciones. — Enero de 1878.

Tomo 5, pág. 464 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Es improcedente la reclamación que el Gobierno de la Provincia de San Luis presenta al Gobierno Nacional por la prisión a que fué reducido un juez de dicha Provincia por orden del Juez Federal, ya que la reclamación debió presentarse ante el Superior competente.
- II. — Habiéndose abolido los fueros personales, todos los habitantes de la Nación, sin distinción alguna, son demandables y acusables ante la Justicia.

El Gobierno de San Luis, sobre prisión de un Juez Provincial por infracciones a la Ley Electoral

Señor Ministro:

Una prisión puede ser impuesta, o indebidamente ejecutada.

De estos abusos hay reclamo ante el Superior que los enmienda y castiga, y los interesados tienen además, acción de daños y perjuicios contra sus autores.

Entre nosotros, por otra parte, los fueros personales no existen. El militar como el funcionario son demandables y acusables. La Ley sólo ha exceptuado, por razones de alta política, ciertos mandatos populares. El aviso mismo que se acostumbra, no es un acto de rigor sino de buena administración.

La nota anterior del Gobierno de San Luis, ha olvidado todo esto.

El Poder Ejecutivo nada puede ni debe hacer en estos casos, porque la Justicia Federal que se extiende por la Ley a toda la República, nunca ofende la Soberanía Provincial. — Enero 2 de 1878.

Ministerio de Justicia. Téngase por resolución el precedente informe. — Enero 4 de 1878.

Tomo 5, pág. 456 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I. — Corresponde salvar el error en que se incurre en un proyecto de Protocolo, entre el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay y el Encargado de Negocios Argentino en Montevideo, sobre tránsito de reos en los puertos de ambas Repúblicas, declarando que no hay un derecho perfecto de conducción de los mismos, sin permiso de las autoridades respectivas, razón por la cual, ello debe ser objeto de acuerdos diplomáticos.

II. — La extraterritorialidad es solo un derecho conferido a los barcos de guerra, que no alcanza a los mercantes.

Proyecto de Protocolo, entre el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental y el Encargado de Negocios Argentino, sobre el tránsito de reos por la vía fluvial en los Puertos de ambas Repúblicas.

Señor Ministro:

Si en territorio firme no hay derecho perfecto de conducir los reos sin permiso del Soberano, este derecho tampoco existe para transitar con ellos por los puertos respectivos; ni si él existiera habría necesidad de acuerdos diplomáticos.

En derecho, sólo pueden tenerlo los buques de guerra que se consideran parte del territorio cuya bandera enarbolan, pero no los buques mercantes a vapor o a vela de cualquier bandera.

Suprimiendo del proemio este error, exceptuando los delitos políticos, y previo aviso en cada caso, no vería por mi parte inconveniente en la declaración que contiene el adjunto Protocolo. — Enero 28 de 1878.

La Resolución respectiva no la ha proporcionado el Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestándose haberlo prohibido el Señor Ministro, por tratarse de un documento de carácter reservado.

Habiéndose puesto término a las diferencias suscitadas con respecto al cumplimiento de un contrato de obra pública, por una transacción, es el espíritu que presidió a esta y no el contrato primitivo, ni la Ley de Obras Públicas, lo que ha de servir de regla para la solución de las dificultades que pudieran surgir después.

N. Duponts, reclama intereses por la construcción del Puente del Pasaje

Señor Ministro:

Cuando se ha puesto término a las diferencias suscitadas con respecto al cumplimiento de un contrato, por una transacción, es el espíritu que presidió a esta transacción, y no el contrato primitivo lo que ha de servir de regla para la solución de dificultades que pudieran surgir después.

Si por la transacción de foj. 5 el contratista recibió, por toda compensación, la cantidad de \$ 4500, poco importa que el contrato estipulara que la obra debía pagarse inmediatamente después de concluida. Poco importa que también la Ley de Obras Públicas reconozca derecho a intereses si se demorara el pago.

El Vice-Presidente del Departamento de Ingenieros asegura que tal fué la mente que presidió a la expresada transacción. Es esta, además, la presunción lógica y natural, puesto que si se hubiera tenido en vista el pago de intereses, expresamente se hubiera consignado, no siendo presumible dejara de tenerse en cuenta circunstancia tan esencial.

Debe, por último, observarse que por las dificultades que surgieron de la misma ejecución de las obras, éstas no fueron recibidas, ni fijada la cantidad que por ellas debía abonarse sino después de la transacción.

Por consiguiente, no es tampoco el caso del art. 54 de la Ley antes citada, que invoca el contratista en su favor. Estoy por tanto de acuerdo con el Departamento de Ingenieros. — Marzo de 1878.

Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Marzo 17 de 1878.

Corresponde que se acepte sin observación alguna la Ley del Brasil, que sujeta a juicio de sus tribunales, los crímenes cometidos fuera del Imperio por súbditos brasileiros o extranjeros contra el Brasil o contra brasileiros, no obstante que ella implica una excepción al principio del enjuiciamiento y castigo por los tribunales de la Nación en cuyo territorio se comete el delito, excepción que se está convirtiendo en norma del Derecho Internacional para los delitos contra la seguridad del Estado según lo prueban leyes análogas dictadas en Países Europeos, que no han merecido observación alguna por parte de las otras naciones.

El Ministro Argentino en el Brasil, adjunta en copia la Ley que sujeta a juicio los crímenes cometidos fuera del Imperio.

Señor Ministro:

El enjuiciamiento y el castigo de los crímenes cometidos en el territorio de una Nación, es un atributo de su Soberanía admitido universalmente sin contradicción alguna.

Sin embargo: en el interés de asegurar el castigo de ciertos crímenes de una gravedad excepcional, la Francia dictó en 1866, una Ley que importaba una excepción a aquel principio universal, sometiendo a su jurisdicción los crímenes contra la seguridad del Estado, la falsificación de moneda y algunos otros, ya fuesen perpetrados por franceses, ya por extranjeros fuera de su territorio.

Esta ley no fué observada por las demás Naciones, y lejos de ello el Austria, la Bélgica, Portugal y otras muchas, dictaron disposiciones análogas.

De esta manera aquella excepción al principio natural de la jurisdicción, si no ha sido positivamente incorporada al Derecho Internacional por Tratados entre las Naciones o por una práctica usual a que poco se presta la poca frecuencia de crímenes de esta especie, bien puede decirse que no ofrece resistencias y que está en vías de serlo; pues está además conforme con el espíritu de la legislación moderna, que se encamina a negar impunidad y asilo a los grandes criminales.

El Imperio del Brasil viene a incorporarse a este movimiento según se desprende de la ley, que ha puesto en conocimiento de V. E. el Señor Ministro Argentino.

Pienso con el mismo Dr. Domínguez que no habría conveniencia en observar la expresada ley, mucho más después de las explicaciones dadas por el Gobierno Imperial en las notas dirigidas al Señor Ministro de S. M. B. — Junio de 1878.

Tomo 5, pág. 487 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No debe el P. E. hacer lugar a una reclamación fundada en el Tratado con España de 29 de Octubre de 1870 que se presenta por segunda vez, habiendo en la primera oportunidad sido rechazada por defecto en la prueba, por cuanto es contrario a todo orden administrativo que resoluciones consentidas y pasadas en autoridad de cosa juzgada sean sometidas nuevamente a discusión.
- II. — En el caso corresponde además el rechazo, por estar vencido el término de dos años que el Tratado fijó para la presentación de las reclamaciones. Vencido dicho plazo carece el P. E. de facultades para admitir nuevos reclamos, ni traer a nueva consideración los que presentados en término no fueron aceptados, aunque ahora vengan apoyados en datos que antes no se tuvieron presentes.

Antonio Zabala, — por reclamación de bienes confiscados, en la Guerra de la Independencia

Excmo. Señor:

Después de cuatro años de corrido el término para la admisión de las reclamaciones regidas por el Tratado celebrado con España, se presentó Don A. Zavala a nombre de los herederos de los súbditos españoles Don Juan M. Castares, Don Francisco Traseria y Don Pedro Aveleyra, reclamando sumas de no escasa importancia.

Se presenta además, sin poder que acredite su personería.

Cierto es que esas reclamaciones fueron presentadas en tiempo según V. E. ha reconocido; y cierto es también que el Señor Zavala dice que se ha extraviado el expediente, a que corrían agregados los poderes que se echan de menos.

Todo esto, empero, aumenta las dificultades que ofrece este asunto; tanto más, cuanto que ha mucho tiempo cesó en sus funciones la Comisión que entendía en las reclamaciones de este género, y puede decirse que se han ido dispersando los elementos que facilitaban su expedición.

El estudio de los antecedentes reunidos para suplir la falta del expediente, que se dice extraviado, sugiere las observaciones siguientes:

1.º La pérdida de este expediente, sólo reposa hasta ahora en la afirmación del Señor Zavala, que supone haberse extraviado en poder del finado Dr. Pico, y con ocasión de su fallecimiento.

2.º La reclamación de los herederos Castares, ofrece mayor dificultad que la de Traseria y Aveleyra, y merece un estudio especial.

En primer lugar no consta que los bienes que aparecen inventariados, fueran secuestrados, y menos que fueren vendidos y entrara su producto a las Arcas Públicas. Por el contrario, la nota con que el Ministro de España acompaña estas reclamaciones, contiene estas palabras que no pueden menos de llamar la atención, «el archivero dice que no existe dato alguno de secuestro a dicha persona» (Castares).

Por otra parte, de los términos del mismo Señor Ministro no consta tampoco que el Señor Zavala, represente a los herederos de Castares.

«El Señor Zavala, dice el Señor Ministro, asegura que Don Juan C. Castares era hijo del titulado Don Miguel y que son los herederos de éste, los que le han dado este poder. A reserva de presentar nuevos datos a cuyo efecto ha escrito a los interesados, el Señor Zavala pide sea tomada en cuenta esta reclamación para no sufrir perjuicio en sus derechos».

Van transcurridos cuatro años y no hay constancia de que el Señor Zavala, haya recibido los nuevos datos que había pedido.

La falta de una constancia de que los bienes de Castares fueran secuestrados, y el hecho de no haberse presentado en tan dilatado tiempo heredero alguno a reclamarlos, induciría a suponer que el Estado entró en posesión de ellos a título de heredero y en defecto de los llamados por la ley.

Consta que Castares falleció. En tal caso esta reclamación no está regida por el Tratado con España, sino que caería bajo la acción de las leyes generales.

En virtud de lo expuesto; y para facilitar la expedición de este asunto que viene tan fuera de tiempo, convendría que ordenara V. E. lo siguiente:

1.º) Que la Secretaría de ese Ministerio, informe lo que sepa acerca de la pérdida del expediente primitivo, acompañando al mismo tiempo copia de la carpeta y demás antecedentes que existen en su archivo acerca de este asunto.

2.º) Que hecho esto, se dé vista al Señor Zavala de lo expuesto más arriba, acerca de la reclamación de Castares.

Vuelto enseguida a mi despacho, daré mi parecer a V. E. acerca de cada una de estas reclamaciones, que hubiera sido mejor y más expeditivo corrieran por cuerda separada. — Julio 26 de 1878.

Este funcionario pidió, además, que la Oficina del Crédito Público, agregara los expedientes de los Señores Grau y Arrua, fecho dictaminó así:

Excmo. Señor:

El expediente agregado viene a poner esta reclamación en una nueva faz.

Resulta que fué ella resuelta definitivamente en 27 de Octubre de 1870, no por que no se hubieran presentado en tiempo, como se ha dicho, sino porque *los expedientes a que se hace referencia* —dice textualmente el decreto— *no son los asientos o documentos de que habla el tratado, ni contienen constancias claras sobre el particular, según el informe del Archivero.*

Este informe que sirvió de base a la Resolución de V. E. no se registra ni en el expediente formado con motivo de la pérdida del primitivo, ni en el que se ha agregado.

Resulta de todos modos evidente, que esta reclamación fué desechada, no por suponerse equivocadamente presentada fuera de tiempo, sino porque, entrando el Gobierno a juzgar su mérito, encontró que no estaba amparada por los documentos requeridos por el Tratado.

Esto es, pues, un asunto concluído; siendo de notarse que la resolución definitiva, fué presentada al Congreso según puede verse en la Memoria de R. E. de 1871 anexo H.

En 18 de Abril de 1872, es decir año y medio después de aquella resolución, se presenta de nuevo el interesado pidiendo reconsideración.

Con razón observó el Doctor Tejedor en su vista de Diciembre 6 de 1877, que todos los plazos estaban vencidos, y que esta reclamación debía ser rechazada in limine.

De otra manera resultaría que estos asuntos no tendrían términos. Con igual derecho que el Sr. Zavala, todos aquéllos cuyas reclamaciones, presentadas en tiempo fueron rechazadas, volverían hoy a presentarlas de nuevo. No sólo es esto contrario a todo orden administrativo, sino muy especialmente a estas reclamaciones extranjeras para las que la Ley ha fijado términos precisos y fatales, que sólo el poder que la dictó tiene la facultad de abrir de nuevo.

Las consideraciones aducidas por el Señor Ministro de España en apoyo de la reclamación del Sr. Zavala, han sido contestadas de antemano en mis informes anteriores, y me bastaría referirme a ellos. Recordaré, sin embargo, en honor a tan elevada interposición, los puntos principales en que mi oposición está basada.

Antes de todo, empero, conviene hacer notar que es ya una marcada deferencia de parte de V. E. admitir la representación que asume el Sr. Zavala, sin que presente poder alguno de aquéllos a quienes dice representar. Ciertamente es que algunos de esos poderes corrían en el expediente extraviado; pero el hecho de haberse extraviado, no es una razón para que no se presenten de nuevo, según es de práctica diaria e inconcusa. Tiempo sobrado ha tenido en seis o siete años para pedirlos. Y tanto más necesario era esto, cuanto que de esos mismos antecedentes consta, que los poderes presentados relativamente a la reclamación más importante, eran deficientes. *«El Sr. Zavala asegura, decía al Sr. Zavala en la nota con que inició estas reclamaciones, que Don Juan Castares era hijo del tal Don Miguel, y que son los herederos de éste los que le han dado este poder. A reserva de presentar nuevos datos, a cuyo efecto ha escrito a los interesados el Señor Zavala pide sea tomada en cuenta esta reclamación para no sufrir perjuicio en sus derechos»*. Es de creerse que el Sr. Zavala no ha recibido la contestación que esperaba,

- pues no consta que en 10 años haya presentado los datos, o sean los poderes que había ofrecido acompañar.

Prescindiendo de esta grave deficiencia que expone a V. E. a seguir estas tramitaciones, tal vez inútilmente, con quien no tiene para ello personería, pasaré al fondo de este asunto.

Dice el Sr. Ministro que el Decreto de V. E. que no hizo lugar a la reclamación del Sr. Zavala, se funda en un error evidente y en una equivocada interpretación del Tratado.

En cuanto al error, es decir, a que esta reclamación había sido presentada fuera de tiempo, fué luego reconocido por el Decreto del Dr. Elizalde de 8 de Febrero del año próximo pasado, ha sido reconocido después en diversas ocasiones, y no se explica la insistencia con que se le recuerda.

Presentadas estas reclamaciones *en tiempo*, y después de los trámites de estilo, fueron rechazadas, no porque hubieran sido presentadas *fuera de tiempo*, sino porque los expedientes en que se apoyaban, no eran los asientos o documentos de que habla el Tratado de 29 de Octubre de 1870.

Este Decreto fué aceptado por parte del Sr. Zavala, sin observación alguna. Es sólo después de año y medio, que se presenta pidiendo sea reconsiderado.

He dicho antes y repito ahora, que esto es contrario a todo orden administrativo, y muy especialmente en materias regidas por Tratados, para cuya resolución ha fijado la ley términos precisos y perentorios.

No puede admitirse que resoluciones consentidas, por decirlo así, cumplidas y pasadas en autoridad de cosa juzgada, vengan a traerse de nuevo a juicio después de años.

De otra manera, estos negocios no tendrían término, y con igual derecho, todos aquéllos cuyas reclamaciones fueron denegadas, las agitarían por segunda y tercera vez.

El mandato que V. E. recibió del Honorable Congreso para entender y resolver en estas reclamaciones fué limitado.

Estas reclamaciones debían ser presentadas dentro del término de dos años. Presentadas y resueltas, la misión de V. E. concluyó. Ni puede V. E. admitir nuevas reclamaciones, ni traer a nueva consideración las que fueron rechazadas, aunque vinieran apoyadas en

datos que no se tuvieron antes presente, lo que, observaré de paso, no está probado por el presente caso, no pudiendo saber si los expedientes que entonces se tuvieron a la vista y a la que se refería el archivo, son o no los expedientes o los cuadernos de pertenencias extrañas en que se apoya últimamente el Señor Zavala.

Terminado el mandato que recibió V. E., sólo el Honorable Congreso puede acordarlo nuevamente.

Me inclino a creer que si el Señor Zavala, no obstante estar vencido el término y resuelto este asunto, ocurriese al Honorable Congreso con los poderes necesarios y con justificativos bastantes a probar que las cantidades que reclama entraron a las arcas de la Nación, me inclino a creer, decía, que no ocurriría en vano.

La interposición de los Representantes de las Potencias amigas en pro de sus nacionales, es siempre merecedora de una consideración especial, y no es sin pesar que digo a V. E. que no está ya en sus manos acoger favorablemente la muy respetable del Sr. Ministro de España en favor de los súbditos españoles a quienes dice representar al Señor Zavala. — Septiembre 2 de 1878.

Tomo 5, pág. 488 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Si por circunstancias especiales, al Gobierno Argentino no le es posible aceptar la invitación formulada por los Gobiernos de Suecia y Noruega para concurrir con delegados al Congreso Penitenciario de Estocolmo, corresponde que el P. E. al agradecer la invitación solicite de los Gobiernos nombrados que tengan la deferencia de comunicarle, las resoluciones que al respecto dicte el Congreso, lo que implicará para la República, el recoger las lecciones de la experiencia ajena, en provecho del adelanto de nuestro sistema penal.

Congreso Penitenciario de Estocolmo

Excmo. Señor:

Las muy juiciosas y oportunas consideraciones aducidas por el Dr. Tejedor en 20 de Diciembre ppdo., son hoy a mi entender, doblemente atendibles por el tiempo transecurrido.

El Congreso Internacional Penitenciario a que ha sido V. E. invitado, se reunirá en Estocolmo el 20 de Agosto próximo; es decir, falta solo un mes para que principie sus trabajos.

Los antecedentes de que debiera ir munido el comisionado que V. E. nombrara, ni se han reunido, ni se ha principiado siquiera su reunión; y mi oposición también que es éste un trabajo de mucho aliento que exigiría una preparación especial y un tiempo considerable.

Pero, aún en la suposición más favorable, apenas habría el tiempo material para que el comisionado argentino, se incorporara al Congreso al terminar sus reuniones, aunque éstas hubieran de prolongarse por dos o tres meses, lo que es poco probable.

Si en algo ha permanecido estacionaria la República, es fuera de duda, en su sistema de penas y de cárceles.

Los progresos realizados con la redacción de un Código Penal y la construcción de una penitenciaría en la Provincia de Buenos Aires, son de data muy reciente y no han podido formar precedentes, ni establecer doctrinas.

El comisionado que nos hubiera representado en aquel Congreso humanitario, habría ido en realidad a recoger para la República las lecciones de la experiencia ajena, no a enseñar ni edificar con la propia.

En este sentido, su presencia hubiera sido de indispensable interés. Pero ya que circunstancias especiales y al alcance de todos, no nos han permitido aceptar la invitación del Gobierno de Suecia y Noruega; me parecería oportuno que al agradecerle, pidiera V. E. al mismo Gobierno tuviera la deferencia de comunicarle las resoluciones del Congreso.

La Provincia de Buenos Aires, que acaba de edificar una Penitenciaría que no es tal vez inferior a ninguna otra; tiene sobre todo especial interés en aprovechar la experiencia de las naciones que nos han precedido en esta importante mejora del sistema penal.

Los trabajos del Congreso servirían a no dudarle de estímulo y de punto de partida para que en otra oportunidad la República pueda tomar parte en estas nobles asambleas de la hu-

manidad y de las ciencias, cuyas deliberaciones interesan a todos los pueblos civilizados. — Julio de 1878.

Tomo 5, pág. 379 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No procede al otorgamiento de una «marca» que pueda inducir en error al consumidor, suponiendo al producto de fabricación extranjera, cuando en realidad no lo es.

**G. A. Cramwell, solicita en propiedad la marca de fábrica
«J. H. Piesse Perfumer to the Royal Family»**

Excmo. Señor:

Por más amplitud que se quiera dar a la libertad que los comerciantes tienen para elegir sus marcas de fábrica, no puede admitirse que esta libertad llegue hasta el extremo de autorizar el error o el engaño.

Los Señores Cramwell, que se dicen fabricantes de productos del país, pretenden garantizarlos bajo la marca de «Piesse, perfumer to the Royal Family».

Desde luego ni los Señores Cramwell son los Señores Piesse, ni son perfumistas de ninguna familia real.

Es así evidente que con la elección de esta marca y hasta con el uso del idioma inglés, lo que se propone es hacer creer que sus productos no son fabricados en el país, sino en Inglaterra.

La autoridad pública, que debe tomar por norma la verdad ante todo, no puede autorizar una superchería semejante.

Estoy, por lo tanto, de acuerdo con la resolución del Departamento de Ingenieros, que debe V. E. dejar subsistente. — Julio de 1878.

Tomo 5, pág. 475 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Por circunstancias especiales y motivos justificados puede el Poder Ejecutivo ejercer el derecho de indulto y conmutación de pena y siempre que esta última se haya impuesto.
- II. — Corresponde rechazar un pedido de sobreseimiento formulado al Poder Ejecutivo en una causa criminal, debe el interesado ocurrir para ello ante el Juez de Sección que entendió en la misma.

Melchor Barrionuevo, — pide el sobreseimiento de una causa.

Señor Ministro:

Es bien sabido que sólo en circunstancias especiales, y por motivos muy justificados, puede el Poder Ejecutivo ejercitar el derecho de remitir o conmutar las penas, que la Constitución le acuerda.

Nada hay en el presente caso que merezca una consideración especial.

No hay pena que remitir o conmutar, pues ninguna ha sido impuesta.

Amnistiado el delito en la parte que se relacionaba con la rebelión, contra las autoridades de la Provincia de San Juan, el procesado ha debido pedir al mismo Juez de Sección el sobreseimiento que el Poder Ejecutivo no puede acordarle. Y a ser cierto que la interrupción sólo duró unas pocas horas, y que el recurrente ha sufrido ya una larga prisión, hasta con grillos, es más que probable que la hubiera obtenido. — Agosto 11 de 1878.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad, haciendo la salvedad que el P. E. no acepta todas las conclusiones del dictamen. — Octubre 26 de 1878.

=====



No corresponde que el P. E. tome conocimiento del conflicto suscitado entre el Obispo y Gobierno de San Juan presentado a consideración del Gobierno por quien dice estar autorizado por el Sr. Obispo, sin justificar dicha representación.

Tratándose de cuestiones que afectan las relaciones de la Iglesia con el Estado, corresponde que el Sr. Obispo se dirija directamente al P. E. o por lo menos que constituya un apoderado especial.

Conflicto de poderes entre el Obispo de Cuyo y el Gobierno de San Juan

Excmo. Señor:

Invocando instrucciones y órdenes del Sr. Obispo de Cuyo, por quien *dice estar autorizado* al efecto ante V. E. Don J. Lugones, se presenta exponiendo la situación, en que dicho Señor Obispo se encuentra colocado por el Gobierno de San Juan.

No justifica ni dice el Señor Lugones cómo ni para qué está autorizado cerca de V. E.

Me inclino a creer que será para recibir las asignaciones del Obispado y para objetos análogos. Cualquiera que sea la extensión que V. E. haya acordado a la autorización que invoca, nunca podrá ella importar una plenipotencia para representar al Sr. Obispo de Cuyo cerca de V. E.

Tratándose de cuestiones que afectan las relaciones de la Iglesia con el Estado, siempre delicadas, es lo natural que el Sr. Obispo se dirija directamente a V. E. , o por lo menos, que constituya un apoderado especial; pues no parecería serio que V. E. diera curso a gestiones que pueden ser desautorizadas.

Mientras no se llene este requisito, es mi opinión que V. E. no debe tomar en consideración este asunto. — Agosto 12 de 1878.

Ministerio de Culto. Bs. As., Noviembre 5 de 1883. — Hallándose suspendida la consideración de este asunto, de acuerdo con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación y no habiéndose recibido desde el año 1878 comunicación alguna al respecto, de S. S. I. el Obispo de Cuyo, archívese.

El bautismo no confiere la nacionalidad ni tiene el poder de cambiar la adquirida en razón del lugar de nacimiento, no tiene más alcance que el de incorporar al bautizado a la comunidad religiosa.

Sobre cambio de nacionalidad de un individuo nacido en la República Argentina y bautizado en la Oriental

Excmo. Señor:

No conozco disposición alguna, ni en nuestra legislación ni en la de los países extranjeros, que confiera al bautismo el poder de cambiar la nacionalidad que se adquiere por el nacimiento, fuente primera y universal de donde fluyen las nacionalidades.

No tengo tampoco noticia de legislación alguna que admita y reconozca al bautismo entre los medios de adquirir la ciudadanía. Nunca tuvo más alcance esta solemnidad que incorporar al bautizado a la comunidad religiosa.

Los individuos nacidos en territorio Argentino, aunque hayan sido bautizados en la República Oriental, y respectivamente de esta República, serán ciudadanos Argentinos u Orientales, en virtud de sus propias constituciones, y del derecho público universal, sin necesidad de reciprocidad alguna, que por otra parte no puede V. E. acordar en materias regidas por la Constitución. — Agosto 16 de 1878.

Tomo 5, pág. 501. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — El art. 9 del Tratado de Extradición con el Imperio del Brasil de 1856, excluye a los Oficiales Militares.
- II. — La «autoridad» a que se refiere el art. 9 del Tratado que autoriza a los Cónsules y Vice-Cónsules para que se dirijan a ella solicitando la extradición debe interpretarse que es «el Gobierno de la Nación», y si el pedido se ha dirigido a una «autoridad local» corresponde que ésta telegráficamente ponga en conocimiento a la autoridad Superior de la Provincia, quien comunicará en igual forma al Gobierno Central, de quien se deben recibir las órdenes pertinentes para resolver el caso.

Legación del Brasil, — entrega de un desertor

Excmo. Señor:

El Señor Ministro del Brasil no ha tenido presente, sin duda, al pedir la extradición del Comandante del Paso de San Marcos, que el mismo Gobierno Imperial ha reconocido en un caso reciente que el artículo 9 del Tratado de 1856 no es extensivo a los oficiales (Nota del Sr. Vizconde de Caravellas, fecha 6 de Mayo de 1875, con motivo de la arribada de la Cañonera «Paraná» a Río Grande).

Habiendo contestado el Juez de Paz de Santo Tomé que para la entrega del expresado Comandante, llegado el caso, consideraba necesaria una orden de V. E., el Señor Ministro del Brasil pide además a V. E. adopte las medidas que juzgue más eficaces, en el sentido de garantizar la observancia de lo pactado sobre el particular en el Tratado de 1856.

El Sr. Ministro entiende que del espíritu del artículo 9 se desprende que las autoridades locales están autorizadas para entender en las reclamaciones para que fueron autorizados los Cónsules y Vice-Cónsules, por requerirlo así la brevedad que tuvo en vista aquella estipulación.

Es indudable, que la extradición de los soldados y marineros desertores es considerada *sumarísima*.

Pero este mismo caso pone de manifiesto, que había peligro en no poner alguna limitación al proceder que en tales casos haya de observarse.

Sin el hecho del delito cometido en territorio Argentino y la necesidad de consultar al Gobierno que el Juez de Paz alegó, el

Comandante Machado hubiera sido entregado, no contra el espíritu, sino contra el texto mismo del Tratado.

Ninguno de los artículos del Tratado dice, ante que autoridad deban hacer requisición los Cónsules y Vice- Cónsules.

Acordar la extradición es una prerrogativa de la Soberanía que algunas Naciones como la Francia, han reservado exclusivamente a la Suprema Autoridad.

Tratándose de las garantías individuales que los pueblos tienen interés en que sean respetadas, parecería prudente poner autorizaciones que tan directamente las afectan, en manos subalternas que no tienen las más veces ni la responsabilidad ni la preparación necesaria.

Aun en los casos de deserción, a primera vista tan sencillos, hay que tener en cuenta si realmente es desertor el reclamado, si es o no Oficial, si la deserción es o no por causas políticas.

Hoy que el telégrafo ha suprimido las distancias, sería fácil a mi juicio, conciliar el respeto que se debe a las personas, con la disciplina de los Ejércitos y Armadas que se invoca para justificar esta excepción a las prácticas generalmente admitidas.

Bastaría que la autoridad requerida por el Cónsul o Vice-Cónsul, sea cual fuere, procediere inmediatamente y sin más trámite a la detención y arresto del reclamado. En seguida lo pondría en conocimiento de la autoridad ejecutiva de la Provincia, y ésta, a su vez, lo comunicaría al Gobierno de la Nación. Estando ligados aún los puntos más apartados de la República con el asiento de las autoridades Nacionales, este procedimiento sería rapidísimo, y es de esperarse que habría de llenar los deseos del Sr. Ministro del Brasil. — 16 de Agosto de 1878.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad. — Enero 18 de 1879.

Tomo 5, pág. 470 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Procede la oposición que se formula contra el otorgamiento de una «marca» con respecto a un tipo de tejido, por haber sido concedida anteriormente, sin que sea óbice, el que lo haya sido, sobre tejidos que ofrecen unas diferencias sensibles con el que motiva la cuestión.

Bates Stockes y Cía., solicitan la propiedad de 18 marcas de Comercio

Excmo. Señor:

Los Señores Bates Stockes y Cía. han solicitado la propiedad de las marcas de fábrica para los tejidos que introducen, fojas 37, una de ellas es la de «Guanaco», a cuya concesión se oponen los Señores T. Drysdale por haberla obtenido antes.

La palabra tejidos comprende tanto los finos como los más gruesos. Si la marca en cuestión se concediera a la vez a los Señores Bates Stockes y a los Señores Drysdale, aunque los tejidos que introducen ofrezcan diferencias sensibles por ser más o menos finos, comprendería indistintamente a unos y a otros.

Sería esto autorizar una verdadera confusión, como oportunamente observa la Oficina Nacional de Patentes en la resolución apelada que debe V. E. confirmar. — Agosto 21 de 1878.

Resolución de acuerdo con lo dictaminado.

Tomo 5, pág. 476 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se rechace la reclamación que ante el P. E. se presenta por tercera vez, habiendo obtenido las dos anteriores resultado negativo, ya que si bien no existen normas precisas que regulen la marcha de los asuntos que se gestionan ante el P. E., éstos deben tener un límite en el tiempo, máxime si se trata de reclamos regidos por tratados con Naciones Extranjeras en los que la Ley ha fijado términos, pasados los cuales, no pueden ser admitidos por justos que sean.

Los herederos de don J. B. Alcorta — Sobre indemnización

Señor Ministro:

En 27 de Enero de 1874, esta reclamación fué resuelta *no haciendo lugar por ahora*.

En 13 de Agosto de 1875, es decir, más de un año y medio después, se presentaron nuevamente los interesados, y en Febrero del corriente año, fué desechada por segunda vez.

En Julio 30 del mismo año, es decir, seis meses después, vuelve tercera vez a agitarse esta reclamación.

Aunque no existen disposiciones que marquen reglas precisas para la marcha de los asuntos que se gestionan ante el Poder Ejecutivo —que es sensible— fácilmente se concibe que todo tiene su límite.

Especialmente en estas reclamaciones regidas por Tratados con Naciones Extranjeras, la Ley ha fijado términos precisos y formales, pasados los cuales no pueden ser admitidas por justas que sean. Si fuera permitido que pasados meses, y pasados años, después de resueltos, surgieren de nuevo asuntos de este género, por vía de reconsideración, o por cualquier otro motivo, jamás tendrían término, lo que es manifiestamente contrario al espíritu y a la letra misma de la Ley.

Aunque reconozca que haya en esta resolución un fondo de justicia, no puedo, por lo tanto, aconsejar a V. E. la tome en consideración. Mi opinión es que se entregue este expediente al interesado para que practique las diligencias que crea oportunas y ocurra al Honorable Congreso, único Poder que puede ampliar y modificar las leyes que el Poder Ejecutivo sólo tiene la misión de hacer que se cumplan y ejecuten. — Agosto 27 de 1878.

Tomo 5, pág. 504 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente el pedido de sobreseimiento presentado al Poder Ejecutivo por un acusado de delito político que invoca la Ley de Amnistía; debe el interesado ocurrir para ello al Tribunal Federal, a quien compete el conocimiento de la causa y a quien corresponde determinar si se halla o no amparado por la Ley de Amnistía.

Víctor Silvero, — sobreseimiento de causa

Señor Ministro:

Si el Señor Silvero está amparado por la Ley de amnistía como él cree, no necesita que V. E. lo declare. Si hay alguna duda

al respecto, son los Tribunales de la Nación los que deben resolverla y es ante ellos, ante los que debe el Señor Silvero ocurrir, siendo de esperarse que la misma Ley de amnistía, y el tiempo transcurrido sirvan de fundamento bastante para que en la justicia y equidad de los Jueces, encuentre la resolución que busca y que no puede V. E. darle. — Agosto 29 de 1878.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad al dictamen. — Octubre 27 de 1879.

Tomo 5, pág. 494 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Compañía del Ferrocarril Central Argentino, formó una sociedad especial que denominó «Cía. Central Argentina de Tierras», que tenía por objeto principal, poblar y cultivar las tierras que el art. 12 del contrato de concesión le dió en propiedad a lo largo de la vía, con el fin de que una vez pobladas, el tráfico del camino aumentase y hacer innecesaria la garantía acordada por el gobierno al mencionado Ferrocarril. Dos dificultades se suscitaron con la aprobación de los estatutos de la nueva sociedad: 1.º) la referente al tiempo de la misma y 2.º con respecto a la disposición de los estatutos que autorizaba a «cada tenedor de acciones de la Compañía del Ferrocarril Central a tener derecho a un número igual de acciones de la Compañía de Tierras, y que en caso de no aceptarlos, sean adjudicadas entre otros accionistas o a los constructores que han convenido en tomar para sí todas las acciones que no fueran solicitadas. El Procurador General aconsejó salvar dichas dificultades en la forma siguiente:

- 1.º) El término de la Sociedad será el tiempo que aun falta para que concluya la garantía acordada por la Nación a la Empresa del Ferrocarril Central Argentino y en la inteligencia de que vencido éste podrá ser prorrogable, de acuerdo con las prescripciones del Código de Comercio.
- 2.º) Los accionistas de la Compañía Ferrocarril Central Argentino que no integrasen sus cuotas para la formación de la nueva sociedad de tierras, conservarán, no obstante sus derechos a salvo para entrar en cualquier tiempo en posesión de las acciones que les corresponde tomar en ellas, abonando las cuotas que hubiesen otros

accionistas abonado, con más el interés del 5 o/o anual. y tendrán desde entonces derecho a participar de las utilidades que en adelante obtuviese la Compañía.

Colonización de Tierras adyacentes al Ferrocarril Central Argentino

Señor Ministro:

Sólo han venido los Estatutos pero no la solicitud de la Sociedad pidiendo su aprobación, sobre lo que supongo debe haberse iniciado y formado un expediente, en tantos años que han corrido desde que se inició este asunto.

Sírvase V. E. ordenar se aguegue a éste los antecedentes y que vuelva todo enseguida a mi despacho. — Septiembre de 1878.

Excmo. Señor:

Las dificultades que en tantos años han obstado a la aprobación de los Estatutos de la Compañía Central Argentina de Tierras después de la discusión, quedan hoy reducidos a dos: 1.º la falta de término para la liquidación de la Sociedad y 2.º la pena impuesta a los accionistas de la Compañía del Ferrocarril Central Argentino de perder su derecho a las tierras, sino se suscribían en la nueva Compañía.

La 1.ª dificultad paréceme fácil de salvar.

Los Estatutos no fijaban término alguno a la Sociedad en cuestión; según la referencia que hace el Señor Presidente del Directorio del Ferrocarril, por alguien se indicó que se fijara en 100 años y con razón se observó que esto era contrario a las prescripciones del Código Comercial.

La Ley de 21 de Octubre de 1876, en presencia de esta dificultad y para darle solución, autorizó a V. E. para aprobar los Estatutos, fijando a la Compañía *el término que aún falta para que termine la garantía del Ferrocarril Argentino, pudiendo prorrogarse con arreglo a lo que dispone el Código de Comercio.*

Sin rechazar esta base, el Directorio de la Compañía encuentra más conveniente se fije para su duración, el término que tarde en llenar su objeto; es decir, el término que las tierras tarden en estar vendidas y pobladas.

El medio más lógico y natural para la terminación de una sociedad, es indudablemente haber terminado los objetos para que fué formada. Vendidas y pobladas las tierras, no se ve, en efecto que el objeto práctico tendría la continuación de la Sociedad que se formó precisamente para venderlas y poblarlas.

Puede así decirse que este término venía implícito en los Estatutos; si bien las circunstancias de haber incluido entre los objetos de la sociedad *comprar y poblar terrenos* adyacentes, pudo justamente hacer pensar que se trataba de formar una sociedad cuyo objeto y cuyo término serían indefinidos, lo que a la verdad, no pudo ser la mente de los que la formaban.

No habría inconveniente, a mi entender, en aprobar los Estatutos fijando como término la terminación de los objetos de la sociedad.

Nos encontramos, empero, en presencia de la ley que fija para la duración de la Compañía el tiempo que aún falta para la terminación de la garantía.

Fué esta por 40 años, de los que van corridos diez; quedan treinta todavía. Si en este tiempo, con los grandes recursos de que va a disponer la Compañía, con las facilidades imponderables que ofrecen los progresos modernos; con la corriente de inmigración que afluye a la República en tan grande escala y espontáneamente si con todas estas ventajas, digo, no se hubieran poblado las tierras cedidas y llenado el objeto de la Sociedad, difícil es que se llene nunca.

Además, la misma ley prevee a este caso y la sociedad podría prorrogarse, con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio, en lo que no se advierte dificultad de ningún género. La dificultad suscitada con respecto al término de la sociedad, no tiene por consiguiente importancia alguna y me inclino a creer que la misma sociedad aceptará el que fija el artículo 1.º de la Ley, que en realidad es el mismo que implícitamente venía entendido y comprendido en sus Estatutos.

El segundo punto ofrece más serios inconvenientes.

Uno de los artículos de los Estatutos dispone que; *cada tenedor de acciones de la Compañía del Ferrocarril Central tenga derecho a un número igual de acciones de la Compañía de Tierras, y que, en el caso de no aceptarlas, sean adjudicadas entre otros accionis-*

tas a los constructores que han convenido en tomar para sí todas las acciones que no fueran solicitadas.

V. E. ha creído que no podía obligarse a los accionistas del Ferrocarril a tomar acciones en una nueva sociedad y que no era justo que por el hecho de no tomar parte en esta nueva sociedad, perdieran el interés que por la concesión primitiva tienen en las tierras cedidas al costado de la vía. De acuerdo con esta opinión el Congreso ha declarado por el inciso 2.º del artículo 1.º de la Ley antes citada, que los accionistas de la sociedad primitiva *que no quieran oblar directamente sus cuotas en la nueva Compañía no perderán sus derechos a las tierras, pero que el Directorio podrá deducirles el importe de aquellas cuotas al hacerse la distribución de los dividendos obtenidos en las tierras, en proporción al número de acciones que tengan en la Compañía del Ferrocarril Central.*

El Directorio de la Compañía de Tierras ha encontrado inaceptable esta disposición, y a mi juicio con razón.

Dice que no se trata de una Compañía nueva, sino de cumplir una de las obligaciones de la sociedad primitiva, llenando una condición indispensable para adquirir la propiedad de las tierras y que es contrario a la legislación inglesa y a todas las nociones admitidas en materia de sociedades, acordar dividendos a los que no hubiesen pagado sus acciones y que en realidad no son accionistas.

No es posible desconocer la justicia de esta observación. El principio de reconocer derecho a las ganancias de una sociedad a los que no hubiesen concurrido a la formación, sería además un elemento disolvente que concluiría con la existencia de la misma sociedad. Ningún accionista concurriría con sus cuotas sino haciendo el desembolso, continuaría asimismo teniendo parte en las utilidades a la par de los que las pagaron; sin incurrir en la responsabilidad de las pérdidas consiguientes a todos los negocios humanos.

El Presidente del Departamento de Ingenieros, a quien V. E. comisionó para activar la población de las tierras, reconoce con razón que el primero y más importante paso que hay que dar para llegar al objeto deseado por todos, es remover las dificultades que han obstado en tantos años a la aprobación de los Estatutos. De esto depende, en efecto, la formación de la Compañía que ha de concurrir con un capital muy fuerte a traer y radicar la población.

Propone para ello que a los accionistas que no hubiesen contribuido con cuotas, se les entreguen las acciones que les correspondan en la Compañía de Tierras, cargándoles un interés de 5 % anual, teniendo participación en las utilidades de la Compañía cuando las hubiera y con las cuales se abonaría, o se irá descontando la deuda en que estos habían incurrido al no pagar las cuotas correspondientes.

Pero es esto dejar precisamente en pié toda la dificultad; es esto reconocer derecho a las utilidades a los que no han concurrido con el capital a la par de aquellas que han llenado este deber, lo que, se ha dicho antes, es injusto. El Directorio objeta además que esto obligaría a una contabilidad sumamente complicada y casi imposible.

El representante de la empresa propone a su vez, que los accionistas del Ferrocarril, que no concurriesen con sus cuotas a la Sociedad de Tierras, no pierdan su derecho y que, sin tener participación en las ganancias, pueden entrar en posesión de sus acciones pagando en cualquier tiempo las cuotas correspondientes, con el interés simple del 5 % con lo que adquirirían derecho a los dividendos posteriores.

Este temperamento no está en manera alguna en oposición a la Ley del Congreso, y es tan liberal como se podría esperar para con los accionistas, a los que sin haber concurrido con capital se conserva el derecho a ingresar a una sociedad luego que el tiempo haya puesto de manifiesto sus ventajas, sin haber corrido los riesgos inherentes a toda empresa.

Es así mi parecer que no habría inconveniente en adoptarlo, facilitando de esta manera la formación de una empresa que, al mismo tiempo que llenaría un deber como se ha observado, sería de los más grandes resultados para el país.

Pobladas las tierras al costado de la vía, entre otras ventajas, sería la primera y la más tangible que el camino cubriría su garantía y dejaría de pesar sobre el tesoro de la Nación.

Por todo lo expuesto es mi parecer que preste V. E. su aprobación a los Estatutos de la *Compañía Central Argentina de Tierras* con las siguientes modificaciones:

1.º — Que el término de la sociedad será el que aun falta para que termine la garantía que la Ley acuerda al Ferrocarril

Argentino, siendo entendido, que vencido, podrá ser prorrogado con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio.

2.º — Que los accionistas del expresado Ferrocarril que no entregasen sus cuotas, conservarán, no obstante, su derecho a entrar en cualquier tiempo en posesión de las acciones que les correspondiera tomar en la sociedad de tierras, abonando las cuotas que hubiesen los otros accionistas abonado, con más el interés del 5 %, teniendo desde entonces en adelante, derecho a participar de las utilidades de la Compañía.— Setiembre de 1878.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Febrero 11 de 1879.

Tomo 5, pág. 503 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiéndose decretado en una ejecución seguida contra la Municipalidad de Buenos Aires, el embargo de una propiedad perteneciente a la Nación conocida por «Cuartel de Restauradores» ocupada por la Municipalidad, corresponde que el Poder Ejecutivo haga cesar dicho embargo, y tome las providencias necesarias para recuperar el inmueble, dando al efecto las órdenes pertinentes al Procurador Fiscal.

Municipalidad de Buenos Aires, — sobre entrega de la casa «Cuarteles de Restauradores»

Señor Ministro:

Resulta de estos antecedentes que una propiedad de la Nación ha sido ejecutada y adjudicada en pago por un crédito de la Municipalidad de esta Ciudad.

Resulta igualmente que en 1871 la expresada Corporación Municipal solicitó del Gobierno Nacional la cesión del edificio conocido por «Cuartel de Restauradores», a la sazón ocupado por depósito de Aduana y parte del que ha sido vendido para trasladar a él los depósitos de Aduana.

Consta por último que accediendo a esta solicitud el Gobierno Nacional puso a disposición de la Municipalidad este *edificio nacional*, mientras no encontrase otro local más aparente (Nota del

Señor Ministro de Hacienda, Doctor Luis Domínguez, Marzo 8 de 1872).

Ha habido pues manifiesto error en este negocio y es de esperarse que bastará que sea puesto en conocimiento de los que en él han intervenido para que se deje todo lo obrado sin efecto.

En guarda de los derechos de la Nación corresponde que V. E. solicite de la Municipalidad la entrega del edificio en cuestión, lo que, según se advierte por las comunicaciones cambiadas el año ppdo., no ofrece dificultad alguna.

Al mismo tiempo deberán pasar estos antecedentes al Procurador Fiscal para que ponga los hechos en conocimiento del Juez que decretó la venta, y ocurra si fuere necesario al Juzgado de Sección a cuya jurisdicción corresponda todo asunto en que la Nación sea parte.— Septiembre de 1878.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad. — Septiembre 11 de 1878.

Tomo 5, pág. 326 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No procede la reclamación por suministros hechos al Gobierno, durante la Guerra de la Independencia, si ella no viene acompañada por documentos originales o constancias de las oficinas nacionales o provinciales que prueben la deuda.
- II. — Debe el Poder Ejecutivo poner término a las reclamaciones que se presentan por segunda o más veces, luego de rechazadas en la primera oportunidad, lo que es contrario a la letra y al espíritu de las leyes de consolidación de las deudas de la Nación, que fijan términos precisos, pasados los cuales no debe hacerse lugar a la presentación.

Ignacio S. Mejías, — sobre reconocimiento de una deuda por suministros hechos durante la Guerra de la Independencia

Excmo. Señor:

En Diciembre 3 de 1874 fué resuelta negativamente esta reclamación por la Comisión nombrada para liquidar la deuda de la Independencia *por no venir apoyada en los documentos origi-*

nales, ni en las constancias de las oficinas Nacionales o Provinciales que exige la Ley.

En Noviembre del año ppdo.; es decir, tres años después, se presentó nuevamente el interesado, sin acompañar no ya los documentos originales o las constancias de las Oficinas Públicas que se echaran antes de menos, pero ni siquiera algún dato o algún documento que mejore su causa.

He tenido ocasión de llamar la atención de V. E. sobre estas tramitaciones que no acaban nunca, lo que es contrario a todo orden Administrativo y muy especialmente a la letra y al espíritu de las leyes de consolidación de las deudas de la Nación, que han fijado siempre términos precisos y fatales.

Pienso por lo tanto que V. E. no debe hacer lugar a esta reclamación.— Octubre de 1878.

Ministerio de Hacienda. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 5 de 1878.

Tomo 5, pág. 527 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La patente por quince años es la de mayor término que fija la ley y se otorga como premio a los grandes inventos, circunstancia esta última que corresponde sea apreciada por la autoridad que confiere dicha patente. No basta en consecuencia, la voluntad del solicitante de querer una patente por 15 años sino que es necesario apreciar el mérito del invento para que ella pueda ser concedida.
- II. — No corresponde otorgar la patente máxima —15 años— a un invento que es sólo un perfeccionamiento de otros anteriores.

José Jullien, — patente de invención

Excmo. Señor:

No basta la voluntad del solicitante para que una patente se otorgue por 15 años; es necesario además se tenga en cuenta conjuntamente el mérito del invento. El texto del Art. 5.º de la Ley de la materia es bien claro, y no deja lugar a duda alguna. El Se-

ñor Jullien está por lo tanto, en error al pretender que por el solo hecho de haber solicitado su patente, por el término de quince años, y de haber depositado la cantidad que exige la ley, tiene derecho a los quince años en cuestión. Era además necesario que la importancia de su invento le hiciera acreedor al máximun con que se premian los grandes inventos.

Con respecto a este punto, pienso que la Oficina ha procedido acertadamente limitando el término de diez años, pues no merece más un invento que es sólo un perfeccionamiento de otros anteriores.— Noviembre 4 de 1878.

Resolución de acuerdo con lo dictaminado.

Tomo 5, pág. 499 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el Gobierno de la Nación, remunere un trabajo realizado sobre límites de la República con Chile, Bolivia y Paraguay, que ha merecido calurosa aprobación, debiendo —de conformidad a lo que el mismo interesado indica —nombrarse a personas competentes, que a la vista de todos los antecedentes de la labor, determinen la retribución debida, para luego recabar del Honorable Congreso, la autorización competente para su pago.

Manuel Ricardo Trelles, — cobra retribución por las Memorias que redactó por encargo del gobierno

Excmo. Señor:

En 1863 recibió el Señor Trelles, la comisión de trabajar una Memoria sobre los límites de la República, reservándose el Gobierno acordarle una retribución merecida (Decreto de Agosto 24 de 1863 f. 1).

Por espacio de 10 años, el Señor Trelles ha dedicado su tiempo y su inteligencia, al desempeño de esta comisión no menos difícil que delicada, dando a la publicidad, tres memorias sobre los límites de la República, con Chile, Bolivia y Paraguay, y numerosos artículos sobre la misma materia.

Sus trabajos han merecido la aprobación más calurosa de las personas entendidas y del público en general.

Para apreciar su importancia, bastará recordar, según el mismo Señor Trelles observa, que ellos habilitan al Gobierno de la Nación para defender y reclamar cuarenta mil leguas de territorio nacional.

Cumplida por parte del Señor Trelles la comisión que recibió es llegado el caso de que el Gobierno de la Nación cumpla por la suya, la obligación que para con él contrajo, acordándole la retribución merecida.

No tengo embarazo en declarar, que en manera alguna me encuentro habilitado para formar juicio acerca de la importancia de esta retribución y presumo que pocos lo estarán, pues se necesita para ello estudio y conocimientos muy especiales y muy poco comunes. No puedo, por consiguiente, abrir opinión sobre la última proposición del Señor Trelles.

Paréceme el temperamento más natural, para dar una solución a este asunto, el que el mismo interesado indica a f. 13, el nombramiento de personas competentes que en vista de todos los antecedentes, determinen la retribución debida, a fin de que pueda V. E. recabar del H. Congreso la autorización competente. — Noviembre 5 de 1878.

Resoluciones en Septiembre 18 de 1879 y Noviembre 1.º de 1882.

Tomo 5, pág. 135 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Procede el pedido formulado al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que éste dé las órdenes pertinentes a los Encargados de Negocios argentinos en Montevideo y Asunción, para que soliciten de las autoridades locales, prisión preventiva contra un prófugo por comisión del delito de bancarrota, fundándose en que aunque no estuviese la prisión preventiva estipulada expresamente en tratados de extradición, ella procede por tratarse del delito de bancarrota, condenado y perseguido por todas las Naciones, como un medio de protección al comercio.

Sobre prisión del prófugo Antonio Bongiorno

Excmo. Señor:

Aunque la prisión preventiva, no estuviese expresamente estipulada en los Tratados de Extradición, es práctica acordarla en

casos como el presente, es decir tratándose de delitos como el de bancarrota, que todas las Naciones han convenido en condenar y perseguir como una protección debida al comercio honrado.

No veo así inconveniente en que V. E. acceda a lo pedido en la anterior solicitud, mucho más, cuando los interesados piden que sea bajo su responsabilidad. — Noviembre 14 de 1878.

Se resolvió de conformidad al dictamen.

Tomo 5, pág. 536 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

A un perfeccionamiento de métodos ya conocidos, no corresponde otorgarle una patente por 15 años, ésta debe reservarse para aquellos inventos de gran importancia que ofrezcan una positiva novedad.

El Señor Nordenhelz, — patente de invención para la conservación de carne

Señor Ministro:

Pienso que el término de quince años, máximun de la ley, debe reservarse para aquellos inventos de una grande y verdadera importancia y que ofrezcan además una positiva novedad.

El procedimiento del Señor Nordenhelz según el informe del Comisario del ramo, es sólo un perfeccionamiento de métodos ya conocidos para la elaboración de productos también conocidos.

Si bien son estos productos de importancia, como son todos los que se relacionan con nuestra industria principal, falta por decirlo así verdadera invención en este invento.

Es por tanto, mi opinión, que limite V. E. el término a diez años. — Diciembre 11 de 1878.

Resolución de conformidad. — Diciembre 20 de 1878.

Tomo 5, pág. 533 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Si por falta de una disposición expresa o por descuido en su cumplimiento si ella ha existido, barcos de bandera nacional, han cambiado de nacionalidad, no puede obligárseles a que vuelvan a adquirir la primitiva y frente al texto, del Decreto de 22 de diciembre de 1877, que prohíbe dichos cambios como un medio de fomentar la marina mercante nacional, debe el Poder Ejecutivo limitarse a hacerlo cumplir, sin poder aplicarlo con efecto retroactivo.

Uso de bandera extranjera en los buques nacionales de cabotaje.

Señor Ministro:

Es singular que ni en el Ministerio a cargo de V. E. ni en el de la Guerra, ni en la Capitanía General de Puertos ni en el Registro Nacional, se encuentra la disposición a que se hace referencia en la nota que encabeza este expediente.

Al menos sírvase V. E. ordenar se acompañe copia de la nota de 3 de Junio de 1865, que ese Ministerio pasó a la Capitanía General. — Agosto 11 de 1878.

Señor Ministro:

Por el Decreto de Diciembre 22 del año ppdo. ordenó V. E. a la Capitanía General de Puertos no permitiera en adelante el cambio de bandera a los buques de cabotaje nacionales, y mandó pasar estos antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara acerca de lo que debiera hacerse con respecto a los que lo hubieren efectuado.

Según resulta de la lista que ha remitido la Capitanía General, son 72 los buques que desde 1864 hasta la fecha han dejado la bandera nacional para adoptar una extranjera.

Ya que por falta de una disposición expresa, o por descuido en su cumplimiento, si es que hubiese existido, lo que no se ha podido averiguar, se ha permitido el cambio, no veo la conveniencia en obligar a los propietarios de aquellos buques a deshacer lo que hicieron con consentimiento de la autoridad.

La liberalidad de nuestras instituciones, por otra parte hace poca o ninguna diferencia entre los buques nacionales y extranjeros, gozando todos de iguales franquicias y siendo a todos permitido aún a los de cabotaje, la navegación de los ríos interiores.

Y si bien es una aspiración legítima y patriótica el incremento de la Marina Nacional, paréceme que basta en el presente caso la medida ya adoptada, sin que se advierta ventaja positiva que justifique la perturbación que necesariamente debía de traer, privar a los propietarios en cuestión de la posesión en que están ha tantos años. — Diciembre 12 de 1878.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Diciembre 27 de 1878.

Tomo 5, pág. 453 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — El decreto de 24 de agosto de 1878, ordenó a la Capitanía General de Puertos que hiciera efectivo el cobro de derechos por el uso de los faros de la República Oriental a los buques que no justificasen haberlos pagado en dicha República, invocando la reciprocidad debida a la misma República por igual percepción que ella tiene autorizada con respecto a los faros argentinos. No obstante la justicia del procedimiento, dicho decreto debe ser objeto de una ley, ya que se trata del establecimiento de un impuesto que sólo el Poder Legislativo puede crear.
- II. — Es justo y equitativo el cobrar los derechos de luces a que se refiere el párrafo anterior, ya que la navegación del Río de la Plata ofrece peligros que hacen necesarios un buen servicio de faros, tanto en la costa Oriental como en la Argentina y este servicio debe ser retribuido por los buques que lo aprovechen sin distinción de nacionalidades.
- III. — Por estas razones no puede tomarse en cuenta la reclamación que presenta el Ministro de S. M. B., contra el Decreto de referencia, argumentando que el entendimiento a que pueden llegar al respecto las Repúblicas Argentina y Oriental, debe someterse al consentimiento de las Naciones cuyos buques aprovechen del servicio de luces, ya que ninguna oposición se puede formular contra los arreglos que tengan por objeto la percepción de los derechos de un servicio establecido en bien de todos.

El Encargado de Negocios de S. M. B., — sobre cobro de derechos marítimos a buques ingleses

Señor Ministro:

El Decreto de 24 de Agosto último que ordenó a la Capitanía General hiciera efectivo el cobro de derechos por los faros de la República Oriental del Uruguay a los buques que no justificasen haberlos pagado en dicha República, invoca por fundamento la reciprocidad debida a la misma República por igual percepción que ella tiene autorizada con respecto a los faros argentinos.

Justo y natural es, sin duda, retribuir un servicio por otro, y es práctica admitida entre las Naciones.

Paréceme, sin embargo, que era para ello indispensable en el primer caso la autorización legislativa.

Bajo cualquier faz que aquel decreto se considere, ya sea como acto de legítima y justificada reciprocidad, ya como una medida necesaria, y si se quiere provisoria para percibir derechos que de otra manera habría perdido el Tesoro público, él importa un impuesto que viene a pesar sobre la navegación y no es necesario decir que es esta atribución exclusiva del Poder Legislativo.

La conveniencia de llegar a un arreglo con la República Oriental sobre estas materias, salta a primera vista. La navegación del Río de la Plata sería muy difícil y peligrosa sin un servicio de faros, balizas y practicafe debidamente organizados.

Es además digno de notarse, que si los buques que vienen directamente de la República Argentina, no estando habilitada la navegación por los canales del Sud, necesitan las luces de los faros establecidos sobre la costa de la República Oriental hasta Montevideo,—los que se dirigen directamente a los puertos del Uruguay, que principian a tener un comercio directo de alguna importancia— necesitan a su vez las luces de los faros Argentinos de Punta Indio y Banco Chino. De manera que los buques que vienen directamente a la República Argentina necesitan aprovechar los faros Orientales y los que van directamente a los puertos Orientales del Uruguay, a Fray Bentos, por ejemplo, necesitan a su vez utilizar los faros Argentinos.

La naturaleza misma parece así indicar, más que la conveniencia, la necesidad de que las Repúblicas más directamente interesadas en la navegación de sus grandes ríos, se pongan de acuerdo a fin de establecer un buen servicio de faros, balizas y prácticos así como de arbitrar la manera mas fácil y equitativa de cobrar los derechos que exija su sostenimiento.

De estos mismos antecedentes se desprende que V. E. tiene iniciadas negociaciones al respecto; y no es dudoso que ha de llegarse fácilmente a salvar de una manera ventajosa para el comercio, y equitativa para todos, las dificultades que hasta ahora se han tocado, garantiendo la seguridad de la navegación, sin gastos excesivos, que en el estado de decadencia del mercado de fletes, no pueden los buques soportar.

El Señor Ministro de S. M. B., al reclamar del Decreto de Agosto, lleva su argumentación hasta negar, al parecer, a las Repúblicas Argentinas y Oriental, el derecho de entenderse al objeto de

autorizar el cobro recíproco de estos derechos, sin el asentimiento de las Naciones cuyos buques hubiesen aprovechado el servicio de las luces establecidas en uno y otro territorio.

Dice el Señor Ministro que *«el derecho de pasar por todo lo que sea mar libre, es un derecho natural de las Naciones, y que es uso del Derecho Internacional que si un buque no hiciese mas que pasar por las costas de una Nación, dicho buque no está sujeto al pago de las luces u otros impuestos que sólo son derechos territoriales»*.

Este principio es indudablemente de toda exactitud. El mismo Señor Ministro reconoce, sin embargo, que él tiene sus excepciones, que las Naciones han aceptado.

«Puede suceder, dice Calvo, libro I, cap. IV, párrafo 141, que la navegación en ciertos estrechos sea de tal modo difícil y peligrosa, que no se pueda hacer sino bajo la dirección de hombres prácticos y experimentados, y merced al sostenimiento de faros y señales convenientes. En este caso será preciso reconocer que el Estado que sostiene estos faros y facilita estos medios tiene derecho a ser indemnizado por los buques que de ellos se sirven».

«A este fin se han establecido por los Tratados ciertos derechos fijos que los buques deben satisfacer en las circunstancias enunciadas».

«Cuando la navegación de los estrechos es difícil, dice también Ortolan, (Diplom. de la mer, cap. VIII, libro II) de manera que no pueda hacerse sin auxilio de prácticos, de balizas, de boyas y de faros, es justo que los buques, a su paso, sean obligados a pagar ciertos derechos fijos y consentidos por los Tratados».

Los derechos que cobraba Dinamarca por el pasaje del Sud, tuvieron origen en este principio Internacional.

Por su anchura excepcional, por las circunstancias de ser paso forzoso a varias naciones; así como por la liberalidad de la legislación de aquellas, cuyas costas baña la navegación del Río de la Plata, puede bien considerarse como la de un mar abierto.

Los peligros que ella ofrece, las circunstancias especiales a que antes he hecho referencia, hacen indispensable, sin embargo, un buen servicio de luces, tanto en las costas Orientales como Argentinas, y no habría justicia en pretender que los buques que apro-

vechan este servicio, no lo retribuyeran por el hecho de venir directamente a la República Argentina unos, sin tocar en la República Oriental; y otros por el de seguir a los puertos Orientales del Uruguay sin tocar en la República Argentina.

Es esto tan natural y tan justo que, aunque no tuviera en su apoyo los principios de la Ley Internacional recordados antes, ninguna Nación podría hacer oposición a los arreglos que una y otra Nación hicieran para la percepción de los derechos necesarios a la conservación de un servicio establecido en bien de todas.

Pienso aún más, que no sería indispensable el consentimiento de las naciones para dar sanción a la convención que las Repúblicas Argentina y Oriental celebrarán sobre este particular.

Las Convenciones Postales, tan frecuentes hoy, nos suministran en el franqueo previo un ejemplo clásico y de todos los días, de cómo un servicio puede no ser retribuido precisamente en el lugar donde se hace, o lo que es lo mismo, de cómo una Nación puede cobrar el servicio que otro hace.

Al fijar de común acuerdo los derechos a cobrar por el servicio combinado de balizas, faros etc., las Repúblicas Argentina y Oriental podrían fácilmente arbitrar una compensación recíproca, sin que fuera necesario especificar la razón del cobro a lo que ninguna objeción fundada podría hacerse.

De las consideraciones que dejo expuestas, deducirá V. E. que es mi opinión que ningún derecho ni a título de reciprocidad ni de provisorio, puede cobrarse no estando autorizado por Ley del Congreso; que habría notoria conveniencia en llegar a un acuerdo con la República Oriental al objeto de establecer un servicio combinado de faros, balizas, señales y practicafe; que ninguna objeción podría ofrecer, por parte de las Naciones interesadas en la navegación del Río de la Plata, al cobro recíproco de los derechos que garantiesen la conservación de este servicio; y finalmente, que aún sin el consentimiento de las naciones, este cobro podría hacerse efectivo.

No debo terminar sin llamar la atención de V. E. sobre un grave abuso que viene cometiéndose de mucho tiempo atrás, y que es de admirar haya pasado hasta ahora desapercibido.

La empresa de Don Juan Libarona, viene cobrando un derecho por los faros del Banco Inglés y Punta del Indio, desde cerca de 20 años atrás y, lo que es curioso mucho tiempo después dejó de

ser tal empresa de faros por haber concluído su contrato y haberlos entregado al Gobierno Oriental.

Es decir, que ha estado cobrando un impuesto por un servicio que no hacía y por el uso de una propiedad que había dejado de pertenecerle.

La empresa invoca en su favor la Ley de 31 de Agosto de 1860 del Gobierno de la Confederación; y el Decreto del Gobierno del Estado de Buenos Aires de 20 de Marzo de 1857.

El término de este Decreto era de 10 años, y concluyó por consiguiente hace otros diez.

El de la Ley de la Confederación por 20 que concluye el año entrante, no comprendía a los puertos de la Provincia de Buenos Aires, que se regía a la sazón por sus propias leyes. Aún suponiendo vigente la Ley de la Confederación, la empresa ha cobrado, por consiguiente, sin título ni derecho alguno, un impuesto a los buques que no pasaban de los puertos de la Provincia de Buenos Aires.

Sólo la consideración de que debe suponerse en equidad que ha percibido estos frutos de buena fe, mientras no se pruebe lo contrario, puede exonerarla de la obligación de restituir lo que indebidamente percibió.

Y aún en el caso más favorable, la concesión no podría considerarse sino en favor del que conserva encendido los faros, pues no fué un favor personal a la empresa sino la retribución de un servicio que debe seguir al que lo presta.

Abuso semejante no puede continuar un día más y debe V. E. hacerlo cesar en el acto. — Diciembre 20 de 1878.

Se ignora Resolución.

Tomo 5, pág. 513 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Los matrimonios entre no católicos si son celebrados de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil, producen en el país todos los efectos del matrimonio válido, por expresa disposición del Código citado.
- II. — Preguntando el Representante de los EE. UU., acerca de si se requiere licencia de los tribunales nacionales o provinciales para la celebración de matrimonios entre protestantes mayores de edad, corresponde hacerle saber: que se trata de una cuestión meramente procesal, regida por la ley del lugar, que en la Provincia de Buenos Aires, el presidente de la Corte Suprema es el que tiene atribución para conocer en los expedientes sobre matrimonios entre no católicos.

El Ministro Residente de los Estados Unidos, — sobre matrimonios entre protestantes

Excmo. Señor:

La primer pregunta tiene su respuesta categórica en estas palabras del Código Civil:

«El matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia Católica produce en la República todos los efectos del matrimonio válido, si fuese celebrado en conformidad con las leyes de este Código y según las leyes y ritos de la Iglesia a que los contrayentes pertenecen».

La segunda recae sobre un punto de mero procedimiento, y debe contestarse que él está regido por la ley del lugar; que en Buenos Aires, atribuye al Presidente de la Corte Suprema de la Provincia, el conocimiento de los expedientes sobre celebración de matrimonios entre personas extrañas al culto católico.

Según el Código Civil, además común a toda la República, las relaciones civiles de los esposos entre sí, son determinadas por esa ley y resueltas en caso de litigio por sus tribunales. —Marzo 18 de 1879.

Se adoptó como resolución el dictamen.

- I. — Las Municipalidades no constituyen una dependencia del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo. De origen popular, tienen una existencia y atribuciones propias y en sus deliberaciones gozan sus miembros de la libertad y de las inmunidades inherentes a los cuerpos colegiados.
- II. — Corresponda que el P. E. consultando los intereses de la enseñanza, prevenga a los profesores de Colegios Nacionales que no tomen parte en las administraciones locales y limiten su actividad exclusivamente al desempeño de sus deberes profesionales.

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, — pide la destitución de Don Ismael Carrillo

En una extensa nota fechada en Jujuy a 5 de Marzo de 1879, el Poder Ejecutivo de aquella Provincia exponía ante el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, que por una ley de la legislatura se había dispuesto la venta de una finca sita en la Capital, denominada «Río Negro» y de propiedad de la Provincia, a mérito de un legado hecho por un Señor Soria.

El Poder Ejecutivo ordenó que la Municipalidad llevara a debido cumplimiento dicha Ley, pero la mayoría de los miembros de ésta se negaron a verificarlo con expresiones groseras y agresivas contra el Poder Legislativo y Ejecutivo.

Como la responsabilidad de tal proceder era personal y directa sobre cada uno de los miembros que componían aquella Corporación, se organizó un sumario por el cual resultaba complicado Don Ismael Carrillo como autor principal del desacato.

Terminaba la nota, pidiendo la destitución del citado Carrillo del empleo nacional que desempeñaba en aquella Provincia.

Pasado el expediente en consulta al Señor Procurador General de la Nación, se expidió en la siguiente forma:

Señor Ministro:

No veo razón alguna que aconseje a V. E. acceder a la destitución del profesor Don Ismael Carrillo, que solicita el Gobierno de Jujuy.

Ni el hecho de declinar el encargo o si se quiere, el mandato de la venta, ni en las observaciones con que la Municipalidad de Jujuy pretende demostrar su inconveniencia, encuentro el grave delito, la usurpación de facultades, las tendencias al desquicio y al arbitrario, que tanto ha alarmado al Gobierno de Jujuy.

La institución Municipal, no es una dependencia del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo.

De origen popular, tiene su existencia y sus atribuciones propias, y no puede negarse a sus deliberaciones la libertad y las inmunidades de que gozan todos los cuerpos colegiados.

Sin más antecedentes que los que arrojan los documentos remitidos, no es pues posible ver en la nota de la Corporación Municipal el grave delito que en ella encuentra el Gobierno de Jujuy. Además ninguna perturbación, ni inconveniente alguno serio podría originar la no aceptación del encargo de la venta, por parte de la Municipalidad, puesto que podía ella efectuarse por otro medio cualquiera.

Lejos de acceder a la destitución que se solicita, es mi opinión se dirija V. E. al Gobierno de Jujuy, haciéndole presente la falta de razón con que ha sido preso el profesor Carrillo, y pidiendo sea puesto en libertad a lo que es de esperarse acceda sin dificultad.

Este incidente pone de manifiesto la inconveniencia de que los Profesores de los Colegios Nacionales tomen participación en las administraciones locales. Es mi opinión, consultando los intereses de la enseñanza, les previniera V. E. se limitaran exclusivamente al desempeño de sus deberes profesionales. — Abril 8 de 1879.

Tomo 6, pág. 9 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiéndose reconocido un crédito por Acuerdo General de Ministros de fecha 13 de julio de 1869, que recién se presenta al cobro diez años después, se tiene derecho a su importe en fondos públicos desde la fecha de presentación, sin que pueda pretenderse los intereses corridos desde la fecha del acuerdo.

C. Iturburu, — suministros

Señor Ministro:

Si el interesado hubiese ocurrido al Crédito Público en la fecha del Decreto, 30 de Junio de 1869, hubiera recibido su título en

fondos públicos con los intereses correspondientes, y desde entonces habría percibido su renta.

Hoy sólo recibirá esta renta en fondos públicos y no creo que se le pueda obligar a perderlos por el hecho de no haber ocurrido antes, ni que tenga tampoco derecho a más.

Pienso así que V. E. debe ordenar la liquidación en la forma expresada. — Abril 8 de 1879.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 9 de 1879.

Tomo 6, pág. 7 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No hay ley civil que prohíba las uniones matrimoniales entre Católicos y Protestantes; la prohibición es de Derecho Canónico y es únicamente ante estas últimas autoridades que deben solicitarse las dispensas necesarias, ya que la ley civil ordena reprobado los matrimonios que la Iglesia reprueba y reconocer como legítimos los que ella sanciona, no obstante el principio de la libertad de cultos de la Constitución Nacional.

Matrimonio entre disidentes, — sobre si aún subsiste el impedimento civil consagrado por las antiguas Leyes Españolas en presencia de los nuevos principios establecidos por la Constitución.

Excmo. Señor:

Para dar a V. E. mi dictamen sobre la consulta que se sirve hacerme en su nota del 24 de Abril último sobre la dispensa que se solicita del Gobierno para contraer matrimonio entre católicos y cristianos disidentes, necesito entrar en algunas explicaciones de la materia, aunque ella sea bien conocida de V. E.

El impedimento dirimente de disparidad de cultos, que ha sostenido la Iglesia, desde que lo establecieron los Emperadores Romanos, se dirigió sólo a las uniones entre un cristiano y un gentil o infiel, judío o mahometano. Estas uniones las ha reputado nulas la Ley Canónica, por la razón de que no podía conferirse el sacramento del matrimonio al que no había adquirido por el bautismo la capacidad de recibir los sacramentos.

Pero el matrimonio entre un Católico y un cristiano de las sectas disidentes una vez verificado, la Iglesia lo reputa válido e indisoluble, por que el sacramento surte todos sus efectos sobre personas bautizadas. Sólo ha opuesto a esas uniones un impedimento impediende, por razones de conveniencia, a saber: por el temor de que la fe del cónyuge católico se pervierta, y de que la prole sea educada en la erejía. Tal es la Ley Canónica.

Una Ley Civil, sin embargo, la Ley 15, Tít. 2, Partida 4, que trata de los impedimentos dirimentes, que anulan el matrimonio contraído, dice: «Ningún cristiano debe casar con India, ni con Mora, ni con Hereja, ni con otra mujer que non toviesse La Ley de los Cristianos; o si casapse non valdría el casamiento. Pero el cristiano desposarse puede con mujer que non sea de su ley, sobre tal pleito que se torne ella cristiana ante que se cumpla el casamiento, es si non se tornase ella cristiana non valdría las desposadas».

La redacción de esta Ley muestra claramente que ella ha empleado la palabra *hereja* en un sentido distinto del que hoy le damos, aplicándola a alguna clase de personas que no profesaran la Ley de Jesucristo. De todos modos ella no pudo tener en vista a los actuales protestantes; porque fué escrita cuatro siglos antes de la reforma de Lutero. Pero aunque se entienda literalmente su disposición contra los herejes, siendo ella opuesta al Derecho Canónico, a la opinión de los Jurisconsultos, criticada por su mismo comentador, Gregorio López, ella nunca ha estado en vigencia en esta parte como otras muchas del mismo Código, que se oponían a las antiguas Leyes Españolas.

Lo que rige en esta materia, es la Ley del Fuero Real, que sólo reconoce los impedimentos canónicos por estas palabras «Firmemente defendemos que ninguno non sea osado de casar contra mandamiento de Santa Iglesia, pues que le fuera defendido». Fuera de esa Ley de Partida, que nunca ha estado en vigor, no hay ninguna Ley Civil que haya impedido las uniones entre un Católico y un Protestante; y por consiguiente me parece inútil y abusiva la práctica que se sigue de pedir al Gobierno dispensa para tales matrimonios. Inútil, porque después de otorgada la dispensa del impedimento canónico por la autoridad eclesiástica, la autoridad civil nada tiene que dispensar. Abusiva, porque si hubiera una Ley

que prohibiera tales uniones no sería el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo, el que tendría la facultad de dispensar del cumplimiento de la Ley.

La Ley Civil ordena reprobear los matrimonios que la Iglesia reprueba, y reconocer como legítimos los que ella sanciona. Siempre pues, que uno de los contrayentes sea católico, y sujeto por consiguiente a las leyes de la Iglesia, el impedimento subsiste, a pesar de la libertad de culto concedida por la Constitución, pero sólo debe pedirse dispensa a las autoridades eclesiásticas, porque es sólo la Ley Canónica la que lo establece. En cuanto a las formas que deben tener los matrimonios entre personas no católicas, ellas están determinadas en el «Proyecto de Código Civil».

Creo con esto haber satisfecho la consulta que se ha dignado hacerme V. E. Dios guarde a V. E. muchos años. — Mayo 20 de 1879.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Junio 30 de 1870.

Tomo 2, pág. 134 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se acceda al pedido de franquicias que se solicita para el transporte de minerales bolivianos en los ferrocarriles argentinos, como un medio de contribuir al incremento de nuestras relaciones comerciales con Bolivia.

El Cónsul General de Bolivia, — solicita franquicias para el comercio Boliviano

Excmo. Señor:

La conveniencia de estimular nuestras relaciones de comercio con la República de Bolivia, por medio de oportunas concesiones que compensen la inmensa distancia que tienen que recorrer los productos de un cambio recíproco, es a todas luces manifiesta.

El señor Carranza que inicia este movimiento saludable, merece, sin duda alguna ser considerado por V. E.

La solicitud comprende algunos puntos que son del resorte de la administración del camino, es decir, todo aquello que se refiere

al recibo, a la guarda y a la entrega de la carga, incisos, 1, 4 y 7 y sobre ellos debe V. E. dejar entera libertad a la Comisión a cuyo cargo está la dirección.

Con respecto a lo demás observaré —que es de práctica conceder en las líneas férreas uno o más pasajes gratis a las personas que dan ocasión con su iniciativa o sus esfuerzos a un aumento considerable de tráfico, y que, encontrándose en este caso el Señor Carranza, es acreedor a los dos pasajes que solicita; que siendo tan reducida la tarifa del telégrafo, la exoneración que se solicita no compensa los inconvenientes que ofrece la fiscalización de los telegramas que se hicieran en servicio de la empresa con el fin de distinguirlos de los particulares, y no debe concederse; y por último, que encuentro aceptable la opinión de la Comisión, tanto en cuanto a la reducción a $\frac{3}{8}$ en vez de $\frac{1}{4}$, para las piñas o barras de plata, y muy principalmente, en que esta concesión sea extensiva a iguales productos de los minerales de la República.

Agosto 8 de 1879.

Departamento del Interior. Resolución de Octubre 20 de 1879 que ordena el archivo, atento a que se están por adoptar resoluciones tendientes a facilitar el comercio con Bolivia, en las que se comprenden las franquicias pedidas.

Tomo 6, pág. 42 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente la reclamación de documentos que formula la Peia. de Buenos Aires, por tratar éstos de cuestiones de límites de la República, que revisten necesariamente carácter nacional

Convendría al respecto, que se llevase a cabo una clasificación y división de los documentos que encierran los Archivos, pasando a la guarda del Gobierno Nacional aquéllos que revistan este carácter.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, — solicita la devolución de documentos pertenecientes a los Archivos Provinciales.

Señor Ministro:

Los documentos cuya devolución solicita el Gobierno de la Provincia según a primera vista se percibe son de carácter esen-

cialmente Nacional y no era necesario advertirlo, son indispensables en el Ministerio encargado de la defensa de los derechos de la Nación en sus cuestiones de límites con los pueblos vecinos

Es mi opinión que habría conveniencia notoria, sino estricta justicia en una clasificación y división de los documentos que encierran los Archivos de la Provincia, pasando a la guarda del Gobierno General aquellos que resultasen de carácter Nacional.

Mientras llega la oportunidad de discutir este punto y en los momentos en que se ventilan las más importantes cuestiones con las Repúblicas limítrofes, es evidente que V. E. no pueda desprenderse de documentos en que apoya los derechos de la Nación y que necesita consultar a cada instante.

Bastará a mi juicio que V. E. lo haga así presente al Gobierno de esta Provincia, para que no insista en la reclamación que ha iniciado por la nota que antecede. — Agosto 23 de 1879.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Agosto 31 de 1879.

Tomo 6, pág. 27 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La facultad que tienen los Cónsules extranjeros de nombrar albaceas en las sucesiones intestadas de sus connacionales, constituye una excepción al derecho común, por la que dicha facultad debe reconocerse expresamente en tratados internacionales en base a una perfecta reciprocidad.

El encargado de Negocios Argentinos en Montevideo, — sobre derecho a nombrar albacea dativo, a la sucesión intestada de un ciudadano Oriental.

Señor Ministro:

La facultad de nombrar albaceas, en las sucesiones intestadas que se han concedido a los Cónsules de algunas naciones amigas, es una excepción al derecho común, que única y exclusivamente puede ser autorizada por estipulaciones claras y precisas de tratados públicos que establecen siempre, como es natural, una perfecta reciprocidad.

Este es el principio que rige invariablemente en nuestros tribunales, y no tengo la más ligera duda de que la sentencia del Señor Juez Nogueras, que ha dado origen a esta comunicación del . No veo por lo tanto razón ni conveniencia, en dar ulterioridad a este asunto. — Agosto 25 de 1879.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Se adopta como resolución lo dictaminado. — Septiembre 20 de 1879.

Tomo 6, pág.^{ra} 6 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La legislación argentina sobre acuñación de moneda castiga a los que fabriquen, introduzcan o expendan moneda falsa de especie, que tenga curso legal en la Nación, no legislando en cambio acerca de los que fabriquen monedas que tuvieran el peso y la ley de las verdaderas para expenderlas en un país que hubiere prohibido su acuñación, no obstante, estos hechos no serían reputados inocentes por las autoridades argentinas, pudiendo dar lugar a la extradición, según es práctica en delitos de este género, aun en ausencia de Tratados.

El Cónsul de Bélgica, — sobre acuñación de monedas

Señor Ministro:

Recientemente acaba de sancionar el Congreso de la Nación leyes sobre acuñación de moneda que puede V. E. pedir al Señor Ministro de Hacienda, para comunicarle al Señor Cónsul de Bélgica.

El Señor Cónsul, desea además ser informado acerca de si nuestras leyes castigan la acuñación de monedas extranjeras en el territorio de la República, y si castigan igualmente a los ciudadanos argentinos que hicieren esta acuñación en un país extranjero y se refugiasen en el territorio de la República.

Determinar el valor que haya de darse al oro, a la plata y a otros metales en ciertas proporciones y con emblemas o signos determinados para que sirvan de tipo en todas las transacciones, que es lo que constituye la moneda, es un privilegio que se han reservado invariablemente todas las naciones y cuya infracción castigan con las penas más severas.

Nuestra legislación castiga con dos hasta siete años de trabajos y multa pecuniarias en proporción, a los que la fabriquen, introduzcan o expendan moneda falsa de especie que tenga curso legal en la Nación.

Nada estatuye con respecto a los que fabrican moneda falsa para expenderla en el extranjero; ni menos contra los que fabricasen monedas que tuviesen el peso y la ley de las verdaderas, para expenderlas en un país que hubiese prohibido su acuñación, que es el caso a que se refiere el Señor Cónsul de Bélgica con respecto a los Estados de la Liga Latina.

Este hecho sin embargo, aún a falta de una sanción expresa no sería inocente.

El importaría un abuso de los deberes que se deben entre sí recíprocamente las naciones, en guarda de los grandes intereses de la sociedad y no podría dejar de traer aparejadas responsabilidades muy serias. El autorizaría por otra parte la extradición según es de práctica en delitos de este género aún en la ausencia de tratados especiales.

La Francia es la primera Nación que sujetó a la jurisdicción de sus Tribunales ciertos crímenes contra la seguridad del Estado cometidos por franceses y aún por extranjeros fuera del territorio de la Francia, toda vez que sus autores volvieren a él, o pudieran ser habidos por extradición.

Algunas naciones; el Austria, la Bélgica, etc., y recientemente el Imperio del Brasil, han dictado disposiciones análogas.

No hay entre nosotros ley alguna al respecto; y es dudoso que pudiera castigarse a ciudadanos Argentinos por crímenes cometidos en el extranjero. Las autoridades del país en que lo fueren tendrían el derecho no obstante de pedir la extradición. y aunque los tratados exceptúen por regla general la entrega de los naturales del país de quien se solicita, dejándola a su voluntad, no es dudoso que en el caso que motiva la consulta del Señor Cónsul, el Gobierno Argentino habría de acordarla. — Septiembre de 1879.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad al dictamen. — Septiembre 18 de 1879.

Sólo puede considerarse como una aspiración patriótica, imposible de llevar a la práctica por el momento, la sugerencia que formula el Departamento de Ingenieros, en el sentido de obligar a las Compañías concesionarias de ferrocarriles para que tengan sus domicilios de tal manera constituidos, que puedan sus representantes obrar con entera independencia de los accionistas en el extranjero, pudiendo resolver por sí solos las cuestiones que se susciten, sin tener que esperar en cada caso la aprobación del Directorio en Londres.

El Departamento de Ingenieros, — estudios sobre la construcción del Ferrocarril Argentino del Este

Excmo. Señor:

El Departamento de Ingenieros, trae nuevamente a la consideración de V. E. la debatida cuestión del domicilio de las Compañías concesionarias de los caminos de fierro en la República.

Encuentra el Departamento que sería conveniente que los representantes de dichas compañías estuviesen plenamente autorizados para adoptar ciertas resoluciones importantes; para aceptar presupuestos de las obras a ejecutar, por ejemplo, sin necesidad de consultar al Directorio en Londres. Con este motivo opina, que no se dá el debido cumplimiento a la disposición que contienen todos los contratos acerca del domicilio legal en la República, y que conveniría pedir a los representantes de las expresadas compañías, exhibieran, a la brevedad posible, los documentos que los autorizan a tener su domicilio legal en Inglaterra. Cree además el Departamento, que sería conveniente se determinaran las condiciones que deben revestir los poderes otorgados a los directores residentes en la República.

Es fuera de toda duda, que convendría que las compañías constructoras de nuestras vías férreas, tuviesen su domicilio en la República, de tal manera constituido, que obraran con entera independencia de los accionistas en el extranjero, —y pudieran resolver por sí solas las cuestiones que llegaran a suscitarse, de cualquier naturaleza que fueran.

Desgraciadamente, siempre que se ha suscitado esta cuestión se han tocado las mismas dificultades.

Por la acumulación de una riqueza excepcional, en dos siglos de paz interna, no interrumpida por las convulsiones que han agi-

tado más o menos a todos los otros pueblos, el mercado de Londres ha venido ha ser el mercado del mundo entero. Con muy raras excepciones, es sólo de allí de donde han salido los inmensos capitales que explotan las grandes empresas de Bancos, caminos de fierro, líneas de navegación que dan movimiento al comercio aún en las regiones más apartadas de la tierra.

La práctica de los negocios ha establecido ciertas reglas de que no es posible prescindir, y que hay que aceptar so pena de no obtener el capital.

Es natural que los que se desprenden de su dinero para remitirlo a miles de leguas de distancia, se reserven su gobierno y dirección. Es natural que teniendo los accionistas su domicilio en Londres, sea este centro el domicilio de las compañías que se formaren con su dinero; que allí tengan lugar las reuniones de accionistas; la distribución de los dividendos y todas aquellas operaciones indispensables a los objeto de la sociedad.

Pretender que los dueños del dinero consientan en que un tercero a miles de leguas de distancia, pueda disponer de él sin su consentimiento, parece que es contrario a la naturaleza humana.

Todas las sociedades de este género, se han dado sus estatutos que son su ley. En ellos están deslindadas las atribuciones de los que la dirigen inmediatamente, —y las facultades que se reservan los accionistas; —que tienen derecho de ser consultados toda vez que se trate de nueva erogación de fondos, de distraer los que debieran servir a la distribución de dividendos a objetos no previstos en los mismos estatutos.

Estos estatutos han sido aprobados por el Gobierno. —En ellos está previsto el caso que motiva la nota del Departamento, y no debe extrañarse que el Director residente en la República, rehuse aceptar el presupuesto de una nueva obra, sin el asentimiento del Directorio en Londres.

Sin duda alguna, sería mucho más ventajoso que el Directorio residente entre nosotros, estuviera munido de amplios poderes para resolver todas las cuestiones sin consultar a nadie; mejor sería todavía, que el capital fuera suscrito en la República; que en ella residieran los accionistas, tuvieran sus reuniones, distribuyeran los dividendos, etc. etc. No siendo esto posible, empero, por el momento, fuerza es aceptar las cosas como son; o bien renunciar a los progresos que solo se llevan y solo pueden llevarse a cabo, por medio

de la grande invención de estos tiempos que con la reunión de pequeños capitales, realiza las más grandes obras.

No veo, por tanto sino una aspiración patriótica en las observaciones del Departamento, que será tal vez posible convertir en realidad más adelante, pero de ningún objeto práctico por el momento. — Septiembre de 1879.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 3 de 1879.

Tomo 6, pág. 17 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que el Cónsul Argentino en Bolivia pague una contribución de carácter bélico que le exige el Gobierno Boliviano, por cuanto el tratado vigente entre nuestro país y la nombrada República declara exentos a los ciudadanos de uno de ellos residentes en la otra y viceversa de todo servicio personal, préstamos o requisiciones militares.

El Cónsul Argentino en Santa Cruz (Bolivia), — da cuenta de una contribución pecuniaria que le ha sido impuesta por las autoridades de aquella República para gastos de guerra.

Señor Ministro:

El tratado vigente entre esta República y la de Bolivia declara exentos a los ciudadanos de una potencia residentes en el territorio de la otra, de todo servicio personal lo mismo que de todas las contribuciones, préstamos o requisiciones militares con cualquier motivo que se exijan.

No sólo pues en su carácter de Cónsul, sino en el de simple ciudadano, está exonerado el Señor Costas, de suscribirse a los empréstitos a que hace referencia y si lo hiciere compromete su posición oficial. — Octubre 17 de 1879.

Resolución de Octubre 21 de 1879, que dispone varias medidas de conformidad al dictamen.

Tomo 6, pág. 40 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

- I. — Habiendo el Gobierno de la Rep. Oriental deportado delincuentes a nuestro país, corresponde se le llame la atención por este proceder, que atenta contra los deberes de buena vecindad, y disponer que los individuos deportados sean devueltos en los mismos vapores que los trajeron.
- II. — La Comisión de Inmigración, a semejanza de otros países, debería tener la facultad de obligar a los capitanes de los buques que conducen inmigrantes, a devolverlos a los países de donde provienen cuando por su edad o por sus necesidades no están en condiciones de ganar su subsistencia y siempre que no vengan a cargo de personas que puedan llenar este deber.

Sobre deportación de individuos de Montevideo a la República.

Señor Ministro;

El proceder de las autoridades orientales es poco amistoso.

No es necesario decir que una Nación no tiene derecho de mandar al territorio de la otra, aquellos individuos que por sus hechos criminales son una amenaza para su tranquilidad, ni menos que la Nación a que pretenda hacerse regalo semejante, tiene el más perfecto derecho para rechazarlo.

Aún aquellas Colonias que debieron el principio de su existencia, a un movimiento filantrópico que buscó en el destierro la corrección y mejora de los criminales como la Australia, reclamaron de su Metrópoli ser exoneradas del deber de recibir población tan peligrosa.

La Comisión de Inmigración de Nueva York va aún más allá: obliga a los capitanes de los buques que conducen inmigrantes, a volver a los países de donde salieron aquellos individuos que por su edad o por sus enfermedades, no están en aptitud de ganar su subsistencia, siempre que no acrediten venir a cargo de personas que puedan llenar este deber.

Entre nosotros si la Comisión de Inmigración no tiene, debería tener igual poder y, evitaríase así el espectáculo doloroso de la mendicidad que acrece día a día con los llamados inmigrantes que no traen más industria que implorar la caridad pública.

El Gobierno Argentino podría volver con pleno derecho los individuos embarcados por las autoridades orientales a costa de la misma. Bastará, empero, por ser este el primer caso, que sean ellos devueltos por los mismos vapores que los trajeron y que llame V. E. la

atención al Gobierno Oriental acerca de hechos de ese género, que no podrán repetirse sin mengua de los deberes de buena vecindad a que están obligadas las naciones entre sí.

Al obligar a los agentes de los vapores a volver a los individuos que han dado lugar a este incidente, al lugar de donde salieron, debe V. E. prevenirles que serán castigados con una multa según las circunstancias más o menos culpables de su reincidencia. — Octubre de 1879.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 8 de 1879.

Tomo 6, pág. 65 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No es necesario ni conveniente que el Procurador Fiscal, inicie una acción pidiendo la quiebra de un deudor del Fisco, dado que el Gobierno Nacional, tiene acción directa contra los bienes de sus deudores, si le son conocidos y contra ellos debe proceder mientras no medie una declaración de falencia.

El Procurador Fiscal, — consulta sobre si debe pedir que sean declarados en quiebra, los Señores Llavallol e hijos, deudores del Fisco.

Excmo. Señor:

La acción del Gobierno Nacional contra los bienes de sus deudores es directa; y mientras no medie una declaración de quiebra, debe ser dirigida contra ellos.

La manera de proceder en el caso que motiva la consulta del Señor Procurador Fiscal, pareceme sencilla siendo conocidos los bienes de los Señores Llavallol, debe el Procurador Fiscal dirigir contra ellos su acción, bien solo, en concurrencia con el Banco de la Provincia, o bien con cualquier otro acreedor.

Los Tribunales decidirán si el crédito de la Nación debe ser privilegiado, si debe concurrir con el Banco de la Provincia o con otros acreedores, así como si es o no llegado el caso de concurso.

No veo la necesidad ni la conveniencia de que el Procurador Fiscal inicie su acción pidiendo una declaración de quiebra, que

otros acreedores no han pedido hasta ahora según parece. — Noviembre de 1879.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 19 de 1879.

Tomo 6, pág. 70 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se otorgue pensión aunque el causante no se encontraba incorporado al ejército a la época de su fallecimiento, si se justifica que esta circunstancia no significó el abandono de la carrera militar, sino la imposibilidad en que se encontraba de incorporarse, debido a las graves dolencias que le aquejaban.

Deidamia Zavallía, — pensión como hija legítima del Coronel Don Manuel Antonio Zavallía

Señor Ministro:

La filiación de Doña Deidamia Zavallía, está suficientemente justificada, así como el número de años de servicio de su finado padre el Coronel Don Manuel A. Zavallía para optar a la pensión equivalente a la cuarta parte del sueldo de dicho finado devengada al tiempo de su fallecimiento.

Falta empero, otro requisito de la Ley a esclarecer.

Resulta de estos antecedentes que el expresado Coronel Zavallía no se encontraba incorporado al Ejército, cuando acaeció su muerte.

Considero necesario que sobre este particular, se oiga a la interesada. — Octubre 10 de 1879.

Señor Ministro:

La exposición del apoderado de la interesada pone de manifiesto que el hecho de no haberse incorporado al Ejército el finado Coronel Zavallía, no importa abandono de la carrera militar, sino la imposibilidad en que se encontró de llenar este deber, por las graves dolencias que le aquejaban.

No veo entonces razón alguna que obste a que se acuerde a su hija la pensión que solicita; de acuerdo en todo con el dictamen del Señor Auditor. — Noviembre 7 de 1879.

Departamento de Guerra y Marina. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 14 de 1879.

Tomo 5, pág. 485 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que no se haga lugar al pedido formulado por varios Capitanes para la creación de una Oficina de Peritos Jurados de Marina, que sería regenteada por los peticionantes y cuyo objeto sería el de emitir peritajes en cuestiones marítimas, revistiendo éstos el carácter de públicos y oficiales y los Peritos componentes de la misma participarían de este carácter, por cuanto ello importa la creación de una Oficina Pública que sólo el Congreso puede crear, e implicaría además la constitución de un monopolio que contraría los principios constitucionales de libertad de trabajo e industria, por cuanto de sus Estatutos se desprende la obligación de toda Aduana de recurrir a ella cada vez que se presenten asuntos de la materia que requiera un informe técnico.

Sobre el establecimiento de una Oficina de Peritos Jurados de Marina

Señor Ministro:

Cada vez que ocurre la necesidad de proceder a la estimación de averías, ya en el casco o aparejo de un buque, ya en las mercaderías en estibas, varaduras, etc., es la práctica de nuestros Tribunales confiar esta operación a personas más o menos competentes, pero que no tienen más carácter oficial que el que reciben de su nombramiento.

Para la determinación de los valores de todas las otras cosas que son objetos de comercio, hay tasadores, maestros mayores, etc., que han dado pruebas de suficiencia, pagan una patente y tienen los deberes y responsabilidades consiguientes a una posición reconocida y aceptada.

Solo el hecho de que los casos de averías marítimas no hayan sido muy frecuentes hasta ahora entre nosotros, puede explicar

- que no se haya sujetado su estimación a los mismos procedimientos; es decir, que los encargados de su estimación, hayan rendido examen de su capacidad como tales, y aceptado la obligación de proceder con arreglo a reglas fijas y a un arancel determinado de antemano para la remuneración de su trabajo.

El comercio de la República con las Naciones extranjeras, ha tenido mientras tanto, un gran desenvolvimiento en estos últimos años y aumenta día a día. Parece entonces, llegada la oportunidad de dar a las transacciones que en él tienen origen las mismas garantías de que gozan los otros ramos de la vida social.

Los Sres. Viale, Tessitore y Malta, anticipándose a esta necesidad, proponen la creación de una oficina de *Peritos jurados de marina*, regentada por ellos y bajo la dependencia de la Capitanía General de Puertos, cuyas operaciones periciales tendrían carácter oficial y serían remuneradas con arreglo a un arancel que presentan.

Aunque esta oficina no excluiría el ejercicio de igual industria por parte de otros peritos, —no está en las atribuciones de V. E. crearla, porque si los peritos que la regentean hubiesen de tener el carácter oficial de empleado público, es atribución del Congreso conferirlo,— y aun prescindiendo de esta consideración, el establecimiento de la Oficina en cuestión, importaría si no un peligro, una preferencia en favor de determinadas personas, lo que es contrario a la índole de nuestras instituciones. No veo, empero, inconveniente alguno, en que los recurrentes establezcan la oficina que proyectan, bajo su responsabilidad, siendo la industria libre para todos.

El pensamiento de reglamentar el ejercicio de las pericias marítimas, surge sin violencia de estos antecedentes.

Dejando libre para todos esta industria, creo que es llegada la oportunidad de colocar a los que la desempeñan en las mismas condiciones en que están los maestros mayores en los otros ramos, sujetándolos a examen, al pago de patentes y a un arancel.

El comercio no podría menos de ganar con esta innovación. Las tasaciones de averías exigirían menos trámites, serían más expeditivas, ofrecerían mayores probabilidades de acierto, y serían, por último, menos dispendiosas.

Para la mejor ilustración de la materia, creo conveniente, sin embargo, oír al parecer de la Suprema Corte de Justicia, la que,

en contacto inmediato con los Juzgados de Sección, está mejor habilitada para formar un juicio más exacto, tanto acerca de la necesidad de la creación de estos peritos jurados de marina, como acerca de la remuneración que haya de acordarse a su trabajo.—Noviembre 21 de 1879.

Señor Ministro:

La opinión autorizada de la Corte Suprema corrobora el parecer que dí antes a V. E. sobre este asunto.

La oficina de Peritos de Marina, cuya creación propone, es atribución exclusiva del Congreso, en cuanto da carácter público a los Peritos, y oficial a sus pericias.

Si hubiera de establecerse simplemente al amparo de la autoridad, vendría a crear preferencias y prerrogativas contrarias a la libertad de industria que nuestra Constitución consagra.

Dice al mismo tiempo aquel Superior Tribunal, que ninguna necesidad se advierte acerca de la reglamentación, cuya conveniencia antes indicaba. Si en la práctica ninguna dificultad ofrecen estas pericias de marina; si los procedimientos seguidos hasta ahora satisfacen a todos, no hay a la verdad para qué innovar.

Lo que corresponde entonces, es mandar estas actuaciones al archivo.— Junio de 1881.

Departamento de Marina. Resolución de Junio 15 de 1881, no haciendo lugar a lo peticionado.

Tomo 6, pág. 31 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La extradición de criminales entre las autoridades nacionales y provinciales y entre estas últimas entre sí, es estrictamente obligatoria, sin que tengan derecho, recíprocamente, a revisar el título en virtud del cual se solicita.

El Gobernador de la Patagonia, — consulta sobre contribución directa, patentes, ocupación de tierras públicas y extradición de criminales

Excmo. Señor:

La consulta del Señor Gobernador de la Patagonia abraza tres puntos, que, para su mejor esclarecimiento y para que unos no perjudiquen la marcha de los otros deben correr por cuerda separada, según es práctica:

1.º) Con respecto a las contribuciones y patentes, es necesario oír a la Dirección General de Rentas, a cuyo resorte corresponde indicar las medidas que mejor conduzcan a su fácil recaudación.

2.º) Sobre ocupación de terrenos públicos en la margen derecha del Río Negro, debe pedirse mayores datos al Gobernador de la Patagonia acerca de la ubicación y extensión de dichos terrenos, si son de labranza o pastoreo, así como acerca de los títulos con que los poseen los actuales ocupantes.

En presencia de estos datos, será la oportunidad de decidir si los expresados terrenos han de ser medidos por Ingenieros Nacionales, a fin de solicitar del Congreso su enajenación.

3.º) En cuanto a lo que aquí se llama extradición de criminales, he manifestado en otra oportunidad que la entrega de dichos criminales entre las autoridades nacionales y las autoridades provinciales y entre las autoridades de Provincia entre sí, es perfecta y estrictamente obligatoria, sin que ninguno tenga derecho a traer a discusión o de revistar el título con que la otra la pide.

La negativa del Juzgado de Paz de Patagones, sólo puede explicarse por el olvido o falta de conocimiento de estos principios elementales y no es posible dudar que a la simple requisición del Señor Gobernador de la Patagonia, habría cesado todo motivo de discusión o de desinteligencia. — Diciembre 10 de 1879.

No hay disposición alguna que faculte a los Cónsules de la República a otorgar poderes en el extranjero que hayan de producir efectos en el país.

Los poderes que se otorguen fuera del país para producir efectos en el nuestro deben ajustarse a las leyes del lugar en que son celebrados.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, — consulta si los Cónsules Argentinos en el exterior tienen facultad para otorgar poderes

Señor Ministro:

No conozco disposición alguna que faculte a los Cónsules de la República en el extranjero a otorgar poderes que hayan de surtir efecto entre nosotros.

La regla general por todos admitidas, es que la forma y la substancias de los actos ajustados fuera del país deben regirse por las leyes vigentes en el lugar donde han sido celebrados.

Los poderes que se otorguen en el extranjero para surtir sus efectos entre nosotros, deben ser pues ajustados a las leyes del país donde fueren extendidos. — Enero 4 de 1880.

Tomo 6, pág. 79 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se acuerde el «pase» a una Bula Pontificia instituyendo Obispo en la Pcia. de Córdoba, elección que se ha llevado a cabo de conformidad a lo prescripto por la Constitución y leyes de la Nación, debiendo observarse solamente, las cláusulas según las cuales considera la Santa Sede que hace los nombramientos de «motu proprio» y asimismo la fórmula del juramento en que se prescinde del que debe prestarse de manera preferente a la Constitución y leyes del País.

Bulas instituyendo Obispo de la Diócesis de Córdoba al R. P. Fray Mamerto Esquiú

Suprema Corte:

El R. P. Esquiú fué elegido por el Senado de la Nación para el Obispado de Córdoba, y presentado por el Presidente de la República a la Santa Sede para la institución canónica.

La Bula de institución no hace mérito de esta circunstancia esencial, y por el contrario, dice S. S. que *hace el nombramiento motu proprio sin ser para ello por nadie requerido*. No obstante esto, puesto que la verdad es que el Obispo electo fué presentado a S. S. con sujeción a lo que la Constitución y las Leyes de la Nación prescriben, no hay inconveniente alguno en que se acuerde a la expresada Bula el *pase* que se solicita.

En esta misma Bula se dice que *ha mucho tiempo S. S. se ha reservado el derecho de hacer la provisión de los Obispos vacantes así como la facultad de una nueva limitación de la Diócesis de Córdoba para hacerla al arbitrio de la Sede Apostólica*.

Estas reservas están en abierta y manifiesta oposición a las prerrogativas conquistadas de mucho tiempo atrás por la autoridad Civil y que nuestra Constitución consagra en los términos más explícitos y no es posible dejarlas pasar sin la observación y protesta correspondientes, para presentarlas oportunamente a S. S.

Debe también observarse que la fórmula del juramento que la última bula prescribe, prescinde y parece desligar al Sr. Obispo electo de la obediencia que a la Constitución y a las leyes de la Nación debe prestar preferentemente.

Sobre este particular debe igualmente hacerse la reserva correspondiente.

Con lo expuesto no hay inconveniente alguno en acordar el *pase* a las bulas presentadas. — Febrero 12 de 1880.

Departamento de Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 2 de 1880.

- I. — Corresponde que en el Protocolo Alvarez - Decoud, entre nuestro Gobierno y el Paraguay, se eliminen las cláusulas referentes a la expropiación por cuanto, el poder de apropiar al servicio público los bienes existentes dentro del territorio de una Nación, mediante justa indemnización, es un atributo de la Soberanía y no es ni puede ser materia de estipulaciones internacionales.
- II. — Considérase irregular el hecho de que el Gobierno Paraguayo pretenda desconocer el Protocolo de referencia por no tener la sanción legislativa que sus leyes internas exigen, ya que en su parte sustancial se viene cumpliendo desde años atrás.

Reclamo de los ciudadanos argentinos Islas y Benítez contra el Gobierno del Paraguay por expropiación de un terreno

Señor Ministro:

No encuentro en estos antecedentes razón alguna que autorice la intervención que pide el Señor Islas.

Según su misma exposición, el Gobierno del Paraguay ha resuelto expropiar un terreno de su propiedad; y no habiéndose podido ponerse de acuerdo acerca del precio, los Tribunales han ordenado el nombramiento de peritos.

El Señor Islas entiende que esta resolución es contraria al artículo 10 del tratado vigente entre ambas Repúblicas, *que prohíbe la expropiación sin previo ajuste con el propietario.*

¿Pero si el Señor Islas y el Gobierno del Paraguay no han podido ponerse de acuerdo sobre el precio qué otra cosa hay que hacer sino estimar la cosa por peritos? De otra manera la expropiación sería imposible, pues ni el Gobierno aceptaría el precio del Señor Islas, ni éste el del Gobierno.

El procedimiento seguido por las autoridades del Paraguay en el presente caso, está perfectamente de acuerdo con el que prescribe nuestras leyes, y es el mismo que se sigue en todas las naciones civilizadas.

No veo por consiguiente razón alguna que pudiera justificar el apoyo que el Señor Islas reclama, y que sólo puede acordarse en caso de una notoria y flagrante injusticia. — Febrero 16 de 1880.

Señor Ministro:

Después de haberme expedido en una solicitud del Señor Islas respecto a este mismo asunto, vienen estos nuevos antecedentes a mi despacho.

De ello resulta que el Sr. Doctor Benítez es perjudicado notablemente en sus intereses y que al parecer tiene muy fundados motivos de quejarse de los procedimientos del Gobierno del Paraguay.

Si, en efecto, ese Gobierno, según se dice, retuvo en su poder, por un largo número de años una propiedad del Señor Benítez sin pagarle arrendamiento es esto poco menos que un verdadero despojo.

No lo es menos que pretenda excluir en la expropiación los edificios que los mismos Tribunales de aquella República han declarado pertenecer al Dr. Benítez, según de su exposición resulta.

Por todo esto pienso que sin recurrir aún a los medios extremos admitidos por el derecho de gentes en los casos de una positiva y notoria denegación de justicia, ordene V. E. al Sr. Ministro Argentino en el Paraguay, interponga su acción oficiosa en apoyo de la gestión del referido Dr. Benítez. — Marzo 16 de 1880.

Señor Ministro:

Las estipulaciones del protocolo Alvarez-Decoud fueron cumplidas en la parte que, paréceme principal, es decir, en la que se refiere a la entrega del terreno propiedad del Señor Dr. Benítez con los almacenes construídos sobre él.

Queda aún pendiente la cláusula relativa a la parte del terreno destinado al tránsito público.

Sobre este particular fué convenido que el *quantum* que el Gobierno del Paraguay debía abonar, sería estimado por una comisión mixta, la que decidiría a la vez acerca de los derechos que el mismo Gobierno entendía tener sobre la mitad del terreno en cuestión. Se estipuló por último, que el Gobierno Paraguayo podría ordenar la expropiación, sin que el Dr. Benítez pudiera oponer óbice alguno, ni solicitar la protección diplomática.

Al requerir nuevamente el cumplimiento de estas estipulaciones, el Señor Ministro de la República en la Asunción observa que, al mismo tiempo que el Señor Ministro de Relaciones Exteriores del

Paraguay manifiesta su mejor deseo, presenta ciertas dificultades, por cuanto dice, el protocolo Alvarez-Decoud no fué sometido al Congreso Paraguayo, y contiene, además, un cláusula, la referente a la expropiación, —que motivaría su rechazo, si lo fuera ahora.

El Señor García Merou pide con este motivo instrucciones a V. E.

Dice el Señor Ministro que ha sostenido la validez del protocolo, no obstante la falta de la sanción legislativa, fundándose en los peligros que ofrecería la injerencia de un poder extraño para que los actos internacionales revistiesen los requisitos exigidos, por sus leyes internas para su perfecta validez.

No cabe la menor duda de que habría notable irregularidad de parte del representante del Gobierno del Paraguay en el desconocimiento de un Convenio, que por tantos años se ha considerado válido, y se ha cumplido en su parte *sustancial*, y el Señor Ministro Argentino ha hecho bien en observarlo y en considerar en toda su fuerza el protocolo.

Sin embargo, puesto que el Señor Ministro del Paraguay manifiesta tan buena voluntad en ejecutar las cláusulas pendientes, paréceme que no habría conveniencia en una discusión sobre el punto de derecho, si por un temperamento conciliatorio se puede llegar al mismo resultado.

La cláusula referente a la expropiación es, sin disputa, innecesaria, y puede ser eliminada, sin que el derecho del Gobierno del Paraguay, por una parte, y del deber del propietario, por otra; acrezcan o disminuyan en lo más mínimo. El poder de apropiar al servicio público, bienes existentes dentro del territorio de una nación, mediante justa indemnización, no es necesario decirlo, —es un atributo de la soberanía, y no es, ni puede ser materia de estipulaciones internacionales.

Bajo este concepto la observación del Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay es exacta, y puesto que es este el punto que más obsta a la terminación de las estipulaciones cumplidas, no veo por mi parte perjuicio o inconveniente alguno en que el Señor Ministro Argentino consienta en su eliminación, o de sobre él las explicaciones necesarias, toda vez que el Gobierno del Paraguay haga efectiva la buena voluntad que manifiesta, cumpliendo el protocolo en todo lo demás.

Si por parte del Gobierno del Paraguay se insistiera en la necesidad que la sanción legislativa, paréceme que sin abandonar la situación que el Señor García Merou ha asumido sobre el particular es bueno no olvidar que esa sanción sería siempre necesaria, en definitiva, llegado el caso de pedir los fonos con que hubiera de pagarse la indemnización por el uso del terreno, y el precio de la expropiación. — Julio 4 de 1889.

Tomo 6, pág. 149 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley llamada del «Estatuto», de diciembre 17 de 1853, que disponía la vigencia de las Ordenanzas de Méjico hasta tanto se sancionara el Código de Minería, ordenaba se abriera un registro de minas en la Oficina Central que la misma Ley creaba, en donde se anotarían las concesiones que se otorgasen, previo pago de las contribuciones que establecía. No habiendo tenido lugar la creación de dicha oficina y frente a los pedidos de concesión que se han presentado en territorios nacionales, corresponde que se encomiende al Departamento de Ingenieros el que lleve dicho Registro.

Los Señores Host, Rittersbacher, Medeiros y Schaeffer, — sobre denuncias de minas

Excmo. Señor:

No veo inconveniente en que V. E. conceda la adjudicación de las minas denunciadas en territorio nacional.

Por la Ley llamada del «Estatuto», de Diciembre 17 de 1853, se ordenó que: *«interin el Congreso dictara el Código de Minería, rigieran las Ordenanzas de Méjico»*. A ellas deberán, por consiguiente, ajustarse las concesiones solicitadas.

Disponía al mismo tiempo, la ya citada Ley, se abriera un registro de minas en la Oficina Central que creaba, bajo la denominación de Banco Nacional; que en dicho registro fueran anotadas las concesiones de minas que se hicieran; y finalmente, *que toda mina con laboreo o sin él, con beneficio o sin él, con tal que estuviere poseída, pagara al tiempo del registro la contribución anual de 20 pesos y sucesivamente en los tres primeros meses del año; en la inteligencia de que si no fuera pagada la anualidad expresa-*

da en el tiempo mencionado, se habría, por abandonada la propiedad de la mina y podría ser denunciada por otro.

No habiendo tenido lugar la instalación de aquella Oficina Central; y teniendo en vista que se han presentado diversas solicitudes de este género, en territorios nacionales, pareceme que convendrá encomendar al Departamento de Ingenieros, llevara el registro a que dejó hecho referencia, tanto para garantir la propiedad de los denunciantes, como la percepción de los derechos fiscales. — Marzo 3 de 1880.

Tomo 6, pág. 82 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde que el Departamento de Ingenieros proyecte un reglamento, acerca de la forma y oportunidad en que ha de darse la posesión a los compradores de tierras de la Nación.
- II. — Aunque es de interés público que las tierras sean pobladas cuanto antes, conviene esperar antes de darse la posesión, a que se termine la mensura de la correspondiente Sección, pudiendo luego otorgarse dicha posesión, por el mismo agrimensor que practicó la mensura.

Alfredo y Natalio Cernadas, solicitan la posesión de campos que han adquirido en los territorios nacionales

Señor Ministro:

Es fuera de toda duda que los Sres. Cernadas tienen perfecto derecho para ser amparados en la posesión del terreno que han comprado.

El Departamento hace notar empero, con este motivo, la falta de una medida general que reglamente esta materia. ¿Cuándo y por quién se dará la posesión? ¿Bastará que el comprador haya entregado la 1.^a cuota o habrá que esperar a que complete la última?

¿El mismo comprador se dará posesión a sí mismo, como han hecho los Sres. Cernadas?

Estos son, a mi juicio, los puntos principales a resolver.

Siendo el interés público que estos terrenos sean poblados cuanto antes; no se vé inconveniente en que los compradores tomaran

desde luego posesión. Para evitar dudas y cuestiones, parece, sin embargo, mas prudente esperar a que esté terminada la mensura de cada Sección, según lo indica el Departamento; y practicada la mensura, la más natural sería que la posesión fuera dada por el agrimensor que la practicó.

El Departamento de Ingenieros, mejor que ninguna otra repartición, está habilitado para apreciar lo que más convenga, y creo que debiera V. E. encomendarle presentara un proyecto sobre este particular. — Marzo 20 de 1880.

Ministerio de Hacienda. Resolución de Octubre 8 de 1880 que dispone: vuelva al interesado para que ocurra oportunamente ante quien corresponda, atento a que pende ante el Congreso un proyecto de ley sobre mensura, alinderación, adjudicación y entrega de tierras nacionales, en el cual se propone la creación de una Oficina de Tierras.

Tomo 6, pág. 78 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Por regla general, cuando un río divide territorios de distintas naciones o de diversas pertenencias, es el centro del canal del río, la línea que limita ambas propiedades, en consecuencia, las islas de un río corresponderán a una u otra jurisdicción, según estén ubicadas en una u otra mitad del canal.

El Gobernador de la Patagonia consulta a que jurisdicción corresponden las islas que del grado 5° hacia la boca del río se presentan en su cauce.

Señor Ministro:

Por regla general cuando un río divide territorios de distintas naciones o de diversas pertenencias, es el centro del canal la línea que limita una y otra propiedad.

Si no median circunstancias especiales, con la posesión, p. ej. que puedan modificar aquella regla general en el caso que motiva la consulta del Señor Gobernador de la Patagonia, el centro del canal del Río Negro, es, por consiguiente, el límite de aquel territorio; y las islas que se encuentran en el curso de dicho río, co-

responderán a una y otra jurisdicción, según estén ubicadas en una u otra mitad del mismo río». — Mayo 18 de 1880 .

Tomo 6, pág. 120 — Inf. de los Consaj. Leg. del P. E.

=====

n I. — Debe interpretarse en sentido amplio el art. 4.º del contrato de concesión al Ferrocarril Central Argentino que declara libre de toda contribución e impuestos por el término de cuarenta años la propiedad del F. C. y sus dependencias, y en consecuencia considerar comprendida en dicho beneficio, no solamente los terrenos que se destinan a los fines del art. 3.º de la ley, sino también las tierras que el art. 12 le da en propiedad a lo largo de la vía.

II. — Corresponde que el P. E. interponga sus oficios por ante los Gobiernos de Santa Fe y Córdoba, para que desistan éstos de exigir el pago de la contribución directa sobre las referidas tierras del art. 12, y si esto no diera resultado le queda aún a la empresa el correspondiente recurso ante la justicia federal.

El Representante del F. C. Central Argentino, — sobre pago de contribución directa exigido por los Gobiernos de Santa Fe y Córdoba.

Señor Ministro:

El Directorio de la Compañía Central Argentina de Tierras hace presente nuevamente a V. E. los inconvenientes con que tropieza para la población de las tierras que fueron cedidas a la empresa a uno y otro lado del camino.

Dice que la duda, a juicio de la Dirección, ha quedado subsistente con respecto al término de la Compañía formada por la población de las tierras, ha obstado a la aprobación de los estatutos y al funcionamiento de la misma Compañía.

Dice además, que la contribución directa que los Gobiernos de Santa Fe y Córdoba, pretenden cobrar por las tierras cedidas, es un obstáculo insuperable para su población.

Antes de ahora, el Directorio hizo presente que el término del contrato primitivo era insuficiente para que la Compañía llenara su cometido y pidió su ampliación.

Vistas las dificultades que han obstado hasta ahora para la entrega de las tierras, y los inconvenientes que surgían de las agitaciones porque ha pasado el país, y la misma mala calidad de los terrenos, era visible que el término del contrato era notoriamente estrecho para que la Compañía pudiera dejar poblados todos los terrenos cedidos y llegara así el término de su misión.

V. E. así lo comprendió. En vista, empero, de las disposiciones del Código de Comercio, que no permite vinculaciones, ni contrato y obligaciones perpetuas y sin tiempo definitivo, V. E. autorizó la inscripción en los Estatutos de una cláusula así concebida *«la Compañía podía ser prorrogada con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio»*.

Al registrar los estatutos de la Sociedad en Londres, dice ahora el Directorio que se ha tropezado con la dificultad de que la Ley Inglesa exige algo más preciso y perentorio, no bastando la simple facultad para extensión del término, sino una declaración más explícita; y pide en consecuencia que donde dice el decreto de V. E. *podrá ser prorrogado* se ponga *será prorrogado con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio*.

No veo inconveniente en que V. E. acepte esta modificación, pues que la extensión del término es notoriamente indispensable, y fué la mente de V. E. autorizarla desde luego.

Pero, como la prorrogación no puede hacerse ipso facto, sin la requisición de parte interesada, al aceptar la modificación propuesta, deberá serlo en estos términos: *será prorrogado con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio siempre que la Compañía lo solicite*.

La otra dificultad con que la Compañía tropieza, la contribución directa que exigen los Gobiernos de Córdoba y Santa Fe, es indudablemente seria y merece una consideración especial de parte de V. E. cuando por todas partes los Gobiernos de Provincia, y el mismo Gobierno de la Nación, se esfuerzan en colonizar los terrenos desiertos, exonerando a los pobladores de las contribuciones fiscales y acordándoles franquicias de todo género, las pretensiones de los expresados Gobiernos de Córdoba y Santa Fe de que se queja el Directorio, ponen a las tierras cedidas a la empresa en condiciones por demás desfavorables.

Pienso en oposición al Departamento de Ingenieros que la disposición del art. 4.º comprende también las tierras cedidas a la Empresa.

Declaró este art. *libre de toda contribución e impuestos por el término de cuarenta años la propiedad del F. C. y sus dependencias.*

El Departamento opina que por *dependencias* sólo debe entenderse las estaciones, depósitos, almacenes, muebles, etc., de que hace mención especial el art. 3.º.

No encuentro, ni aún en el texto de la ley, nada que autorice esta interpretación restrictiva. Por el contrato, ella está en abierta oposición con el espíritu de liberalidad con que fué dictada.

Desde el primer momento se juzgó que las dos leguas cedidas a uno y otro lado, eran parte integrante del camino. Y a tal punto era esto cierto que, sin esta concesión, no hubiera sido posible levantar el capital necesario, y no hubiera existido en realidad tal camino; se creyó, y el tiempo ha demostrado que con toda razón, que sin el alimento que debiera originar el cultivo de las tierras cedidas, la empresa solo tendría una existencia precaria y dependiente de la garantía, que era precisamente lo que se tenía en vista evitar, en bien de la Nación y de la empresa misma.

Las tierras cedidas no son por consiguiente, una mera dependencia del camino, sino parte esencial e integrante del mismo, puesto que, sin su concesión, no se hubiera realizado. La disposición del art. 4.º ya citado es entonces lógico y forzosamente aplicable a las tierras en cuestión.

Por otra parte la cesión hecha a la empresa y la liberalidad de los Gobiernos de Provincia, serían ilusorias y de escasísimo valor si dichos Gobiernos conservaran el derecho de gravar a su arbitrio las tierras cedidas aprovechando la importancia, que adquirirían por la construcción del mismo camino.

Es, por tanto mi parecer que la interpretación que la empresa dá al art. en cuestión es ajustada al texto y al espíritu de la ley. Creo que bastará la interposición oficiosa de V. E. para con los Gobiernos de Santa Fe y Córdoba, para que desistan de exigir a la empresa los impuestos con que dificultan y entorpecen la población de las tierras y a los que, como dejo expuesto, en mi opinión, no tienen derecho alguno.

Si la interposición de V. E. fuera ineficaz, la empresa tiene todavía expedito su recurso ante la justicia federal, cuya misión es interpretar y hacer que las leyes se cumplan en las relaciones de los particulares con los Gobiernos de Provincia. — Septiembre 2 de 1880.

Tomo 6, pág. 52 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La Ley de elecciones no prevé expresamente la sanción que correspondería a un Juez de Sección, que se excusa —invocando razones de conciencia— a concurrir al sorteo para la formación de las mesas receptoras de votos. Si constituye esta excusación una infracción a la ley electoral —lo que es de difícil apreciación— caería bajo la sanción que en términos generales establece el art. 69 de la ley citada.
- II. — Habiendo sido suplida la excusación del Juez, no ha habido inconveniente ni perjuicio alguno, por lo que corresponde que, sin ulterioridad alguna, se dé por terminado el incidente.

El Comisionado Nacional en Corrientes, — da cuenta que el Juez Federal de la misma sección se niega a concurrir al sorteo para la formación de las mesas receptoras de votos, correspondientes a la elección de Diputados al Congreso.

Señor Ministro:

El Señor Comisionado Nacional en la Provincia de Corrientes pone en conocimiento de V. E. que el Sr. Juez Federal de aquella Sección se ha excusado de asistir al sorteo para la formación de las mesas receptoras, *por motivos que atañen a su conciencia.*

El Sr. Juez no dice cuales son estos motivos; y la conciencia de cada uno es un sagrado en que no sólo es difícil sino prohibido penetrar.

En todo caso y en el más desfavorable, resultaría que el Sr. Juez se había excusado del cumplimiento de un deber sin motivos justificados. La Ley de elecciones prevé el caso de que los ciudadanos que han de formar las mesas, los Jueces de Paz que han de

entregar las urnas, los electores para Presidente, etc., no concurren, y determina las penas en que incurren.

Pero nada dice con respecto a los Jueces de Sección.

Si la excusación del Sr. Juez de Sección hubiera de reputarse como una infracción a la ley de elecciones, y no podría considerarse de otro modo, caería, entonces, bajo la penalidad general del art. 69 *que corrige las infracciones que no tengan una pena especial ni estén previstas por las leyes generales con multas pecuniarias que no bajarán de \$ 20 ni pasarán de \$ 500.*

Quedaría todavía la dificultad de determinar si la excusación en cuestión es una infracción de la ley electoral, y aún más, que Juez habría de decidirlo.

La excusación del Señor Juez fué luego suplida, con arreglo a lo dispuesto por la ley y no ha producido inconveniente ni perjuicio de ningún género al servicio público. Paréceme por ello y por lo que dejó expuesto, que V. E. no debe dar ulterioridad alguna a este incidente. — Septiembre 30 de 1880.

Departamento de Justicia. Se adopta como resolución lo dictaminado. — Octubre 22 de 1880.

Tomo 6, pág. 126 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se acceda al pedido que formula el Gobierno de La Rioja para que el P. E. interponga sus buenos oficios ante el Gobierno de San Luis a fin de que entre ambas Provincias se mantenga el «statu quo» por cuestiones de límites hasta tanto el Congreso los resuelva.

El Gobernador de la Provincia de la Rioja pide se mantenga el «statu-quo» en la cuestión de límites con la Provincia de San Luis.

Señor Ministro:

El Gobierno de la Rioja, solicita de V. E. interponga sus buenos oficios para con el Gobierno de San Luis, a fin de conservar el *statu quo* en las cuestiones de límites pendientes entre una y otra Provincia.

Siendo atribución del Congreso fijar definitivamente los límites de las Provincias, es indudable que toda cuestión que se suscite al respecto, a más de enojosa es prematura. El temperamento que el Gobierno de la Rioja propone es sin duda, el más prudente; y puesto que puede contribuir a conservar y estrechar las buenas relaciones entre Provincias hermanas pareceme que debe V. E. apoyarlo dirigiéndose al Gobierno de San Luis; según lo solicita.

Septiembre 30 de 1880.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 8 de 1880.

Tomo 6, pág. 121 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E

=====

- I. — Los matrimonios entre protestantes celebrados de conformidad con el ritual de la religión a que pertenecen los contrayentes y de conformidad con las leyes del Código Civil, están equiparados en sus efectos a los celebrados entre católicos (art. 25 del Cód. Civil).
- II. — «Las leyes del Código» de que habla el art. citado, se refieren a los impedimentos que nacen del parentesco, del consentimiento paterno, etc., y nada dicen acerca de la autorización previa a la celebración del acto religioso, por parte de las autoridades civiles, que las antiguas leyes españolas prescribían.
- III. — El requisito de la autorización previa, por parte de las autoridades civiles, quedó abolido para los matrimonios entre católico y protestante por Decreto de 30 de Junio de 1870 —(que declaró no podía haber impedimento para estos matrimonios que derivase de la ley civil)— y por extensión este Decreto debe considerarse también aplicable a los matrimonios entre protestantes.

Casamientos de protestantes, — consulta de S. S. el Señor Encargado de Negocios de Inglaterra.

Señor Ministro:

El Señor Ministro de S. M. B. desea ser informado acerca de si es necesaria la licencia de las autoridades provinciales para que

sea válido un matrimonio entre protestantes celebrado en su propia Iglesia; y si, a la vez, la falta de esta licencia, podría invalidar dichos matrimonios.

Según nuestro Código, *el matrimonio celebrado entre personas que no pertenecen a la Iglesia Católica, produce en la República todos los efectos civiles del matrimonio válido, si fuese celebrado en conformidad a las leyes del mismo Código y según las leyes y ritos de la Iglesia a que los contratantes pertenecen.* Art. 25 Cap. V. Libro 1.º. «Estos matrimonios quedan así equiparados en cuanto a los efectos civiles, a los celebrados entre católicos.

Las leyes del Código a que este artículo se refiere, son las que dicen relación a los impedimentos que nacen del parentesco, al consentimiento de los padres, etc., etc.

Ninguna exige como un requisito necesario la licencia de la Autoridad Civil Nacional ni menos Provincial. Esta licencia no es necesaria en los matrimonios entre Católicos y no se vé porqué razón habría de serlo en los casamientos entre protestantes. En uno y en otro caso, basta que se observen *las leyes y los ritos de las Iglesias respectivas*.

Aún más; por el decreto de 30 de Junio de 1870, declaró V.E. que con arreglo a los principios de libertad consagrados por nuestra Constitución, no podría exigir para el matrimonio entre un Católico y un Cristiano de las sectas disidentes impedimento nacido de la Ley Civil; y quedó desde entonces abolida la necesidad de la licencia que por las antiguas leyes españolas se exigía. Si en este caso, para el casamiento de un Católico y un disidente, no es necesaria la licencia de la Autoridad Civil, no se alcanza por qué razón habría de serlo para el matrimonio de los protestantes entre sí.

Acaso dá lugar a las dudas suscitadas sobre este particular la obligación que tienen los Ministros de las Iglesias Protestantes de comunicar a la Autoridad Civil, —a las Municipalidades,— una relación de los matrimonios que autorizacen. Pero esta comunicación tiene sólo por objeto regularizar el estado civil de las personas. La omisión podría importar, a lo sumo, ciertas responsabilidades para los ministros autorizantes, pero en ningún caso sería bastante a invalidar el mismo matrimonio.

Paréceme que lo expuesto bastará a llenar los deseos del Sr. Ministro de S. M. B. — Octubre 10 de 1880.

Resolución de Octubre 20 de 1880 que dispone se pase en copia al Señor Ministro de S. M. Británica.

Tomo 6, pág. 105 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde que se acepten las facultades de Oficial de estado civil que la Confederación Suiza ha otorgado a sus Cónsules, en virtud de las cuales pueden éstos constatar los nacimientos, defunciones y autorizar matrimonios de los suizos residentes en la República, en la inteligencia de que tales actos sólo serán válidos y surtirán efectos civiles en el país de origen.
- II. — Las atribuciones de los Cónsules, si no median convenciones especiales, están regidas por las reglas y principios del Derecho Internacional.

Matrimonios entre Suizos, — Nacimientos y fallecimientos

Señor Ministro:

El Señor Cónsul de la Confederación Suiza pone en conocimiento de V. E. que el Consejo Federal de la Confederación Suiza ha agregado a sus atribuciones las de *Oficial del estado Civil*; y que en consecuencia, le ha sido encomendado proceder a la *constatación de los nacimientos y fallecimientos, y a autorizar los matrimonios de los ciudadanos Suizos* residentes en esta República.

Las atribuciones de los Cónsules, cuando no median convenciones especiales, están regidas por las reglas y principios del derecho internacional. Los matrimonios que los Cónsules autorizan, los testimonios que expidieren serán válidos para surtir efectos civiles en el país en que fueren autorizados o expedidos, en cuanto estén conformes con las leyes del mismo país.

Tal es el alcance de las atribuciones conferidas nuevamente al Señor Cónsul de la Confederación Suiza, y el que el mismo les dá, sin duda alguna. En esta inteligencia no veo inconveniente en

que V. E. acepte la extensión de atribuciones que motiva su comunicación. — Octubre 19 de 1880.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad al dictamen. — Octubre 23 de 1880.

Tomo 6, pág. 116 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La patente por 15 años, sólo debe acordarse para aquellos inventos de un mérito excepcional, ya sea por la novedad en los medios para producir ciertos resultados o por la importancia de esos mismos resultados.

Don Ernesto Cetti, solicita patente de invención por el término de 15 años por una **Volanta - Máquina**

Señor Ministro:

El máximo de la ley sólo se debe acordar a aquellos inventos de un mérito excepcional sea por la novedad en los medios para producir ciertos resultados, sea por la importancia en esos mismos resultados.

La patente que ahora se solicitaba no se encuentra en este caso pues no hay novedad en su originalidad en los medios, ni tampoco se dice si es siquiera posible apreciar cuales serán sus resultados en la práctica.

Pienso por esto que debe limitarse el término a diez años.
Noviembre 24 de 1880.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Diciembre 10 de 1880.

Tomo 6, pág. 133. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que se haga lugar al pedido de posesión sobre una isla, por cuanto sobre la misma ejerce jurisdicción el Gobierno de Entre Ríos, y es lógico respetar esta posesión hasta tanto el Congreso Nacional fije los límites definitivos, máxime si como es de creer, la decisión del Congreso será la de dejar las islas bajo la jurisdicción de las Provincias a que están más próximas.

Don Máximo Bello solicita la posesión de una isla en la Provincia de Entre Ríos

Señor Ministro:

En una solicitud de igual naturaleza, dije a V. E. lo siguiente, que ahora reproduzco: «La Provincia de Buenos Aires, según es «bien notorio ejerce jurisdicción sobre las Islas que se encuentran «subiendo el Paraná de las Palmas desde el Río de la Plata hasta «San Nicolás de los Arroyos. En estas Islas vive una población numerosa, que depende inmediatamente de las autoridades de los «partidos que con ellas lindan, San Fernando, Zárate, San Pedro «y San Nicolás».

«El Gobierno de la citada Provincia de Buenos Aires ha legislado de tiempo atrás sobre estas Islas; prohibiendo el corte de «maderas en ciertas estaciones, estableciendo derechos sobre la explotación de dichas maderas, etc., y tengo entendido que pende ante «la Legislatura Provincial un proyecto para la enagenación de sus «tierras».

«A juzgar por la consulta del Capitán del Puerto de Gualeguaychú el Gobierno de Entre Ríos ejerce igual jurisdicción con respecto a las Islas del Uruguay».

«Mientras no resuelva el Congreso la cuestión de límites que «la Constitución ha dejado a su exclusiva competencia —parecíame «lo más natural y más prudente respetar la posesión actual. —Me «inclino desde ahora a creer que ha de ser la decisión del Congreso «dejar las Islas en cuestión bajo la jurisdicción de las Provincias «a que están más próximas, pues, no tienen elementos para constituir por sí solas Provincias independientes, ni aún siquiera territorios de alguna importancia».

Consecuente con este parecer, pienso que V. E. no debe hacer lugar a la solicitud del Señor Bello. — Enero 3 de 1881.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Enero 25 de 1881.

Tomo 6, pág. 130 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

« Corresponde que el P. E. se dirija al Gobierno de Córdoba, reclamando contra la resolución dictada por el Departamento Topográfico de dicha Provincia que no reconoce los diplomas de varios agrimensores, expedidos por la Universidad Nacional, lo que constituye una verdadera anomalía, por cuanto los títulos universitarios se otorgan, de conformidad a los «planes de instrucción general y universitaria» que por precepto constitucional el Congreso dictó, teniendo por ello alcance nacional, y deben en consecuencia ser admitidos por las Provincias cada vez que sus titulares se presenten para el ejercicio de sus respectivas profesiones.

Varios Agrimensores, — sobre revalidación de títulos

Señor Ministro:

Siendo una de las atribuciones del Congreso *dictar planes de instrucción general y universitaria*; determinar los estudios y las pruebas de suficiencia necesarias para el ejercicio de las profesiones liberales, —es una deducción lógica del ejercicio de esta facultad. De este antecedente se desprende, sin violencia, que habría visible anomalía en que los abogados, médicos, agrimensores, etc., que hubiesen seguido en las Universidades Nacionales *aquellos planes de instrucción general* y rendido las pruebas requeridas, no fuesen admitidos en las Provincias a ejercer sus respectivas profesiones.

Con frecuencia se ha presentado el caso que motiva la nota de los Agrimensores recibidos en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Córdoba, —con respecto a abogados recibidos en la misma Universidad, que venían a ejercer su profesión en esta Provincia y vice versa.

Las conveniencias recíprocas y los sentimientos de fraternidad consiguientes en miembros de una misma facultad, han llenado el vacío de una sanción legislativa.

El Reglamento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de esta Provincia registra las disposiciones siguientes:

«Podrán ser revalidados por la Facultad los diplomas de los Abogados recibidos en las Provincias de la República, si le han sido expedidos por un Tribunal Competente de Letrados y hubiesen previamente acreditado ante él haber hecho estudios de Derechos en aulas aprobadas y cursado procedimientos o practicado debidamente».

«Respecto a los certificados de estudios de las Universidades de la República y Colegios Nacionales, sólo serán admitidos los que acrediten haber completado el plan general de estudios de dichas Casas».

No habría razón para considerar en peor condición a los Agrimensores recibidos en la Universidad de Córdoba, y no puede ponerse en duda por un momento que si ocurriesen a la Universidad de esta Provincia, o cualquiera otra Corporación Científica de las demás Provincias a revalidar sus Diplomas, serían admitidos sin dificultad alguna a ejercer libremente sus profesiones como tales Agrimensores.

Paréceme que por ahora es este el temperamento más corto y más sencillo y que bastará que V. E. se dirija al Gobierno de Córdoba para hacer cesar la negativa de que con toda razón se quejan los Agrimensores que firman la comunicación. — Enero 15 de 1881.

Departamento de Instrucción Pública. Se adopta como resolución lo dictaminado. Febrero 25 de 1881.

Tomo 6, pág. 144 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que se acuerde la autorización que se solicita para la construcción de una plaza de toros, por cuanto este espectáculo fué prohibido: 1.º durante el Directorio del General Pueyrredón; 2.º en 4 de enero de 1822, siendo Gobernador de la Pcia. el General D. Martín Rodríguez y 3.º por Ley de la Legislatura Provincial de Agosto 1 de 1856.

Estas prohibiciones son aplicables al caso ya que las dos primeras revisten carácter nacional y la última se encuentra en vigencia dentro del Municipio, que al federalizarse conservó su propia legislación, que estará en vigor, mientras no se la deroga expresamente.

El Gerente de la Sociedad «Tauromaquia Española» sobre circo de caballos y lidia de toros

Señor Ministro:

«La sociedad de Tauromaquia Española ha obrado con más que vulgar prudencia al no comprometer sus capitales en la construcción de una plaza de toros, sin ocurrir previamente a V. E.

La sociedad incurre en un gravísimo error, que hubiera podido costarle caro, cuando asevera que, no oponiéndose las leyes Nacionales, hubiera estado en su perfecto derecho para organizar corridas de toros.

Durante el Directorio del General Pueyrredón estas corridas fueron prohibidas; y aún más la lujosa y sólida construcción destinada a este objeto, fué demolida con aplauso de toda esta población.

En Enero 4 de 1822, siendo Gobernador de esta provincia el General D. Martín Rodríguez, fueron prohibidos estos espectáculos sangrientos. Y finalmente la Legislatura de la misma Provincia para poner término a las tentativas que de tiempo en tiempo se han hecho para renovarlas, las prohibió absoluta y definitivamente, por la ley de Agosto 1.º de 1856.

Las dos primeras disposiciones, y especialmente la primera, tienen carácter Nacional, y la última, debe considerarse vigente aún en el Municipio de esta ciudad; pues que, si él ha sido cedido a la Nación, debe racionalmente entenderse que ha pasado a su jurisdicción con su legislación propia, que debe considerarse en todo su vigor, mientras no sea derogada.

Si la prohibición no existiera en la ley escrita, ella existe Señor, en la conciencia de toda esta Sociedad, que se ha sentido alarmada

y aún ofendida al solo anuncio de que espectáculos semejantes, pudieran autorizarse entre nosotros.

La uniformidad con que los órganos de publicidad que representan la opinión pública en sus diversas manifestaciones, han levantado su voz de condenación y de alarma, es una protesta elocuente, que no es posible dejar de tener en cuenta.

Y por último esta prohibición existe en la conciencia universal de todas las naciones civilizadas que han condenado uniformemente estos espectáculos como contrarios a las buenas costumbres, con una excepción única, cuya sola singularidad bastaría para que no pudiera indicarse como ejemplo.

Después de los antecedentes que dejo recordados, pienso que es atribución del Congreso acordar o negar la autorización que se solicita.

Pienso más, que consultaría V. E. el decoro y la cultura de este pueblo significando desde ahora a la Sociedad Tauromaquia Española, que, si ocurriese al P. L. lejos de contar con la cooperación de parte de V. E. no debe esperar sino su oposición más decidida». — Febrero 18 de 1881.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Marzo 2 de 1881.

Tomo 6, pág. 139 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La incorporación del Municipio de la Capital a la Nación, lo ha sido con sus derechos y obligaciones y su propia legislación; en virtud de ello, y prohibiendo una disposición de la Constitución Provincial el juego de la lotería, no puede éste permitirse, sin previamente dejar sin efecto esta disposición.
- II. — Debe considerarse al juego de lotería como de todo punto de vista inconveniente y prohibirse terminantemente; mas habiéndose convertido la ciudad de Buenos Aires en el centro principal del expendio de billetes provinciales y extranjeros y no siendo posible llegar a convenciones internacionales ni a acuerdos con las Provincias para evitarlo, y atento a la complicidad moral de todos, que haría inocua una prohibición legal, conviene que él sea permitido, reglamentándose lo convenientemente.

La Municipalidad de la Capital solicita autorización para establecer una lotería de beneficencia

Señor Ministro:

Con motivo de una solicitud para el establecimiento de una plaza de toros, he tenido ocasión de manifestar a V. E. que en mi entender, al ser incorporado el Municipio de la Capital a la Nación, lo ha sido con sus derechos y obligaciones y su legislación propia.

Pienso hoy como entonces, que el juego de la lotería no puede ser permitido, mientras una sanción legislativa no deje sin efecto la disposición de la Provincia que la prohíbe.

Ahora en cuanto al juego de la lotería en sí, paréceme que no puede haber dos opiniones. La conciencia universal de los pueblos civilizados lo ha condenado. Estimulando la pasión del juego, innata en el hombre, devora los ahorros, impide la formación de los capitales, y destruye frecuentemente los ya formados. Por extraño que parezca, principiando por un número, en seguida una decena; después por una y más libretas, muchas fortunas han desaparecido en este abismo.

La esperanza de llegar repentinamente a la fortuna distrae a los hombres del trabajo, e induce a muchos a aventurar no sólo lo propio, sino también lo ajeno. Un eminente economista llega hasta condenar este juego, que muchas naciones han adoptado a veces como un recurso financiero, en estas enérgicas palabras. «*Los Le-*

*gisladores que votan un impuesto semejante, votan cierto número de robos y suicidios todos los años. No hay pretexto alguno, de gas-
to que autorice la provocación al crimen.*

Desde los tiempos más remotos la lotería ha sido permitida en todas las naciones sin excepción alguna; y en todas se han hecho sentir sus efectos perniciosos. Los grandes abusos a que daba lugar han obligado a suprimirla muchas veces, y siempre la supresión ha sido acompañada de un aumento visible en las cajas de ahorros. En la actualidad está prohibida en Francia, por la ley de 21 de Abril de 1886, y autorizada en España, Italia, Alemania y muchas otras naciones. No es necesario decir que las naciones vecinas, el Brasil y la República Oriental, y muchas Provincias Argentinas, se empeñan a porfía en colocar los billetes de sus loterías en esta ciudad.

¿Será éste uno de aquellos males que no es posible suprimir, y que deben tolerarse para evitar mayores?

Notables pensadores lo creen así. Una reciente acreditada publicación científica se propone demostrar que de todos los juegos del azar, es el de la lotería el menos pernicioso; y llega aún a colocarlo entre los remedios para combatir la funesta pasión por el juego.

Entre nosotros hay consideraciones especiales, que hace valer la H. Corporación Municipal, de que no es posible prescindir.

Nada aprovecha la prohibición si ha de continuar esta Capital siendo el mercado principal para el expendio de las loterías extranjeras.

Si fuera posible llegar a una convención internacional con las naciones vecinas y a un acuerdo con las Provincias de la República que tienen autorizado este juego, mi opinión sería decidida por una prohibición absoluta. Pensaría entonces con Say, que ninguna necesidad, ningún objeto, por sagrado que fuera, sería bastante a autorizar el estímulo a la holgazanería y al vicio.

En el estado actual de las cosas; dada la complicidad moral de todos, que impide hacer efectiva la prohibición de la ley, me inclino a creer que hay conveniencia en optar por el menor de dos males, muy especialmente, si su reglamentación consulta que el capital no se pierde definitivamente, y si fuera posible, que produjera algún interés, aunque mínimo. — Abril 1.º de 1881.

Departamento del Interior. Resolución de Mayo 19 de 1881 que expresa debe reservarse la causa por cuanto se halla pendiente ante el Congreso un proyecto de ley sobre Gobierno Municipal en el cual se consigna un artículo sobre la lotería nacional.

Tomo 6, pág. 161 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se otorgue una marca si se distingue de otra por el color de la etiqueta y la colocación de los nombres de los fabricantes, aunque ambas lleven impresas un mismo dibujo, siempre que las circunstancias enunciadas sean tomadas como partes integrantes de la marca.

Los Sres. Delhome Frères representados por los Sres. Marini y Cia. solicitan el registro de su marca de comercio para distinguir Coñac de su elaboración.

Señor Ministro:

«Los Señores Marini y Compañía hacen valer en su favor precedentes que no pueden dejar de tenerse en cuenta. Si bajo la marca o sea bajo la figura de un caballo, varios comerciantes introducen coñac de tiempo atrás en esta plaza, no había razón para conceder esta marca a unos y negarla a otros. Esta es la doctrina que he sostenido en casos recientes. Para el mejor esclarecimiento de los hechos, y sería conveniente se oyera por un breve término a los Señores Lulhé y Neveur, representantes de Jules Bellot y Compañía, con este objeto, sería lo más expeditivo pasar estas actuaciones al Departamento de Ingenieros y que en seguida vuelvan a mi despacho». Abril 19 de 1881.

Señor Ministro:

Los Señores Marini y Compañía fundan la diferencia que dicen existir entre la marca de los Señores Bellot y Compañía y la que han presentado ellos, no sólo en la diversidad del color y de actitud de los caballos de una y otra marca, sino también, en el color de la etiqueta y la manera como está colocado el nombre de los fabricantes «Delhome Frères», en forma de arco sobre el mismo caballo. Quiere esto decir, que ellos aceptan como parte integrante

de la marca que solicitan el color de la etiqueta y la colocación de las palabras que forman el conjunto. En esta inteligencia el peligro de confusión desaparece y no es bastante a autorizar la denegación del Departamento de Ingenieros. Pienso, por lo tanto, que debe V. E. acordar el registro de la marca que solicitan los expresados Señores Marini y Compañía bajo el supuesto de que formará parte integrante de ella el color de la etiqueta y la colocación de los nombres de los fabricantes. — Octubre 3 de 1881.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Octubre 11 de 1881.

Tomo 6, pág. 170 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El art. 5 de la Ley de Patentes fija en 10 años el término máximo para la revalidación de patentes extranjeras, sin que ello implique que no pueda concederse la revalida por un término menor, por cuanto al expresar el art. 6 de dicha ley que «se pagará un impuesto proporcional al tiempo por que se conceda», claramente se deduce la facultad de otorgarse por un tiempo menor.

Los Sres. E. P. Mathey a nombre de los Sres. Hamon, de París solicitan patente de invención por cinco años por caños de plomo forrados en estaño.

Excmo. Señor:

Los Señores Mathey a nombre de los Señores Hamon, de París, solicitan la revalidación de una patente concedida en 1867 y cuyo término expira en 1882.

Fundándose en esta circunstancia el Departamento de Ingenieros la niega.

Dice que el art. 5.º de la ley de la materia fija en 10 años el término para la revalidación de las patentes extranjeras; y de esto deduce que no puede ser revalidada una que caduca en poco más de año y medio.

El artículo citado fija, es cierto, como máximum el término de 10 años; pero no dice que no puede limitarse a menos. Por el contrario, al disponer el siguiente que es la revalidación de una patente extranjera *pagará un impuesto proporcional al tiempo por que*

se conceda dá claramente a entender que la revalidación puede hacerse por 9, 7, 5, y menos años.

De otra manera resultaría que una patente expedida por diez años, no podría ser revalidada, pues siempre resultaría que no podría serlo por los diez años juntos.

Y se adoptase el mínimum de cinco años asignado a las patentes nacionales, todavía resultaría que no sería posible revalidar una patente extranjera por este término.

Ningún artículo de la ley autoriza una interpretación semejante. Las consideraciones en que el Departamento apoya su negativa no me parecen fundadas.

Si la patente extranjera hubiera de caducar en año y medio, menos perjuicio ofrece el revalidarla; si existiesen en el país industrias fundadas sobre el invento de la patente revalidada, es claro que no podrán ser perjudicadas pues sería esto darles efecto retroactivo.

Las patentes producen sus efectos en el futuro, no en el pasado. Pienso por lo expuesto que debe V. E. ordenar se revalide la patente solicitada. — Mayo 16 de 1881.

Departamento del Interior. Resolución de Mayo 31 de 1881 de conformidad con lo dictaminado.

Tomo 6, pág. 184 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — El régimen de ventas de las tierras situadas al Sud del Río Negro, establecido por la ley de 5 de octubre de 1878, significa en cierta forma un contrato aleatorio, del que resultarán beneficiados, los que acierten a ubicar sus títulos en tierras de buena calidad o perjudicados en caso contrario.
- II. — Si la ubicación resulta sobre tierras de mala calidad, no se tiene derecho a solicitar el cambio de las mismas, ya que la exigüidad del precio exigido por ellas, lo fué, teniendo en cuenta la incertidumbre en cuanto a su calidad.

L. Echecopar y E. Dominguez solicitan cambio de ubicación como suscriptores del empréstito de tierras

Señor Ministro:

El precio de la ley de 5 de Octubre que mandó vender los terrenos conquistados en la traslación de la frontera al Río Negro, claramente indica, por su exigüidad, que se tuvo en vista la calidad incierta de los terrenos ofrecidos en venta. Es esta venta, por decirlo así, un contrato aleatorio, que nadie está obligado a aceptar, y en el que son beneficiados aquellos que aciertan a ubicar sus títulos en condiciones favorables. No encuentro así, que la mala calidad del terreno, sea bastante a autorizar el cambio que se solicita. Si fuera permitido, siendo como es notorio, de inferior calidad una parte de los terrenos en cuestión, las reclamaciones de este género no tendrían término.

Sólo una o dos veces, por razones muy especiales que no median en este caso, hace V. E. separado de esta regla de buena administración.

Pienso que no debe V. E. hacer lugar a esta solicitud. —
Junio 11 de 1881.

Departamento del Interior. Se adopta como resolución lo dictaminado. — Julio 13 de 1881.

Tomo 6, pág. 184 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No son susceptibles de devolución los derechos exigidos por la ley de la materia para obtener la concesión de una marca, aunque ésta sea denegada, lo que es conforme con el art. 25 de dicha ley que considera al depósito efectuado como una compensación del servicio que la Oficina de Patentes presta, y como una limitación a la temeridad de quienes solicitan concesiones en forma abusiva.

Don Pedro R. Garrión pide la devolución de un depósito

Señor Ministro:

Don Pedro R. Garrión pide le sean devueltos los 40 pesos fts. que depositó al solicitar una marca de fábrica *ahora tres años!*

La práctica en que el Departamento de Ingenieros apoya su negativa, está de perfecto acuerdo con la disposición del artículo 25 de la ley sobre patentes de invención. La razón de la ley es la misma en uno y otro caso. La pérdida del depósito es simplemente una compensación por el servicio que presta la Oficina, y una limitación a la temeridad de los que pretendieran solicitar la concesión de marcas a diestra y siniestra.

Pienso por lo expuesto que V. E. no debe hacer lugar a la devolución que se solicita. — Julio 16 de 1881.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 22 de 1881.

Tomo 6, pág. 210 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La facultad de indultar o conmutar penas, conferida al Presidente de la Nación por el inc. 6 del art. 68 de la Constitución Nacional, sólo puede tener lugar mediante condena judicial, no debiendo ordenarse durante la substanciación del proceso.
- II. — Atento al tiempo transcurrido desde que se inició la causa —siete años— y encontrándose aún para sentencia, corresponde que se remitan los antecedentes formados en esta petición, a la Corte Suprema, a fin de que ésta requiera del Juez de Sección el despacho inmediato del juicio.
- III. — No corresponde que los procesados ocurran ante el P. E. reclamando contra los jueces morosos en el despacho de las causas; la reclamación debe dirigirse al Superior Jerárquico dentro del mismo Poder Judicial.

El preso Máximo L. Fernández, pide ser puesto en libertad

Señor Ministro:

Con motivo del indulto que varios procesados por el delito de rebelión, —Agenor Pacheco Luengo y otros,— alegaron haberles concedido el Sr. Ministro de la Guerra— el Sr. Juez de Sección Dr. Zubiría, aducía como fundamento de su sentencia lo siguiente: La Constitución de la República en su artículo 86 inciso 6.º autoriza al Presidente para indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del Tribunal competente, lo que bien claro demuestra que el ejercicio de un derecho debe seguir al juzgamiento en que se ha de calificar primero el delito y se ha de designar el delincuente y la pena, pues de otro modo no podría indultar en el sentido de la Constitución y previo informe judicial, a quien no es declarado culpable, o *conmutar penas que no son conocidas ni han sido pronunciadas* por la única autoridad a que está reservada esta función, quedando así, por último, invertido el orden natural de las funciones de los poderes públicos y burlados los propósitos de la Constitución. Al mantener ella el derecho de gracia, en la forma que lo ha hecho, subordinándola a una tramitación especial, en que el juzgamiento preceda al indulto, ha querido sin duda que éste evite o modifique el excesivo rigor que puede acompañar a la aplicación de la pena en ciertos casos y circunstancias de que no debe darse cuenta un juez, ha querido

que todos y cada uno de los poderes cumplan con su deber en la esfera que le está marcada. —Causa 112 T. 65 S. I. Pág. 227.

Esta doctrina está implícitamente aprobada por la Corte Suprema, al confirmar por sus fundamentos aquella sentencia. Ella es también la de los Tratadistas Americanos, al comentar igual atribución, concedida al Presidente de los Estados Unidos.

Y a la verdad: no se necesita mucho esfuerzo para demostrar que, para indultar o conmutar una pena, es indispensable, ante todo, que haya una cosa cierta sobre que recaiga la conmutación o el indulto, es decir, una pena impuesta, a que forzosamente ha precedido un juicio. «Cuando no ha habido proceso o convicción de un delito —dice Tiffamy, SS 513. pág. 379,— no hay emergencia premiosa que demande una conmutación o perdón del Presidente. El Ejecutivo, como tal, sólo puede ser llamado a ejercitar su clemencia cuando el culpable ha caído bajo su jurisdicción, es decir, cuando ya nada haya que hacer, *sino ejecutar en él la sentencia de la Ley*. Antes de la convicción el Ejecutivo no tiene jurisdicción sobre él como criminal ni puede tener opinión alguna, sino por la convicción y sentencia».

El preso Don M. Fernández tiene indudablemente sobrada razón para pedir su libertad.

Del informe del Sr. Juez se desprende que esta causa fué iniciada hace *siete años* y que aun se encuentra en estado de sentencia. Semejante demora no tiene explicación posible, ni es compatible con la buena Administración de Justicia.

No es, empero, a V. E. a quien debe ocurrir el preso.

Es posible que la prisión que lleva sufrida sea mayor que la misma a que hubiera sido condenado, probado el delito que se le imputa. Si hubiera ocurrido al Juez de la causa, a juzgar por los términos de su informe, es probable que hubiera obtenido su libertad bajo fianza. Si hubiera ocurrido a la Corte Suprema, no puede dudarse que hubiera encontrado el amparo necesario para poner término a una demora tan extraordinaria, como injustificable.

Lo que no se concibe es que los procesados ocurran al P. E. para que sobresea en las causas, porque los Jueces no cumplen el deber de despacharlas.

Por lo expuesto es mi opinión que, al mismo tiempo que no haga lugar V. E. a lo que se solicita, remita estos antecedentes a la

Corte Suprema al objeto de que requiera del Sr. Juez de Sección el despacho inmediato de esta causa. — Julio 23 de 1881.

Departamento de Justicia. Se adopta como resolución lo dictaminado. Agosto 11 de 1881.

Tomo 6, pág. 178 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que se haga lugar a un pedido de amnistía, si el peticionante no ha cumplido con una orden de arresto librada en su contra por el Juez de Sección y por considerar que es incompatible con el respeto que se deben entre sí los Poderes Públicos, el que un procesado burle los mandatos de la Justicia y luego ocurra a otro Poder, tratando de hallar solución favorable a su situación.

Victor Silvero, pide se declare que está comprendido en la Ley de Amnistía de 1875

Señor Ministro:

Esta es la segunda vez que D. Víctor Silvero ocurre a V. E. pidiendo ser comprendido en la Ley de amnistía.

Fué antes mi opinión, como es ahora, que el delito de que se le acusa, no es un delito político, y que la ley, a cuyo amparo se acogía, no le alcanzaba. Pienso también que, en todo caso, compete decidir este punto a la autoridad encargada de la interpretación y aplicación de las leyes.

Posteriormente el Sr. Silvero ocurrió a la Corte Suprema invocando en su favor la misma ley de olvido.

La resolución de este Supremo Tribunal fué la que era de esperar, f. 6.

Es a la verdad incompatible con el respeto que merecen y se deben entre sí los Poderes Públicos, que el procesado que burla los mandatos de la Justicia, ocurra a una para legalizar su propósito, en mengua del decoro del otro.

Mientras no se constituya en prisión el Sr. Silvero, y sea desagraviada la justicia, no puede ni debe esperar que se tome en consideración solicitud alguna de su parte.

Mucho mejor hubiera consultado sus propios intereses, presentándose como se lo indicaba antes de ahora, al Juzgado que ordenó su prisión, a purgar su rebeldía y poner término a la situación anómala en que se encuentra.

Hoy menos que nunca, después de la resolución de la Suprema Corte, puede V. E. detener el curso de la Justicia. — Julio 26 de 1881.

Departamento de Justicia. Se adopta como resolución el dictamen. — Agosto 17 de 1881.

Tomo 6, pág. 199 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe aceptarse la propuesta del Cónsul de Dinamarca para realizar una convención sobre marcas de fábrica y comercio entre su país y el nuestro, en base a una perfecta reciprocidad, lo que puede ser de verdadera conveniencia para los ciudadanos argentinos, ya que es posible que las leyes de aquel reino no sean tan liberales como las nuestras con respecto a los extranjeros.

Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio con Dinamarca

Señor Ministro:

La convención que el Señor Cónsul de Dinamarca propone establece una completa reciprocidad para los súbditos de esta Nación y los ciudadanos argentinos para la protección de las marcas de fábrica.

Nuestra Constitución no hace diferencia alguna entre nacionales y extranjeros en cuanto respecta a los derechos civiles. En este concepto la convención propuesta en nada altera ni mejora la condición de los dinamarqueses que hubiesen obtenido en la República marcas de fábrica. La reciprocidad acordada a los ciudadanos argentinos, acaso pueda serles conveniente, pues es posible que las leyes de aquel reino no sean tan liberales como las nuestras.

Bajo este punto de vista, la convención en cuestión no puede menos de ser ventajosa y aceptable. — Agosto 25 de 1881.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 29 de 1881.

Tomo 6, pág. 146 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Corresponde que la persona encargada de la publicación de los informes del Procurador General de la Nación, lleve a cabo su tarea en estrecha vinculación con el funcionario que desempeña la Procuración General, dándole a éste la intervención necesaria.

Francisco F. Fernández, sobre división del 4.º tomo de los informes del Procurador General en dos tomos (4.º y 5.º)

Señor Ministro:

V. E. tiene sobrada razón en dar al Procurador General la participación que desde el principio debió tener en esta publicación. Así se hubiera evitado el inconveniente que se señala en la exposición que antecede.

El Sr. Fernández ha estado en mi despacho y me ha dado las explicaciones que le he pedido al respecto.

De ellas resulta, que hay 700 páginas impresas y ya numeradas, y material para 560 más. Hubiera sido de desear que cada tomo no pasara de 500 páginas, como los 3 publicados ya. Pero puesto que hay ya un volumen pronto y numerado hasta 700 no creo que esta sola razón baste para anular tanto material.

Considero sí, conveniente que al mismo tiempo se prevenga al encargado de esta publicación tome por norma en todo su tipo, papel, etc. a los tomos publicados ya, y que, además, esté siempre en relación con la persona que a la sazón desempeña la Procuración General de la Nación. — Estudio, Septiembre 9 de 1881.

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Se adopta como resolución lo dictaminado. — Septiembre 26 de 1881.

Tomo 6, pág. 207 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No obstante la falta de una ley nacional de elecciones que según la Ley de Octubre 6 de 1874, sobre colonización del territorio del Chaco; que es la que debe tomarse en cuenta para determinar las cualidades requeridas para ser electo Juez de Paz en las Colonias, corresponde que se nombre y reconozca como Juez de Paz aquel vecino que reúna mayor número de votos, y aunque se reputa irregular este procedimiento ello es mejor que el dejar sin autoridad jurisdiccional a la Colonia.
- II. — Se considera irregular el nombramiento de Juez de Paz con jurisdicción en dos Colonias por cuanto la Ley prevee que cada Colonia tenga el propio.

El Gobernador del Chaco, sobre el deslinde de atribuciones del Comisario de las Colonias «Ocampo» y «Las Teresas» elegido Juez de Paz.

Señor Ministro:

La administración de una Colonia en territorios apartados y desiertos tiene forzosamente que dar lugar a actos que adolezcan de más o menos irregularidades.

La ley de Octubre 6 de 1874 colocó el territorio del Chaco a colonizar bajo la dependencia del P. E. y el Gobierno de un Jefe Político, de Jueces de Paz y de Comisiones Municipales.

El Jefe Político debía ser nombrado por el P. E. y los Jueces de Paz, por *electores calificados*; y debían tener las *cualidades requeridas por la ley nacional de elecciones para ser electo*.

Siendo las colonias compuestas casi en su totalidad de extranjeros, era evidente que la elección de Juez de Paz, difícilmente o nunca, podría tener lugar en condiciones tales.

La Ley General de Inmigración modificó esta prescripción en un sentido más práctico.

Dejando siempre la administración policial y militar a cargo del Jefe Político, el artículo 119 *estatuye que una vez establecidas 50 familias, proceden a nombrar de entre ellos un Juez de Paz y cinco Municipales*.

El nombramiento de Juez de Paz, en la persona de Don Daniel Maldonado, hace suponer que las colonias «Ocampo» y «Las Teresas» tenían ya estas 50 familias; y ocasionalmente he tenido motivo para saber que en sólo la primera hay más de 300 habitantes, lo que supone más de dichas 50 familias.

El Señor Comisario General dice que éste nombramiento no ha podido tener lugar por que falta la ley de elecciones. Falta, es cierto, esta ley, y otras muchas, para el gobierno de las colonias. Pero ésto no obsta a que tomando por base la ley de elección nacional, o cualquiera otra sea nombrado y reconocido como Juez de Paz, aquel vecino que reúna mayor número de votos. Cuando sólo se trata de 50 o 100 electores, que se conocen todos, la ley se reduce a una simple operación de contar de que parte está el mayor número.

Lo esencial es que sea por todos aceptada y acatada la autoridad del nombrado. Será este nombramiento irregular, si se quiere pero es esto mejor que no la falta absoluta de una autoridad que defina las diferencias, que no puede dejar de existir en toda reunión de hombres más o menos numerosa.

Dice también el Sr. Comisario General que el nombramiento del Sr. Maldonado comprende dos Colonias, mientras que la ley prevee que cada colonia tenga su Juez de Paz.

Es esto sin disputa otra irregularidad, que debe cesar, limitando la jurisdicción del Juez nombrado a la Colonia Ocampo, que es la más numerosa, y que todo induce a creer tiene más de las 50 familias requeridas.

El Juez nombrado comunicó su nombramiento en Abril, y debe suponerse que desde entonces ha ejercido sus funciones con el asentimiento de todos. Anular hoy su nombramiento, sería anular todos sus actos, trayendo una perturbación general, sin beneficio para nadie.

La Colonia Galence del Chubut ha gozado desde su instalación de más amplia libertad.

Mas acostumbrados aquellos colonos al gobierno propio nombraron apenas llegados, sus autoridades sin esperar ley de elecciones, constituyendo un Jefe, o Juez de Paz; un consejo de notables, o municipales; y hasta pretendieron juzgar los delitos por jurados.

Aparte de esta irregularidad, que por saltante no podía ser aceptada, la administración de la Colonia no ha ofrecido mayor dificultad.

Pienso por lo expuesto, que no hay conveniencia en dejar sin efecto el nombramiento del señor Maldonado, que deberá limitarse a la Colonia Ocampo.

Pienso también que el desenvolvimiento cada vez creciente de las colonias hace necesario proceder a dictar los reglamentos indispensables para su administración y gobierno. Podría V. E. encomendar su estudio y redacción a una comisión de personas competentes». — Septiembre 22 de 1881.

Departamento del Interior. Resolución de Septiembre 26 de 1881 que expresa que la administración policial, militar y política de las colonias está a cargo del Comisario, con las atribuciones que les acuerda la Ley de Inmigración y Colonización en sus arts. 117, 118 y 120 y la administración judicial corresponde al Juez de Paz, conforme al art. 119 de la misma Ley y el 6.º de la de 6 de octubre de 1874.

Tomo 6, pág. 204 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los Jueces de Paz de los territorios Nacionales, ejercen la jurisdicción civil, comercial y criminal; en virtud de la primera, tienen competencia para conocer en las sucesiones de extranjeros, y tomar medidas de seguridad con respecto a los bienes, hasta tanto aparezcan herederos legítimos si los hubiera.

El P. E. por su parte, en conocimiento del fallecimiento de un súbdito extranjero debe comunicarlo al respectivo Cónsul para que este tome en la sucesión la intervención correspondiente.

Sobre Jurisdicción del Juez de Paz de Viedma (Territorio Nacional) en el expediente iniciado con motivo del fallecimiento del súbdito Francés Andrés Donadieu.

Señor Ministro:

Los Jueces de Paz ejercen en los territorios Nacionales la jurisdicción civil, comercial y aun la criminal.

El juzgado de Viedma es pues, el juez competente para conocer en la testamentaria del ciudadano Francisco Donadieu, fallecido en el Territorio de la Patagonia. Las diligencias que ha practicado con este motivo parecenme acertadas y es de esperarse las continúe hasta poner en seguridad los bienes, realizarlos y depositar su importe en el Banco Nacional, si antes no aparecieren herederos legítimos del finado, con cuya intervención se resolviera otra cosa.

Nada encuentro que observar sobre el particular; sólo sí, creo necesario ponga V. E. en conocimiento del Sr. Cónsul de Francia, el fallecimiento del mencionado Donadieu, para que tome en su sucesión la intervención a que haya lugar. — Enero 5 de 1882.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Enero 10 de 1882.

Tomo 6, pág. 245 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se otorgue un certificado de adición a favor de quien a perfeccionado un invento, ya patentado a nombre de otro y no obstante la oposición de este año último, por cuanto no se concibe que la patente concedida lo haya sido en forma tan amplia, que comprenda todas las mejoras susceptibles de producirse en el mismo invento.

D. Rodolfo Bullrich, pide revocatoria de la resolución por la que se concede a los Señores Chavanne y Chenet un certificado de adición al aparato «Paquelin».

Excmo. Señor:

Los Señores Chavanne y Chenet solicitan patente de adición a los aparatos «Paquelin» para la marcación de ganados. Pretenden haber mejorado notablemente a término de que estos aparatos, que no daban resultados en la práctica por no poder conservar el calor al aire libre, podrán usarse en adelante con toda facilidad en los objetos que tuvo en vista el inventor.

Los Señores Bullrich y Serantes, representantes de la patente primitiva, se oponen, aduciendo entre otras consideraciones de menor importancia, y cuya apreciación no es del resorte de la acción de V. E. como fundamento principal de su oposición, el hecho de que la patente fué concedida al Señor Paquelin de *modo amplio que comprende todos los aparatos y mejoras* que en ellos pudieran introducirse, desde que lo esencial del invento, dicen, no consiste en el aparato, sino en la combustión de los elementos empleados para producir el calórico o altas temperaturas indispensables a las diferentes aplicaciones a que se presta.

Los Señores Bullrich y Serantes dan visiblemente mayor alcance que el que tiene en realidad, a la patente concedida al Señor Paquelin.

Por grande que un invento sea, siempre puede perfeccionarse. Pretender otra cosa, sería negar el progreso humano.

La máquina de coser es sin disputa, una de las invenciones más preciosas y de más grande importancia de esta época, puesto que con razón se ha dicho, ella importa la emancipación de la mujer.

Esto no ha obstado, sin embargo, a que después de la patente concedida al primitivo inventor, hayan sido concedidas muchas otras, que reposan bajo el mismo principio.

El telégrafo parecía la última palabra de la invención humana, sin embargo, el teléfono ha ido más allá; y una vez entregado al dominio público, este invento maravilloso, no ha sido perfeccionado todavía.

¿Y quién puede anticipar las sorpresas que nos reserva el porvenir? La patente concedida al afortunado inventor primitivo, no ha impedido que se concedan otras a los que siguiendo sus huellas, trajeron el fruto de su inteligencia a la perfección de la obra común.

El panteléfono, el micrófono y otros instrumentos más, no son más que una aplicación feliz del invento portentoso de Bell, y han merecido, no obstante, ser garantidos por una patente.

El invento del Señor Paquelin, es, sin disputa, de un mérito innegable. Basta que una de sus aplicaciones sirva para aliviar las dolencias de la humanidad, facilitando y asegurando el éxito de las operaciones quirúrgicas.

No es, empero, racional, ni consultaría el honor ni el interés del mismo inventor, cerrar la puerta a todo progreso.

Mañana puede encontrarse un líquido o un gas más eficaz para producir las altas temperaturas. Al día siguiente, el aparato adoptado por el inventor para producir un cierto resultado, puede ser perfeccionado de manera que, con menos trabajo y más seguridad, se alcance el mismo resultado que se tuvo en vista.

Los Señores Chavanne y Chenet dicen que las mejoras que han introducido en los aparatos para la marcación de la hacienda, son de tal naturaleza, que podrán usarse al aire libre lo que hasta ahora no se ha podido conseguir con los primitivos del inventor.

Con mejora tan importante, esta preciosa invención pasará de los experimentos del laboratorio a los usos generales de la industria rural, en honra y provecho del Señor Paquelin.

El Departamento de Ingenieros encuentra que en realidad las mejoras introducidas por los Señores Chavanne y Chenet, importan un progreso que merece una patente de adición. No siendo fundada como cree haberlo demostrado la oposición de los Señores Bullrich, V. E. no puede negarla.

Sólo me resta decir que la oficina encargada de la expedición de las patentes, sólo atiende a la fecha en que fueron solicitadas para acordarlas según su prioridad. No es de su incumbencia, ni menos de la de V. E. tomar en cuenta si el solicitante sorprendió o no algún secreto, si aprovechó o no de la experiencia ajena. — Enero 14 de 1882.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Enero 19 de 1882.

Tomo 6, pág. 201 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se autorice al Departamento de Ingenieros o a la Presidenta de la Sociedad de Beneficencia para que hagan abrir en el Hospital de Mujeres las ventanas que fueron cerradas al construirse sobre la pared medianera un edificio particular, con evidente perjuicio para la salud de las enfermas.

Debe el propietario, que se cree con derecho a cerrar ventanas de la propiedad lindera, dar aviso al vecino y especialmente si este es un edificio público, y más aún si se trata de un hospital.

La Sociedad de Beneficencia, sobre unas ventanas, que daban aire al Hospital de Mujeres, mandadas cerrar por el dueño del café Tortoni.

Señor Ministro:

Según de estos antecedentes se desprende, el inquilino o propietario del Café Tortoni, ha cerrado unas ventanas que daban aire a una sala del Hospital de Mujeres *en virtud de un proyecto de convenio que, se dice, había celebrado con la Señora Presidenta de la Sociedad de Beneficencia en el año anterior.*

No se dice, ni cuál fué este convenio, ni si fué aprobado, ni si se llevó a efecto.

Mientras tanto se produce un hecho grave que puede comprometer la salud de los enfermos confiados a la caridad pública.

Es siempre una operación delicada abrir o cerrar aberturas que dan a un edificio vecino; lo es más tratándose de un edificio público, y mucho más de un hospital.

El propietario del Café Tortoni antes de mover un ladrillo, ha debido dar aviso a la Dirección actual del Hospital, fundando su derecho de innovar lo que tenía en su favor la sanción del tiempo.

Parece que no lo ha hecho así, y que ha procedido como dueño y señor, sin consultar a nadie.

Lo que corresponde entonces es volver las cosas al estado que antes tenían.

Las ventanas cerradas deben abrirse, y en ningún caso, aunque el interesado justifique su derecho a cerrarlas de nuevo, deben cerrarse, sin que previamente se hayan practicado las operaciones necesaria para dar a los enfermos el aire que se les priva.

Es por esto, mi parecer, que V. E. autorice al Departamento de Ingenieros o a la misma Presidenta de la Sociedad de Beneficencia, para que hagan abrir las ventanas cerradas a la brevedad posible, dejando a salvo el derecho que pueda tener el propietario o inquilino del Café Tortoni para pedir oportunamente su clausura, con los términos que dejo indicados. — Febrero 14 de 1882.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 20 de 1882.

Tomo 6, pág. 208 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las circunstancias de que un condenado haya cumplido parte de su condena, sin aducir alguna otra razón, no es causa suficiente, para conceder el indulto.

Alejandro Porcel de Peralta, solicita indulto

Señor Ministro:

Si la circunstancia de haber cumplido el reo una parte de la condena, hubiera de ser causa a autorizar la remisión o conmuta-

ción del resto, no hay ninguno que no la pudiera invocar en su favor.

Ninguna otra aduce el recurrente. Esta circunstancia hace innecesario aún, el trámite de pedir informe al Juez de la causa, para que V. E. no haga lugar desde luego a esta solicitud. — Marzo 17 de 1882.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad a lo solicitado. — Mayo 24 de 1882.

Tomo 6, pág. 303 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. apruebe las ordenanzas policiales presentadas por el Comisario de la Colonia de Chubut, en razón de haber sido dictadas en virtud de la potestad que le acuerda el art. 118 de la Ley de Inmigración y Colonización, debiendo quedar sin efecto, la disposición del art. 5 del aviso u ordenanza N.º 3 que impone una pena al que oculta un criminal o procura su fuga, que no está autorizada ni aún por los mismos Códigos Penales, recomendándosele, asimismo, moderación en lo que se refiere a la imposición de las multas.

La Oficina Central de Tierras y Colonias, —sobre aprobación de ordenanzas policiales dictadas por el Comisario de la Colonia Chubut.

Señor Ministro:

«Los Comisarios de las Colonias Nacionales representarán en el gobierno de ellas, dice el artículo 118 de la Ley de Inmigración y Colonización, a la autoridad nacional, proveyendo al mantenimiento del orden público y a la defensa policial».

En el ejercicio de esta facultad, los comisarios están autorizados en consecuencia, para dictar ciertos reglamentos dirigidos a garantizar la propiedad y el orden público, confiados a su guarda. No es, empero, de extrañar, que en una reunión de individuos en vías de constituirse en sociedad, todo se resienta del mismo estado anormal y embrionario de la comunidad.

El Comisario de la Colonia Chubut ha estado así autorizado, en mi opinión, a dictar ordenanzas y reglamentos que la Oficina Central de Tierras ha elevado al conocimiento de V. E.

Sólo observaré que debe recomendársele proceda con toda moderación en la imposición de las multas. Los 20 pesos fuertes de la multa deben considerarse como el máximo, y sólo deberán imponerse en casos de marcada gravedad, o reincidencia.

Observaré también que la disposición del art. 5.º del aviso u ordenanza n.º 3, está fuera de las atribuciones policiales del Comisario, y debe quedar sin efecto. La pena que él impone al que ocultase a algún criminal o favoreciese su fuga, no está autorizada ni aun por los mismos Códigos Penales. — Abril 11 de 1882.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 17 de 1882.

Tomo 6, pág. 231 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El hecho de que el F. C. C. Argentino, haga el transporte de los inmigrantes en forma gratuita y las circunstancias de que el Gobierno adeude a la Empresa algunas cuentas atrasadas, no son razones suficientes para exhonerarla del uso de papel sellado en las presentación de sus cuentas. La Ley en materia de impuestos, no admite compensación alguna.

La Administración del F. C. C. Argentino, solicita dispensa del uso de papel sellado para la tramitación de sus cuentas.

Señor Ministro:

A la verdad es difícil formar juicio acerca de la justicia con que se exige el uso del papel sellado para las cuentas que presenta el Ferrocarril Central, sin saber a punto cierto de qué cuentas se trata.

Sólo diré que el hecho de conducir gratis por el camino a algunos inmigrantes, y la circunstancia de que el gobierno deba a la empresa algunas cuentas atrasadas, no son bastantes a dispensar

a dicha empresa del uso del papel sellado, si con arreglo a la ley de la materia, debe usarlo.

’ Mi opinión es, por tanto, que si las cuentas a que se refiere la empresa deben presentarse en papel sellado con arreglo a la ley vigente, así debe hacerse, no obstante las consideraciones de que hace mérito el Sr. Comisario General de Inmigración.

Es bien sabido que en materia de impuestos, la ley no admite compensación. — Abril 12 de 1882.

Departamento del Interior. Resolución en contra de lo dictaminado. — Abril 29 de 1882.

Tomo 6, pág. 241 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que el P. E. declare que el F. C. a Campana es nacional si ello resulta claramente del art. 1.º, e inciso 3.º del art. 2.º de la ley de F. C.— que declara nacionales a los garantidos por la Nación— y en estas condiciones se encuentra la mencionada vía férrea, ni corresponde que dirija una comunicación al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a fin de que ésta cese en la intervención que ha tomado sobre dicha línea en virtud de sus leyes y reglamentos, dado que es a la justicia federal ante quien se debe ocurrir, por tratarse de un conflicto de leyes entre la Nación y la Provincia que sólo a la justicia compete resolver.

La Empresa del F. C. a Campana, sobre la jurisdicción nacional o provincial a que debe quedar sometida

Señor Ministro:

El Director y representante del Ferro-Carril a Campana solicita que V. E. declare que dicho Ferro-Carril es Nacional, y que, como tal, sólo está regido por las leyes y autoridades de la Nación. Solicita, además, que V. E. lo haga así saber al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se abstenga de tomar en este camino la intervención que se ha reservado por el decreto de 26 de Diciembre ppdo.

La declaración que se pide a V. E. está hecha por la ley de la Nación, que el mismo Director recuerda oportunamente —la declaración de V. E. nada agregaría a la declaración de la ley—

El Ferro-Carril a Campana es notoriamente un ferro-carril garantido por el Gobierno Nacional.

Es, en consecuencia, un *ferro-carril nacional*, y como tal, nó es necesario decirlo, únicamente sujeto a la inmediata inspección y vigilancia de las autoridades de la Nación; art. 1.º e inciso 3.º del art. 2.º de la ley reglamentando los ferro-carriles Nacionales.

Poco importa que la Provincia de Buenos Aires, en cuyo territorio está construído este camino, haya dictado también sus reglamentos y sus leyes. Estos reglamentos y estas leyes sólo regirán para los caminos que no sean Nacionales, pues, es bién sabido, como lo recuerda el mismo Sr. Coghan, que las leyes de la Nación gozan de indispensable primacía sobre las leyes de Provincia.

Ningún objeto tendría, por consiguiente, que hiciera V. E. una declaración que está hecha clara y notoriamente por la ley

Ningún objeto tendría, tampoco, la comunicación que se pide dirija V. E. al Gobierno de la Provincia. En el conflicto de las leyes de la Nación y de las Provincias, es la justicia federal, y no V. E. la autoridad llamada a intervenir.

La Dirección del ferro-carril se ha dirigido oportunamente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, salvando sus derechos. Si lo que no es de esperarse, el Gobierno de la Provincia insistiese en hacer efectivo su decreto, nada será más fácil a la misma Dirección, que acogerse a la jurisdicción de la Nación, ocurriendo a sus tribunales. — Abril 13 de 1882.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 26 de 1882.

=====

Corresponde que para el cumplimiento del art. 298 de la Ley de organización de los Tribunales de la Capital —que declara públicos los Registros y dispone que los que continúen siendo de propiedad privada, previa indemnización, sean expropiados— que se nombre a una persona de reconocida honorabilidad y competencia, para que trate de llegar a un avenimiento razonable con los interesados, y en caso contrario que promueva los correspondientes juicios de expropiación.

D. Mauricio Orsolani, —sobre indemnización de la Escribanía de Registro y actuación de su propiedad

Señor Ministro:

En un caso de igual naturaleza, decía ha poco a V. E. lo siguiente, que reproduzco ahora.

«El artículo 298 de la ley de organización de los Tribunales de la Capital declara que «los Registros y Archivos son de propiedad pública, y que los que actualmente fueren de propiedad particular, pasarán al dominio público, previa indemnización si a ello hubiese lugar, con arreglo a la ley de expropiación».

No tengo conocimiento de cuantas escribanías habrá en el caso de ser expropiadas. Hasta ahora sólo se han presentado tres: los herederos de D. M. L. Agrelo, el Señor Cardoso y otro más.

Considero de todos modos que el temperamento más conducente a dar cumplimiento a la disposición de la Ley, sería el que se adoptó para la expropiación de las tierras cedidas al Ferro-carril Central, esto es, el nombramiento de una persona de posición y honorabilidad que entienda en todos estos negocios y proceda al juicio de expropiación si no pudiese llegar a un avenimiento razonable con los interesados. — Mayo 13 de 1882.

Departamento de Justicia. Resolución en Marzo 27 de 1884.

Tomo 6, pág. 315 — Inf. de los Consej Leg. del P. E.

=====

No corresponde que se haga lugar al reclamo, por tratarse de una cuestión que se presenta por tercera vez, habiendo obtenido anteriormente solución definitiva. Los asuntos administrativos al igual que los judiciales una vez concluidos y archivados no pueden reverse, sinó aportando nuevos elementos de juicio que no se tuvieron presentes en la resolución anterior.

Reclamo del súbdito inglés M. Crevetto, constructor de un puente en el Riachuelo de Corrientes

Señor Ministro:

Por tercera vez viene el Señor Crevetto a pedir a V. E. alguna indemnización por los perjuicios que dice haber sufrido en la rescisión del contrato que había celebrado para la construcción de un puente en la Provincia de Corrientes.

Séame permitido observar, en primer lugar, que no es conforme a los principios de buena administración traer a consideración asuntos concluidos y archivados de tiempo atrás. En los asuntos judiciales como en los administrativos, los procedimientos tienen y deben tener su término.

Los respetos que recíprocamente se deben las Administraciones que se suceden en la vida de los pueblos; la solidaridad que entre ellos existe, requieren que no traiga uno a juicio los actos concluidos de las otras. Sería éste un proceder que no tendría término, y que haría imposible todo orden administrativo.

Y menos se concibe esta revisión cuando ningún hecho nuevo se aduce para justificar un procedimiento, que sólo podría explicarse en presencia de pruebas y antecedentes que no se tuvieron presentes en la resolución cuya rescisión se pide.

Y es éste precisamente el caso del Señor Crevetto.

Ni un hecho, ni un dato, ni una consideración, aduce a su favor que no se hubiera tenido presente, y no hubiera sido contestado en sus reclamaciones anteriores.

Dice hoy, como decía antes, que la rescisión del contrato por haber demorado el Gobierno el pago de cantidades que se le debían por trabajos concluidos, le ha traído perjuicios considerables.

Dice, además, que estas demoras fueron la causa de que las lluvias que sobrevinieron le llevaron un andamio, pues, a no haber ocurrido la suspensión de las obras, probablemente habrían concluido antes de la creciente del Río.

Sin desconocer que el Gobierno está en el deber de cumplir los contratos que celebra con la misma religiosidad que se exige entre particulares, a nadie se oculta que las tramitaciones que exige toda orden de pago especialmente, y otras circunstancias, más o menos previstas o imprevistas, originan demoras con que todo empresario, medianamente prudente cuenta y ha debido contar, sin pretender por esta sola causa dar por rescindido su contrato.

Pero sea de esto lo que sea, admitiendo que el Señor Crevetto tenga el más perfecto derecho a ser indemnizado por la rescisión de su contrato, hay una circunstancia de que él no hace mérito en su larga exposición, y que pone término a toda discusión. La indemnización que reclama le ha sido acordada ya, y con marcada liberalidad ¿Qué más puede pretender?

Consta, en efecto, que aceptada la rescisión que el mismo Sr. Crevetto pidió, mandóse liquidar la parte de trabajo hecho, y se acordó un veinte por ciento de utilidad sobre la parte no ejecutada. ¿A qué más utilidad que a ese veinte por ciento podía aspirar el Sr. Crevetto, si se hubiesen terminado las obras a que estaba obligado por su contrato? ¿Qué contratista, qué empresario, no se daría por muy satisfecho si se rescindiesen sus contratos, acordándoseles un veinte por ciento de utilidad, sin invertir capital, ni correr los riesgos inherentes a toda empresa humana?

Vuelvo ahora a la cuestión del andamio.

Las grandes lluvias pudieron venir antes o después de terminadas las obras en el curso natural del contrato, y es esto precisamente lo que constituye el caso fortuito, elemento de que no es posible prescindir en todos los negocios de esta vida, y de que a nadie puede responsabilizarse, salvo una estipulación expresa que no media en el presente caso.

Además, y por último, al acordar el veinte por ciento sobre trabajos no ejecutados, esta misma circunstancia se tuvo ya presente, y no hay nada que autorice a volver sobre ella.

Apoyado en estas consideraciones, en que he abundado por los respetos que merece la valiosa interposición del Señor Ministro de Su Majestad Británica, pienso que, no obstante ella, no debe V. E. traer a nueva consideración un asunto resuelto y concluído por la Administración a que la actual ha sucedido. — Mayo 13 de 1882.

El art. 2 de la Ley de Aduanas —año 1881— que exonera de derechos a las máquinas destinadas a establecimientos industriales, se refiere a industrias, que se destaquen, ya sea por su magnitud, o por la novedad de sus productos o por alguna otra circunstancia que las coloque fuera de lo común, y no a máquinas conocidas, de escasa importancia destinadas a establecimientos que en gran número ya existen en el país; máxime si se trata de máquinas de imprenta que la ley especialmente grava en el art. 1.º, inciso 4.º.

Sobre libre introducción de máquinas industriales

Señor Ministro:

Pienso con la Contaduría General que no hay razón para exonerar a las máquinas de imprenta de los derechos con que la ley grava a los útiles y materiales de este ramo.

Cuando la ley permite la dispensa de derechos a las máquinas destinadas a establecimientos industriales se refiere, como fácilmente se comprende a establecimientos nuevos, en cuyo favor milita alguna consideración especial, ya por su magnitud, ya por la novedad de sus productos, ya por alguna otra circunstancia que los coloque fuera de la generalidad; en manera alguna, empero, se refiere a máquinas conocidas, de escasa importancia, destinadas a establecimientos que se cuentan por docenas o centenas en el país. Y mucho menos puede referirse a máquinas que están especificadas y determinadamente gravadas en la ley. En este caso se encuentran las máquinas de imprenta que, con toda razón ha equiparado la Aduana del Rosario a las de litografía, así como las trilladoras y segadoras. ¿Habría razón para acordar el despacho libre de estas máquinas por la sola circunstancia de que van a formar parte de establecimientos industriales? Claro que no. Es por lo expuesto mi opinión, no obstante los respetos que la ilustración y la experiencia de la Dirección General me merecen, que las máquinas de imprenta están comprendidas en el inciso 4.º del art. 1.º y no en el art. 2.º de la ley. — Mayo 13 de 1882.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Mayo 27 de 1882.

Los derechos adquiridos de que habla el art. 5 de la Ley de 5 de Octubre de 1878, son los que tienen su origen en cualquiera de los medios que el derecho reconoce para la transmisión del dominio: compra, donación, prescripción, herencia, posesión, etc., legislados en el Código Civil, por lo que resulta innecesario el que se dicte al efecto una reglamentación general, como lo pide la Oficina de Geodesia.

El Director de la Sección de Geodesia, —sobre los derechos adquiridos que no afecten la enagenación de tierras autorizada por la Ley de 5 de Octubre de 1878.

Señor Ministro:

Antes de ahora he tenido la ocasión de decir a V. E. que los derechos reservados por el Art. 5.º de la ley de Octubre del 78, pueden tener origen en cualquiera de los medios que el derecho reconoce para transmitir el dominio, en la compra, en la donación, en la prescripción, en la herencia, en una larga posesión, etc., etc.

No es, pues, posible, satisfacer los deseos de la Oficina de Geodesia, que solicita disposiciones generales para expedirse en los diversos casos de pobladores de la Sección 5.ª que pretenden encontrarse amparados por el artículo antes recordado, y que le han sido pasados a informe.

No es esto posible, digo, a menos de referirse a los títulos del Código Civil que trata de los diversos medios de la transmisión del dominio.

Paréceme, por otra parte, que la misión de la Oficina de Geodesia se refiere principalmente a lo que se relaciona con la ubicación de los terrenos, siendo a V. E. a quien incumbe decidir las cuestiones de derecho, oyendo, cuando lo cree necesario, a sus Consejeros letrados. — Mayo 15 de 1882.

Departamento de Hacienda. Se adopta como resolución el dictamen. — Mayo 20 de 1882.

Estando la Contaduría General autorizada por el art. 70 de la Ley de su creación, para pedir directamente al Procurador del Tesoro el asesoramiento que necesite en las funciones de «exigir, exonerar y aprobar las cuentas de recaudación de la renta» —art. 52 de la Ley de Contabilidad— y habiendo pasado estas actividades a ser desempeñadas por la Dirección General de Rentas en virtud de lo dispuesto por el art. 4 de la Ley de 18 de Octubre de 1877, debe entenderse que lo ha sido con la facultad indicada en el art. 70, pudiendo en consecuencia la Dirección General de Rentas requerir a su vez del Procurador del Tesoro el asesoramiento que necesite, en el examen y aprobación de las cuentas de referencia.

Consulta, —sobre atribuciones de la Dirección General de Rentas para asesorarse de los Consejeros Legales del Estado

Señor Ministro:

La Dirección General de Rentas apoya la intervención que atribuye al Señor Procurador del Tesoro en el texto de la ley; el Sr. Procurador, su excusación, en consideraciones que deduce del mismo texto.

La ventaja está, naturalmente, de la parte de la Dirección General de Rentas.

Recuerda, en efecto, la Dirección, el texto del art. 70 de la Ley de Contabilidad, que en términos claros y precisos prescribe que la Contaduría *oirá al Procurador del Tesoro en los casos que determina*, poniendo los antecedentes a disposición de dicho funcionario *para que se expida a la brevedad posible*.

Recuerda, asimismo, el art. 4.º de la ley de su creación, que dispone cese la Contaduría General en las funciones que transfiere y encomienda a la misma Dirección General.

Eran estas funciones las de *exigir, exonerar y aprobar las cuentas de recaudación de la renta* por las Oficinas de Hacienda, art. 52, con intervención del Procurador del Tesoro, art. 70, según antes se había visto.

La argumentación de la Dirección General me parece concluyente.

Si la Contaduría General está autorizada para *pedir directamente* el concurso del Procurador del Tesoro en el ejercicio de las

funciones que la ley le confiere, es una deducción lógica y natural, que la Dirección General, que ha sustituido a la Contaduría en el ejercicio de esas mismas funciones, goce de igual prerrogativa. Esta deducción es todavía más lógica y natural, si se recuerda que la Dirección General es una repartición que gira en esfera más elevada que la Contaduría.

El Sr. Procurador del Tesoro, sin desconocer, como era natural, la facultad que la ley atribuye a la Contaduría General para requerir directamente su dictamen, la niega a la Dirección, en virtud de la diferencia que establece en las funciones de una y otra repartición.

Dice que la Contaduría General ejerce funciones administrativas, y a la vez funciones de carácter judicial; siendo estas últimas las que determinan su intervención en los casos que ofrezcan duda sobre algún punto de derecho. Entrando al examen de las funciones de la Dirección General dice en seguida el Sr. Procurador del Tesoro, que son simplemente administrativas, y que, limitándose a una operación técnica, o confrontar las entradas con las salidas, no revisten el carácter judicial asignado a la Contaduría, causa determinante de su intervención, y que esta intervención no tiene por consiguiente razón de ser con relación a la expresada Dirección General.

A la verdad, no se comprende tan notable diferencia entre las funciones de una y otra repartición. Si la Contaduría, examinando y aprobando cuentas, reviste carácter judicial, ¿por qué razón no ha de revestir este mismo carácter la Dirección General cuando examina y aprueba cuentas también?

No se comprende tampoco por qué razón, cuando la ley transfiere a la Dirección General las funciones que ejercía la Contaduría en el examen y aprobación de las cuentas, ha de ser tan sólo en una parte y no en toda su plenitud.

Semejante distinción no está en los términos de la ley, y no puede aceptarse en mi opinión.

La Dirección General, cita, por último, el artículo 48 de la ley de sellos, que la encarga de vigilar su cumplimiento, y el 45 de la misma ley, que previene que las dudas que surjan sobre la clase de papel sellado que debe usarse, serán resueltas por la autoridad

ante la que tramite el asunto con audiencia verbal o escrita del Ministerio Fiscal.

El Sr. Procurador del Tesoro entra, con este motivo, en distinciones no menos inaceptables que las anteriores.

Dice que no tratándose de la tramitación de un asunto, sino de la aplicación de la ley a los protocolos que llevan los escribanos, es V. E., y no la Dirección Gral., quien debe resolver la cuestión.

La ley encarga especialmente a la Dirección Gral. vigilar el cumplimiento de la ley de sellos.

¿A qué queda limitado este encargo si la Dirección Gral. no tiene la facultad de resolver acerca del valor de un sello en aquellos casos en que, no tramitando el asunto, según quiere el Sr. Procurador del Tesoro ante autoridad alguna, es ella llamada al intervenir?

¿Si las autoridades ante las que tramitan los asuntos, tienen la facultad de decidir acerca del valor del sello, con la audiencia del Procurador Fiscal, por qué no ha de tener igual facultad la Dirección Gral., con la intervención del Procurador del Tesoro? ¿Qué necesidad hay de ocurrir al Poder Ejecutivo en asuntos tan sencillos, y de que la ley ha querido desprenderlo, confiando su cuidado a una repartición que, por su elevada categoría, ofrece las garantías posibles de acierto?

A todas estas consideraciones agregaré, por último, Excmo. Sr. que, si alguna duda quedara todavía después de lo expuesto acerca de la interpretación de las leyes recordadas, aconseja resolverlas en favor de la Dirección Gral., la armonía que debe existir entre todas las reparticiones de la administración, cuyo único propósito debe ser consultar el mejor servicio público, facilitando en cuanto posible sea, la más pronta y acertada expedición en los negocios.
— Mayo 15 de 1882.

=====

- I. — El crédito hipotecario sobre la casa que en 1819 el Gobierno adquirió para donársela al General San Martín no puede considerarse como deuda de la guerra de la Independencia y en consecuencia no está comprendido entre los créditos que la Ley de 27 de agosto de 1881 mandó liquidar.
- II. — A los efectos de la ley citada, sólo deben considerarse deudas de la Independencia los suplementos y servicios que directa e indirectamente tuvieron por objeto la emancipación nacional.

Don Javier Riglos en representación de la sucesión de Don Esteban Villanueva, sobre reconocimiento de un crédito hipotecario que gravaba una finca adquirida por el Estado en 1819.

Señor Ministro:

Este asunto está lejos de ofrecer la facilidad y sencillez con que los interesados lo presentan.

No es exacto, en primer lugar, que el Procurador General Doctor Pico haya reconocido lisa y llanamente la legitimidad del crédito del finado Villanueva.

«Si hubieran de discutirse en la actualidad los derechos de los reclamantes, decía el Doctor Pico, no podría hacerse sin tener a la vista los autos del concurso y averiguar por ellos la razón de no haberse considerado en la sentencia los créditos del Fisco.

«Pero esta discusión es completamente inoportuna, agregaba, y V. E. no puede seguir substanciendo este expediente por que no hay ley alguna que lo autorice para reconocer y pagar deudas generales contraídas en 1819, ni fondos designados con ese objeto. Los reclamantes deben guardar sus gestiones para cuando el Gobierno esté autorizado para oírlas por la ley que mande pagar la deuda general».

Que esta ley no se ha dictado aun, no es necesario decirlo.

Pretenden, empero, los interesados, que está comprendido el crédito que representan entre los de Guerra de la Independencia, que la ley de 27 de Agosto último ha mandado liquidar.

Dicen, que para dar cumplimiento a una ley del Congreso que acordaba un premio al General San Martín, el Gobierno compró en pública subasta la finca que reconocía una hipoteca a favor de D. E. Villanueva, cuyos derechos ellos representan; y que de esa ma-

nera el Estado se hizo cargo del crédito que sobre dicha finca gravitaba.

Y de este antecedente pretenden deducir que aquella hipoteca debe considerarse comprendida en la deuda civil de la Independencia.

Si consideraciones de este género bastaran para que una deuda fuera considerada de la Independencia, no hay ninguna de las que el Gobierno contrajo durante aquella época que no pudiera aspirar a tal categoría; pues todas fueron contraídas para ser aplicadas al único objeto que entonces preocupaba a los poderes públicos. Con sobrada razón observa la Contaduría que la relación entre el origen y la aplicación es demasiado remota, por cuanto sólo pueden considerarse como deudas de la Independencia, los suplementos y servicios que directa o indirectamente tuvieran por objeto la causa de nuestra emancipación.

Repito por todo esto, con el Doctor Pico, que no ha llegado aún la oportunidad de tomar en consideración crédito de este género; y ha de servirse V. E. declararlo así. — Junio 16 de 1882.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 6 de 1882.

Tomo 6, pág. 312 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No debe considerarse irregular el proceder de la Dirección General de Rentas que ha prescindido de la presencia del Escribano Mayor de Gobierno en pequeñas licitaciones, que no revisten el carácter de obra pública, por cuanto la ley de la materia al exigir la presencia del Escribano en el acto de la apertura de las propuestas se refiere visiblemente a obras públicas, entendiéndose por tales, las que revistan cierta magnitud, como ferrocarriles, puentes, caminos, etc. .
- II. — No obstante lo dicho, se considera conveniente que el P. E. declare que la presencia del Escribano Mayor de Gobierno es necesaria en el acto de apertura de propuestas, cualquiera que sea la importancia del objeto licitado.

La Dirección General de Rentas, —consulta sobre la Ley de Obras Públicas

Señor Ministro:

La Ley de Obras Públicas es la única que contiene una disposición expresa requiriendo la presencia del Escribano de Gobierno en las licitaciones.

Paréceme que es forzar por demás el significado de las palabras incluir en la dominación de Obras Públicas, como pretende la Contaduría, todo objeto o servicio nacional capaz de ser ofrecido al mejor postor.

La Ley de *Obras Públicas*, se refiere visible y notoriamente a los ferrocarriles, puentes, caminos, edificios y demás construcciones de cierta magnitud, y no puede sin violencia incluirse en tal categoría o la impresión de una memoria, o la conducción de una valija.

No es justo culpar entonces a la Dirección General si ha prescindido de la presencia del Escribano en los casos en que no se ha tratado de lo que se ha entendido hasta ahora por *obras públicas*.

Considero, sin embargo, que la presencia del encargado de la fe pública no puede ser sino provechosa en toda licitación, sea o no importante el objeto, siendo tal vez más cuanto menor sea el valor, pues, es bien sabido que los grandes intereses se defienden por sí mismos.

Consecuente con el espíritu de la ley antes citada, creo, así, conveniente que declare V. E. que la presencia del Escribano de

Gobierno es necesaria en el acto de apertura de las propuestas, cualquiera que sea la importancia del objeto licitado. — Julio 4 de 1882.

Tomo 6, pág. 339 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiendo el Ministro del Culto, acordado una licencia sin término al Deán de la Catedral de Córdoba, a solicitud de éste, fundada en su avanzada edad y quebrantada salud, y por su parte el Obispo de Córdoba sólo le acordó en conocimiento de lo anterior, una por seis meses con opción a otra por igual término siempre que durante esta última el beneficiado costeara a un capellán que hiciera sus veces en los oficios del culto, corresponde que el P. E. como un medio de conciliación, fije un término prudencial a la licencia que se le acordó por el Ministerio, dejando a salvo los derechos del Deán para pedir su jubilación, si ello corresponde y no le fuese posible desempeñar después los deberes de su cargo.

El Deán de la Iglesia Catedral de Córdoba, —sobre dispensa para no concurrir a los oficios inherentes a su dignidad

Señor Ministro:

Lo licencia ilimitada acordada al canónigo Vázquez de Novoa, para no asistir a los *Oficios inherentes a su dignidad*, importa una verdadera jubilación que sólo puede acordarse en ciertos casos y en determinadas circunstancias.

Creo por esto, que el medio más conducente a conciliar las dificultades que suscita la nota del Señor Obispo de Córdoba, con las consideraciones que merecen la edad y los servicios del citado canónigo Vázquez de Novoa, sería que fijara V. E. un término prudencial a la licencia que se le ha concedido, dejando a salvo su derecho para pedir su jubilación, si a ello hubiere lugar y no le fuese posible desempeñar después los deberes de su cargo. — Julio 5 de 1882.

Departamento de Justicia y Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 21 de 1882.

Tomo 6, pág. 314 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Si bien es justo el sello de \$ 50 en que deben extenderse los títulos adquisitivos de tierras nacionales (art. 23 de la Ley de papel sellado) cuando se trata de áreas de cierta extensión, no lo es para el caso de pequeños solares o quintas que representan escaso valor; no obstante ello, debe aplicarse la disposición citada en todos los casos, hasta tanto se recabe del Honorable Congreso la correspondiente modificación.

Sobre la clase de papel sellado que debe emplearse en los títulos de concesiones de Tierras Nacionales

Señor Ministro:

«Los títulos de concesión de tierras nacionales u otros que importen merced o privilegio deberán extenderse en el sello de cincuenta pesos fuertes» dice literalmente el art. 23 de la ley de papel sellado.

Ante disposición tan terminante, no veo como puedan tener cabida las observaciones de la Oficina Central de Tierras y de la Contaduría General por más sensatas que parezcan.

Cierto es, que en mucho casos este impuesto parecerá excesivo. En el presente, se trata de una área de cierta consideración de 75 hectáreas, y bien puede pagar los \$ 50 el que recibe el beneficio de la concesión.

Cuando hayan de escriturarse, empero, solares o quintas en territorios desiertos de escasísimo valor, este sello estará en contradicción indudablemente con la notoria liberalidad de legislación en materia de colonización.

No veo otro medio de salvar este inconveniente sino es el que indica la Dirección General de Rentas, que al discutirse las leyes de impuestos, recabe V. E. del Congreso la modificación consiguiente. — Julio 6 de 1882.

Ministerio de Hacienda. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 14 de 1882.

Corresponde que se haga lugar a la revalidación del título de Calígrafo expedido por la Provincia de Buenos Aires, por no estar reglamentada esta profesión en el orden nacional y no obstante, considerar irregular este proceder.

Los Señores Uzal y Hoyo, — piden revalidación del título de Calígrafo

Señor Ministro:

No estando reglamentado el ejercicio de la caligrafía por las leyes de la Nación y aunque no me parece este proceder muy regular no veo inconveniente en que dando V. E. el crédito que merece el diploma de calígrafos públicos expedidos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a favor de los Señores Hoyo y Uzal lo declare revalidado al objeto de que puedan en su mérito ser habidos dichos Señores por tales calígrafos ante los tribunales de la Capital. — Julio 6 de 1882.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Septiembre 29 de 1882.

Tomo 6, pág. 341 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se acceda al pedido que formula la Sociedad de referencia, para que se ordene a los agentes de Policía, que presten atención a las indicaciones que los miembros de la Sociedad les hagan, con el propósito de prevenir o reprimir los delitos contra las leyes y ordenanzas vigentes de protección a los animales, debiendo al efecto las personas que componen la Sociedad, munirse de una tarjeta que será visada por el Jefe de Policía, y que les servirá de credencial ante los nombrados agentes de policía.

La Sociedad Protectora de Animales, —reclama ser atendida por las autoridades para los fines de su Institución.

Señor Ministro:

La Sociedad Argentina de Protección a los animales solicita de V. E. ordene a las autoridades a quienes corresponda *presten oído a las indicaciones que los miembros de dicha sociedad les hicieren.*

Solicita a la vez, se prevenga al Departamento de Policía autorice con su firma y sello las tarjetas que la sociedad reparte a sus miembros para que sean reconocidos como tales.

Nada más natural, ni más sencillo, y es de admirar haya suscitado tan grande alarma en el ánimo del Señor Jefe.

La misión de la Sociedad quedaría reducida a una simple aspiración humanitaria, sino tuviera medios prácticos y ostensibles de acción.

El Señor Jefe cree que la Sociedad debe buscar su verdadera influencia de la propaganda pública.

Es fuera de toda duda que es éste uno de los medios más eficaces de acción.

Obrando sobre la mente impresionable del niño desde la escuela, y sobre la generalidad, por publicaciones especiales, y por la palabra desde el púlpito y en reuniones frecuentes; estimulando por último la acción legislativa, las sociedades extranjeras que sirven de modelo y de estímulo a la nuestra, han alcanzado los resultados más satisfactorios.

No es dudoso que la Sociedad Argentina, siguiendo esta huella, los alcanzara también.

No puede desconocerse, empero, que su acción será lenta por demás, si ha de limitarse a obrar por el convencimiento sobre la moral, a principiar desde la escuela.

Los que manejan animales poco se cuidan de lecturas, discursos y sermones.

Algo más práctico es necesario: Nada más eficaz que la acción y el ejemplo de personas educadas ya en el sentimiento de benevolencia para con los seres irracionales. El procedimiento que el Señor Jefe de Policía indica, es poco menos que principiar por donde se ha de concluir.

El mismo Señor Jefe reconoce que es el deber de los empleados de su dependencia *hacer cumplir las ordenanzas que de mucho tiempo atrás ha dictado la Municipalidad en protección de los animales*. Reconoce también que es el deber de los agentes de Policía *oír cualquier indicación oportuna que se les haga*. ¿Qué inconveniente puede haber entonces, en que dichos agentes atiendan, si se quiere con especial solicitud, las indicaciones que les fueren hechas por los miembros de la Sociedad?

Que la vigilancia de los agentes de Policía no es bastante para reprimir los malos tratamientos de que son víctimas los animales entre nosotros, lo prueban los casos de notoria crueldad que dia-

riamente presenciarnos; lo prueba el aplauso con que ha sido recibida la formación de la sociedad.

Los agentes de Policía, fuerza es reconocerlo, no están preparados por regla general, para apreciar donde termina el servicio que deben prestar los animales y principia el abuso de los medios con que se les obliga a prestar ese servicio. Necesítase para esto un sentimiento más elevado de benevolencia, que sólo se adquiere por la educación.

Es cosa inocente en España matar a los toros, enfurecidos, y ver morir a los caballos indefensos. Las riñas de gallos tienen todavía entre nosotros sus apasionados. La matanza de palomas sin más objeto práctico que ejercitar la destreza del tirador, está hoy en gran predicamento.

A medida que el sentimiento de humanidad se educa, como se educa y perfecciona con la práctica toda facultad en el hombre, estos espectáculos bárbaros tienden a desaparecer.

El Presidente de la Sociedad Rone de Inglaterra, sociedad patrocinada por la Reina y toda la familia real, Lord. Merdare, se complacía en su última reunión anual en enumerar los progresos que había hecho la sociedad en sus cincuenta años de existencia.

Señalaba, entre otros, la abolición de las riñas de gallos, del uso de espuelas en las carreras, las mejoras en el transporte de ganado, etc., etc.

«A medida que el sentimiento de conmiseración se educa, decía el noble Lord, la esfera de acción de la Sociedad se dilata. Nuevos géneros de crueldad se han puesto en conocimiento de la Comisión: como ser echar perros a cazar gatos, alimentar las serpientes en los jardines públicos con animales domésticos vivos, etc., etc.: y hay todavía agregaba, otro género de crueldad que probablemente jamás se os habrá ocurrido, y que sin embargo es muy general. Tal es al mudar de casa, dejar abandonados y sin asegurarles medios de vivir a los gatos que impropiamante se supone toman más cariño a las habitaciones que a las personas.

Con este motivo observó la gran filantropía del Reino Unido, la Baronesa Lady Cartts, que no sólo se ejercía este género de crueldad con los gatos, sino también con los pájaros, que muchas personas, al ausentarse, dejan encerrados en sus jaulas.

Estas observaciones fueron recibidas con la más calurosas muestras de simpatía.

Es más que probable que si algún miembro de nuestra sociedad protectora se interesara en favor de algún gato o de algún pájaro abandonado, y requiriera el concurso de nuestros vigilantes para castigar semejante género de crueldad, no encontraría sino la burla y el ridículo. Dada nuestra educación sobre este particular, no es ya poco se les pueda hacer comprender que es inhumano exigir de un pobre animal arrastre un peso enorme, y maltratarlo con ferocidad porque no desempeña un trabajo superior a sus fuerzas.

Me he detenido en estas consideraciones para demostrar de una manera tangible cuan necesaria es la intervención que solicita la Sociedad Protectora Argentina, si no ha de ser ilusoria su misión.

A la verdad, como digo al principio, no alcanzo a explicarme la oposición del Señor Jefe de Policía.

Dice que es contrario al orden establecido, acordar *autoridad sobre los agentes de Policía a personas extrañas o la repartición.*

El Señor Presidente de la Sociedad observa con mucha oportunidad, que el orden establecido entre nosotros no puede ser sino el orden establecido en todos los pueblos civilizados; *el orden de la libertad de las instituciones y de la humanidad*; y que, si en aquellos pueblos no se ha encontrado atentatorio que los miembros de las Sociedades Protectoras estimulen el celo de los agentes de Policía en defensa de los seres que no pueden defenderse por sí mismos, no puede serlo entre nosotros.

La objeción del Señor Jefe parte visiblemente de un error.

El cree que los Agentes de su Departamento van a quedar colocados bajo la autoridad o dependencia de los miembros de la Sociedad.

No es esto lo que ella solicita.

Pide simplemente se ordene a las autoridades a quienes corresponde presten *oído a las indicaciones que los miembros de la Sociedad* les hicieren para prevenir o reprimir los delitos contra las leyes y ordenanzas vigentes en protección de los animales.

El Señor Juez reconoce que es deber de los agentes de Policía, y que les está expresamente recomendado cumplir las ordenanzas Municipales referentes a reprimir los actos de crueldad contra los animales.

Qué inconveniente puede haber, entonces, en que una persona más caracterizada, mejor preparada para el desempeño de esta

noble misión, requiera de los agentes de Policía hagan efectivas aquellas ordenanzas, y estimule su celo?

La utilidad de una indicación puede ser en ciertos casos tan discutible como su conveniencia, agrega el Señor Jefe, y el criterio de los funcionarios es la única norma para juzgar si deben o no aceptarse.

¿Qué procedimiento se seguirá, pregunta, cuando las indicaciones de la Sociedad no sean atendidas?

La contestación es bien sencilla.

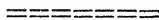
Los empleados de Policía, observa justamente el señor Presidente de la Sociedad, no son soldados de línea sujetos a la ordenanza militar, y que deban una obediencia pasiva a sus Jefes. Si no atendiera las observaciones justas de los miembros de la Sociedad, ocurrirán estos a sus superiores, para que a la vez que castiguen a los que ejercen actos de sevicia contra los animales, castiguen también a los que, teniendo el deber, no los evitaron.

Pienso por lo expuesto, que no debe V. E. vacilar en acceder a lo que la Sociedad Protectora solicita, tanto en cuanto a ordenar a las autoridades Policiales atiendan las indicaciones que les fueren hechas por sus miembros, con respecto a legalizar sus tarjetas.

De esta manera, y mientras llegamos a crear la Policía especial, que es de práctica en otros pueblos, habrán introducido en nuestro orden establecido un elemento de civilización de que carece

Agosto 3 de 1882.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 15 de 1882.



- I. — En los casos de injurias o insultos graves contra funcionarios o autoridad administrativa, que configuren el delito de desacato, el procedimiento a seguir, es el de ocurrir al juzgado de Sección, con remisión de los antecedentes y aún la misma persona del delincuente, según sea la gravedad de las injurias o insultos.
- II. — Cuando la conducta de un individuo fuese perjudicial a la disciplina de una repartición, sin que llegue a constituir un verdadero desacato, el procedimiento es esencialmente administrativo, teniendo en este caso, el Jefe de la Oficina, donde han ocurrido los hechos, la facultad de prohibirle la tramitación de asuntos lo que equivale a no permitir su entrada, debiendo poner los hechos en conocimiento del Superior.

Don Silvano Brons, —se queja del proceder del Administrador de la Aduana de la Capital por negarle el derecho de tramitar asuntos ante esta repartición

Señor Ministro:

El artículo 6 de la ley de Septiembre designando los crímenes, cuyo juzgamiento corresponde a los Tribunales Nacionales establece la penalidad con que deben ser castigados los que *calumnian, insultan o amenazan a alguna autoridad de la Nación o a un superior con ocasión de sus funciones y en el acto de ejercerlas.*

El procedimiento a seguir para la represión de estos delitos, es bien sabido, y lo indica acertadamente la Dirección General.

Pero, no se trata en este caso de desacato, es decir, de una *calumnia, insulto o amenaza*, que merezca ser llevada al conocimiento del Juzgado de Sección.

. Cuando estas *calumnias, insultos o amenazas* no asuman una gravedad tal que merezca la formación de un proceso, cuando afectan, sin embargo, el orden y disciplina de una oficina distraiendo de su trabajo a los empleados, poniendo en peligro su moralidad con consejos perniciosos y con el ejemplo, más pernicioso todavía de la inmoralidad no reprimida; en este caso, digo, no tendrá el Jefe de Oficina otro medio de salvar su autoridad que ocurrir a los Tribunales?

No encuentro tan sencilla la solución como lo cree la Dirección General .

La presencia de un individuo puede ser perjudicial en una oficina, sin que su conducta dé margen precisamente a ser llevado ante la Justicia.

¿No tendrá en tal caso el encargado de esa oficina medio alguno de defender los intereses cuya guarda le está confiada?

Creo que sí. Creo que sin violar ningún principio, ni atacar ningún derecho, puede el Jefe de una oficina no permitir la entrada a ella a aquellas personas cuya presencia considera perjudicial a su disciplina.

El Sr. Administrador recuerda la disposición de V. E., que prohíbe a los empleados destituidos por mala comportamiento tramitar asuntos ante las autoridades de la Nación. No puede considerarse esta disposición como una pena, ni menos, como una limitación a la libertad de ejercer toda industria lícita, según se pretende. El Gobierno Nacional sólo ejerce en este caso el derecho que tiene el Jefe de una administración; de un negocio cualquiera; y aún el simple Jefe de familia, de no tener concesiones con aquellos individuos cuya relación le es, o considera serle, perjudicial. Por otra parte, los derechos que la Constitución garanten tienen siempre la limitación de no estar en oposición con otros derechos, igualmente garantidos. La prohibición que V. E. ha establecido con respecto a los empleados destituidos por mala comportamiento para todas las reparticiones nacionales, no puede negarse, en mi opinión, a los Jefes en sus respectivas oficinas, con respeto a todo individuo cuya presencia considera perniciosa.

Es bien entendido que no se ha de proceder caprichosamente, sino por motivos justificados. En todo caso queda siempre, a los que injustamente perjudicados se creyeren, el derecho de ocurrir a V. E.

La reconocida discreción de los Jefes de las reparticiones nacionales, es una garantía de que la facultad sólo será ejercida en los límites indispensable para el mejor servicio del público.

No estoy por lo expuesto de acuerdo esta vez con la Dirección General.

El Señor Administrador Amadeo no ha extralimitado sus facultades. Nada autoriza por otra parte, la suposición de que haya abusado de ellas, en la prohibición hecha a D. S. Brons, que no habría razón en dejar sin efecto.

Resumiendo ahora, mi pensamiento, para llegar a la regla general que la Dirección General desea, diré que es mi parecer:

1.º) Que en los casos, de injurias o insultos graves que constituyen desacato, el procedimiento no puede ser otro que ocurrir al juzgado de Sección, remitiendo los antecedentes, y aún la misma persona del delincuente, según la gravedad de las injurias o insultos.

2.º) Que los casos en que la presencia de un individuo fuera perjudicial a la disciplina de una repartición sin que la conducta constituya un verdadero desacato, el Jefe de tal repartición tiene la facultad de prohibirle tramitar asuntos ante ella lo que equivale a no permitirle su entrada, poniéndolo en conocimiento de sus superiores. — Agosto 8 de 1882.

Tomo 6, pág. 343 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El Escribano General de Gobierno, está inhabilitado para otorgar en su registro, escrituras entre particulares en las que no tienen intervención alguna los Poderes Públicos.

El Escribano de Gobierno, —sobre si podrá otorgar contratos públicos entre particulares, sin intervenir el Gobierno

Señor Ministro:

La duda que motiva la consulta del Escribano de Gobierno, ha debido encontrarla resuelta en el registro a su cargo.

Si los escribanos en cuyo oficio ha sucedido no se hubieran reputado como simples empleados a sueldo, encargados exclusivamente de dar fe de los contratos en que la Nación es parte, habría encontrado los protocolos que continúa, llenos de testamentos, de liquidaciones hereditarias etc., etc., que ninguna conexión tienen con las concesiones de ferro-carriles, contratos de colonización y demás actos de interés general que los Poderes Públicos han creído deber revestir de la solemnidad posible.

La duda del Señor Escribano de Gobierno no tiene razón de ser ni necesita ser resuelta. — Estudio, Agosto 9 de 1882.

Tomo 6, pág. 353 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Las leyes que ordenan la liquidación y el pago de las deudas de la Nación son de orden público y por lo tanto no circunscriptas al derecho común. Fijan términos perentorios a los efectos de la liquidación de los créditos contra el Fisco, pasados los cuales no pueden ser éstos admitidos, aunque con ello parezcan apartarse de los principios del derecho civil.

D. Emilio D. Cabral, sobre cobro de un crédito por suministros a les Ejércitos Libertadores de la Independencia

Señor Ministro:

La Señora de Cabral solicita la liquidación y abono de intereses sobre el capital que le fué pagado en 1880, después de la pérdida del expediente originario.

Esta solicitud comprende dos puntos: 1.º— Si se ha de abonar intereses; 2.º— Hasta que fecha.

No considero justo que la Señora de Cabral sea privada de intereses que debió producir su crédito, por la circunstancia, que no le es imputable, de haberse extraviado el expediente.

Sobre el 2.º estoy de acuerdo con la Contaduría. No hay razón para que la Señora de Cabral sea colocada fuera de los términos del decreto de 7 de Noviembre de 1871.

Las leyes que ordenan la liquidación y pago de la deuda de una Nación, son leyes de orden público, que no están circunscriptas a los límites estrechos del derecho común. La Nación que liquida su deuda tiene que tener en cuenta sus recursos y proceder según ellos, dentro de sus límites.

Tiene que tener también en cuenta el tiempo que no puede ser indefinido. La liquidación tiene su tramitación especial, que no puede ni debe estar abierta eternamente. Por esto, estas leyes tienen términos fatales, que obligan a todos aunque parezcan apartarse de la extriez del derecho civil. Basta recorrer este expediente para penetrarse de que ha habido notable diferencia en su tramitación por parte de la Señora de Cabral. Entre su último escrito y el informe de la Contaduría de Septiembre de 1880, por ejemplo, medían próximamente dos años. Justo es que sufra ella también las consecuencias de la demora, de que en parte es responsable.

Pienso, por lo expuesto, que debe V. E. ordenar la liquidación y abono de intereses, desde la fecha de la ley de 1864 hasta de la

que determinó la resolución general de V. E. de 7 de Noviembre del 71. — Septiembre 25 de 1882.

Tomo 6, pág. 290 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Procede el pedido formulado por el cargador y agente argentino de una barca francesa —por intermedio del Encargado de Negocios en Montevideo— para que el Poder Ejecutivo continúe, con la reclamación que ellos presentaron al Gobierno de Chile pidiendo la correspondiente indemnización por el apresamiento y violencias llevadas a cabo por un buque de guerra Chileno contra la nombrada embarcación en aguas jurisdiccionales argentinas, hechos que dieron lugar a importantes polémicas entre ambos Gobiernos, solucionadas a la época del presente reclamo.

Aprisionamiento de la barca francesa «Jeanne Amelie» por la corbeta de guerra chilena «Magallanes», —reclamación del cargador J. Quevedo, súbdito argentino.

Señor Ministro:

D. Juan Quevedo, cargador de la barca francesa «Jeanne Amelie» capturada en el Monte Leon por la Corbeta Chilena «Magallanes» y D. Francisco Van de Velde, Agente del mismo cargador, ocurren a V. E. en solicitud de que continúe la reclamación iniciada cerca del Gobierno de Chile por indemnización de los daños y perjuicios que aquel apresamiento les irrogó.

Bajo la dolorosa impresión que tan inesperado como injustificable atentado causó en toda la República, apenas tuvo de él conocimiento el Gobierno, se inició la reclamación consiguiente, tanto con respecto al desagravio de la ofensa inferida a la honra nacional cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios a que tenían derecho los armadores y tripulantes de la barca apresada.

No será acaso sin objeto recordar brevemente los antecedentes de esta gestión.

Tan luego como tuvo conocimiento de los hechos, el Encargado de la República en Chile competentemente autorizado, protestó con la energía que el caso requería contra el acto ejecutado por la Corbeta «Magallanes» en menosprecio de la soberanía que ejerce y ha

ejercido en todo tiempo la República en las costas del Atlántico, desde el Río de la Plata al Cabo de Hornos. — Memorias de Relaciones Exteriores, de 1877, página 883.

El Gobierno de Chile, aceptando los hechos pretendió echar su responsabilidad sobre el Cónsul Argentino en Montevideo que decía había expedido un permiso *irregular e importuno*, en presencia de las reclamaciones que el Gobierno de Chile había hecho la vigilancia que ejercía para no consentir actos de dominio en la Patagonia hasta el Norte del Río Santa Cruz.

Declaró el mismo Sr. Alonso, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile que su Gobierno había estado muy lejos de pretender inferir ofensa alguna a la República, y terminó la discusión con nuestro Encargado de Negocios diciendo que si este incidente diese mérito a mayor desenvolvimiento, la Legación recientemente acreditada ante el Gobierno Argentino patentizaría la rectitud de los procedimientos del de Chile, (pág. 890).

Bajo la fe de estas amistosas declaraciones y no obstante la profunda excitación producida en todos los espíritus, el Señor Barros Arana fué reconocido en el carácter con que había sido investido por su Gobierno.

El Señor Dr. Irigoyen Ministro de Relaciones Exteriores, entonces, dirigióle una extensa nota, poniendo en evidencia los derechos de la República y la enormidad del atentado y pidiendo a la vez la desaprobación de la conducta del Comandante de la «Magallanes» y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por los propietarios, cargadores y tripulantes de la «Jeanne Amelie» (pág. 912).

El Señor Barros Arana contestó reproduciendo los argumentos del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Señor Alonso, sobre la inoportunidad del permiso otorgado por el Cónsul Argentino en Montevideo y terminó diciendo que su Gobierno no creía poder acceder en todas sus partes a las exigencias del Gobierno Argentino, porque ello importaría un prejuizgamiento de la cuestión. (pág. 922).

El Sr. Dr. Irigoyen replicó con toda oportunidad que el Gobierno de Chile no podía por si solo y por sus propias declaraciones, alterar el statu-quo reconocido y aceptado de común acuerdo ni menos crear una situación que pudiera servir de norma según se pretendía a los Cónsules y autoridades Argentinas, responsables solo de sus actos ante sus superiores. El Señor Irigoyen insistió en la reparación de-

bida a la Bandera Nacional y en la indemnización a los perjudicados por la captura, agregando que el Gobierno Argentino reputaba necesaria esta indemnización y la desaprobación de la conducta del Comandante de la «Magallanes» para ocuparse de la cuestión de límites. (pág. 954).

Al mismo tiempo el Señor Ministro de Francia se dirigía al Gobierno de la Nación reclamando indemnización para los Armadores Franceses, fundándose en que la «Jeanne Amelie» había sido capturada en aguas argentinas y haciendo operaciones de comercio lícitas bajo permiso de autoridades de la República (pág. 955).

El Señor Irigoyen contestó muy oportunamente que era doctrina admitida en el Derecho Internacional, que una nación no es responsable por perjuicios causados por fuerza mayor, incendios, bombardeos y demás actos que no se ejecuten con su beneplácito y aprobación sino tan solo por los perjuicios voluntarios y reflexionado de que fuera autor. El Gobierno Argentino no puede por consiguiente (decía por conclusión el Señor Irigoyen) reparar perjuicios procedentes de actos de un gobierno extranjero contra los que ha protestado. Los damnificados deben esperar el resultado de las gestiones pendientes que era su decidido propósito activar.

En este estado sobrevino un cambio en la administración Nacional entrando el Dr. Montes de Oca a reemplazar al Dr. Irigoyen.

Sabido es el empeño con que se ocupó de esta delicada cuestión el nuevo Ministro.

Después de la más laboriosa negociación en Enero de 1878, el Dr. Montes de Oca celebró con el Plenipotenciario Chileno un Tratado que resolvía la cuestión principal, y al mismo tiempo un Protocolo que se registra en la página 69 de la exposición de dicho Dr. Montes de Oca; daba el Ministro Chileno explicaciones que el Plenipotenciario Argentino consideraba satisfactorias y se convenía que la reclamación deducida sobre este incidente sería sometida a la decisión de árbitros.

Este Protocolo no fué aceptado por el Gobierno de Chile, no porque se sometiese por él fallo al de árbitros de reclamación pendiente, sino porque el Ministro Chileno daba en él explicaciones que su Gobierno consideró intempestivas.

El tratado canjeado en octubre del año próximo pasado, ha puesto al fin un término feliz a la ardiente y envejecida cuestión que amenazaba turbar la paz de dos Repúblicas hermanas.

No se hace, es cierto, mérito en ninguna de sus cláusulas de la reclamación pendiente sobre indemnización, sin duda alguna porque se quiso evitar que este inconveniente trabara la marcha de su negociación principal o bien porque se juzgó que implícitamente quedaba ella resuelta por las estipulaciones del Tratado.

A la verdad, reconocido el hecho de que la costa al Norte del Río Santa Cruz pertenece a la República Argentina, la agresión de la «Magallanes» *ipso facto* queda reconocida y condenada; y como una consecuencia lógica y natural aceptada implícitamente la obligación de indemnizar los perjuicios originados.

Preséntase así hoy esta reclamación bajo los mejores auspicios.

Los Señores Quevedo y Van de Velde piden la continúe V. E.; nada en mi opinión puede ser más justo.

La comportación de estos Señores al esperar pacientemente por tan largo tiempo el resultado de la gestión iniciada, es altamente patriótica y no puede menos de merecer especial solicitud de parte de V. E., en cuyo celo e inteligencia, depositaron ellos toda su confianza y sus más fundadas esperanzas. Septiembre 29 de 1882.

Se ignora resolución.

Tomo 5, pág. 332 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los Tribunales Militares en cualquier lugar de la Nación en que actúen pueden con perfecto derecho, citar testigos, practicar notificaciones, y realizar actos judiciales a la manera de los otros jueces, y las autoridades tanto Nacionales como Provinciales, deben prestarle el concurso que les fuere pedido.

El Jefe del Batallón 9 de línea de guarnición en Concepción del Uruguay, —dá cuenta que el Jefe Político de Entre Ríos se niega a hacer comparecer a un comerciante para que declare como testigo en una información sumaria militar.

Señor Ministro:

En un juicio militar iniciado en la Concepción del Uruguay, con motivo de una falta cometida en servicio por un oficial del

Batallón 9 de línea, el Fiscal en él nombrado requirió la comparecencia de un individuo del comercio, dirigiéndose al Jefe Político para que la hiciera efectiva.

El Jefe Político consultó al Gobierno de la Provincia y fué autorizado para contestar: *que no era competente para ordenar la comparecencia pedida que debía solicitarse de la autoridad ordinaria.*

La deficiencia de esta redacción no permite apreciar claramente si el Gobierno de Entre Ríos entiende que la falta de competencia para hacer la citación está de parte del Jefe Político, o de la Jurisdicción Militar.

En el primer caso, era lo natural pasar la petición del Fiscal a la autoridad ordinaria.

La interpretación que más naturalmente fluye de estos antecedentes parece ser que el Gobierno de Entre Ríos juzga que los Tribunales Militares no son competentes para hacer citaciones de personas sujetas a la jurisdicción ordinaria.

Partiendo de esta base, el Señor Auditor de guerra observa con razón que no es fácil explicar olvido tan notable de principios elementales, después de veinte años de vida constitucional.

La ley que organizó la justicia de la Nación dejó subsistente la jurisdicción Militar que había respetado la misma Constitución. Sin ello no se concibe la existencia de fuerzas regulares, ni se concibe tampoco sin éstas la misma existencia de la Nación.

El Presidente de la República como *comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y tierra*, tiene facultad de situarlas en cualquier punto del Territorio Nacional en que lo juzgue conveniente.

En cualquier punto en que se encontrare una fuerza nacional, se encuentra, así, por derecho propio; y su jefe inmediato tiene la facultad de formar en él el Tribunal Militar que autorizan las Ordenanzas.

El Tribunal Militar así formado ejerce, por consiguiente, en cualquier punto del Territorio Nacional, por *derecho propio*, aquella jurisdicción indispensable para el desempeño de su misión, de la misma manera que la ejercen los Juzgados de Sección.

Puede con perfecto derecho citar testigos, practicar notificaciones y otros actos judiciales, a la manera de los otros Jueces, y las autoridades tanto Nacionales como de Provincias, están en el deber

de prestarle el auxilio que le fuere pedido y que está ordenado por el art. 13.º de la ley de jurisdicción y competencia.

La resistencia del Jefe Político de la Concepción a ordenar el comparendo que le había sido pedido, y la aprobación del Gobierno de Entre Ríos a su proceder no tiene por consiguiente, como he dicho explicación posible, sino en la deficiencia de nuestra educación constitucional.

Pienso que bastará que V. E. se dirija al referido Gobierno de Entre Ríos haciendo presente lo que dejo expuesto, y que transcriba este parecer a la Comandancia General de Armas para que sirva de reglamento en lo sucesivo. Octubre 6 de 1882.

Tomo 6, pág. 327 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No tiene competencia el P. E. para determinar si las leyes que gravan la exportación de ganados son o no constitucionales, ello corresponde al Poder Judicial, no en forma de declaración general ni procediendo de oficio, sino a requisición de quienes se crean perjudicados por la infracción de un principio constitucional.
- II. — Las leyes, aunque se reputen inconstitucionales deben en principio cumplirse; si se trata de impuestos, deben pagarse bajo protesta para ocurrir luego ante la Justicia Federal demandando su repetición.

El Inspector de Rentas Nacionales de Paso de los Libres, —sobre exportación de ganado en pie

Señor Ministro:

El Inspector de Rentas, Camelino, puso en conocimiento de la Dirección General, que la Provincia de Corrientes, bajo la denominación de impuesto de *traslación y consumo*, había establecido un verdadero derecho de exportación sobre los ganados en pie.

Con este motivo, la Dirección solicita de V. E. se dirija a los Gobiernos de las Provincias pidiéndoles remitan las leyes de impuesto que rigen en las mismas, *para formar un juicio exacto acerca de las que se encuentran en pugna con la constitución.*

El Señor Procurador del Tesoro indica la conveniencia de que el pedido se limite a aquellas Provincias en que se hayan creado los impuestos que se denuncian como inconstitucionales.

Pienso que V. E. no debe aceptar la indicación de la Dirección General, ni aún con la limitación que aconseja el Señor Procurador del Tesoro.

No necesito decir que es atribución exclusiva del Poder Judicial resolver acerca de sí una ley es o nó contraria a la constitución.

No necesito recordar tampoco que el Poder Judicial no proceda en estos casos *motu proprio* ni por declaraciones generales sino dirimiendo el conflicto entre dos leyes de carácter distinto; entre una ley fundamental, y otra de carácter ordinario, en aquel caso especial que se someta a su decisión y a requisición de aquel que se cree perjudicado por la infracción de un principio constitucional.

Nada aprovecharía por consiguiente a V. E. el reconocimiento de las leyes que se dicen inconstitucionales pues V. E. ni tiene jurisdicción para declararlas tales suponiendo que lo fueran, ni está en la esfera de su misión ocurrir a la Justicia Federal pidiendo tal declaración.

Si algún vecino de Corrientes encuentra que el impuesto de traslación y consumo denunciado por el Inspector Camelino, es contrario a la Constitución; el medio de eximirse de su pago es bien sencillo y viene indicado por numerosas resoluciones de la Corte Suprema.

El interesado debe principiar por cumplir la ley, pues es ante todo necesario que las leyes sean respetadas.

Abonará el impuesto reputado inconstitucional bajo reserva o protesta de repetir su devolución y ocurrir en seguida al Juzgado de Sección.

Si los vecinos de Corrientes abonan voluntariamente tal impuesto, sin cuidarse de que sea o no conforme a la Constitución, V. E. no tiene jurisdicción ni medios de impedirlo. Y es esto aplicable a todos los impuestos en general.

El conocimiento de las leyes de Provincia que solicitan la Dirección General y el Señor Procurador del Tesoro no tendría, así, como he dicho, objeto práctico, sino es satisfacer una mera curiosidad.

No creo, por mi parte, ni la necesidad, ni la conveniencia. —
Octubre 17 de 1882.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 27 de 1882.

Tomo 6, pág. 323 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Sólo al Poder Judicial compete dirimir conflictos de leyes entre la Nación y una Provincia.
- II. — Tratándose de leyes impositivas debe el peticionante en principio, cumplir con lo exigido en la ley provincial, para luego ocurrir ante la Justicia Federal, promoviendo el correspondiente juicio de repetición.

D. Juan B. Goñi, empresario de Mensajerías, — pide la exención del pago de una patente que le impuso el Gobierno de la Provincia de San Juan.

Con fecha 13 de Setiembre de 1882, la Dirección General de Correos y Telégrafos se dirigió al Ministerio del Interior elevando una solicitud del Empresario de Mensajerías D. Juan B. Goñi en la que daba cuenta que el Gobierno de la Provincia de San Juan le exigía el pago de una patente de doscientos pesos fuertes al año no obstante de que por el art. 18 de su contrato y 79 de la ley de Correos estaba exceptuado del pago de estos impuestos.

Solicitado informe del Gobierno de San Juan manifestó que dicho cobro se hacía en virtud de lo establecido por la ley de patentes vigente y que se había dado espera al Señor Goñi hasta su llegada a esa Ciudad como lo había anunciado.

Pasado en consulta al Señor Procurador General de la Nación se expidió en los siguientes términos:

Señor Ministro:

El Señor Gobernador de San Juan termina el informe que le pidió V. E. diciendo: que *había acordado espera al Señor Goñi hasta que llegase a aquella ciudad.*

Es de esperarse que en vista de las consideraciones que sin duda habrá hecho valer el empresario, el gobierno de San Juan

habrá desistido del cobro de la patente que origina la nota del Sr. Director General de Correos.

Y no habiendo una resolución definitiva, no creo que deba V. E. tomar por el momento resolución alguna.

Además, si el Gobierno de San Juan insistiese en el cobro de la patente, habría llegado el caso del conflicto entre una ley de la Nación y una ley de Provincia, para cuya solución carece de jurisdicción V. E.

El camino a seguir en esta emergencia es bien sencillo y viene indicado por numerosas resoluciones de la Corte Suprema.

El Señor Goñi debe principiar por respetar la ley de la Provincia de San Juan por cuanto, ante todo, las leyes deben ser cumplidas.

Debe pagar la patente, bajo protesta y ocurrir en seguida a la justicia federal, pidiendo la devolución de lo que indebidamente se le ha exigido en virtud de una ley de Provincia en abierta oposición con otra ley de la Nación, cuya preferencia es indisputable. Noviembre 1.º de 1882.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 16 de 1882.

Tomo 6, pág. 381 — Inf. de los Consej. del P. E.

=====

Debe considerarse el Cap. 2.º de la Ley de Organización de los Tribunales de la Capital —que legisla sobre Escribanos Públicos— como referido también a los Territorios Nacionales, atento al carácter general que revisten sus disposiciones.

El Ministerio del Interior, —sobre la creación de una Escribanía de Registro en Viedma (Patagonia)

Señor Ministro:

La creación de una Escribanía de Registro en Viedma no puede ser sino conveniente.

Siempre ofrece mayores garantías, que las escrituras de transmisión de propiedades, los poderes, etc., sean otorgados ante un escribano público, y no ante los jueces de Paz.

El capítulo 2.º de la Ley organizando los Tribunales de la Capital, contiene numerosas disposiciones con respecto a los Escribanos de Registro.

El art. 162 confiere al P. E., *la creación de nuevos registros; previos los informes que sean del caso.*

El 164 prescribe la fianza que deben prestar.

El 170 confiere a V. E. *la facultad de nombrar y renovar estos escribanos, previo informe de la Cámara de lo Civil y Comercial, según el caso.*

El capítulo 3.º determina las condiciones que deben revestir los que aspiren a desempeñar estos cargos.

Si bien estas disposiciones están calculadas para la Capital, su carácter general, las hacen, en mi opinión, aplicables a los Territorios Nacionales, aun con preferencia a las antiguas leyes que rigen la materia.

Y puesto que se trata de un Territorio Nacional, pareceme que debiera V. E. pasar este asunto a informe de la Corte Suprema, a la que según el art. 95 de la Ley antes citada, corresponde la superintendencia sobre toda la Administración de Justicia. — Noviembre 3 de 1882.

Departamento de Justicia. Resolución de Setiembre 10 de 1884, que dispone se pase al Ministerio del Interior por corresponderle a éste todo lo relativo a los Territorios.

Tomo 6, pág. 394 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se dé vista a la Cámara del Crimen de las modificaciones que propone al reglamento de la Penitenciaría el Director de la misma, por cuanto la Ley de Organización de los Tribunales colocó a las Cárceles bajo el cuidado e inspección de dichas Cámaras.

El Director de la Penitenciaría, —sobre modificación del artículo 46 del Reglamento del Establecimiento

Señor Ministro:

El Reglamento que provisoriamente rige en la Penitenciaría, fué aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, de quien este Establecimiento dependía a la sazón, *oídos los pareceres de las Comisiones que lo habían redactado*, dice el Decreto de Mayo 22 de 1877.

Posteriormente pasó la Penitenciaría a la Administración Nacional con su mismo reglamento provisorio.

La Ley de Diciembre último organizando los Tribunales de la Capital, colocó las Cárceles bajo el cuidado e inspección de la Cámara de lo Criminal, y confirió a ésta, como a la de lo Civil, la facultad de dictar sus reglamentos con la aprobación de la Corte Suprema.

El Establecimiento de la Penitenciaría, como es sabido, y consta de su mismo reglamento, no es un verdadero presidio en que los condenados vayan a cumplir su condena, bajo el cuidado exclusivo del Poder Ejecutivo a cuya disposición los puso la justicia, después de terminada su misión.

Es un Establecimiento en que, con la separación consiguiente, se encuentran los detenidos durante la tramitación de sus causas, y los definitivamente condenados.

Esta circunstancia coloca a los Sres. Jueces en condiciones de apreciar debidamente los vacíos e inconvenientes de la marcha del establecimiento.

Así parece haberlo comprendido el mismo Poder Ejecutivo al sancionar el reglamento.

La Autoridad Judicial, dice el art. 3.º, *tendrá el derecho de visita a efecto de enterarse si se cumplen las condenas en el modo y*

forma que han sido impuestas. El Ministerio Público elevará informe respecto del régimen del Establecimiento, manifestando los vicios que observe o mejoras de que sea susceptible, a efecto de que se promueva la corrección de los reglamentos o las medidas necesarias.

La modificación que propone el Sr. Director es de importancia, y puede decirse que modifica sustancialmente el régimen establecido.

El art. 46 limita a ocho días el tiempo de reclusión en que debe ser dejado el preso después de su entrada, entregando a sus reflexiones hasta tanto que pida trabajo y libros.

El Sr. Director propone que estos ocho días sean extendidos a seis meses sin trabajo y otros seis con trabajo.

Como se ve, la diferencia no puede ser más grande y bien puede decirse que en muchos casos importará un cambio radical, convirtiendo el sistema de trabajo en común, en el régimen de aislamiento o celular.

Pienso por lo expuesto, que convendría oír el autorizado parecer de la Cámara de lo Criminal. — Noviembre 3 de 1882.

Departamento de Justicia. Resolución de Febrero 18 de 1883 que no hace lugar a la reforma propuesta en el reglamento vigente de la Cárcel Penitenciaria.

Tomo 6, pág. 376 — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La facultad que el art. 162 de la Ley de diciembre 15 de 1881, confiere al Poder Ejecutivo para la creación de Registros de Escribanos, se refiere únicamente a la Capital Federal y no puede hacerse extensiva a los Territorios Nacionales.
- II. — Atento a la importancia que cada día adquieren las Colonias Nacionales, correspondería que el P. E. se dirigiera al Congreso, solicitando la ampliación de la ley, haciendo extensiva la facultad de crear Registros, a los Territorios Nacionales.

El Escribano de Corrientes D. Alberto Aberastury, solicita autorización para ejercer su profesión en el Territorio Nacional del Chaco

Señor Ministro:

Ha poco tiempo el Ministerio de Justicia resolvió negativamente una solicitud de igual naturaleza.

Se había solicitado la creación de una escribanía en Biedma, territorio de Patagones. Consultada la Corte Suprema, opinó que la facultad que el artículo 162 de la Ley de Diciembre 15 de 1881 confería al Poder Ejecutivo para la creación de nuevos registros de escribanos, se refería únicamente a la Capital, y no podía hacerse extensiva a los territorios nacionales.

No podía V. E. ponerse en contradicción con resoluciones anteriores.

En vista del crecimiento de las Colonias Nacionales parecería, sin embargo llegado el caso de solicitar la ampliación de la ley de Diciembre, que la Corte Suprema echó de menos.

Con este objeto creo que convendría pidiera V. E. al Ministerio de Justicia los antecedentes a que he hecho referencia, para ocurrir en su mérito al H. Congreso, si lo hallare conveniente. Enero 15 de 1883.

Ministerio del Interior. Resolución de Agosto 7 de 1884 que dispone; se reserve el expediente en el archivo mientras el Congreso sanciona la ley sobre organización de los Territorios Nacionales

La patente por quince años, sólo debe acordarse en casos excepcionales, que constituyan verdadera novedad.

D. Julio Arraga, solicita patente de invención por el término de 15 años, por su sistema automático hidráulico aplicado a toda clase de motores

Señor Ministro:

El término de quince años ha sido reservado por la ley para aquellos casos de invención o mejora excepcionales, que marcan por decirlo así, nuevo camino, o nuevos horizontes en el progreso de la industria y en el bienestar de la humanidad.

El invento del señor Arraga no se encuentra, a mi juicio en este caso.

El hecho de subir el agua a una altura para utilizar luego, su caída justamente observa el Sub-Comisario Pirovano, no constituye una invención.

La bomba de aire aplicada a un pozo herméticamente cerrado que es la otra parte de la patente solicitada, observa también el mismo Subcomisario, es de un resultado dudoso, y apenas presenta alguna novedad.

Pienso por lo expuesto que el término de diez años es bastante. Enero 15 de 1883.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Enero 22 de 1883.

Tomo 6, pág. 422. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente el pedido que se formula para la explotación de un filón de hierro metálico y el otorgamiento en propiedad de la tierra en que se encuentra, en razón de no haberse justificado el descubrimiento, no bastando en este sentido la sola manifestación del interesado; por otra parte una mina de hierro para ser explotada con ventaja, requiere una serie de elementos —carbón, hornos, combustible, medios de comunicación, etc.—, requisitos que el solicitante no prueba tener a su alcance.

Don Samuel Sánchez, pide se le concedan en propiedad unas 20 leguas de terreno que abarcan un filón de hierro descubierto por él.

Señor Ministro:

Don Samuel S. de Bustamante dice haber descubierto un *filón de hierro metálico sobre una extensión* de más de veinte leguas en el territorio del Chaco, y pide en recompensa le conceda V. E., *en propiedad la extensión de veinte leguas del filón metálico*, y se le considere desde ahora acreedor a los privilegios extraordinarios que suelen conceder los Gobiernos en casos análogos.

Esta solicitud viene destituida de todo género de antecedentes y justificados. Es posible que el señor Bustamante haya descubierto el filón metálico, pero V. E. no puede aceptar tal descubrimiento bajo su sola afirmación.

Se observará que la importancia de contar con minas de hierro en la República bastaría para que V. E. mandara un Ingeniero que fuera a constatar su existencia.

Observaré a mi vez, que las minas de hierro por sí solas, poco o nada valen. Es sabido que para hacer o fundir una tonelada de hierro, se necesita una o dos de carbón, según la perfección de los hornos. ¿Con qué combustible cuenta el señor Bustamante en el lugar del descubrimiento? ¿Es posible sin este elemento y en un desierto sin vías de comunicación fáciles y baratas la explotación del filón metálico, suponiendo que existiera?. No ha mucho hemos visto que una empresa en mejores condiciones, aparentemente, no ha dado resultado alguno práctico. Me refiero a las minas de Ranay.

La existencia del filón mencionado, dada su existencia no tiene por el momento valor alguno, sino está al mismo tiempo en con-

diciones de ser explotado con ventaja; y todo concurre a formar la convicción de que no lo está.

Pienso, así, que no hay suficiente mérito para el nombramiento de un Ingeniero que se traslade al lugar del descubrimiento, y mucho menos, para que V. E. acuerde las veinte leguas que solicita en propiedad el señor Bustamante. — Enero 22 de 1883.

Tomo 6, pág. 436. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La patente por quince años, sólo debe acordarse en casos excepcionales, que constituyan verdadera novedad.

D. Julio Arraga, solicita patente de invención por el término de 15 años por un sistema de tranways sin caballos

Señor Ministro:

No considero tampoco este nuevo invento del Sr. Arraga con mérito bastante para optar el máximun de la ley. Como he manifestado a V. E. en varias ocasiones, este término solo debe acordarse en casos de excepción de verdaderas novedad, que abra nuevos caminos y nuevos horizontes a la actividad y al bienestar del hombre. El tranway sin caballos del Sr. Arraga, será tan bueno como se quiera, pero no pasa de ser una de tantas tentativas, que se vienen produciendo de tiempo atrás, para obtener el mismo resultado. Basta el término ordinario de diez años. — Enero 23 de 1883.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Enero 26 de 1883.

Tomo 6, pág. 412. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Los Protocolos son propiedad de los Escribanos que los han formado y la autoridad administrativa sólo tiene la facultad de reglamentar la forma cómo han de ser guardados.
- II. — Es improcedente el pedido formulado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por el Cónsul General del Uruguay, reclamando protocolos que afirma han desaparecido de los Archivos de su país y que actualmente se encuentra en poder de un Escribano de esta ciudad. El camino para conseguirlo será pedirlos directamente a este último, u obtener de ellos testimonios.

El Cónsul General Oriental, entrega de un protocolo

Señor Ministro:

Los protocolos son propiedad de los Escribanos que los han formado.

La autoridad sólo tiene la facultad de reglamentar la manera cómo han de ser guardados. No veo así con qué facultad ordenaría V. E. la entrega de los que reclama el señor Cónsul General, y que según su misma exposición forman parte ha ya un siglo, del registro de una de las Escribanías de esta Ciudad; que no están por otra parte, bajo la jurisdicción de las autoridades nacionales.

Paréceme que si la República vecina tiene interés en poseer estos protocolos, el camino más natural para obtenerlo es dirigirse a aquel a quien pertenecen o pedir de ellos testimonios. — Marzo de 1883.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Se adopta como resolución el dictamen. — Marzo 17 de 1883.

Tomo 6, pág. 5. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe interpretarse el art. 2.º de la Ley de Aduanas, como que concede exoneración de derechos a «maquinarias» que revistan cierta importancia y destinadas únicamente á establecimientos industriales.

Los molinos de viento, (aunque se los llame máquinas hidráulicas) no cumplen los requisitos indicados, por lo que no pueden considerarse comprendidos en la disposición citada.

Amelong y Cía., solicita libre despacho de una máquina hidráulica

Señor Ministro:

Pienso como la Dirección de Rentas que no hay razón alguna para comprender en la exoneración del art. 2.º al Molino de Viento para sacar agua, a que pomposamente se llama *máquina hidráulica con motor a viento*.

Hemos visto funcionar estos molinos en todas las exposiciones, y principian a generalizarse en la campaña.

El que introducen los Sres. Amelong y Cía. es una simple modificación de los conocidos de tiempo atrás.

El art. 2.º de la ley de Aduana se refiere a *maquinarias para establecimientos industriales y para buques a vapor*.

Esto sólo demuestra que la exoneración se acuerda a *máquinas, maquinarias* de cierta importancia; y con destino a objetos industriales además.

La pretendida *máquina hidráulica* es un simple aparato para sacar agua que podría resultar de grande utilidad para la campaña; pero que, ni viene destinada a establecimiento industrial alguno, ni pasa de ser uno de tantos objetos que se introducen para usos del comercio y para la industria, sin aplicación determinada. No veo por qué haría V. E. excepción en este caso en favor de los introductores. — Marzo 9 de 1883.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Marzo 13 de 1883.

I. — El principio de derecho internacional, según el cual, la línea del «thalweg», —línea que divide el canal de un río en su parte más profunda— es la que separa el territorio de dos naciones, cuando media entre ellos una corriente de agua, es de aplicación para deslindar jurisdicciones entre la nación y las provincias.

II. — Las islas que se encuentren en el río o las que en adelante se formen, pertenecerán a una u otra jurisdicción según el lado que queden con relación al «thalweg».

El Juzgado de Paz de la Sección 20, consulta cuál es la jurisdicción que debe imperar en una isla que se ha formado en el Riachuelo, con motivo de la construcción del nuevo canal.

Señor Ministro:

Una conocida regla de derecho internacional decide fácilmente la cuestión que motiva la consulta del señor Juez de Paz. Sabido es que, cuando una corriente de agua separa los territorios de distintas naciones, la línea que divide el canal principal en su parte más profunda a que se llama thalweg, es la línea divisoria de una y otra.

Por una deducción natural esta sencilla regla aplicable entre las naciones, debe serlo también entre la Nación y las Provincias que la componen, o entre los Estados o las Provincias entre sí.

El Riachuelo de Barracas es el límite que divide el Municipio de la Capital, de la Provincia de Buenos Aires. Su canal principal debe ser entonces el límite de uno y otro territorio, y la pequeña Isla a que hace referencia el señor Juez de Paz viene así a quedar comprendida en la jurisdicción de la Capital, sin alterar, naturalmente, las condiciones del dominio privado. — Marzo 12 de 1883.

Departamento de Justicia. Se adopta como resolución el dictamen. — Marzo de 1883.

En razón de la materia en que interviene la Escribanía de Marina —esencialmente de jurisdicción federal— corresponde que sea la Suprema Corte de la Nación, y no la Cámara Civil quien tenga superintendencia sobre ella, debiendo quedar en un todo sujeta a las disposiciones vigentes sobre Escribanías de Registros.

D. Juan S. Lechiguero, solicita que la Escribanía de Marina que regentea, sea declarada en iguales condiciones que las demás Civiles y Comerciales de la Capital

Señor Ministro:

Pienso, con la Cámara de lo Civil, que hay conveniencia en colocar la Escribanía de Marina bajo la misma autoridad que rige las demás Escribanías de Registro. Tal aparece visiblemente haber sido la mente de la ley que organizó la justicia de la Capital.

V. E. ha tenido antes de ahora acasión de percibir las dificultades que ofrecía la fiscalización de esta Escribanía. El Prefecto General llegó hasta proponer un empleado especial con este objeto. Es fuera de toda duda que esta fiscalización por nadie podrá ser desempeñada mejor que por aquella autoridad a cuyo celo la Ley ha encomendado esta parte del servicio público.

Las observaciones de la Prefectura de Marina son de tenerse en cuenta, pero no están en manera alguna en oposición con la solicitud del Sr. Lechiguero.

Es claro, y bien entendido, que el Escribano de Marina ha de proceder en todo con sujeción a las disposiciones vigentes. Y es precisamente esta consideración la que aconseja colocar la Escribanía de Marina bajo la vigilancia que contiene a todas las demás en el cumplimiento de sus deberes.

Recordaré, con este motivo, que he intervenido en expedientes de los que resultaba que más de una vez los derechos de la Escribanía de Marina no han alcanzado a cubrir los \$ 160 asignados al que la regenteaba.

Sólo me resta observar ahora que las materias en que interviene el Escribano de Marina son esencialmente de jurisdicción federal. No es pues a la Cámara de lo Civil, sino a la Suprema Corte de

la Nación a cuya Superintendencia la Escribanía de Marina debe quedar sujeta. Para proceder con pleno conocimiento, podría V. E. pedir informe a dicha Suprema Corte. — Marzo 31 de 1883.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Diciembre 30 de 1884.

Tomo 6, pág. 432. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La Escribanía Mayor del Gobierno de la Prov. de Buenos Aires, constituye una dependencia de dicha Provincia, no obstante que parte de su archivo —correspondiente a una época anterior— contenga documentación de carácter general, referida a todo el territorio de la Nación.
- II. — Corresponde que se autorice al Comisionado encargado de la expropiación de la nombrada Escribanía, para que se ponga de acuerdo con el Gobierno de la Provincia, a fin de que adopten el temperamento más conveniente tanto para la expropiación como para la división del Registro.

El Dr. José Fonrouge, sobre expropiación de la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Señor Ministro:

No encuentro exacta la apreciación que sirva de punto de partida a la consulta del Sr. Dr. Fonrouge y a todas estas actuaciones, no obstante la conformidad de los mismos interesados.

Que la Escribanía Mayor del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, no es *esencialmente nacional*, como se pretende, lo dice su mismo título.

Esta Escribanía es hoy en realidad una dependencia del Gobierno de dicha Provincia: registra todos sus contratos, todas sus enajenaciones de tierras; y en tal carácter, está bajo su jurisdicción. Podrá agregar que, si se encuentra en esta capital, es por accidente.

Es cierto que en época anterior su archivo debe considerarse Nacional, por cuanto abrazaba objetos generales y todo el territorio que compone hoy la Nación. Esta circunstancia no puede

dar, empero, carácter nacional la parte del registro que se formó después.

Paréceme por esto que no debe procederse sin oír al expresado Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Pienso que convendría autorizar al mismo Comisionado Sr. Fonrouge para que se pusiera de acuerdo con dicho Gobierno, a objeto de adoptar el temperamento que más convenga, tanto con respecto a la expropiación como a la división del Registro de esta Escribanía que es, sin disputa, la más importante de todas. — Abril 23 de 1883.

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Resolución de Setiembre 15 de 1885.

Tomo 6, pág. 398. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde que se acuerde el cambio de ubicación de los lotes que se solicita en razón de estar separados, con lo que se conseguirá reunirlos en una sola porción, que facilitará su administración, alcanzando asimismo por este hecho un mayor valor.
- II. — Los cambios de ubicación de los lotes de tierras adquiridas a la Nación, solo deben acordarse en casos especiales, que no irroguen perjuicios a terceros, y sin que ello pueda llegar a constituir la regla general.

Juan Penco, solicita cambio de ubicación de unos lotes de tierra comprados al Superior Gobierno Nacional

Señor Ministro:

En algunos pocos casos ha acordado V. E. el cambio de ubicación que hoy se solicita.

Se hacía valer el legítimo interés de reunir en un solo lote fracciones separadas, para formar una área continua y más extensa, que ofrece siempre mayores facilidades para la administración, y representa por este solo hecho mayor valor. No hiriendo

derechos de tercero, ni ulterioriades de la operación general, nada obataba a que V. E. hiciera un bien, que a nadie perjudicaba.

No hay en esto cuestión de derecho, propiamente dicho, sino de conveniencia para el interés particular, que es también en definitiva el interés público.

El Departamento de Ingenieros dice, que no es de práctica; que no hay conveniencia: que por el contrario, sería perjudicial, molesto, y quizás diera lugar a perjuicios.

Es cierto que no es de práctica; pero he recordado que no es éste el primer caso, y podría citar cinco o seis en que se ha concedido.

No es exacto que no traiga conveniencia, puesto que es evidente que hay positiva ventaja en reunir en una sola fracción lotes separados.

Queda sólo en pie el perjuicio posible o probable.

Admito que no deba acordarse este cambio sino por consideraciones especiales; no como regla general, y sólo cuando no irroque perjuicios a tercero. Pero no me parece justo que pueda denegarse porque traiga alguna molestia, y recargo de trabajo, y por el temor de perjuicios que pueden o no tener lugar.

Pienso, por todo esto, que no hay fundamento bastante para no acordar el cambio que solicita el señor Penco. — Abril 23 de 1883.

Ministerio de Hacienda. Resolución en contra de lo dictaminado. — Abril 28 de 1883.

Tomo 6, pág. 470. — Inf. de los Consej. Leg del P. E.

=====

- I. — No corresponde que se acepten denuncias sobre minas, sino en los términos de la ley de 17 de diciembre de 1853 llamada «Estatuto para la organización de la Hacienda y Crédito Público», que dispone que hasta tanto se sancione el Código de Minería rija la materia las Ordenanzas de Méjico.
- II. — No hay ley alguna que autorice al Poder Ejecutivo, para conceder tierras en propiedad, a efecto de explotaciones mineras.

Juan P. Castro, pide la propiedad de los concesiones mineras que descubra y de 30 leguas de terreno en Misiones

Señor Ministro:

La solicitud del señor Castro es demasiado vaga para que pueda V. E. tomarla en consideración.

Ni V. E. está autorizado por ley alguna para hacer concesiones de treinta leguas en el territorio de Misiones; ni puede aceptar denuncias sobre minas, sino en los términos de la ley de diciembre 17 de 1853, llamada *del Estatuto para la organización de la Hacienda y Crédito Público*. Ordena esta ley rijan sobre la materia las Ordenanzas de Méjico, mientras no se dicta el Código de Minería para la República.

Ahora bien, por el art. 2.º, Capítulo X de este Estatuto no se comprende en la palabra *mina*, *las canteras*, *tierras arcillosas*, *salinas*, *piedras sílicas*, y demás que abraza el señor Castro en su solicitud.

Por otra parte, son bien conocidas las formalidades y las restricciones con que las citadas ordenanzas de Méjico autorizan la concesión de minas.

Para que una mina se considere *amparada*, es necesario, entre otros requisitos: se presenten muestras del mineral; se abra un pozo de determinadas dimensiones; se mantenga cierto número de barretas en *laboreo*.

La ley del Estatuto exigía además se registrara el título de cada mina; y se abonara por ella contribución cada año.

Vése por todo esto, cuán lejos está de poder ser tomada en consideración la solicitud del señor Castro, concebida en términos tan vagos y absolutos. — Mayo 3 de 1883.

- I. — Por ley de 5 de octubre de 1878 pasó a jurisdicción del Gobierno Nacional, las tierras situadas al Sud de Río Negro, y en virtud de ello se ordenó que los que tuvieran derechos sobre los mismos, presentaran sus títulos, para la toma de razón.
- II. — Corresponde que el P. E. tome razón de los títulos de propiedad que se presentan, no obstante haber vencido el término que al efecto fijó el Decreto de 7 de septiembre de 1881, por cuanto, esta circunstancia no puede tener el alcance de anular el derecho que deriva de títulos perfectos que nadie contradice.

El Banco de Londres y Río de la Plata, pide se le reconozca como propietario de un campo en Río Negro

Señor Ministro:

El representante del Banco de Londres observa con razón que el aviso que fija un término para la presentación de aquellos que se consideren con derechos a ciertos terrenos al Sud del Río Negro, no puede tener tal alcance, que anule el derecho que deriva de títulos perfectos, que nadie contradice.

No obstante haber vencido el plazo, no veo inconveniente en que ordene V. E. se tome razón del título exhibido, con arreglo a lo que dispone el decreto de 7 de septiembre recordado. —
Abril 8 de 1883.

Señor Ministro:

Es fuera de toda duda que la Ley de octubre 5 ha alterado la jurisdicción que ejercía el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sobre los terrenos al Sud del Río Negro.

Esta jurisdicción pasó al Gobierno de la Nación, y es en su mérito que se ha ordenado que todos los que tengan derechos adquiridos sobre ellos, se presenten para que se tome nota de sus títulos.

La parte Sud del Río Negro a inmediaciones de Patagones, venía poblada de mucho tiempo atrás. Medida la sección a que correspondía, resultó que no era posible ubicar las acciones pre-

sentadas, por cuanto excedían con mucho al área que sirvió de base en los planos provisorios.

Se advirtió, además, que en esta sección existían muchos pobladores cuyos derechos la ley mandaba respetar. Fué por esto que se publicó el aviso a que ha obedecido aunque tardíamente, el Banco de Londres.

La ejecución de la citada ley de octubre ha corrido por el Ministerio de Hacienda y de esto viene sin duda, la confusión que se advierte.

Para salvarla, pareceme lo más conducente pase V. E. estas actuaciones a dicho Ministerio. — Mayo 5 de 1883.

Tomo 6, pág. 257. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde que se haga lugar a la solicitud que se formula para la creación de un Registro que otorgue las escrituras de jurisdicción federal y las de bienes existentes en las Provincias que hubiesen de escriturarse en la Capital, con lo que se conseguirá centralizar en un sólo Registro las escrituras de un mismo origen que de otra manera andarían dispersas y se separará de las funciones de los Secretarios de los Juzgados federales el ortogamiento de dichas escrituras y el cuidado de llevar los Registros, lo que les permitirá cumplir en mejor forma sus deberes específicos.
- II. — La centralización de las escrituras que se otorguen en la Capital, de bienes existentes en las Provincias, se considera también ventajosa.
- III. — Tratándose de una materia relacionada directamente con la jurisdicción federal, antes que el P. E. dicte resolución debe oír al respecto a la Corte Suprema Nacional.

D. Fernando Beade, solicita la creación de un Registro Federal de la Capital

Señor Ministro:

Don Fernando Beade, solicita la creación de un Registro en que se otorguen las escrituras de jurisdicción federal, y las de

bienes existentes en las Provincias que hubiesen de escriturarse en la Capital.

La solicitud del señor Beade viene autorizada por precedentes que creo oportuno recordar.

El Escribano Castañeda solicitó, no ha mucho, la creación de un Registro especial para las fianzas que mandasen otorgar los Juzgados en lo Criminal. En vista del informe de la Cámara de Apelaciones respectiva, V. E. autorizó la creación de este Registro que funciona regularmente hasta hoy.

Don Eduardo Durao ha solicitado recientemente la creación de un Registro para las escrituras comerciales de que debe tomarse anotación según las disposiciones del Código de Comercio. Este Registro está hoy a cargo del Secretario General de los Juzgados de Comercio.

La solicitud del señor Durao ha sido asimismo acogida favorablemente por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

La razón determinante, en uno u otro caso, ha sido la ventaja manifiesta de centralizar en un Registro las escrituras de un mismo origen, que andarían de otra manera dispersas. Han pensado, además los señores Camaristas que convenía separar de los deberes preferentes de los Secretarios de los Juzgados de la Capital, el cuidado de llevar Registros ajenos a sus funciones.

La solicitud del señor Beade se encuentra en el mismo caso.

Parece natural y es, sin disputa, más conforme a la ley, que los Secretarios rentados de los Juzgados Federales no sean distraídos en sus varias y delicadas funciones.

La ventaja de centralizar las escrituras que se otorguen en la Capital de bienes existentes en las Provincias es también manifiesta.

Antes de adoptar una resolución definitiva, es sin embargo, necesario oiga V. E. a la Corte Suprema de la Nación, por cuanto se trata de una materia directamente relacionada con la jurisdicción federal. — Estudio, Mayo 11 de 1883.

Luego de oír a la Suprema Corte, se dictó Resolución en octubre 30 de 1884, no haciendo lugar a lo peticionado.

Corresponde que el P. E. acepte la invitación que formula el Gobierno de Italia para llevar a cabo la convención de referencia, que a todas luces nos resultará ventajosa, ya que siendo nuestro régimen constitucional tan favorable al extranjero, difícil será que se nos pida alguna liberalidad que no esté ya acordada, y en compensación podremos obtener para nuestra naturales ventajas hasta ahora no alcanzadas, y especialmente el tratar de imponer la tesis americanista del «jus soli» en lo que a ciudadanía y naturalización se refiere.

Codificación Convencional de Derecho Internacional Privado. Invitación del Gobierno Italiano.

Señor Ministro:

La iniciativa del Gobierno de Italia responde a una marcada tendencia de nuestra época.

Visible y rápidamente desaparecen ante la electricidad y el vapor las barreras que en el mundo antiguo, y aun en época no muy remota, oponían a la vida común de las Naciones, la diversidad de religión las antipatías de raza; y los intereses mismos del comercio, que reposaban bajo la errada y perniciosa creencia de que una nación no podía prosperar sino a expensas de otra.

En esta comunidad de intereses de la vida moderna resultan luego manifiestos los inconvenientes que la diversidad de legislación opone a la familia y al comercio, en pueblos que se dirigen a los mismos fines. De ahí la aspiración que se advierte en todos, para uniformar ciertos principios primordiales, al menos; ya por medio de leyes generales, ya por convenciones parciales, que vemos se suceden unas a otras sin interrupción.

El Gobierno de la Nación ha sido invitado, y ha tomado participación en algunas de estas convenciones, cuyas ventajas se advierten ya; en la baratura y expedición de la correspondencia epistolar y telegráfica, por ejemplo. Y a la verdad; cuando se considera la inmensa conveniencia que resultaría para todos en la unificación de la moneda, de las pesas y medidas, y en la uniformidad de algunos otros puntos sencillos de legislación, no se concibe cómo las naciones no han podido llegar a un acuerdo general.

Bajo este punto de vista la invitación del Gobierno de Italia no puede menos de ser acogida favorablemente por V. E. es fuera de toda duda que habría positiva conveniencia, y especialmente

para nosotros con la Italia, en la adopción de ciertos principios generales y uniformes, con respecto a la capacidad de las personas; a la forma externa de los actos, a la ejecución de las sentencias de los tribunales extranjeros, y algunos otros puntos de derecho internacional privado.

Pienso, sin embargo, con el Gobierno de Dinamarca, que los beneficios de este acuerdo no serán sensibles, sin el asentimiento de cierto número de naciones, y principalmente de aquellas que están por su poder y su riqueza a la cabeza de la civilización.

Nuestra legislación es tan liberal con respecto al extranjero, que es difícil se nos pidiera una franquicia en su favor, que no estuviera concedida de antemano. Fuera de los derechos políticos, ninguno hay de que no goce el extranjero entre nosotros a la par del ciudadano.

No exigiendo por ello, siquiera reciprocidad, la posición de la República en la Convención propuesta, no podría ser más ventajosa.

Ninguna concesión se le pediría que no hubiese hecho ya, y no podría menos de felicitarse que el ciudadano argentino encontrara igual liberalidad en el extranjero.

En muchos puntos nuestra legislación, —como que arranca del mismo origen—, difiere poco de la de Italia.

La posición jurídica de los extranjeros es entre nosotros igual a la que tienen en Italia. Los mismos principios rigen con respecto al estatuto personal; a la forma externa de los actos; a las sucesiones. Poco o nada adelantaría sobre éste particular la convención propuesta.

Hay, sin embargo, un punto, y el más importante, en que la separación es radical, y la uniformidad deseada sería del más grande interés nacional.

El *nacimiento* determina la nacionalidad por nuestra ley; el *origen*, por la de Italia. El hijo nacido en la República de padres italianos, es Argentino, por nuestra Legislación; y no ha dejado de ser Italiano, por la de Italia. En Italia, sería Argentino para nosotros; y a la vez, Italiano, para su Gobierno. Es indudable que esta doble apreciación ofrece un peligro que convendría salvar. No debe olvidarse empero, que sobre esta materia la República ha manifestado en una ocasión solemne su voluntad más decidida. Dependiendo, como todo país nuevo, de la inmigración para su

progreso, ha declarado, con razón, que renunciar al principio del nacimiento, sería renunciar a la esperanza de tener ciudadanos para su defensa y su gobierno.

Otro punto de grave trascendencia viene diseñándose en las relaciones internacionales de los pueblos de la América y de Europa.

Los pueblos nuevos tienden, como es natural, a facilitar la adquisición de su ciudadanía. Basta entre nosotros la residencia de dos años.

¿El ciudadano naturalizado, al volver al país de su nacimiento conservará su carácter de tal? El italiano que tomó carta de ciudadanía en la República, será en Italia Argentino o Italiano?

Cuestión es esta que preocupa sobre manera a los hombres de Estado de la Unión Americana, a término de asumir proporciones de programa electoral en las luchas presidenciales.

El que ha conquistado el título de ciudadano Americano debe conservarlo siempre, dicen, y la Nación que lo reconoció como su hijo, le debe protección en cualquier parte que se hallare.

Las naciones europeas y especialmente la Prusia, no admiten que baste una corta permanencia en un país extraño, para desligar al ciudadano de los deberes que lo ligan a la tierra en que nació.

La simple enunciación de estas cuestiones pone en evidencia su importancia en el porvenir de los pueblos de América.

No es, sin duda, la República Argentina la nación llamada a dar la solución. La defensa de los derechos de la América, no puede estar confiada a manos ni más poderosas, ni más hábiles.

Justo es, sin embargo, que el Gobierno Argentino preste su concurso, siempre que se ofrezca una oportunidad propicia.

Resumiendo ahora mi pensamiento, diré a V. E., que en mi opinión, debe V. E. aceptar gustoso la invitación del Gobierno de Italia. La posición del negociador argentino será a todas luces ventajosa. Difícil será se solicite alguna liberalidad o alguna garantía en favor del extranjero que no hubiese sido acordada ya; y si algo más se exigiera, ninguna dificultad habría en abundar en las liberalidades y franquicias, que son nuestro credo constitucional.

En compensación, debiera el representante Argentino buscar el acuerdo de las Naciones Europeas sobre la *ciudadanía y naturalización* en el sentido americano, a que he hecho referencia. — Mayo 15 de 1883.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de Julio 16 de 1883, que dispone se pase con nota al Ministerio de Instrucción Pública.

Tomo 6, pág. 402. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley de 14 de septiembre de 1863, establece la pena que corresponde a los que falsifiquen, introduzcan o expendan moneda falsa de especie que tenga «curso legal en la Nación», no legislando nada en cambio, cuando se trata de la comisión de estos delitos con respecto a moneda extranjera que no tiene curso legal en el país, lo que constituye un vacío en nuestra legislación que importa salvar, dictando al efecto una ley general, en lugar de convenciones internacionales.

La Legación de Bolivia, reclama de un fallo absolutorio de los Tribunales de la Capital, dictado en un juicio criminal sobre falsificación de moneda boliviana

Señor Ministro:

El Sr. Cónsul de Bélgica dirigió a V. E. una extensa comunicación, ahora dos años próximamente, sobre la legislación internacional para la represión de la falsificación de la moneda de una Nación en el territorio de la otra.

Creo que convendría que la agregara a estos antecedentes, volviendo todo a mi despacho. — Octubre 17 de 1882.

Señor Ministro:

Las referencias del Sr. Ministro de Bolivia son de toda exactitud.

La Corte Suprema ha declarado en más de una ocasión, que la Justicia Federal carece de jurisdicción para conocer de los deli-

tos sobre falsificación de moneda que *no tenga curso legal en la República*. Ha declarado a la vez, que la moneda boliviana es simplemente una moneda *tolerada* entre nosotros.

Siendo esta la jurisprudencia establecida por el más alto Tribunal de la Nación, último intérprete de sus leyes, no es permitido traer a discusión si la moneda boliviana es o no de curso legal, como pretende el Sr. Ministro de Bolivia, ni menos, si los que la falsifican son o no justiciables ante sus Tribunales.

Creo si, con el Sr. Ministro que hay en esta parte un vacío en nuestra legislación que importaría salvar.

La falsificación de moneda ha sido considerada desde los tiempos más remotos como uno de los delitos más graves y perniciosos a la sociedad.

El ingenio de los legisladores se ha puesto a prueba para inventar los castigos más atroces. Ninguno lo eran bastante para los monederos falsos. Por las leyes de Roma eran éstos entregados a las fieras, y más tarde, por las de Constantino, quemados vivos. Las leyes de Partida y las Recopiladas los equiparaban a los reos de lesa majestad, y los castigaban con penas aun más terribles.

Es bien entendido que estas leyes sólo se referían a los que falsificaban *moneda nacional*. La falsificación de moneda extranjera, en el aislamiento general de las naciones, no tenía objeto, y podía apenas considerarse un delito. Hoy mismo, si alguno se ocupase entre nosotros de falsificar moneda de Cochinchina o del Japón, sería muy difícil establecer su culpabilidad. En tal caso, podría con más propiedad ser clasificada esta falsificación en la categoría de las falsedades que, importando simplemente una alteración de la verdad, sin dañada intención ni perjuicio de tercero, escapan a la acción de la ley criminal.

La facilidad y rapidez de las comunicaciones ha modificado, empero sustancialmente las condiciones de existencias y los deberes de los pueblos entre sí.

En el movimiento incensante de la vida en nuestro días, la falsificación de moneda turba las relaciones comerciales, y compromete a la vez la riqueza pública y la fortuna particular, cualquiera que sea la nación a que pertenezcan. Importa autorizar su persecución aún cuando más no fuera que para adquirir el derecho

de reclamar igual protección a la moneda nacional, a título de reciprocidad.

Como era de esperarse, hemos sido precedidos en este camino.

La revolución Francesa, que tan inmensos cambios introdujo en las ideas, modificó también en esta parte la legislación antigua. Por una ley de Frinuario del año 2, los falsificadores de *monedas extranjeras* fueron equiparados a los de monedas nacionales, y castigados con las mismas penas.

La legislación Belga ha seguido en este, como tantos otros puntos, a la Francesa.

Por último, no será sin objeto recordar que los tratados de extradición tan frecuentes hoy, no olvidan nunca a los falsificadores de moneda y de valores públicos.

Después de lo que dejo expuesto, no necesito decir a V. E. que pienso que la proposición del señor Ministro de Bolivia merece ser acogida favorablemente, ya sea por medio de una convención o ya por la sanción de una ley general.

El Gobierno de Bélgica había antes de ahora manifestado a V. E. de parte de las naciones que firmaron la Convención de la «Liga Latina», el deseo de una disposición análoga. Paréceme por ello más conveniente el último temperamento; es decir, la sanción de una ley general.

Sólo observaré al terminar, que la legislación moderna ha modificado en mucho el rigor de las antiguas penas.

La Ley de 14 de Septiembre de 1863 castiga entre nosotros con la pena de 4 a 7 años de trabajos forzados, a los que *falsifiquen, introduzcan o expendan* moneda falsa de especie que tenga *curso legal en la Nación*. Cuando la falsificación sea de moneda que *no tenga curso legal*, la pena debiera, sin duda, ser menor. — Mayo 17 de 1883.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de Junio 21 de 1883 que dispone se pase al Ministerio de Hacienda.

- I. — No es necesaria la autorización que se solicita para editar un libro sobre minería por cuanto se trata de un derecho que emana de la misma Constitución.
- II. — No corresponde que se acuerde carácter oficial a la publicación de referencia, si no media un examen prolijo de la misma llevado a cabo por persona competente, no siendo por otra parte necesario el carácter oficial ya que la obra valdrá por la confianza que inspire en razón de su esmero y exactitud.

El señor D. Florentino Barros, pide autorización oficial para editar por su cuenta un libro sobre leyes de minería

Señor Ministro:

La publicación que propone hacer a su costa el señor Barros es de notorio interés para la República, y especialmente para aquellas provincias que cifran sus mejores esperanzas en la explotación de las grandes riquezas minerales que encierran.

Es en efecto de toda exactitud que la Corte Suprema ha declarado en vigor la Ley de Diciembre 17 de 1853 llamada del *«Estatuto de Hacienda y Crédito Público»*. Es igualmente cierto que una las disposiciones de este Estatuto ordena se observen como ley de la Nación las ordenanzas de Méjico con las modificaciones que las Legislaturas de Provincias hayan hecho en ellas, *ínterin* el Congreso dicte el Código de Minería, Títº. X.

La materia de minas es de todo punto ajena a los conocimientos profesionales del foro de esta Capital.

No teniendo una sola en la Provincia de Buenos Aires, su Universidad que es hoy nacional y la primera de la República, no exigía el estudio de la legislación minera. Recién ahora, debido al patriótico ofrecimiento del Dr. D. Adolfo E. Dávila, se trata de fundar un *curso libre* que llene este vacío. Esto explica la razón por qué son tan escasos los libros en que pueda estudiarse esta materia, según oportunamente observa el Sr. Barros.

Su publicación viene así perfectamente a tiempo. Coincide con la próxima apertura del curso mencionado y con el interés que la industria minera vuelve a despertar entre nosotros. Mien-

tras no se dicte el Código encomendado al Dr. Rodríguez, las Ordenanzas de Méjico, según se ha visto, serán la ley que rija en la República, y constituirán en todo tiempo un antecedente de estudio y de consulta.

El Sr. Barros no necesita la autorización de V. E.; la tiene en la Constitución. V. E., por otra parte, no podrá conferir carácter oficial a su publicación sin un examen más prolijo, para el que no me creo competente y que, en rigor, debía encomendarse al mismo encargado de la codificación. Y no veo la necesidad de tal carácter oficial. El libro del Sr. Barros valdrá en relación a la confianza que inspire por su esmero y exactitud. En este caso se encuentran las publicaciones que ha hecho el Sr. Coni de los Códigos Civil y Comercial, que son por todos aceptados a la par de los oficiales. Pero si V. E. no puede acordar la autorización que solicita el editor, puede bien aplaudir el propósito que le mueve a poner al alcance de todos, y especialmente de la juventud, los medios de estudiar una materia desconocida y de tan grande interés público. — Mayo 27 de 1883. ;

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Junio 9 de 1883.

Tomo 6, pág. 506. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El inc. 6 del art. 86 de la Constitución Nacional reconoce como única excepción a la facultad de indultar o conmutar penas que confiere al Presidente, el que se trate de una condena en juicio político por ello, el indulto o conmutación puede aplicarse tanto a una pena de prisión como a una de penitenciaría y presidio, sin hacer distinción alguna.

Carmen Morelli, preso en la Penitenciaría, pide indulto

Señor Ministro:

El inciso 6, del art. 86 de la Constitución, faculta al Presidente de la Nación *para indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.*

Como se ve la única limitación es para los casos de *acusación por la Cámara de Diputados*, y la misma excepción como es sabido, confirma la regla general.

Había, pues, motivo para dudar acerca de sí los arts. del Código Penal a que se refiere la Cámara de Apelaciones, han podido limitar una atribución del Presidente, de que está en posesión y que no tiene más limitación que la que la misma Constitución le ha establecido.

Esta discusión no tendrá, empero, objeto en este caso.

El recurrente, según su propia exposición, ha sido condenado *por los tribunales de la Capital* a tres años de prisión de los que le faltan sólo 8 meses. Esta circunstancia hace suponer que la pena ha sido impuesta por los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires, pues no hace dos años y cuatro meses que fueron organizados los Tribunales de la Capital de la Nación. En este caso, el delito no sería de *jurisdicción federal* y esta solicitud debió ser dirigida al Gobierno de la expresada Provincia de Buenos Aires, — Junio 6 de 1883.

El recurrente justificó que la pena le había sido impuesta por los Tribunales Nacionales, dictándose en consecuencia resolución en Agosto 18 de 1883, acordando el indulto.

Tomo 6, pág. 521. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Es lícita la compraventa de un barco en navegación, pudiendo en virtud de dicho acto cambiar inmediatamente de bandera, debiendo cumplirse al respecto, con los reglamentos del país en que tiene lugar dicho cambio.
- II. — Es improcedente el cobro de derechos que pretende el Cónsul Argentino en el Paraguay, si él no ha intervenido ni en la transferencia de propiedad, ni en el cambio de bandera, aunque estos actos se hallan llevado a cabo en aguas paraguayas y sea ésta la nacionalidad que deja el barco, en razón de considerarse a los derechos consulares, como una justa retribución de los casos en que intervienen, en razón de sus funciones.

**La Legación Argentina en el Paraguay, sobre el caso del vapor
«Tacurú». — Abuso de bandera**

Señor Ministro:

Los informes que anteceden en nada ilustran ni la cuestión de hecho, ni la de derecho, que motivan la queja del Sr. Cónsul de la República en el Paraguay.

El vapor Paraguayo «Tacurú» fué comprado en esta ciudad por la Compañía «Lloyd Argentino». El Consulado del Paraguay en esta misma ciudad prestó su conformidad para que cambiara de bandera, y tomó la Argentina. No se encontraba en este puerto al tiempo de cambiar de dueño y de bandera. ¿Dónde estaba?

El Sr. Cónsul dice que navegaba en aguas paraguayas; y de esto infiere que no podía izar bandera Argentina, sin previo aviso al Consulado y sin abonar los derechos correspondientes al cambio. El señor Cónsul ignoraba, o por lo menos no se le había hecho saber oficialmente, que el «Tacurú» había pasado a ser propiedad Argentina, y obtenido permiso de una y otra autoridad para cambiar de bandera.

Parece entonces que hay en este asunto confusión en los hechos, o, por lo menos, falta de la debida explicación por una y otra parte.

El «Tacurú» izaba bandera Argentina en virtud de haber obtenido en este puerto el permiso competente. ¿Era esto bastan-

te? ¿Debía obtener también igual permiso del Consulado Argentino en la Asunción?.

El Sr. Cónsul, dice, además, que el «Tacurú» navegaba *sin los papeles que todo buque debe llevar*. La escritura de venta y el cambio de bandera habían tenido lugar en Febrero. ¿Cómo es que en Mayo no tenía el vapor estos documentos esenciales, y que debe suponerse son los que el Sr. Cónsul echa principalmente de menos?

Para el esclarecimiento de estos antecedentes creo oportuno oiga V. E. al representante del Lloyd Argentino. Paréceme más que probable que no ha habido por su parte intención de faltar a los reglamentos, ni menos de esquivar el pago de los derechos Consulares. Es más natural suponer alguna omisión o algún apresuramiento, que no es de extrañar en una administración nueva. Paréceme también que si sólo fuera cuestión de derechos que legítimamente se deban, la Compañía no rehusaría llegar a una solución equitativa. — Junio 19 de 1883.

Señor Ministro:

Después de los documentos agregados y de las notas del Sr. Cónsul General en el Paraguay, creo hoy más necesario que antes, oiga V. E. por un breve término al representante del Lloyd Argentino, para el mejor esclarecimiento de los hechos, volviendo en seguida estas actuaciones a mi despacho. — Octubre 16 de 1883.

Señor Ministro:

El 28 de febrero del corriente año, la Compañía «Lloyd Argentino» compró en esta ciudad el vapor Paraguayo «Lidia», que tomó el nombre de «Tacurú», al incorporarse a la matrícula Argentina. Previamente se había obtenido, en 16 del mismo mes, del Consulado General del Paraguay en esta Capital, *el cese de bandera*, según así consta del certificado del escribano de registro de marina que corre a fojas 22.

El vapor, al practicarse estos cambios de propiedad de bandera no se encontraba en este puerto, continuaba sus viajes en los ríos Paraguay y Paraná.

En mayo ppdo., se encontraba en la Asunción y el representante del Lloyd, en vista del aviso que había recibido de pertenecer a la Compañía y de haber sido incorporado a la matrícula Argentina, puso en conocimiento del Consulado de la República en el Paraguay que iba a izar la bandera Argentina.

El señor Cónsul exigió los derechos que decía serle debidos por los *reglamentos en vigor*. La Compañía del Lloyd sostuvo entonces y sostiene ahora, no deber tales derechos. Es ésta, pues, la cuestión a resolver.

La compra de un buque que a la sazón navega en alta mar, es perfectamente lícito, y de práctica usual. El hecho de cambiar de bandera al cambiar de propiedad, observando los reglamentos del país en que tiene lugar el cambio, es también perfectamente lícito.

La compra y venta de bienes, así muebles como inmuebles, aunque no estén presentes, y en cualquier parte que se encuentren, está autorizada por todas las legislaciones del mundo, y no se alcanza la razón por qué habrían de estar exceptuados los buques de la regla general.

Si pues, el «Lidia» pudo lícitamente cambiar de propiedad y la bandera ante las Autoridades Marítimas de esta Capital ¿en virtud de qué principio o de qué disposición, ha de abonar derechos al Consulado de la República del Paraguay?

El hecho de ser paraguayo el vapor y de estar al tiempo del cambio, en aguas paraguayas, no me parece razón bastante. Si un Argentino por ejemplo, compra un buque en Inglaterra y le cambia la bandera, ¿podrá el Cónsul Inglés en la República reclamar derechos por el cambio?

Los emolumentos consulares son, a mi juicio, una justa retribución a la intervención del Cónsul. Si el Cónsul no ha intervenido, ni en el cambio de propiedad, ni en el de bandera, ¿por qué razón ha de percibir emolumentos?

No lo alcanzo, ni tengo conocimiento de disposición alguna de donde tal derecho pueda derivarse.

Acaso el Señor Cónsul, que hasta ahora se ha referido en términos generales a los *reglamentos*, pueda ilustrar este punto,

y antes de resolver me parecería oportuno le oyera V. E. — Noviembre 21 de 1883.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución en contra de lo dictaminado. — Febrero 5 de 1884.

Tomo 6, pág. 508. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde la patente por quince años sino una por menor término, cuando se trata de una simple mejora de sistemas conocidos. La patente por 15 años sólo debe acordarse para aquellos inventos que importen una verdadera novedad aplicable a las industrias.

Don Jaime Garriga, solicita patente de invención por el término de quince años, por una máquina excavadora para abrir zanjas

Señor Ministro:

La máquina del Sr. Garriga es sólo una simple mejora sobre sistemas conocidos, según informa la Oficina de Patentes. No la considero en la categoría de aquellos inventos que importan una verdadera novedad, que abren el camino a nuevas industrias; que vienen a producir, por decirlo así, una revolución en ciertas esferas del trabajo. Y es para estos casos especiales que debe reservarse el máximun de la Ley.

La excavadora del Sr. Garriga facilitará más o menos el trabajo de abrir zanjas, que ya por máquinas más o menos eficaces se abrían antes de su invento.

Basta el término de diez años. De otra manera, pocos serían los inventos que no aspirasen, con igual derecho, a la excepción de la ley, que de hecho vendría a convertirse en la regla general. — Junio 28 de 1883.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 6 de 1883.

Tomo 6, pág. 488. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I. — No corresponde que el P. E. resuelva quién debe satisfacer las costas que devenguen los Escribanos que actúen por recusación de los Secretarios de Juzgado, por cuanto como representante del Tesoro Público el P. E. es parte interesada, y la resolución que al efecto dictare no inspiraría el respeto que merecen los actos del Estado.

II. — La jurisprudencia formada por los casos de recusación de Jueces, Asesores, Procurados, etc., es perfectamente aplicable al «sub-lite», correspondiendo al Juez que formula la consulta, la solución del mismo, con audiencia del Procurador Fiscal.

El Juzgado de Sección de Mendoza, consulta quién debe satisfacer las costas que devenguen los escribanos cuando el Secretario esté inhibido de actuar

Señor Ministro:

La duda que motiva la comunicación del Sr. Juez de Sección es fundada y ha de ocurrir en la práctica más de una vez

No es, empero, V. E. la autoridad llamada a resolverla. Como representante de la cosa pública, es V. E. parte interesada, y su resolución podría no inspirar aquel respeto que debe siempre acompañar a todos los actos de los poderes públicos.

A falta de una ley expresa, el Sr. Juez de Sección encontrará antecedentes, en la manera como hayan sido resueltos casos análogos. Ocorre con frecuencia que los Jueces, Asesores, Procuradores, Fiscales, son recusados o ellos mismos se excusan. La jurisprudencia establecida en estos casos es perfectamente aplicable a los Escribanos Secretarios.

La resolución de V. E. por otra parte, nada resolvería a no ser que desde luego y para todos los casos aceptara este gasto a cargo del Tesoro Público. Si V. E. resolviera que debiera pesar sobre la parte que litiga, y ésta, como es muy posible, no se conformara, siempre sería llamada a resolver la duda el mismo Sr. Juez de Sección. El que se considerase agraviado, tendría todavía el derecho de ocurrir al Superior.

El Sr. Juez debe, pues, resolver los casos que ocurran según su ciencia y conciencia, con audiencia o citación del Procu-

rador Fiscal, que aceptará o no aceptará su resolución, según entienda. — Junio 29 de 1883.

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Resolución en Setiembre 29 de 1883.

Tomo 6, pág. 517. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No se consideran invadidas las atribuciones de la Cámara Comercial por el hecho de que el P. E. haya nombrado un escribiente para el Juzgado de Comercio de la Capital, ni se considera por ello lesionado el principio de la separación e independencia de los poderes.
- II. — De la independencia del Poder Judicial no se deduce que tenga la facultad de nombrar a sus empleados tanto superiores como subalternos; ni que es irregular o contrario a principio alguno de organización el que el nombramiento se haga por el Poder Ejecutivo.
- III. — La autorización que la ley de 26 de agosto de 1863 confirió a los Jueces de Sección para el nombramiento de empleados lo fué «por la primera vez» de lo que se deduce que «después» estos nombramientos se harían en la forma acostumbrada o sea por el Poder Ejecutivo en uso de la facultad conferida por la Constitución Nacional.
- IV. — La ley de organización de los tribunales de la Capital confirió a los Jueces inferiores la facultad de nombrar sólo a sus ordenanzas, nada dice con respecto a los escribientes, por lo que queda en vigor la regla general de que es el Presidente de la Nación quien hace estos nombramientos.

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Comercial, sobre la facultad de nombrar los escribientes en los Juzgados de 1ra. Instancia

Señor Ministro:

La Cámara de Apelaciones en lo Comercial ha considerado invadidas sus atribuciones, por el nombramiento de un escribien-

te que hizo V. E. para el Juzgado de Comercio de esta Capital.

~ Aceptando en todo las conclusiones de su Fiscal, doctor Cortés, dice la Excm. Cámara en la extensa nota de que V. E. se ha servido correrme vista, «que la división de los Poderes es la base de nuestro sistema constitucional; y que a cada uno responde, expresa o implícitamente, todas aquellas facultades que son indispensables para llenar los objetos con que han sido creados, manteniéndolos en la recíproca independencia, que es condición indispensable de su existencia».

«Consultándose los principios generales del Derecho Constitucional, y supuesta la independencia recíproca de los Poderes Públicos, agrega la misma Cámara, de acuerdo siempre con el señor Fiscal, debía corresponder al Ejecutivo el nombramiento de todos los empleados de la Administración Ejecutiva, así como a las Cámaras Legislativas o Judiciales el nombramiento de sus Presidentes, Secretarios y demás empleados subalternos. Nada más irregular y ajeno a todo principio de organización, que el Ejecutivo pretenda intervenir y empuje a meter mano en estas cosas».

Por más respetos que la ilustración de los señores que componen la Excm. Cámara me merezca, no puedo menos de observar que las doctrinas del Sr. doctor Cortés acerca de la división e independencia de los Poderes, que ella de plano acepta, son inexactos, y por consiguiente erróneas las consecuencias que de ellas deduce.

De la independencia del Poder Judicial, que nadie desconoce, no se desprende como una consecuencia forzosa que tenga la facultad de nombrar ni sus empleados superiores ni los subalternos; ni es irregular ni contrario a principio alguno de organización que los nombre el Ejecutivo.

La división de los Poderes no es absoluta, ni su independencia ilimitada es compatible con las instituciones de un pueblo libre. Apenas es necesario decirlo.

Principio alguno de la ciencia social ha merecido la aceptación entusiasta con que fué por todos recibida la celebrada máxima de Montesquieu sobre la división de los Poderes.

«No hay quien no acepte como un axioma, dice el Federalista que me sirve de guía en este caso, que la concentración de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una sola mano, es la misma definición de la tiranía. Y no hay pueblo que aspire a

ser regido por instituciones libres, que no consagre aquel principio como la base fundamental en que reposan todas».

«No obstante esto, continúa el mismo Federalista, ni el mismo Montesquieu concibió la división absoluta de los Poderes, ni Constitución alguna la ha aceptado en la práctica».

«La verdadera garantía para las libertades públicas, consiste, no en la división, sino en que los Poderes estén de tal manera ligados y compensados, que cada uno ejerza un control sobre los otros. La separación que se considera esencial, jamás se alcanzará».

«La Constitución Inglesa, dice por último el mismo Federalista, era para Montesquieu el modelo de perfección del gobierno libre, como lo era Homero para los poetas. Mientras tanto, el más ligero examen nos hace ver que los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, no están totalmente separados en la Constitución del Reino Unido. El Jefe del Ejecutivo forma parte integrante del Legislativo. Los miembros del Judicial, son nombrados y removidos por el Rey en acuerdo del Parlamento. Los Jueces están de tal manera ligados con el Departamento Legislativo, que toman a veces parte en sus deliberaciones si bien no votan». Federalista, números, 78 a 81.

Esto mismo se advierte en la Constitución de la Unión Americana y en la de todos los Estados que la forman. Todos consagran la máxima fundamental y favorita y sin embargo, en todas, los tres Poderes, están más o menos ligados de manera que unos participen de las funciones de los otros y les sirven de control.

Bastará echar, en comprobación, una rápida ojeada sobre nuestra propia Constitución, basada, como es sabido, sobre los principios Americanos.

El Poder Legislativo, el más difícil de limitar, por la dilatada esfera de acción que abraza, está dividido en dos Cámaras, para evitar en cuanto es posible, la precipitación en sus sanciones. El Poder Ejecutivo, por medio de los Ministros toma parte en sus deliberaciones y puede aún anularlas por el voto. El mismo Poder Judicial, en su rol pasivo, ejerce igual facultad, cuando se pone en cuestión la constitucionalidad de una ley.

El Poder Legislativo interviene, a su vez, en funciones esencialmente administrativas: en los nombramientos de ciertos altos funcionarios: en la ratificación: en la declaración del estado de

sitio, etc. etc. Es además, el Juez del Presidente de la República y de sus Ministros, en los casos de acusación, lo que difícilmente se concilia con la separación absoluta.

En el mismo caso se encuentran los miembros del Poder Judicial, en cuyos nombramientos intervienen también los otros Poderes.

Las teorías del señor Fiscal y las consecuencia que de ellas se deduce, no están, pues, ajustadas a los principios que sirven de base a nuestro régimen constitucional.

No es exacto que, como una deducción lógica de la división, cada Poder tenga la facultad de dictar sus reglamentos y de nombrar sus empleados, ni que sea contrario a *todo principio de organización* que uno de los poderes intervenga en el nombramiento de los empleados de los otros.

La extensión que el señor Fiscal atribuye a la división, nos conduciría al mismo extremo que se ha querido evitar separándolos. Al fin uno prevalecería sobre los otros y los absorbería todos.

Nada más difícil que trazar los límites de una atribución cualquiera, mucho más tratándose de Poderes que abrazan las más extensas y complicadas atribuciones. La previsión humana no alcanza a trazar esta línea divisoria.

Está, por otra parte, en la imperfección de nuestro ser, que toda autoridad procure ultrapasarse el límite de sus atribuciones.

Si así no fuera, si fuera además posible señalar a cada uno el punto de donde no había de pasar, no había necesidad, ni de división, ni de Poderes, puesto que todo Gobierno presupone la condición falible del hombre y no la perfección de los Angeles.

Partiendo de esta base y suponiendo que todos los poderes son igualmente independientes ¿de qué manera, se pregunta, sería contenido el que invade las atribuciones del otro? ¿Cuál sería el Juez?

Problema es este que hasta ahora no ha tenido solución y que difícilmente la tendrá nunca.

Se ha creído que, siendo el pueblo la fuente de todos los poderes, debiera ser llamado, ya periódicamente, ya en ocasiones extraordinarias, a pronunciarse sobre la manera cómo su voluntad suprema había sido respetada. Así lo aconsejaba Jefferson en su proyecto de Constitución para el Estado de Virginia, y lo

han pensado algunos Estados, al proponer la reforma de sus Constituciones.

Se ha observado, empero, que este recurso al pueblo, ofrece los más serios inconvenientes.

Si la convocación ha de ser para traer a juicio violaciones recientes, el temor de ser juzgado por infracciones de 10, 15 ó 20 años atrás, olvidados probablemente, es bien poca cosa, por cierto. Si la convocación ha de ser para traer a juicio violaciones recientes, cuando las pasiones están agitadas y en todo su vigor, córrase el peligro de que la decisión del pueblo, en vez de ser la expresión de la verdad constitucional, responda al interés de los partidos en lucha, que tienen siempre medios de influir eficazmente sobre la opinión.

Obsérvase, por último, que estos recursos al pueblo acabarían por desautorizar la misma Constitución cuyo respeto los inspira.

En presencia de estas dificultades, con la experiencia adquirida en las altas esferas del Gobierno, decía con razón la misma autoridad que antes he citado, estas preciosas palabras que transcribo como el comentario más autorizado del celebrado axioma de Montesquieu: *«El Gobierno por que hemos combatido»* decía Jefferson en sus notas sobre el Estado de Virginia, *es no sólo un Gobierno fundado sobre principios libres, sino un Gobierno en el que los Poderes están de tal manera divididos y compensados entre los diversos cuerpos de magistrados que los componen que no pueda uno ultrapasar sus límites legales sin encontrarse eficazmente contenido y reprimido por otro»*.

Basada nuestra Constitución sobre la de los Estados Unidos es esencialmente limitada. La soberanía del pueblo está primero dividida en dos grandes jurisdicciones: la de la Nación y la del Estado o Provincia. Cada una de estas jurisdicciones está después dividida en las tres ramas conocidas, y éstas a su vez están sujetas a numerosas restricciones; y por último, todas estas jurisdicciones son más exclusivas, otras concurrentes.

Acostumbrados a la unidad en materia de religión y de Gobierno, bajo el punto de vista del derecho Europeo, esta diversidad de jurisdicciones y limitaciones nos toma de sorpresa y nos parece romper la armonía que debía presidir en nuestra mente a la organización de los Poderes.

La división de sus atribuciones, su ponderación recíproca, concepción esencialmente Americana, es, sin embargo, hasta hoy la última palabra de la ciencia del Gobierno. La experiencia, reciente todavía, enseñará a las generaciones venideras la medida en que los Poderes y su limitación deban ser combinadas, para llegar en cuanto es posible, al ideal del gobierno libre.

Descendiendo ahora de la elevada región de los principios al punto de partida, la más sencilla deducción de lo que dejo expuesto pone en evidencia la inexactitud de la teoría que sirve de base a la argumentación del señor Fiscal. La cuestión queda entonces reducida a compulsar nuestros antecedentes legislativos.

La regla general es que el Presidente nombra a todos los empleados de la Administración, *cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por la Constitución.*

La generalidad de los términos de esta prescripción podría dar lugar a que se dudara si está en las atribuciones del Congreso limitar la facultad que ella confiere al Ejecutivo. No es empero, cuestionable que no sea una atribución *esencialmente administrativa* nombrar todos los empleados, *cuyo nombramiento no esté de otra manera reglado por la Constitución.*

El Congreso está, sin embargo, en posesión de la facultad de autorizar ciertos nombramientos por los jefes de reparticiones, siguiendo, sin duda, y con razón, los precedentes americanos.

El artículo correlativo de la Constitución de los Estados Unidos es más explícito que el nuestro y no deja lugar a vacilación de ningún género.

El Presidente nombrará, dice el Inciso 2.º, Sección 2a., Artículo 2.º, con acuerdo del Senado, los embajadores, ministros, cónsules, jueces de la Corte Suprema y todos los demás empleados de los Estados Unidos autorizado por la Ley, cuyo nombramiento no estuviere provisto de otra manera por esta Constitución *pero el Congreso podrá conferir por Ley al Presidente solo, a los Tribunales de Justicia o a los jueces de reparticiones, el nombramiento de aquellos empleados subalternos que ellos estimen conveniente.*

El nombramiento de los empleados subalternos de los Tribunales de Justicia, no es pues una facultad que se derive de la

división de los poderes, ni es un ataque a su independencia que los nombre el Presidente.

Y a la verdad, no se concibe cómo pudiera ser este nombramiento atentatorio, cuando el Poder Ejecutivo nombra sin contradicción a los mismos jueces y demás empleados superiores.

La independencia de los Poderes reposa en fundamentos de carácter más elevado. Se ha considerado necesario que no pueda uno ejercer directa y completamente las facultades de otro, ni ejercer una influencia preponderante en el ejercicio de sus atribuciones. La inamovilidad y cierta estabilidad en las asignaciones de los Jueces, se ha juzgado además un requisito indispensable para compensar la debilidad relativa del Poder Judicial.

Veamos ahora qué es lo que nuestra legislación dispone con respecto al nombramiento de los empleados subalternos.

Desde luego la Corte Suprema queda fuera de cuestión.

La Constitución le acuerda el privilegio de dictar su reglamento interior y económico y de nombrar *todos sus empleados subalternos*.

La ley de agosto 26 de 1863 autorizó a los Jueces de Sección a nombrar un Escribano, un Oficial de Justicia y un Ordenanza *por la primera vez*, de lo que lógicamente se deduce que *después* estos nombramientos se harían en la forma acostumbrada; es decir *por* el Poder Ejecutivo.

El señor Fiscal entiende que esta limitación no importa atribuir al Poder Ejecutivo el nombramiento *en lo sucesivo* sino que *creados*, por la ley, los Juzgados debieran ellos seguir nombrando sus empleados, con acuerdo de la Corte Suprema, en virtud de la Superintendencia que la corresponda.

Es esta interpretación de una disposición clara y explícita, gratuita por demás.

La Ley autorizaba el nombramiento *por primera vez* en consideración a las dificultades que ofrecía organizar una institución que iba funcionar *por primera vez también*. Sólo los Jueces podían conocer, en cada localidad las personas competentes. Por la misma razón los Jueces debían proponer a la Corte Suprema *los sueldos* de los empleados que nombraran. La Superintendencia de la Corte nunca se ha entendido que tenga otro objeto, ni se ex-

tienda más allá de lo que se refiere al orden interno y a la disciplina de los Tribunales Inferiores.

La Ley que organizó los Tribunales de la Capital que es la más directamente aplicable al presente caso dejó el nombramiento de los empleados del Juzgado Federal que creaba, en las condiciones de la Ley de 1863, es decir, en las atribuciones ordinarias del Poder Ejecutivo.

La misma Ley autorizó a las Cámaras en lo Civil y Comercial a nombrar sus propios empleados, y los Oficiales de Justicia de los Juzgados inferiores, dejando a éstos nombrar sólo sus ordenanzas. Nada dice con respecto a los escribientes. La regla general queda entonces en todo su vigor.

Será ésto un olvido, será más conveniente que los mismo Juzgados nombraran sus escribientes, en lo que estoy enteramente de acuerdo con el señor Fiscal. Pero ni la omisión ni las deducciones más o menos fundadas, pueden despojar al Poder Ejecutivo de una atribución que la Constitución le confiere expresamente y de que está en posesión indisputable.

Réstame ahora contestar a un argumento que parece pesar mucho en el ánimo del señor Fiscal.

Las Cámaras Legislativas, dice, aprueban sus reglamentos y nombran sus empleados, ¿por qué no ha de tener igual facultad el Poder Judicial?

La Constitución de los Estados Unidos confiere expresamente a una y otra Cámara la facultad de nombrar sus empleados; Sec. 3— Mientras tanto, como se ha visto antes, para que los Tribunales, de Justicia puedan nombrar los suyos, es necesario según la misma Constitución que sean autorizados por la Ley.

Nuestra Constitución autoriza a cada Cámara para hacer su reglamento, pero nada dice con respecto al nombramiento de sus empleados.

Una práctica inconcusa ha interpretado este silencio en el sentido Americano, tanto en cuanto a la organización de las Secretarías de las Cámaras, como en lo relativo al nombramiento de los empleados de la Administración de Justicia. En uno y otro caso nos hemos ajustado al modelo que tomábamos por guía y por ejemplo.

Después de lo que dejo expuesto, no necesito decir que es mi opinión decidida, que V. E. ha estado en su perfecto derecho al hacer los nombramientos que han originado la reclamación de la Exema. Cámara, cuya independencia en ninguna manera considero invadida, ni amenguada. — Julio 12 de 1883.

Departamento de Justicia. Resolución de Octubre 4 de 1883 que expresa; han desaparecido los motivos que provocaron el incidente en vista de lo dispuesto por la Ley de 3 de Octubre del mismo año, ordenando el archivo.

Tomo 6, pág. 478. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde que se haga lugar al pedido de creación de un Registro General de Comercio, por cuanto importa la separación del Registro en cuestión de las funciones de los Escribanos Secretarios de Juzgados, con la consiguiente ventaja para el servicio público, ya que los Secretarios se liberan de la atención que deben prestar al Registro, permitiéndoles una mayor concentración en sus funciones propias y para el Registro supone un titular exclusivamente dedicado al otorgamiento de escrituras.
- II. — La separación de funciones es también conforme con la Ley de Organización de los Tribunales de la Capital, que distingue entre: Escribanos de actuación que denomina Escribanos Secretarios y Escribanos de Registro; disponiendo en su art. 163, que «las escrituras y demás actos públicos» sólo podrán ser autorizados por estos últimos.
- III. — No es óbice para su otorgamiento, el que ello implique la constitución de un monopolio —como sostiene la Excm. Cámara Comercial— ya que siendo uno solo el Registro necesariamente tiene que ser llevado por un solo Escribano y si constituyera esto un monopolio, la ley lo había creado y con razón pues su objeto es precisamente centralizar todas las escrituras que especifica el art. 47 de la ley citada.
- IV. — La concesión del Registro debe serlo hasta tanto el Congreso no cree el cargo de Escribano rentado para el mismo, lo que es conforme con principios de buena administración que exigen la retribución de los servicios para que puedan éstos ser exigidos.

D. Andrés R. Terry, pide se le conceda el Registro General de Comercio

Excmo. señor:

De todas las solicitudes que se han presentado para regentar el Registro General de Comercio, la del señor Terry es, sin disputa, la más ventajosa. Nada pide: nada absolutamente ni por ahora ni para el porvenir, ni del Estado ni del Comercio.

La única compensación que espera es el mayor contacto en que vendrá a colocarse con el público, y es esta una aspiración legítima.

A no ser que alguno se presente en iguales condiciones y ofreciendo además *pagar*, el señor Terry tiene un derecho indisputable a ser preferido, si es que el Registro en cuestión ha de separarse de las funciones ordinarias de los Secretarios actuales.

La Exema. Cámara en lo Comercial cree ahora que debe continuar a cargo de uno de los Secretarios de los Juzgados de 1.ª instancia por turno, acordándose por este servicio un aumento de cien pesos fuertes de sueldo.

Dice la Exema. Cámara que la repetición de solicitudes de este género, podría conducir a constituir un monopolio que es conveniente evitar.

Yo pienso hoy, como antes, que hay conveniencia y es más conforme a la ley que organizó los Tribunales de la Capital, que el Registro en cuestión, sea separado de las funciones de los Secretarios. No veo tampoco cómo pueda constituirse un monopolio que teme la Exema. Cámara.

La conveniencia para el mejor servicio público, resulta manifiesta en el hecho de no ser distraído el Secretario de sus recargadas tareas por la atención que forzosamente tendrá que prestar al Registro. Este a su vez, será mejor atendido por un Escribano cuyas funciones especiales son el otorgamiento de escrituras.

Cuando se dictó el Código de Comercio, los Escribanos eran al mismo tiempo Escribanos de actuación y de Registro. Era natural entonces que el Registro que creaba el art. 45 corriera a cargo de los mismos Escribanos. La Ley de organización de los Tribunales de la Capital ha dividido las funciones de los Escribanos. Ha creado Escribanos de actuación bajo la denominación de Escribanos Secretarios y Escribanos de Registro. Entre las funciones de las primeras no se enumera la de llevar el *Registro Público de Comercio* artículos 152 a 158. Mientras tanto, el art. 163, prescribe que «*las escrituras y demás actos públicos sólo podrán ser autorizados por los Escribanos de Registro*». Es pues como he dicho, más ajustado a las prescripciones de la ley, que el Registro de Comercio sea llevado por un Escribano de Registro y no de actuación.

En cuanto al monopolio, bastará observar que siendo uno sólo el Registro de escrituras de comercio, no puede dejar de ser llevado por un solo Escribano. Si constituyera esto un monopolio, la ley lo

habría constituido, y con razón, pues el objeto del Registro, es precisamente centralizar todas las escrituras que especifica el art. 47.

Considero que hay conveniencia en aceptar la propuesta del señor Terry, mientras el Congreso no resuelva otra cosa, creando un Escribano rentado para esta Escribanía; lo que es a mi juicio más conforme a los principios de buena administración, que exige que todo servicio sea retribuído, para que pueda ser debidamente exigido. — Julio 28 de 1883.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Agosto 16 de 1883.

Tomo 6, pág. 523. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I. — Corresponde que se conceda la patente que se solicita para el procedimiento de inyectar maderas para pavimentar calles con brea y con pirilguito de hierro, con el que se consigue una mayor duración de las mismas, por cuanto la Oficina de Patentes, al fundar su oposición, manifiesta que ello, «no constituye una nueva aplicación sino una variante de los procederes conocidos, de lo que se deduce que la misma Oficina reconoce que hay algo nuevo, «una variante» en el procedimiento de referencia, y en consecuencia que se cumple el requisito de «novedad» que la ley reputa indispensable para el otorgamiento de las patentes».

II. — Debe otorgarse solamente por cinco años (tiempo mínimo) atento a la escasa originalidad del invento.

Los señores Rissotto y Azpeitia, solicitan patente de invención por el término de diez años por maderas inyectadas para pavimentar calles

Señor Ministro:

Después de la extensa exposición de la Oficina de patentes, considero conveniente se oiga a los señores Rissotto y Azpeitia, principalmente al objeto de que determinen, con claridad y precisión en qué hacen consistir su invento. ¿Es en el empleo de me-

«dios nuevos o conocidos; en su combinación en determinadas proporciones o en alguna otra circunstancia? Julio 4 de 1883.

Señor Ministro:

Los señores Rissotto y Azpeitia limitan su invento al procedimiento para hacer impermeable la madera. Esto simplifica la cuestión. La Oficina de Patentes insiste en que no hay absolutamente novedad, ni en el procedimiento ni en los medios con que se propone conseguir aquel resultado. ¿Dónde está entonces la invención?

Los recurrentes se han contraído en su último escrito simplemente a lo que se refería al adoquinado y nada dicen sobre aquella objeción fundamental de la Oficina. —Creo conveniente que por última vez les oiga V. E. por un breve término—. Julio 28 de 1883.

Señor Ministro:

Dice la Oficina en su último informe que «inyectar las maderas con brea y con piriliguito de hierro son medios conocidos y que inyectarlas con ambas conjuntamente no constituye una nueva aplicación sino una variante de los procederes conocidos». *Entre nueva aplicación y variante*, paréceme que no es grande la distancia. Tenemos pues, por la misma declaración de la Oficina, que hay *algo nuevo, una variante*, en el procedimiento de los Sres. Rissotto. Si el uso de la brea y del piriliguito de hierro estuviera patentado, los señores Rissotto no podrían aprovechar estos elementos, ni aislada ni conjuntamente, sin atacar una propiedad conquistada ya. Apenas tendrían derecho a una patente de adición. Su invento sería sólo una mejoría, que tendría a lo sumo, el derecho a ser amparada en los límites de la ley. Siendo empero los elementos mencionados, la brea y el piriliguito de hierro, del dominio común, al menos entre nosotros, no veo inconveniente en que el uso de ellos conjuntamente sea materia de una patente. Ningún derecho se vulnera; ningún perjuicio se origina a nadie, y la industria pue-

de ser beneficiada con la adquisición de un producto nuevo, o mejorado.

Pienso, por tanto, que habría justicia en conceder a los señores Rissotto la patente que solicitan, por el término de cinco años, en atención a la escasa originalidad de su invento. Al aconsejarlo así, me fundo principalmente en los principios sentados por la Corte Suprema, al confirmar la sentencia del Juzgado de Sección en la causa T. 5. S: 2, P. 290. —Septiembre 10 de 1883—.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 8 de 1883.

Tomo 6, pág. 493. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que las Compañías de Gas procedan a la remoción de sus cañerías, por así exigirlo los trabajos que debe realizar la Comisión de Obras de Salubridad, y sin que tengan derecho por ello, a indemnización alguna.

La Comisión de las Obras de Salubridad, pide se dicte una resolución que obligue a las Empresas de Gas y otras a hacer la remoción de sus cañerías con las modificaciones necesarias a la construcción de dichas obras.

Señor Ministro:

Es bien sabido que *«la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad»*. Es bien sabido también *«que los particulares sólo tienen el uso y goce de los bienes públicos, quedando siempre sujetos a las disposiciones del Código y a las ordenanzas generales o locales»* artículos 30 y 31, título 1.º capítulo 1. L. 3.

Las empresas de tranways y de gas sólo tienen, por consiguiente, *el uso y goce de la vía pública*; y no es poco. Ningún derecho han podido conferirles sus contratos en oposición a las leyes generales, y que no esté subordinada a las *ordenanzas generales o locales*. Ningún título pueden invocar para oponerse a la ejecución de obras de utilidad general, que ocupen, como ellos, la vía pública. La obligación de consentir estas obras, es implícita; y como una consecuencia lógica y forzosa es implícita también la obliga-

ción de concurrir a los gastos que origine la necesidad de poner en armonía unas obras con otras. Las protestas de las compañías de gas, de no hacer la remoción de sus caños, sin una declaración previa de indemnización es, pues, destituida de todo fundamento y de todo punto inaceptable.

Estoy, por lo tanto, de perfecto acuerdo con la Comisión de las Obras de Salubridad.

Las compañías de gas no ocupan menos la vía pública, con sus caños, que las de tranways con sus rieles; y las fundadas razones que motivaron el decreto de f. 1. les son perfectamente aplicables.

Debe en consecuencia proceder la Comisión, sin vacilar, en la forma establecida por los arts. 1.º y 2.º.

No es de esperarse que empresas poderosas, que viven del público, realizando beneficios colosales, rehusen satisfacer los gastos que originare la remoción de sus caños, y que no pueden ser de grande importancia.

Si de otra manera entendieren sus verdaderos intereses, habrá llegado la oportunidad de tomar en cuenta con más detención la cuestión de indemnización, y de recurrir a medidas coercitivas, si a ello dieren lugar. — Septiembre 6 de 1883.

Señor Ministro:

En mi dictamen de septiembre último, que reproduzco, manifesté a V. E. mi parecer acerca de la cuestión que nuevamente somete a la consideración de V. E. la Comisión de las Obras de Salubridad.

No hay razón para que las compañías de gas no sean consideradas de la misma manera que las de tranways, que ninguna dificultad hacen para remover sus rieles, y ninguna indemnización piden por ello. Unas y otras ocupan igualmente la vía pública, y ya esto sólo es un gran privilegio.

Hasta ahora no aparece opinión seria por otra parte de las empresas de gas. Por el contrario, la de Belgrano manifiesta estar conforme. La Primitiva apunta una razón que no lo es.

• El hecho de haber colocado sus caños bajo la inspección de la autoridad, no les da el derecho de no ser removidos nunca, por más que las conveniencias generales la reclaman.

Mi opinión es, pues, que se proceda con sujeción, a lo que dispone el decreto de abril 17 de 1874; a saber: 1.º se notifique a las empresas de gas hagan la remoción, cuando la continuación de las obras lo requiera, en el término de diez días; 2.º se haga la remoción por cuenta de ellos, si vencido este plazo no la hubieran hecho.

Por lo demás, la Comisión observa que las Compañías hacen hasta ahora la remoción cuando son requeridas.

Esto es lo natural, pues nadie sino ellos mismos pueden hacerlo, sin exponerse a roturas y accidentes serios. Es además una prueba de que reconocen que es su deber. — Octubre 31 de 1883.

Departamento del Interior. Resoluciones de conformidad con los dictámenes en Setiembre 14 de 1883 y Noviembre 12 de 1883.

Tomo 6, pág. 556. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiéndose suprimido en la Prefectura General Marítima, la adjudicación a favor de los empleados de la tercera parte de las multas que imponían como sanción a las infracciones que descubrían y manifestando el Ministro de Marina que ello era inconveniente por cuanto al desaparecer el estímulo las multas habían disminuído considerablemente, no corresponde que se vuelva al régimen anterior, por cuanto principios de ética administrativa, exigen que los empleados cumplan con sus deberes sin necesidad de lucrar con el cargo, debiendo el Prefecto para poner remedio a la situación creada vigilar si las infracciones se dejan pasar sin las correspondientes sanciones y en tal caso reemplazar a los culpables por empleados más celosos en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Prefectura Marítima, sobre la tercera parte que se adjudicaba a los empleados que imponían multas

Señor Ministro:

La comunicación del señor Prefecto General de Marina, a ser exacta la inteligencia que da a los hechos que denuncia, acusaría

una deplorable decadencia moral en los empleados de su Departamento.

Dice el señor Prefecto, que la multa con que la ley castiga ciertas infracciones a los reglamentos de Marina, han disminuído notablemente las ocasiones de aplicarlas debido a que no teniendo participación en ellas los empleados tienen en su aplicación menos interés.

La moral del cuento es que, los empleados de Marina, no cumplen su deber, porque no tienen interés en cumplirlo. Si este sentimiento desmoralizador hubiera de prevalecer en las demás ramas de la administración, no sería aventurado anticipar entre nosotros la ruina de las instituciones republicanas, que Montesquieu hacía reposar, con toda razón, en la virtud.

Acaso el señor Prefecto exagera la falta de participación en las multas.

Si así no fuera, si los empleados de su dependencia dejaran de imponerlas en los casos en que debieran, porque no les toca en ellas una parte, o si debiendo imponer una pena pecuniaria, imponen por la misma razón la de prisión; en una palabra, sino cumplen su deber porque no perciben lucro en ello; sólo habría un correctivo.

Cuando el sentimiento del deber ha dejado de ser la norma de las acciones humanas, para dar cabida al móvil impuro del interés, nos queda más árbitro que el temor de la pena para el gobierno de las sociedades.

Observe el señor Prefecto, ya por sí ya por empleados de su confianza, si los reglamentos se cumplen o no.

Observe si las multas corresponden a las infracciones.

Si los reglamentos se cumplen tanto mejor; si es entonces natural que no haya multas. Si no se cumplen y las infracciones se dejan pasar sin multa, ni prisión; si se da preferencia indebida a la prisión sobre las multas, se pase al punto a los omisos o negligentes, y advertirá luego que no faltan otras más celosos en su reemplazo, y que los demás se moralizan.

Es éste, a mi juicio el remedio, y no la multa al abuso que felizmente concluyó, y que con tanta razón condena la Contaduría General. — Octubre 3 de 1883.

- *Ministerio de Marina. Se adopta como resolución el dictamen en Octubre 11 de 1883.*

Tomo 6, pág. 592. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Si el tratado vigente sobre extradición con la República Oriental del Uruguay, es el aprobado por ley del Congreso de fecha 11 de agosto de 1865, no procede la extradición que se solicita, por cuanto se trata de la tentativa de homicidio que expresamente la Ley citada excluyó del tratado.
- II. — Si el tratado vigente es el de 1877, —que invoca el juez de la. instancia de Entre Ríos—, corresponde que su texto sea agregado a las actuaciones formadas, por cuanto el Procurador General entiende que no ha tenido sanción definitiva y no figura en la colección de leyes correspondiente al año indicado.

Tentativa de asesinato contra la persona del Gobernador de Entre Ríos, general E. Racedo. — Pedido de extradición al Gobierno Oriental de los complicados

Señor Ministro:

El señor Juez de 1a. Instancia de Entre Ríos al solicitar la extradición de varios individuos sospechados de complicidad en la tentativa de asesinato del General Racedo, invoca el artículo 7.º del tratado de extradición *celebrado con la República Oriental en Noviembre de 1877.*

Tengo entendido que este tratado no tuvo sanción definitiva, y no lo encuentro, ni en la colección del mismo año de 1877, ni en las publicaciones oficiales posteriores.

Si, por no regir, hubiera de considerarse en vigor el de 14 de junio de 1865, no habría lugar a la gestión de extradición solicitada.

Entre los crímenes enumerados en el artículo 1.º no está comprendido el de tentativa de homicidio. Por el contrario al prestar su sanción el Congreso, expresa y deliberadamente lo suprimió. Ley de Agosto 11 de 1865, artículo 1.º inciso 1.º.

Si pues, como creo el tratado de 1877 no es ley de la República, V. E. no puede solicitar la extradición en cuestión. Si lo fuere ha de servirse V. E. ordenar se agregue copia de su texto y vuelvan estos antecedentes a mi despacho. — Octubre 19 de 1883.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 22 de 1883.

Tomo 6, pág. 578. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No procede el indulto a favor de condenados en rebeldía que se encuentran prófugos.
- II. — La facultad de indultar y conmutar penas que la Constitución Nacional acuerda al Presidente, lo es sobre todas las penas de cualquier naturaleza que sean, reconociendo como única excepción las que se apliquen en juicios políticos.
- III. — No pueden interpretarse los arts. 99, 100 y 105 del Código Penal, como que reservan la facultad de indulto, solamente para las penas de penitenciaría y presidio, excluyendo las de prisión.

Varios ciudadanos, piden clemencia para Andrés Corte

Señor Ministro:

Antes de ahora he tenido ocasión de decir a V. E. que pienso que aquel que se coloca al amparo de la autoridad, debe principiarse por respetarla.

Don V. Silvero, acusado de complicidad en la invasión de los Paraguayos a Corrientes, se presentó primero a V. E. y después a la Corte Suprema, solicitando ser comprendido en el indulto general que había acordado el Congreso a los delitos políticos. Se encontraba al hacer su solicitud, en esta Capital, bajo un auto de prisión librado muchos años atrás por el Juzgado Federal de Corrientes. El resultado de su gestión fué que la Corte Suprema ordenara su prisión y que en la actualidad se encuentra el señor Silvero en Corrientes a disposición de su Juez natural.

Estoy, pues, de perfecto acuerdo con la Exema. Cámara de Apelaciones en lo Criminal, en cuanto no debe V. E. hacer lugar a la gracia que se solicita en favor del menor Andrés Corte. Mientras se encuentre burlando la justicia que lo ha juzgado y condenado, no puede V. E. tomar en cuenta solicitud alguna a su respecto, y lo que en rigor correspondería, sería librar orden a la Policía para su aprehensión.

No estoy, empero, de acuerdo con la misma Exema. Cámara con respecto a la inteligencia que da a las prescripciones del Código Penal que recuerda, y que a su juicio, importa una limitación a la prerrogativa que acuerda al Presidente el inciso 6, artículo 86 de la Constitución.

«Habiendo sido condenado el recurrente, dice la Exema. Cámara, a la pena de prisión, no procede la conmutación que se solicita, pues, por los artículos 99, 100 y 105, del Código Penal está reservada la gracia para las penas de penitenciaría y de presidio».

Antes de ahora he tenido también ocasión de decir a V. E. que estoy sobre este punto en decidida oposición con la Exema. Cámara. Entiendo que, el Presidente de la República tiene la facultad de indultar y conmutar todas las penas, con la única y exclusiva limitación que la Constitución ha establecido. Entiendo más; el Código Penal no ha excluido de la gracia a la pena de prisión. Entiendo por último, que si fuera exacta la interpretación que la Exema. Cámara da a las disposiciones del Código, serían éstas de ningún valor, por cuanto la ley no puede derogar una prescripción Constitucional.

Como advierto que esta facultad del Presidente continúa siendo interpretada diversamente, paréceme oportuno considerar la materia con alguna detención.

«El Presidente de la Nación dice el artículo 86 inciso 6.º puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del Tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados».

Como se ve la única limitación es con respecto al juicio político. En todo lo demás, la facultad es absoluta, y así lo han entendido y practicado los Jefes de todas las Administraciones que se vienen sucediendo en nuestra vida constitucional.

«Los términos del artículo recordado son tan claros y explícitos que no admiten ser diversamente interpretados». «La primera regla de interpretación dice Story, es dar a las palabras el sentido que tienen en la aceptación general, y cuando son claros y explícitos y bien determinados el espíritu en que están concebidas, ninguna necesidad hay de interpretarlas».

Nuestra Constitución ha seguido, en este punto, como en casi todos los demás, a la Constitución de los Estados Unidos. Importa por ello examinar qué es lo que ésta Constitución dispone sobre la materia y cómo la han interpretado sus más acreditados comentaristas.

«El Presidente, dice el art. 1.º Sec. 2a., que corresponde al nuestro, tendrá la facultad de acordar conmutaciones y perdón, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados». No exige este artículo, como se ve, ni aun *el informe previo del Tribunal correspondiente*.

Los comentaristas están conforme todos en que ésta prerrogativa no reconozca más límites que la discreción y prudencia del mismo Presidente.

Principiaré por el Federalista, la fuente de todos.

«La humanidad y los buenos principios de gobierno dice Hamilton número 74, concurren a informar la convicción de que la facultad de perdonar debe ser tan amplia y libre de trabas cuanto posible sea». «La conveniencia de depositar en el Presidente la facultad de perdonar, continúa, ha sido controvertida con respecto al crimen de traición, pero aun en este caso, la necesidad de proceder con rapidez en momentos críticos en que un perdón oportuno puede traer la tranquilidad general, aconseja dejar subsistente el poder en aquellas manos que mejor pueden aprovechar la oportunidad propicia que, una vez perdida, puede bien no volver más.

«La facultad de indulto es concedida al Presidente, sin límite alguno, dice Hent, excepto en el único caso de acusación ante el Senado» Sección IV.

«El poder de perdonar es general, dice Story, y se extiende aún a los crímenes más graves. Comprende también la facultad de perdonar las multas y las confiscaciones aunque estas materias entren en las atribuciones del Tesoro. A pesar de esto, el Presiden-

te ejerce aún en este caso su prerrogativa, porque ninguna Ley puede disminuir un derecho conferido de una manera general por la Constitución» S. 775.

Recordaré, por último, para no abusar de estas citaciones, algunos pareceres de los Attorneys Generales de los Estados Unidos consultados sobre el particular.

«El poder de perdonar tal cual ha sido acordado por la Constitución, decía el Attorney Gral. Wm. Wirt en 1820, es el poder de un perdón completo y absoluto. Partiendo de la base de que el que puede lo más puede lo menos es mi opinión, que el poder de perdonar en absoluto incluye el de perdonar condicionalmente. Pienso también que el perdón puede preceder a la condenación».

«El poder de perdonar, decía el Attorney General Maepherston Berrien, en 1830, es coexistente con el poder de castigar, excepto en los casos de acusación ante el Senado. En todos los otros casos, el poder es general e ilimitado (ingnalified) y puede ser ejercitado así antes como después del juicio y se extiende a los crímenes más grandes, como a las faltas más pequeñas. La remisión de las multas, penas y comisos por infracción de las leyes fiscales, está incluída en él y bajo esta forma se ejerceita con frecuencia. Pero si bien puede exonerar al interesado del pago en Tesorería, no puede después que el dinero ha entrado a sus cajas, ordenar su restitución» «Opiniones of Attorneys General: Tomo 1, pág. 330; 2 pág. 249».

En presencia de autoridades semejantes, no es posible vacilar; y podemos afirmar con entera confianza que la facultad de perdonar que la Constitución confiere al Presidente, no reconoce más límite que el que ella misma ha establecido. Podemos también decir con la misma confianza que esta facultad no puede ser limitada por la acción ordinaria de la ley, mucho menos por una ley transitoria, cual es, para la Nación el Código Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Y antes de seguir en esta demostración, observaré de paso que no es, a mi juicio, exacto que las disposiciones recordadas por la Exema. Cámara, exceptúen la pena de prisión de los beneficios del perdón. Basta leerlas para percibir que su objeto es sólo establecer que la buena conducta de los condenados a penitenciaría

y a presidio durante la mitad del tiempo de su condena, es un motivo que pueda autorizar la remisión de la otra mitad. Pero de esto no puede deducirse sin violencia que el Presidente no pueda, en igualdad de casos, remitir la pena de prisión, en todo o en la parte no cumplida.

Al organizar los Tribunales de la Capital, la ley ordena que «hasta tanto se dicte el Código Penal de la República, continuará rigiendo en la Capital el Código Penal de la Provincia de Buenos Aires» Art. 313.

«La Corte Suprema de la Nación acaba de declarar incidentalmente en un caso reciente» «que este mismo Código debe considerarse parte del derecho común a que se refiere la Ley Nacional, y regir en consecuencia en los casos sujetos a la jurisdicción federal». Causa seguida a B. Jofré por homicidio en el puerto de Zárate.

El Código Penal de la Provincia de Buenos Aires, pues, es simplemente una ley transitoria para la Nación y mal puede menoscabar prerrogativas que arrancan de la misma constitución, y que está arriba aun de las leyes de carácter permanente.

Si esta facultad no tiene límites marcados de antemano en la Constitución, los tiene, empero, y muy precisos, en la prudencia del Gobernante y en las más altas consideraciones de orden público.

«La facultad de perdonar dice Story es una consecuencia necesaria del derecho de castigar, de otra manera los acusados podrían llegar a ser víctimas de sus acusadores, de la inexactitud de los testigos y de los errores de los Jueces. Algunas veces también una ley podrá ser violada, y el delincuente encontrarse amparado por circunstancias que le harán excusable a los ojos de la moral y de la justicia absoluta, aunque sea culpable ante la letra de la Ley. ¿Qué hacer entonces? ¿Absolver al culpable, no obstante la prescripción de la Ley, o aplicarle un castigo fuera de proporción con la ofensa?

Conviene, además, no cerrar toda esperanza al condenado estimulando su arrepentimiento como un medio de mitigar su pena. Puede por último, un perdón oportuno, evitar graves males a la sociedad y no es imposible tampoco que un hombre meritorio y que hubiese prestado grandes servicios a su país, hubiese sido arrastrado a cometer un crimen. La ley es inexorable: ¿no sería

cruel que no hubiera un poder que estuviera facultado para tomar en cuenta sus servicios y sus méritos y mitigar su pena?

La necesidad o la conveniencia, si se quiere, de que en algún poder existe la facultad de perdonar, se ha impuesto de por sí en todos los tiempos y a todos los pueblos. Bajo los gobiernos absolutos, era una prerrogativa del monarca, como una consecuencia de la reunión de todos los poderes en su mano.

En los pueblos regidos por instituciones libres, es una atribución del Jefe del Estado, con más o menos amplitud.

La constitución de Chile, requiere el acuerdo del Consejo de Estado. La de Bolivia sólo permite la conmutación de la pena capital en diez años de presidio. Nuestras Constituciones anteriores a los años 19 y 26 requerían *poderosos motivos, salvo los delitos que la ley exceptúa*. Las Constituciones del Perú, Ecuador y demás Repúblicas Americanas o niegan o restringen notablemente esta facultad.

En ninguna es más amplia que en la nuestra; y en ninguna es por ello más delicada la posición del Presidente.

La Constitución pudo depositar esta facultad en el Cuerpo Legislativo, en alguna fracción del mismo, o en algún Consejo de Gobierno. Al atribuirle única y exclusivamente al Presidente, ha querido aumentar su responsabilidad, pues, es bien sabido que toda responsabilidad se debilita a medida que se divide.

Al usar de una prerrogativa, que le coloca en cierto modo arriba de la Ley, el Presidente no debe dejarse conducir por los sentimientos de generosidad y simpatía comunes a todos los hombres. Está de por medio la justicia que caería en desprestigio si sus decisiones se dejaran sin efecto; con frecuencia está de por medio el interés del pueblo, cuya seguridad sería comprometida si los criminales contaran con demasiada facilidad para el perdón. Sólo consideraciones poderosas de orden público, o circunstancias excepcionales con respecto a la persona, deben y pueden autorizar el uso de prerrogativa tan augusta. Tal es mi parecer.

Estos principios me han servido de guía en los diversos casos que V. E. ha sometido a mi dictamen antes de ahora. He tenido también presente que la criminalidad en la República, está lejos de ser satisfactoria. La Penitenciaría que llamó la atención en la Exposición Universal de París por sus proporciones colosales con

relación a nuestra población, es hoy estrecha, concluída apenas, a términos de que V. E. se preocupa de construir una nueva.

No sin violencia, devuelvo hoy diez solicitudes del mismo género, en ninguna de las que encuentro las condiciones especiales que a mi juicio son indispensables para autorizar el perdón. — Octubre 29 de 1883.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 21 de 1883.

Tomo 6, pág. 543. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La buena conducta de un preso no es requisito suficiente para obtener su indulto, los artículos 99, 100 y 105 del Código Penal exigen además, dedicación «notable» para el trabajo, pruebas de reforma «positivas» y señales de corrección «irrecusables».

Ciriaco Oribe, preso en la Penitenciaría, pide la remisión de la pena o la conmutación por el servicio en un cuerpo de línea

Señor Ministro:

Los artículos del Código Penal que el curador del preso invoca en favor de su protegido son los siguientes:

Art. 99. — La condenación (a presidio) por tiempo indeterminado deja al condenado la esperanza de merecer su libertad dando pruebas de reforma positiva especialmente si durante ocho años continuos muestra una aplicación notable al trabajo, no incurrir en castigo por acto de maldad o desobediencia o da cualquiera otra señal irrecusable de corrección. En estos casos podrá obtener una gracia después de cumplir la mitad del tiempo de condena.

Art. 100. — El presidio por tiempo determinado no podrá pasar de quince años, ni ser menor de seis; pudiendo los condenados abreviar también su duración si llenan las condiciones prescriptas en el artículo anterior, con excepción del caso de reincidencia. Esta gracia sin embargo, no podrá acordarse sino después de cumplir la mitad del tiempo de condena.

Art. 105. — La pena de Penitenciaría, como la de presidio, puede ser por tiempo determinado o indeterminado, no debiendo en el primer caso pasar de 15 años, ni ser menor de 6; y pudiendo en ambos solicitar su gracia cuando hubiese expirado la mitad del tiempo en los mismos términos y siempre que se hayan cumplido las mismas condiciones prescriptas para los presidiarios.

Este preso fué condenado en 24 de julio de 1881 quiere esto decir que en realidad ha sufrido dos años de condena, pues el tiempo anterior era un simple procesado, un preso «sub-judice».

Su comportamiento según informe del Director de la Penitenciaría ha sido *buena*. Algo más exigen los artículos antes recordados. Para optar a la gracia, dicen, la aplicación al trabajo ha de ser *notable*; las pruebas de reforma *positivas*; las señales de corrección *irrecusables*.

De otra manera, si la simple buena conducta ha de bastar, no quedaría preso alguno que no ocurra a V. E. y mejor sería reducir de una vez las penas del Código a la mitad.

Pienso que no es éste el caso de la ley. — Octubre 29 de 1883.

Señor Ministro:

Sírvase V. E. ordenar vuelvan estas actuaciones con los antecedentes que deben existir en el Ministerio. — Abril 1.º de 1884.

Señor Ministro:

La observación del Estado Mayor del Ejército me parece muy fundada.

Aunque no mediara la disposición expresa de una ley, faltando apenas tres meses para la terminación de la condena, su cambio por el servicio en un cuerpo de línea, no tendría objeto, y sólo conduciría a un trastorno inútil.

Pienso que no debe V. E. hacer innovación y dejar se cumpla la ley en toda su amplitud. — Abril 18 de 1884.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 22 de 1884.

- I. — Es improcedente el pedido de remisión de pena que se formula ante el P. E. Nacional, por tratarse de reos condenados por los Tribunales ordinarios de la Provincia de Buenos Aires.
- II. — El hecho de estar la Penitenciaría a cargo de la Nación —luego de la federalización del Municipio— sólo implica para ésta, la facultad de guardar los presos con sujeción al reglamento y no la jurisdicción sobre ellos que lógicamente conservan las autoridades que lo juzgaron y condenaron que serán nacionales o provinciales según los casos.

Juan Lagourdette y otros presos en la Penitenciaría, piden remisión de pena

Señor Ministro:

La facultad de indultar o conmutar las penas está limitada por la Constitución a los delitos sujetos a *la jurisdicción federal*.

El recurrente fué juzgado y condenado por los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires en 1870 por delitos comunes. No está, pues, en las atribuciones de V. E. tomar en cuenta su solicitud.

El hecho de estar la Penitenciaría a cargo de la Nación, después de la federalización del municipio, no ha cambiado la naturaleza de los delitos, ni sujetado a todos los presos y condenados en ella existentes a la jurisdicción federal.

Hay en este establecimiento presos de todas las Provincias, que remiten sus autoridades por carecer de cárceles seguras. La Nación sólo tiene sobre ellos la jurisdicción bastante para su guarda, con sujeción a su Reglamento. En todo lo demás, están sujetos a las autoridades que los juzgaron y sentenciaron y a ellas deben ocurrir — Octubre 30 de 1883.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 6 de 1883.

Toda venta de bienes raíces de la Nación debe llevarse a cabo en remate público, —salvo excepción expresa de la ley—.

Propuesta de D. J. N. Puccio, para la compra de un área de tierra

Señor Ministro:

Pienso con la Contaduría General que no debe V. E. aceptar la proposición del Señor Puccio, no sólo porque toda venta de bienes raíces de la Nación debe hacerse en remate, salvo autorización expresa de la ley, sino porque no se sabe, si el resto de la propiedad pierde con la enajenación de una parte.

Además, es bien sabido que los Gobiernos compran siempre caro, y venden barato. Salvo razones que no conozco, y el mejor juicio de V. E. sería, tal vez, prudente conservar esta propiedad, que puede después tener aplicación con el servicio público. — Octubre 31 de 1883.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Noviembre 9 de 1883.

Tomo 6, pág. 585. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Es inadmisibile un proyecto de convención con España que otorga jurisdicción a los Cónsules en las sucesiones intestadas y en los casos de averías, con menoscabo de los Tribunales del país.
- II. — El tratado de 1826 con el Gobierno Británico, acordó a los Cónsules el derecho de nombrar curador en las sucesiones intestadas a falta de herederos legítimos presentes, concesión que luego se hizo a las Naciones con quienes celebramos tratados análogos estipulándose en algunos simplemente las intervenciones consulares en los inventarios, administración y liquidación no concediéndoles nunca facultades jurisdiccionales.
- III. — La intervención oficiosa de un Cónsul, sólo puede tener lugar en el caso de que todos los interesados sean de la misma nacionalidad del Cónsul y siempre que todos estuviesen conformes en someterle la cuestión.

Proyecto de convención consular con España

Señor Ministro:

El proyecto de convención propuesto por el señor Ministro de España en lo que se relaciona con el Departamento a cargo de V. E. me sugiere las observaciones que paso a especificar.

Toda la parte relativa a las sucesiones, prolijamente detalladas en los artículos 16 a 18 inclusive, es de todo punto inadmisibile.

Ella importa atribuir jurisdicción a los Cónsules en las sucesiones intestadas, con menoscabo de los Tribunales del país. Y como lo que se acordase a los Cónsules de España, habría de acordarse a los de las demás naciones, vendría a resultar que los Tribunales Nacionales serán anulados en gran número de casos.

El tratado de 1826 acordó el primero a los Cónsules de S. M. B. el derecho de nombrar curador en los casos de sucesión intestada y a falta de herederos legítimos presentes.

Este favor fué acordado a todas las Naciones con los que celebramos tratados. En algunos se estableció simplemente que los Cónsules tendrían *intervención* en los *inventarios administración y liquidación* de la sucesión. De esto a dar jurisdicción en menoscabo de la propia, la diferencia es inmensa.

Nuestros Tribunales nunca han negado esta intervención de que están en posesión los Cónsules y no creo que convenga acordarles más.

Pienso lo mismo con respecto al art. 11 que atribuye jurisdicción a los Cónsules para el arreglo de averías.

Aun en el caso de que todos los interesados sean de la Nación a que pertenezca el Cónsul y no haya *ninguno del país en que resida el mismo o de una tercera potencia*, no puede negarse a los primeros el derecho de ocurrir a los Tribunales, si no estuviesen conformes con la intervención oficiosa del Cónsul. — Noviembre 2 de 1883.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con la dictaminado. — Diciembre 16 de 1883.

Tomo 6, pág. 533. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La reclamación por la vía diplomática en defensa de los intereses de los súbditos argentinos en el extranjero, sólo procede en el caso de manifiesta denegación de justicia, la interposición en cambio de los «buenos oficios», es de práctica usual para la solución de todas las dificultades que puedan presentarse entre los naturales del país y las autoridades de una Nación amiga.
- II. — La interposición de los «buenos oficios» no puede significar nunca que el P. E. asuma la jurisdicción que corresponda a los tribunales extranjeros, ni la facultad de resolver las cuestiones suscitadas.

**Reclamo de Puch Gómez y Cía, contra el Gobierno del Perú,
por suministros hechos a su ejército**

Señor Ministro:

Si bien es hoy un principio admitido que los individuos de una Nación que extienden a otra sus operaciones de comercio, proceden de su cuenta y riesgo, sin obligar por ello la intervención directa de sus Gobiernos, salvo el caso de denegación manifiesta de justicia, es también admitido, y de práctica usual, que los mismos

Gobiernos cooperen con sus buenos oficios a la solución de las dificultades en que sus naturales puedan encontrarse con las autoridades de una nación amiga.

Esto es lo que los señores Puch Gómez y Cía. solicitan, y no creo pueda V. E. rehusarlo.

Sólo sí observaré que los sentimientos de simpatía que inspira la desgracia, aconsejan que, al ordenar V. E. al representante de la República en el Perú, haga valer con eficacia su interposición amistosa en favor de los señores Puch Gómez y Cía., le recomiende tenga en cuenta la situación de prueba y sufrimiento porque pasa aquel pueblo hermano. — Noviembre 15 de 1883.

Señor Ministro:

Después de relacionar las dificultades que las cuestiones suscitadas por uno de los socios ha originado a la sociedad Puch Gómez y Cía., hasta el extremo de impedirle recibir la cantidad que el Gobierno del Perú la ha mandado pagar; otro de los socios pide a V. E. interponga sus buenos oficios, al objeto de que dicho Gobierno del Perú entregue a la Legación Argentina en aquella República la cantidad mandada pagar, para que la Legación lo remita a V. E. y V. E. lo entregue a quien corresponda.

Como se ve, se pretende que V. E. asuma la jurisdicción que corresponde a los Tribunales Peruanos o Argentinos, según el caso, y resuelva cuestiones pendientes entre particulares.

No necesito decir que semejante misión está fuera de las atribuciones de V. E. — Marzo 26 de 1890.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 21 de 1890.

Tomo 6, pág. 594. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que la Municipalidad, en el otorgamiento de una escritura de hipoteca que debe presentar en un juicio que sigue contra los arrendatarios del teatro Colón, costée los sellos del contrato y su respectivo testimonio, por cuanto la Administración Pública —de la que la Municipalidad forma parte— ha sido considerada siempre exenta del uso de papel sellado, aunque expresamente la ley no lo declare.

La Municipalidad de la Capital, consulta sobre la ley de sellos

Señor Ministro:

La Municipalidad está exonerada del uso del papel sellado; no paga tampoco contribución por los bienes que posee. No veo entonces la razón por qué en la escritura que debe otorgarse con motivo de la cuestión que sigue sobre el edificio del Teatro de Colón, haya de ser obligada a costear los sellos que la ley exija a los particulares.

Dice el señor Procurador del Tesoro que la ley no contiene excepción alguna en favor de la Municipalidad.

La razón es obvia; porque la excepción está implícita en la que abraza toda la administración;

Sin necesidad de una excepción expresa los Poderes Públicos se han considerado siempre dispensados de usar papel sellado.

El señor Procurador del Tesoro hace también distinción entre las propiedades. Municipales, que producen renta, y las que no producen. No alcanzo la razón.

Ninguna propiedad produce más renta que un mercado, y nunca se ha pretendido que pague contribuciones.

El Teatro de Colón presta también, en su esfera un servicio municipal contribuyendo a las diversiones públicas, indispensables en toda sociedad civilizada.

Si este servicio se combina con la producción de alguna renta, tanto mejor y no me parece justo que esta sola razón determine el pago de impuesto.

Muy oportunamente, se ha observado, por último, que entre nosotros la Municipalidad no es sino una rama de la administración pública; y que los impuestos que se la exigieran para con-

currir a los gastos generales, no harían más que entrar por una caja, para salir por otra, y volver al punto de partida. — Noviembre 29 de 1883.

Se adoptó como resolución el dictamen; se ignora la fecha.

Tomo 6, pág. 552. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — El Poder Ejecutivo carece de facultades para «resolver» ante qué Juez se ha de ocurrir para dirimir cuestiones judiciales; la misión del P. E. es la de ejecutar la ley, no interpretarla ni decidir cuestiones de competencia.
- II. — Correspondería se remitiese a los peticionantes copia de las leyes y decretos vigentes acerca del gobierno y administración de Territorios Nacionales, para que procedan con arreglo a ella, y convendría que se hiciera con estas leyes y decretos, una publicación especial para ser distribuida en las Colonias.

Los Concesionarios de la colonia Aquino, consultan si en las cuestiones judiciales deben acudir ante el Juez de Paz de la Colonia Formosa o de la Gobernación del Chaco

Excmo. Señor:

Los señores Ratiño y Vescovo, solicitan de V. E. se sirva *resolver* si en las cuestiones judiciales que puedan surgir en su colonia, han de ocurrir al juez de Paz de Formosa, o a la Gobernación del Chaco.

V. E. no está habilitado para *resolver* puntos de esta naturaleza, ni puede dar jurisdicción a quien no la tiene por la ley.

Si los señores Ratiño y Vescovo se encuentran en el caso de ocurrir a la justicia dirigirán su acción donde lo crean conveniente. La misión de V. E. es ejecutar la ley, no interpretarla, ni dirimir cuestiones de competencia. La *decisión* que se pide a V. E. sería una simple indicación; un consejo, si se quiere, que a nadie obligaría y nadie estaría obligado a seguir, ni el mismo que lo solicita.

Creo que debe V. E. limitarse a ordenar a la Oficina de Tierras y Colonias, remita a los expresados señores Ratiño y Vescovo copia de las leyes y decretos vigentes acerca del Gobierno y administración de los Territorios Nacionales para que procedan con arreglo a ellas, en los casos que pudieran ocurrir en la formación de su Colonia.

Estas leyes y decretos se encuentran envueltos en el cúmulo de nuestra legislación que crece todos los días, y no todos tienen fácilmente a la mano.

Sería a mi juicio conveniente hacer de ellas una publicación especial, y distribuirla en las Colonias. — Diciembre 13 de 1883.

Departamento del Interior. Resolución en Febrero 28 de 1884.

Tomo 6, pág. 565. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La exoneración de derechos que por el art. 2.º de la ley de aduanas puede el P. E. conceder, se limita en cada caso a máquinas que en el correspondiente pedido deben individualizarse con claridad.
- II. — La exoneración de derechos que en términos generales se pide para artículos eléctricos, constituye un privilegio que sólo el Poder Legislativo puede conceder, debiendo en consecuencia solicitarse ante dicho Poder.

Julián Balbin, solicita exoneración de derechos para la introducción de maquinarias, aparatos, etc. de electricidad del sistema Edison

Señor Ministro:

Estoy perfectamente de acuerdo con los informes que preceden.

La facultad que confiere a V. E. el artículo 2.º está limitada en cada caso especial a tales o cuales máquinas precisas y determinadas, en el momento de presentarse a despacho y solicitar entrar libremente.

La exoneración en los términos generales en que se solicita para máquinas que no se determinan, y que pueden aun no estar inventadas, importaría un verdadero privilegio, que sólo el Congreso puede conceder. A él debe ocurrir el representante del señor Edison, en la confianza de que ha de encontrar en su elevado juicio la consideración y el favor a que es acreedor el genio portentoso a que tantos progresos debe la ciencia en nuestros días. Febrero 7 1884.

Ministerio de Hacienda. Se adopta como resolución el dictamen.— Marzo 22 de 1884.

Tomo 6, pág. 603. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiéndose suscitado un conflicto de competencia entre un Juez de Sección y el Administrador de la Aduana, por cuanto el primero reclamó mercaderías afectadas a un juicio seguido por ante su juzgado que se encontraban depositadas en la Aduana y el Administrador de ésta, a su vez, dispuso el embargo y remate de las mismas por haberse decretado la quiebra de sus propietarios y con el objeto de aplicar su importe al pago de los derechos que las mercaderías adeudaban, corresponde que se dé la razón al Administrador, considerando que su proceder encuadra en las facultades que le otorgan los arts. 117 y 172 de las Ordenanzas, y en consecuencia que ha obrado dentro de los límites de la jurisdicción administrativa que la ley le confiere.

El Juez Federal de la Capital, sobre el producido de la venta de mercaderías de los señores A. Maderna y Cía., rematadas por orden del Administrador de la Aduana de la Capital

Señor Ministro:

Dice el señor Juez de Sección doctor Tedín que *antes de dictar otras medidas*, cree conveniente poner en conocimiento de V. E. que el señor Administrador de la Aduana de la Capital por varias ocasiones no ha dado cumplimiento a sus mandatos. Dice el señor Juez; que en primer lugar el señor Administrador no ha expedido el informe que le pidió acerca de si ciertas mer-

mercaderías embargadas en el concurso de Maderna y Cía. habían sido o no vendidas.

2.º — Que no ha dado cumplimiento a la orden que se dirigió para el embargo de las mercaderías que dichos Maderna y Cía., tuvieran en la Aduana, y:

3.º — Finalmente, que no le ha suministrado los datos que le pidió acerca de las mercaderías que los mismos Maderna y Cía. tuvieran en la Aduana, *para resolver en su mérito sobre el embargo decretado*, sosteniendo ser él el Administrador el único competente para resolver sobre el destino de dichas mercaderías.

Como se ve, hay en todo esto una cuestión de datos pedidos y que se suponen negados, y una cuestión de competencia.

En cuanto a lo primero, sin duda alguna el señor Administrador ha debido suministrarlos tan pronto como le fueran pedidos.

Dice ahora en la extensa comunicación, haberlos remitido ya, agregando que a mayor abundamiento, los remite nuevamente. Es éste, pues, en esta parte, asunto concluido.

En cuanto a la competencia, el señor Administrador, ha estado en su perfecto derecho de sostener su jurisdicción.

Las disposiciones de las ordenanzas que invoca en su favor no pueden ser más claras ni más explícitas.

«Se entenderá ser del deudor o del fiador, dice el art. 117, todas las mercaderías que estuviesen en la Aduana a nombre de ellos por consignación o por transferencia.

«Aun cuando los aceptantes estén concursados, contienen el siguiente 172, si tienen mercaderías en la Aduana, se embargarán, y no entrarán en la masa del concurso las destinadas a cubrir la deuda fiscal».

Los artículos subsiguientes determinan el procedimiento a seguir hasta la venta y aplicación del producido de las mercaderías.

Al abrirse la quiebra, de Maderna y Cía., el Administrador ha estado por consiguiente en su perfecto derecho al trabar embargo en las mercaderías que a la sazón existían en la Aduana a nombre de sus deudores *por consignación o por transferencia cualquiera que fuera su origen*. Del mismo modo procedió en la esfera de sus atribuciones, al proceder a la venta de las mercaderías embargadas y aplicar su importe al pago de los derechos adeudados. Su único deber era pasar al concurso el excedente de la

venta, cubiertos los derechos u ocurrir al mismo si el producido era insuficiente. Es también claro que advirtiéndose desde el primer momento que el producido sería insuficiente, el Administrador obró cuerdamente al ocurrir al concurso tan luego como se inició .

Al proceder de esta manera, como he dicho, el Administrador ha procedido dentro de la esfera de la jurisdicción que la ley confiere, y el señor Juez de Sección no hubiera podido dictar *medidas coercitivas para obligarle a cumplir sus resoluciones*. Hubiera surgido en tal caso una cuestión de competencia, cuyo conocimiento es del exclusivo resorte de la Corte Suprema de la Nación.

Después de lo que dejo expuesto, lo que corresponde a mi juicio es lo siguiente:

1.º Prevenga V. E. al Administrador, suministre al Juzgado de Sección a la brevedad posible los datos que le pidiera sin perjuicio de sostener la jurisdicción administrativa que las ordenanzas le confieren en los casos que las mismas determinan.

2.º Conteste V. E. al Juzgado de Sección que ha ordenado al Administrador le suministre los antecedentes que le pidiera, y que en lo que respecta a las mercaderías de los señores Maderna, que han dado origen a este incidente encuentra V. E. que el Administrador ha obrado dentro de los límites de la jurisdicción administrativa que la ley le confiere. — Febrero 19 de 1884.

Ministerio de Hacienda. Se adopta como resolución lo dictaminado. — Marzo 14 de 1884.

Tomo 7, pág. 168. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. ordene se tenga por regla general, el temperamento que propone la Dirección de Rentas, según el cual, las multas impuestas por reglamentos o decretos en «pesos fuertes» sean abonados en «peso moneda nacional» en razón de ser insignificante la diferencia que media entre ambas monedas y haberse adoptado la segunda como base de nuestro sistema monetario en reemplazo de la primera.

La Prefectura Marítima, consulta sobre la clase de moneda en que debe hacerse efectivo el impuesto de sellos

Señor Ministro:

Encuentro también equitativo y aceptable el temperamento que propone la Dirección General de Rentas.

Cuando la ley hacía referencia a pesos fuertes, se refería notoriamente a los *pesos fuertes* que servían de base al sistema monetario y rentístico nacional.

La designación de pesos fuertes, ha quedado subsistente en algunos decretos y reglamentos que no son de revisión anual. Es claro a mi juicio que por tales *pesos fuertes*, no puede entenderse otra cosa que pesos moneda nacional, puesto que para la nación es ésta la moneda legal.

El argumento de inducción que se desprende de una disposición de la ley de sellos, es concluyente.

Muchas de estas multas se pagan en sellos. No habiendo en la actualidad, sellos a pesos fuertes, parece natural que el que debe abonar una multa de 4 fuertes, por ejemplo, cumpla entregando un sello de 4 pesos moneda nacional.

Creo conveniente ordene V. E. se tenga por regla general la solución que propone la Dirección General. — Marzo 20 de 1884.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Marzo 16 de 1884.

De conformidad con el art. 119 de la Ley de Colonización puede el P. E. autorizar a los Jueces de Paz de las Colonias para que extiendan a los colonos las escrituras de sus respectivas concesiones.

El concesionario de la Colonia Víctor Manuel, pide se autorice al Juez de Paz de esa colonia para firmar las escrituras a favor de sus pobladores

Señor Ministro:

El artículo 119 de la Ley de Colonización previene que, establecidas que sean cincuenta familias, los colonos procederán a nombrar un Juez de Paz cuyas facultades determinará el Poder Ejecutivo.

No veo en qué pueda obstar en la disposición a que conceda V. E. al Juez de Paz de la Colonia «Víctor Manuel» la autorización que solicita su concesionario, para que proceda a extender a los colonos las escrituras de sus concesiones respectivas.

Por el contrario; entre las facultades que V. E. está autorizado a conferir a dichos Jueces de Paz, será ésta una de las primeras, por cuanto se dirige a llenar una de las necesidades de toda sociedad que se hace sentir; cual es la de dar carácter permanente a los actos de la vida civil. — Marzo 22 de 1884.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad al dictamen de Marzo 2 de 1884.

Tomo 7, pág. 9. — Inf. de los Concej. Leg. del P. E.

=====

El indulto es una facultad amplia del Presidente de la Nación que no reconoce más limitación que la establecida en la misma Constitución —caso de juicio político— más debe ella ejercerse con suma prudencia, mediando consideraciones de interés público y muy especiales con respecto a la persona a favor de quien se ha de conceder la gracia.

Varios ciudadanos piden gracia para Carlos Vilate, preso en la Penitenciaría

Señor Ministro:

Antes de ahora he tenido ocasión de decir por extenso a V. E. que no considero exacta, ni constitucional la limitación que la Excm. Cámara de lo Criminal atribuye a la prerrogativa del Presidente de indultar y conmutar las penas, así de presidio y penitenciaría por seis y más años, como las inferiores y cualesquiera otras, sin más limitación que la que la misma Constitución ha establecido.

Dije también en aquella oportunidad que, si bien esta prerrogativa era amplia e ilimitada, por la misma razón no debiera ejercerla el Presidente sino con suma prudencia y mediando altas consideraciones de interés público, o muy especiales, con respecto a la persona en cuyo favor se implora la gracia.

público ni las personales que justifican la excepción que solicita un número considerable de vecinos del Tigre y San Fernando,

En el presente caso no encuentro ni las razones de orden en favor de Vilate, y por respetable que su interposición sea, consecuente con mis opiniones anteriores, sobre tan delicada materia no puedo aconsejar a V. E. la acoja favorablemente. — Marzo 22 de 1884.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 5 de 1884.

El tratado con la República Oriental del Uruguay ni ningún otro autoriza la extradición por delitos leves.

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, solicita de la autoridad Uruguaya la extradición de Pascual Salas.

Señor Ministro:

Resulta de estos antecedentes, que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, después de un extenso procedimiento, absolvió a Pascual Salas de *culpa y cargo*, por los delitos de motín y asesinato en la persona del Coronel D. Aquiles González de que se le acusaba, y que al mismo tiempo, ordenó ampliar el sumario respecto al delito de hurto, porque también se procesaba al dicho P. Salas, y reducirlo a prisión, por resultar semi-plena prueba contra él.

El hurto de que se hace cargo Salas es de *un par de botones de oro, unos gemelos* (supongo anteojos de teatro) y de algún dinero, cuya cantidad no se determina, ni remotamente; circunstancia que hace suponer sea de poca consideración.

Ni el tratado con la República Oriental, ni ningún otro, autoriza la extradición por delitos leves, cuyo conocimiento y castigo correccional corresponde propiamente a la policía correccional de cada país.

Es mi opinión, que no debe V. E. acceder al pedido del Gobierno de Entre Ríos.

en armonía con el decoro de los poderes públicos no comprometer la dignidad del país en gestiones que no han de conducir este caso comprendido en los términos del tratado; y está más visiblemente a resultado alguno práctico. — Marzo 24 de 1884.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Se adopta como resolución

Es más que probable que el Gobierno Oriental no considere *el dictamen, en Abril 8 de 1884.*

Corresponde que el P. E. acepte la invitación que formula el Gobierno Italiano para concurrir al Congreso Penitenciario que tendrá lugar en Roma, (1884), debiendo recaer la elección del representante en persona competente para ello.

El Gobierno de Italia, invita al Argentino al tercer Congreso Penitenciario

Señor Ministro:

Sería conveniente tener a la vista los antecedentes del Congreso de Stokolmo que deben obrar en ese Ministerio. Sírvasse V. E. ordenar que pasen a mi despacho. — Noviembre 24 de 1883.

Señor Ministro:

Los deplorables incidentes que tuvieron lugar no ha mucho en la Penitenciaría, hoy Nacional, de que tanto se ocupó la prensa de esta Capital, dan testimonio elocuente de que no basta tener establecimientos grandiosos, a costa de millones, sino que es necesario saber administrarlos.

Si el Gobierno de los hombres es de todos, la ciencia más difícil, la dificultad acrece, tratándose de criminales destituidos del sentimiento del deber y del honor, y aún del temor de las penas, principales resortes que mueven y dirigen la sociedad humana.

A la verdad, fácilmente se concibe que la dirección de grandes agrupaciones de hombres, perversos y corrompidos, en su mayor parte, es tarea delicada, que requiere una inteligencia superior; un gran conocimiento del corazón del hombre y condiciones raras de carácter para conservar inalterable el orden interno, utilizar el trabajo de tantas fuerzas, a fin de aligerar el sacrificio de la comunidad; y por último, para proveer a la educación y reforma moral de tantos seres desgraciados, en bien de ellos mismos, y para evitar sean un nuevo peligro al terminar sus condenas.

La frecuencia con que estos Congresos Penitenciarios se reúnen, prueba que los Gobiernos de las Naciones más adelantadas están apercibidos de la necesidad de mejorar, sin descanso, sus establecimientos de este género, comunicándose los resultados adquiridos y los medios empleados.

Nninguno lo necesita más que nosotros.

Los reglamentos de nuestra penitenciaría son en extremo deficientes y embrionarios; la experiencia adquirida escasa, y nula, hasta ahora, la enseñanza práctica.

V. E. hará un verdadero servicio al país, si, aceptando la invitación del Gobierno de Italia, acertara a nombrar una persona competente que representara a la Nación en el Congreso que ha de reunirse en Roma en octubre próximo.

Débil sería el contingente de saber y de experiencia que llevaríamos. Todo está por hacerse entre nosotros: el régimen penitenciario es apenas un ensayo; el Código Penal no está aún sancionado; la estadística criminal incompleta y de data demasiado reciente, para que sus resultados puedan conducir a conclusiones generales. Asimismo, el representante de la República, siquiera sea en homenaje a la invitación y como punto de comparación, debiera ir munido de un plano de la Penitenciaría, de muestras de los artículos que en ella elaboran los presidiarios; del proyecto del Código Penal en vía de ser sancionado y por último, de los datos estadísticos que pudieran reunirse, todo lo que podría condensarse en una memoria elaborada, que presentaría al Congreso Penitenciario, al menos como un testimonio de que la Nación se asocia a sus humanitarios propósitos.

En cambio el representante Argentino, con los reglamentos, los datos y la enseñanza que recogiera, nos traería el fruto que necesitamos de la experiencia trabajosamente adquirida por las Naciones que están a la cabeza de la civilización, en largos años de estudio y sacrificios. — Marzo 27 de 1884.

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 19 de 1884.

Tomo 6, pág. 599. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El auxilio que la Prefectura Marítima debe prestar en caso de siniestros, debe limitarse tan sólo al momento del naufragio y durante el tiempo indispensable para que los interesados puedan obtenerlos por su cuenta.

Reglamentando la manera cómo deben prestar sus auxilios en los siniestros la Prefectura Marítima y sus dependencias

Al Sr. Prefecto Marítimo:

Hase notado que toda vez que tiene lugar un siniestro en los buques playeros, la ayudantía concurre, no sólo con todos sus elementos mecánicos de auxilio, sino también con todo su personal.

Esto, aparte de las interrupciones que ocasione al servicio ordinario es un exceso de celo que no hay motivo para observar si no en los primeros momentos, para dar lugar a los dueños o patrones de los buques a que busquen al personal y otros elementos que necesiten, tanto más, cuanto que, hallándose dichos buques cerca de tierra y por consiguiente al alcance de todos los recursos es de su cuenta procurárselos y soportar las erogaciones requeridas.

El auxilio que la autoridad está obligada a prestar no debe salir de los límites de la oportunidad y eficacia.

En consecuencia debe Ud. disponer que en lo sucesivo, el personal y elementos de la Repartición se ponga al servicio de los intereses particulares, tan sólo en el momento del siniestro y durante el tiempo indispensable para que los interesados puedan obtenerlos por su cuenta.

De otro modo, no sólo no es posible concurrir simultáneamente a diversos puntos, sino que se autoriza a los particulares para que se atengan a la acción única de la autoridad cuyo rol no debe ni puede ser otro que el de concurrir a salvar de peligro vidas e intereses.

Salvo los casos en que reciba Ud. orden en contrario. — Mayo 3 de 1884.

Excmo. Señor:

«Estoy perfectamente de acuerdo con el procedimiento que aconseja la Dirección General en el escrito que antecede. Sólo

observaré que 6 días me parece un término demasiado estrecho para que el dueño o Capitán del buque náufrago, ocurra a salvarlo.

Son las Compañías de seguros las interesadas por regla general en estos casos y 6 días es poco a mi juicio para el abandono del buque, que la aceptación de la responsabilidad del siniestro por parte de la Compañía y las diligencias preparatorias para el salvataje. Pienso que este término debiera extenderse a 10 días.

Deberá así mismo, prevenirse a la Prefectura Marítima que si es su deber salvar el buque, aún contra la voluntad de su tripulación, lo es también propender al castigo de los culpables levantando sin pérdida de tiempo el sumario correspondiente para remitirlo a conocimiento de los Tribunales de la Nación.

Se adoptó como resolución lo aconsejado por la Dirección General de Rentas con las modificaciones aconsejadas por el Procurador General de la Nación.

=====

- I. — Los estatutos de una Sociedad Anónima, constituida en Londres —lugar donde funciona y tiene su asiento el Directorio— aunque ella invierta sus capitales y realice negocios en el nuestro, deben ajustarse a las leyes inglesas y no a las prescripciones de nuestros Códigos.
- II. — La aprobación de los estatutos por nuestras autoridades sólo significa el reconocimiento a la Empresa de su personería jurídica, con facultades para administrar y adquirir bienes en el país y el poder llevar a cabo cualquier negocio lícito.
- III. — Los actos y contratos que la Sociedad realice en la República quedan en un todo sujetos a nuestras leyes, debiendo la Empresa tener un representante domiciliado en nuestro país, debidamente autorizado, que haga valer los derechos de la misma y responda por sus obligaciones.
- IV. — No deja de ser manifiesta, la ventaja que significaría para la República, el que aquí tuvieran las empresas extranjeras sus asientos, que aquí llevaran a cabo las asambleas, declaraciones de dividendos, etc., pero fuerza es reconocer que ello es imposible, so pena de peligrar la inversión de capitales extranjeros que tanta falta hacen para la explotación de nuestra riqueza.
- V. — El recurrente —que invoca haber sido explotado por los accionistas— debe gestionar la reparación de su mal ante la justicia.

Don Juan Glasgow, accionista de la Compañía de Gas Buenos Aires Limitada, pide la liquidación de la misma o la reforma de sus estatutos

Señor Ministro:

La discusión entre el señor D. J. Glasgow y la Empresa de Gas «Buenos Aires» va asumiendo proporciones y colocándose en un terreno destemplado que no puede V. E. autorizar.

Si los accionistas primitivos han sido explotados como dice el señor Glasgow, nada tiene que ver con ello V. E., ni es ante V. E. ante quien deben buscar reparación los que se crean damnificados. Es esta la misión de los Tribunales de Justicia.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, reconoció como *persona jurídica* a la compañía formada en Londres, sobre la base

de la que funcionaba en esta ciudad, bajo la denominación de «Consumidores de Gas».

Pide el señor Glasgow a V. E. deje sin efecto este reconocimiento, *por cuanto, dice los estatutos contienen disposiciones contrarias a las prescripciones de nuestros Códigos.*

Cuestión es esta que ocurre por primera vez, y que merece por ello ser considerada con cierta detención.

Los estatutos cuya revisación se solicita están calculados para una sociedad anónima, cuyo asiento es en Londres, y que allí debe funcionar. En este caso se encuentran todas, o casi todas las grandes empresas de ferro-carriles, tranways, etc. que existen en la República.

¿Los estatutos de estas compañías deberán ajustarse a las prescripciones de nuestros Códigos o a las leyes de Inglaterra?

Sería quimérico pretender lo primero.

Una empresa que se forma en Londres; que allí tiene su asiento; cuyos accionistas, sino todos, en su mayor parte, tienen allí también su domicilio, no puede ser regida por leyes de un país extraño, que no conoce, y que, si conociera, no tendría Tribunal ante el que hacer interpretar y ejecutar.

Si las asambleas o reuniones tienen lugar en Londres, si allí existen los accionistas y el Directorio, es claro que tales reuniones pueden ser regidas sino por las leyes de Inglaterra, y que, por consiguiente, con arreglo a las mismas deberán ser con todos los votos, y hacerse la renovación de Directores, etc, etc.

¿Qué significa, entonces, la aprobación de tales estatutos, se preguntará?

Nada más que declarar que el objeto de la Sociedad no contraría el interés general. Nada más que reconocer a la Empresa como *persona jurídica*, y habilitarla con la capacidad necesaria para adquirir bienes y administrarlos en la República. En una palabra, simplemente reconocer en ella una individualidad; una personalidad, para administrar un negocio lícito, colocándola así, en la posición de un individuo particular que administra sus negocios en la República desde el extranjero.

Es natural que la Sociedad tenga en la República un representante debidamente autorizado para hacer saber sus derechos y

aceptar sus responsabilidades. Tal es el objeto con que se la obliga a constituir en ella *domicilio*.

Es claro también que todos los actos y contratos que ejerce en la República, así como los bienes que adquiriera en ella, deberán ser regidos por sus leyes. Pretender lo contrario, sería, la más fragante violación de los principios más elementales del derecho de las Naciones.

Siguiendo el mismo sencillo razonamiento, se deduce, a la vez que no es posible pretender que actos y contratos que pasan en Inglaterra sean regidos por nuestras leyes.

Los estatutos de la Sociedad «Gas Buenos Aires» han sido debidamente registrados en Londres. Debemos suponer entonces que están arreglados a las leyes de Inglaterra, y no es necesario entrar a investigar si contienen o no disposiciones que no estén en armonía con las prescripciones de nuestros Códigos.

Se dirá que fuera más conveniente que estas empresas tuvieran su asiento en la República, que aquí tuvieran sus Directores, sus reuniones, que aquí declararan sus dividendos etc, etc.

Indudablemente que la ventaja sería manifiesta.

Así se pretendió al principio de nuestra vida constitucional.

Fué cuestión ardiente y debatida esta cuestión del domicilio. Con marcada insistencia se requirió que las empresas tuvieran su asiento en la República.

Vióse luego, empero, que no era posible dictar la ley al capital.

Los que arriesgan sus dineros a grandes distancias, quieren, y con razón, conservar su dirección y su control. Entienden que basta constituir un representante en la localidad que acepte las obligaciones y responsabilidades de la Sociedad. Entiende, así mismo, que los poderes de tal representante no pueden ser ilimitados y absolutos; y por último, que es natural que la dirección parta de allí, donde está el capital. Pretender otra cosa, sería pretender que al mismo tiempo cambiasen de domicilio los accionistas.

Tal es la ley, o si se quiere, la tiranía del capital. Fuerza es aceptarla, o perder hasta la esperanza de que vengan empresas de éste género a llenar la diferencia de nuestros medios, y a explotar nuestras riquezas.

Estas consideraciones en que creo excusado insistir, demuestran a mi juicio, palmariamente que no puede V. E. tomar en consideración las observaciones que hace el señor Glasgow a los Estatutos que se dió en Inglaterra la Compañía de que, dice, ser accionista.

Menos puede V. E. tomar en cuenta la explotación de que se queja, y cuya reparación puede gestionar ante los Tribunales, si le conviniere. — Mayo 7 de 1883.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Enero 21 de 1884.

Tomo 6, pág. 440. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — En principio la Nación no es responsable por los perjuicios que sufran los particulares en las luchas civiles, cuando los autores de éstas no pudieron evitarlos. Sólo en casos excepcionales y por razones de equidad, los Poderes Públicos indemnizan a acreedores y damnificados por revueltas políticas, sin que ello implique una obligación legal a cargo del Estado.
- II. — Por no haber presentado la reclamación en término, y siendo además defectuosa la prueba rendida, corresponde el rechazo del pedido de indemnización.

Julio Amadeo, sobre daños y perjuicios ocasionados durante la rebelión de 1874

Señor Ministro:

Obstan a la aceptación de este reclamo varias consideraciones fundamentales: 1.º que se ha presentado después de vencido el término; 2.º que falta la prueba escrita, exigida por el decreto; 3.º que la información ha sido producida ante autoridades de Provincia, sin que nadie representara en ella los intereses generales; 4.º que no hay base para una estimación, siquiera aproximada, de los perjuicios; 5.º generalmente, y sobre todo, que no es admisible, en principio, y sólo en casos excepcionales, que la Nación sea responsable por los perjuicios que sufren los particu-

lares, en las conmociones políticas *cundo los que obraban a su nombre no pudieron evitarlo.*

El arreglo de la deuda pública, y el reconocimiento de las reclamaciones, que dejan siempre en pos de sí las grandes luchas civiles, no están sujetas a la estrictez del derecho. Es la equidad, para con los acreedores y damnificados, y la posibilidad, en cuanto a los motivos, lo que determina la acción de los Poderes Públicos. Fíjase a veces una cantidad de que no se pasará, como hizo la Francia en dos ocasiones solemnes, y por regla general, se determinan los medios de prueba, con más o menos liberalidad. Si la cantidad fijada no alcanza, se hace una proporción equitativa, si los interesados no se adjuntan a las reglas establecidas, suya es la culpa.

Los Poderes Públicos necesitan saber con precisión, para la regularidad de su marcha, las obligaciones a que deberán atender y los recursos con que cuentan. No habría administración posible, si el libro de la deuda pública hubiera de quedar indefinidamente abierto, y el Gobierno se viera distraído a cada paso de sus ocupaciones ordinarias, por las exigencias de acreedores, que no acabarían nunca.

Está, pues, perfectamente justificada por los intereses primordiales de la sociedad, la fijación de términos precisos y determinadas reglas, en cuanto a la prueba, si bien no están en todo de perfecto acuerdo con las prescripciones del derecho, que rige las reclamaciones de los particulares entre sí.

A nadie sino a sí mismo debe culpar, por consiguiente el señor Amadeo, sino ocurrió en tiempo, sino se promunió de prueba escrita; si ocurrió a la autoridad local, en vez de ocurrir a la autoridad de la Nación.

Pero, como he dicho, hay todavía una consideración más fundamental.

El Coronel Lagos asegura, y el mismo interesado lo reconoce, haber hecho todos los esfuerzos posibles *por evitar el saqueo.* Mandaba fuerzas irregulares, sin disciplina, ni espíritu de cuerpo; y no es de extrañar no pudieran conservar en la obediencia a hombres sobre los que ni él, ni los oficiales, tenían el dominio que da la continuación del mando en tropas regulares.

Los perjuicios que estos grupos armados originaron en este caso, y en muchos otros con toda probabilidad, deben reputarse en la categoría de aquéllos que son una consecuencia forzosa de las conmociones políticas y de que todos, y nadie es responsable, sino sus propios autores.

Pienso de todo esto, que no debe V. E. hacer lugar a esta reclamación. — Mayo 18 de 1884.

Departamento de Guerra. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Junio 26 de 1884.

Tomo 6, pág. 596. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Las Sociedades constituídas en el extranjero para funcionar en la República, que no han constituido debidamente domicilio en el país, no tienen existencia legal ante nuestras autoridades.
- II. — La simple constitución de un domicilio a la manera que lo constituye cualquier litigante, no es el que se exige para las Sociedades Anónimas. Para éstas, es necesario que el domicilio sea autorizado y aceptado por los accionistas en la forma que los Estatutos determinen; debe ser incorporado a los mismos, y ser aceptado por el Gobierno de la Nación.

Representación ante el P. E. de una Sociedad Anónima, para la explotación de minas en La Rioja

Señor Ministro:

Ningún interés tiene V. E. en las cuestiones de los Sres. Joffre y Fermepin con Almanacid y Parchappe, ni le incumbe tomar en ellas intervención de ningún género. Con mayor razón, y con toda justicia, puede calificarse de impertinente, y fuera de los usos generales, la oficiosidad con que dichos Sres. Joffre y Fermepin se dirigen a V. E. pretendiendo predisponer su ánimo con relación a los negocios que quiera, y encuentro conveniente realizar con el expresado Parchappe, perfectamente hábil, como cualquier otro, para tratar y contratar con V. E.

Aquí debiera terminar. Sin embargo, como V. E. ha mandado a mi dictamen el escrito de los Sres. Joffre y Fermepin

y la contestación del Sr. Parchappe, juzgo de mi deber decir algo a su respecto.

Diré en consecuencia, que el contrato de la Sociedad formada en París para la explotación de minas en la Rioja, en cuanto a sus relaciones de derecho con la autoridad de la Nación, —es el mismo en que quedó colocada por la aprobación condicional de sus estatutos—.

V. E. declaró entonces que no podía reconocer como base legítima para una Sociedad destinada a funcionar en la República, concesiones contrarias a sus leyes, la fijación del domicilio en el territorio de la Nación. Me refiero al decreto de 6 de agosto ppdo. que se registra en uno de los periódicos acompañados.

No aparece que se haya iniciado gestión alguna para salvar la nulidad de las concesiones; y el domicilio ha sido constituido indebidamente, y puede mejor decirse, con poca seriedad.

Se pretende que este domicilio ha sido constituido en la ciudad de la Rioja. Consta, en efecto, que el representante del Directorio residente en París constituyó en la expresada ciudad, en la forma en que lo constituye cualquier simple litigante. No es éste, empero, el domicilio que se exige a las Sociedades Anónimas.

Debe ser autorizado y aceptado este domicilio por los accionistas en la forma que los estatutos determinen; debe ser incorporado a los mismos; y por último aprobado y aceptado también por el Gobierno de la Nación.

En vez de todo esto, el representante del Directorio; sin que haya precedido la decisión de la asamblea de accionistas, que dejará sin efecto el domicilio primitivo y lo fijara en la República; sin haberlo puesto en conocimiento de V. E.; sin poder bastante; sin autorización de nadie; por sí y ante sí, en una palabra, ¡pretende salvar la dificultad, ocurriendo al Juzgado de Comercio de la Rioja! . . .

Como he dicho, la clasificación más benévola de esta manera de proceder, es que carece de seriedad.

Es, pues, fuera de toda discusión que el estado de la Sociedad ante los Poderes de la Nación, es hoy el mismo en que quedó al ser aprobados sus estatutos, lo que importa decir que, no habiendo llenado las condiciones de que dependía su existencia, no la tiene en la República. — Mayo 19 de 1884.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad al dictamen.
—Octubre 10 de 1884.

Tomo 7, pág. 73. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiendo la viuda de un ciudadano argentino reclamado ante el Gobierno Uruguayo por injusticias y torturas inferidas a su esposo por las autoridades de Montevideo, no corresponde que a la misma época solicite la reclamación de nuestro Gobierno por la vía diplomática, por cuanto ésta procede únicamente en casos de notoria denegación de justicia, debiendo el P. E. interponer sus buenos oficios, recién cuando ésta tiene lugar.

La viuda del ciudadano argentino, Francisco Esteves, sobre reclamación contra el Gobierno Uruguayo por torturas inferidas a su esposo

Señor Ministro:

No es de práctica que al iniciarse una reclamación ante un gobierno extranjero, salvo casos muy excepcionales, una nación intervenga, ni aún oficiosamente, en favor de sus naturales.

La presunción natural, que el respecto recíproco aconseja, y hasta cierto punto exige, es que toda reclamación justa será debidamente atendida. Sería manifestar poca confianza en la sinceridad de los sentimientos de una Nación amiga, principiar por poner en duda equidad o rectitud de sus procedimientos. Sólo en casos de notoria denegación de justicia, o de inmotivada y prolongada denegación en dispensarla, es permitida, y favorablemente acogida, la interposición de un Gobierno cerca de otro; interposición que la prudencia aconseja iniciar siempre por simples buenos oficios.

La señora de Nin no se encuentra, ni es de esperarse, llegue a encontrarse en este caso. De su misma exposición se desprende,

que ocurre a V. E. al mismo tiempo que inicia su reclamación ante el Gobierno Oriental.

Los procedimientos crueles e injustificables de que fué víctima su finado esposo son notorios, y nada autoriza hasta ahora la duda de que no le será hecha debida justicia. Paréceme por esto, que debe V. E. reservar proveer a lo que la señora de Nin solicita, para el caso, que no es de esperarse, de que no encuentre en el Gobierno de la República Oriental, la justa reparación a que tiene derecho indisputable. — Mayo 19 de 1884.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Se adopta como resolución el dictamen en Mayo 21 de 1884.

Tom. 7, pág. 10. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No corresponde que el Gobierno Argentino, reclama por la vía diplomática ante el Gobierno del Perú, por perjuicios que las autoridades peruanas causaron a un ciudadano argentino, si previamente éste no inició la correspondiente reclamación ante el Gobierno de Lima, ya que es necesario que tenga lugar una manifiesta denegación de justicia para que proceda la reclamación diplomática.
- II. — El hecho de que el Tribunal ante quien se ocurrió no otorgó todo lo que pedía el interesado, no es causa suficiente que autorice una reclamación diplomática. El interesado debió agotar todos los recursos legales ante las mismas autoridades del Perú y sólo después de ello y teniendo lugar una evidente injusticia se daría el caso de una intervención diplomática.

Reclamo del ciudadano argentino, D. Victorino Corbalán, contra el Gobierno del Perú, por ganado vacuno tomado por fuerzas de su ejército

Señor Ministro:

Consta de estos antecedentes que fuerzas del ejército del Perú tomaron doscientos cincuenta animales vacunos que el ciudadano argentino D. Victorio Corbalán tenía a invernada a inmediaciones de Tacna, a objetos legítimos de comercio. Consta igualmente que

parte de esta hacienda le fué devuelta a instancia del Consulado Argentino, y que la autoridad superior en aquel punto reconoció la legitimidad de la reclamación por la parte no devuelta, sin aceptar la estimación que de ella hacía el interesado.

Bajo este punto de vista, la solicitud del señor Corbalán está perfectamente justificada.

No consta, sin embargo, que él haya ocurrido al Gobierno del Perú; ni menos, por consiguiente, que no se le haya hecho justicia, o que ésta se haya retardado con exceso.

El Perú ha terminado apenas recién su desastrosa guerra con Chile, y no parece aún libre de complicaciones internas. Debe esperarse que, restablecida la paz, se apresurará a dictar las medidas necesarias para satisfacer las deudas y reclamaciones que son una consecuencia forzosa de la situación verdaderamente angustiosa porque ha pasado. El señor Corbalán debe ocurrir a Lima, por sí o por apoderado, a gestionar su crédito, y nada induce a creer que no le será hecha debida justicia.

Mientras tanto, no creo llegada la oportunidad de que V. E. inicie esta reclamación ante el Gobierno de aquella Nación amiga por la vía diplomática como se solicita. Es el interesado quien presenta en casos de esta naturaleza su reclamo, es él el único que puede buscar los medios de prueba, que se exijan y discutir los valores.

No encuentro por lo expuesto razón bastante para que V. E. se separe de las prácticas usuales. Bastará a mi juicio, ordene V. E. al representante de la República en Lima haga valer en oportunidad su amistosa interposición en favor del señor Corbalán, sin olvidar al mismo tiempo las consideraciones, que forzosamente inspira el grande infortunio de la Nación hermana. — Mayo 21 de 1884.

Señor Ministro:

Estoy de perfecto acuerdo con el señor Ministro de la República en el Perú.

El hecho de no haber acordado el Tribunal a cuyo conocimiento correspondía el asunto del señor Corbalán, todo lo que él pe-

día y esperaba, no es bastante a autorizar una reclamación diplomática. El interesado ha debido reclamar de la resolución de aquel Tribunal ante las mismas autoridades del Perú, y sólo cuando hubiese agotado todos los recursos, dentro de ellas mismas, y constase por otra parte, haberse cometido en su contra una manifiesta injusticia, sólo entonces, digo, habría llegado el caso de la intervención diplomática.

Repito por esto, lo que manifesté a V. E. en mi primer dictamen. — Enero 22 de 1889.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Se adopta como resolución el dictamen. — Junio 6 de 1889.

Tomo 7, pág. 28. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde que el P. E. pase al Procurador Fiscal de la Provincia de Córdoba, la Carta-Pastoral del Vicario Capitular de dicha Provincia, en la que declara que no es lícito que los padres manden a sus hijos a la Escuela Normal creada en Córdoba, que califica de Protestante, porque sus preceptores no son católicos, a fin de que el Fiscal deduzca la acción que corresponda por cuanto dicha Pastoral se funda en disposiciones de la Santa Sede que no han recibido el «pase» que la Constitución prescribe y su texto es contrario a los principios de libertad de conciencia, tolerancia de cultos e igualdad, que la Constitución consagra para todos los habitantes. Debe el P. E. mientras tanto, separar al Vicario Capitular del gobierno de la Diócesis y suspenderlo de oficio y beneficio en el coro de su Iglesia.
- II. — La jurisdicción del P. E. para proceder en consecuencia, deriva del derecho de Patronato que los Reyes de España ejercieron sin reserva y con el asentimiento expreso de los Papas, y que luego de la Independencia los gobiernos de las Naciones Americanas, entre ellos el nuestro, declararon inherente a sus Soberanías y base fundamental del Derecho Eclesiástico Americano, distinto del de las Naciones Europeas y en virtud del cual tienen la facultad de proveer y remover todos los beneficios eclesiásticos, sin reserva alguna.

- III. — Los Prelados son elegidos por el Poder secular bajo juramento de respetar los derechos civiles. Si éstos son atacados, falta la base y condición del nombramiento y puede entonces la autoridad civil proceder a su revocación.
- IV. — Los prelados nombrados por el Poder Civil, son funcionarios públicos sin mengua y sin perjuicio de su investidura canónica y como tales sometidos a las leyes del país al igual que todos los habitantes.
- V. — Debe el P. E. amonestar al Cabildo Eclesiástico de Córdoba, por cuanto sostuvo su falta de jurisdicción para llamar a juicio al Vicario lo que no es exacto según se desprende de acreditados canonistas, interpretándose esta actitud del Cabildo como acto de adhesión al Vicario y sus doctrinas. Deben testarse las palabras de la nota del Cabildo que se reputan lesivas al P. E.

El Gobierno de Córdoba, sobre el retiro de la Pastoral del Vicario Capitular, Dr. Gerónimo E. Clara

Señor Ministro:

La Pastoral del Ilmo. Vicario Capitular de la Diócesis de Córdoba, y la adhesión que le presta el Venerable Cabildo, colocan a V. E. en la necesidad de traer a discusión cuestiones que el patriotismo y la discreción menos avisada aconsejarían no tocar jamás.

La lucha entre autoridades que debieran marchar siempre en armonía, perturba estérilmente la paz de las conciencias y la tranquilidad de las familias. La misión de una y otra autoridad es distinta: cuida una de las cosas de esta tierra y de la salud de las almas la otra. Debiera bastar el respeto recíproco para conservar a cada una en el límite de sus derechos y deberes y evitar estos espectáculos dolorosos que no se explican ni tienen razón de ser en la época de civilización y progreso que hemos alcanzado.

El Ilmo. Vicario Capitular se ha separado, a mi juicio en este caso de la circunspección y reserva que debiera ser la norma de sus actos; invadiendo atribuciones indisputables del poder civil, contrariando el espíritu de libertad y tolerancia, base de nuestra organización social y desconociendo por último, los derechos del

Patronato, que la Constitución confiere al Jefe del Estado y que él, ha jurado respetar.

Encuentro también, el proceder del Venerable Cabildo fuertemente censurable, por y demás inconvenientes y descomedidos los términos de la contestación a V. E.

Por sensible que sea, pienso que V. E. no puede menos de salir a la defensa de los intereses primordiales de la Sociedad, que comprometería su preesidencia, ante los avances de la Iglesia, que no abandona jamás su propósito de subordinar el orden civil al religioso.

Es esta la primera vez que V. E. requiere mi parecer sobre materia tan delicada y cumple a mi deber darlo sin reserva.

No necesito decir que la Constitución y las leyes del Congreso son la norma a que deben ajustar su procedimiento, los ciudadanos y los Poderes Públicos. Es pues, en la Constitución y en las leyes donde, antes que en toda otra fuente, debemos buscar la regla de criterio que ha de servirnos de guía en la cuestión suscitada por la Iglesia de Córdoba.

En la parte que se refiere a la religión, la Constitución contiene prescripciones aparentemente contradictorias pero que examinadas con esmero, tienen explicación fácil y plausible.

Por una parte declara que el Gobierno Federal sostiene el culto católico, y exige que el Presidente y Vice-Presidente sean católicos: por otra parte, mantiene en todo su vigor el derecho de Patronato, y garante la más amplia libertad de conciencia.

Las prerrogativas del Patronato importan, en realidad, una limitación; y cuando a todo culto se concede la más amplia libertad, no deja de parecer extraño y hasta cierto punto una anomalía, se restrinja precisamente su esfera de acción de aquel que se pretende proteger.

La libertad concedida a todos, responde a la esencia de nuestras instituciones: la limitación es un medio de defensa contra un espíritu invasor. He ahí la explicación.

El principio que domina toda nuestra organización social, es la libertad; la libertad de constituir un gobierno propio, a que debemos nuestro ser como Nación; la libertad de elegir; de pensar; de trabajar.

Las libertades son todas solidarias, y no puede concebirse exista una sin las otras. Desde el momento en que la Reforma conquistó la libertad de conciencia la primera de todas, la sociedad ha venido conquistando las demás, que son hoy el patrimonio de la humanidad y la gloria de esta época. En materia de religión, la obra de emancipación ha sido fecunda; puede decirse, empero, que no ha terminado todavía.

Uno a uno han ido desapareciendo los vínculos que ligaban la vida civil a la religiosa, que por largos siglos absorbía y dominaba todo; ¿Qué es lo que queda hoy de la Unión de la Religión y del Estado, en que reposaba el edificio de la sociedad antigua?

La jurisdicción de la Iglesia, que había invadido casi todo el dominio de la legislación civil, ha quedado limitada a las escasas cuestiones que afectan personas e intereses meramente eclesiásticos: las inhabilidades que la diversidad de religión establecía para el ejercicio de las funciones civiles, ha desaparecido o tienden a desaparecer por completo: la diversidad de religión no es siquiera un inconveniente para la unión conyugal, la más estrecha que es posible concebir: la intervención de la Iglesia en el registro del estado civil de las personas y en los cementerios, ha sido eliminada, en la mayoría de las grandes naciones católicas, y lo será, sin duda, en todas antes de mucho. Queda sólo el vínculo del matrimonio, para la separación completa. Es, sin duda, de todos el más fuerte; pero ha de ceder también, al fin, al espíritu irresistible del siglo. Principian a estar en minoría las naciones que no han adoptado el matrimonio civil.

El sentimiento religioso que inspiró el Cristianismo en su origen y que le acompañó en su desenvolvimiento prodigioso, es, sin disputa, el más intenso que haya jamás agitado a la humanidad. Hasta épocas no muy remotas, la vida del individuo y del Estado se confundían en la religión. Las guerras y las más grandes conmociones que cambiaban la faz de los pueblos tenían por causa la defensa y propagación de la fe. Los grandiosos monumentos que cubren al mundo entero, dan testimonio elocuente del sentimiento que los inspiró.

A la intensidad de este sentimiento, que la acción irresistible del tiempo ha debilitado, fuerza es reconocerlo ha sucedido otro,

acaso no menos intenso, en la sociedad moderna; la Libertad condición hoy indispensable de su vida, como fué antes la religión.

No es de admirar surgiera luego un acentuado antagonismo entre estos dos grandes sentimientos, a medida que se desvirtuaba uno y robustecía el otro; ni que la lucha empeñada se prolongara por siglos hasta nuestros días. La prescripciones constitucionales recordadas poco ha, contradictorias hasta cierto punto, son todavía su expresión genuina.

Los autores de nuestra Constitución, a la vez que obedecían al sentimiento dominante, al garantizar la libertad de conciencia, no alcanzaron a emanciparse de la tradición antigua, al dejar subsistente el sostenimiento del culto y del Patronato.

¿En el conflicto de estas prescripciones cuál prevalecerá? La libertad, a mi juicio, porque es ella la base, la esencia misma de nuestras instituciones.

El sostenimiento del Culto Católico consignado en la Constitución, puede bien decirse, es la expresión de un hecho que depende de un accidente o de otro hecho.

¿Si la mayoría de la Nación llegara a no profesar el Culto Católico no tendría el derecho de modificar la prescripción constitucional? ¿Con qué derecho podría la minoría católica impedirlo?

Y es ésta una eventualidad que cabe en los límites de lo posible y que es más bien, probable. Bastaría que la capacidad de los Estados Unidos para recibir la corriente humana que a ellos se dirige, se agotara o disminuyera para que se encaminara hacia nosotros, mejor preparados que ninguna otra Nación Americana para recibirla. Estamos lejos de la fórmula de los Reyes de España, que preferían no reinar a reinar sobre herejes. Tenemos el derecho de aspirar a ser una gran Nación, aunque su mayoría no sea de católicos. Las razas del Norte son más fecundas que las del Mediodía de la Europa; después de las guerras del primer Imperio, la Inglaterra y la Alemania han doblado su población, mientras que la Francia y España han quedado poco menos que estacionarias. Por eso sienten ellas con más intensidad la necesidad de expansión y en un sólo año envían a los Estados Unidos mayor número de inmigrantes que el que hemos recibido nosotros en medio siglo. Principian ya a sentirse en aquella gran nación, los inconvenientes

y peligros del crecimiento excesivo de la población; de la enormidad de las distancias; de la lucha entre el capital y el trabajo.

Llegada la eventualidad a que el patriotismo aconseja prepararnos —en vez de cerrar las puertas del porvenir— la balanza de la religión podría ser alterada entre nosotros. Los protestantes obligados a sostener un culto que no es el suyo, se encontrarían entonces en la situación de los irlandeses católicos, con respecto a la Iglesia establecida de Inglaterra. El mundo entero ha escuchado con simpatía y respeto su clamor. La ilustración del Gobierno del Reino Unido no podía menos de encontrarlo justo, y hoy la Iglesia Católica de Irlanda divide los pingües beneficios que eran antes el patrimonio exclusivo de la Iglesia Oficial.

Siguiendo la hilación de estas ideas, llegaríamos sin violación a conclusiones, de que la más vulgar previsión no puede prescindir.

Si la mayoría tiene el derecho de proclamar un culto oficial y sostenerlo, este culto quedará sujeto a cambiar con el resultado de cada elección. Tendríamos entonces el triste espectáculo que ofrecía la Inglaterra en los reinados de los últimos Estuardos, en los que, a cada cambio de Monarca, la religión cambiaba; siendo perseguidos, bajo uno los católicos, y los protestantes, bajo otro, con excepción de Enrique VIII que se dió la satisfacción de perseguir a protestantes y católicos a la vez, según observa Macaulay.

Los inconvenientes que estos cambios traían aparejados; las luchas terribles a que darían lugar la pasión religiosa, que no razona ni transige; el desprestigio de la misma religión, todo concurrir a persuadir que una Religión de Estado no se armoniza con los principios fundamentales de la democracia. Y nada pone de manifiesto, con más elocuencia, la previsión de los fundadores de la constitución que hemos tomado por modelo, que su sabia prescindencia en materia de religión.

Cabe, en efecto, a la Unión Americana, el honor de haber separado la primera el gobierno de las cosas de esta tierra de la dirección de las conciencias; y es opinión generalmente admitida que no ha sido en detrimento de las creencias. Es notorio que la religión católica prospera y florece, cuanto más libre es de la fiscalización a que está sujeta en las naciones que la profesan y protegen.

El progreso irresistible de las ideas liberales, y la marcha incesante de la democracia, que nada ni nadie puede detener, garantizan de una manera inequívoca que en un porvenir, acaso no muy remoto esta separación será la ley universal de las naciones y pondrá término, de una vez para siempre a estas cuestiones enojosas y depresivas de una y otra autoridad.

Después de lo que dejo expuesto, debiera esperarse que la deducción lógica y mi propia opinión, sería dejar al señor vicario Clara en paz y libre de dirigir a los fieles de su Diócesis, las Pastorales que quisiera.

He dicho, sin embargo, que mientras no hayamos alcanzado la separación deseada, la autoridad civil no puede desprenderse de los medios de defensa de que los mismos Reyes Católicos, los más ardientes sostenedores de la fé, juzgaron indispensable premunirse para escapar a la dominación invasora de la Iglesia que aspiraba y aspira siempre, a la dirección suprema del orden social. He dicho, además, que en este caso militan razones especiales.

La Religión Cristiana, nació independiente del Estado; sin misión ni poder civil. Su divino fundador decía «mi reino no es de este mundo».

Los primeros cristianos vivieron en la creencia de que el fin del mundo estaba próximo y esperando de un momento a otro la aparición visible del hijo de Dios, que al frente de las falanges celestes, vendría a confundir a los paganos y fundar el reino divino. Cuando todo iba a desaparecer para que ocuparse de otro cosa que de la satisfacción de las almas?

El hijo de Dios no parecía y la fe en la «Jerusalén Celeste» preocupaba menos. Mientras tanto, el cristianismo crecía y se suplantaba al paganismo expirante. A medida que crecía la concepción en que había vivido el mundo antiguo, y vivía el pueblo romano, se incorporaba a su organismo, alejándolo de la dirección que le dió su fundador.

Poco a poco fué tomando la Iglesia intervención en las cosas temporales hasta que concentrando en su dirección todos los poderes, llegaron los Papas a dar y quitar coronas y adjudicar por una expresión geográfica las tierras del nuevo mundo. No fué posible, por largos siglos vivir, formar familia, trabajar, ni siquiera volver al seno de la tierra, fuera de la comunión.

La exageración de esta prepotencia trajo el gran movimiento del siglo XVI. La nueva doctrina que emancipaba el espíritu y limitaba el poder de los Papas, fué recibida con entusiasmo por las Naciones del Norte y resistida por las del Mediodía.

Después de treinta años de luchas sangrientas, no pudiendo los Católicos vencer a los Protestantes, ni estos a aquellos, la paz de Westphalia dejó a cada uno en libertad de seguir el credo por que se había decidido. Y es digno de notarse; observar Macaulay, que la línea que se trazó en el primer momento, se conserva hasta hoy inmovible, sin que las naciones que abrazaron la Reforma hayan traído a sus creencias a los Católicos, ni estos invadido los límites Protestantes.

Extinguido el espíritu de intolerancia y de proselitismo, así por la difusión de las luces, como por la convicción de la impotencia, cada Nación ha continuado viviendo en paz, fiel a sus creencias, respetando las ajenas y sin pretender atraer a su credo a ninguna.

Y esto mismo ha sucedido con respecto a las relaciones de los individuos entre sí. Católicos y Protestantes viven hoy en la misma perfecta armonía, respetando sus creencias recíprocas y sin que ninguno intente ni se cuide de convertir a otros a las suyas. Suprimidas las inhabilidades, establecida una completa tolerancia, se puede hoy vivir y morir en cualquier parte sin confesar el credo dominante.

Ruego a V. E. excuse la extensión y la escasa novedad de las consideraciones que dejo expuestas. Ha sido mi propósito definir, según entiendo, la situación de la autoridad civil en sus relaciones con la Iglesia Argentina, marcando los rumbos a que debe encaminarse nuestra legislación en el porvenir, sin desconocer ni descuidar las necesidades del presente. He querido también satisfacer de antemano la objeción de inconsecuencia, que no dejará de formularse, al poner en parangón los principios de libertad que forma nuestro credo, con la resolución que he indicado, con respecto a la pastoral del Ilmo. Vicario, a que llego ya.

El señor Clara ha tenido a bien declarar que no es lícito que los padres manden sus hijos a la Escuela Normal creada en Córdoba, que califica de Protestante porque sus preceptoras no son Católicas. Lo primero que ocurre, es que el señor Vicario ha equi-

vocado los tiempos y los hombres. Su Pastoral estaría bien en el oscurantismo de la edad media o bajo Gobiernos como el del Ecuador.

Su llamamiento a la intolerancia, queriendo revivir sentimientos que la civilización ha extinguido, es un anacronismo que apenas se concibe.

El mundo en sus condiciones naturales se ha educado y vive en el respeto recíproco de las convicciones religiosas. La raza de los Franciscos de Asís o los Loyolas se ha extinguido, o los tiempos no son propicios. Apenas, si de año en año, alguna conversión aislada viene a quebrantar el principio universal. El temor que aparentemente ha inspirado la Pastoral del señor Vicario, es tan remoto y tan quimérico, que bien puede decirse impertinente.

Por regla general, está exluída en las escuelas la enseñanza del dogma religioso. Sino lo estuviera la experiencia propia, y la del mundo entero, garanten que ningún maestro ha de emprender la tarea de catequizar a sus alumnos. Lo que el señor Vicario condena en el fondo es, entonces, el contacto entre Católicos y Protestantes. ¿Por qué no cerrar de una vez la puerta a los herejes?

El Ilmo. Vicario apoya sus declaraciones en varias disposiciones de la curia Romana, y con especialidad en el famoso «Sillabus». Ninguna ha recibido el pase del P. E. y el señor Vicario olvida que la Constitución y las Leyes del Congreso prohíben, bajo severas penas, se dé cumplimiento a Bulas, Breves y Rescriptos Pontificios, aún sobre materias meramente dogmáticas, toda vez que no hubiesen obtenido el asentimiento de V. E. para que puedan publicarse y obligar a los fieles en el territorio de la Nación. La soberanía de una Nación desaparecería, si las leyes de un poder extraño, capaces de producir efectos civiles, hubieran de extenderse a su territorio.

No obstante todo esto, debo declarar a V. E. que mi primer impulso fué aconsejar a V. E. dejara caer en el vacío esa mal inspirada Pastoral, seguro de que el escaso eco que ha encontrado, se apagaría luego.

He pensado, sin embargo, que ella obedece a un propósito que manifestaciones de igual naturaleza revelan claramente; y he

creído que la prescindencia de V. E. pudieran dar aliento a los que las promueven.

La Iglesia no abandona las aspiraciones a la dominación universal. ¡Jamás, en teoría, ha estado la cabeza del Catolicismo en posesión de más amplia e ilimitada facultades; y como coronamiento del edificio, el último Concilio Euménico reunido en Roma ha declarado artículo de fe su Infalibilidad. . . !

Si no contuviera V. E. al Ilmo. Vicario en este primer caso, luego declararía que no es lícito asistir a la Universidad, porque hay en ella profesores protestantes; y enseguida, que no es lícito contraer matrimonio con los que no pertenezcan a la Comunión Católica!

No vacilo en pedir a V. E. detenga al señor Vicario en su primer paso en este camino sembrado de odios y dolores.

Su Pastoral desconoce el Patronato Nacional, por el hecho de pretender poner en vigencia Rescriptos Pontificios que no han recibido el Pase del Jefe del Estado.

El espíritu estrecho de exclusivismo que ella revela, compromete la libertad de conciencia, la tolerancia y la igualdad que la Constitución ofrece a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo Argentino.

Pido, en consecuencia, pase V. E. estos antecedentes al Sr. Procurador Fiscal de Córdoba, para que deduzca la acción a que haya lugar contra el señor Vicario, con arreglo a la Ley de Justicia Federal, separando mientras tanto, a este funcionario en el Gobierno de la Diócesis y suspendiéndolo de oficio y beneficio en el Coro de su Iglesia.

La justicia de esta conclusión está suficientemente demostrada con lo que dejo expuesto. Podría todavía apoyarla en las declaraciones del señor Vicario, relativamente a la aprobación de la tesis del señor Cárcano, y a la lectura de ciertos diarios, si tales declaraciones no carecieran de seriedad.

La pretensión del señor Vicario de colocarse arriba de las corporaciones científicas, únicas competentes para juzgar del grado de libertad que convenga dejar a los jóvenes disertantes para el desarrollo de su inteligencia y el progreso en las ciencias, excede todo límite; y sino merece ser discutida, sirve al menos para jus-

tificar la necesidad de poner un límite a tamaño desborde de intemperancia.

La jurisdicción de V. E., en este caso, es clara y a todas luces manifiesta.

El Patronato de la Iglesia Argentina es un precepto constitucional y, como tal, no se discute. El confiere al Presidente la facultad de proveer y remover los beneficos eclesiásticos.

Los Reyes de España han estado siempre en posesión de este derecho en sus dominios de América, de que han usado sin reserva, con el asentimiento expreso de los mismos Papas.

Las naciones que surgieron de las antiguas colonias, han declarado todas que continúan en vigor las leyes que regían antes de su emancipación. Asimismo declararon que el Patronato de que gozaban los Reyes de España, era inherente a su soberanía, y base fundamental del Derecho Eclesiástico Americano, que no debe confundirse con el de las Naciones de Europa.

Los Gobiernos de América han usado también de este derecho proveyendo y removiendo los beneficios sin reserva. En cuanto a la provisión basta abrir el Registro Oficial, en cualquier página. Los casos de remoción son naturalmente mucho menos frecuentes. Recordaré, entre otros, uno bien caracterizado y de no remota fecha.

En marzo de 1857, el Gobierno de la Confederación dictó la resolución siguiente: «Y por cuanto, decía, aparece denunciada criminalmente la conducta del Chantre doctor Agustín Bailón, por haber desconocido con alarde los derechos del Patronato Nacional, queda suspenso de la dignidad de Chantre, sin voz ni voto en el Coro de la Iglesia, mientras se resuelve lo que convenga sobre la sumaria información que se levantará sobre los hechos denunciados». Este decreto lleva la firma de los señores S. M. del Carril, Juan del Campillo, S. Derqui, J. M. Gallán y B. López entre los que habían distinguidos profesores de derecho, educados en la Universidad de Córdoba.

Levantada la sumaria información, el mismo Gobierno expidió esta otra resolución: «Resultando del sumario justificada la denuncia contra el Chantre D. Agustín Bailón, por haber desconocido, con escándalo, los derechos y prerrogativas de que el Gobierno Nacional está en posesión como anexos al Patronato

Nacional, resérvese la presente causa hasta el establecimiento de los Tribunales Nacionales, a quienes compete su resolución y juzgamiento, permaneciendo mientras tanto el expresado Bailón suspenso de oficio y beneficio en el Coro de su Iglesia».

El caso del señor Vicario Capitular es el mismo con notable agravación de su parte, en el alarde del desconocimiento del Patronato, por cuanto está consignado en un documento público.

Observa el Venerable Cabildo «que el Prelado goza de toda independencia para cumplir sus sacratísimos deberes, según los dictados de su conciencia, no siendo responsable de sus actos sino ante Dios y los Jueces que la Iglesia ha establecido».

Sería, sin disputa, contrario a los principios que rigen para todos, negar a los encargados de dirigir las conciencias, el derecho de encaminarlos con entera libertad en el sentido que lo crea conveniente. Para esto la Iglesia ha puesto a su disposición medios íntimos de persuasión y pueden usar sin limitación de exhortaciones y amonestaciones privadas.

Cuando el Prelado obra dentro de la esfera de estos medios, su independencia es completa; no así cuando su acción asume las proporciones de un acto público y oficial. No puede permitirse entonces que, al amparo de la autoridad de que ha sido investido por el Estado, contraría sus propósitos legítimos y mucho menos mine los fundamentos del orden civil.

Todo Prelado es elegido por el Poder secular a condición y bajo el compromiso que santifica el juramento de respetar sus derechos. Si en vez de respetarlos los ataca, falta la base y la condición del nombramiento, y la autoridad civil puede dejarlo sin efecto.

El Prelado, en cuanto es nombrado por el Poder civil; sostenido por él; amparado y prestigiado por los respetos de la administración general, es un funcionario público, sin mengua y sin perjuicio de su vestidura canónica.

Tal lo considera la ley Francesa y los más acreditados tratadistas de derecho, Bluntschli, Laurent & — y nuestra primera autoridad en la materia Vélez Sársfield. Una prolija reglamentación determina la penalidad y la jurisdicción de los Tribunales civiles en Francia, en los casos en que los Párrocos o Prelados, en el ejercicio de su ministerio, cometieren abuso en la predica-

ción; en la denegación de los sacramentos o de sepultura; excomulgando inmerecidamente a los fieles etc. etc., — Y no necesitamos recurrir a la Legislación extranjera. Por la ley 19 tít. 12 L. 1 R. I. los Reyes de España, que tanto se distinguían por el ardor de su fe, mandan *se corrija y se castigue, hasta con destierro, los abusos que se cometan en el púlpito.*

Los ministros de la Iglesia pretenden que sólo dependen del Papa, y que deben obediencia a las leyes de Roma con preferencia a las de su propia patria. Olvidan que, antes de todo, son ciudadanos.

Este antagonismo entre estos pretendidos deberes de un mismo funcionario, constituye una dualidad, origen de estas desagradables cuestiones que sólo cesarán con la separación.

Y es aquí la oportunidad de observar que esta separación, causa principal de la superioridad de las naciones cristianas sobre los pueblos de Oriente, en el sentir de los eminentes pensadores, no importa decir que el Estado sin religión oficial, sea materialista o ateo, como pretenden los que sólo conciben la Iglesia al amparo del brazo secular; que proteja a los fieles y castigue a los que se permitan disentir.

La Sociedad moderna está basada en los principios inmortales del cristiano. La caridad, la igualdad, la justicia, son el fundamento de sus leyes; y la nación que ha dado el primer ejemplo, no es la que menos se distingue por el respeto que profesa a la moral, a las buenas costumbres y al libre ejercicio de todas las creencias que en ella se profesan, libres de la fiscalización a que están subordinadas en las que más entienden protegerlas.

La Pastoral del Ilmo. Vicario me ha llevado más allá de lo que hubiera deseado; y debo ya ocuparme de la contestación del Venerable Cabildo que también ha pasado V. E. a mi dictamen.

Observaré, en primer lugar, que no es exacto que el Cabildo carezca de jurisdicción para traer a juicio los actos del Vicario. Los más acreditados canonistas, no sólo le reconocen esta facultad, sino la de separarlo sin causa ad-metun, es decir, por su simple voluntad.

Bastará transcribir las palabras de Solórzano en su Política Indiana, 41 y 42 Cap. 3 Lib. 4.º. *Pero todavía dice, casi todos los autores referidos, fuera de Ugolino, vienen a resolver que es*

permitido al Cabildo esta revocación (la del Vicario) con causa o sin ella, aun cuando en el nombramiento hubieran jurado no revocarla, porque el concilio no le restringió su derecho y sólo puso tiempo y forma en como se había de hacer la elección.

«Antonio Naldo trae para comprobación de esto una expresa declaración de los Cardenales; y Agustín Barboza otra en una causa del Cabildo de Lima; y Aloisio Riccio testifica de la común práctica de las revocaciones; Quaranta y Nicolás García vienen a concluir que es esto más infalible cuando la nominación se hizo con ese gravamen o con declaración expresa que durase el oficio mientras durase la voluntad del Cabildo».

La falta de jurisdicción no es pues, sino una manera de hacer acto de adhesión el Cabildo a la campaña que ha iniciado el Vicario contra la tolerancia y la libertad de conciencia.

Bajo el manto de obediencia a los actos *legítimos* del Prelado, el Venerable Cabildo no oculta tampoco, que hace causa común con el Vicario, y se constituye así voluntariamente reo del mismo desconocimiento del Patronato, y de la misma ostentación de sentimientos estrechos de exclusivismo.

El Venerable Cabildo usa, por otra parte, al dirigirse a V. E. de expresiones por demás inconvenientes y dignas de censura.

Dice que vería con grandísima pena que V. E. adoptase medidas violentas que podrían conducir a una lucha estéril, como las que han humedecido con lágrimas amargas el suelo de otras naciones, y cuyos estragos ha consignado la historia con lúgubres caracteres.

Las medidas que puede tomar V. E. en defensa de los intereses confiados a su cargo, son actos legítimos y el Cabildo no puede calificarlos de antemano de *violentos*, sin faltar a los respetos que debe a V. E. y a las conveniencias más elementales.

Suponer que las medidas de V. E., ya calificadas de violentas, puedan conducir a una lucha estéril, capaz de *humedecer con lágrimas* el suelo de la patria y producir *estragos*, si no es una amenaza de aceptar esa lucha, importa una conminación o jactancia pueril, sin alcance y fuera de propósito.

La misión de V. E. es evitar esas luchas si fueran hoy posibles.

Fué de proselitismo intransigente el que las inspiré siempre. Sólo podrían renacer entre nosotros, si las tendencias perniciosas de que se manifiestan animados el Vicario y el Cabildo, no fueran reprimidas en su origen

La autoridad civil ningún interés tiene en provocarlas. Su causa está ganada ante la civilización y la opinión de los pueblos, que es hoy la que gobierna. Lo singular es que nada enseña la experiencia a aquellos que más interés debieran tener en evitar cuestiones de este género.

Los ejemplos recientes de Chile y del Brasil debieran persuadirles, de que el desconocimiento de principios que son hoy la ley universal de las naciones, y el lenguaje agresivo y destemplado en la discusión sólo conduce a hacer retroceder la causa que con tales medios se defiende.

Llego ya al fin. —Diré para terminar, que si es el deber de V. E. hacer respetar la Constitución y las leyes, la prudencia con especialidad en estas delicadas materias, aconseja no ir más allá de lo que sea estrictamente necesario—.

El señor Vicario es, naturalmente, a primero a responder ante la ley del desconocimiento de principios inconcusos de nuestro derecho constitucional. Justo es sea sometido a los Tribunales de la Nación y separado de su Gobierno que ha administrado con tan poca cordura y suspendido de oficio y beneficio en el coro de su Iglesia.

En cuanto al Cabildo debe tenerse en cuenta para no adoptar a su respecto la medida a que en justicia había lugar, el respeto que siempre inspira el Superior, sobre todo en la jerarquía eclesiástica. Bastará a mi juicio, lo amoneste V. E. en términos severos, y mande testar los conceptos de su nota que he analizado.

Bastará esto, repito, para garantizar el cumplimiento de las leyes de la Nación y volver la tranquilidad a los que han creído posible pudiéramos retroceder a tiempos que, han pasado y que, es la aspiración de todos, Protestantes y Católicos, no vuelvan más. — Junio 3 de 1884.

Departamento de Culto. Tuvo resolución esta causa en Junio de 1884.

La exoneración de derechos en los contratos que celebra el Gobierno, no se presume, sino que expresamente debe ser consignada en el mismo contrato.

Los Sres. Boufuet, Roldán y Cía. proveedores del personal del Ferrocarril de Tucumán a Jujuy, piden la exención de pago del impuesto sobre reses consumidas, que exige el Gobierno de Tucumán.

Señor Ministro:

Lo expuesto nuevamente por el señor Boufuet en nada altera ni modifica la opinión que tengo manifestada a V. E. en este caso. (1).

Queda siempre en todo su vigor la contestación que ocurre a primera vista. La exoneración de derechos en los contratos que celebra el Gobierno no se presume, sino que expresamente se consigna; la práctica es que los proveedores compran en plaza artículos que han pagado derecho, así nacionales, como municipales, o los introducen ellos mismos y los pagan, sin exigir su devolución, ni en uno, ni en otro caso. Los proveedores —al hacer sus propuestas, ya toman esto en cuenta— Dice el señor Boufuet que él no estaba en este caso, porque su propuesta abrazaba la provisión en varias Provincias y por tiempo indeterminado. La exhibición oportuna del contrato destruye este fundamento, que parece ser el principal. Bastaba dar aviso para que en *tres meses* el contratista excusara seguir en un negocio, que circunstancias imprevistas como la elevación de los impuestos Municipales, hubieran convertido de bueno en malo. Debe suponerse que, cuando ha continuado, es porque encontraba en ello conveniencia.

Diré, por último, que, si los derechos en cuestión han sido cobrados indebidamente, no es V. E. quien debe devolverlo, sino los que los recibieron.

Reitero por lo demás mi dictamen anterior. — Junio 13 de 1884.

(1) Se refiere a un dictamen anterior, en el que transcribe la opinión que dió ante la Corte Suprema en agosto 31 de 1881 en la causa de los Sres. Bignon Mauvielle y Cía.

=====

Corresponde que el P. E. acepte la invitación que le formula el Gobierno Italiano para celebrar una conferencia que tenga por objeto uniformar ciertos puntos de vista con respecto al cumplimiento de las sentencias extranjeras en materia Civil y Comercial, que nos resultará de gran beneficio, ya que con el incremento de nuestras relaciones internacionales, aumentan los casos de ejecución de sentencias pronunciadas en el extranjero, y resulta necesaria la adopción de una regla uniforme para su cumplimiento.

Conferencia Internacional en Roma, para la ejecución de fallos extranjeros en materia civil y comercial

Señor Ministro:

Este asunto se relaciona estrechamente con la convención propuesta por el mismo señor Ministro de Italia sobre el derecho internacional privado.

Creo conveniente mande V. E. traer a la vista los antecedentes obrados con este motivo, pasándose todo a mi despacho. — Mayo 18 de 1884.

Señor Ministro:

El memorandum del señor ministro de Italia parece limitar la invitación que anteriormente había sido hecha a V. E. para uniformar ciertos puntos de derecho internacional privado, a lo relativo a la ejecución de las sentencias pronunciadas en país extranjero, en materia Civil y Comercial.

Las ocho reglas aceptadas por la Conferencia de Milán en su sesión de Septiembre último, y que se propone como base para una Convención, en poco o nada difieren de los principios sustan-

ciales que sirven de guía a nuestros Tribunales. Si algo pudiera observarse a su respecto, es que dan mayores garantías a aquellos en cuya contra se solicita la ejecución lo que no puede reputarse sino ventajoso para todos.

Consecuente con lo que dije a V. E. en mi dictamen de Mayo ppdo., pienso, hoy como antes, que habría conveniencia en que V. E. aceptara la invitación del Gobierno de Italia.

A medida que nuestras relaciones internacionales aumentan, estos casos de ejecución de sentencias pronunciadas en el extranjero, aumentarán también naturalmente; y resulta entonces, a todas luces manifiesta la conveniencia de una regla uniforme, que ofrezca garantías recíprocas y evite cuestiones enojosas. — Julio 12 de 1884.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad al dictamen. — Julio 12 de 1884.

Tomo 7, pág. 30. -- Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No habiendo el Cabildo Eclesiástico de Córdoba notificado oficialmente al ex Vicario Clara, la separación de su cargo decretada por el P. E. como sanción a su conducta, corresponde que el P. E. se dirija al Gobierno de Córdoba encargándole practique dicha notificación y haga saber al Prelado que será reducido a prisión si continúa desempeñando el cargo del cual ha sido separado.
- II. — El P. E. no debe aceptar como «acto capitular» del Cabildo Eclesiástico de Córdoba, la nota recibida de este último, que aparece suscripta por el Arceobispo en lugar del Deán —contrariamente a lo que prescriben las Constituciones Capitulares— sin justificarse la causa de dicha sustitución.
- III. — Los Prelados y los Cabildos Eclesiásticos no pueden comunicarse directamente, en el ejercicio de sus funciones, con los Agentes Diplomáticos de la Santa Sede acreditados ante nuestro Gobierno y el Papa no puede por sí solo, modificar la Constitución de los Cabildos, ni intervenir en manera alguna en el Gobierno de la Iglesia Argentina, si no media el «pase» constitucional de las Bulas, Breves o Rescriptos, que ordenen medidas al respecto.

El Gobernador de Córdoba, sobre una carta Pastoral publicada por el ex Vicario, Dr. Gerónimo E. Clara

Señor Ministro:

Si la conciencia pública no estuviera ya formada, bastarían los antecedentes que V. E. pasa nuevamente a mi dictamen para poner de manifiesto que la circunspección y cordura no están por cierto, de parte de la Iglesia de Córdoba en la enojosa cuestión que ha suscitado.

Apenas tuvo conocimiento el ex-Vicario Clara del Decreto que lo separaba del Gobierno de su Diócesis, lanza una nueva publicación a que llama Pastoral, más agresiva, más intemperate que la primera, y lleva en ella hasta el escándalo y desconocimiento de los principios más explícitos e inconcuso de la Constitución.

El Cabildo, a su vez, reunido al recibir la nota de V. E. omite hacer saber oficialmente al ex-Vicario su separación, y no habiéndose reunido después en la forma, prescrita para formar Capítulo, según se ha dicho y parece probable uno de sus miem-

bros, el Arcediano, sin hacer mérito de la ausencia o impedimento del Deán que debió presidirlo, dirige a V. E. una comunicación que, a ser tomada como emanada del Cabildo, agravaría notablemente su causa, y obligaría a V. E. a abandonar la moderación que hasta ahora ha observado a su respecto.

Mientras tanto el ex-Vicario prevalido del silencio del Cabildo, sigue haciendo ostentación pública de funciones de que bien sabe, ha sido dimitido, y así responde a la prudencia del Gobierno, al dejar que la acción moderadora del tiempo volviera la calma a los espíritus.

La llamada Pastoral del ex-Vicario, es un reto pueril a la par que insensato que no pienso merezca recoja V. E.

En los tiempos que hemos alcanzado, no es menos estéril tarea, combatir, que sostener las doctrinas que con tan singular desenfado avanza el ex-Vicario, y que el mundo entero ha juzgado y condenado ya.

He dicho antes y lo repito ahora; la autoridad civil ningún interés tiene en promover ni sostener luchas de este género. Bástale el perfeccionamiento de su legislación que deslinde el gobierno de las cosas de la tierra de la dirección de las conciencias. Y la tendencia hacia este anhelado fin es de tal manera indiscutible que acentúa y precipita cuanto más grandes son los esfuerzos con que se pretende detener. La reciente sanción de la ley de educación, el establecimiento del Registro Civil, que no se hará esperar; las manifestaciones que de todas partes surgen como una aspiración legítima de libertad, dan de ello el más elocuente testimonio.

La Constitución confiere al Jefe del Estado las prerrogativas del Patronato, y es su deber hacerlas respetar, no discutir las.

A falta de la reglamentación del Congreso, es también el Jefe del Estado el Juez único de la manera como ha de ejercitarlos, salvo las responsabilidades que la misma Constitución tiene establecidas.

El ex-Vicario Clara ha sido sometido a la acción de los Tribunales, y a ellos corresponde tomar en cuenta su nueva publicación. Al remitirla al señor Procurador Fiscal, sírvase V. E. prevenirle preste especial atención a la más pronta expedición de esta causa.

, Mientras tanto, sin mengua de la autoridad de V. E., el ex-Vicario no puede ni debe continuar un momento más ejerciendo funciones de que ha sido separado. Y puesto que su poca discreción hace indispensable el recurso a medidas de reprensión a que el propio decoro le aconsejaría no dar lugar, —en previsión de nuevas demoras o vacilaciones del Cabildo, —debe V. E. encargar al Gobierno de Córdoba, ponga en su conocimiento sin pérdida de tiempo, la resolución de V. E. en cuanto a él se refiere, haciéndole a la vez la expresa y terminante prevención de que se abstenga de ejercer los actos y funciones de que ha sido separado, ya en el Gobierno de la Diócesis, ya en el Coro de la Iglesia. Si insistiese en la ostentación de su desobediencia, deberá V. E. prevenir al mismo Gobierno de Córdoba, lo impida, aún que sea para ello necesario reducir al ex-Vicario a prisión, constituyéndola en tal caso en su propio domicilio en consideración a su carácter y al elevado rango que ha ocupado.

Volviendo ahora al Cabildo, es fácil demostrar que su manera de proceder, no es menos censurable esta vez que la anterior.

Ocurre ante todo preguntar, su comunicación es un acto capitular? Todo induce a creer que no.

Los Cabildos son corporaciones regidas por las Constituciones llamadas Capitulares, que ellos mismos se dan con arreglo a la disciplina general de la Iglesia y de la aprobación expresa del Estado, sin la que ni pueden ser puestas en vigencia, ni modificadas.

No tengo conocimiento de la Constitución por que se rige el Cabildo de Córdoba, ni sé que se haya publicado. Por acaso tengo a la vista la del Cabildo del Paraná, publicada en 1863 en la ciudad del mismo nombre.

Hay empero, ciertos principios fundamentales que son comunes a todos, y que es seguro no se han omitido en la de Córdoba.

Es el Deán el que preside en todos los Cabildos. El Arce-diano sólo ocupa el lugar en casos de ausencia o impedimento. Art. . . . Título IV de la Constitución del Cabildo de Paraná.

Para las sesiones extraordinarias (como la que debió tomar conocimiento del decreto de V. E.) debe preceder convocatoria por escrito, que se comunicará por el Pertiguero a cada uno de los Capitulares *hic et num*, presentes en la ciudad o suburbios, de

la que dicho Pertiguero dará inmediatamente cuenta al Deán: Art. 8 Cap. 1, id.

Estas disposiciones son de tal naturaleza, que no se necesita tener a la vista la Constitución del Cabildo de Córdoba para anticipar que ha de contener idénticas o muy escasas diferencias.

Ahora bien: el Deán del Cabildo de Córdoba doctor Vázquez de Novoa, aparece firmando la primera comunicación. No se dice que esté ausente, ni ha podido estar impedido, puesto que intervino antes en el mismo caso. ¿Cómo es, entonces, que se elimina ahora, y aparece asumiendo su representación el Arcediano?

Todo esto sugiere fundadas dudas que deben ser esclarecidas. Sin nuevos datos V. E. no puede aceptar como un acto capitular la comunicación que firma el Arcediano, ni responsabilizar por ella a todos los miembros del Cabildo.

Para proceder con la circunspección que este delicado incidente exige, pido a V. E. se dirija al Señor Dean Vázquez de Novoa, requiriéndole informe acerca de la razón porqué no presidió el capítulo la sesión en que aparece sancionada la comunicación de 23 del ppdo., así como acerca de si al convocarse dicha sesión, fueron llenadas las formalidades que la Constitución Capitular exige. Al mismo tiempo convendrá, pida V. E. al Cabildo, remita un testimonio de la expresada Constitución.

Si bien no es todavía el momento de tomar en consideración la comunicación que firma el Señor Arcediano, ella hace mérito de hechos de tal gravedad y trascendencia, que no puedo dejar de llamar desde ahora, la atención de V. E. a su respecto.

Para probar que el Cabildo carece de la jurisdicción para traer a juicio los actos del Vicario que por mi parte he probado corresponderle la comunicación citada aduce dos antecedentes que cree decisivos.

1.º La reprobación que dice haber hecho el Delegado Apostólico, Monseñor Marino Marini, de la manera como en 1858 el Doctor Arellano fué nombrado Vicario Capitular.

2.º Las letras Apostólicas de diciembre 13 del mismo año, por las que al confirmar S. S. la reprobación del Delegado, marca al Cabildo la regla a que debe ajustarse en lo sucesivo.

Ni los Prelados ni los Cabildos pueden entrar en relación directa con los Agentes Diplomáticos que la Santa Sede constituye

cerca del Gobierno de la Nación, y que impropriamente se califica de *Delegados Apostólicos*; ni S. S. puede, por sí solo, y sin el consentimiento del Patrono, modificar la Constitución de los Cabildos, ni intervenir en manera alguna en el Gobierno de la Iglesia Argentina.

Salvo el caso de autorización expresa, el Cabildo de Córdoba en 1858 había obrado, por consiguiente, de la manera más irregular, al entrar en relación directa con Monseñor Marini sobre puntos del Gobierno de la Diócesis, y al recibir y aceptar como doctrina, las letras Apostólicas a que hace referencia. Y salvo siempre el beneplácito de la autoridad civil, que es por demás dudoso haya prestado, de nada servirían ni nada probarían tales letras en el presente caso.

Es, pues, ante todo necesario pida V. E. al Cabildo de Córdoba remita a su conocimiento, originales, así la correspondencia que hubiese cambiado con Monseñor Marini, como las letras Apostólicas en cuestión.

En su mérito pediré lo que corresponde para salvar los derechos de la Nación y evitar que la Iglesia sea gobernada por las leyes que quiera darle la Curia Romana, sin que previamente hayan obtenido el placet de V. E. — julio 7 de 1884.

Dirigida nota por separado al Venerable Cabildo de la Diócesis de Córdoba y al Deán del mismo, de conformidad con lo pedido por el Señor Procurador General y agregados a su tiempo los antecedentes requeridos, pasó de nuevo al referido Señor Procurador General de la Nación quien se expidió en estos términos.

Señor Ministro:

Los desagradables incidentes a que dió lugar la Pastoral del ex-Vicario Clara, quedaron virtualmente terminados en el hecho de haber sido sometidos a la decisión de la justicia. Pienso por ello, que debe V. E. aceptar como satisfactorias las explicaciones del Venerable Cabildo.

No puedo, empero, prescindir de llamar nuevamente la atención de V. E. hacia la irregularidad del proceder del mismo Cabildo, al entrar en relación directa con el representante de la Santa Sede en la República Monseñor Marino Marini.

Consta, en efecto, de los documentos agregados que en 1858, cambió el Cabildo varias comunicaciones con el ya citado Monseñor Marini, con motivo de una elección de Vicario Capitular; y que llegó hasta recibir una nota de la Curia Romana, en la que S. S., desaprobaba la manera en que había hecho el nombramiento, y fijaba las reglas a que debía ajustarse en lo sucesivo.

Todo esto es contrario a los principios más inconcusos de nuestro credo constitucional y atentatorio a las prerrogativas más elementales del Patronato. No necesito mencionar las leyes que prohíben a las autoridades civiles y eclesiásticas dar cumplimiento a las Bulas, Rescriptos y Despachos Pontificios, mientras no hayan obtenido el *pase* competente: menos necesito recordar la prescripción constitucional que confiere al Jefe del Estado la facultad de conceder el *pase* o retener las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontífice.

El Cabildo de Córdoba procedió, pues, de una manera irregular y censurable al entrar en comunicación con el Delegado de S. S., y muy especialmente al pretender justificar su proceder en el incidente del ex-Vicario, invocando en su apoyo una decisión de S. S. que no había recibido el asentimiento de la Autoridad Civil.

V. E., no puede prescribir de hacerlo así saber al Venerable Cabildo, reteniendo al mismo tiempo la comunicación de S. S. antes mencionada, y las del Delegado Apostólico Monseñor Marini. — Octubre 11 de 1886.

Departamento de Culto. La resolución ordena se reserve en el Archivo.

Tomo 7, pág. 93. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Habiéndose reglamentado por Decreto el uso de banderas nacionales y extranjeras sin indicarse la sanción que correspondería a quienes violasen el mismo, y considerando que toda norma es ineficaz sino lleva aparejada una sanción penal, corresponde que sea el señor Jefe de Policía, quien indique por medio de edictos, cuando la ocasión lo requiera, las penas que corresponderán a los infractores, recordando al mismo tiempo las prohibiciones en vigencia.
- II. — Si se concede a los Cónsules y Agentes Cónsulares, el uso de la bandera del país a que pertenecen, puede concederse igual prerrogativa a las Sociedades extranjeras que lo soliciten.

Reglamentación del uso de las banderas nacional y extranjeras

Señor Ministro:

El señor Jefe de Policía observa justamente que toda disposición es ineficaz sino lleva aparejada una sanción penal.

El Decreto de Abril ppdo. sobre el uso de banderas, carece de esta sanción, si bien debe suponerse la lleva implícita, pues de otra manera sería impunemente desobedecida y no tendría más alcance que el desprestigio de la autoridad.

También es bien sabido que no es justo castigar la infracción de una disposición cualquiera, sin hacer saber primero cual es la pena en que incurre el que la quebranta.

En el presente caso, si bien el que levanta bandera nacional o extranjera contra lo dispuesto por el decreto recordado, merece un castigo por su desobediencia, siquiera sea el mínimum que autorizan los reglamentos policiales, bien podía alegar en su favor que no se le había hecho saber que incurría en pena alguna.

Puesto que es la policía la repartición encargada del cumplimiento del decreto en cuestión, el camino indicado es bien sencillo. Bastará que, al aproximarse alguna fiesta, publique el señor Jefe, edictos recordando la prohibición y estableciendo al mismo tiempo la pena en que incurren los contraventores. El mismo señor Jefe indica oportunamente que esta pena debe ser ligera y sólo por la reincidencia. — Julio 29 de 1884.

=====

Señor Ministro:

Hechos recientes de que ha dado cuenta la prensa han venido a poner de manifiesto una vez más, que el uso de banderas extranjeras, sin control, ni limitación, no deja de presentar serios inconvenientes, y aun peligros.

Durante las fiestas que celebra la República Francesa, con motivo de la toma de la Bastilla, el 14 de Julio, un pretendido insulto a la bandera del Imperio Alemán, causó no poca alarma y fué objeto de los telegramas que remiten a todas partes las agencias de noticias.

En la costa de Africa una supuesta ofensa a la bandera del Reino Unido fué comentada extensamente como pudiendo dar lugar a complicaciones serias.

El último de los boletines mensuales que publica ese Ministerio, registra, sobre este particular, una comunicación del Ministro de la República en Estados Unidos, digna de atención por más de un concepto.

El Cónsul de Austria Hungría, refiere el señor Domínguez, había levantado su bandera al frente del Consulado, el día del nacimiento del Emperador. El Jefe de Policía le intimó la baja, y como no lo hiciera llevó su queja ante el Juez del Distrito *por violación de una ordenanza municipal.*

Habiendo reclamado el Ministro de Austria el Secretario de Estado señor Frelinghuisen, observó el Gobierno de Pensilvania; a que pertenece Pittsburg, que el tratado con el Austria autorizaba a los Cónsules Generales, Cónsules, Vice-Cónsules y Agentes Consulares, a izar sobre sus domicilios la bandera de su Nación. El Gobernador de Pensilvania dió explicaciones que excusaban el procedimiento del Jefe de Policía, y con ellas se dió por terminado el incidente.

Vése, pues, que el uso de banderas extranjeras está prohibido, por regla general, en la Unión Americana; y que, sólo mediando autorización consignada en los tratados, pueden usarla los Cónsu-

es y Agentes Consulares. Otra observación digna de tenerse en cuenta, es el rol preponderante que en aquella gran Nación desempeña la justicia. Entre nosotros el Jefe de Policía en lugar de ocurrir a los jueces, hubiera aplicado sin vacilar y sin más trámites, una multa.

Es esto, sin duda más expeditivo y más en armonía con nuestro temperamento, impresionable y autoritario; no puede desconocerse, empero, que dejar el castigo a la justicia, sería más correcto y más conforme a la índole de nuestra instituciones.

No obstante todo esto, pareceme que, si se concede a los Cónsules y Agentes Consulares, el uso de la bandera de su país bien puede concederse a las Sociedades extranjeras que lo soliciten.

Son estas Sociedades un elemento importante en nuestra sociabilidad; ya como sociedades de filantropía, que comparten con el Estado deberes sagrados; ya como centros amenos de reunión, que ofrecen al que llega a nuestras playas, desconocido y sin hogar, un algo de la familia y de la patria.

Y si el uso de la bandera de la nacionalidad de cada una, en sus edificios y siempre que concurran en corporación a una solemnidad es como aseguran y fácilmente se concibe, un motivo de satisfacción y de aliento, —no veo la razón porque haya de negarlo V. E.— Noviembre 19 de 1884.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución en contra de lo dictaminado de Noviembre 24 de 1884.

Tomo 7, pág. 33. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe considerarse que el Gobierno Británico está en su derecho al prohibir la residencia de un ciudadano argentino en la fortaleza de Gibraltar, por cuanto el tratado existente entre ambos países, al estipular la libre residencia de los ciudadanos de uno en el territorio del otro, no excluye la facultad de limitar esa residencia o aún de prohibirla en ciertos casos por razones de seguridad.

**El Cónsul en Gibraltar, sobre la residencia en esa plaza del
ciudadano argentino, Juan J. Gil**

Señor Ministro:

El señor Ministro de S. M. B. observa con razón que el tratado de la República con el Reino Unido, al estipular que los ciudadanos o súbditos de una de las dos partes puede residir libremente en cualquier punto del territorio de la otra, no excluye la facultad de limitar esa residencia o de prohibirla en ciertos lugares, en las fortalezas, por ejemplo. Si el ciudadano argentino Señor Gil no puede seguir residiendo en Gibraltar, sin contrariar las reglas que el Gobierno Inglés ha creído necesarias para la seguridad de punto tan importante, encuentro que no puede V. E. pretender lo contrario. De la misma manera estaría perfectamente justificado el Gobierno Argentino, al no permitir le residencia de un súbdito de S. M. B. en Martín García, si juzgare perjudicial la permanencia de extranjeros en su recinto fortificado.

Creo así, que es justo y conveniente aceptar el principio en que Lord Granville funda la negativa que manifestó a nuestro Ministro de Londres relativamente al mencionado señor Gil. — Julio 29 de 1884.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Se adopta como resolución
el dictamen. — Agosto 2 de 1884.*

Tomo 7, pág. 87. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde acordar el pase a una Letra Patente en la que se nombra el Comisario General de los Colegios y Conventos de la Orden Franciscana, bajo condición expresa de que en todo se respetará el derecho y regalías del Patronato Nacional.

Fray Salvador Mazza, sobre exequátur de letras patentes que le acreditan como superior de los colegios y conventos de misiones franciscanas

Señor Ministro:

Nada encuentro que observar con respecto a las Letras Patentes que presenta Fray S. Mazza y por las cuales es nombrado Comisario General de los Colegios y Conventos de la Orden Franciscana existente en la República. Puede V. E. acordar el pase que solicita, en la inteligencia y bajo la condición precisa de que en todo procederá respetando los derechos y regalías del Patronato que la Constitución confiere al Jefe del Estado. — Septiembre 8 de 1884.

Ministerio de Justicia y Culto. Resolución de conformidad al dictamen. — Octubre 21 de 1884.

Tomo 7, pág. 117. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los Procuradores Fiscales Federales son mandatarios del P. E. y como tales deben iniciar las acciones que les fueran ordenadas; no obstante gozan en sus funciones de cierta independencia, que les permite si invocan razones atendibles, excusar su actuación, debiendo en tal caso hacer sus veces, el abogado en turno de la lista que confecciona la Corte Suprema con arreglo a la ley de septiembre 24 de 1878.

El Procurador Fiscal de Córdoba, se excusa de entender en la acusación contra el ex Vicario Clara con motivo de la Pastoral

Señor Ministro:

Después de muy extensas consideraciones tendientes a demostrar que la acusación contra el ex-Vicario Clara carece de funda-

mento el Señor Procurador Fiscal de Córdoba termina su larga exposición de principios, *abrigando la convicción íntima de que V. E. dictará las medidas que la justicia aconseja en casos semejantes.*

Quiere esto decir en lenguaje vulgar, que el Señor Procurador Fiscal presenta su excusación, pues que no podrá V. E. encomendar el ejercicio de una acción, al que principia por poner en duda su justicia.

Para llegar a este extremo, bastaba al Señor Procurador Fiscal haberse acogido a los deberes de su conciencia y a las exigencias de su fe, y bien pudo excusar razonamientos que nadie le pedía.

Cuando V. E. habiendo decidido proceder a la acusación, debía suponer que su decisión había sido precedida del estudio que la gravedad de la materia requería. Debía igualmente suponer que, cuando V. E. había declarado como uno de los fundamentos de su resolución, la ejecución de Rescriptos Pontificios, que no habían recibido Pase del Jefe del Estado, no pudo haber escapado a su penetración lo que debiera por tal ejecución entenderse. Debíó por último suponer que no podía ser ajena a V. E. la diferencia entre Bula de Penitenciaría, Dogmáticas, Disciplinarias; y demás, en que con tanto afán insiste.

No ocuparé la atención de V. E. en analizar consideraciones tenidas ya en cuenta y contestadas de antemano.

La Pastoral del Vicario, fué la manifestación primera de la reacción que visiblemente se inicia, contra las conquistas que la civilización ha alcanzado en largos siglos de lucha y sacrificios.

Usando de la autoridad que había sido investido por V. E. dió la señal de alarma el ex-Vicario declarando, por un acto público y solemne, que no era lícito que los padres mandasen a sus hijos a la escuela que llamaba protestante y comunicando, a la vez, la desobediencia con las penas a su alcance. Apoyaba tal declaración principalmente, en la autoridad del «Syllabus». V. E. entendió que era esto poner *en ejecución* aquella negación de la civilización y del progreso, que el mundo entero ha condenado. ¿Ni de qué otra manera podría hoy ejecutarse un Rescripto Pontificio? ¿En el caso del «Syllabus», en la relación a las escuelas cree el Señor Procurador Fiscal que fuera necesario que el ex-

Vicario arrancara a los niños de sus bancos; colocara gendarmes en las puertas o llevara a los padres ante la justicia?

Por fortuna ha mucho tiempo que la Iglesia dejó de tener a su disposición la espada del brazo secular.

V. E. juzgó con mucha oportunidad que no debía permanecer indiferente ante un movimiento reaccionario, cuyo propósito manifiesto era dividir la sociedad en dos bandos hostiles y excluyentes. La actitud de V. E., al condenar y reprimir en su origen esta resurrección exótica de fanatismo ha merecido el aplauso entusiasta de la inmensa mayoría liberal y sensata de la República, y cumple a su noble misión perseverar en el camino iniciado.

El Señor Procurador Fiscal, Doctor Morcillo rehusa prestar su concurso, sea en hora buena.

Los Procuradores Fiscales son los representantes de la acción pública ante la justicia, y si bien reciben su mandato de V. E. y es su deber iniciar las acciones que le fueron requeridas en defensa de los intereses generales gozan de cierta independencia en el ejercicio de su ministerio, de que no será justo despojarles.

Con frecuencia están impedidos, o se excusan por razones atendibles. Llámase entonces al abogado en turno en la lista, que al principio de cada año debe formular la Corte Suprema para cada localidad, con arreglo a la ley de Septiembre 24 de 1878. A este abogado, debe V. E. pasar, en consecuencia estos antecedentes, con recomendación muy especial de prestarle una atención preferente. — Agosto 29 de 1884.

Ministerio de Justicia y Culto. Tuvo resolución esta causa en Setiembre 2 de 1884.

- I. — No corresponde que el P. E. intervenga a pedido del Cónsul General de Italia, en la reclamación que éste ha formulado al Juez de Menores sobre la entrega de una menor, por cuanto ello implica el invadir atribuciones exclusivas del P. Judicial; en el caso debe el P. E. limitar su acción a pedir informe al señor Defensor de Menores, acerca de los motivos que obstaron a la entrega.
- II. — Es facultad exclusiva del Defensor de Menores el intervenir en las diferencias que se susciten entre padres e hijos de menor edad, nacionales o extranjeros residentes en el país.
- III. — Las funciones de los Cónsules, están limitadas a la protección de los intereses del comercio, de conformidad al derecho de gentes. En asuntos civiles, sólo tienen entre nosotros la facultad de intervenir en las sucesiones intestadas de sus connacionales de acuerdo a los tratados vigentes.

La Legación de Italia, sobre la entrega de la menor, Ernestina Colzani al Cónsul General de aquella Nación

Señor Ministro:

Las conclusiones que sirven de base a la contestación del Defensor de Menores al señor Cónsul de Italia, son a mi juicio, de toda exactitud.

Es en efecto, del resorte exclusivo de este funcionario intervenir en las diferencias que puedan suscitarse entre los padres y los hijos de menor edad, nacionales o extranjeros, residentes en la República. Sólo él y en su caso los jueces territoriales, pueden apreciar las múltiples y delicadas circunstancias que deben tenerse en cuenta al fijar la guarda y domicilio de los menores, consultando su mejor educación y su porvenir a la vez que el respeto debido a los derechos de los padres.

El mismo señor Ministro de Italia implícitamente así lo reconoce, al solicitar de V. E. *la interposición de sus buenos oficios*.

Por otra parte, es también perfectamente exacto que las funciones de los Cónsules están limitadas a la protección de los intereses del comercio, en la medida que autoriza el derecho de gentes. En los asuntos civiles, sólo tienen entre nosotros la intervención que los tratados les reservan en las sucesiones intestadas.

No veo de qué manera pudiera V. E. acceder a los deseos del señor Ministro sin invadir atribuciones que, no por ser menos elevadas merecen ser respetadas menos.

Honrando la interposición del señor Ministro, y al objeto de satisfacerlo en cuanto sea posible, podría V. E. pedir informe al expresado señor Defensor acerca de los motivos que obstan a la entrega de la menor Colzani, o aconsejen en su mismo bien no alterar las condiciones en que se encuentra colocada. — Setiembre 20 de 1884.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Setiembre 25 de 1884.

Tomo 7, pág. 138. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Las legalizaciones consulares de que hablan los arts. 20 y 21 de las Ordenanzas de Aduanas, sólo tienen el alcance de certificar que el buque lleva las mercaderías que el manifiesto detalla y esta manifestación del Cónsul merece entera fe ante cualquier autoridad.
- II. — Pueden los jueces para ilustrar su juicio, pedir datos a las Aduanas de donde proceden los buques debiendo a su vez estos datos ser legalizados por el Cónsul; esta legalización sólo implica que la firma de las autoridades que suscriben los nuevos documentos son auténticas y en manera alguna desvirtúan la legalización del manifiesto.
- III. — Las legalizaciones de los Cónsules sólo hacen fe, cuando se trata de actos en que intervienen directamente y con carácter oficial.

Caso del pailebot «Treinta y tres»

Señor Ministro:

No determinándose con bastante claridad a qué clase de documentos se refiere el señor Ministro Argentino en Montevideo, no es fácil formar juicio exacto acerca de la necesidad o conveniencia de la legalización que, se dice, requieren los jueces de Sección.

Si los datos que estos solicitan, son de aquellos en que el Consulado interviene directa e inmediatamente, no se alcanza la razón porque haya de exigirse la legalización de otra autoridad, cuando es el mismo Cónsul el que legaliza los documentos que no tienen para las Autoridades Argentinas el carácter oficial que su intervención les atribuye.

Si se tratara de antecedentes que deban tomarse de fuentes orientales, parecería entonces que no debiera bastar la afirmación del Sr. Cónsul, por no recaer sobre hechos en que personalmente hubieran intervenido en su carácter oficial. Su misión sería en tales casos legalizar los documentos emanados de autoridades extrañas a los Jueces Argentinos.

Para proceder con mayor conocimiento creo oportuno pida V. E. al señor Ministro remita en copia los documentos que motivan su comunicación. — Septiembre 21 de 1884.

Señor Ministro:

«Los capitanes de buque que carguen en el extranjero para puertos de la República, dice el artículo 20 de las ordenanzas de Aduanas, harán legalizar por el Cónsul Argentino los manifiestos de sus cargamentos que deberán especificar las marcas, números y cantidad de bultos».

«El Cónsul, agrega el 21, expedirá dicho manifiesto certificado, después de confrontados con los conocimientos de la carga y expresando en la diligencia de legalización, el número de conocimientos que la componen».

¿Cuál es el valor de esta legalización, pregunta el señor Ministro de la República en Montevideo? ¿La palabra oficial del Cónsul, debe o no tener valor para los jueces?

La respuesta no puede ser dudosa, es claro que, sí. Pero es claro también que ese valor no puede ir más allá de aquello que la misma legalización importa.

Esta legalización no tiene más alcance, sino es certificar que tal buque lleva las mercaderías que el manifiesto detalla, según los documentos presentados por el Capitán. En esto la afirmación del Cónsul merece toda fe, y no es posible que Juez alguno vacile en

aceptarla como la expresión legal y genuina de la verdad. Y si, lo, que no es de esperarse, no fueran declarados en comiso mercaderías no incluídas en el manifiesto legalizado, el remedio está, a mi juicio, en el recurso al Superior, no en el que indica el señor Ministro. No sería fácil ni acaso posible, dar a los jueces, por acordadas, reglas de criterio, que no estuvieran de antemano consagradas por las leyes generales.

No obstante toda la fe que merece un manifiesto legalizado pueden los jueces, en casos excepcionales, pedir ciertos datos de las Aduanas de donde procede el buque para ilustrar su juicio, y estos datos a su vez es natural, deberán ser legalizados. La legalización entonces no importa otra cosa sino que, la firma de las autoridades que los expiden es verdadera, y en manera alguna desvirtua la legalización anterior.

Ahora, si se tratara de datos que los Cónsules pueden suministrar particularmente, acerca de la carga de un buque, que no estén en armonía con el manifiesto principal, los jueces estarían justificados al pedir informe de la Aduana respectiva; pues, la intervención o legalización de los Cónsules sólo hace fe en cuanto ellos intervienen directa y oficialmente.

No veo, por lo expuesto, la conveniencia de pasar estos antecedentes a la Corte Suprema. Más bien, el Ministerio de Hacienda por medio de sus Inspectores podría investigar los hechos en la localidad donde han ocurrido, y proponer el remedio a los inconvenientes que motiva la comunicación del señor Ministro, si a ello hubiera lugar. — Diciembre 1.º de 1884.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Mayo 8 de 1886.

Tomo 7, pág. 130. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

En las reclamaciones internacionales no debe el Gobierno de una Nación asumir directa e inmediatamente la representación de sus nacionales, en la gestión para la indemnización de los perjuicios que hubiesen sufrido. Son los particulares los que deben iniciar tales gestiones y sólo intervienen los Gobiernos cuando la Nación que causó el daño rehúsa una justicia evidente, o cuando intereses generales y bien caracterizados lo requieren.

Reclamación de daños y perjuicios contra el Gobierno de Chile, por la señorita Rosa Benavente y Pacheco

Señor Ministro:

El señor encargado de Negocios de la República en el Perú remite a V. E. ciertos antecedentes, de los que resulta que la señora Benavente de Pacheco ciudadana Argentina, sufrió perjuicios, en su propiedad, a consecuencia del ataque que llevó el ejército de Chile sobre las fuerzas del Perú en Miraflores, en el que, dice la expresada señora, las fuerzas chilenas prendieron fuego intencionalmente a sus poblaciones en aquella localidad.

El encargado de Negocios se limita a la simple remisión de las actuaciones producidas ante él, sin abrir opinión, ni sobre los hechos, ni sobre el derecho, *a fin de que V. E. acuerde lo que estime más conveniente.*

Difícil es que, a tan larga distancia, pueda V. E. apreciar *qué es lo que sea más conveniente*, sino es pedir al señor Encargado de Negocios mayores explicaciones desde luego.

El estado de guerra trae consigo gravísimos e infinitos males, como es bien sabido. Unos inevitables, y que nadie está obligado a reparar; otros, que son los menos, que pudieron evitarse, y que los Gobiernos indemnizan, con más o menos dificultad, y con más o menos liberalidad también.

No es de práctica en las relaciones internacionales que una Nación asuma directa e inmediatamente la representación de sus nacionales, en la gestión para la indemnización de los perjuicios que hubiesen sufrido. Son ellos los que deben iniciar tales gestiones, y sólo intervienen los Gobiernos cuando la Nación que causó el daño rehúsa una justicia evidente, o cuando intereses generales y bien caracterizados lo requieren.

En el presente caso, no consta que la señora Benavente haya ocurrido al Gobierno de Chile; y menos que éste haya rehusado hacer la justicia. Se hace mención de una *Comisión Arbitral* como por incidencia; pero, no se dice cuál fué la misión ni si las autoridades chilenas reconocieron esta clase de perjuicios, en favor de todos, o de algunos; o si rehusaron tomarlas en cuenta, por regla general.

Sin el conocimiento de estos antecedentes, que es sensible no haya anticipado el señor Encargado, nada puedo decir a V. E. ni es posible que V. E. pueda *juzgar lo que sea más conveniente*. — Octubre 5 de 1884.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad al dictamen. — Octubre 7 de 1884.

Tomo 7, pág. 77. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La Pastoral del Obispo de Salta en la que declara prohibir terminantemente la asistencia de los niños a las escuelas no dirigidas por católicos, declarando ilícita dicha asistencia, y castigándola con la privación de los sacramentos; implica una invasión a las atribuciones del Poder Civil;
- II. — Sólo el Poder Civil tiene la facultad de organizar la enseñanza que debe ser: obligatoria, colocándola al alcance de todos; gratuita, para que ninguno se excuse por falta de medios; y laica, para que la diversidad de creencias no sea un obstáculo a su aplicación, sin perjuicio de que concurran a las Escuelas a dar enseñanza religiosa, los Ministros de la fe que profesa la inmensa mayoría de la población.
- III. — La Pastoral hace a su autor reo del delito de desconocimiento del Derecho de Patronato, y en ejercicio del mismo, debe el P. E. separar al Obispo del gobierno de su Diócesis y ordenar al Procurador Fiscal de Salta que promueva contra él la acción que corresponda.
- IV. — No previendo nuestras leyes actuales la usurpación de facultades en que ha incurrido el Obispo debe fundarse la acusación en la antigua legislación española

—aplicable al caso por el art. 21 de la ley de 14 Septiembre de 1863— en la que abundan disposiciones que condenan la ingerencia indebida de los Ministros de la Iglesia en las funciones civiles.

El Gobierno de Salta, sobre la Pastoral publicada por el Sr. Obispo prohibiendo la concurrencia de los niños a las escuelas laicas

Señor Ministro:

La Pastoral del Ilmo. Obispo de Salta es, con mucha, más injustificable y agresiva que la del ex-Vicario Clara que V. E. y el país entero han condenado.

Emana de una autoridad más altamente colocada en la jerarquía de la Iglesia y es por ello más perniciosa en su efectos y más digna de censura.

Es más intemperante en la forma, por cuanto supone en V. E. *el propósito deliberado cuyos fines son la paulatina descatolización del pueblo, sin renunciar a medios violentos cuando el caso se presenta propicio.*

Es más agresiva en el fondo, por cuanto no se limita como el ex-Vicario a declarar que no es lícita la asistencia a las escuelas no dirigidas por católicos sino que la prohíbe terminantemente, la castiga con la privación de sacramentos y llega al extremo de ordenar a los sacerdotes de su Diócesis no concurren a dar en ellas la enseñanza religiosa que era de práctica.

El Ilmo. Obispo conocía bien la resolución de V. E. con respecto al señor Clara, su pastoral, es así, una provocación audaz al Poder Civil ante la faz de la República. Por desgracia, no puede V. E. dejar de recogerla, pues que su prescindencia ante desmanes semejantes, comprometería los intereses primordiales de la Sociedad, cuya defensa le está encomendada.

Aleccionado por la experiencia, S. S. I. ha cuidado no apoyar su pastoral en un sólo Rescripto Pontificio, si bien claramente se percibe que obedece a una consigna que le viene de Roma. *Juzgamos innecesario, dice, vindicar la doctrina sentada en estas doctísimas, pastorales (las de Clara) pero agregaremos que ese mandato prohibitivo es universal; que lo que obliga a los católicos de Córdoba, obliga a los de Salta y a los del mundo entero.*

Como se ve, S. S. I. se adhiere a la pastoral del ex-Vicario; invoca un precepto universal, que no puede venir sino del Jefe Universal y olvida que aquella pastoral, basada en rescriptos no consentidos ha sido declarada atentatoria a los derechos del Patronato Nacional.

Sin violencia se desprende de estas ligeras referencias, que el señor Obispo es reo del mismo desconocimiento del Patronato, que motivó la separación del ex-Vicario. No insistiré, sin embargo, sobre este particular. Para llegar al mismo resultado, sobran consideraciones fundamentales de otro género.

La Pastoral del señor Obispo de Salta revela un espíritu de intolerancia y fanatismo más estrecho aún que la del mismo Clara.

S. S. I. exhuma de los archivos de la Edad Media, que destilan sangre todavía la calificación de *herejes*, que no tiene significado ni cabida en nuestra legislación. No la encontrará el señor Obispo ni en la constitución ni en las leyes del Congreso. Al amparo de la liberalidad de nuestra instituciones, los que no profesan la religión católica son simples *disidentes*, y un Prelado Argentino no puede llamarlos *herejes*, sin faltar a la obediencia que debe a las leyes de su país, y atacar los principios en que reposa nuestro orden social.

La prohibición de concurrir a las escuelas, que no se reemplazan con otras, bajo pretextos frívolos, por no decir ridículos, es un atentado inalicable que compromete los más graves intereses de la Nación.

No incurriré en la trivialidad de encarecer a V. E. que tan laudables esfuerzos hace para difundirla, la importancia sin igual de la educación. ¿Quién ignora hoy que es ella la medida del poder y del bienestar de los pueblos?

Nadie ignora tampoco que es ella una función del Poder Civil, como lo es recaudar los impuestos, administrar justicia, que sólo él tiene los medios de desempeñar y de que la Iglesia se ha mostrado incapaz en todo tiempo.

En la larga y tenebrosa noche de la Edad Media, la Iglesia reconcentró en sus manos todos los poderes y nunca fué más grande la ignorancia del pueblo y del mismo clero. Sólo estuvo en honor la Teología, cuyo objeto principal es robustecer el poder

de los Papas y ahogar en su germen todo sentimiento de independencia y libertad sin el que toda otra ciencia es imposible.

El movimiento intelectual que tan grande lustre dió a la era llamada del «Renacimiento», fué una insurrección contra la dominación de la iglesia, y es desde entonces que arranca el progreso del mundo moderno. La reforma, cumplimentando la emancipación, dió a la ciencia y a las artes el portentoso desenvolvimiento que es la gloria de esta época.

En los tiempos modernos, podría decirse con entera verdad, la educación del pueblo está en razón inversa de la influencia del clero. En ninguna estuvo más desatendida que en los Estados Pontificios y la estadística demuestra con elocuencia irrecusable que las naciones Católicas están muy lejos de los progresos admirables que han alcanzado las que se emanciparon de la dominación de Roma.

Bastará, pues, la experiencia de la historia para negar a la Iglesia el desempeño de una misión de que en todo tiempo se ha manifestado incapaz. No abandona ella, sin embargo, sus pretensiones a la dominación sobre este punto, como no las abandona sobre ninguno, y el movimiento que se advierte entre nosotros se hace sentir a la vez allí donde puede desenvolver su acción.

El Poder Civil traicionaría su mandato si abandonara a manos inhábiles e incapaces una misión que sólo él tiene los medios de llenar cumplidamente. Sólo él, en efecto, puede colocar la enseñanza al alcance de todos y hacerla obligatoria, para que ninguno se exima, evitándose un peligro o un elemento negativo para su país.

Para esto, bien se comprende, la escuela debe ser gratuita, para que ninguno se excuse por falta de medios; y laica, para que la diversidad de creencias no sea un obstáculo, lo que en manera alguna excluye que no concurren a dar enseñanza religiosa los ministros de la fe que profesa la mayoría inmensa de la Nación.

La prohibición del señor Obispo al respecto, no tiene nombre; es un atentado, por no decir un escándalo, y el más culpable desconocimiento de la misión y de los más sagrados deberes de los Ministros del Altar.

Id y enseñad a todas las Naciones, dijo Jesús a los Apóstoles, y los Apóstoles fueron a la más apartadas regiones de la tierra a llevar el evangelio.

Ciertos apóstoles del día encuentran que es más cómodo que otros enseñen la palabra de Dios, en su propia casa, reservándose ellos la enseñanza de cosas que les tocan más de cerca.

Sin tan grande ostentación, de muy diversa manera proceden en la Unión Americana los que tienen por la conservación de las creencias el celo de que se hace tanto alarde. Los más eminentes ciudadanos no desdennan concurrir a los templos los días festivos a dar la enseñanza que se pretende se dé entre nosotros en las escuelas; y es fama que el mismo ex-Presidente Grant, cuyo mutismo en materias políticas es proverbial tiene conquistado gran renombre de orador sagrado en el desempeño de esta misión. ¿En vez de agiar estérilmente la República no será más cristiano y más patriótico imitar tan noble ejemplo?

La Pastoral del señor Obispo de Salta, lógicamente se desprende de lo que queda expuesto, invade las funciones del Poder Civil, contraría sus propósitos, esteriliza sus sacrificios, y es por lo tanto responsable ante la ley.

Así como el Poder Secular no puede prohibir, ni menos castigar, que los fieles oigan misa o se confiesen, así la Iglesia no puede prohibir, ni castigar con las penas a su alcance, que los ciudadanos manden sus hijos a la escuela, paguen sus contribuciones o se enrolen en la Guardia Nacional.

La doctrina contraria nos llevaría a las Bulas que condenaron la Independencia de América, y a la absurda y ridícula confusión de todos los poderes. Si la Iglesia puede prohibir y castigar la asistencia a las escuelas no regenteadas por los que no profesan la Religión Católica por qué no podrían los señores Obispos excomulgar a los que votasen por *herejes y masones* y no por la lista del Club Católico?

La legislación de las principales naciones católicas, la Francia, Italia, Austria, Bélgica, más previsora que la nuestra, prohíbe y castiga, con más o menos severidad, que la autoridad eclesiástica, invadiendo funciones ajenas a su ministerio, conmine con penas espirituales el ejercicio de los deberes del ciudadano para con su patria.

Ni hay leyes que rigen para la Justicia Federal, ni las que ha sancionado después el Congreso, prevén esta usurpación de facultades. No se sigue de ello, empero, que haya de quedar impune.

Los Tribunales Nacionales, dice el artículo 21 de la ley de Septiembre 14 de 1863, *procederán aplicando la Constitución como la Ley Suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancionare el Congreso y las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación.*

Ahora bien: entre estas leyes generales sobran disposiciones que prevén y castigan la intromisión de los eclesiásticos en los negocios y en las funciones civiles. Puede decirse, por el contrario, que materia alguna mereció mayor solicitud de los Reyes de España, según es fácil ver recorriendo sus Códigos y con especialidad la recopilación de las Indias.

En el Cap. 23 Lib. 4 de su Política Indiana, detalla Solórzano, con grande amplitud, abundando en citaciones de los más renombrados canonistas, las disposiciones que autorizaban el castigo y extrañamiento de los clérigos, seglares o regulares y de los mismos Prelados, no ya por el desconocimiento del Patronato, sino por el simple abuso en la predicación o por el mero desorden en las costumbres.

Una cédula de 1573 autoriza al Virrey del Perú para que expela del Reino los Clérigos y Religiosos díscolos e ingratos como está proveído, sin necesidad de Breve de S. S. y le aprueba haber expelido un Canónigo del Cuzco, y una dignidad de Popayan. Otra de 17 de Mayo de 1619 al mismo Virrey del Perú le previene que: *cuando los religiosos graves andan parciales e inquietos en materia de elecciones y no se halla otro remedio de componerlos y quitarlos, el más eficaz es sacarlos de sus Provincias o embarcarlos para España.* «Por ende mandamos, dice otra ley, que los Obispos y Abades u otras cualesquieras personas Eclesiásticas no sean osados de aquí adelante de escandalizar las ciudades, villas y lugares de nuestros Reinos, ni demostrar de bandos ni parcialidad, ni hagan ligas ni monopolios, ni para lo tal den consejo, ni ayuda, y si lo contrario hicieren, pierdan la naturaleza de nuestros Reinos, y así como ajenos de él, no gocen de sus temporalidades»—L. 13. tit. 3. Lib. 4; L. 5. tit. 14—Lib. 8. R. C.

No pretendo rijan estas disposiciones para con el Señor Obispo de Salta en todo su rigor.

Si exigimos de los Prelados respeto y obediencia a la Constitución, no podemos pretender que esa misma Constitución no les ampare. Sin necesidad de leyes Recopiladas ni de Indias, los Reyes absolutos de España podían extrañar de sus dominios a cualquiera de los que en ellos residían; particulares, eclesiásticos, prelados. El Presidente Constitucional de una República, salvo el caso excepcional del estado de sitio, no puede hacer salir de su territorio a ningún ciudadano —y un Obispo no ha dejado de serlo, ni siquiera sacarlo de sus Jueces naturales, por el cambio violento de domicilio, sin ultrapasarse sus facultades—.

Pero si la Constitución pone a cubierto a los Obispos de los medios con que los Reyes de España reprimían sus abusos, la Constitución no ha dejado a la sociedad sin defensa. El Presidente es el Jefe de la Administración, nombra y remueve sus empleados, según entienda convenir al mejor servicio público.

El elige y nombra a los Obispos; bajo este carácter y en cuanto son sostenidos por el Estado son ellos empleados de la Administración, según en otra oportunidad lo he demostrado, y el Presidente puede separarlo del Gobierno de su Diócesis, sin que ello importe despojarlo de su investidura canónica.

Y esto es desde luego lo que corresponde, como lo hizo V. E. en el caso del ex-Vicario Clara.

Deberá al mismo tiempo ordenar V. E. pasen estos antecedentes al Señor Procurador Fiscal de Salta para que deduzca contra S. S. I. la acusación a que haya lugar.

Las leyes que he recordado y muchísimas otras que puedo citar, condenan y castigan la ingerencia indebida de los ministros de la iglesia en las funciones civiles. Mientras no tengamos la legislación, cuya falta V. E. ha reconocido y ofrecido remediar, aquellas leyes son supletorias, para nuestros Tribunales, y deben ser aplicadas, *con la moderación de las penas que ha introducido la práctica*. Art. 93 de la ley que determina los crímenes cuyo juzgamiento corresponde a los Tribunales de la Nación.

Con estas dos medidas, habráse evitado que el Señor Obispo continúe en su prédica insensata.

Si, lo que no es de esperarse, el Señor Obispo, desconociendo la autoridad de V. E. pretendiera seguir ejerciendo las funciones de que ha sido separado o su permanencia en la Diócesis diera lugar a agitaciones que comprometiesen el orden público, habrá llegado el caso, entonces, de proceder a ulteriores de mayor rigor.

Por lo demás, Señor, estas dificultades no son nuevas, está a la orden del día en todas partes, y cumple a la delicada misión de la autoridad civil encararlas con la serenidad que requieren cuestiones que afectan los fundamentos del orden social y cuya duración no se alcanza a definir.

Asistimos a una de las grandes crisis, o si se quiere a la continuación de una de las más grandes crisis, por que ha pasado la religión que profesamos.

Cuatro veces, después que la Iglesia de Roma, se estableció definitivamente en la cristiandad del Occidente, se levantó la inteligencia humana para sacudir su dominación. Dos veces salió la Iglesia completamente victoriosa; dos veces llevando crueles heridas, pero conservando toda su vitalidad.

Tuvo lugar el primer levantamiento en el mediodía de la Francia, el siglo doce, en la región en que se hablaba la hermosa lengua de Hoc. Singularmente favorecidos por la naturaleza, habían prosperado estas Provincias, más que ninguna otra, y su comunicación frecuente con los Moros de España, representantes de la cultura de aquella época, introdujo en ellas el primer fermento de independencia que ahogó en sangre la espada de Monfort exterminando indistintamente a fieles y Albigenses, *dejando a Dios el cuidado de reconocer los suyos*.

Un siglo y medio después, el poder de los Papas había llegado a su apogeo. Los más grandes Emperadores de Alemania fueron impotentes para contener sus avances y sucumbieron en la lucha. La manera como la Iglesia abusó de su poder, trajo un cambio en la opinión, y la autoridad civil se robusteció y recuperó su ascendiente con extraordinaria rapidez. Felipe IV. de Francia déspota implacable y sin escrúpulos, avasalló al más altivo de los Papas, Bonifacio VIII. y lo humilló hasta el extremo de hacerlo morir literalmente de despecho y de ira. Vino entonces el gran Cisma de Occidente, que vió dos Papas; uno en Avignón, otro en

Roma. Pero este peligro pasó también; las frecuentes y crueles guerras internas en que se vieron envueltas todas las naciones, facilitaron el triunfo de Roma y el mundo católico quedó nuevamente unido bajo un solo Jefe.

La reforma del siglo XVI fué la tercera grande insurrección. Sabido es cómo después de treinta años de luchas sangrientas, una transacción separó de la dominación de Roma la mitad de las naciones que hasta entonces la habían reconocido.

Dos siglos después, la revolución francesa conmovió hasta en sus cimientos el edificio de la Religión y del Estado. En aquel cataclismo universal todo parecía a punto de desaparecer. Sus mismos excesos trajeron el restablecimiento y el triunfo de la Iglesia.

En vista de tan extraordinarias y admirables pruebas, se pregunta Macaulay, si una institución que ha visto el principio de todos los gobiernos y de todas las religiones que existen en el mundo, no estará destinada a ver el fin . . . *Y es posible que ella exista, —agrega— en todo su vigor, cuando algún viajero de Nueva Zelandia, en medio de una vasta soledad, llegue a detenerse en algún ancho derruido del Puente de Londres para tomar la vista de las ruinas de San Pablo.*

Pero el movimiento insurreccional que inició el 89 no ha terminado todavía; podría observarse. Los filósofos que lo prepararon no dirigieron tanto sus ataques al poder de Roma, cuanto al espíritu y a la esencia de la misma institución, y bajo esta nueva faz, la lucha continúa o se ha renovado con doble vigor.

Alarmada la iglesia con los progresos de la indiferencia y de la incredulidad, que caracterizan esta época, llamó a toda la Cristiandad para conjurar el peligro.

El Concilio ecuménico reunido en Roma, no ha encontrado, al parecer, otro medio, que declarar infalible al Papa y conferirle facultades ilimitadas, más amplias que las mismas que tuvo, o se abrogó en la Edad Media.

Las Naciones Católicas alarmadas, a su vez, se han apresurado a dictar en su defensa leyes severas que contengan a la Iglesia en sus pretensiones desmedidas a la dominación del orden civil.

He ahí pues, empeñada de nuevo la lucha entre la infalibilidad del Papa y el Syllabus por una parte y por otra la civilización y el progreso.

Si la Iglesia no modifica sus insostenibles pretensiones y su misma doctrina, no me parece dudoso el resultado final por más remoto que sea.

No dejaré de creer, dice Chateaubriand, en el nuevo prefacio a sus Estudios Históricos, *sino cuando se me haya demostrado que el Cristianismo es incompatible con la libertad. Entonces dejaré de considerar como verdadera una religión contraria a la dignidad del hombre. Pero no es este el carácter de la verdadera religión. El Cristianismo es una religión de libertad.* Y esta voz tan conocida y tan sincera, no puede ser sospechada por la Iglesia.

El día en que los padres se persuadan de que, para ser buenos católicos, necesitan retirar a sus hijos de la escuela, criarlos en la ignorancia, comprometer su porvenir, labrar en una palabra, su desgracia, ese día dejarán de creer.

El día en que la Sociedad se penetre de que, para conservar su fidelidad a la Iglesia, necesita renunciar a la libertad de pensar, a la libertad de imprenta, a todas las libertades, y todas las conquistas que constituyen la gloria de esta época, ese día dejará de creer.

Pero no. A despecho del Syllabus, de los Clara y de los Riso, el mundo moderno persevera en creer con el autor inmortal del «Genio del Cristianismo», que la Religión Cristiana no es avasallamiento de la inteligencia a un poder omnímodo, no es el sacrificio de la dignidad humana, ni menos.

A despecho de todo, la Sociedad moderna persiste en creer que la Religión de Cristo es una Religión de paz y libertad, y en esperar que, mejor inspirado el Jefe del Catolicismo en la enseñanza de su divino fundador, limitará su acción a la dirección de las conciencias, legando así su Apostolado a la duración indefinida de los tiempos.

Pero si, lo que no es de esperarse manteniendo las resoluciones del último Concilio, la Iglesia insistiera en declararse *irreconciliable con la civilización y el progreso*, el mundo actual que debe a la civilización y al progreso el mejoramiento de las costumbres:

y el bienestar de que, más que en ninguna otra era de la historia, goza en la actualidad, acabará por declararse a su vez irreconciliable con la Iglesia. La Religión Católica habrá dejado de ser entonces, según la expresión de un eminente pensador, *la religión del porvenir y de la humanidad viril*.

Es posible que el respeto por una tradición veinte veces secular conserve al Sucesor de San Pedro en la Silla del Apóstol hasta más allá de los tiempos, que ilumina en el porvenir la imaginación poética del grande historiador de nuestros días.

Si no media, empero, entre la libertad y la iglesia la armonía que deseaba Chateaubriand y desean con él todos aquellos cuyo espíritu no oscurece el fanatismo, es muy posible, sino seguro, que la palabra del Vicario de Cristo sólo resonaría en aquella remota eventualidad bajo las bóvedas desiertas del Vaticano, por cuanto no encontraría eco en un mundo desierto de creyentes.

Dejando al tiempo revelar a las remotas generaciones los secretos de esta lucha gigante y tradicional, la más grande de la historia, cumple a V. E., como representante del Poder Civil, defender sus intereses, no abandonando sus conquistas; conteniendo a la Iglesia en su espíritu invasor; y propendiendo, sobre todo, a evitar conflictos de este género, dolorosos siempre, por la mejora progresiva de nuestra legislación, en el sentido de deslindar con precisión los derechos y deberes de una y otra autoridad. — Octubre 20 de 1884.

Departamento de Culto. Tuvo resolución esta causa en Noviembre 3 de 1884.

Tomo 7, pág. 145. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Las dependencias administrativas pueden prohibir que sus empleados se dediquen a otras actividades fuera de las que por el cargo le incumben, si ello perjudica el fiel desempeño de este último, sin que se les pueda negar, empero, la facultad que la Ley reconoce a todos de comparecer en juicio, por sí o por sus parientes dentro de los grados permitidos.

El Juzgado de Paz de la Sección 5a., consulta si los empleados de Policía pueden ejercer la profesión de Procuradores

Señor Ministro:

La capacidad de las personas está regida por las leyes generales. Los empleados de Policía y cualesquiera otros, pueden comparecer en juicio, en representación de terceros, en los casos en que la Ley no se lo prohíbe.

La declaración que se pide de V. E. no podría ni ampliar ni limitar tal capacidad.

Puede si, la autoridad prohibir, administrativamente, que los que reciben una retribución por el empleo de su tiempo en el servicio público, no lo dividan con otras atenciones, por más que para ello tengan la más amplia capacidad legal.

Esto es lo que ha hecho el señor Jefe de Policía en el caso que motiva la consulta del señor Juez de Paz y es lo que le corresponde.

Por regla general, no puede permitirse que los empleados de la administración ocupen su tiempo en la gestión de asuntos ajenos: no se les puede negar, empero, la facultad que la Ley acuerda a los mismos Jueces, de comparecer en juicio, por sí o por parientes dentro de cierto grado.

Si como dice el señor Juez de Paz, los empleados de Policía abusan de su posición para embarazar el curso de la Justicia, los Jueces tienen en su jurisdicción propia medios sobrados de contenerles en el límite de sus deberes. — Noviembre 17 de 1884.

Departamento de Justicia. Tuvo resolución esta causa en Noviembre 26 de 1884.

Los agentes o consignatarios de industriales extranjeros no pueden pedir para sí el registro de la marca bajo la cual reciben los productos por cuanto, aunque el fabricante extranjero no haya solicitado su registro, deben ampararse los derechos de éste, previendo las dificultades que se suscitarían de concederse la marca al consignatario y que luego éste dejase de serlo.

Los Sres. Manuel Gamble y Cía., solicitan el registro de su marca de comercio para distinguir comestibles y bebidas

Señor Ministro:

Dos asuntos de este género vienen a mi memoria. Un industrial de esta plaza pidió y obtuvo el registro de la tan conocida marca de la «Regie» o Estanco de tabacos, de Francia. El Gobierno francés reclamó. Otro obtuvo el registro de la marca «Christy» de los afamados fabricantes de sombreros de Londres. Estos pidieron la anulación y se siguió con tal motivo un pleito cuyo resultado ignoro. En uno y otro caso mi opinión fué en favor de los dueños originarios. Me fundaba en que, arriba de las leyes, están la moral y la buena fe. El registro de una marca de reconocida notoriedad en el extranjero, tiene visiblemente por objeto, —no es posible desconocerlo— bien, aprovechar el crédito por ella adquirido, induciendo en error a los consumidores; bien, dictar condiciones al tenedor primitivo, impidiendo la introducción de sus artículos. Aunque la prohibición no estuviera en los términos de la ley, me ha parecido siempre que la autoridad no puede prestarse a engaño, o supercherías semejantes.

En el presente caso, por ejemplo los señores Gamble, agentes o consignatarios exclusivos de un fabricante extranjero, piden, para sí, el registro de la misma marca bajo la que le remite aquél sus productos. A primera vista parece esto inocente. Si el fabricante no pide registro por qué no lo han de pedir ellos? No estando registrada la marca, está libre, y la ley les autoriza a pedirla, como pudieron pedir otra cualquiera. ¿Pero, por qué no piden esa otra cualquiera? —Supongamos que el fabricante cambiara de consignatarios—.

¿No saldrían ellos entonces a impedirles el uso de la que fué antes suya? No digo que sea esta la intención de los expresados

señores Gamble. Pero la eventualidad cabe en lo posible, y es el deber de la autoridad velar por la claridad y pureza en todos los negocios, y no prestarse a transacciones dudosas, que dejan notoriamente el germen de pleitos y reclamaciones. Mientras tanto, ningún perjuicio se irroga a los interesados que tienen un campo indefinido para elegir la marca que quieran, sin ser precisamente aquella que saben que otros tienen acreditada con su trabajo.— Estudio. — Diciembre 26 de 1884.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad al dictamen. — Abril 13 de 1885.

Tomo 7, pág. 17. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Ministerio de Guerra y Marina, resolviendo que los empleados no tienen derecho a reclamar salarios de salvamento en casos de naufragios

Señor Ministro:

Recientemente en una consulta del Prefecto General de Marina, sobre el mismo asunto, he dicho a V. E. que la pretensión de los empleados del resguardo es de todo punto insostenible.

No pudiendo por un momento tolerarse que el móvil del interés se sustituya al sentimiento del deber, que debe ser la norma de todos los que forman parte de la administración. Sírvase V. E. ordenar al señor Prefecto General haga saber a los empleados que han pedido el embargo de los efectos salvados, desistan de sus pretensiones o abandonen sus puestos para que puedan así dedicarse con entera libertad a la noble ocupación de salvar la propiedad comprometida por los riesgos de mar y aspirar a la retribución consiguiente.

Se adopta como resolución lo dictaminado. — Enero 7 de 1885.

=====

- I. — De conformidad con la ley de 3 de noviembre de 1882, la escrituración de las ventas de tierras públicas en cualquier lugar en que éstas estén situadas debe hacerse en la Capital Federal por ante el Escribano Mayor de Gobierno.
- II. — Se considera conveniente que se modifique la ley en el sentido de que las escrituras de referencia una vez otorgadas, puedan ser protocolizadas en el lugar de radicación del bien.

El Gobernador del Chaco, sobre la conveniencia de que las escrituras de tierras se otorguen por ante el Escribano de la Gobernación

Señor Ministro:

Poco podría agregar a lo expuesto por la oficina central de Tierras y Colonias que encuentro exacto.

En materia de tierras públicas, puesto que el P. E. es el vendedor, la escrituración, debe hacerse en la Capital, y por el Escribano Mayor de Gobierno. Así lo ordena la ley, y no podía ordenar otra cosa. Esto mismo puede decirse de las solicitudes sobre arrendamiento y explotación de bosques. V. E. es quien puede y debe acordarlos, y en esta Capital y ante V. E. deben tramitar.

Con respecto a las enajenaciones particulares la misma oficina observa oportunamente que no puede limitarse el derecho del propietario. Ante cualquier escribano autorizado por la ley puede transferir sus derechos. Cuando las escrituras se extienden en país extranjero, la ley exige se protocolicen en el país donde está situado el bien raíz; es decir, se registran por orden del juez competente, en el protocolo de algún escribano de la localidad. Esto mismo se practica, o principia a practicarse, con respecto a las escrituras de bienes raíces de provincia a provincia y es de esperarse que la ley lo ordenará para los territorios nacionales, cuando el movimiento de la propiedad en ellos lo requiera. — Marzo 14 de 1885.

Departamento del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Abril 10 de 1885.

Corresponde que el Gobierno Argentino intervenga por la vía diplomática a favor de un ciudadano argentino que obtuvo de los Tribunales Chilenos sentencias que se reputan injustas.

D. M. Fernández por el ciudadano D. C. Valdez, entabla reclamo contra el Gobierno de Chile por secuestro de mercaderías

Señor Ministro:

D. Carmelo Valdez se queja, a mi juicio, con sobrada razón de los procedimientos, de las autoridades de Chile a su respecto.

En 1851 se dirigió a Valparaíso llevando 349 marcos de plata piña. Al pasar por Coquimbo, la Aduana de Serena decomisó estos 349 marcos, bajo el pretexto de que no se habían llenado ciertas formalidades. El señor Valdez ocurrió a los Tribunales, y venció en todos ellos. Desgraciadamente la sentencia del Tribunal Superior tardó más de tres meses en volver al Juzgado Inferior que había de hacer la entrega.

Mientras tanto sobrevino un movimiento subversivo, y los revolucionarios se apoderaron de las piñas. ¿Ocurre luego preguntar, por qué las ha de perder el señor Valdez? El fué indebidamente despojado de su propiedad, por otra parte, la demora de la devolución, cuando todo motivo para la retención había cesado, se prolonga de la manera más injustificable, dando lugar a lo que se llama *caso fortuito*. ¿Quién puede poner en duda que el que, por culpa o negligencia grave, da lugar a la pérdida de una cosa, debe responder de su valor? Pero hay todavía más, la conducta del depositario inmediato, el Jefe de la Aduana de Serena, es algo más que injustificable. A juzgar por los antecedentes agregados, todo induce a creer que procedía de acuerdo con los rebeldes. Así se desprende visiblemente del hecho de ponerse a salvo en un buque de guerra extranjero, al regreso de las tropas del Gobierno y de su destitución. Prescindiendo de esto, su conducta con respecto al depósito no tiene explicación. Había en el puerto una Fragata Inglesa. ¿Por qué no depositó en ella las piñas? Ante de la exigencia de los rebeldes, entregó los dineros públicos que tenía en su poder al Comandante Prieto que mandaba fuerzas del Gobierno ¿Por qué no entregó también las piñas? El puerto estaba

libre. ¿Por qué no mandó el depósito a la Capital? Esto es lo que, el menos avisado, el menos cuidadoso de sus intereses hubiera hecho, en presencia de un peligro, que no podía escapar a la más vulgar previsión. La incuria del depositario no puede, pues, ser más notoria, ni más incalificable.

Y no se detiene aquí la desgracia del señor Valdez. Así que vuelve el expediente al Juzgado Inferior, ocurre por sus piñas y por toda contestación se le dice que los revolucionarios se las habían llevado . . .

Demanda entonces al depositario, recorre todas las instancias y todos los Tribunales declaran a una que la pérdida es *caso fortuito y de fuerza mayor*; que los revolucionarios son los responsables.

Demanda en seguida al Jefe de la revolución, al mismo que ordenó la entrega y recibió las piñas; y los Tribunales con la misma uniformidad, le absuelven de la demanda ¿Quién debe responder entonces? Por más que se trate de cosas serias, viene a la memoria el cuento de la comedia. Ninguno tiene la culpa; pero el señor Valdez se queda sin sus piñas. Esto no es justo; ni es serio. Alguno ha de responder del despojo de lo ajeno. El Jefe rebelde es, naturalmente, el primero; pero, es el Gobierno, y no el despojado, por su culpa, el que debe perseguirle. La acción del señor Valdez es directa contra el Gobierno, que le despojó de su cosa; la retuvo indebidamente, y dió lugar a su pérdida, por la incuria o complicidad de sus subalternos.

Me anima la convicción de que llevado este asunto a conocimiento del Gobierno de Chile por el Ministro Argentino en aquella República, el señor Valdez obtendrá una fácil y equitativa reparación a los perjuicios considerables que se le han producido y de que con tanta razón se queja. — Marzo 16 de 1885.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Marzo 21 de 1885.

- I. — El Sub-Prefecto de Santo Tomé, carece de facultades para calificar de inconstitucional un impuesto establecido por la Provincia de Corrientes.
- II. — La inconstitucionalidad sólo puede declararla el Poder Judicial a requisición de los particulares interesados, en los casos concretos que sometan a juicio.—

El Receptor de rentas de Santo Tomé, sobre avance de atribuciones tomadas por un Jefe de Policía

Señor Ministro:

Si el impuesto de *Guía* que el Sub-Prefecto de Santo Tomé califica de *derecho a la exportación*, y denuncia como contrario a la Constitución, lo fuera en realidad, incumbe a los Tribunales Nacionales declararlo, no a V. E. Son los interesados, y no los agentes de la autoridad administrativa, los que deben llevar ante ellos su queja y pedir la exoneración competente.

Cada poder se mueve en la esfera de su acción que la Constitución le tiene demarcada, cuidando no invadir la ajena.

El Sub-Prefecto de Santo Tomé debe limitarse a exigir el exacto cumplimiento de las leyes nacionales, sin mezclarse en la manera como los Gobiernos de Provincia entienden sus derechos y deberes para con sus gobernados.

Debe cuidar que los ganados que se pasen a la República Oriental, sean con arreglo a lo que las leyes de la Nación al respecto hayan establecido, dejando a los particulares el derecho de garantizarse contra los impuestos no autorizados por la Constitución, con que las autoridades locales pretendieren gravarlos.

Sírvase V. E. hacerlo así saber al expresado Sub-Prefecto, previniéndole al mismo tiempo que, si la hostilidad de que se queja de parte de la autoridad local, continuase, y se tradujere en hechos ostensibles, lo ponga luego en conocimiento de sus superiores.

Mayo 2 de 1885.

Ministerio de Hacienda. — Se adopta como resolución el dictamen en Mayo 21 de 1885.

- I. — Es improcedente el pedido que se formula para contraer matrimonio ante un Juez de Paz, por cuanto el Código Civil sólo reputa válido el matrimonio religioso, celebrado según las leyes y ritos de la religión a que pertenecen los contrayentes.
- II. — El Código Civil no ha previsto el caso de que no exista en el país ministro de la religión a que pertenecen los contrayentes o que estos al no profesar ninguna, se vieran en la imposibilidad de contraer matrimonio, por lo que corresponde la sanción de una ley especial que determine la forma de celebrar estos matrimonios o lo que es mejor aún, el establecimiento del matrimonio civil que estaría conforme con la liberalidad de nuestra Constitución en materia de ideas religiosas.

D. Juan Mornhinweg y Da. Luisa Ochler, piden contrato civil de matrimonio

Señor Ministro:

D. Juan Mornhinweg y Da. Luisa Ochler, colonos de Olavarría, solicitan de V. E. *un decreto o autorización para contraer matrimonio con todos los efectos civiles, ante el Juez de Paz.*

La materia del matrimonio está regida por el Código Civil y no está en las facultades de V. E. alterar o modificar sus prescripciones.

El cap. 3 tit. 1. lib. 1, S. 2 estatuye que el matrimonio entre personas católicas debe celebrarse *según los cánones y solemnidades prescriptas por la Iglesia Católica.*

El siguiente declara válido el matrimonio celebrado entre católico y cristiano no católico, *siempre que sea autorizado por la Iglesia Católica y como fuese de práctica en la Iglesia de la comunión a que perteneciere el esposo no católico.*

Finalmente el 5.º declara asimismo válido el matrimonio celebrado *sin autorización de la Iglesia Católica* entre cristianos no católicos, o entre personas que no profesan el Cristianismo, *siempre que fuese celebrado en conformidad a las leyes del mismo Código y según las leyes y ritos de la Iglesia a que los contrayentes pertenecieren.*

Disposición alguna atribuye efectos civiles a la unión que se contrajere ante la autoridad civil, sin la intervención de los ritos de alguna religión, ni aun con respecto a los que no profesan religión de ningún género.

El art. 1219, en cuyo espíritu creen los interesados encontrar la autorización que solicitan, se refiere exclusivamente a la manera en que los contrayentes pueden disponer de sus bienes *antes del matrimonio*, pero en nada modifica los requisitos que el mismo Código ha juzgado indispensables para la validez de la unión conyugal.

Los vecinos de Olavarría que han ocurrido a V. E. se encuentran, pues, en una dificultad seria y, acaso, en una imposibilidad verdadera.

La Constitución garante *a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo Argentino*, la más amplia libertad de conciencia. A ninguno obliga a profesar una religión determinada, ni siquiera a profesar alguna.

La ley ha debido entonces preveer la situación en que se encuentran colocados los colonos referidos, es decir, en el caso de que profesando una religión que no sea católica, no exista en la República Ministro de su credo; o bien de que no profesando religión alguna, se vean en la imposibilidad de formar una familia que es el primero de todos los derechos que la Constitución garante igualmente a todos.

La inmigración de los pueblos del Norte principia a llegar en mayor número a nuestras playas y este caso, hoy aislado, bien puede reproducirse con frecuencia, y aunque fuera único, no puede menos de merecer la solicitud de los Poderes Públicos. Es uno de los caracteres distintivos de la civilización en nuestros días el respeto y la protección que la comunidad dispensa al derecho individual, esté representado por uno o por muchos de sus miembros.

La solución que luego ocurre es la sanción de una ley especial que determine la manera en que tales matrimonios deban celebrarse; o bien, y más naturalmente, el establecimiento del matrimonio civil en la forma que existe en la mayoría de las Naciones Católicas, y es de esperarse que exista entre nosotros antes de mucho..
Abril 11 de 1885.

Departamento de Justicia. — Resolución de Octubre 11 de 1885, ordenando se reserve en el archivo.

Tomo 7, pág. 188. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Se requiere la intervención y el consentimiento de la autoridad civil, para que un pueblo pueda constituirse en «parroquia», correspondiendo a la autoridad citada la fijación de sus límites.

**El Gobierno de Patagonia, consulta si debe aceptar como Cura
Párroco al Pbro. Tadeo Remoti nombrado por el
Arzobispado**

Señor Ministro.

Creo conveniente pida V. E. al Señor Arzobispo, se sirva transmitirle algunos antecedentes sobre el nombramiento del Presbítero Remoti, de que instruye el telegrama del señor Coronel Winter. — Febrero 18 de 1885.

Señor Ministro.

Dice S. S. Ilustrísima que ha hecho el nombramiento de Cura Párroco para Viedma, *según la ley y práctica que expuso a V. E. en su nota de 16 de Mayo último*; es decir, en calidad de interino y sin término. Sobre este particular, he dado a V. E. mi parecer extensamente en mi dictamen del corriente mes, y a él me refiero.

Pero hay otro punto a considerar en este caso.

Si el pueblo de Viedma ha sido constituido en parroquia, ha debido serlo y sus límites determinados con la intervención y asentimiento de la autoridad civil. —No creo deba V. E. hacer cuestión sobre este particular; justo es que aquellas apartadas regiones tengan su autoridad eclesiástica propia, pero, es justo también, que para ello se guarden las formalidades que la ley exige. Considero conveniente oiga V. E. nuevamente al señor Arzobispo a este respecto—. Abril 18 de 1885.

Departamento de Justicia y Culto. — Resolución de octubre 11 de 1885, ordenando se esté a lo que dispona el Decreto general sobre provisión de curatos.

Tomo 7, pág. 200. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los créditos de ciudadanos españoles, que no se hicieron efectivos, de conformidad al Tratado con España, sólo pierden el privilegio que el Tratado les acordaba, mas pueden ellos hacerse efectivos en virtud de la ley de septiembre de 1873, que ordenó la liquidación de todos los créditos provenientes de préstamos y auxilios durante la Guerra de la Independencia que no hubiesen sido satisfechos, pertenezcan a argentinos o españoles.

D. Lucía Lledós, reclama los auxilios prestados por su padre durante la Guerra de la Independencia

Señor Ministro:

Desde los primeros pasos de este expediente, vienen padeciendo una omisión sobre un punto esencial. Da. Lucía Lledós de Zavalla viene llamándose hija legítima del finado súbdito español D. José Lledós, sin más justificativos que su propia afirmación. Y aunque fuera tal hija legítima no se ha justificado tampoco que no existan otros con igual derecho. Falta la declaración de Juez competente. Mientras no se exhiba, no hay objeto en proseguir esta tramitación. Abril 24 de 1885.

Señor Ministro:

Las referencias de la Contaduría General en su informe de fs. 15 vta. son exactas. He pensado, y pienso, que la ley de septiembre de 1873, comprende todos los créditos provenientes de préstamos y auxilios durante la Guerra de la Independencia, que no hubiesen sido satisfechos, pertenezcan a argentinos o españoles.

He pensado, y pienso, que los que no se amparan al tratado con la España, no por eso han perdido su derecho. Han perdido, sin duda, el privilegio que les acordaba el tratado; pero, su crédito no ha sido prescrito; y, si una ley posterior, ordena la liquidación de la deuda general de la independencia, los acreedores

por este título que no ocurrieron en los términos del tratado, están perfectamente autorizados para acogerse a la nueva ley.

V. E. así lo ha resuelto en varios casos estableciendo una jurisprudencia amplia y generosa sobre la que no es necesario insistir.

La señora de Lledós se encuentra en este mismo caso; y puesto que ha justificado su personería, lo que corresponde es remitir estos antecedentes al Ministerio de Hacienda, a cuyo conocimiento corresponde, para que lo pase a la Comisión Liquidadora a los efectos a que haya lugar. Mayo 9 de 1885.

Señor Ministro:

El representante de la señora Lledós de Zavalla, insiste, sin razón, en considerar comprendido este crédito en el Tratado con España. Y lo que es más, insiste contrariando la voluntad de su misma representada.

En Marzo de 1875 se presentó la señora Lledós de Zavalla al Tesorero de la Provincia de San Juan, pidiendo testimonio de las partidas entregadas por su finado padre el súbdito español D. José Lledós *para los fines de la ley del Congreso fecha veintinueve de Setiembre de 1873 y al objeto de ocurrir a la Comisión Liquidadora de Buenos Aires f. 2.*

No es, pues, exacto que se haya amparado *en tiempo* del privilegio del Tratado, aun aceptada la extraordinaria latitud que se pretende dar a sus términos, sobre lo que mucho habría que decir.

Es recién en julio 31 del ppdo., cuando el apoderado de la señora Lledós inició el pensamiento de acogerse al Tratado pretendiendo anular la solicitud primitiva a que he hecho referencia.

Estando vencidos con exceso todos los términos, aún los más amplios en el concepto del señor Ovando, debe darse por feliz de que la ley del 73 haya abierto un nuevo camino a su representada, según ella lo comprendió desde el primer momento.

Insisto en que debe V. E. remitir este asunto al Ministerio de Hacienda. — Julio 3 de 1885.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Se adopta como resolución lo dictaminado. Julio 8 de 1885.

Es impropio la reclamación que presenta el Gobernador del Chaco contra el Juez de Sección de Corrientes por no prestar éste el amparo que le solicita el Comandante del Regimiento para sus soldados, que afirma son agredidos por «la horda de forajidos que sirven de peones en los obrajes del Chaco» por cuanto la Justicia Federal no procede de oficio, sino en los casos concretos que sean elevados a su conocimiento por los mismos damnificados, o por los representantes de la acción pública.

**El Gobernador del Chaco, formula queja contra el Juez de
Sección de Corrientes por sucesos ocurridos en la
Colonia Resistencia**

Señor Ministro:

No encuentro otra cosa que aconsejar a V. E. en este caso, sino es que remita estas actuaciones al archivo.

El señor Comandante Figueroa se queja de los procedimientos del señor Juez de Sección de Corrientes, y este funcionario acusa, a su vez, al señor Comandante de no dar cumplimiento a sus mandatos y de desconocer el mecanismo de nuestras instituciones.

Ni los cargos de denegación o retardación de justicia son precisos, ni menos de naturaleza tal que pudieran dar lugar a acusación.

El Comandante Figueroa dice que el señor Juez no ampara a los soldados de su Regimiento contra las agresiones *de la horda de forajidos que sirven de peones en los obrajes del Chaco*. Es bien sabido que la Justicia Federal no procede de oficio. El señor Juez sólo ha podido intervenir en aquellos casos que hayan sido llevados a su conocimiento, por los mismos damnificados, o por los representantes de la acción pública. Si en alguno de ellos no hacía o retardaba la justicia, ha debido ocurrir a la Corte Suprema, no a V. E., ejercitando el recurso de apelación o de queja por la injustificada demora. La única intervención de V. E. en tales casos, sería llevar los hechos al conocimiento de la Cámara de D. D. para que formulara la acusación ante el Senado, si a ello encontrase haber lugar. En el presente caso esta extremidad está fuera de toda discusión. No sólo los hechos denunciados carecen de precisión y gravedad, sino que el señor Juez, explicando

satisfactoriamente sus procederes, ha desvanecido los cargos que se habían formulado contra él.

En la fiel observancia de las leyes que reglamentan los derechos y deberes de las diversas autoridades en que está dividido el ejercicio de la Soberanía, encontrarán el señor Comandante y el señor Juez, medios claros y fáciles de marchar en la armonía que fuera de desear no se turbara nunca.

Al ordenar el archivo de estas actuaciones en que se ha perdido estérilmente tanto tiempo, esta fiel observancia, es lo único que puede V. E. encarecer a los expresados, señor Juez de Sección y el señor Comandante con especialidad al último. — julio 4 de 1885.

Departamento de Justicia. — Resolución de conformidad al dictamen de Julio 23 de 1885.

Tomo 7, pág. 141. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que se acuerde el indulto a un penado que lo solicita fundándose en que es excesiva la pena de 2 años a que ha sido condenado por el delito de hurto, que impropiamente ha sido calificado de robo, por cuanto sólo ha cumplido cuarenta y tres días de prisión preventiva y luego obtenido excarcelación bajo fianza, de donde resulta no haber cumplido ni siquiera el mínimo de pena que le correspondería aunque el delito hubiera sido bien calificado.

El defensor de Santiago Rittore, pide para éste gracia

Señor Ministro:

De los informes producidos se desprende que el procesado Santiago Rittore, cuya gracia se solicita, sólo ha sufrido cuarenta y tres días de prisión preventiva, por haber obtenido su excarcelación bajo fianza.

Se hace valer en su favor que la pena de dos años de prisión a que ha sido condenado, es excesiva y fuera de proporción con la escasa gravedad del delito que impropiamente se ha clasificado de robo, siendo un simple hurto.

Pero la misma pena del hurto es mayor que aquellos cuarenta y tres días de una prisión o detención, que no puede tampoco considerarse como un castigo.

Resultará entonces que a pretexto del exceso de la pena, no habría sufrido el condenado ninguna, ni aún siquiera el mínimum que en el caso más favorable correspondiera a su culpa.

No veo razón alguna que autorice o justifique, por ahora, la remisión que se pide a V. E. — Julio 13 de 1885.

Departamento de Justicia. — Resolución de conformidad al dictamen. — Julio 23 de 1885.

Tomo 7, pág. 282. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

En el reclamo que formula la Prefectura Marítima y la Aduana sobre jurisdicción en la guarda y custodia de embarcaciones menores abandonadas, corresponde se dé la razón a la primera, por cuanto la Aduana sólo tiene jurisdicción en todos aquellos casos en que las mercaderías o los objetos de cualquier clase que sean, deban pagar derechos, cuando no se adeuden como en el presente caso, la única autoridad llamada a intervenir es la Prefectura Marítima.

Competencia de jurisdicción en los casos de despojo provenientes de naufragios

Señor Ministro:

Para el mejor esclarecimiento de este asunto sírvase V. E. ordenar que la Prefectura General agregue en copia ú original, —alguno de los avisos—, como si dijéramos el cuerpo del delito, a que se refiere en su comunicación de fs. 1 volviendo todo en seguida a mi despacho. — Abril 20 de 1885.

Señor Ministro:

La Dirección General de Rentas deslinda de una manera clara y acabada el punto que ha dado lugar a este ligero conflicto de jurisdicciones.

Las autoridades dependientes de la Aduana tienen por misión la fiscalización y percepción de la renta y deben intervenir en to-

dos aquellos casos en que las mercaderías o los objetos de cualquier clase que sean, deban satisfacer derechos.

Cuando no los adeudan como en el caso de embarcaciones menores abandonadas que motiva la reclamación del señor Prefecto General, es la autoridad marítima la única llamada a intervenir.

Sírvase V. E. declararlo, recomendando a una y otra autoridad la fiel observancia de las disposiciones vigentes sobre el particular. — Julio 14 de 1885.

Ministerio de Hacienda. — Se adopta como resolución el dictamen. — Septiembre 4 de 1885.

Tomo 7, pág. 105. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I. — Un privilegio otorgado por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires con anterioridad a la federalización del Municipio de la Capital, debe considerarse subsistente dentro del mismo, una vez federalizado, por cuanto al pasar la ciudad a depender del Gobierno Central lo fué con todos los derechos y obligaciones que en ella existían en virtud de leyes y concesiones de las autoridades cedentes.

II. — No corresponde al P. E. el hacer respetar estos privilegios, sino al Poder Judicial ante quien deben ocurrir los interesados si consideran lesionados sus derechos.

J. M. Palma, pide revalidación de un privilegio otorgado por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, para la elaboración de yerba en rama

Señor Ministro:

En un caso reciente, en la revalidación del contrato para la construcción del malecón del Paseo de Julio he tenido la oportunidad de decir a V. E. que, al pasar el municipio de la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno General, con arreglo a un principio de derecho universal, pasó con todos los derechos y obligaciones que en él pudieran existir, en virtud de leyes y concesiones de las autoridades que lo cedían.

Este es el caso en que se encuentra el señor Palma.

Fuéle otorgado, según resulta de los documentos que ha exhibido, por la Legislatura Provincial un privilegio para la elaboración de yerba en rama por el término de 10 años, que aún no ha vencido.

El Gobierno de Buenos Aires, tenía sin duda alguna, la facultad de acordar tal privilegio. *Las Provincias pueden, dice el art. 107 de la Constitución, promover la introducción y establecimiento de nuevas industrias por leyes protectoras a estos fines, y con sus recursos propios».*

El señor Palma tiene, por consiguiente, un derecho legítimamente adquirido a hacer respetar su privilegio dentro de los límites del municipio, mientras su existencia no haya terminado por la expiración del tiempo.

Pero no es a V. E. a quien incumbe hacer esta declaración, ni menos, la revalidación que se solicita.

Si el señor Palma, encuentra invadidos o menoscabados los derechos que de su privilegio arrancan, es a la Justicia Nacional a la que debe ocurrir, por la reparación que le sea debida.

Del mismo modo, si alguno pretendiera que el privilegio en cuestión no es legítimo, o que ha caducado, es a los Tribunales de la Nación, a los que debe ocurrir, para que no se le moleste en el ejercicio de una industria que resulta *libre y permitida a todos*.

Creo así, que debe V. E. limitarse a volver al señor Palma sus documentos para que de ellos haga el uso que más viera convenirle. — Julio 23 de 1885.

Ministerio del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Agosto 1.º de 1885.

Tomo 7, pág. 248. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Una concesión de tierras en Misiones hecha por el Gobierno de la Provincia de Corrientes en ejecución de una ley provincial, se considera suficiente título y debe por ello ser revalidado, aunque la ley nacional que incorporó dicho territorio al dominio general no lo declare así.
- II. — Los pobladores desalojados por la revalidación del título, tienen derecho a ubicar igual o mayor extensión. —según la localidad—, que la que han poseído, en tierras públicas libres en el mismo Territorio de Misiones, fijándoseles un plazo perentorio para la presentación de las respectivas solicitudes.

D. Juan W. Gelling, pide revalidación del título de propiedad de un campo en Misiones

Señor Ministro:

No habiendo sido posible arbitrar el medio conciliatorio que hubiera sido de desear para armonizar todos los intereses, debo expedirme definitivamente, en cuanto al fondo de los derechos de cada uno.

No puedo desconocer desde luego, que el señor Gelling tiene perfecto derecho a ser amparado en su título.

El obtuvo (bona fide) una concesión del Gobierno de la Provincia de Corrientes en ejecución de una ley de su Legislatura; ha llenado las condiciones requeridas para perfeccionar su título y aunque la ley del Congreso, que incorporó el Territorio de Misiones al dominio general no lo declaró así, bastaría a su propósito el principio de legislación universal que en tales casos rige.

A la vez, consecuente con los sentimientos que me han guiado siempre en casos de esta naturaleza, no puedo menos de interesarme en favor de los que, en medio del desamparo general, a riesgo de sus intereses y de su misma vida, han llevado una manifestación de la civilización al medio del desierto, por deficiente que sea.

Pienso que, siguiendo precedentes ya establecidos, debe V. E. acordar a los pobladores desalojados la revalidación del título del señor Gelling, el derecho a ubicar igual o doble extensión, según la localidad, que la que han poseído y tienen que abandonar, en terrenos de propiedad pública, libres en el mismo territorio de Misiones.

Si V. E. aceptase este temperamento que considero de justicia y perfectamente autorizado, convendría fijar un plazo de seis meses, por ejemplo, dentro del cual debieran presentar sus solicitudes los interesados. — Julio 25 de 1885.

Ministerio del Interior. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Septiembre de 1885.

Tomo 6, pág. 352. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No corresponde reclamar ante el P. E. por la negativa del Jefe de la Oficina Central de Telégrafos, a transmitir un telegrama, por cuanto de conformidad con el art. 30 de la ley de Telégrafos, el ofendido por la negativa tiene recurso por ante la Dirección General, Jefes de Policía o la autoridad administrativa superior, según el lugar en que ocurra el incidente.
- II. — Deben distinguirse dos situaciones con respecto a los telegramas que la ley de Correos y Telégrafos prohíbe su despacho: 1.º) la que prevee el art. 30, debiendo retenerse simplemente su transmisión por inconvenientes o perjudiciales, sin que configuren un hecho ilícito; tales son los despachos llamados políticos, que transmiten noticias falsas o exageradas de acontecimientos relacionados con la política, con el propósito de estimular la acción de los partidos. La ley ha dejado como facultad exclusiva de la Dirección General el dar curso o no a estos despachos.—2.º) la que prevee el art. 57, que configura a todas luces un hecho ilícito, por lo que no solamente debe retenerse su despacho, sino que además puede la Dirección General imponer un castigo a sus autores.

**El Corresponsal de la «Esperanza», sobre un telegrama noticioso
que se negó a transmitir el Jefe de la Oficina Central
de Telégrafos**

Señor Ministro:

El Capítulo 3.º de la ley de la materia determina las relaciones de los Telégrafos Nacionales para con los particulares.

Las oficinas telegráficas no pueden negarse a transmitir los despachos que les fuesen entregados, salvo en los casos que el artículo 30 especifica.

El empleado que recibe un despacho a que juzga no debe dar curso, lo comunica al jefe de la oficina, y éste rehusa o admite su transmisión.

Si el interesado se considera ofendido por la negativa, dice aquél artículo, podrá apelar por ante la Dirección General en la Capital; o por ante los Jefes de Policía en las ciudades capitales; o por ante la autoridad administrativa superior del lugar en que el incidente se hubiere producido.

La resolución de estos funcionarios será inapelable, dice al final el artículo anterior.

Como se ve, V. E. nada tiene que ver en estos casos, ni es posible que su atención fuera distraída, a cada negativa, justa o injusta, de un telegrafista; salvo que, como Jefe de la Administración, fuere llamado V. E. a reprimir vicios o errores manifiestos y repetidos que acusaran mala comportamiento o negligencia, que fuera forzoso hacer cesar.

El procedimiento indicado por las disposiciones a que he hecho referencia, es el que el señor Nevares ha debido seguir.

Al terminar observaré, que el artículo 57 en que el señor Director General cree encontrar justificada la negativa de que el señor Nevares se queja, no se refiere a casos de esta naturaleza, sino a otros de mayor gravedad, que la Ley castiga, no ya con falta de transmisión, sino con prisión y multa. — Agosto 14 de 1885.

Señor Ministro:

Basta recorrer la ley de la materia para percibir que, entre los telegramas cuya transmisión no autoriza, unos deben ser retenidos simplemente; y otros castigados a la vez, por la misma Dirección General, es decir, *administrativamente*. Quiere esto decir que unos despachos no deben ser transmitidos, por inconvenientes o perjudiciales, aunque no importen un hecho ilícito, y otros, por llevar en sí el principio de un delito, que los sujeta al mismo tiempo, y sin trámite, a un ligero castigo.

Caen bajo la primera categoría los despachos que detalla el artículo 30.

Aquellos en que se incitase a la traición, o a la rebelión o sedición contra las autoridades constituídas; los que fuesen contrarios a la moral, o que tuviesen por objeto cometer algún delito o entorpecer la acción de la justicia.

Este artículo se refiere notoriamente a los despachos llamados políticos, a aquellos que transmiten noticias exageradas o falsas de los acontecimientos relacionados con la política, con el propósito de estimular la acción de los partidos. La ley ha dejado a la discreción exclusiva de la Dirección General, dar curso a estos despachos, pesando con imparcialidad y madurez todas las circunstancias del caso.

Es también claro, que, si estos despachos llevasen el propósito manifiesto de incitar o cooperar a la traición, a la sedición o a la perpetración de un crimen cualquiera, constituiría, además, un delito, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios, a los que debieran pasar.

A la segunda categoría corresponden los despachos a que se refiere el artículo 57: *los despachos falsos o fraguados a sabiendas con el fin de perjudicar, defraudar o engañar alguna persona o al público.*

Tal sería por ejemplo el despacho en que se transmitiera la noticia de haber estallado una revolución en plena paz; o de haber quebrado tal o cual Banco, sin más objeto que favorecer especulaciones de Bolsa.

Un despacho semejante, no sólo debe ser retenido, sino que, importando a todas luces un delito, justo es sea castigado breve y sumariamente por el mismo instrumento que se pretende hacer servir para su perpetración. La facultad de imponer este castigo, dentro de ciertos límites, que la ley concede al Director General de Correos y Telégrafos, tiene así, en esto su explicación natural y lógica.

El despacho del señor Nevares pertenece, a mi juicio, a la primera categoría de que he hecho mérito.

Limitábase a transmitir noticias de un movimiento, que en realidad había tenido lugar.

Los detalles que daba los había transmitido ya el mismo telégrafo que rehusaba recibirlo, y los había publicado la prensa diaria.

Su objeto era notoriamente noticioso, y no favorecer propósitos subversivos. Las circunstancias porque a la sazón pasaba la República, no eran tales, por otra parte, que hicieran temer efecto

alguno pernicioso en la apartada Provincia de Salta, que ningún punto de contacto tiene con la de Corrientes.

Que la misma Dirección General así lo comprendió, resulta manifiesto en el hecho de limitarse a la retención, prescindiendo de la pena con que el artículo que invoca como fundamento de su resolución castiga la intención dañada de transmitir noticias falsas o fraguadas a sabiendas.

Insisto por lo expuesto en lo que dije antes de ahora.

El despacho del señor Nevares no se encuentra en el caso del artículo 57, como ha pretendido la Dirección General. Era un simple despacho noticioso, o político, que estaba en las atribuciones de la misma Dirección General no transmitir, si lo consideraba perjudicial o inconveniente, dentro de los términos del artículo 30.

Explicada la inteligencia que a mi juicio debe darse a los artículos que motivan estas actuaciones, diré para terminar, que sólo en presencia de repetidos casos en que la Dirección General usara indebida y desacertadamente de la facultad que la ley le confiere sobre este particular, podría V. E. intervenir en asuntos de esta naturaleza, en defensa de uno de los más preciosos derechos del ciudadano en los tiempos en que nos ha tocado vivir.

Reconociendo gustoso que estamos lejos de esta extremidad, me limitaré a pedir a V. E. se sirva prevenir a la Dirección General recomiende a los empleados de su dependencia la estricta observancia de lo que para casos de esta naturaleza estatuye la ley de la materia, interpretándola con discreción y liberalidad.
— Enero 12 de 1886.

Recayó en abril 26 de 1886 la resolución: «Resérvese en el archivo».

No corresponde que el P. E. dé carácter oficial a los títulos de «Peritos Mercantiles» expedidos por un Colegio particular, por cuanto dichos títulos deben emanar de la Facultad de Ciencias Exactas, ante la que pueden rendir exámenes libres los alumnos del Colegio, para optar al título con el carácter mencionado.

D. Adolfo Negrotto, director del «Colegio del Comercio», pide se les conceda a los alumnos el título de Peritos Mercantiles

Señor Ministro:

Por más simpatía que, en un pueblo esencialmente comercial, inspire la dirección que el señor Negrotto imprime a los estudios del Colegio que dirige con tanto acierto, no veo como pudiera V. E. dar el valor académico que solicita para sus exámenes, al objeto de que los diplomas o certificados que él expida revistan la fuerza de un título profesional que habilite al ejercicio de los oficios mercantiles.

Las diversas Facultades que forman nuestro sistema Universitario expiden títulos de suficiencia en los ramos del saber que abrazan sus estudios. La de Ciencias Exactas incluye, sin duda alguna, la preparación principal que requieren el ejercicio de la profesión de Peritos Contadores, tenedores de libros, etc., etc. dejando a estudios especiales su complemento.

Expedir este diploma general de suficiencia en materia de contabilidad, es todo lo que, por ahora, puede hacer la Facultad respectiva, y a ésto por medio de exámenes libres, pueden aspirar los discípulos del señor Negrotto, a la par de los de todos los demás Colegios.

Creo, por esto, con el señor Inspector de Colegios Nacionales, que no puede V. E. acceder a lo que el expresado señor Negrotto solicita. — Agosto 17 de 1885.

Departamento de Instrucción Pública. — Resolución de conformidad al dictamen. — Agosto 24 de 1885.

- I. — No es necesario ocurrir al Congreso para solicitar autorización legal a los efectos de adquirir terrenos para ensanche de la Estación Retiro de la Empresa del Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario por cuanto las leyes que autorizaron la construcción de la línea, otorgaron a la Empresa la facultad de expropiar todos los que le fueran necesarios.
- II. — El procedimiento a seguir es el de promover el correspondiente juicio ante el Juez de Sección competente.

La Empresa del Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario, sobre compra de un terreno baldío para ensanchar su estación en el Retiro

Señor Ministro:

No veo la necesidad de ocurrir al Congreso.

Las leyes que autorizaron la construcción del Ferro Carril de esta Capital a Campana; de Campana al Rosario y del Rosario a Sunchales, llevan todas la autorización de expropiar los terrenos necesarios, sin la que no sería posible construir camino alguno. En ejercicio de esta autorización, la empresa puede, a mi juicio, expropiar tanto los terrenos que necesite para ensanche de su estación en el Retiro, como los que se encuentren al fin de la línea. En uno y otro caso, no son menos necesarios.

Se observará, tal vez, que la línea a Campana está terminada, y que aquella autorización de que ya hizo uso la empresa, ha concluído.

Es fácil contestar que el camino a Campana, al Rosario y a Sunchales, es uno sólo, es siempre el mismo, que, si ahora se detiene en Sunchales, es posible continúe después a Tucumán y a Bolivia.

Y aún limitada la facultad de expropiar a la concesión última, resultaría siempre que, si el ensanche de la Estación del Retiro, era indispensable para su funcionamiento regular aquella autorización sería bastante.

Por lo demás, el procedimiento a seguir es a mi juicio, el mismo indicado en igual expropiación de terrenos en el Rosario; es decir, remitir estos antecedentes al Juzgado de Sección de esta Capital para que ante él se promueva el juicio competente.

La empresa pide al mismo tiempo se le ponga en posesión inmediata del terreno. Pienso también, como en el caso recordado, que no hay razón alguna que lo impida, considerando el objeto de tan grande interés público, y la seguridad de que oportunamente se hará el abono del terreno expropiado. — Septiembre 25 de 1885.

Departamento del Interior. — Recayó resolución en esta causa en agosto 19 de 1887.

Tomo 7, pág. 309. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La facultad de indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, que la Constitución confiere al Presidente, es un derecho amplio que no reconoce más límite que el que la misma Constitución establece o sea los casos de juicios políticos.
- II. — Por lo mismo que la facultad de indultar es ilimitada, debe ejercerse con la mayor prudencia, exclusivamente cuando intervienen circunstancias excepcionales, grandes méritos o servicios, acontecimientos públicos extraordinarios, etc., etc.
- III. — La ancianidad y el haber sido inducido por influencias perniciosas a la comisión del delito, no son causales suficientes para el otorgamiento del indulto.

Juana Damiana Zelarrayán, procesada, pide gracia

Señor Ministro:

En otra oportunidad he manifestado a V. E. por extenso mi parecer acerca del derecho de gracia que la Constitución acuerda al Jefe del Estado.

He pensado y pienso que este derecho no reconoce más límite que aquel que la Constitución ha marcado a su ejercicio. Fuera de los casos de acusación por la Cámara de Diputados, el Presidente puede, en mi opinión, indultar o conmutar las penas, por delitos sujetos a la jurisdicción federal, sin excepción alguna, total o parcialmente; antes o después del proceso.

En esta parte estoy de perfecto acuerdo con el señor Juez de Sección. No lo estoy en cuanto a la aplicación de tan augusta prerrogativa al presente caso.

Cuanto más amplia es la confianza, mayor cordura exige su ejercicio, es un principio bien conocido y de él lógicamente se desprende que por lo mismo que la facultad de perdonar es ilimitada, con mayor prudencia debe ser ejercida; sólo y exclusivamente cuando intervienen circunstancias excepcionales, grandes méritos o servicios; acontecimientos públicos extraordinarios, etc. etc.

La recurrente no se encuentra en estas condiciones, sensible me es decirlo.

Por una sucesión de hechos que dejaba lugar a la meditación y al arrepentimiento, presentando testigos que no decían verdad o a quienes ella conscientemente la ocultaba, ha suplantado la señora Zelarrayán su carácter de viuda por el de soltera, obteniendo por este medio ilícito la abultada suma de quince mil pesos nacionales y seguiría hasta hoy percibiendo la pensión usurpada, a no haber aparecido la partida de matrimonio que vino a desbaratar la trama inícuca urdida contra los dineros de la Nación.

La única atenuación que hace valer en su favor, es su ancianidad y el haber sido inducida por influencias perniciosas que dice, abusaron de la debilidad de una mujer ignorante y desamparada. La ancianidad puede ser un motivo para aminorar la pena, no para remitirla por completo.

Es muy posible y aun más muy probable, que haya cedido esta señora, según afirma, a sugerencias de personas interesadas en la explotación; pero esto no la exonera tampoco de responsabilidad, si bien en algo puede atenuarla.

Y es aquí la oportunidad de observar que esta usurpación de un estado civil supuesto, reviste cierta gravedad, por la facilidad con que puede ser sorprendida la confianza de los Poderes Públicos.

Después de la guerra de Secesión, los Estados Unidos quedaron con una lista de pensiones enormes; no menos de sesenta millones de duros. Durante la segunda presidencia del General Grant, la prensa denunció grandes abusos mediante la formación de un *ring*, un complot o camarilla. Nombróse una comisión investigadora y vino a descubrirse que figuraban como pensionistas, viudas que tenían sus maridos vivos, huérfanas cuyos padres gozaban de la más

perfecta salud, mancos y cojos, con sus pies y sus manos sin que les faltara una uña. El presupuesto americano fué aliviado del peso de unos cuantos millones, que no iban en su totalidad, bien se comprende, a los supuestos pensionistas. No es fácil que un abuso semejante tome grandes proporciones en una comunidad pequeña como la nuestra: que es posible, ha venido a demostrarlo la señora Zelarrayán. No veo consideración alguna que aconseje la gracia que solicita. Todavía, si hubiera devuelto, si hubiera ofrecido devolver las cantidades que indebidamente ha recibido habría lugar para tenerle en cuenta la suerte desgraciada de su finado padre y las demás consideraciones que hace valer. Pretender quedar con el fruto de la usurpación para seguir disfrutándola en libertad, después de unos pocos meses de prisión, es ir demasiado lejos.

Por doloroso que sea, pido V. E. deje se cumpla la acción de la justicia. — Septiembre 25 de 1885.

Departamento de Justicia. — Resolución en contra de lo dictaminado en Noviembre 10 de 1885.

Tomo 7, pág. 230. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiendo la Ley de 18 de Septiembre de 1872, en su art. 2 inc. 4, declarado nacionales a los efectos de la inspección y vigilancia por parte de nuestras autoridades, a los FF. CC. que recibieran una «prima» cualquiera del Gobierno Nacional y por su parte, el art. 56 de la misma ley exonera de derechos de importación a todos los materiales necesarios para la construcción y explotación de FF. CC. Nacionales, no debe considerarse que esta exoneración equivale a la «prima» de que habla el inc. 4. art. 2.º y en consecuencia considerar que todos los FF. CC. que se acojan a los beneficios del art. 56 quedan sometidos por ello a la inspección y vigilancia de las autoridades nacionales.

La «prima» a que se refiere el inc. 4, art. 2.º de la ley citada, no puede entenderse más que como subvenciones especiales que acuerda el Gobierno a determinados FF. CC.

El Departamento de Ingenieros, sobre exoneración de derechos de importación a los materiales destinados a ferrocarriles garantidos

Señor Ministro:

Difiero sustancialmente de la opinión del señor Asesor del Departamento de Ingenieros.

La exoneración de derechos que el artículo 56 acuerda a los materiales para la construcción de Ferrocarriles está, a mi juicio, muy lejos de ser la *prima* a que se refiere el inciso 4.º artículo 2.º de la ley de la materia.

Por esta *prima* no puede entenderse otra cosa, que una subvención especial, como las 500 £ por milla que dió la Provincia de Buenos Aires, al Ferrocarril del Sud; la remisión de lo que el de Campana debía devolver al Gobierno Nacional, para su continuación hasta el Rosario, etc.

La exoneración de derechos, que posteriormente ha hecho extensiva el Congreso a los tranways, a los telégrafos, a las maquinarias para nuevas industrias, es una liberalidad con que ha entendido promover los intereses generales del país, sin tener por ello en vista exigir obligación o dependencia alguna para con la Nación, de parte de aquellos que la recibían. De otra manera, la ley no hubiera dejado de consignarla con claridad, para que las empresas que de aquel beneficio aprovecharan supieran la obligación que

por ello contraían. Y es bien seguro que, a ser éste el alcance de la exoneración, algunas empresas no la hubieran aceptado.

Pienso que no debe V. E. hacer innovación alguna con respecto a los caminos que no hubiesen recibido la prima antes mencionada, *en el sentido* en que lo dejo expresado; aunque hubiesen aprovechado de la exoneración acordada, a todos, así a los que reciben, como a los que no reciben la prima en cuestión. — Octubre 9 de 1885.

Resolución ordenando el archivo. — Diciembre 12 de 1885.

Tomo 7, pág. 206. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde que se acuerde el indulto a favor de un reo, que absuelto en primera instancia fué condenado por la Cámara en lo Criminal, la que tomó conocimiento de la causa no por apelación, sino por habersele remitido el expediente «en consulta».
- II. — «La consulta» de las antiguas leyes españolas, es un procedimiento no legislado por nuestras leyes procesales. El art. 72 de la ley de Organización de los Tribunales de la Capital, determina el conocimiento de la Cámara en última instancia de los recursos de apelación y para nada se refiere a las «consultas» por lo que se la considera excluida de los términos de la ley.

El Defensor de Agustín Trucco, pide para éste gracia

Señor Ministro:

Concurren a mi juicio, en el presente caso, las circunstancias *especiales* que, según en otras ocasiones lo he manifestado, sólo pueden autorizar el ejercicio de la prerrogativa augusta que la Constitución confiere al Jefe del Estado.

Expondré los hechos de la manera más sucinta posible.

A instancia de la señora Presidenta de la Sociedad de Beneficencia, el Juzgado del Crimen de esta Capital inició causa contra el recurrente Agustín Trucco, sospechoso de un atentado contra el pudor, en la persona de una menor de siete años a cargo de la

expresada Sociedad y que Trucco y su esposa habían adoptado y cuidaban como hija.

Recibidas las declaraciones y practicados los reconocimientos del caso el Agente Fiscal no encontró mérito para la acusación y pidió la libertad del procesado. El señor Juez así lo decretó, remitiendo en *consulta* su sentencia a la Excm. Cámara de Apelaciones en lo Criminal.

Corrió ella vista a su Fiscal General, Doctor Cortés, y este alto funcionario no encontró tampoco base jurídica al proceso por la deficiencia de prueba.

No obstante todo esto, la Excm. Cámara, sin más trámite revoca la sentencia y condena a Trucco a seis años de Penitenciaría.

No seguiré al Defensor en su extensa argumentación para probar la injusticia de esta condena. Admito que la Excm. Cámara ha pesado en su elevado criterio, con acierto y madurez los reconocimientos de los Doctores D. J. M. Bosch y Don Julián M. Fernández, que no encontraron señales del delito, en oposición al parecer contrario del Doctor Blanco Villalta. Admito también que este alto Tribunal ha tenido en cuenta, al apreciar las declaraciones, de la esposa de Trucco y de la menor, el crédito que ellas merecen, por la corta edad de una y el interés de la otra en poner la razón de su parte en la causa de divorcio que había promovido. Admito, en una palabra, que la sentencia de la Cámara sea la expresión de la Justicia y que jurídicamente es irrevocable.

Encuentro, sin embargo, dos errores sustanciales en el procedimiento que autorizan, a mi juicio, la gracia que se solicita.

En primer lugar, puede bien decirse que el condenado no ha gozado de la plenitud de la defensa que la Constitución garantiza a todos.

En 1.^a instancia el Procurador Fiscal no formuló acusación, y la sentencia fué absolutoria: en la segunda, el Fiscal General nada encontró tampoco de qué hacer cargo al procesado. La primera palabra que él oyó en su contra, fué la que a la vez lo condenada. Puede calcularse cuál sería la sorpresa. Y aunque ante el Juzgado inferior haya nombrado defensor y producido prueba; aunque ante la Cámara haya renunciado a los términos y a comparecer en la vista de la causa, puede sin violencia sostenerse que,

cuando nadie lo acusaba, no pudo defenderse y que ha sido condenado sin ser oído.

Era ya éste un motivo bastante a inclinar el ánimo de V. E. a su favor. Hay sin embargo una consideración más fundamental.

La *Consulta* que ha servido para que la Cámara conociera de una sentencia de que nadie apelaba, no existe para los Tribunales de la Nación. Tenía ella su explicación natural y lógica en el régimen de la España.

Cuando en ciertos casos, precisamente en aquellos en que más grave era la pena, se negaba al reo toda apelación, la consulta era una garantía a su favor.

Cuando para fundar un Hospital con recursos propios era necesario ocurrir al Rey, se concibe que no pudiera ponerse en libertad a un procesado, sin el beneplácito de los que ejercían la justicia a nombre y por delegación del Soberano. Hoy que un nuevo orden de ideas, a la autoridad omnímota de uno solo ha sustituido la independencia de los Poderes y la responsabilidad de cada uno, esta consulta no tiene razón de ser.

Debe ella su existencia en América, más que a la Ley, a la facultad de dictar ordenanzas o *acordadas* para su régimen y gobierno, de que gozaban las Audiencias.

En 1821 la Cámara de Justicia que ejercía aquella facultad como el más alto Tribunal que entre nosotros existía, ordenó por su auto acordado de Abril dos *no se ejecutara sentencia alguna que impusiera pena corporal, ni tampoco la de libertad, sin consultar antes al Tribunal.*

Esta disposición fué reproducida en agosto 9 de 1854 y marzo 2 de 1855, por la misma Cámara, que observaba *que parecía se hubiese olvidado o caído en desuso.*

Las diversas leyes que en 1853, 57 y 71 establecieron los Juzgados de campaña y dividieron en varias salas las causas de que conocía el Tribunal Superior, se refieren incidentalmente a esta consulta, quedan por existentes, sin contener cláusula alguna expresa que la hiciera obligatoria. En 1875, los jueces de 1.^a instancia en lo Criminal de la Provincia de Buenos Aires consultaron a la Suprema Corte de la misma, acerca de este procedimiento que reputaban *contrario a la independencia e integridad de la jurisdicción.*

La Suprema Corte, en la extensa resolución de mayo 17 de 1875, sostuvo su procedencia.

Al organizarse los Tribunales de la Capital, la Ley de su creación prescribe se rijan por las Leyes de procedimientos Civiles, Comerciales y Criminales que actualmente rigen para los de la Provincia de Buenos Aires, *en cuanto sean compatibles con la misma Ley, y hasta tanto se dicten por el Congreso las que hayan de subrogarlas.* Art. 312.

Es visiblemente esta disposición el fundamento del proceder observado por la Cámara en este caso.

Ella ha creído sin duda alguna, que la *Consulta* que regía en los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires, era compatible con la Ley de Diciembre y es aquí donde está, a mi juicio, el error.

En ninguno de los artículos de esta Ley se impone al Juez, directa ni indirectamente, la obligación de consultar al Superior.

Por el contrario al determinar las atribuciones de la Cámara en lo Criminal, dice el art. 72. —*Conocerá en última instancia de los recursos de los referidos Jueces Letrados*—. De los recursos de las apelaciones, no de las consultas.

La consulta no es, pues, *compatible* con una Ley que de ella precinde y la excluye. Y si alguna duda pudiera existir, bastará recorrer los fallos de la Suprema Corte de la Nación.

Organizada apenas la Justicia Federal, el Juez de Sección de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Heredia, elevó en consulta una causa en que imponía una ligera pena correccional, de que no se había apelado, ni por el condenado ni por el Procurador Fiscal.

—La resolución de la Suprema Corte, que transcribo íntegra, no puede ser más concluyente: dice la causa XV, T.L.S.I., P. 83|87—.

«Buenos Aires, Febrero 11 de 1864. —Considerando:— 1.º Que disponiéndose por el art. 363 de la Ley de procedimientos para los Tribunales de la Nación, que de las sentencias que se pronuncian en causas criminales por los Jueces de Sección, puede siempre apelarse, la consulta establecida por las leyes comunes para los casos en que todo recurso al superior debe ser denegado, no puede tener lugar para ante la Suprema Corte;— 2.º Que la práctica de los Tribunales inferiores de la Provincia, de consultar aquellas sentencias de que no se ha interpuesto recurso, aunque lo admitan, fundada en una sospecha injuriosa a los Jueces Inferiores, a los Defensores

de los procesados y a los encargados de ejercer la acción pública ante aquellos, es contraria al principio de que la sentencia consentida queda ejecutoriada, y está excluida del procedimiento reglamentario por la citada Ley del Congreso, que en su art. 364 solamente declara que serán supletorias de ellas, las Leyes preexistentes que no se opongan a sus disposiciones, sin mencionar las prácticas adoptadas por los Tribunales para modificar el procedimiento legal;— 3.º Que el peligro de que la omisión del Defensor y la ignorancia del procesado expongan a éste alguna vez a sufrir una pena inmerecida, puede y debe obviarse por el Juez de Sección en los casos graves, obligando al primero a interponer el recurso, o nombrando otro defensor que lo entable, sin privar al condenado de la libertad de consentir las penas leves que considere justas y de evitarse la molestia de una prisión más dilatada, cuando deba permanecer en ella hasta la resolución del Superior;— 4.º Que no debe suponerse negligencia u otro motivo culpable en el encargado de ejercer la acción pública, por el medio de consentir una sentencia, y que, si alguna vez faltase al deber de apelar cuando se favoreciere al delincuente, sustrayéndolo al castigo que le manda imponer la Ley, el mal que resultaría a la causa pública sería menor que el de prolongar la detención del inocente, o del condenado a una justa pena, todo el tiempo que se emplea en sustanciar y resolver la consulta, y el cual ni se indemniza ni se descuenta de la condena; por todos estos fundamentos, devuélvase esta causa al Juez de Sección para que ejecute la sentencia que ha pronunciado, la cual se considerará ejecutoriada desde su notificación. —*Francisco de las Carreras, — Salvador María del Carril, Francisco Delgado, — José Barros Pazos*».

Como se ve, la *Consulta* ha sido abolida en el régimen de los Tribunales Nacionales desde más de veinte años atrás. ¿Cómo es posible hacerla revivir para los Tribunales de la Capital?

Volviendo ahora el recurrente, resulta manifiesto que, por un error en el procedimiento, se encuentra condenado a seis años de Penitenciaría, cuando debía estar hace un año en libertad.

Y es en previsión de olvido o errores de esta naturaleza, a que no es posible escape la naturaleza humana, que la Constitución ha depositado en la dirección del Jefe del Estado el poder de separarlos. *El poder de perdonar dice Story, es una consecuencia indispensable del derecho de castigar, porque de otra manera*

podrían los acusados convertirse en víctimas, de sus acusadores, de la inexactitud de los testigos, o del error de los Jurados y de los Jueces.

Las resoluciones del P. J. llevarán en sí, sin duda alguna, el sello de la verdad y deben ser consideradas la expresión de la justicia. Esto no obsta, empero, a que otro Poder, en casos excepcionales, como el presente por ejemplo, ejerza su criterio propio sobre hechos que el tiempo pudo revelar, y circunstancias que pasaron desaperecidas y bien pueden presentar el delito bajo una nueva faz.

Citaré en apoyo de esta doctrina, de por sí clara, por otra parte, la alta autoridad de Jefferson.

Sabido es la resistencia que sublevó en la Unión Americana la ley que estableció, temporalmente, la jurisdicción de la justicia federal sobre los delitos de imprenta, llamada *sedition bill*.

Fué tachada esta ley de inconstitucional. Jefferson, Presidente a la sazón, considerándola tal, puso en libertad a todos aquellos que los Tribunales Federales condenaban ejecutándola.

En uno de estos casos la esposa de Adamo se quejó de la remisión de la pena impuesta a un periodista, Callendar, que había publicado un libelo altamente injurioso contra el ex-Presidente. Contestóla Jefferson en estas significativas palabras, dignas de tenerse en cuenta por la energía e independencia de carácter que revelan: *He perdonado a todos los que estaban condenados o procesados en virtud del sedition bill, decía, porque he considerado y considero esta ley de ningún valor, tan absoluta y palpablemente nula como si el Congreso nos mandara a adorar una imagen de oro; y porque reputo mi deber detener su ejecución, en cualquier estado del juicio, de la misma manera que retiraría de la hoguera aquellos que no hubiesen prestado adoración de la imagen de oro. Vd. parece creer, decía en otra carta a la misma Señora, que es atribución de los jueces decidir acerca de la validez del sedition bill. Pero nada en la Constitución les ha dado el derecho de decidir por el Ejecutivo, no más que al Ejecutivo, el derecho de juzgar por ello.*

Ambos magistrados son independientes en la esfera de acción que le está marcada. Los jueces, entendiendo que el bill es constitucional, tienen el derecho de imponer multas y prisiones en su

ejecución por que este poder ha sido depositado en sus manos por la Constitución.

Pero el Ejecutivo, juzgado que la ley es inconstitucional, está obligado a remitir la condena, por que este poder le ha sido conferido por la Constitución.

Este instrumento, continúa, ha querido que los poderes coordinados que establece, sirvan entre sí de control y contrapeso. La opinión que atribuye a los jueces el derecho de decidir qué leyes son constitucionales, y cuales no, no sólo por ellas en su esfera de acción, sino también por el Poder Ejecutivo y Legislativo en sus respectivas esferas, haría del Poder Judicial un poder despótico. Jefferson Hoorks, páginas 555, 556 y 561.

Esta doctrina con respecto a la constitucionalidad de las leyes, tiene, bien se concibe, una aplicación más natural y sensible cuando sólo se trata de errores de hechos o de procedimientos, como en el presente caso.

Al evacuar el informe que V. E. le pidió, la Excm. Cámara insiste en la opinión que en otras ocasiones ha manifestado, tendiente a limitar la prerrogativa constitucional a los casos en que el condenado *hubiere cumplido la mitad de su condena.*

Si no bastara a desvirtuar esta opinión, lo que antes de ahora he dicho a V. E., si fuera posible admitir que una facultad que arranca de la Constitución, pueda ser limitada por una ley ordinaria mucho menos por una ley transitoria aceptada sin discusión, cual es el Código Penal de la Provincia de Buenos Aires, declarando vigente mientras sanciona el Congreso el que ha de regir definitivamente; si fuera ésto posible digo, bastaría el presente caso para poner en evidencia las consecuencias a que tal limitación conduciría.

Después de lo que dejo expuesto espero no se desconocerá que Trucco ha sido condenado a 6 años de Penitenciaría, a mérito de un procedimiento que la Suprema Corte ha declarado contrario al principio que domina en las leyes del Congreso; es decir, *indebidamente*. De los 6 sólo ha corrido uno, de manera que si se aceptara la doctrina de la Cámara, no habría poder humano que pudiera evitar la continuación de una pena injusta por dos años más lo que es contrario a la letra y al espíritu de la constitución.

Al terminar indicaré a V. E. la conveniencia de remitir estas actuaciones a la Suprema Corte, al objeto de que en ejercicio de Superintendencia que la ley le confiere provea lo que estime conveniente acerca de esta *consulta* que a tan extraordinarios resultados puede conducir. — Octubre 27 de 1885.

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Tuvo resolución esta causa en Noviembre 28 de 1885.

Tomo 7, pág. 260. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. otorgue la concesión que se solicita para la construcción de una vía de F. C. y un muelle, sin la correspondiente autorización por parte del Poder Legislativo atento a las condiciones especiales según las cuales se va a llevar a cabo la obra.

El F. C. del Sud, pide autorización para construir un ramal al puerto y un muelle

Señor Ministro:

La Empresa del F. C. del Sud ofrece construir un muelle con todos los accesorios modernos para carga y descarga; con depósitos para mercaderías; con todos los adelantos posibles para facilitar el movimiento marítimo. Nada pide; todo lo hace a su costa exclusiva, el terreno donde han de colocarse los depósitos, los pescantes y los cambios de vías son de su propiedad; el muelle servirá para el comercio general percibiendo el Gobierno los derechos correspondientes; la vía pública en la parte que atraviesan los rieles y en los treinta y cinco metros de la ley, quedará expedita y mejorada. En compensación, sólo se reserva el derecho de cobrar por el uso de sus pescantes los que el Gobierno cobra por los suyos, y la preferencia para sus propias cargas.

No veo en todo esto concesión alguna que no pueda hacer V. E. En realidad nada se concede a la Empresa, que tantas erogaciones se impone, que no se conceda al público, puesto que todos podrán hacer uso de los muelles y de la vía, con una limitación insignificante, justa por otra parte. Aunque éstas obras se hacen

con dinero de la Empresa, no pidiendo por ello retribución alguna, puede bien decirse, que es como si las hiciera el Estado, para uso del pueblo y en bien de la comunidad. Para ésto, no encuentro que sea necesaria la autorización legislativa que echa de menos el señor Asesor del Departamento de Ingenieros.

No me parece, por otra parte, que haya paridad entre estas obras y las autorizadas para ligar la Estación del Ferrocarril del Rosario. Atraviesan estas últimas valiosas propiedades particulares, en medio de una ciudad populosa, y bien se alcanza entonces la necesidad de la intervención del Congreso. — El presente caso es enteramente distinto. — Octubre 28 de 1885.

Departamento del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Octubre 31 de 1885.

Tomo 7, pág. 123. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Una simple carta en la que se manifiestan propósitos revolucionarios contra el Gobierno Uruguayo no configura un «acto hostil» que dé lugar a la aplicación del artículo 7 de la ley de 14 de Septiembre de 1863.

Por «actos hostiles» en el sentido del art. citado debe entenderse: el armamento de buques, enganche o alistamiento de tropas, compra y embarque de armas u otros hechos análogos.

La Legación Oriental, solicita la aprehensión de D. J. Arredondo por trabajos revolucionarios contra su Gobierno

Señor Ministro:

No encuentro en nuestras leyes disposición alguna que autorice la aprehensión, enjuiciamiento y castigo que solicita el señor Ministro de la República Oriental, en mérito de la carta que acompaña, admitiendo que sea del señor Arredondo.

El título 2.º de la Ley de 14 de Septiembre de 1863 que designa los crímenes cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Nacionales, al definir los delitos que comprometen la paz y dignidad de la Nación, contiene esta única disposición que se relaciona con el presente caso. *«El que por actos hostiles, dice el*

artículo 7, *diera motivo a una declaración de guerra contra la Nación o expusiese a los ciudadanos a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, será condenado, etc.*

Por actos hostiles no puede comprenderse otra cosa en el sentido de la ley, que el enganche de gente, armamento de buques, atropellamientos o insultos al representante de una Nación amiga, etc. etc. Una simple carta, si bien incita a la rebelión y manifiesta el propósito de un levantamiento, no puede considerarse en la categoría de tal hecho hostil, perpetrado dentro del territorio de la Nación y justiciable ante sus tribunales.

No encuentro tampoco en el Código Penal disposición alguna cuya contravención pudiera autorizar el procedimiento que solicita el señor Ministro Oriental.

Diré, por último, que menos podría invocar en su apoyo las prácticas del derecho internacional.

Por actos hostiles contra una Nación amiga, todos los tratadistas entienden: el armamento de buques, el enganche o alistamiento de gente armada, la compra y embarque de armas, y demás hechos ostensibles y palpables de esta naturaleza que caen bajo el dominio de la Policía y pueden ser reprimidos.

La Europa entera está llena de pretendientes que conspiran sin cesar contra el orden establecido en Naciones amigas, lanzando manifestos públicos, manteniendo comunicación activa con sus partidarios, y no tengo conocimiento de que, cuando sus pretensiones no se han demostrado en actos o hechos positivos, como los que dejo enumerados, hayan dado lugar a las prisiones y enjuiciamiento que se solicita contra el señor Arredondo. — Febrero 18 de 1886.

Tomo 7, pág. 371. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. ocurra al Congreso a fin de solicitar la exoneración de derechos o al menos una reducción de lo que la ley cobra por la introducción de la pita en rama destinada a la elaboración de alpargatas. en razón de considerarse que la preparación que dicho producto sufre, es tan rudimentaria que bien puede, considerarse como materia prima y en consecuencia es injusto que pague iguales o mayores derechos que los artículos elaborados con ellas provenientes del extranjero.

Exención de derechos de importación para materiales destinados a la elaboración de alpargatas a vapor

Señor Ministro:

El señor Etchegaray es el iniciador de una importante industria, y merece como tal, especial consideración de parte de V. E.

La fábrica que ha establecido a grandes costos en Barracas, tiene por objeto la elaboración de alpargatas, de que tan extenso comercio se hace entre nosotros, por medio de los más ingeniosos mecanismos.

El elemento principal de esta fabricación es la pita en rama y la hilaza que se importa de la India.

Observa el señor Etchegaray que es esta una materia prima, y que no es justo sea recargada con los crecidos derechos del 25% y a mi juicio, tiene perfecta razón.

La preparación que ha sufrido la pita en rama es tan rudimentaria, que bien puede considerarse en su carácter originario de materia prima al tomar la forma de las plantillas de alpargatas. Por otra parte, el señor Etchegaray observa también que, a no ser por el consumo que hace su fábrica la introducción de este artículo sería insignificante o ninguna.

Hay pues motivo bastante para que extienda V. E. a esta industria la liberalidad de que otros gozan, habilitándola para luchar con la competencia que le hacen iguales artículos que vienen de Europa, donde la mano de obra es tan barata. No me parece justo que la materia prima, o si se quiere rudimentaria, pague iguales o mayores derechos que los artículos elaborados con ellas en el extranjero; la arpillera; las plantillas para alpargatas, por ejemplo.

La Dirección General de Rentas dice que la ley vigente no exonera a los artículos en cuestión, no pueden dejar de ser incluí-

das en el artículo 1.º Sería entonces necesario ocurrir al Congreso, pienso que así debiera hacerlo V. E. a no ser que hubiera en la ley posibilidad de hacer menos onerosa la percepción del derecho actual. Sobre este particular el interesado es el mejor juez, y podría oírle V. E. — Marzo 16 de 1886.

Ministerio de Hacienda. — Resolución de Diciembre 12 de 1887, ordenando el archivo.

Tomo 7, pág. 300. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Es improcedente el pedido que se formula al P. E. para que apruebe la transferencia de bienes de una Sociedad Anónima que se ha disuelto, por cuanto la intervención que debe tomar el Poder Ejecutivo en las Sociedades Anónimas es al solo efecto de reconocerles personería jurídica y ejercer una vigilancia sobre su desenvolvimiento, no interviniendo para nada en las operaciones regulares de la entidad y menos en su disolución si tiene lugar de conformidad a lo que dispone el Código de Comercio.
- II. — Si en razón de los actos de una Sociedad Anónima, alguna autoridad debe intervenir, ella debe ser el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo.

La Compañía de Tranways a Belgrano, pide la aprobación de la transferencia hecha a favor de D. Francisco A. Bower y por consecuencia la disolución de dicha sociedad

Señor Ministro:

Nada tiene que ver V. E. con los negocios de la Sociedad «Tranway a Belgrano». — Son los Tribunales en todo caso, y no V. E., el llamado a intervenir en la disolución o continuación de la Sociedad, según los accionistas juzguen oportuno.

Señor Ministro:

La intervención que nuestra legislación acuerda al Poder Ejecutivo en la constitución de las Sociedades Anónimas, es una ex-

excepción a la libertad que ella misma deja a las personas en sus negocios particulares, en cuya organización para nada intervienen los Poderes Públicos.

Es bien conocida la razón de esta excepción.

La Sociedad Anónima es una simple asociación de capitales, en la que la responsabilidad personal de los Socios desaparece por completo, siendo sustituida por la del fondo social.

De la limitación en las pérdidas a la cantidad que cada socio quiera exponer, ha surgido esta preciosa e imponderable creación moderna, que mejor que la palanca de Arquímedes, está destinada a remover el universo.

Su importancia sin igual, por una parte, y por otra, la necesidad de garantizar el interés público, explican la intervención más o menos directa, que los Gobiernos todos se han reservado.

«La intervención del Gobierno en estas sociedades, dice Berravide, procede de un pensamiento de orden público. Ella tiene por objeto proteger al comercio contra el monopolio; velar por el bien público verificando y comprobando la sinceridad y la realidad de la garantía que se ofrece, impedir, en fin, que los mismos asociados sean víctimas, controlando la posibilidad y éxito a la empresa». Des Sociétés T. 2 N.º 320.

«Si en ciertos casos, agrega Marssé, la ley ha querido que el que busca un lucro no sufra sino una parte de las pérdidas, y veche el excedente sobre un ser moral o de razón, ella ha debido querer al mismo tiempo que el control del Gobierno haya previamente comprobado, en el interés de los terceros, las facultades del ser ficticio destinado a ser su deudor.

Por esto es que las sociedades anónimas no pueden existir sin previa autorización del Gobierno, el que verifica las probabilidades de éxito de las operaciones, y la suficiencia de los medios relativamente a los cargos probables de la empresa». Le Droit Comm. T. 2 N.º 882.

Estas breves consideraciones explican la intervención del Gobierno, cuya eficacia es controvertida, sin embargo, por autoridades respetables, y es por lo menos, de éxito dudoso en la práctica. Nada justificaría empero llevarla más adelante, ni disposición alguna de nuestros Códigos lo autoriza.

Constituída la Sociedad Anónima con el asentimiento del Poder Ejecutivo, elévase a la categoría de persona jurídica, y como tal entra en la plenitud de los derechos de que gozan las personas de existencia visible o invisible. Para nada necesita de la autorización del Gobierno en sus operaciones sucesivas, ni menos para su disolución.

Llegado alguno de los casos previstos por la ley, la Sociedad Anónima concluye y se liquida, como un negocio particular o una sociedad cualquiera.

Su personalidad jurídica desaparece en tal caso por el simple ministerio de la ley, sin que sea necesario la haga cesar el poder a que debe su existencia, puesto que de hecho ha dejado de ser. Y si ya en las operaciones de la Sociedad en relación con sus estatutos, ya en lo concerniente a su liquidación, la intervención de la autoridad fuera, en todo caso, el Poder Judicial, y no V. E. el llamado a intervenir.

La Sociedad del Tranway a Belgrano se ha encontrado en el caso «*de no poder llenar el fin para que fué creada*», y consecuente con lo que en tal eventualidad dispone el Código de Comercio, ha resuelto disolverse y ponerse en liquidación. A este objeto, ha procedido a la venta del Tranway y ha estado para ello en su perfecto derecho. La persona jurídica *Tranway a Belgrano* ha dejado de existir en consecuencia.

Este Tranway parece ser hoy una propiedad particular, será una sociedad colectiva, o anónima, previa la autorización de V. E. en este caso, bien entendido, según su comprador, señor Bower, determine.

Por todo esto he dicho antes, y es siempre mi parecer, que no es del resorte de V. E. tomar participación de ningún género en este caso. — Marzo 18 de 1886.

Ministerio del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Marzo 26 de 1886.

Corresponde acordar el pase a una Patente Eclesiástica, en la inteligencia de que el nombrado para el cargo, lo ejercerá con sujeción a los derechos y prerrogativas del Patronato Nacional.

Fray Abraham Argarañaz, pide pase para las patentes que le acreditan como Visitador General y Presidente Capitular

Señor Ministro:

Las cédulas que presenta Fray A. Argarañaz, están concebidas en los términos de costumbre. Puede V. E. concederle el pase correspondiente, en la inteligencia de que el expresado señor Argarañaz, ha de ejercer las comisiones de Visitador General y Presidente Capitular de que por ellas es investido, respetando los derechos y prerrogativas del Patronato Nacional. — Abril 1.º de 1886.

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 2 de 1886.

Tomo 7, pág. 390. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde el aumento de los derechos de importación que pagan las plantillas de alpargatas, si ello contribuye al sostenimiento de una importante fábrica que elabora totalmente las alpargatas en nuestro país y cuya conservación es de notorio interés público máxime si se considera que el aumento importa un recargo poco sensible por cuanto es escaso el valor del artículo y grande el número de consumidores: entre quienes se reparte dicho valor.

D. Juan Etchegaray, sobre aforo de plantillas preparadas de alpargatas

Señor Ministro:

Los informes que anteceden modifican un tanto la opinión que dí antes a V. E. en igual solicitud de los mismos señores Etchegaray y Fraser.

Resulta suficientemente comprobado que las plantillas de alpargatas son muy poco menos que la alpargata misma.

En el caso más favorable para los introductores de este artículo, las plantillas no pueden ser consideradas sino a la par de las capelladas para la confección de calzado.

La ley grava en el 45 % las *confecciones en general* y entre estas se han incluido las capelladas,

Las plantillas son para la alpargata una parte más esencial que las capelladas para el calzado, y no hay razón para que no sean gravadas en igualdad de condición.

La Dirección General observa, con razón, que los intereses comprometidos en este caso son igualmente acreedores a la solicitud de los Poderes Públicos.

Observo por mi parte que el aumento de un 20% sobre los derechos que pagan ya las plantillas, importa un recargo muy poco sensible en un artículo de tan escaso valor, tanto menos sensible, cuanto que se distribuye en mayor número de consumidores; mientras que este pequeño aumento viene a beneficiar y sostener una importante fábrica, cuya conservación es de notorio interés público.

Esta consideración decide mi parecer en favor de la solicitud de los señores Etchegaray y Cía. — Abril 3 de 1886.

Ministerio de Hacienda. — Resolución ordenando el archivo. Diciembre 12 de 1887.

Tomo 7, pág. 389. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiendo el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, consultado a los Gobiernos de Provincias acerca de la forma cómo han ejercido el vice-Patronato que les fué delegado por Decreto de marzo 1.º de 1855 especialmente en lo relativo a la provisión de los curatos, respondieron todos, que ha sido escasa la intervención que como Vice Patronos han tomado y que los curatos han sido provistos directamente por los Obispos, en forma interina y sin dar intervención alguna a la autoridad civil. Este proceder se reputa contrario a lo establecido por el Concilio de Trento; la ley 24, Tít. 6.º lib. 1 que se formó de la real cédula de 1609 y a la doctrina de reputados canonistas, por lo que corresponde que el F. E. declare que en lo sucesivo la provisión de los curatos deberá hacerse por los Obispos con la aprobación expresa de los Gobiernos Provinciales como representantes y delegados del P. E. Nacional y que la remoción deberá efectuarse con el acuerdo de ambas autoridades, civil y eclesiástica.

Los Gobernadores de Provincias, sobre la forma en que ejercen el Vice-Patronato respecto a los curatos

Señor Ministro:

V. E. ha deseado conocer la manera cómo los Gobiernos de Provincia han ejercitado el Vice-Patronato que el Gobierno de la Confederación delegó en su favor por el Decreto de Marzo 1.º de 1855, con especialidad, en el punto relativo a la provisión de Curatos.

Los señores Gobernadores, con excepción de los de San Juan y San Luis y los Señores Obispos han contestado a la circular que con este propósito les fué dirigida. Sus contestaciones reunidas en este voluminoso expediente, encierran datos importantes y una enseñanza preciosa con respecto a las relaciones de la Iglesia y del Estado en el último medio siglo de nuestra vida independiente.

El ejercicio del Vice-Patronato no ha sido laborioso ni difícil para los Gobiernos delegados. En algunas Provincias háse limitado a una intervención muy indirecta en el nombramiento de los curas: en otras ni a esto siquiera.

«La Práctica constante que ha venido observándose desde una época remota, dice el Señor Gobernador de la Rioja, ha sido la de ser nombrados los curas por el Obispo en calidad de interinos, limitándose a dar cuenta al Gobierno para su aprobación».

«En los últimos tiempos y especialmente desde la Revolución de 1870, agrega el de Entre Ríos, se ha relajado la práctica legal que existía antes, pudiendo decirse que no se ha ejercido el Vice-Patronato como correspondía».

«La forma en que el Gobierno ha ejercido el Vice-Patronato, continúa el de Salta, respecto a los Curatos, es aprobando o nó el nombramiento que el señor Obispo hace, sin inmiscuirse en la designación de las personas».

El Gobierno de Corrientes es más explícito. *«El Vice-Patronato, dice, no se ejerce ni se ha ejercido antes de ahora de la manera que lo establece la ley canónica ni la civil. Los curatos han sido provistos sin darse la intervención que corresponde al Gobierno, y en la mayor parte de los casos ni aún se han hecho saber los nombramientos».*

«Posteriormente, dice el Señor Gobernador de Córdoba, el cumplimiento de las prescripciones legales se relajó, sin que el Gobierno pueda conocer la causa limitándose la autoridad eclesiástica a hacer los nombramientos de Curas, Vicarios o interinos, y dando cuenta al Poder Ejecutivo para la aprobación correspondiente. Esta práctica se observó hasta el año 1869, continúa, en el que se dió cuenta por última vez, y desde esa fecha hasta hoy, el Gobierno tiene noticias de que los nombramientos de Curas se han hecho sin conocimiento alguno de él».

El señor Gobernador de Buenos Aires es, por último, el más claro y terminante. *«Este Gobierno, señor Ministro, dice, no ejerce en manera alguna el Vice-Patronato con que lo inviste la Constitución de la Provincia, por razón de no haber recibido hasta ahora instrucciones del Gobierno General. Todos los curatos de la Provincia, sin excepción, han sido y son provistos interinamente por el señor Arzobispo, y entiendo que se viene haciendo desde muchos años atrás».*

Los demás Gobiernos de que no dejo hecha mención especial, están de acuerdo en que todos los Curatos están provistos interinamente, sin intervención alguna de la autoridad civil.

Como se ve, el ejercicio del Vice-Patronato es poco menos que nominal y bien puede decirse que no ha sido de grande beneficio para las Provincias en cuyo obsequio se hizo la delegación. Todas ellas o casi todas, sin embargo, han incorporado este derecho a sus

Constituciones, contando, sin duda, con que la delegación habría de continuar y no tendría término.

La enseñanza que de lo expuesto se desprende es que, poco a poco han ido descuidando los Gobiernos de Provincia el ejercicio del derecho delegado, a término de que los Curas que con arreglo a las mismas leyes de la Iglesia, sólo podrían ser nombrados mediante su presentación, han llegado a serlo simplemente por los Obispos, primero con alguna intervención de la autoridad civil, y después sin que, siquiera por cortesía, se le diera aviso.

Así mismo, fácilmente se percibe de los datos reunidos, que a medida que la intervención de los Gobiernos disminuía, crecían las pretensiones de los señores Obispos.

«*Esta práctica —la de nombrar Curas interinos, dice el Vicario Foráneo de Santiago—, se halla ajustada a las disposiciones del Concilio de Trento y a la doctrina de Donoso y Solórzano.*» El Concilio de Trento, Solórzano y Donoso dicen precisamente lo contrario según más adelante se verá.

«*El Concilio de Trento, dice a su vez el señor Arzobispo, dispone respecto de ciertos Curatos que tienen Cura habitual y actual, como son los dos Curatos de nuestra Catedral Metropolitana, de procurar con esmero el desempeño del cuidado de las almas por medio de Vicarios idóneos, aunque sean perpetuos, si a los obispos no les pareciere más conducente al buen gobierno de la Iglesia valerse de otros medios. No sé porqué, agrega S. S. I., está disposición no ha de poder adoptarse respecto de los demás Curatos, si al Obispo así le conviniere convenir. El Concilio, lejos de prohibirlo, lo autoriza.*»

Esta referencia de S. S. I. no es feliz. Cualquiera que sea el alcance de la disposición que transcribe con respecto a las Iglesias Metropolitanas, no puede ella derogar disposiciones claras y explícitas del mismo Concilio relativas a la provisión de los Curatos en general. Una disposición terminante e inequívoca de un cuerpo de leyes, no puede ser derogada por deducciones más o menos autorizadas, de otra disposición del mismo.

Se diría que la larga prescindencia de la autoridad civil ha hecho olvidar a nuestros Prelados las nociones más elementales de las mismas leyes de la Iglesia, induciéndolos en el error de tomar

por derecho propio lo que es simplemente efecto de una tolerancia notoria y fácil de explicar.

Si hay algo claro en el Derecho Canónico es, en efecto, la manera de proveer los Curatos.

En la organización de nuestra sociedad tienen los Curas una intervención directa y muy importante. La validez de los matrimonios depende de su presencia en el contrato y sacramento, del que derivan la legitimidad de los hijos, los derechos de los cónyuges, todo el desenvolvimiento de la vida civil, en una palabra. Ellos han llevado hasta ahora los registros de los nacimientos y defunciones, y sus asientos son autos auténticos en el orden civil. En el religioso, son los encargados de predicar el Evangelio, de administrar, por derecho propio, los sacramentos, y su oficio, llámase en este sentido, de institución divina. Es pues, el Curato uno de los primeros y más importantes beneficios eclesiásticos, y, como tal, no podía dejar de estar expresamente incluido entre aquellos para cuya provisión es necesaria la presentación del Patrono. Así lo fué, en efecto, por la conocida Bula de Julio II, que concedió a los Reyes de España, cuyos derechos representan hoy los Gobiernos Americanos, las prerrogativas del Patronato sobre todas las Iglesias de América, sin limitación alguna. Y no podía ser de otra manera. Los Reyes de España costearon las expediciones que descubrieron y conquistaron las regiones del Nuevo Mundo: el Poder Civil construía las Iglesias, les constituía rentas o permitía la erección de rentas para su sostenimiento. A nadie, sino al Poder Civil, podía entonces corresponder el derecho de proponer las personas que habían de desempeñar las diversas funciones que el servicio de las Iglesias construídas exigían. Y este derecho alcanzaba desde las más altas dignidades de la Iglesia, hasta las más humildes. La presentación del Patrono era tan necesaria en el nombramiento de un Arzobispo, como en la de un sacristán. ¿Cómo se pretende no lo fuera en la provisión de los Curatos?

Hasta un siglo después del descubrimiento de América, los Curatos fueron provistos siempre interinamente o, como se decía, *en encomienda*. Los Curas así nombrados, amovibles *ad-nutum*, quedaban bajo la dependencia absoluta de los Obispos y en la inseguridad de conservar su posición, más que de los deberes de su ministerio, se cuidaban de su propio interés. La Ley 24, Tit. 6.º,

Lib. 1, que se formó de la Cédula de 1609, puso término a las fatales consecuencias de este orden de cosas. «Ordenamos y mandamos, dice esta ley, que en vacando cualquier beneficio curado, los Arzobispos y Obispos pongan edictos públicos, expresando que esta diligencia se hace por orden y comisión nuestra, para que se vengan a oponer, conforme a lo que manda el Santo Concilio de Trento. De los así examinados, escojan los Arzobispos y Obispos tres, los más dignos y los propongan; el Virrey, Presidente o Gobernador escoja uno, el que le pareciere el más a propósito, y lo presente en nuestro nombre y con esta presentación el Arzobispo u obispo, a quien tocare, haga la institución, sin que los Prelados puedan proponer ni propongan otro alguno, sino fuera de los opuestos y examinados».

Esta ley que no hace sino ordenar lo que estaba ya mandado por el Concilio de Trento, es reconocida por los más renombrados canonistas, Solórzano, Donoso, etc., como la ley fundamental en la materia. Con arreglo a sus prescripciones, hanse provisto todos los curatos en las Repúblicas Americanas hasta la revolución y aun mucho después entre nosotros.

El señor Arzobispo y con él los señores Obispos, reconocen que así debiera ser pero objeta uniformemente que es imposible por la deficiencia del Clero, que atribuyen a la supresión de los Seminarios en épocas anteriores. Existen a mi juicio, causas más fundamentales que no es posible dejar de tener en cuenta.

Fuera preciso cerrar los ojos a la luz para no percibir la separación que la fuerza irresistible del progreso viene operando fatalmente entre las cosas espirituales y temporales. La menor, o ninguna participación de los eclesiásticos en las funciones de la vida civil en nuestros días, no es sino una manifestación de este movimiento irresistible.

El principio del pueblo romano, que hacía del sacerdote un funcionario público, acrecentando su autoridad y su poder, se incorporó como tantos, a la Sociedad Cristiana que nació en su seno. Los Cónsules y Emperadores de la antigua Roma, eran a la vez Augures y Pontífices. Por largos siglos los Sacerdotes han desempeñado en las naciones Cristianas, los más altos destinos civiles. En España, en Francia, en Inglaterra, el nombre de Cardenales eminentes está vinculado a las más grandes evolucio-

nes de la Historia. En Alemania los Obispos eran soberanos. En Italia, la aspiración suprema del mismo Papa, ha sido reunir a la triple corona de San Pedro, la corona de los Reyes.

Todo esto ha cambiado. La sociedad moderna no dispensa hoy su consideración a los eclesiásticos que se lanzan a la arena agitada de la política. La opinión pública requiere funcionarios que no escuden su responsabilidad constitucional tras un carácter sagrado. El pueblo entiende que aquellos cuyo deber es ocuparse con preferencia de las relaciones entre Dios y el alma, son menos aptos para cuidar de las cosas de la tierra. Apenas si se encuentra hoy un miembro del Clero en la esfera administrativa de las Naciones Católicas o Disidentes. El mismo Papa ha sido reducido por acontecimientos irrevocables a su misión religiosa. Entre nosotros, sacerdotes eminentes, los Gómez, Funes, Zabaleta, desempeñaron roles importantes en nuestra organización política. En la actualidad, ni en la administración del Gobierno General, ni en el Congreso ocupa el Clero un solo puesto importante, y lo mismo entiendo que sucede en las Provincias.

He ahí la explicación y la causa de la deficiencia del Clero Nacional. Las órdenes sagradas han dejado de ser, como en otros tiempos, el camino que más naturalmente conducía a las funciones de la vida civil; y por el contrario, son más bien un obstáculo.

El Seminario de la Capital ha existido desde 1865 y el de Córdoba, aunque en menor escala, desde antes. Los resultados no han sido sensibles. Con rarísimas excepciones, sus alumnos han sido reclutados, no sin algún esfuerzo, de entre las clases menos acomodadas y menos preparadas de la sociedad. El restablecimiento de los estudios eclesiásticos, que en la forma de Seminarios y de clases adscriptas a las Universidades, no es de esperarse cambie la dirección de las tendencias de la juventud, que visiblemente se encamina a fines distintos.

Nos encontramos, pues, en presencia de una situación anormal y no prevista por el Concilio de Trento ni las leyes que regían el Patronato. Los Curatos no pueden ser provistos por oposición, ni es permitido esperar que lo sean en adelante, al menos en muchísimo tiempo. ¿Qué hacer entonces?

El señor Arzobispo y los señores Obispos entienden que esta circunstancia los autoriza a hacer la provisión interina por tiem-

po indefinido y sin intervención alguna del Patrono. Dicen que no es esto contrario a las disposiciones del Concilio ni a la doctrina de los Canonistas Solórzano y Donoso.

Apenas necesita refutarse tan aventurada asección.

La prescripción del Concilio no puede ser más explícita. Basta leer el capítulo 18 Sección 24 de la reforma. En él se ordena de la manera más terminante que todas las Iglesias Parroquiales, sin excluir ni a las metropolitanas ni a las de la misma Curia Romana, sean provistas, previo examen, en concurso, cuyo procedimiento detalla con la más prolija minuciosidad. Al mismo tiempo autoriza esta prescripción a los Obispos para proveer interinamente los Curatos y sólo *mientras se hace la provisión en propiedad*.

Donoso en su Cap. IX lib. 2; Solórzano en su Política Indiana lib. 4. Cap. 15, dicen precisamente todo lo contrario de lo que, de su reconocida autoridad se pretende deducir. Uno y otro enseñan, y no podrían enseñar otra cosa en presencia de disposiciones explícitas: la provisión de los Curatos debe hacerse por oposición y en propiedad; que mientras se hace la provisión de esta manera, los Obispos están facultados para nombrar por sí solos Curas interinos, cuyo nombramiento deberán participar a la autoridad civil, por cortesía y porque luego, dice Solórzano, «se ha de ocurrir a ella para que se mande pagar sus sínodos o salarios»; y finalmente, que este interinato no podrá exceder de *cuatro meses*, pasados los que dice la ley 48 tít. 16 lib. R. I. mandada observar estrictamente por la Cédula de diciembre 5 de 1796, no se dé algún salario o *estipendio a los Curas nombrados ad-interin*.

No se concibe que en presencia de disposiciones tan claras y explícitas los señores Obispos se avancen a sostener que no siendo posible la provisión según el Concilio, corresponde a ellos el nombramiento sin término y sin intervención de la autoridad Civil.

Lo natural en este caso, es volver las cosas al estado anterior al expresado Concilio, es decir a la provisión *en encomienda a presentación del Patrono*. De otra manera el Poder Civil se verá despojado de uno de los principales beneficios, de las prerrogativas que la Constitución le acuerda.

De lo expuesto deduzco sin violencia que el orden actual de cosas no puede ni debe continuar.

Los curas desempeñan todavía funciones civiles y no es lícito, que la autoridad que los sostiene y los ampara, no tenga ni siquiera noticia de su nombramiento. El Estado tiene además interés en evitar que aquellos que se hubiesen declarado sus adversarios manifiestos ejerzan funciones que les confieren autoridad sobre una parte considerable de la Comunidad.

Mientras no sea posible hacer la provisión en la forma establecida por el Concilio, y puesto que los Curas interinos son en realidad definitivos, debe ella hacerse a presentación de V. E. o a su nombre, o por lo menos con su aprobación.

Dada la tendencia de la Sociedad a que antes he hecho referencia, me inclinaría al último temperamento. El Congreso ha dictado ya la Ley del Registro Civil para la Capital, y es de esperarse sea ella adoptada en las Provincias. V. E. ha anunciado que presentará en breve la ley del Matrimonio Civil. Estas dos leyes disminuyen notablemente la intervención de la autoridad de la Iglesia en las cosas temporales y preparan la separación deseada. Y puesto que nuestra legislación se encamina en este sentido, no me parece justo contrariarla poniendo en todo su vigor leyes que regían relaciones que han variado radicalmente.

En cuanto al ejercicio del Vice-Patronato, no obstante el escaso uso que de él han hecho los Gobiernos de Provincias, no veo ni la conveniencia ni la necesidad de hacer innovación en lo que está ordenado por la ley de 1855 antes citada; tanto más, cuanto que todo induce a creer que el Congreso se ocupará en breve de reglamentarlo.

Terminaré diciendo a V. E. que, a mi juicio, bastará poner término a la situación anormal en que se encuentra esta materia, declarando V. E. que en lo sucesivo, la provisión de los curatos deberá hacerse por los señores Obispos con la aprobación expresa de los Gobiernos de Provincias, como representantes y delegados de V. E. y su remoción, con el acuerdo de una y otra autoridad. — Abril 17 de 1885.

Departamento de Culto. — Tuvo resolución esta causa en *Julio 31 de 1886.*

El hecho de que materiales telefónicos provenientes del extranjero tengan como destino las oficinas del Gobierno y Municipalidad de la ciudad de Córdoba, no constituye causal suficiente para proceder a la exoneración de los derechos de importación, que para los mismos solicita dicha Provincia, máxime si se tiene en cuenta que las oficinas del Gobierno Nacional, tienen teléfonos cuyos materiales han pagado los correspondientes derechos aduaneros.

El Gobierno de Córdoba, solicita se reitere la orden telegráfica dirigida a la Aduana del Rosario, sobre libre despacho de aparatos telefónicos

Señor Ministro:

La industria telefónica está todavía garantida por patentes que explotan diversas compañías. Esas cobran un tanto por el uso, poniendo el material, y corriendo con la colocación y conservación. —En este caso, no encontraría justificada la exoneración que solicita el Gobierno de Córdoba—.

Como estas exoneraciones no están autorizadas por la ley, según a cada paso observa la Dirección General, —parece que debe V. E. proceder a su respecto con cierta reserva—. Si a la simple requisición de un Gobierno de Provincia, sin explicación y sin antecedentes, hubiera de acordarse la excepción al principio general, fuera de temer que la misma facilidad engendrara el abuso.

Sin que ello importe poner en duda la palabra del Gobierno de Córdoba, pienso que sería oportuno le pidiera V. E. las explicaciones que sean del caso a fin de poner a cubierto su responsabilidad administrativa. — Mayo 24 de 1885—.

Señor Ministro:

No encuentro bastante la explicación que da el Gobierno de Córdoba. Las mismas oficinas dependientes del Gobierno General tienen sus teléfonos, cuyos materiales han pagado los derechos correspondientes, estos derechos van incluidos en el costo, y son parte del capital de las empresas telefónicas, cuyo interés lo constituye la retribución que exigen por el uso de sus aparatos patentados.

No veo razón que autorice la exoneración que se solicita.
Julio 31 de 1886.

Resolución en Enero 22 de 1886, de conformidad con lo dictaminado.

Tomo 7, pág. 204. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El contrato de concesión de 19 de marzo de 1878 (vía férrea de Buenos Aires al Pacífico) implica considerar al ferrocarril interoceánico como una sola empresa, no obstante que fuera a dividirse en varias líneas o secciones para facilitar la construcción, estas secciones no son susceptibles de nuevas concesiones distintas de la primera.

El Directorio local del ferrocarril de Buenos Aires, al Pacífico, pide se deje sin efecto la autorización acordada al señor Clark para construir la línea férrea a Mercedes

Señor Ministro:

El Directorio local de la Compañía del Ferro Carril de Buenos Aires al Pacífico, cesionaria de la sección del mismo entre la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, y la Villa de Mercedes, Provincia de San Luis hace oposición al decreto de V. E. que acuerda al concesionario primitivo D. J. E. Clark una nueva sección desde la expresada ciudad de Mercedes a esta Capital.

Dice el Directorio, que Clark no ha tenido derecho para pedir esta concesión, como una extensión de la primera sección, por haber sido transferida a ella la expresada sección en su totalidad, con todos sus privilegios y prerrogativas.

Dice además, y en esto estriba la fuerza principal de su oposición, que el artículo 2 del decreto de V. E. al declarar que la sección nuevamente concedida a ella debe ser considerada como una sola sección y computada conjuntamente para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Gobierno; establece una solidaridad entre una y otra concesión, que ella no está dispuesta a aceptar.

La concesión hecha a los señores Clark es una sola; de un ferro-carril, que, arrancando de esta Capital, llegue a los límites del territorio argentino con la República de Chile.

Para facilitar esta grande empresa, V. E. autorizó la construcción de una sección de la ciudad de Mercedes de Buenos Aires, a la Villa de Mercedes de San Luis. Al hacer esta concesión V. E. declara empero, en términos claros y precisos que no era ella una concesión aislada sino parte de la concesión cuya transferencia se autoriza; dice el artículo 1.º del decreto de enero 16 de 1883, son obligatorias para la Compañía todas las leyes y disposiciones relativas a la concesión de D. Juan E. Clark que rigen en la fecha. «D. Juan E. Clark, continúa el artículo siguiente, para alejar toda duda, queda obligado por el resto de su concesión con arreglo a su contrata y demás convenios, leyes y disposiciones vigentes».

Como se ve, la concesión de Mercedes, a Villa Mercedes, no fué sino un principio de ejecución del pensamiento general y quedó sujeta a las obligaciones del contrato originario con el asentimiento, así de la empresa que tomaba a su cargo la construcción de aquella sección, como del concesionario primitivo que aceptaron sin observación alguna los términos del decreto.

Ahora bien: el contrato originario, fecha 19 de Marzo de 1878, en previsión, sin duda de que el camino por su misma magnitud se llevará a cabo por diversas compañías, establece la misma solidaridad de que hoy la cesionaria de la sección de Mercedes a Villa Mercedes se pretende desligar.

«Para los efectos de la garantía, dice el artículo 8, se deducirá el producto bruto de la línea de esta ciudad a San Juan». El concesionario, agrega el artículo siguiente, entregará semestralmente a la Nación el producto líquido de cada línea.

No podía expresarse en términos más precisos que el pensamiento dominante en aquel contrato fué considerar el ferro-carril interoceánico como una sola empresa, como una sola entidad, y dejar establecido que si llegara a ser dividido en varias líneas o secciones, cada línea debía concurrir con su producto al resultado general para los efectos de la garantía.

La oposición de la compañía cesionaria de Mercedes a Villa Mercedes es pues destituida de todo fundamento y lo es más si se

tiene en cuenta que la solidaridad que rechaza, a nadie más que a ella vendría a aprovechar.

Si alguna sección ha de producir, es fuera de toda duda, la de Buenos Aires a Mercedes, y su concurso no puede ser por consiguiente, sino aceptado como un señalado beneficio por las demás.

No es menos infundada la opinión del Directorio local, en cuanto pretende tener mejor derecho a la sección de Mercedes a Buenos Aires.

Bastará transcribir algunos párrafos del contrato celebrado entre la compañía y el señor Clark.

Por cuanto, dice el preámbulo del mismo, Don Juan E. Clark tiene derecho a la construcción de ciertos ferro-carriles que forman parte de un sistema general, bajo el nombre de ferro-carril de Buenos Aires al Pacífico, y es el propósito que el presente contrato se aplique solamente a la parte de los dichos ferrocarriles que media entre la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, y Villa Mercedes Provincia de San Luis quedando reservado al concesionario negociar las otras líneas autorizadas por dichas concesiones con entera independencia de este contrato o de la compañía; las palabras y referencias aquí referidas serán tomadas y se interpretarán en el sentido de que se aplican a aquella, parte de dichas concesiones que se relacionan con la porción de dichos ferro-carriles autorizados que media entre la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, y la Villa de Mercedes de la Provincia de San Luis.

En presencia de declaraciones tan explícitas, es excusado todo comentario.

No vacilo en pedir a V. E. deje subsistente su decreto de Mayo 22 del año próximo pasado. — Junio 27 de 1886.

Departamento del Interior. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 7 de 1886.

Corresponde que se subsane la doble imposición en que se incurre al quedar gravadas ciertas industrias tanto por patentes nacionales como municipales, autorizando al efecto a la Dirección General de Rentas para que de acuerdo con el Intendente Municipal convengan qué industrias deben dejar como materia imponible, bajo una u otra jurisdicción, para luego recabar del Congreso y Consejo Deliberante, respectivamente, a la época de la sanción anual de los impuestos, las reformas necesarias.

Sobre aplicación de una sola patente nacional a varios ramos del comercio

Señor Ministro:

Con grande acopio de luces, somete el señor Procurador del Tesoro a severo examen la doble imposición que motiva la nota de la Dirección General de Rentas, bajo su doble faz económica y constitucional.

No puede ponerse en duda, dico, que gravar con dos patentes una misma industria por autoridades del mismo origen, es contrario a todo buen principio de administración.

Con respecto a la constitucionalidad de la patente con que la Municipalidad grava ciertas industrias, encuentra el señor Procurador que la H. Corporación ha excedido las facultades que le confiere su Ley Orgánica.

En cuanto al remedio para hacer cesar el mal, entiende, por último, el señor Procurador que no está en nuestros usos, ni en la índole de nuestras instituciones el requerimiento que propone la Dirección General; y que, si las ordenanzas Municipales contrarían la Constitución o las leyes del Congreso, no incumbe a V. E. sino a la justicia, decidirlo.

El señor Procurador del Tesoro tiene, a mi juicio, perfecta razón sobre uno y otro punto.

Desde las famosas *REMONSTRANCES* que los antiguos Parlamentos hacían a los Reyes de Francia, con el resultado que todos conocemos, tales requerimientos, amonestaciones y protestas entre Poderes Públicos, quedaron y continúan de todo punto desautorizados; y muy especialmente, en nuestro sistema de Gobierno, en el que cada poder obra en la esfera de sus atribuciones con entera independencia de los otros.

Por otra parte, si la ley confiere a la Municipalidad la facultad de gravar con patente, determinadas industrias, usa de un derecho legítimo al gravarlas con tal patente, aunque estén ya gravadas por el Gobierno General, por más que la doble imposición pueda ser inconveniente. Y si el doble gravamen recae sobre materias a que no alcanza la jurisdicción municipal será contrario a las leyes del Congreso, y como tal, no es necesario decirlo, podrá ser sometido al criterio de los Tribunales de la Nación.

De todo esto concluye el señor Procurador del Tesoro, que debe dejarse a la acción individual la reparación que busca la Dirección General en la intervención de V. E. Conforme con las conclusiones del señor Procurador, pienso que algo más exigen de V. E. el interés de la industria, y el perfeccionamiento de nuestras leyes fiscales.

No sin objeto la Constitución prescribe que las leyes de impuesto sean revisadas y votadas cada año. Bastará que el Congreso o la Municipalidad se aperciban de la injusticia, o de la inconveniencia, de estas dobles patentes, para que alguna sea suprimida.

Para llegar a este resultado, paréceme el medio más expeditivo autorice V. E. a la Dirección General de Rentas, al efecto de que procure ponerse de acuerdo con el señor Intendente, acerca de aquellas industrias que convengan dejar como materia imponible, bajo una u otra jurisdicción.

En seguida, fácil será que, ya por la acción de V. E. ante el Congreso; ya por la del señor Intendente en el Consejo Deliberante, en la sanción anual de los impuestos, se llegue a la reforma deseada, evitando así un recargo excesivo a la industria ya por demás gravada entre nosotros. — julio 22 de 1886.

Ministerio de Hacienda. — Se adopta como resolución el dictamen. — Agosto 9 de 1886.

No corresponde que se haga lugar al reclamo que se presenta, por falta absoluta de prueba, no pudiendo admitirse como tal, una información ante el Vice-Cónsul del Brasil en Monte Caseros, que no puede hacer fe ante nuestras autoridades ya que estas disponen de medios propios de investigación.

Reclamo de la Legación del Brasil, acerca de súbditos brasileiros perjudicados en Corrientes

Señor Ministro:

Nada adelanta el escrito que antecede que pueda conducir al esclarecimiento de los hechos.

No se dice ni qué División ni qué Jefe ni qué Oficial tomó los ganados.

Parece increíble no sea posible precisar siquiera un poco hechos y circunstancias que no pueden pasar desapercibidas para los mismos que las presenciaron con el interés del dueño que ve arrebatar su propiedad.

Quedamos entonces en la misma situación.

Faltan de todo punto antecedentes para comprobar que los ganados fueron tomados por fuerzas nacionales. La única prueba que se presenta es una información ante el Vice-Cónsul del Brasil en Monte-Caseros y no necesito decir que aunque no adoleciera de vicios gravísimos, no hace fe ante nuestras autoridades que tienen para estos casos medios propios de investigación. Ya que faltaban los recibos que debieron exigir los reclamantes, han debido ofrecer ante V. E. prueba aunque no fuera completa de cómo tales recibos les habían sido negados y de cómo y por quién sus ganados fueron arrebatados.

En ausencia de todo comprobante y no habiendo medios de seguir la investigación por más que V. E. lo deseara en obsequio a la interposición de un Gobierno amigo, debe darse por terminado todo procedimiento ulterior. — Julio 29 de 1886.

Departamento de Guerra. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Agosto 19 de 1886.

No corresponde dirigirse al Poder Ejecutivo solicitándole interpretaciones en abstracto de las leyes. El P. E. tiene la facultad de interpretación, sólo en los casos concretos sometidos a su consideración, y para cuya solución tenga competencia.

El señor P. del Valle Halsey, consulta acerca de la obtención de una patente de invención, que ya ha sido otorgada por otra Nación

Señor Ministro:

No conozco en los particulares el derecho de pedir a V. E. interpretaciones sobre las leyes vigentes, sin aplicación a un caso dado. El deber de V. E. al ejecutar las leyes es interpretarlas y hacer su aplicación a los casos que ocurran a su resolución y no es ya pequeña tarea sin que a ello se agregue entrar en discusión sobre doctrinas hipotéticas y puntos teóricos.

Si el señor Halsey tiene alguna patente, o alguna revalidación que solicitar, si se le cobra más de lo que la ley autoriza, consulte a sus letrados y pida lo que crea arreglado a la manera cómo a su juicio debe entenderse la ley; V. E. resolverá lo que a su vez entienda ser su interpretación genuina.

Mientras tanto, no me creo obligado a dar opinión sobre puntos abstractos, no llamados a recibir una interpretación práctica e inmediata, lo que tanto valdría como abrir cátedra de derecho administrativo o constitucional. — Agosto 26 de 1886.

Ministerio del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Septiembre 27 de 1886.

Tomo 7, pág. 428. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La facultad que tienen los Cónsules extranjeros de nombrar curadores a las herencias intestadas de sus nacionales, cuando no existen herederos legítimos en la República fué primeramente convenida en el Tratado celebrado con Inglaterra en 1825 y luego extendida a todas las naciones amigas, habiéndolo así declarado expresamente el Decreto de Noviembre 19 de 1862 y luego la Ley de 30 de Septiembre de 1865.
- II. — Esta facultad ha quedado subsistente no obstante la sanción del Código Civil, por cuanto no puede éste dejar sin efecto una estipulación internacional.
- III. — La reclamación que formula el señor Ministro de Francia, ante la negativa del señor Juez de primera Instancia a reconocer el nombramiento de curador debe plantearse ante los mismos Tribunales Judiciales y no ante el Poder Ejecutivo.

Reclamo de la Legación de Francia por negarse el Juez de 1.ª Instancia de Buenos Aires, a aceptar curador en la sucesión de M. Espión

Señor Ministro:

Desde el tratado celebrado con la Gran Bretaña en 1825, los Cónsules de esta Nación gozan del privilegio de nombrar curadores a las herencias intestadas de sus nacionales, cuando no existen herederos legítimos en la República.

Este principio se hizo extensivo en tratados posteriores a la España, Portugal, etc., y en realidad, comprende hoy a todas las naciones amigas que tienen el derecho de ser consideradas, a la par de las más favorecidas. Así lo declaró V. E. por el decreto de Noviembre 19 de 1862, y posteriormente el Congreso, por la ley de 30 de Septiembre de 1865.

Al desconocer el nombramiento que en uno de los casos previstos hacía el señor Cónsul de Francia, el señor Juez de 1.ª Instancia, Doctor Bustos, fúndase en que estas disposiciones, y las estipulaciones de los tratados, han quedado derogados por el Código Civil. Pero esto es visible y notoriamente insostenible. ¿Cómo es posible admitir que una estipulación internacional, en que intervienen, como es natural, dos partes contratantes, sea derogada por una sola?

A pesar de esto, no corresponde a V. E. tomar intervención alguna en este asunto, según el señor Ministro de Francia solicita.

En nuestro sistema de Gobierno es del resorte exclusivo de los Tribunales de Justicia interpretar y hacer cumplir las leyes.

El señor Cónsul de Francia, o el curador nombrado por él, han debido ocurrir al superior del citado doctor Bustos, puesto que no encontraban justa su resolución, pidiendo su reforma. Es más que probable que la Cámara de lo Civil hubiera reparado el error en que ha incurrido el señor Juez de 1.^a Instancia. Y si así no fuera, quedaba todavía el recurso de ocurrir a la Corte Suprema de la Nación, cuya alta misión es hacer respetar y cumplir en último resorte las leyes del Congreso, y los Tratados con las Naciones extranjeras.

En este sentido, pienso que debe V. E. contestar al señor ministro de Francia, agosto 31 de 1886.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad al dictamen. — Septiembre 13 de 1886.

Tomo 7, pág. 451. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Aunque no existe prohibición expresa, debe considerarse incompatible el ejercicio de un empleo nacional y el cargo de Vice-Cónsul de una Nación extranjera, por cuanto este último carácter crea a favor del empleado exenciones y privilegios no compatibles con las responsabilidades y deberes que le corresponden como empleado con las autoridades de nuestro país.

El Jefe de la Oficina Telegráfica de Goya, pide permiso para ejercer el cargo de Vice-Cónsul de la República Oriental del Uruguay

Señor Ministro:

Aunque no existe una prohibición expresa, a mi juicio, el simple buen sentido basta para comprender que no es compatible la posición de un empleado nacional con la de Vice-Cónsul de una Nación extranjera.

Según la disposición del artículo 8 de la ley de ciudadanía, pierden sus derechos políticos los ciudadanos argentinos que aceptasen honores o empleos de Gobiernos extranjeros, sin permiso del Congreso.

El Jefe de la Oficina Telegráfica de Goya, no se encuentra en este caso, por ser Oriental, sin embargo, el carácter de Agente Consular crearía exenciones y privilegios a su favor, que no son compatibles con las responsabilidades y deberes de un empleado nacional, para con las autoridades a que debe sus servicios, sin limitación y sin reserva. — Octubre 5 de 1886.

Departamento del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Octubre 16 de 1886.

Tomo 7, pág. 470. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No se considera conveniente un proyecto de ley que presenta el Intendente Municipal, en virtud del cual el cobro de las deudas por impuestos, que de conformidad al art. 64 de la ley Orgánica Municipal corresponde a los Tribunales Judiciales por la vía de apremio, pasaría a ser de competencia de los Comisarios de Policía.

La Intendencia Municipal de la Capital, pide se someta al H. Congreso un proyecto de ley reformando el cobro de los impuestos

Señor Ministro:

El art. 46 de la Ley Orgánica de la Municipalidad dice así: «el cobro de las deudas por impuestos y recursos municipales se hará efectivo por la vía de apremio judicial».

Es esta disposición mucho más conforme a la índole de nuestras instituciones que la reforma que propone la Intendencia.

Aun más; habría lugar a poner en duda, si las funciones judiciales con que el señor Intendente quiere investir a los Comisarios de Policía, estarían en armonía con el principio fundamental de la división de los poderes.

Prescindiendo de esta faz de la cuestión, escabrosa siempre, consideraciones de otro género, y más palpables, aconsejan dejar las cosas como están.

El señor Intendente defiende, como es natural su causa. Necesita recursos y quiere que los impuestos sean cobrados con toda prontitud, y por decirlo así; militarmente.

El legislador debe, empero, no perder de vista la causa de la comunidad. Demasiado infeliz es ya el que no puede pagar los impuestos. A más de su importe, tendrá que sufrir el recargo de crecidas multas y de los gastos consiguientes a la ejecución. Sólo una destitución absoluta de recursos puede explicar la resistencia al pago de pequeñas sumas, que forzosamente hay que pagar después, dobladas o triplicadas.

Es posible que alguna vez el cobro se recargue: pero, esto es preferible a llevar al deudor municipal a tambor batiente, apoderándose los Comisarios de sus bienes, para venderlos sobre la marcha.

Y ahora bien: salvo raras excepciones de malicia o mala fe, tal es la condición del que está en descubierto con la Caja Municipal, no es justo que la ley lo agrave, sujetándolo a Jueces y trámites especiales, que limiten los términos y recursos de que gozan la generalidad de los deudores.

Sabido es que tienen éstos también sus derechos, y que, a partir de la inexorable ley Romana, la legislación moderna tiende a mejorar su condición, poniéndolos a cubierto de rigores excesivos.

Y si se tiene en cuenta que la resistencia nace a veces del hecho de cobrarse dos o más años atrasados, que, se dice, no pagaron los que debieron satisfacerlo, se comprenderá cuán irritante puede llegar a ser el temperamento propuesto y los abusos a que puede dar lugar.

Pienso que la ley Municipal ha sido equitativa y previsora al dejar a los deudores por impuestos en la condición de los demás, y que nada aconseja, ni justificaría, la innovación que propone la Intendencia. — Octubre 19 de 1886.

Departamento del Interior. — Resolución de Diciembre 15 de 1886, que expresa: «Habiéndose clausurado las sesiones del Honorable Congreso archívese este expediente».

- I. — No corresponde que el Gobierno Argentino remita al de Italia los originales o copias de una causa criminal, por homicidio perpetrado por un italiano sobre la persona de otro de la misma nacionalidad, hecho que tuvo lugar en la República, por cuanto ello importaría el acordar la extradición contrariando el art. 3.º de nuestra Ley de la materia que declara no debe tener lugar cuando el delito ha sido cometido en territorio argentino.
- II. — No obstante lo dicho y encontrándose el reo en territorio italiano con arreglo al principio de que una Nación tiene el derecho de juzgar a sus nacionales por delitos cometidos fuera de su territorio, cuando los criminales se encuentran en él, y siempre que así lo estipulen sus leyes, puede el Gobierno de Italia solicitar de nuestros tribunales las pruebas y antecedentes que se hubiesen formado, por intermedio de exhortos, a los que corresponde dar curso de conformidad al art. 30 de la ley de Extradición.

La Legación de Italia, solicita las actas del proceso seguido a
A. Agnese acusado de homicidio en la persona de
A. Pernigotti

Señor Ministro:

De la comunicación del señor Ministro de Italia se desprende que, ante los Tribunales de Justicia de esta Nación se sigue causa criminal contra Antonio Agnese, italiano, por homicidio perpetrado en esta ciudad, en la persona de Alejandro Pernigotti, italiano también.

Para la prosecución de la causa, el señor Ministro pide originales, o en testimonio autorizado, las diligencias del proceso iniciado ante las autoridades Argentinas con motivo de aquel crimen.

Habiendo tenido lugar en territorio de la Nación, no es necesario decirlo, su juzgamiento corresponde a los Tribunales de la misma, y, a existir tratado de extradición con Italia, al tener conocimiento de los hechos, lo lógico sería pidiera V. E. la entrega del presunto criminal.

En el presente caso, empero, según las estipulaciones consignadas en todos los tratados, y la doctrina prevalente, el Gobierno

de Italia hubiera retenido al reclamado para juzgarlo por sus propios tribunales.

No existiendo tratado. ¿Cuál es la situación del Gobierno Argentino ante la solicitud del Gobierno Italiano?

Desde luego, esta solicitud tanto importa como pedir la extradición, puesto que se dirige a recabar el consentimiento del Gobierno Argentino a que el criminal sea juzgado por los Tribunales Extranjeros por un delito cometido en territorio de la Nación. Y es bajo este punto de vista que la cuestión debe ser considerada, a mi entender. —La ley de extradición sancionada el año ppdo. es naturalmente la que debe servir de guía al proceder de V. E.—

«No se considera la extradición dice el art. 3.º inciso 3.º, cuando los delitos hubiesen sido cometidos en territorios de la República».

Según los antecedentes que dejo expuestos, no habría entonces, lugar a la remisión del sumario, por cuanto en realidad, importa acordar la extradición.

Hay, sin embargo, en la ley una disposición que indirectamente favorece la gestión del señor Ministro de Italia.

No puede negarse a una Nación el derecho de juzgar y castigar delitos cometidos fuera de su territorio, cuando los criminales se encuentran en él. El Brasil ha dictado no ha mucho, una extensa ley sobre el particular, a ejemplo de otras naciones. y fuera de desear que entre nosotros se establecieran reglas fijas sobre punto de tanto interés en la legislación moderna.

No puede negarse a las autoridades de Italia el derecho de traer a juicio al súbdito italiano Agnese existente en Italia, por la muerte que dió en esta ciudad a otro súbdito italiano, si así lo establecen sus leyes. Y en tal caso, los tribunales argentinos estarían en el deber de facilitarles las pruebas y antecedentes que les fueran pedidos, cumpliendo los exhortos que por los de Italia les fueren dirigidos.

«Los exhortos emanados de una autoridad extranjera competente, en materia criminal, no político, dice el art. 30 de la ley antes citada, se introducirán por la vía diplomática y serán transmitidos a las autoridades judiciales competentes».

Resumiendo lo expuesto, diré, ahora, a V. E. que si no puede acordarse la remisión de las diligencias del sumario, porque esto importaría acordar la extradición, nada obsta a que, al hacerlo al señor ministro le signifique V. E. que los Tribunales de la Nación darán cumplimiento a los exhortos y requerimientos que le fuesen dirigidos por los Tribunales de Italia.

De esta manera, se habrá, a mi juicio, cumplido con los preceptos de la ley, sin desconocer la solidaridad que debe existir entre las naciones civilizadas para la represión de los crímenes, mientras los tratados y el progreso de la legislación no hayan establecido reglas más precisas. — Diciembre 6 de 1886—.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Diciembre 7 de 1886.

Tomo 7, pág. 511. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Procede que el P. E. suscriba un tratado de extradición que le propone el Gobierno Británico, por cuanto dicho proyecto, salvo diferencias de detalle, está en un todo conforme con nuestra ley de extradición de 25 de agosto de 1885, que fija las reglas y principios que en materia de extradición deben servir de guía al Gobierno Argentino en sus relaciones con las naciones extranjeras.
- II. — De la ley citada, se desprende que el Gobierno Argentino ha aceptado de lleno el principio de la extradición de criminales en base a la reciprocidad, y de arreglar a tenor de la misma los tratados existentes, denunciando los que estuvieran en oposición con sus términos.

Tratado de extradición, entre la República Argentina e Inglaterra

Señor Ministro:

La ley de 25 de agosto de 1885 ha venido a fijar las reglas y principios que deben servir de guía al Gobierno Argentino en sus relaciones con las naciones extranjeras, en materia de extradición.

«El Gobierno Argentino, dice el artículo 1.º de esta ley, podrá entregar a los Gobiernos Extranjeros, con la condición de reciprocidad, a todo individuo perseguido, acusado o condenado por los Tribunales de la potencia requirente, siempre que se trate de un crimen o de un delito de los que se indiquen en la presente ley, y de conformidad a las reglas en ella establecidas».

«El procedimiento establecido en la presente ley, agrega el artículo 32, se aplicará también a los casos regidos por los tratados de extradición en todos aquellos puntos que no estuviesen en contradicción con sus estipulaciones».

«El Poder Ejecutivo, dice su disposición final, denunciará a su vencimiento, todos los tratados de extradición que no estén ajustados a los preceptos de esta ley».

De esta transcripción fácilmente se desprende que, en armonía con las doctrinas más adelantadas sobre el particular, el Gobierno Argentino acepta de lleno el principio de la extradición, y sólo exige la reciprocidad para la entrega de los criminales que le fuese requerida, con arreglo a los principios que fija de antemano como norma de sus procedimientos.

Vése también que fué la mente que precedió a la sanción de esta ley, arreglar a su tenor los tratados existentes en cuanto no estuvieran en oposición con sus disposiciones, y uniformar los que en adelante celebrase la Nación, a los principios y procedimientos que establecía por regla general.

Las bases propuestas por el señor Ministro de S. Majestad Británica sólo diferían en puntos de muy escasa importancia, si bien nuestra ley es más amplia y comprensiva dando solución a muchos puntos importantes de detalles, que conviene siempre esla-recer para no dejar lugar a dudas y cuestiones en lo sucesivo.

No importando la ley tantas veces recordada otra cosa que fijar las reglas y principios que debían servir de norma a la Nación en esta importante materia, juzgo que dentro de sus términos, y en ejercicio de sus facultades constitucionales, está V. E. habilitado para celebrar con el señor Ministro de S. Majestad Británica la convención a que él le invita. — Enero 3 de 1887.

Con respecto a este dictamen hay resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de marzo 23 de 1887.

Señor Ministro:

Esta convención está, a mi juicio, en todo conforme a las prescripciones de nuestra ley general sobre la materia.

Sólo encuentro que podría agregarse para alejar todo motivo de vacilación, lo siguiente: al final del artículo 5.º *no tendrá igualmente lugar cuando según las leyes de cada país la pena del delito sea menor de un año de prisión; —al final del 8.º;— deberá así mismo acompañarse copia de las leyes referentes a las penas que correspondan al crimen o delito que motiva la extradición.*—
Junio 16 de 1888.

Tomo 7, pág. 467. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe permanecer en el Archivo General de la Nación, el archivo del Cabildo de 1810, por cuanto se lo considera como parte integrante de la historia general del país.

La Municipalidad de la Capital, pide para su archivo los contratos celebrados por el Gobierno con las Compañías de Tranways, las actas capitulares de 1815, y otros documentos

Señor Ministro:

El Director del Archivo General demuestra de la manera más palpable la ninguna razón que existe a la Intendencia de la Capital en su solicitud respecto a la entrega del Archivo del antiguo Cabildo. Y son tan claras y sencillas las consideraciones que aduce que es de todo punto excusado pretender esforzarlas.

El Archivo del glorioso Cabildo de 1810 es, en efecto, parte integrante de la historia general del país, y en poco puede interesar al gobierno local del municipio. Está bien, por consiguiente, donde está, y allí debe quedar.

Pienso por esto que debe V. E. limitar la devolución que solicita la Intendencia a los antecedentes que tengan relación con los Tranways de esta Capital. — Enero 12 de 1887.

Departamento de Justicia. — Resolución de mayo 7 de 1887 que expresa: Agréguese el expediente de referencia y pase en vista a la Intendencia Municipal.

Tomo 7, pág. 493. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Las islas situadas entre San Nicolás y San Fernando, forman parte del territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Dirección General de Rentas, eleva nota de la Receptoría del Baradero dando cuenta de actos jurisdiccionales efectuados en las islas de ese punto por la Municipalidad

Excmo. Señor:

Reproduzco lo que en un caso análogo y reciente he manifestado a V. E.

«Las islas que lindan con la Provincia de Buenos Aires, desde San Fernando a San Nicolás han sido consideradas siempre como parte integrante de su territorio».

De tiempo inmemorial, las autoridades Provinciales han ejercido jurisdicción sobre ellas dando en posesión sus terrenos, reglamentando el corte de sus bosques, estableciendo escuelas, alcaldes, etc., etc.

Mientras el Congreso en ejercicio de su facultad constitucional en materia de límites, no cambie la situación actual, lo que es a mi juicio por demás dudoso, pienso que debe V. E. aceptarla. — Enero 20 de 1887.

Ministerio de Hacienda. — Se adopta como resolución lo dictaminado. — Agosto 26 de 1887.

Tomo 7, pág. 393. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No obstante no existir convención entre nuestro país y el Uruguay para el cumplimiento de exhortos, corresponde que como deber de cortesía y buena vecindad se dé cumplimiento al recibido del Gobierno Uruguayo solicitando antecedentes de una causa criminal, debiendo remitirse el exhorto a la Cámara del Crimen para que esta recabe los datos pedidos.

La Legación Oriental, solicita en copia algunos documentos relativos a J. C. Pesce y L. Moncayo

Señor Ministro:

Aunque ninguna estipulación exista entre el Gobierno Argentino y la República Oriental del Uruguay para el cumplimiento de

los exhortos o cartas rogatorias de las respectivas autoridades judiciales, pienso que es un deber de cortesía y buena vecindad de parte de V. E. acoger favorablemente la gestión del representante de aquella República.

La prestación de servicios de este género es no sólo de práctica usual entre naciones amigas, sino que está con frecuencia consignada en convenciones internacionales.

Encuentro dos entre nosotros; el Acuerdo de 14 de Febrero de 1880, con el Imperio del Brasil, y el de Agosto 31 del mismo año con el Gobierno del Paraguay, y entiendo que recientemente se ha celebrado una Convención, al mismo objeto, con el Reino de Italia.

No sería entonces equitativo negar al Gobierno Oriental lo que a otras naciones se concede.

En cuanto a la manera de proceder, pareceme lo más expeditivo remita V. E. estos antecedentes a la Cámara de lo Criminal para que recabe los datos pedidos y los remita a V. E. — Febrero 17 de 1887.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Febrero 28 de 1887.

Tomo 7, pág. 558. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que se acuerde el privilegio por 50 años que se solicita para la explotación de salinas en las costas del Atlántico, por cuanto ello significaría la constitución de un monopolio, lo que es contrario a nuestro régimen institucional.

Varios señores, solicitan privilegio por 50 años para explotar salinas en las costas del Atlántico

Señor Ministro:

Esta solicitud se dirige a pedir a V. E. privilegio para explotar salinas en las costas del Atlántico por *el término de 50 años*.

Basta esta sola circunstancia para que no la tome V. E. en cuenta, o mejor, para que la rechace *in limine*.

No necesito decir que nada es más contrario a nuestras instituciones, basadas en la libertad e igualdad de todos ante la ley,

ni más odioso y repugnante a nuestros hábitos sociales, que las distinciones y favores especiales concedidos a unos, en perjuicio de los otros; es decir los privilegios, o monopolios. — Marzo 2 de 1887.

Ministerio del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Marzo 8 de 1887.

Tomo 7, pág. 552. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Es improcedente la reclamación que contra las autoridades locales, formula ante el P. E. el Comisario de la Colonia Sarmiento, por cuanto dicha reclamación debe plantearse por los mismos colonos y no ante el P. E. sino ante los jueces locales o Juez Federal según corresponda.
- II. — Los Comisarios de Colonias sólo tienen facultad para representar al Gobierno Nacional en los derechos y obligaciones que éste tiene para con los colonos y en las relaciones que el Gobierno Central tenga con las autoridades provinciales por asuntos relativos a las Colonias.

El Comisario de la Colonia Sarmiento, sobre excusación de las autoridades locales para atender quejas y conservar la Colonia

Excmo. Señor:

Si los pobladores de la Colonia «Sarmiento» sufren daños en sus sementeras por la invasión de animales de propiedades vecinas, son los mismos colonos los que deben ocurrir por la reparación consiguiente, ante los jueces locales, o ante el Juez Federal, según el caso.

Si no se les hiciere la justicia a que creen tener derecho, quédale expedito el recurso para ante las autoridades superiores así en el orden administrativo como judicial.

V. E. no tiene jurisdicción en materias de este género, ni ha podido por consiguiente, conferirla a los comisarios nombrados para las colonias fundadas en territorios de provincia.

Estos comisarios no tienen visiblemente otro objeto que representar al Gobierno Nacional tanto en lo que se refiere a los derechos y obligaciones para con los colonos, con arreglo a sus contratos, como en cuanto a los intereses de la colonia, en sus relaciones con las autoridades de provincia.

Así por ejemplo: el Comisario de la Colonia «Sarmiento» ha podido dirigirse a las autoridades administrativas de Córdoba requiriéndoles adoptasen las medidas necesarias para evitar la destrucción de los mojonos, y la conservación de la Colonia en general.

No consta ni que los colonos, o el comisario con poder especial de los perjudicados, hayan ocurrido a los jueces locales y no se les haya hecho justicia; no consta tampoco que el comisario haya ocurrido a las autoridades administrativas en defensa de los intereses generales de la colonia, y haya sido desatendido. La comunicación del señor comisario sólo se refiere a quejas vagas, sin relación a casos prácticos y determinados.

No veo por tanto, la necesidad de que V. E. se dirija al Gobierno de Córdoba, al objeto de la recomendación que pide la Oficina Central haga dicho Gobierno a sus autoridades subalternas.

La mejor recomendación es que cada uno cumpla con su deber. — Marzo 3 de 1887.

Ministerio del Interior. — Se adopta como resolución el dictamen en marzo 17 de 1887.

Tomo 7, pág. 562. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — El Derecho Internacional y la doctrina de los Tratadistas niegan a los Cónsules y Agentes extranjeros privilegios e inmunidades personales y los Tratados vigentes con nuestro país tampoco se los acuerdan.
- II. — De conformidad con la ley de 14 de Septiembre de 1863 la Suprema Corte Nacional, conoce originariamente en todas las causas que versen sobre los privilegios y exenciones de los Cónsules y Vice-Cónsules extranjeros en su carácter público, las que versen sobre negocios particulares de los mismos corresponden a los Jueces de Sección.
- III. — Se considera ajustado a derecho el proceder del Jefe de Policía de Gualleguay, que redujo a prisión a un Vice-Cónsul italiano, que cometió actos punibles fuera de carácter público, para luego someterlo al Juez de Sección competente.

Arresto del Agente Consular de Italia en Gualleguay. — Reclamo de la Legación

Señor Ministro:

El señor Ministro de Italia insiste en encontrar motivo de censura en el proceder del Jefe de Policía de Gualleguay, y solicita que sea en consecuencia amonestado.

El señor Ministro entiende que teniendo derecho el Reino de Italia a ser considerado a la par de la Nación más favorecida, sus Cónsules y Agentes Consulares están en el goce de los privilegios e inmunidades sancionadas, tanto por el derecho internacional, como por el derecho comercial vigente entre ambos países.

El señor Ministro de Italia parte, a mi juicio de una base equivocada.

La regla de conducta del Gobierno Argentino es considerar a todas las Naciones con las que está en relaciones de amistad y de comercio, en igualdad de condiciones, no concediendo a unas favores de que las otras no gozarán.

Aunque no estuviera expresamente estipulado, la Italia sería, así, considerada al nivel de la más favorecida. Y a la verdad, si alguna debiera aspirar a excepciones en su favor sería, sin duda aquella a que más estrechos vínculos nos ligan, por la poderosa corriente de inmigración con que, más que ninguna otra contribuye al desenvolvimiento de la riqueza nacional.

Los Cónsules y Agentes Consulares de Italia tendrán, sin disputa, perfecto derecho al goce de las inmunidades de que las de otra Nación disfrutaran, si tales inmunidades existieran, ya por el derecho Internacional, ya por el Convencional vigente entre ambos países, según entiende el señor Ministro de Italia.

Recorriendo los tratados celebrados por el Gobierno Argentino, no encuentro que por alguno se hayan concedido privilegios o inmunidades a los Cónsules o Agentes Consulares, fuera de su intervención, en ciertos casos, en las sucesiones intestadas.

Estudiando la doctrina de los tratadistas del Derecho Internacional más acreditados, encuentro que, con muy raras excepciones, niegan todos a los Cónsules las inmunidades en cuestión.

«*Por regla general, dice Calvo, después de recordar las opiniones de los publicistas más autorizados, los Cónsules no gozan de inmunidades personales, ellos están sujetos a la jurisdicción civil y criminal del Estado en que residen*». «*Por algún tiempo, agrega, han estado exceptuadas de la jurisdicción criminal; pero este privilegio personal ha dejado de existir y los que en la actualidad violan las leyes territoriales caen bajo la aplicación de las leyes penales*». «Parf. 463 F. 1. última ed».

Y es esto todavía más claro y terminante con respecto a las Naciones de América.

«*Los Estados Unidos del Norte, dice el mismo Calvo pág. 469, y, a su ejemplo, todos los Estados de la América del Sud están de acuerdo en no reconocer a los Cónsules carácter alguno público, y en no concederles sino privilegio muy restringido*».

Nuestra legislación y la práctica de nuestros tribunales, están de perfecta conformidad con los principios enunciados.

Haciendo la más alta excepción que admite nuestra legislación, en obsequio a la armonía con las Naciones Extranjeras, el artículo 1.º de la ley de jurisdicción y competencia de Septiembre 14 de 1863, somete a la Suprema Corte de la Nación el conocimiento de las causas «en que se versan los privilegios y exenciones de los Cónsules y Vice-Cónsules extranjeros en su carácter público».

El artículo 2.º de la misma Ley atribuye jurisdicción a los Jueces de Sección «sobre las causas que versan sobre negocios particulares de un Cónsul o Vice-Cónsul Extranjero».

Al someter el artículo 3.º a los mismos Jueces de Sección el conocimiento de todos los crímenes de que deba conocer la justicia de la Nación no hace excepción alguna en favor de los Cónsules.

Con arreglo a estas prescripciones, la Corte Suprema y los Juzgados de Sección, han intervenido en numerosos casos a que han dado lugar los privilegios a los Cónsules en su carácter público, sus negocios particulares, y aun sus hechos de carácter criminal.

Mencionaré, entre otras, la causa criminal seguida en Mendoza contra el Vice-Cónsul de Francia, D. Hipólito Reginaud, por encontrarse en ella una declaración de la Corte Suprema, que no puede ser más pertinente. «La Corte Suprema, decía este alto Tribunal, sólo conoce originariamente de las causas de los Cónsules y Vice-Cónsules, cuando en ellas se trata de los privilegios y exenciones inherentes a su carácter público; para todos los demás casos la jurisdicción originaria, o en primera instancia, corresponde a los jueces de sección, con arreglo al inciso 3.º del Artículo 2.º en cuyos términos generales y sin distinciones deben entenderse comprendidos tanto los *asuntos criminales como los civiles*» S. 2 T. 10. P. 187.

Resulta de esta ligera exposición que, si el señor Vice-Cónsul Carboni cometió actos irregulares y punibles fuera de carácter público, sin violar, ni los principios del derecho internacional ni convencional, sino, por el contrario, conforme a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de la Nación, la autoridad local pudo reducirlo a prisión, para someterlo en seguida a su juez natural.

Eliminada la cuestión de privilegio e inmunidades, la detención del señor Carboni, por unas pocas horas, es en sí demasiado insignificante, por deplorable que sea, para justificar la intervención del señor Ministro de Italia, ni autorizar la censura que él encuentra merecer el Jefe de Policía de Gualaguay. Es posible que la conducta de este funcionario haya sido un tanto ligera y abusiva; pero debe tenerse en cuenta que está muy lejos de ser correcto el proceder del Vice-Cónsul, al capitanear una fracción de sus conciudadanos en oposición a otra, y comprometer la tranquilidad pública, en lugares destinados al recogimiento.

En todo caso, si hubo abuso de parte del Jefe de Policía, lo que no resulta de los antecedentes agregados, él sería de aquellos a que están sujetos los habitantes todos de un país nuevo, en que los resortes de toda administración dejan siempre que desear. Sería además, de tan exigua importancia, que no merecería ser tomado en consideración.

El señor Carboni, tiene por otra parte, y por último, su acción expedita para pedir reparación ante los tribunales competentes. — Marzo 24 de 1887.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de marzo 31 de 1887 que expresa: «Dirijase al señor Ministro de Italia la carta verbal en los términos acordados».

Tomo 7. pág. 501. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente el pedido que formula el Ministro de Gran Bretaña para que el P. E. haga cesar el embargo ordenado por un juez sobre la Estación Central del F. C. de la Boca a Ensenada, embargo que ha tenido lugar en juicio que la Empresa sigue contra varios particulares, por cuanto el P. E. carece de facultades para intervenir en cuestiones judiciales.

La Legación de Inglaterra, pide la intervención del Gobierno acerca de la cuestión seguida entre algunos particulares y la Compañía del F. C. de la Boca y Ensenada

Señor Ministro:

De la exposición del señor Ministro de S. M. Británica y de los antecedentes que acompaña claramente se desprende, que la Empresa del Ferro Carril a la Ensenada, sigue pleito con varios particulares sobre expropiación de un número más o menos crecido de varas de terreno. Entre los mismos antecedentes se registra la copia de un escrito recientemente presentado al Juzgado de 1ª. Instancia, reclamando de cierta liquidación practicada, que la Empresa juzga inaceptable. Si la resolución del juzgado le fuera adversa tendría todavía la Empresa el derecho de acudir a los Jueces Superiores.

No veo por esto, cómo, ni en qué carácter, podría V. E. hacer sentir su influencia en un asunto pendiente ante los tribunales, sin invadir sus atribuciones y poner en duda su honorabilidad o competencia.

Abrigo la confianza, y V. E. no puede menos de abrigoarla también, de que la Empresa ha de encontrar en los jueces de la Nación la justicia que le sea debida.

No me creo autorizado, ni veo objeto práctico en abrir juicio sobre cuestiones pendientes sobre el único Poder encargado de resolverlas. — Marzo 25 de 1887.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de abril 29 de 1887 que expresa: «Contéstese lo acordado».

Tomo 7, pág. 576. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Es improcedente el pedido que se formula de contraer matrimonio ante un juez de paz, por cuanto el Código Civil sólo reputa válido el matrimonio religioso, celebrado según las leyes y ritos de la religión a que pertenecen los contrayentes.
- II. — El Código Civil no ha previsto el caso de que no exista en el país ministro de la religión a que pertenecen los contrayentes o que éstos al no profesar ninguna, se vieran en la imposibilidad de contraer matrimonio, por lo que corresponde la sanción de una ley especial que determine la forma de celebrar estos matrimonios o lo que es mejor aun, el establecimiento del matrimonio civil que estaría conforme con la liberalidad de nuestra Constitución en materia de ideas religiosas.

D. Venancio Berdia y Josefa Pando, solicitan poder contraer matrimonio civilmente

Señor Ministro:

D. Venancio Berdia y Da. Josefa Pando, españoles, vecinos de esta Capital, solicitan de V. E. faculte al Jefe del Registro Civil para que autorice el matrimonio que desean contraer. Dicen que son ambos miembros de la Iglesia llamada «Bautista» cuyos

ritos no reconocen otra ley que la del Registro Civil, ni confieren a sus Pastores el privilegio de legalizar los matrimonios con prescindencia de la autoridad civil.

Sea de esto lo que sea, el hecho es que los comparecientes manifiestan la imposibilidad en que se encuentran de contraer matrimonio, y piden a V. E. habilite a un funcionario público al objeto de que legalice la unión que se proponen formar.

En un caso de igual naturaleza dije a V. E. lo que reproduzco ahora:

«D. Juan Mornhingweg y Da. Luisa Ochler, colonos de Olavarría, solicitan de V. E. *un decreto o autorización para contraer matrimonio con todos los efectos civiles ante el Juez de Paz*».

La materia de matrimonio está regida por el Código Civil, y no está en las facultades de V. E. alterar o modificar sus prescripciones.

El Capítulo 3.º Título 1.º Libro 1.º S. 2 estatuye que el matrimonio entre personas católicas debe considerarse *según los cánones y solemnidades prescriptas por la Iglesia Católica*.

El siguiente declara válido el matrimonio celebrado entre católico y cristiano no católico, *siempre que sea autorizado por la Iglesia Católica y como fuese de práctica en la Iglesia de la Comunión a que perteneciere el esposo no católico*.

Finalmente el 5.º declara así mismo válido el matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia Católica entre cristianos no católicos, o entre personas que no profesan el cristianismo, *siempre que fuere celebrado en conformidad a las leyes del mismo Código y según las leyes y ritos de la Iglesia a que los contrayentes pertenecieren*.

Disposición alguna atribuye efectos civiles a la unión que se contrajere ante la autoridad civil, sin la intervención de los ritos de alguna religión, ni aún con respecto a los que no profesen religión de ningún género.

El artículo 1219, en cuyo espíritu creen los interesados encontrar la autorización que solicitan, se refiere exclusivamente a la manera en que los contrayentes pueden disponer de sus bienes *antes del matrimonio*, pero en nada modifica los requisitos que el mismo Código ha juzgado indispensables para la validez de la unión conyugal.

Los vecinos de Olavarría que han ocurrido a V. E. se encuentran en una dificultad seria y acaso en una imposibilidad verdadera.

La Constitución garante a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, la más amplia libertad de conciencia. A ninguno obliga a profesar una religión determinada, ni tampoco a profesar alguna.

La ley ha debido entonces prever la situación en que se encuentran colocados los colonos referidos; es decir, en el caso en que profesando una religión que no es la católica, no exista en la República ministro de su credo; o bien de que, no profesando religión alguna, se vean en la imposibilidad de formar una familia que es el primero de todos los derechos que la Constitución garante igualmente a todos.

La inmigración de los pueblos del norte principia a llegar en mayor número a nuestras playas, y este caso, hoy aislado, bien puede producirse con frecuencia; y aunque fuera único, no puede menos de merecer la solicitud de los Poderes Públicos. Es uno de los caracteres distintivos de la civilización en nuestros días, el respeto y la protección que la comunidad dispensa al derecho individual, esté representado por uno o por muchos de sus miembros.

La solución que desde luego ocurre es la sanción de una ley especial, que determine la manera en que tales matrimonios deban celebrarse; o bien y más naturalmente, el establecimiento del matrimonio civil, en la forma que existe en la mayoría de las naciones católicas y es de esperarse exista entre nosotros antes de mucho».

El presente caso pone otra vez más en evidencia ante V. E. y ante el país, que existe en nuestra legislación un vacío que no debiera continuar por más tiempo.

Mientras no sea permitido a Católicos y Protestantes y a los que no son ni Protestantes, ni Católicos, ni profesan religión alguna, formar una familia, sin abjurar sus convicciones o sus creencias, están muy lejos de ser una realidad las más solemnes declaraciones de la Constitución, y son mentidos los beneficios de la libertad que ella ofrece a todo el que quiera habitar el suelo argentino. — Marzo 28 de 1887.

Departamento de Justicia. — Resolución en mayo 24 de 1888; que expresa: «Hallándose comprendida la solución de este asun-

to en el proyecto de ley de matrimonio sometido a la consideración del Honorable Congreso, archívese.

Tomo 7, pág. 549. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Atento a la urgencia con que se requiere una Ley de Marcas y Guías para el Territorio Nacional de la Pampa, corresponde que provisoriamente se ponga en vigencia el Código de la materia que rige en la Provincia de Buenos Aires, encargándose al mismo tiempo la confección de un proyecto de ley para los territorios nacionales a someterse oportunamente a la consideración del Poder Legislativo.

El Gobernador de la Pampa Central, sobre la conveniencia de que se dicte una ley de Marcas y Guías para ese territorio

Señor Ministro:

No ha mucho, vino a mi despacho un asunto de igual naturaleza. Fué entonces mi opinión que, vista la urgencia que con tanto apremio hace sentir el señor Gobernador de la Pampa Central, debiera V. E. poner provisoriamente en vigencia el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, encomendando al mismo tiempo a la Oficina C. de T. y Colonias, o a una comisión de personas competentes, un proyecto de ley sobre la materia más en armonía con las necesidades de los Territorios Nacionales, para ser luego sometido al Congreso.

La expresada Oficina podrá, acaso informar a V. E. acerca de lo que haya podido hacerse al respecto. — Mayo 19 de 1887.

Departamento del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. » Julio 23 de 1887.

Tomo 7, pág. 560. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiendo tenido lugar una incidencia entre empleados policiales y sirvientes de la Embajada Alemana, por haber estos violado Ordenanzas Municipales y citados para la imposición de la multa se negaron a comparecer, consultando el señor Jefe de Policía el temperamento a seguir, corresponde que se le haga saber; que atenta a la escasa importancia del incidente, debe poner los hechos en conocimiento del señor Ministro de Alemania, para que sea éste el que disponga las medidas correctivas del caso contra sus empleados.

Incidentes entre la policía y sirvientes del Sr. Ministro de Alemania

Señor Ministro:

El señor Jefe de Policía de la Capital pone en conocimiento de V. E. un ligero incidente ocurrido con algunos de los empleados o sirvientes del señor Ministro de Alemania.

Parece que de la casa habitación del señor Ministro se arroja ba agua a la calle, con infracción de las Ordenanzas Municipales; y que, intimado el sirviente que hacía el servicio que daba lugar a la salida del agua, la suspendiera, contestó con arrogancia que era dueño *en su casa de hacer lo que quisiera*. Resulta además, que, citado dicho sirviente para la imposición de la multa en que había incurrido, rehusó comparecer.

Desea el comisario que ha intervenido en este caso se le indique, si, con *arreglo a las prácticas*, ha de dar conocimiento al señor Ministro Alemán, pidiéndole que por sí castigue a sus subordinados, o si ha de seguir los procedimientos de estilo para obligarles a venir por la fuerza a la Comisaría.

El señor Jefe de Policía ha procedido acertadamente al detener su acción ante el domicilio de un Ministro extranjero, y traer el caso a conocimiento de V. E.

Desde luego, el incidente es en sí demasiado insignificante para que pueda tener otra solución que la que el mismo Comisario indica como *arreglada a las prácticas*. Bastará en efecto que el mismo Comisario, o algún empleado de V. E. ponga el hecho en conocimiento del señor Ministro de Alemania, para que él corrija a los empleados de su casa y se evite la repetición de hechos semejantes.

Esto hace por fortuna innecesario traer a discusión la doctrina prevalente acerca de los privilegios e inmunidades de que go-

zan los Ministros extranjeros, con arreglo a la práctica general de las Naciones.

Los principios fundamentales en que reposa esta delicada materia son, a la verdad, claros y por todos admitidos, su aplicación a los casos ocurentes ha presentado siempre, empero, enojosas cuestiones, por la diversidad de circunstancias que rodean los hechos y la dificultad que la apreciación ofrece.

Nadie desconoce que el representante de la Soberanía de una Nación, necesita toda libertad e independencia, y no puede estar sujeto al imperio de las leyes del país en que ejerce su misión.

No es posible desconocer, por otra parte, que las inmunidades de que se rodea a la persona del Ministro, al personal a su servicio, y a su propio domicilio, no pueden, ni deben, convertirse en un peligro para el país que las otorga, ni en menoscabo de sus instituciones.

Si los Ministros extranjeros, en una palabra, gozan de legítimas inmunidades y prerrogativas, justo es que, a su vez, respeten ellos las leyes del país en que residen, según opinan todos los tratadistas, y lo demuestra el más vulgar raciocinio.

Como he dicho antes, sin embargo, todo esto felizmente no tiene aplicación en el presente caso, pues se trata de un incidente sin importancia, y bastará a remediarlo según antes he indicado, sea puesto en conocimiento del señor Ministro Alemán, de la manera que V. E. estime más conveniente. — Mayo 26 de 1887.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad al dictamen. — Junio 8 de 1887.

Tomo 7, pág. 601. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Corresponde que se suscriba un proyecto de convención con el Gobierno Suizo, sobre extradición, por cuanto dicho proyecto, salvo diferencias de detalle, está en un todo conforme con nuestra Ley de extradición.
- II. — Habiéndose llevado a cabo la referida convención por intermedio de nuestro representante en Suiza, corresponde que el P. E. antes de su aprobación, observe solamente el art. 6.º de la misma que limita los efectos de la prescripción a las leyes del Estado reclamante, siendo en cambio la doctrina imperante la que establece que cada vez que la acción o la pena estén prescriptos, sea por las leyes de la Nación que reclama, sea por las de la requerida debe prevalecer la disposición más favorable al reclamado.

Tratado de extradición, entre la República Argentina y la Confederación Suiza

Señor Ministro:

El tratado de extradición que propone el Gobierno de la República de Suiza, no se aparta de nuestra ley general sobre la materia sino en puntos de detalle, de escasa importancia, estando en todo lo demás, y en la parte sustancial, de perfecto acuerdo con sus disposiciones.

Haré notar brevemente las diferencias más saltantes.

El artículo 2.º del proyecto incluye entre los casos de extradición, al autor, al cómplice y al simplemente acusado de tentativa de un crimen o de un delito común.

No estando excluidas por nuestra ley, ni la complicidad ni la tentativa, es claro, que están ellas comprendidas dentro de los términos generales del artículo 2.º, toda vez que la complicidad o tentativa merezca *pena corporal no menor de un año de prisión*.

El artículo 3.º del proyecto, aunque en términos distintos reproduce la disposición del 5.º de la ley, dirigida justamente a no garantizar la impunidad en los casos exceptuados de extradición.

El artículo 5.º del proyecto establece que la extradición tendrá lugar *aun por delitos anteriores*, a la fecha en que la convención entrare en vigor. No hay en la ley de Agosto disposición análoga, pero, puesto que ella permite la entrega, aún en la ausencia de

estipulación expresa, es evidente que, salvo declaración en contrario, la celebración de una Convención no excluye la entrega por delitos anteriores.

En todo lo demás, como he dicho, al principio, sólo median entre el proyecto y la ley, pequeñas variantes en la redacción y en el orden de la exposición, siendo de notar que la ley Argentina es más metódica y ordenada.

Aceptada ya por V. E. la conveniencia de consagrar por estipulaciones de este género los principios de nuestra ley, que representa indudablemente un progreso, pienso que, al celebrar lo que propone el Gobierno de Suiza, debiera V. E. ajustarse en cuanto posible fuera a su letra y a su método. — Mayo 26 de 1887.

Señor Ministro:

La convención que ha celebrado el señor Ministro de la República en Berna con el Gobierno de la Confederación Suiza para la extradición recíproca de criminales está ajustada a las instrucciones que para el efecto le dió V. E. y a los principios establecidos por nuestra ley general sobre la materia. Sólo observaré que el artículo 6.º limita los efectos de la prescripción a las leyes del Estado reclamante, siendo hoy la doctrina generalmente admitida que toda vez que la acción o la pena estén prescriptas, sea por las leyes de la Nación que reclama, sea por las de la requerida, debe prevalecer la disposición más favorable al reclamado.

Aunque esta modificación no es sustancial, paréceme conveniente que V. E. la consigne en su aprobación para no dejar un precedente para el futuro. — Enero 14 de 1888.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resoluciones en junio 6 de 1887 y enero 25 de 1888.

Tomo 6, pág. 373. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se apruebe el tratado de extradición suscrito con el Gobierno Uruguayo por cuanto está conforme con nuestra Ley de la materia de 1885; debiendo observarse solamente que se ha omitido la circunstancia que legisla el art. 12 inc. 3.º de la ley citada. (Que exige entre los documentos que deben acompañarse al requerirse la extradición, «la copia de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado», según la legislación del país requirente) disposición que importa una conquista en el sentimiento de humanidad que el Gobierno Argentino no debe abandonar, que tiene por objeto el impedir que el criminal sea castigado con penas más severas que las que se aplican en iguales circunstancias, por los tribunales de la Nación que entrega al reo.

Sobre el Tratado de extradición entre la República Argentina y la Oriental del Uruguay

Señor Ministro:

El tratado de extradición celebrado por el señor Ministro Argentino, cerca de la República Oriental del Uruguay, con el Gobierno de la misma, está perfectamente ajustado a los preceptos de la ley de Agosto 25 de 1885, que según ella misma ordena, debe servir de norma a V. E. al celebrar convenciones de este género, denunciando las existentes.

Sólo encuentro que se ha omitido, una circunstancia de detalle, de importancia para mí.

Nuestra ley dice que entre los documentos con que haya de requerirse la extradición, debe acompañarse la *copia de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado*, según la legislación del país requirente.— Artículo 12 inciso 3.º. —

Responde como, bien se alcanza, esta prescripción a un sentimiento de humanidad; a que el criminal no sea castigado en la nación que lo pide, con penas excesivas, ni con más rigor que aquel que mereciera, juzgado por los Tribunales de la Nación que lo entrega.

Ella está consignada en el Tratado con el Brasil, y algunos otros más, importa una conquista, y pienso que no debe V. E. abandonarla. — Junio 11 de 1887.

De conformidad con nuestras leyes, los matrimonios celebrados ante el Cónsul del país a que pertenecen los contrayentes, no surten efectos legales en el territorio de la Nación, ni con respecto a los bienes, ni con relación a las personas y en este sentido no tiene lugar la sociedad conyugal, ni los hijos son reputados legítimos a los fines de la sucesión.

Los matrimonios de este género sólo producen plenos efectos en el país a que pertenecen los cónyuges.

El Intendente Municipal, denuncia el hecho de que el Cónsul de Italia en Buenos Aires celebra matrimonios civilmente

Señor Ministro:

Algunas de las Naciones europeas, entre otras Inglaterra, Francia e Italia, de mucho tiempo atrás, confieren a sus agentes diplomáticos y aun a los Cónsules, la facultad de autorizar matrimonios entre sus naturales en los países en que residen. Ninguna ha pretendido que estos matrimonios surtan efectos legales en la Nación en cuyo territorio se celebren si las leyes locales no los autorizan también.

El principio universalmente admitido de que los actos y contratos deben celebrarse con sujeción a las leyes del país en que tienen lugar, es demasiado justo y obvio, para que pueda nadie pretender desconocerlo y si esto es exacto con relación a la generalidad de los contratos, lo es mucho más con respecto al matrimonio, el primero y el más importante de todos. De ahí el principio que domina toda esta materia, en cuyo mérito salvo ligeras restricciones con respecto a la capacidad de las personas, la validez de un matrimonio se determina por las leyes del país en que ha sido celebrado.

La autorización conferida a los Agentes Diplomáticos calculada visiblemente para tiempos en que las luchas religiosas hacían difíciles, sino imposibles, los actos de la vida civil a los que no pertenecían a la comunidad dominante, tiene por objeto manifiesto facilitar las uniones legítimas entre los naturales de un mismo país residentes en el extranjero.

No es pues exacto que los casados de esta manera vivan entre nosotros en *perfecto concubinato* según afirma el señor Intendente.

Los que comparecen ante los representantes de su Nación, competentemente autorizados, para unir sus destinos, entienden contraer un verdadero matrimonio, y son esposos legítimos, ante sus conciencias, y ante las leyes de su país, como si en él se hubieran casado mediante una ficción de derecho generalmente admitida.

Cierto es que, con arreglo a nuestras leyes, estos matrimonios no surten efectos legales en el territorio de la Nación, ni con respecto a los bienes, ni con relación a las personas.

Las uniones contraídas sin la intervención de un ministro de la religión a que los contrayentes pertenezcan, no producen entre nosotros, es bien sabido, la comunidad de bienes adquiridos durante el matrimonio, ni los hijos procreados durante ellos son reputados legítimos a los fines de la sucesión.

Cierto es también que no puede ser indiferente a una Nación, en el interés de la moral y de la organización de la familia, que no sea perfecta la unión de los que habitan su suelo.

No veo sin embargo, con que título podrían prohibirse o condenarse matrimonios de este género, si los que los contraen encuentran que bastan ellos a satisfacer sus conciencias, y a garantizar sus derechos en el país de su nacimiento.

Lo único que, a mi juicio podrá hacerse en el interés general y en el de los mismos contrayentes, sería recabar a los Agentes extranjeros hagan saber a los que ante ellos ocurran a celebrar tales matrimonios, que no deben considerarse legítimos esposos, en el territorio de la República mientras no hayan llenado las formalidades que nuestras leyes exigen.

El remedio radical sería colocar nuestra legislación, notoriamente retardada sobre materia tan esencial, en armonía con las declaraciones de la Constitución y las exigencias de la civilización, de manera que fuera más fácil ocurrir al funcionario civil que al mismo Cónsul.

Mientras tanto, no veo conveniente en que iniciara V. E. gestión alguna sobre el particular, pues bien podría acaecer se le observara, que la intervención de los agentes diplomáticos en materia ajena a sus funciones ordinarias, tienen su explicación y su origen en la deficiencia de nuestras propias leyes. — Julio 12 de 1887.

Tomo 7, pág. 598. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. -- No se considera correcto el que los funcionarios públicos procedan «por consultas» al P. E. requiriéndole asesoramiento para el ejercicio de sus funciones, ya que si aceptaron el cargo, deben conocer la forma de desempeñar el mismo.
- II. -- La falta de Escribano en una localidad no puede convertir en tal, ni al Juez de Paz ni a ninguna otra autoridad.
- III. -- No obstante que la ley de Octubre 18 de 1882, no confiere a los Jueces de Paz de Territorios Nacionales la facultad de intervenir en el otorgamiento de contratos, conforme a la jurisprudencia y a la práctica en igualdad de condiciones, pueden autorizar los que se otorguen, en su presencia, haciéndolos firmar por dos testigos e inscribiéndolos en un Registro especial.

El Juez de Paz de Posadas, sobre el procedimiento que debe observar cuando desempeña las funciones de Escribano Público

Señor Ministro:

El señor Juez de Paz de Posadas consulta sobre si, a falta de Escribano, puede asumir las funciones de tal, otorgar toda clase de contratos, llevar registros, etc., etc.

Antes de ahora he tenido ocasión de decir a V. E. que no encuentro correcta esta manera de proceder *por consultas*.

La ley supone que todo ciudadano conoce sus disposiciones, con más razón debe suponerse que el que acepta un puesto, debe saber cuales son sus atribuciones, sin necesidad de ocurrir a sus superiores, que no tienen ni la misión ni el deber de asesorarles.

Diré sin embargo, que la falta de Escribano en una localidad no puede convertir, ni al Juez de Paz, ni a ninguna otra autoridad en el funcionario encargado de la fe pública, cuyo oficio requiere competencia acreditada, previo examen, y el título o autorización correspondientes para ejercerlo.

Las funciones de los Jueces de Paz en los Territorios Nacionales, están marcadas por la ley de Octubre 18 de 1882, artículos 10 a 21. Si bien ninguna de sus disposiciones les atribuye intervención en el otorgamiento de contratos, es natural suponer que conforme a la jurisprudencia y a la práctica en igualdad de condiciones puedan autorizar los contratos que ante ellos se otorguen, haciéndoles firmar por dos testigos, e inscribiéndolos en un libro, que al efecto deberán llevar. — Agosto 20 de 1887.

Ministerio del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Agosto 26 de 1887.

Tomo 7, pág. 613. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que el P. E. haga lugar a un pedido de indemnización que en su oportunidad se presentó a la correspondiente Comisión Liquidadora que no halló mérito para su reconocimiento por falta de pruebas, por cuanto carece de facultades el P. E. para rever resoluciones de una Comisión cuya jurisdicción se determinó por ley y que terminó de actuar hace treinta años.

Reclamo de D. E. Solanet y Cía., por perjuicios que le ocasionaron tropas de la Confederación en 1859

Señor Ministro:

Hay una razón más fundamental que la que aduce la Contaduría General, para que V. E. no pueda tomar en consideración la solicitud del señor Solanet.

Esta reclamación fué presentada en 1859 a la Comisión Liquidadora, nombrada conforme a lo establecido en las Convenciones con las Naciones amigas, para el arreglo de los perjuicios que sus nacionales hubiesen sufrido a consecuencia de nuestras lamentables guerras civiles.

La Comisión encontró que no había mérito para el reconocimiento, por la insuficiencia de las pruebas.

El señor Solanet procuró salvar esta excepción, produciendo una información sumaria, según se advierte por el testimonio agregado al principio de estos antecedentes.

Pero, ya sea porque esta información no se presentó en tiempo, ya por que no la encontró bastante la Comisión, terminó ésta su cometido, dejando subsistente su resolución primitiva.

Hoy después de 27 años, se pretende que entre V. E. a examinar, si la comisión procedió bien, o mal, si las pruebas producidas son, o no, suficientes.

V. E. no puede, a mi juicio rever las resoluciones de una Comisión, cuya jurisdicción arrancaba de la ley, cuya misión terminó ha cerca de treinta años, y sólo puede de nuevo abrirse por ministerio de la misma ley.

Si hubiera de entrar al fondo, diría a V. E. que estoy en todo conforme con la doctrina de mis antecesores relativamente a la prueba testimonial.

Es posible que una Comisión liquidadora, especie de tribunal arbitral en desempeño de una misión reparadora y de equidad, con facultades amplias y especiales conferidas por la ley, es posible digo, que una Comisión en condiciones tales acepte el testimonio de testigos sobre hechos recientes, y que ella misma pueda ratificar o ampliar; V. E. empero, no ha recogido la sucesión de la comisión liquidadora ni tiene las mismas facultades. Si alguna vez ha tomado en cuenta V. E. reclamos de este género, presentados en tiempo, y no resuelto por falta de pruebas, ha sido en presencia de documentos públicos de carácter irrecusable, y no de declaraciones de testigos, deficientes y ambiguas siempre.

Agregaré que es, a mi entender, dar una interpretación exagerada a los sentimientos de amistad y de concordia que inspiraron las convenciones de 1858, pretender responsabilizar a la Nación por las depredaciones de los Indios. En los desbandes y derrotas de los mismos ejércitos regulares quien ha pretendido jamás se indemnicen por los perjuicios que originan?

Pienso por lo expuesto que no debe V. E. hacer lugar a lo solicitado por el señor Solanet, quien en todo caso, ha debido ocurrir al Congreso. — Agosto 20 de 1887.

No corresponde la reclamación diplomática que se solicita, por tratarse de una causa juzgada y resuelta por la Corte Suprema de Bolivia, que de llevarse a cabo importaría para nuestro Gobierno el examen de dicha sentencia, lo que es contrario a elementales principios de derecho público.

Reclamo de D. Angel E. Carranza, contra el Gobierno de Bolivia sobre cumplimiento de un contrato

Señor Ministro:

La cuestión que el señor Carranza seguía con el Gobierno de Bolivia, sobre cumplimiento de un contrato, ha sido juzgada y resuelta definitivamente por la Corte Suprema de aquella Nación, según consta del testimonio que el mismo señor Carranza acompaña.

Ha sido adverso al señor Carranza, y no veo qué intervención pueda asumir V. E. para remediarlo.

Pretender que V. E. entre a examinar si dicha sentencia es justa, o no lo es, importaría el desconocimiento de los principios más elementales del derecho público.

Solicita el señor Carranza la protección de V. E. a fin de que tomando en el asunto la intervención que le corresponde, obtenga del Gobierno de Bolivia el reconocimiento de sus derechos en la forma que más adelante indicará.

Nada indica sin embargo, en su larga exposición.

Ningún medio, ningún temperamento propone o menciona siquiera, que haga posible la intervención de V. E., y como no lo encuentro tampoco por mi parte, absolutamente, pienso que nada justificaría la acción de V. E. en este caso. — Agosto 20 de 1887.

El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió: «Sin que importe por parte del Gobierno, resolver si hay o no lugar a la reclamación diplomática, pase a la Legación Argentina en Bolivia para que en forma amistosa interponga sus buenos oficios en pro de los intereses del reclamante.

Corresponde que se apruebe una convención internacional, no obstante que su texto no está del todo conforme con nuestra legislación, si a su vez la otra parte contratante, se ha separado también de su legislación interna.

Convención entre la República Argentina e Italia, para el diligenciamiento de exhortos y ejecución de sentencias

Señor Ministro:

El señor Ministro de la República en Italia, desea saber si nuestra legislación, o la jurisprudencia establecida por la justicia de la Nación no estaría en oposición a los principios propuestos por el Gobierno de Italia, como base para una Convención referente a la ejecución de las sentencias pronunciadas por los Tribunales de uno y otro país en los territorios respectivos.

Dice el señor Ministro que, para ser ejecutable en el Reino de Italia una sentencia extranjera, es necesario se obtenga el «pareatis» del Tribunal Superior del Distrito donde deba cumplirse la sentencia, oyéndose a los interesados en un juicio sumario limitado a examinar.

1.º — Si la sentencia ha sido dictada por autoridades competentes.

2.º — Si han sido legalmente citadas las partes:

3.º — Si éstas han sido debidamente representadas en el juicio, o legalmente declaradas contumaces.

4.º — Si la sentencia no contiene disposiciones contrarias al orden público o al derecho público del Estado.

Registrando nuestros antecedentes legislativos y judiciales, encuentro que las reglas aceptadas por Italia, son con escasa diferencia las mismas que rigen para nuestros tribunales.

Aun antes de la sanción expresa de la ley, en 1869, la Corte Suprema de la Nación en el caso de Gómez contra Baudrix sobre la ejecución de una sentencia dictada por los Tribunales de la República Oriental del Uruguay. Causa L. X. T. 7 S. 1 —fundándose en que los Jueces Nacionales, deben aplicar a los casos ocurrentes, no sólo la Constitución y las leyes sino también los principios del derecho de gentes— aceptó las conclusiones siguientes al mandar ejecutar las sentencias de los Tribunales Orientales:

1.º — Las sentencias pronunciadas en un país extranjero, no tienen por derecho estricto autoridad obligatoria en otro estado.

2.º — Las naciones civilizadas han consentido la ejecución en ellos con más o menos requisitos.

3.º — Estos son o el principio de la reciprocidad o un examen del cual resulte que no hay en ella una evidente injusticia, un ataque a la soberanía del estado o a los principios de derecho o que sean definitivos dictados en último resorte con la audiencia legal de las partes por Tribunales competentes y habiéndose dejado abiertos todos los recursos legales.

4.º — Siendo uniforme en todas las Naciones la jurisprudencia respecto a la ejecución de las sentencias extranjeras, no es posible prescindir de ella sin contradecir la buena relación y armonía de las Naciones entre sí.

5.º — El demandado tiene derecho a demostrar la evidencia de la injusticia y nulidad de las sentencias extranjeras por ser contraria a la ley expresa o por no habérsele dado audiencia, ni permitido los medios de defensa o por incompetencia de los Tribunales.

6.º — Debe por consiguiente acordarse la ejecución a las sentencias legales y válidas dictadas en país extranjero.

En virtud de estos principios, la sentencia de los Tribunales Orientales fué mandada ejecutar, como antes he dicho sin que existiera ley expresa y sin tener en cuenta la reciprocidad.

Posteriormente la ley de procedimientos para los Tribunales de la Capital adoptada por el Congreso en Diciembre de 1881, coloca la ejecución de las sentencias, pronunciadas en países extranjeros, no ya al amparo de la jurisprudencia de los Tribunales, o de los principios del derecho internacional, sino del derecho escrito y positivo.

Las sentencias pronunciadas en países extranjeros dice el artículo 558 del Código citado, tendrá la fuerza que establezcan los tratados celebrados entre la República y esos países.

En ausencia de tratados rigen los artículos subsistentes del mismo Código que transcribo:

«Artículo 559. En efecto de tratados que estatuyan sobre el particular, las ejecutorias de países extranjeros tendrán fuerza ante los tribunales nacionales si reúnen las circunstancias siguientes:

1.º — Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal;

2.º — Que no haya sido dictada en rebeldía de la parte condenada siempre que ésta haya tenido domicilio en la República.

3.º — Que la obligación que haya dado lugar a la ejecutoria sea válida según nuestras leyes.

4.º — Que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la Nación en que se haya dictado para ser considerada como tal y las que las leyes argentinas requieren para que hagan fe en la República».

«560. La ejecución de las sentencias dictadas en Naciones extranjeras se pedirá ante el Juez de 1.ª instancia que corresponda. Este previa la traducción de la ejecutoria y después de oír a la parte contraria contra quien se dirija y al Agente Fiscal, declarará si debe o no dársele cumplimiento».

«561. De la resolución que se dicte podrá apelarse en relación para ante la Cámara respectiva».

«562. Consentida o ejecutoriada la resolución que deniegue el cumplimiento de la ejecutoria ésta se devolverá al que la haya presentado».

«En el caso de que la resolución fuese otorgada, el cumplimiento de la ejecutoria se procederá en la forma establecida en tal ley para la ejecución de las sentencias».

Con arreglo a estas disposiciones que como se ha visto no tienen en consideración la reciprocidad hase ejecutado recientemente por los Jueces de la Capital una sentencia pronunciada por los Tribunales de Italia.

Creo que lo expuesto bastará a satisfacer los deseos del señor Ministro de la República de Italia. — Enero 25 de 1887.

Señor Ministro:

El señor Ministro de la República, en Roma se ha separado en dos puntos de nuestras leyes y de las instrucciones de V. E. según el mismo lo hace presente.

1.º — El artículo 559 del Código de Procedimientos vigente para la Capital dispone que las Sentencias de Tribunales Extranjeros tendrán fuerza ejecutoria ante los Tribunales Argentinos,

siempre que no hayan sido dictadas en rebeldía de la parte condenada, toda vez que ésta haya tenido domicilio en la República.

El Artículo 8.º de la Convención inciso 2.º admite la ejecución aunque la sentencia haya sido pronunciada en rebeldía, si la parte condenada ha sido declarada contumaz, de conformidad con los Códigos vigentes de procedimientos.

El señor Ministro en Italia ha creído con razón que la prescripción de nuestra ley no era un obstáculo invencible a la aceptación de una disposición contraria en un arreglo internacional, y las consideraciones que dice influyeron en su ánimo para ceder ante las exigencias del Gobierno Italiano, son a mi juicio fundadas y aceptables.

Si una sentencia pronunciada por un Tribunal Argentino con audiencia de las partes, es ejecutable en Italia y vice versa; no se ve, en efecto la razón por qué no lo haya de ser también cuando es pronunciada en rebeldía del que, debidamente citado, rehusó comparecer.

Nuestra legislación establece una diferencia radical entre el procedimiento en rebeldía en los juicios criminales y los civiles y de comercio.

En el primer caso todo procedimiento queda en suspenso, en el segundo la sentencia recibe completa ejecución.

Y puesto que el objeto de la Convención es establecer perfecta igualdad entre los Tribunales de uno y de otro país, no se alcanza la razón por qué la rebeldía en materia civil y comercial haya de establecer diferencia tan sensible en favor del contumaz.

Por el contrario, este desprecio de la justicia, observa oportunamente el Gobierno de Italia; este «*comptent of the courts*,» que en el caso reciente de Lagworthy ha sublevado la opinión de Inglaterra, vendría a constituir una inmunidad en favor de los litigantes de mala fe y haría en mucha parte ilusorios los propósitos de la Convención.

2.º Sepárase también el texto de la Convención, en la manera de apreciar las obligaciones a ejecutar en uno y otro país.

Otra de las condiciones que nuestra ley exige para la ejecución de una sentencia extranjera, es que la obligación que ha dado lugar a la ejecutoria, sea válida según nuestras leyes. Basta en los

términos de la Convención, que no sea prohibida por las leyes del Estado requerido.

Como se vé la diferencia no es sustancial y son muy raras por otra parte en el estado actual de la legislación en los países civilizados, las obligaciones que son válidas en uno, y no lo son, o son prohibidas en otros.

En vista de todo esto y teniendo además en cuenta que el Gobierno de Italia se ha separado a su vez del texto de sus leyes, al aceptar la limitación de la nuestra a la ejecución de las sentencias procedentes de una obligación personal, pienso que cumple a V. E. aprobar el procedimiento del señor Ministro Argentino en Roma y someter al Poder Legislativo la Convención que ha celebrado. — Octubre 11 de 1887.

Resolución en Enero 27 de 1887 y Octubre 25 de 1887.

Tomo 7, pág. 398. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No es responsable el P. E. por daños y perjuicios ocasionados por un Administrador de la Aduana, que ordenó el comiso del cargamento de un buque, impuso una multa a su capitán y prohibió su entrada hasta tanto se abonara ésta, todo ello violando normas elementales del procedimiento legislado en las Ordenanzas de Aduana, por cuanto los hechos encuadran en el artículo 1.112 del Código Civil y en consecuencia el único responsable es el Administrador por la manera irregular con que ha cumplido sus obligaciones.

Octavio Gondra, reclama daños y perjuicios ocasionados por habérsele trabado embargo al vapor Neptuno

Señor Ministro:

Encuentro suficientemente justificadas tanto la personería del señor López como la propiedad del vapor por los documentos de fs. 2 y 9 últimamente acompañados.

Queda la cuestión de la indemnización que no es a mi entender tan sencilla como la Dirección de Rentas la presenta.

El embargo del «Neptuno» fué a todas luces arbitrario e injustificable, sobre esto no puede haber dos opiniones.

Violando las formas más elementales del juicio, y aplicando las disposiciones de las ordenanzas de la manera más torcida que es posible imaginar, por la simple falta de la visación consular, el Administrador de Monte Caseros, declaró en comiso el cargamento del Neptuno e impuso a su capitán una multa igual al valor de las mercaderías decomisadas.

Al mismo tiempo ordenó la detención del vapor mientras no se pagara la multa, o se asegurara su importe.

Resolución tan descabellada, por no calificarla más duramente, no podía dejar de ser revocada, y lo fué en efecto, después de diez meses de tramitación.

Mientras tanto, el vapor permanecía embargado, y hoy se presenta a V. E. por daños y perjuicios, una cuenta, nada menos que de 120.000 pesos, que después, *moderadamente*, se reduce a la mitad.

¿El error o el abuso del Administrador obliga a V. E. a pagar estos daños y perjuicios?

He ahí el primer punto a investigar.

La Dirección General entiende que es de *simple buen sentido* la obligación de reparar todo daño cometido en virtud de medidas atentatorias, ya por particulares, ya por funcionarios públicos, que extralimiten sus facultades y conculquen las leyes que rigen su mandato. Es por esto, agrega la misma Dirección, que el perjuicio causado debe ser indemnizado, en definitiva, por el funcionario que cometió la falta, y por el superior que lo investió de autoridad, inmediatamente.

Paréceme que el simple buen sentido falta muchas veces en presencia de la ley, y no es guía segura para resolver cuestiones de este género, ni me sorprendería que, en el presente caso, nos llevará a conclusiones diametralmente opuestas.

Recorriendo las Ordenanzas de Aduana, fuera de los casos de robo y avería en los depósitos fiscales, no encuentro disposición alguna que responsabilice a la Aduana, por los daños que pueden causar los errores o las faltas de los empleados en el desempeño de sus funciones.

Advierto por el contrario, que con frecuencia los vistas detienen el despacho de mercaderías, y los Administradores las declara-

en comiso, sin que por ello los comerciantes se crean autorizados a reclamar daños y perjuicios, aunque la detención y el comiso resulten equivocados o injustos.

Verdad es que para estos casos la ley, con sabia previsión, permite la entrega de las mercaderías detenidas bajo una simple fianza. Si el comerciante no la presta, debe suponerse que le es indiferente que sus efectos continúen en depósito, y no hay razón para reclamo alguno.

Buscando una solución en las leyes generales, no la encuentro en las disposiciones que rigen el mandato, que serían las más directamente aplicables.

Bien es cierto que un Administrador de Aduana no es simple mandatario.

Su misión emana de la ley, y es por autoridad propia, y no en virtud de órdenes del que la constituyó en autoridad, que decide si las leyes fiscales han sido o no infringidas.

Como Juez, está expuesto a equivocarse, sin incurrir por ello en otras responsabilidades, que aquellas que nacen de los delitos o de los hechos ilícitos que no lo son. Si por cohecho, o mala fe notoria, por ejemplo, detuviese mercaderías a despachar, es justo que sea obligado a indemnizar los perjuicios que hubiera originado; y esta obligación subsistirá, si bien en menor escala, toda vez que el Administrador haya procedido por ignorancia o negligencia que importan responsabilidades ante la ley, aunque no constituyan delito.

«Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasione un perjuicio a otro, está obligado a la reparación del perjuicio», dice el Artículo 1109 del Código Civil.

«Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, por no cumplir si no de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, continúa el Artículo 1112, son comprendidas en las disposiciones de este título»; es decir en la obligación de reparar los daños que nacen de hechos ilícitos que no son delito.

El Administrador de Caseros es un funcionario público que ha causado un perjuicio, por la manera irregular con que ha cumplido sus obligaciones legales. Es él entonces, y no V. E. el obligado a la indemnización si a ello hubiere lugar.

Diré ahora algunas palabras acerca de esta indemnización, no obstante que, según lo que queda expuesto, el interés del fisco sobre el particular es secundario y remoto.

Lo primero que ocurre es que, si el vapor permaneció detenido, fué porque su dueño así lo quiso.

Desde el primer momento tuvo la opción de hacerle navegar, dando una simple fianza. Esta fianza se reducía a la cantidad de 2.000 pesos, valor de la mercadería fs. 18 y 19.

¿Por qué no la dió, como la dió el dueño de la mercadería?

No se ha probado, ni siquiera alegado, la imposibilidad de encontrarla.

Por el contrario todo induce a creer que nada hubiera sido más fácil.

En primer lugar, cuanto más abusivo e injustificable era el embargo, menor era el riesgo. Y si el negocio era tan pingüe como se pinta que dejara 30.000 pesos al mes ¿cómo se explica que no se encontrara un fiador por dos mil pesos?

No cabe la menor duda: si se dejó por tanto tiempo parado al vapor fué por capricho, o porque se creyó fácil preparar una reclamación, como tantas se dirigen contra el Tesoro Público, que se supone, admite todo generalmente.

El cálculo era halagador: sin gastos de carbón, ni de tripulación, el «Neptuno» navegaba a todo vapor; hacía viajes rapidísimos, ganaba fletes soberbios; y en un año, la reclamación subía a 120.000 pesos. El vapor, de veinte toneladas, había costado 4.500 pesos, y ni el Gran Capitán hubiera sacado mejor sus cuentas.

En vista de todo esto, la conclusión se desprende de por sí, y no puede ser otra que un rechazo absoluto.

Al terminar diré, no sin pesar, que el Administrador que dió la resolución que origina estas actuaciones, no puede, ni debe, continuar en su puesto.

Sí esta vez puede la Administración salvar su responsabilidad, no será fácil la excusará en la repetición de faltas o errores semejantes. — Octubre 25 de 1887.

Ministerio de Hacienda. — Resolución de conformidad al dictamen. — Abril 13 de 1889.

I. — El artículo 1.003 del Código Civil que exige la presencia de dos testigos en las escrituras de transferencia de bienes raíces no es aplicable para las que se otorgan por ante la Escribanía Mayor de Gobierno. Ellas son perfectamente válidas, con las solas firmas del Presidente de la Nación y Ministro refrendante, por cuanto constituyen actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional, cuya forma probatoria no está regida por el Código Civil, sino por la Constitución Nacional —arts. 7 y 87.—

II. — El Escribano Mayor de Gobierno, a diferencia de los Escribanos de Registros, no interviene en los contratos entre particulares, ni está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema, si no es por acto voluntario y revocable del mismo Poder Ejecutivo. Su misión está limitada a inscribir en los protocolos, los contratos que celebra el Poder Ejecutivo, única y exclusivamente a la manera que en el Registro Oficial, y en los libros que lleva cada Ministerio, se insertan las leyes y decretos respectivos. Para esto basta la firma del Presidente, refrendada por un Ministro.

El Dr. Mariano Pereyra, sobre la validez de los contratos públicos de compra-venta otorgados por el Poder Ejecutivo sin la concurrencia de testigos

Señor Ministro:

En 1882 vendió V. E. un terreno ubicado en la Provincia de Córdoba extendiéndose por el Escribano General de Gobierno la correspondiente escritura.

El comprador ocurrió a la expresada Provincia de Córdoba a registrar su título, y el Juzgado de 1ª. Instancia primero, y el Superior Tribunal después, han rehusado ordenar su protocolización, bajo el fundamento de que la escritura sólo aparece firmada por el Presidente y uno de sus Ministros, faltando los dos testigos que el Código Civil exige en la enajenación de todo bien raíz.

El mismo comprador solicita hoy de V. E. se subsane aquella falta, que en Córdoba se clasifica de *vicio esencial*.

El Escribano General de Gobierno informa que todas las escrituras otorgadas en su registro están sólo firmadas por el Presidente y un Ministro, sin la presencia de testigos.

Dice además, que esta práctica viene autorizada desde la administración del General Mitre, en la que habiendo su antecesor consultado al Ministerio de Justicia, que estaba a la sazón a mi cargo se le contestó que tales testigos no eran necesarios.

La cuestión reviste así cierta originalidad, y no carece de importancia, por cuanto afecta, ya que no la validez, la regularidad, de cientos o miles de escrituras, que sería forzoso revalidar, rehacer, para que surtieran los efectos inherentes al dominio.

Cuando el antecesor del actual Escribano de Gobierno, señor Gutiérrez, hacía su consulta, no estaba aún redactado el Código Civil y regían las leyes de España. Exigían éstas, como ha exigido después el Código, que toda escritura de enagenación de un bien raíz fuera firmada por dos testigos y autorizada por escribano. Pero al lado de la regla, como sucede casi siempre, estaba la excepción.

La ley 114 Título 17 P. 3^a. equipara el sello, es decir la firma del Rey, a la escritura autorizada por un escribano y dos testigos.

Valer dice: *«Deben las cartas para probar los pleitos sobre que fueran hechas; donde decimos que si fueren selladas con sello del Rey o de Arzobispo o de Obispo o de Cabildo o de Abad bendito que debe valer contra aquel que las mandó sellar. E aún decimos, que toda carta que sea fecha por mano de escribano público en que haya escritos los nombres de dos testigos a los menos que vale para probar lo que en ella disciere»*.

Como se ve, la firma del Rey, o la de Abad bendito tiene igual fuerza y valor que la de un escribano y dos testigos; y nadie pretenderá que sea menos la del primer magistrado de la Nación.

Con razón, se dijo entonces que, bajo la antigua legislación, bastaba la firma del Presidente y la de uno de sus Ministros.

Pasemos ahora al Código Civil.

El artículo 1.003 exige incontestablemente la presencia de los dos testigos, sin hacer distinción de ningún género.

Debe observarse, empero, que no siendo posible que un Código dé solución a todas las cuestiones, es lícito ocurrir a las leyes que han regido anteriormente, en los casos no previstos y dudosos; artículo 21 de la ley de Septiembre. La ley de Partida antes citada es entonces, perfectamente aplicable al presente.

Pero hay todavía más. La forma de los actos administrativos del Ejecutivo Nacional, no está regida por el Código Civil, sino por la Constitución y las reglas que el mismo Ejecutivo estableciere, como Poder independiente en la esfera de sus atribuciones, mientras no las dictara el Congreso.

«Los actos públicos y procedimientos judiciales de una Provincia dice el artículo 7.º gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede, por leyes generales, determinar cual será la forma probatoria de estos actos y procedimientos».

«Cinco Ministros, dice el artículo 87, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia».

He ahí la forma probatoria de los actos del Ejecutivo Nacional, *que deben gozar de entera fe en las Provincias*, no ya en virtud de la ley, sino de la misma Constitución.

¿Qué significa entonces esta Escribanía General de Gobierno, se preguntará?

A diferencia, de los escribanos de registro, el de Gobierno no interviene en los contratos entre particulares, ni está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema, si no es por acto voluntario y revocable del mismo Poder Ejecutivo. Su misión está limitada a inscribir en lo que se llama protocolo, los contratos que celebra el Poder Ejecutivo, única y exclusivamente a la manera que en el Registro Oficial y en los libros que lleva cada Ministerio, se insertan las leyes y decretos respectivos. Para ésto basta la firma del Presidente, refrendada por un Ministro, según los términos de la Constitución, como basta en los tratados con las Naciones extranjeras, mil veces más solemnes que la enajenación de un terreno.

De otra manera, si a más de la firma del Ministro hubiera de exigirse la presencia de dos testigos, resultaría que la persona más altamente colocada en la Nación, sería la que menos crédito mereciera.

Es por todo esto, mi parecer que V. E. no debe hacer lugar al otorgamiento de una nueva escritura.

Si los Tribunales de Córdoba insisten en que la falta de los dos testigos importa un *vicio radical*, habría llegado el caso de ocurrir a la Corte Suprema en virtud de la conocida disposición del artículo 14 de la Ley de Jurisdicción y Competencia, puesto que se ha puesto en cuestión una autoridad o una Comisión ejercida en nombre de la Nación, y la decisión ha sido contra la validez del título o derecho que en ella se funda. — Octubre 28 de 1887.

Ministerio del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Noviembre 18 de 1887.

Tomo 7, pág. 615. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los matrimonios entre protestantes, autorizados por los Ministros de su culto, han sido siempre reputados válidos y los certificados de nacimientos, defunciones y matrimonios expedidos por dichos Ministros merecen entera fe ante las autoridades, tanto nacionales como provinciales.

Consulta del Cónsul de Suiza, sobre casamientos y bautismos celebrados por protestantes

Señor Ministro:

Antes y después de la sanción del Código Civil, los matrimonios de protestantes autorizados por los Ministros de su religión, han sido reputados válidos, y han producido los mismos efectos civiles que los celebrados por católicos, con arreglo a los ritos de su Iglesia.

Los ministros de las comunidades protestantes existentes en la República, han llevado siempre los libros en que registraban los matrimonios que autorizaban, así como los nacimientos y defunciones, y los certificados que expedían, a petición de los interesados, han gozado de entera fe ante las autoridades nacionales y provinciales.

Creo que lo expuesto bastará a satisfacer al señor Cónsul de Suiza. — Diciembre 2 de 1887.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad al dictamen. » Diciembre 12 de 1887.

Tomo 7, pág. 623. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiéndose ofrecido en venta al Gobierno documentos que por su naturaleza revelan haber pertenecido a los archivos del Estado, corresponde que se cite al vendedor a fin de requerirle las explicaciones necesarias, acerca de la forma como llegaron dichos documentos a su poder.

Don S. Bollo, ofrece en venta al Gobierno un documento sobre límites

Señor Ministro:

Es fuera de toda duda que los papeles que se ofrecen en venta a V. E. han debido volver al archivo de la Nación, o encontrarse en poder de los herederos de aquellos que los escribieron. ¿Cómo han venido a manos del señor Bollo?

Antes de oír proposición alguna, es indispensable esclarecer este punto, y paréceme que, por el momento, y sin perjuicio de lo que haya lugar en adelante, será lo más expeditivo autorizar al señor Sub-Secretario de este Ministerio para que llame a su presencia al expresado señor Bollo, y pida los esclarecimientos necesarios acerca de la manera cómo ha adquirido los papeles en cuestión. En vista de lo que de esta diligencia resultare, podrá determinarse lo que mejor convenga. — Diciembre 6 de 1887.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad al dictamen. — Diciembre 12 de 1887.

Tomo 7, pág. 641. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se aprueben los Estatutos de una Sociedad Anónima, una vez salvados los inconvenientes que ofrecía, su artículo 39, que extendía a 12 el número de votos propios y en representación, lo que es contrario al artículo 420 del Código Civil que autoriza la representación hasta 6 votos solamente.

La Compañía de Lavaderos Públicos de la Capital, solicita la aprobación de sus estatutos

Señor Ministro:

El artículo 420 del Código Civil dice *que la misma persona no podrá representar más de seis votos*, sin distinguir entre votos propios y por poder de otros accionistas. El Artículo 39 de estos Estatutos, que extiende a doce el número de votos propios y, en representación, es, así, contrario a la interpretación natural de aquella disposición; debe ser reformado. — Sírvase V. E. oír al Presidente de la Sociedad. — Diciembre 30 de 1887.

Señor Ministro:

Salvada la deficiencia que hice notar anteriormente con la modificación de que se da cuenta en el escrito que antecede, nada obsta a que dando V. E. por incorporada a los estatutos dicha modificación les preste su aprobación y provea en todo según se solicita. — Enero 20 de 1888.

Departamento del Interior. — Resolución de conformidad al dictamen. — Enero 30 de 1888.

Tomo 7, pág. 644. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente el pedido que formula un Juez Federal sobre creación en su Juzgado de un Escribano Receptor o de diligencias, para desempeñar todas aquellas funciones de su profesión que deban realizarse fuera de la oficina y que sirviese a la vez de Secretario «ad-hoc» en los casos de insuficiencia justificada del titular, por cuanto no tiene facultades el P. E. de confiar, por actos administrativos funciones que sólo la ley puede otorgar.

El Juez de Sección de Mendoza, sobre la creación de un Escribano Receptor que sirva a la vez de Secretario ad-hoc

Señor Ministro:

Sírvase V. E. ordenar se agregue a estas actuaciones, la comunicación a que el señor Juez de Mendoza se refiere, al principio de la que antecede, volviendo todo a mi despacho. — Diciembre 19 de 1887.

Señor Ministro:

Por justas que fueran las consideraciones que aduce el señor Juez en apoyo de las modificaciones que propone, no podrá V. E. aceptarlas, pues no está en sus atribuciones confiar en unos, por actos administrativos, las funciones que la ley ha adjudicado a otros.

Pienso que así debe V. E. hacerlo saber al señor Juez. — Enero 1.º de 1888.

Departamento de Justicia. Se adopta como resolución el dictamen. — Enero 19 de 1888.

Tomo 7, pág. 643. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I. — El principio del «jus soli» que las naciones americanas adoptan en materia de ciudadanía, y el principio del «jus sanguinis» que con igual criterio siguen las naciones europeas, se reputan ambos legítimos y en consecuencia todo país tiene el derecho de adoptar el que más convenga a sus intereses.

II. — Siendo contradictorios estos dos sistemas, necesariamente han de producirse conflictos entre las legislaciones que siguen uno u otro principio, por lo que se considera conveniente prever dichas dificultades y darles solución por anticipado, mediante convenciones internacionales.

Caso del ciudadano argentino, Angel F. Sediez, obligado en España al servicio militar

Señor Ministro:

Paréceme de todo punto aceptado el temperamento que señala como más prudente el señor Ministro de la República, en Madrid.

No existiendo un objetivo inmediato; no habiendo de por medio interés alguno comprometido, no se ve, en efecto, la conveniencia de insistir en buscar solución a cuestiones que no la tienen por su naturaleza.

Las Naciones Americanas no abandonarán, como oportunamente observa el señor Ministro de España, el principio que reputan más conforme a la naturaleza, y sobre el que entienden, con razón, que reposa su propia existencia.

Las Naciones de Europa, a su vez, forzosamente han de insistir en sostener el principio que hace menos sensibles las pérdidas que sufren, por ejercicio del derecho que todo hombre tiene para fijar su residencia allí donde mayor suma de bienestar encuentra.

Nadie puede poner en duda, por otra parte, el derecho que a toda Nación asiste para reputar como ciudadano, y tratar como tal, a todo aquel que ha nacido en su suelo, de padres naturales o extranjeros, mientras subsista dentro de los límites de su jurisdicción.

Ni puede tampoco, desconocerse que no esté dentro de los límites de la soberanía de una Nación, tener por ciudadanos a los

hijos de sus naturales nacidos en el extranjero, y tratarlos como tales, toda vez que se encontraren habitando su territorio.

No siendo fácil ni pudiendo racionalmente esperarse de la naturaleza humana, que en presencia de la dificultad que mueve y excita las pasiones, abandone una Nación el principio que considera inherente a su soberanía, el único medio de evitar los conflictos que son siempre de temerse del choque de legislaciones encontradas, es, a mi juicio, buscar su solución anticipada en convenciones internacionales. No de otra manera han procedido los Estados Unidos al fijar con la Prusia y otras naciones, la posición de los ciudadanos naturalizados con arreglo a las leyes de la Unión, cuando regresan al país de su nacimiento.

La liberalidad sin igual de la Constitución Argentina, hace, puede decirse, innecesario los tratados de amistad y comercio, pues que ningún derecho pueden conferir a la Nación que los celebra que no le esté ya garantido, y no lo son, por otra parte, de tenerse en cuenta las ventajas que nos ofrece una reciprocidad ilusoria.

El desarrollo extraordinario de la inmigración que afluye a la República, y la frecuencia consiguiente en el movimiento de la población de uno a otro país, no pueden menos de crear en el futuro las dificultades que señala el señor Ministro en Madrid.

Dar de antemano solución a estas dificultades, mediante concesiones recíprocas, he ahí, a mi entender el objetivo y la obra de la diplomacia argentina.

Determinar cómo deberán ser considerados los ciudadanos naturalizados al regresar al país de su nacimiento, cual será la posición de los hijos de padres extranjeros, en el caso de encontrarse o de residir en el país de sus padres; en qué momento y en qué forma deberán ejercitar el derecho de optar por una u otra ciudadanía; por qué tiempo de residencia o abandono, se entenderá perdido o conquistado el *animus manendi*: establecer en una palabra, reglas fijas para evitar conflictos a que pueden dar lugar legislaciones encontradas sobre estos y otros puntos análogos, sería, a la verdad, una prenda de paz para el porvenir, y un progreso positivo en la marcha siempre ascendente de la ley de las Naciones. — Febrero 21 de 1888.

I. — La Ley de 18 de octubre de 1884, determina con precisión las diversas funciones que corresponden a cada una de las autoridades que crea para los Territorios Nacionales y ninguna de sus disposiciones somete al control del Gobierno Nacional, los actos que dichos funcionarios realicen de conformidad a las facultades que la ley le reconoce y en consecuencia no necesitan para su ejecución y validez la aprobación en cada caso del P. E.

II. — La disposición de la tierra pública, ya sea en arrendamiento, simple ocupación o venta, es materia que la ley ha dejado de exclusiva competencia del P. E.

El Gobernador del Neuquén, eleva para su aprobación, varios decretos expedidos por él

Señor Ministro:

El Señor Gobernador del Neuquén expidió una serie de decretos que juzgó conducentes a la mejor administración del territorio y solicitó a su respecto la aprobación de V. E.

La Oficina de Tierras y Colonias ha hecho notar con toda razón, en el informe que V. E. se sirvió pedirle, que algunos de aquellos decretos, los referentes a la tierra pública nacional, ultrapasan las atribuciones del Sr. Gobernador, por cuanto la disposición de la tierra pública, ya en arrendamiento, simple ocupación o venta, es materia que la ley ha dejado a la competencia exclusiva de V. E.

El Sr. Procurador del Tesoro en un extenso y luminoso dictamen, después de estudiar la organización de los territorios nacionales, llega a la conclusión de que los actos de las autoridades que la ley ha creado para los territorios nacionales, no necesitan la aprobación de V. E. Analiza, sin embargo, los decretos expresados con grande acierto, y encuentra que unos, los que se refieren a nombramientos, están en las atribuciones del Gobernador, y en otros estas atribuciones han sido excedidas.

Con este motivo V. E. trae a discusión las disposiciones de la ley que organizó los Territorios Nacionales en su relación con el Gobierno Nacional.

V. E. desearía dejar claramente definidas las facultades de los Gobernadores de los Territorios y de las Municipalidades de los

mismos, y el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo General en cuanto a la modificación o anulación de sus actos.

En cuanto al primer punto, pareceme que las disposiciones de la ley de 18 de octubre, son suficientemente claras y explícitas, y que determinan con la precisión posible en estos casos, las diversas funciones de cada una de las autoridades que crea para el Gobierno de los Territorios.

En cuanto al segundo, pienso, con el Sr. Procurador del Tesoro, que el Gobierno, el Consejo Municipal, la Legislatura, los Jueces y demás funcionarios creados por aquella ley, desempeñan funciones propias que emanan de la ley, imponen responsabilidades directas a los que las ejercen y no necesitan, por último, la aprobación del Poder Ejecutivo General para su ejecución y validez.

La ley de 1884 ha creado un organismo completo, en cuanto es posible, para el Gobierno de los Territorios Nacionales.

Supone, esta ley, que estos territorios han salido ya del estado embrionario, que, debía suponerse existía, al dictarse las primeras disposiciones para su organización, cuando se incorporan recién a la vida civilizada, por la expulsión de los salvajes. Supone que tienen ya elementos bastantes para proveer a su propio Gobierno, constituyendo centros de población, con jueces y corporaciones municipales, y aun legislaturas, cuando alcancen a una población de 30.000 habitantes.

Consecuente con el principio, base fundamental de nuestras instituciones, la ley ha depositado el Gobierno de territorios en los tres poderes, cuya división e independencia es hoy universalmente reconocida, esencial a la libertad.

El Gobernador es naturalmente el ejecutivo, y el consejo municipal, y los jueces Letrados y de Paz, el Legislativo y Judicial.

El Señor Procurador del Tesoro observa oportuna y justamente, que ninguna de las disposiciones de la ley somete al control y criterio del Gobierno Nacional las disposiciones que aquellos poderes, o aquellas autoridades, dictaron en virtud de las atribuciones que ella misma les confiere. Las autoridades creadas por la ley en cuestión no son meras dependientes del Poder Nacional; tienen por el contrario, autonomía propia.

Cierto es que el Gobernador, los consejos municipales y los jueces, pueden ultrapasarse sus facultades. El remedio está, empero, en la ley a que deben su origen, y en las leyes generales.

El Gobernador Olascoaga ha invadido en este caso, por ejemplo, las atribuciones de V. E. al disponer sobre el arrendamiento y posesión de las tierras nacionales; ha invadido igualmente las facultades del Consejo, al inmiscuirse en la inversión de los fondos municipales; ha invadido las atribuciones del Poder Judicial, al declarar nula una ordenanza municipal, por suponerla contraria a la Constitución.

El consejo municipal, a su vez, ha ultrapasado sus atribuciones, al decretar impuestos de carácter general, y del resorte exclusivo del Congreso.

El remedio a todo esto es bien sencillo.

Con respecto a la administración de la tierra pública, bastará que V. E. haga presente al Señor Gobernador que es esta materia de su exclusiva competencia, disponiendo, o reservándose disponer a la vez, lo que encuentre conveniente.

En cuanto a la visita de inspección a las Oficinas Municipales, el Consejo está perfectamente autorizado para resistirla, y si con este motivo, surgiera una cuestión de competencia las leyes generales han previsto el medio de dirimirla.

Finalmente, en lo que respecta a los impuestos, que se dice ser contrarios a la Constitución, el decreto del Gobernador nada supone. El Consejo, no obstante, está perfectamente justificado para seguir cobrándolos; pues los únicos que pueden reclamar de su inconstitucionalidad, son aquellos a quienes se exige, ocurriendo a la justicia única autoridad encargada de decidir si son o no, autorizados por la Constitución.

De esta manera, sin violencia, por el simple juego de nuestras instituciones, cada uno véase obligado a conservarse dentro del límite de sus propias atribuciones. Quedan todavía dentro de la ley y para casos extraordinarios recursos de otro género, que pudieran llamarse *heroicos*.

El Gobernador es nombrado por el Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado, lo que es ya una garantía de acierto.

El mismo Ejecutivo Nacional tiene sin embargo, la facultad de removerlo por si sólo, lo que es también una garantía contra una administración desordenada. Artículo 6.º.

El Artículo 1.º autoriza a la municipalidad para remover a los Jueces de Paz, por faltas en el cumplimiento de sus deberes.

En las leyes generales, y sobre todo, en la renovación periódica de todo Poder, hay medios sobrados contra los funcionarios a cuyo celo ha confiado la Ley el Gobierno de los Territorios Nacionales, sin que sea necesario pese sobre el Poder General la ardua tarea de prestar su aprobación a los actos de aquellos funcionarios.

Creo haber llenado el propósito con que V. E. ordenó pasaran estos antecedentes a mi dictamen.

Pasando ahora al fondo de este asunto diré, que bastará en mi opinión, que V. E. haga saber al Señor Gobernador se abstenga de disponer acerca del arrendamiento y posesión de la tierra pública, sin la aprobación previa de V. E. y ordene se remita copia a dicho Gobernador, y al mismo Consejo Municipal, del dictamen del señor Procurador del Tesoro y de este mío. — Febrero 24 de 1888.

Mandóse reservar en este estado el expediente por resolución del 10 de Agosto de 1892.

Tomo 7, pág. 588. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — El privilegio que el artículo 1.º inciso 2.º de la Ley de ciudadanía confiere al hijo de argentino nacido en el extranjero, sólo importa la dispensa de la residencia de dos años, que para el extranjero la ley exige, más no de la residencia en el país y del ánimo de permanecer en él. a la época en que formula la opción.
- II. — La solicitud debe presentarse ante el Juez Federal que corresponda y no ante los Cónsules del país en el extranjero, que carecen de facultades para otorgar la ciudadanía.

Interpretación de la ley de ciudadanía, caso de D. Carlos Lafit y Cañas

Señor Ministro:

Con motivo de haberse presentado al Consulado Argentino en Madrid un individuo nacido en España, de padre argentino, en solicitud de pasaporte como ciudadano argentino; el señor Ministro

de la República en aquella Nación trae a la consideración de V. E. un punto interesante acerca de nuestra ley de ciudadanía.

«Son Argentinos, dice el Artículo 1.º, inciso 2.º de la ley de la materia, *los hijos de Argentino nativos que habiendo nacido en país extranjero optaran por la ciudadanía de origen*».

¿Cuándo y ante qué autoridad deberá ejercitarse esta opción? se pregunta el señor Ministro.

Después de estudiar el momento en que puede ella tener lugar, fijándolo, con toda razón, a mi juicio, en la edad de 18 años, entra el señor Ministro a investigar si la opción que la ley autoriza ante el Juez de Sección respectivo, podrá hacerse ante los Consulados en el extranjero.

Partiendo de la base que los Cónsules puedan ejercitar en ciertos casos funciones notariales, el señor Ministro encuentra que no habría ventaja en que los Consulados suplieran a los Jueces Federales, en ejercicio de la facultad que a éstos confiere el art. 5.º antes citado.

De perfecta conformidad con el señor Ministro en esta parte, pienso más, que la ley al acordar la opción, presupone la *residencia* en la República y el ánimo de permanecer en ella; y que no está, por consiguiente, en las atribuciones de los Cónsules intervenir en asuntos de este género.

Esta inteligencia se desprende clara y fácilmente del texto y del espíritu de la ley.

El Artículo 5.º permite como se ha visto, la opción *ante el Juez Federal* respectivo; es decir, ante aquel Juez en cuya jurisdicción se encuentra el que ante él ocurre.

Si la ley hubiera querido extender el privilegio a los que se encontrasen en el extranjero, no hubiera omitido, en materia de tan alto interés nacional conferir a los Cónsules, expresamente, la autorización que el señor Ministro encuentra implícita en el reglamento consular.

El favor o privilegio que el Artículo 1.º antes citado confiere al hijo de Argentino nacido fuera del suelo patrio, no importa, en realidad, otra cosa que dispensarle de la residencia de dos años, necesaria al extranjero.

El nacimiento de padre argentino viene así, a equipararse a las diversas condiciones —servicio en la Guardia Nacional, empleo

público, —que según sea el artículo 2.º habilitan al Juez para acordar la ciudadanía, *cualquiera que sea el tiempo de residencia*, lo que implícitamente supone que ha existido *alguna*.

Pero, más aun que la letra de la ley, es clara y terminante el espíritu que domina en toda ella, obsecuente al principio que con razón se ha dado en llamar *americano*.

Si el hijo de Argentino nacido en España pudiera optar, en España, por la ciudadanía argentina, fuerza sería reconocer que el hijo de español nacido en la República Argentina, podría igualmente optar por la ciudadanía española. Y como por nuestras prácticas internacionales, no puede acordarse a una Nación un favor que no sea extensivo a todas, luego tendríamos que los hijos de italianos, de franceses, de españoles, etc., sin abandonar el suelo en que han nacido, y continuando en él su residencia, podrían optar por la ciudadanía de sus padres.

Resultado lógico, para las naciones que deben todo su crecimiento a la inmigración, sería en tal caso presentar el espectáculo singular de una Nación, con numerosos habitantes, y muy escasos ciudadanos.

Excuso traer a la memoria los esfuerzos que, para conjurar este peligro, ha hecho en todo tiempo el Gobierno Argentino, en defensa del principio del *jus soli*, hasta hacerlo prevalecer en el tratado con la España, y reconocer en dos ocasiones solemnes para el Gobierno Británico.

El Sr. Ministro en Madrid ha procedido pues, en mi concepto, acertadamente, al no considerar como ciudadano Argentino al Sr. Lafit y Cañas que, aunque nacido de padre nativo, jamás ha pisado el territorio argentino, ni manifiesta siquiera el ánimo de habitarlo. Febrero 29 de 1888.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad al dictamen. — Julio 5 de 1889.

I. — Corresponde que el arrendatario de tierras situadas en la ribera del Río Paraná, de propiedad del Ferrocarril a Rosario, pague el correspondiente permiso de ocupación, no pudiendo alegar la exoneración de impuesto a favor del Ferrocarril, por cuanto esta exoneración constituye un privilegio que tiene carácter personal, no trasmisible a terceros y por lo tanto no alcanza al simple arrendatario.

II. — El Gobierno ejerce sobre la ribera de los ríos la jurisdicción que la Ley le confiere a los fines de la navegación y del comercio, jurisdicción que es independiente del dominio que los particulares tengan sobre la ribera y de carácter inalienable.

El Receptor de Campana, da cuenta que los Sres. P. Boid y Cía. se niegan a pagar el permiso de ocupación de ribera

Señor Ministro:

El Señor Boid tiene establecido en Campana un depósito de carbón en los terraplenes del Ferro Carril al Rosario, a tres o cuatro metros del Paraná; rehusa pagar el sello que la ley exige bajo el pretexto de que paga arrendamiento al Ferro Carril, y éste, a su vez, alega que está exonerado por la ley de todo impuesto.

Ocurre ante todo preguntar: ¿ha podido el Ferro Carril transmitir su privilegio a un tercero? Yo entiendo que no, por ser personal el privilegio, y distinto el objeto para que fué concedido.

Nadie desconoce, ni pone en duda, que el terreno que ocupa el Ferro Carril con su estación, talleres etc., sea de su propiedad exclusiva. Esto no obsta empero, a que el Gobierno ejerza sobre la ribera de ese mismo terreno la jurisdicción que la ley le confiere a los objetos de la navegación y del comercio; jurisdicción que es independiente del dominio; y que es inalienable.

La empresa está, así, en su derecho para pagar a Boid el uso de su terreno, lo que no impide que la autoridad, en ejercicio de la jurisdicción a que he hecho referencia, y en compensación de los deberes de vigilancia que ella impone; cobre también el impuesto, establecido para los permisos de depósito sobre las riberas, que puede conceder, o no conceder, si en ello viere perjuicio para la vialidad, para el comercio, o la mejor percepción de la renta.

Pienso por esto que el Señor Boid está en su deber de satisfacer el sello que se le cobra por la Receptoría de Campana. — Marzo 15 de 1888.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad al dictamen. Septiembre 28 de 1888.

Tomo 7, pág. 326. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Consultando el Gobierno Británico acerca de si el Gobierno Argentino tendría inconveniente en que se otorgasen premios a las autoridades argentinas en la Isla de los Estados, por la actitud de éstos en los salvamentos de buques náufragos ingleses, corresponde que se le conteste que lejos de tener inconveniente, reputa honrosa para las autoridades de la Isla, la actitud del Gobierno Británico.

El Sr. Ministro de S. M. Británica, sobre premios a las autoridades Argentinas de la Isla de los Estados, por sus auxilios a los náufragos de buques de aquella Nación

Señor Ministro:

De perfecto acuerdo con la Dirección General no veo en el deseo que, a nombre de su Gobierno, manifiesta el Señor Ministro de Su Majestad Británica sino un acto honroso para las autoridades de la Isla de los Estados, que tuvieron la fortuna de prestar algún servicio a las tripulaciones de buques náufragos en aquellas remotas y peligrosas regiones.

La Dirección General observa oportunamente que es frecuente entre las Naciones civilizadas, estimular por demostraciones de este género los actos de valor y abnegación, en bien y en honor de la humanidad. — Marzo 19 de 1888.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Abril 10 de 1888.

Tomo 8, pág. 14. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

En un conflicto entre el Gobierno de Corrientes y el Obispo de la misma Provincia, corresponde que el F. E. intervenga en su calidad de Patrono de la Iglesia, a fin de arbitrar los medios que den solución a las diferencias suscitadas.

Varios vecinos de Monte Caseros (Corrientes), piden el reemplazo del Presbítero D. Manuel Paz, suspendido por el Sr. Obispo de Paraná

Señor Ministro:

Creo conveniente oiga V. E. al Obispo del Paraná, acerca del incidente a que ha dado origen la provisión del curato de Monte Caseros, recomendando a S. S. I. su más pronta expedición, en vista de la situación angustiosa en que manifiestan encontrarse los vecinos de aquella parroquia. — Abril 12 de 1888.

Señor Ministro:

Sírvase V. E. ordenar se agregue copia del Decreto de Julio 21 de 1885 a que el Gobernador de Corrientes se refiere en su comunicación de Abril 5 de 1887 a su S. S. I. el Obispo de Paraná, con sus respectivos considerandos, para su mejor ilustración, volviendo todo enseguida a mi despacho. — Junio 23 de 1888.

Señor Ministro:

Un número considerable de vecinos de Monte Caseros, solicita de V. E. las medidas que juzgue oportunas, para poner término a la situación angustiosa en que dicen se encuentran sus conciencias, por falta de un cura párroco que atienda a las necesidades espirituales. Las causas que han producido la acefalía del curato se desprenden de estos mismos antecedentes.

A consecuencia de grave enfermedad del cura titular, el Sr. Obispo del Paraná nombró interinamente en su lugar al Presbítero D. Manuel Paz Fernández.

Posteriormente, diez meses después del nombramiento, por causas muy graves, que dice haber puesto en conocimiento de V. E. antes de ahora, S. S. Ilma. separó del curato al expresado Presbítero Paz Fernández, ordenándole lo entregara al Cura de Concordia.

El Cura destituido resistió la entrega, apoyado en el Decreto del Gobierno de Corrientes, que estatuye que los Curas interinos, cuyo nombramiento sea de cuatro meses anterior a su fecha, no pueden ser removidos sin causa legalmente comprobadas.

El Señor Obispo fulmina entonces la excomunión mayor contra el desobediente, le suspende de todas sus facultades y licencias y reitera la orden de posesión al de Concordia.

El Gobierno de Corrientes, llamado a intervenir por el Cura destituido, lo sostiene en su resistencia, en ejecución del Decreto antes mencionado. De ahí el conflicto y la acefalía que se prolonga más de año y medio.

Sin discutir la legalidad del Decreto, por no ser, dice el Señor Obispo, la oportunidad, observa que no podría tener aplicación en este caso por ser el nombramiento de Paz Fernández, por una simple nota, eminentemente efímero, y sin que se le expidiera más tarde el título, por las causas graves a que antes se había referido.

Es esta la oportunidad de observar que el decreto en cuestión fué expedido en virtud de la recomendación expresa que hacía V. E. a los Gobernadores de Provincia, por el art. 3.º del decreto de Julio 3 de 1886, para que en su carácter de Vice-Patronos y de Agentes del Gobierno General, dictaran las medidas que juzgaran oportunas, al objeto de armonizar en sus respectivos territorios el procedimiento a seguirse en la provisión de curatos con el que se establecía para la Capital.

Y puesto que S. S. Ilma. no apoya su insistencia en la separación de Paz Fernández, en el desconocimiento de las disposiciones del Gobierno de Corrientes, sino en los hechos, no veo objeto en demostrar la obligación de respetar esas disposiciones de parte del Señor Obispo, y sólo me limitaré a observar que, de estos mismos antecedentes resulta que el nombramiento del ya citado Paz Fernández no fué tan efímero como se pretende.

Comunicación en que la Delegación Eclesiástica de Corrientes participaba a Paz Fernández su nombramiento. «En virtud de autorización superior, le decía el Delegado, y hallándose vacante la Párroquia de Monte Caseros, se le encarga a V. su administración con las facultades propias de los Curas Vicarios interinos. Al re-

cibirse de la Parroquia se hará bajo inventario formal de que remitirá copia a esta Delegación».

Es este, a mi juicio, un verdadero nombramiento y no una simple nota como se pretende, ya que todo nombramiento ha de ser por nota. El Gobierno de Corrientes ha estado, entonces, en su perfecto derecho al exigir que no se dejara sin efecto, sin causa legal debidamente justificada.

¿En presencia de esta situación que es lo que corresponde a V. E.?

El Gobierno de Corrientes, como se ha visto, ha obrado en la esfera de sus atribuciones, como Vice-Patrono y como Agente del Gobierno General, y en virtud de delegación y autorización expresa de V. E.

Como Patrono, como Jefe de Estado, V. E. no puede menos de encontrar ajustado su proceder.

El Señor Obispo, sin desconocer los derechos del Patronato, interpretando, sin duda, mal los hechos, ha prescindido de disposiciones que debía respetar, y a que el mismo Jefe de la Iglesia ha prestado, no hace mucho, acatamiento, llamando a concurso para la provisión de un curato vacante en esta Capital.

La situación violenta que han traído a conocimiento de V. E. los vecinos de Monte Caseros, impone a mi juicio, a V. E., como Patrono de la Iglesia, el deber de arbitrar el medio de dar la solución.

Paréceme que bastará por el momento, y salvo mayores complicaciones, se dirija V. E. al Señor Obispo del Paraná, encargándole la necesidad de poner término a aquel estado anormal y angustioso para los fieles de su Diócesis. Y nada será más fácil a mi juicio. Si como la afirmación de S. S. Ilma. induce fundadamente a creer, existen las graves causas que motivaron la separación, por qué no justificarla por la prueba que exigen los mismos cánones.

Y es esto todo lo que ha tenido en vista V. E. al dictar las resoluciones antes recordadas, cuyo único objeto es regularizar la provisión de Curatos que, el olvido de las leyes civiles y canónicas, había dejado al arbitrio exclusivo del Obispo.

El Estado no tiene menos interés que la Iglesia en que sean ellos servidos por sacerdotes ilustrados y morales y no puede pres-

cindir de toda intervención en su elección y remoción. — Agosto 16 de 1888.

Departamento de Justicia y Culto. Resolución de Febrero 5 de 1890, que dispone el archivo, por haber sido separado de la Parroquia de Monte Caseros el Cura de referencia.

Tomo 8, pág. 30. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que se aplique al manifiesto general de carga las disposiciones de las Ordenanzas de Aduanas que rigen el manifiesto de despacho.

Noceti Tomás, pide devolución de una multa impuesta a los vapores «Silex» y «Guarany»

Señor Ministro:

Estoy perfectamente de acuerdo con la Dirección General de Rentas en que no es justo ni posible, aplicar al manifiesto general las disposiciones que rigen para el manifiesto de despacho.

El manifiesto general, contiene y detalla en términos generales, y por esto se llama general el contenido de la carga; cómo podría saber el capitán la cantidad y calidad de los bultos que recibe? ¿Para qué serviría, por otra parte, esta especificación, si la misma ley permite modificarla dentro de ciertos términos? ¿Cómo se haría la verificación? Otra cosa es el manifiesto de despacho.

El comerciante sabe o debe saber la cantidad o calidad de las mercaderías que recibe, y con toda razón la Aduana exige completa exactitud en el momento en que van a salir de su poder.

Me adhiero por esto a la Dirección de Rentas en lo expuesto, y al Señor Procurador del Tesoro. Junio 10 de 1888.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Marzo 8 de 1889.

Tomo 8, pág. 57. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. ponga en conocimiento del Jefe del Registro Civil el nombramiento de un cura en Iglesia Protestante.

La Legación Alemana, sobre el nombramiento de curas para la Congregación Evangélica Alemana en esta Capital

Señor Ministro:

En vista de la comunicación de la Legación de Alemania, corresponde que, teniendo V. E. por nombrado al Sr. D. Ernesto Buctner como segundo cura de la Iglesia Evangélica Alemana de esta Capital, lo ponga en conocimiento del Jefe del Registro Civil, para los efectos a que haya lugar. — Junio 14 de 1888.

Departamento del Culto. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Junio 30 de 1888.

Tomo 8, pág. 106. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — La Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, no obstante tener gobierno y presupuesto propio, forma parte de la Administración General del Estado y por ello los empleados Municipales, están comprendidos en la Ley general de Jubilaciones dictadas para todos los empleados permanentes de la administración.
- II. — La aplicación de la Ley, con respecto a los empleados Municipales, no corresponde que se haga por la Municipalidad sino por el Presidente de la Nación, en virtud de las atribuciones que le confiere la Constitución como Jefe Supremo de la Administración General del país.
- III. — Teniendo la Municipalidad rentas y recursos propios, la jubilación de los empleados municipales debe pagarse con fondos del Tesoro Municipal y no del Tesoro General.

La Intendencia Municipal de la Capital, sobre jubilaciones de sus empleados, por parte del Poder Ejecutivo Nacional

Excmo. Señor:

El Señor Contador General observa con toda razón que la Municipalidad es un Gobierno completamente separado, con rentas y recursos propios, que sanciona su presupuesto y que paga sus empleados sin intervención del Gobierno General.

Deduce de esto el Señor Contador, que V. E. no debe hacer lugar a la jubilación que el Señor Intendente solicita para varios empleados de aquella corporación.

Dice, además, el Señor Contador que según el artículo 1.º de la ley, tienen derecho a la jubilación, *todos los empleados permanentes de la administración general directamente retribuidos por el Estado*, y en estos términos entiende el Señor Contador que no están comprendidos los empleados de la Municipalidad.

Paréceme grave esta conclusión, que vendría a privar de los beneficios de la ley a un gremio numeroso y meritorio de servidores del pueblo.

Los términos de la ley son tan amplios y absolutos, que no admiten, a mi juicio, la interpretación restrictiva que el Señor Contador

General les atribuye. La administración general, el Estado, son términos genéricos que abrazan a todos, y a nadie excluye.

Es una de las primeras reglas de interpretación que las palabras de la ley deben tomarse en su sentido natural y genuino.

Cuando dice *todos los empleados* debe entenderse que se refiere a todos sin excluir a ninguno; cuando se refiere a la *Administración General*, nada autoriza la suposición de que la Municipalidad quede excluida, pues que, no por ser una repartición *separada*, deja de formar parte la Honorable Corporación Municipal de la Administración General del país.

Fuera necesario para la interpretación contraria una excepción expresa de la misma ley, y lejos de existir tal excepción, la que contiene, confirma claramente la regla general.

«Las jubilaciones del personal de instrucción primaria no están comprendidas en las disposiciones de la presente ley», dice el artículo 18.

Si la mente de la ley hubiera sido excluir a los empleados Municipales, lo hubiera expresado también.

El silencio a ese respecto deja subsistente el principio general.

Se dirá que la Municipalidad puede dictar una ordenanza sobre jubilación en favor de sus empleados.

Tratándose de reglas generales, en materia tan delicada y controvertida, es sin disputa más natural que sea el Congreso el que las dicte. No habría justicia en que, no dictando la Municipalidad la ordenanza, quedaran excluidos sus empleados de los beneficios que gozan los demás: ni habría conveniencia en que existiesen disposiciones y remuneraciones distintas para servicios idénticos, prestados todos a la misma comunidad que los atribuye.

Surge ahora otra cuestión ¿quién hará la aplicación de la ley?

La Municipalidad no pretende para sí tal prerrogativa y ocurre a V. E. Su proceder es, a mi juicio, ajustado al principio fundamental que confiere al Poder Ejecutivo entre sus primeras atribuciones, la administración general del país y la ejecución de las leyes de la Nación.

¿Se pagará la jubilación por la Municipalidad o por el Tesoro General? Es ésta la última cuestión, si tal puede llamarse.

Los servicios en estos casos han sido prestados inmediata y directamente al Municipio, que tiene, como se ha observado, sus

rentas y sus recursos propios; y es lo natural que sea la Municipalidad la que lo retribuya.

Volviendo ahora al punto de partida, diré para terminar, que no veo nada que obste a que acuerde V. E. la jubilación que el Señor Intendente solicita para el empleado Municipal Don Guillermo Pereyra, cuyos servicios han sido debidamente prestados con arreglo a la Ley. — Agosto 13 de 1888.

Señor Ministro:

En vista de lo nuevamente expuesto por el Señor Contador General y las consideraciones del decreto de V. E. procuraré esforzar los fundamentos de mi dictamen anterior, que no encuentre motivo bastante para modificar.

Son siempre tres los puntos a encaminar:

1.º — La ley de jubilación comprende o no a los empleados municipales.

2.º — ¿Si los comprende quién hará su aplicación?

3.º — ¿De qué fondos se hará el abono?

Es hoy, como antes mi convicción que la ley abraza a todos los empleados civiles sin más excepción que la que ella misma ha establecido con respecto al personal de la instrucción primaria.

No puede admitirse sin contrariar todo principio de justicia, que los empleados de la Administración General tengan derecho a su jubilación, y los municipales no. Si la ley actual no les comprende, fuerza será admitir que la municipalidad tiene la facultad de dictar una especial en su favor. Que no tiene tal facultad, no es para mí dudoso.

La ley de Jubilaciones es, como dije antes, una ley política, una ley de carácter general como sería, por ejemplo, la ley que estableciera las condiciones de capacidad requeridas para optar a los empleos de la Administración.

Antes de dictar una ley de jubilación, es necesario resolver si es justa en principio o conveniente, lo que algunas nociones de este género no son del resorte de la corporación municipal.

Se dice que la Municipalidad tiene su autonomía propia y constituye, una administración independiente y separada. Es preciso no confundir.

La Municipalidad tiene su origen en la ley, nó en la Constitución.

No es una entidad al igual de las Provincias con facultades propias, que el pacto fundamental les reservó y que la ley no puede ampliar ni restringir.

Al organizar la Corporación Municipal, dióle el Congreso aquellas facultades que juzgó bastantes a los fines de su institución.

En ninguna de ellas se encontrará la de dictar leyes del carácter general que reviste la jubilación.

Pero hay todavía más. El Congreso puede ampliar o restringir las facultades que le acordó: no ha mucho hemos visto que ha legislado sobre obras de salubridad de esta Capital, materia que más que ninguna otra correspondía al Gobierno del Municipio.

Así pues, aun bajo el supuesto de que la Municipalidad por su Ley Orgánica estuviera habilitada para dictar una ley de jubilación, el Congreso ha podido retirarle esa facultad, ya expresa, ya tácitamente al dictar una ley general sobre la materia, no siendo admisible que sin una reserva expresa, que no ha sido hecha, pudiera la Municipalidad dictar otra para sus empleados.

Tenemos entonces que, si los empleados municipales no están comprendidos en la ley, quedarían excluidos sin remedio, lo que importaría una injusticia flagrante y manifiesta.

2.º — Dada la ley por el Congreso, es lo natural, lo lógico, y nadie podrá desconocerlo, que sea el encargado de ejecutarla *el jefe de la Nación que tiene a su cargo la administración general del país* según las palabras de la Constitución.

El procedimiento más correcto será sin duda, el que el Señor Contador General indica, esto es, instruir el expediente por la Municipalidad, y remitirlo a V. E. para la resolución que corresponda, según se practica por algunas reparticiones y lo previene el artículo 18 de la Ley de Jubilaciones, para los maestros de instrucción primaria.

3.º — Dice por último el Sr. Contador General que la ley ordena que las jubilaciones sean abonadas de rentas generales, y que habría cierta inconsecuencia en que la de los empleados municipales fuera acordada por el Gobierno y abonada por el Tesoro del Municipio.

La ley ha dispuesto que las jubilaciones sean abonadas de rentas generales, porque se refiere a los empleados de la Administra-

ción en general. Pero no, no estando excluidos los municipales como creo haber demostrado que no lo están, lo natural es que sea la Municipalidad que es la que recibe sus servicios inmediatamente, la que los retribuya. La ley no incluyó en sus disposiciones a los empleados municipales por olvido, o porque no lo creyó necesario. No haciendo mención especial a su respecto, no puede establecer una disposición especial para determinar cómo habrían de ser abonadas sus jubilaciones.

Esto no basta sin embargo para que se consideren excluidos, ni para que los servicios prestados directamente al municipio sean retribuidos de rentas generales. — Septiembre 19 de 1889.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 11 de 1888.

Tomo 8, pág. 114. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

En las convenciones internacionales conviene fijar un término —lo más corto posible— para hacerlas cesar, cuando la experiencia demuestre que son perjudiciales.

Convenio sobre prácticos lemanes, entre la República Argentina y la Oriental del Uruguay

Señor Ministro:

El proyecto de convenio sobre prácticos que presenta a la consideración de V. E. el señor Ministro de la República en Montevideo, está basado sobre el principio de una perfecta reciprocidad, que no puede dejar de ser aceptada. Sólo observaré que la indicación del mismo Señor Ministro, acerca del término, es a mi juicio muy atendible. Siempre es conveniente en materia de obligaciones internacionales, dejar establecida la manera de hacerlas cesar cuando la experiencia demuestra que son perjudiciales en el más corto tiempo posible. — Agosto 6 de 1888.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Agosto 10 de 1888.

Tomo 8, pág. 123. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde se acuerde el pase a una Bula instituyendo Obispo, previo acuerdo de la Corte Suprema, y salvando todas las expresiones que atentan contra los derechos y prerrogativas del Patronato Nacional.

Se transcribe la fórmula del juramento.

La Curia Romana, remite la Bula instituyendo Obispo de la Diócesis de Córdoba al Rvdo. P. Fray Reginaldo Toro

Señor Ministro:

Estas bulas en nada difieren de las que han servido para la consagración de todos los Obispos de la República. De todas las instituciones humanas, es bien sabido, la Curia de Roma es la que menos varía.

El Santo Padre dice que hace el nombramiento de Fray Reginaldo Toro, *sin que nadie fuera de Nos pueda mezclarse en esto*. V. E. sabe mejor que nadie, que el Reverendo Padre Toró venía el primero de la terna del Senado y que fué V. E. mismo quien lo presentó a S. S.

La Bula del juramento exige que el Obispo electo *jure ser fiel y obediente a la Sede Apostólica*, con prescindencia absoluta de la autoridad civil que para nada menciona. Esto no obsta a que el mismo Obispo jure ante V. E. respetar, ante todo, la Constitución, las leyes del Congreso y los derechos y regalías del Patronato Nacional y no prestar juramento contrario a éste.

Todo esto es valor entendido, y es, al amparo de esta prescindencia de los hechos y de estas concesiones recíprocas, que reposa con la consagración del tiempo y mientras no se llega a solución más radical, *el modus vivendi* que permite marchar en armonía a las dos grandes entidades que dividen el Gobierno de la sociedad católica.

No veo nada que obste a que, con el acuerdo de la Corte Suprema y previo juramento de estilo preste V. E. el pase a las Bulas y Rescriptos presentados, salvando a la vez, en toda su integridad los derechos y prerrogativas del Patronato Nacional. — Agosto 14 de 1888.

FORMULA DEL JURAMENTO

Juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios que en el ejercicio del Obispado seré fiel a la Nación, reconociendo su soberanía y alto Patronato, que lo guardaré en todo y por todo llanamente y sin impedimento alguno; que no aceptaré dignidad alguna sin expreso consentimiento del Gobierno Nacional; que guardaré y haré guardar la Constitución Nacional y que en ningún caso haré promesa o juramento alguno que pueda considerarse opuesto al que presto de conformidad a la misma Constitución, y en la convicción de que no es intención del Gobierno obligarme en conciencia por este juramento a faltar de modo alguno a las Leyes de Dios y de la Iglesia. Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden.

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Agosto 17 de 1888.

Tomo 8, pág. 143. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que el P. E. acepte la invitación para concurrir con delegados a un Congreso de Jurisconsultos a reunirse en Lisboa, por cuanto dicho congreso organizado por la Asociación de Abogados de Lisboa no revestiría carácter oficial; corresponde en cambio que se dirija al Rector de la Universidad o al Colegio de Abogados para que sean éstos los que tomen en cuenta la invitación y dispongan el nombramiento de delegados.

Congreso Jurídico de Lisboa

Señor Ministro:

No revistiendo carácter oficial el Congreso de Jurisconsultos que la Asociación de Abogados de Lisboa se propone reunir en aquella Capital, no me parecería conforme a las prácticas internacionales aceptara V. E. la invitación que la expresada asociación le dirige, al objeto de hacerse representar en aquel certamen jurídico, mucho más cuando no consta que el mismo Gobierno de S. M. haya de concurrir a sus deliberaciones.

Es sin embargo, característico de esta época, el afán con que las naciones todas, por medio de Congresos, Convenciones, Conferencias se esfuerzan en eliminar las diferencias de legislación y el antagonismo de intereses, que por tanto tiempo han dividido a los pueblos, aun de un mismo origen.

El medio más adecuado para que manifestara V. E. su adhesión a los nobles propósitos que persigue la asociación de Lisboa, sería a mi juicio, pasar estos antecedentes al Señor Rector de la Universidad de esta Capital, o bien al Colegio de Abogados, para que tomaran en cuenta la invitación, en la inteligencia de que el Gobierno Argentino vería con satisfacción el nombramiento de un Delegado al Congreso, y estaría dispuesto a facilitar los medios para su traslación y permanencia en Lisboa. — Setiembre 18 de 1888.

Tomo 8, pág. 146. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se acuerde una jubilación no obstante la interrupción de los servicios que ha tenido lugar por cortos intervalos.

El Sargento 1.º de Policía de la Capital, D. Adolfo Gómez, pide jubilación

Señor Ministro:

Nada encuentro que observar acerca de lo expuesto por la Contaduría General.

Si bien es cierto que los servicios del recurrente han sido interrumpidos, los intervalos han sido cortos, y no hay en la ley, disposición alguna que exija que deben ser de tal manera continuos, que la menor interrupción los anule todos.

El artículo 9.º que parece ser el más pertinente, dice que cuando un empleado civil hubiese también prestado servicios militares, le serán estos contados siempre que los civiles excedieran de diez años y que los militares no hubiesen sido remunerados, por pensión de retiro.

Según el cómputo que hace la Contaduría General, los servicios civiles del recurrente exceden de diez años y es notorio que los mi-

litares no le han sido remunerados. El desempeña, por otra parte, su último empleo por más de tres años, y se encuentra amparado por la última parte del artículo 8.º.

Mi parecer es proveer de acuerdo con el Sr. Contador General, que Gómez por sus buenos y largos servicios, es acreedor a la jubilación que solicita. Setiembre 18 de 1888.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 15 de 1888.

Tomo 8, pág. 162. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

En un conflicto de jurisdicciones entre el Jefe de Policía de la Capital y un Juez de Sección, corresponde que conozca en el incidente la Corte Suprema de la Nación.

La Jefatura de Policía de la Capital, sobre competencia de jurisdicción referente a la cesación de vigilancia sobre la persona de Dn. E. Sojo

Señor Ministro:

El Señor Jefe de Policía pone en conocimiento de V. E. que en defensa de su jurisdicción, ha creído de su deber no dar cumplimiento al mandato del Juzgado de Sección que le ordena suspender la vigilancia que ejerce sobre la casa de Don E. Sojo. Dice el Señor Jefe que ejercía esta vigilancia con motivo de la denuncia que había hecho Don E. Company de amenazas de muerte proferidas contra él por dicho Sojo, y por haber éste desobedecido tres citaciones que con tal motivo le había dirigido. Agrega por último, que no le será posible desempeñar la misión que ha recibido de V. E. si sus atribuciones, para prevenir los delitos, para garantizar la seguridad individual y mantener la tranquilidad pública, hubieran de estar subordinadas al criterio de los jueces.

El Señor Juez de Sección entiende, a su vez que es de su competencia hacer cesar la vigilancia que la Policía ejerce sobre la persona del Señor Sojo; por que ella importa un arresto, cuyo levantamiento le ha sido requerido por el recurso de Habeas Corpus, que encuentra procedente.

Hay, pues, en este caso un conflicto visible de dos jurisdicciones, que se consideran con facultades propias y exclusivas; entre la jurisdicción del Poder Ejecutivo, ejercida en este caso por el Jefe de Policía, que arranca de los poderes administrativos y políticos que la constitución le confiere como *jefe inmediato de la Capital*, y la del Poder Judicial, cuya misión es garantizar la integridad de los derechos individuales.

La comunicación del Señor Jefe viene destituida de los antecedentes que debieron acompañarla, y que, se dice, se encuentran en poder del Señor Juez; sin ellos, será difícil y aventurado decidirse en conciencia por una u otra jurisdicción.

La materia, es, sin embargo, tan delicada que, aunque mi juicio se inclinara en favor de la del Señor Juez, no aconsejaría a V. E. dejara de buscar, mediante una discusión más amplia, en el alto criterio de la Corte Suprema la decisión final que acallará toda duda e infundirá respeto a todos.

Es por ello mi dictamen, prevenga V. E. al Sr. Jefe de Policía insista en la defensa de su jurisdicción, hasta llevar este incidente al conocimiento de la Corte Suprema. — Octubre 1.º de 1888.

Ministerio del Interior. Resolución en Octubre 3 de 1888.

Tomo 8, pág. 179. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. acepte una invitación del Gobierno de los Estados Unidos para realizar una convención internacional, que tenga por objeto conseguir una mayor seguridad para la vida y la propiedad en el mar.

Conferencia Internacional Marítima de Wáshington

Señor Ministro:

Los progresos de la ciencia y de la industria, tanto en la construcción de buques, como en la de máquinas ha llegado a la perfección en nuestros días, puede sin exageración decirse, alcanzando a reducir los riesgos de mar a una fracción apenas perceptible.

Ha muchos años que no se oye en efecto, que hayan hecho explosión las calderas de un buque, como era frecuente en los primeros ensayos de la navegación a vapor.

Al ordenar la construcción de la «Ciudad de Nueva York» último prodigio de la construcción naval, púsole por condición primera la compañía que la ordenó al constructor, que había de ser *insumergible*; y el constructor se jacta de haberlo conseguido, dividiendo el buque colosal en tantos compartimientos independientes y cerrados, cuanto son necesarios, para que si fuera dividido por mitad, las dos fracciones separadas, pudieran flotar y ofrecer un último refugio a los pasajeros .

Pero el mismo progreso, aumentando la velocidad y el número de buques que cruzan los mares en todas direcciones, ha creado ciertos riesgos a que, puede decirse, no alcanza la previsión del hombre. Principian a ser frecuentes las colisiones de grandes vapores que, marchando en direcciones opuestas, no alcanzan a veces a tiempo a detener su marcha, a consecuencia de las nieblas espesas que reinan en algunos mares.

El Gobierno Americano, al promover una convención internacional, con el objeto de conseguir mayor seguridad para la vida y la propiedad en alta mar, por medio de un plan general de señales, etc., etc., ha tomado así una muy laudable iniciativa, a la que a mi entender, debe V. E. responder sin vacilar. — Noviembre 2 de 1888.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de Diciembre 4 de 1888, que dispone se pase al Ministerio de Marina.

Tomo 8, pág. 185. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. requiera por la vía diplomática al Gobierno de Bolivia la reparación por violación de territorio y perjuicios causados a un ciudadano argentino, a quien la Aduana boliviana de Yacuiba le obligó a pagar derechos por mercaderías que introducía a Tartagal (territorio argentino).

Reclamo del ciudadano D. M. A. Peña contra el Gobierno de Bolivia. — Indemnización de perjuicios causados por la Aduana de Yacuiba.

Señor Ministro:

El derecho del ciudadano argentino Don Manuel A. Peña a ser indemnizado de los perjuicios que ha sufrido a consecuencia de un acto tan arbitrario como abusivo de las autoridades de Bolivia, no puede ser, a mi juicio, más manifiesto, ni más fuera de toda discusión.

Consta, en efecto, de la manera más inconcusa, que el expresado D. Manuel A. Peña fué obligado a pagar derechos a la Aduana boliviana de Yacuiba por mercaderías que introducía a su finca de Tartagal, territorio argentino. Consta además, que, a más de pagar estos derechos, cuyo recibo se registra a fs. 5, vióse obligado a grandes sacrificios para llenar una exigencia, con la que absolutamente no había, no podía haber contado.

La violación del territorio viene, así, reagravada en este caso, con los perjuicios causados a un ciudadano argentino; que ocurre justamente a V. E. en busca de reparación.

Pienso, por todo esto, que es un deber imprescindible de parte de V. E. al reclamar del Gobierno de Bolivia la reparación consiguiente a la violación del territorio, reclamar a la vez la indemnización de los daños y perjuicios inferidos contra todo derecho al ya citado D. Manuel A. Peña. — Diciembre 10 de 1888.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Diciembre 18 de 1888.

Es improcedente el pedido que formula la Dirección General de Rentas a fin de que el P. E. se dirija a los Jueces de Paz, para que estos den preferente atención a las demandas que inicien los encargados del cobro atrasado de las patentes y contribución directa, por cuanto la intervención del P. E. significaría ir contra el principio de la separación de poderes, e implicaría un reproche indirecto contra los Jueces por morosidad en el cumplimiento de sus deberes, sin que nada autorice una suposición semejante.

Dirección General de Rentas, sobre preferencias de los Jueces de Paz a las gestiones que inicien los encargados del cobro de la Contribución Directa

Señor Ministro:

Las consideraciones que aduce el Señor Procurador del Tesoro para desestimar la recomendación que la Dirección General de Rentas solicita de V. E. se haga a los Juzgados de Paz, no pueden ser más exactas.

Sólo agregaré que no veo razón alguna por la que se haya de dar preferencias a las demandas por contribución directa sobre las de los particulares cuando ejercitan acciones para percibir aquéllas que necesitan con más urgencia acaso, para las exigencias de la vida no siempre fácil. La recomendación a los jueces sería por otra parte un reproche indirecto, de que no cumplen con su deber y nada autoriza en estos antecedentes una suposición semejante. — Diciembre 13 de 1888.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Enero 4 de 1889.

Tomo 8, pág. 109. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No deben aprobarse los Estatutos de una Sociedad que tiene por objeto la emisión de valores o títulos con premio por sorteo, por cuanto viene a constituir un Banco de emisión que sólo la ley puede crear e indirectamente implica el juego de lotería prohibido por ley.

Sobre aprobación de los Estatutos de la Sociedad «Caja Nacional de Economías»

Señor Ministro:

Bajo la sencilla denominación de «Caja de Economías», se pretende establecer en este caso un Banco de emisión y restablecer indirectamente el juego de lotería.

«La Sociedad establecerá el siguiente servicio» dice el art. 7.º de los Estatutos presentados a la aprobación de V. E.

«A) Pondrá en circulación bonos económicos al portador de cincuenta pesos nacionales cada uno, divididos en cinco cupones de diez pesos nacionales cada uno, que pagará en cinco anualidades.

«B) Cada cien de estos bonos disfrutarán, por sorteo, de un premio de cincuenta pesos nacionales».

Más adelante agrega el artículo 15:

«Para mayor comodidad del público, la sociedad pondrá en circulación vales económicos al portador, divididos por series, los cuales sólo serán admitidos en pago de bonos cualquiera que sea la fecha de su emisión. Los vales de cada serie representan el siguiente valor efectivo:

«Los de la Serie A valen cada uno \$ $\frac{m}{n}$ 0.05

» » » » B » » » » 0.10

» » » » C » » » » 0.20

» » » » D » » » » 0.25

» » » » E » » » » 0.50

» » » » F » » » » 1.00

Como se ve, lo que se busca es poner en circulación una especie de emisión menor, en concurrencia con la única emisión de este género autorizada por el Congreso.

Por otra parte, autorizar la emisión de valores o títulos con premio por sorteo, es también, no es necesario decirlo, atribución exclusiva del Poder Legislativo.

No puede, pues, V. E. a mi juicio, prestar el asentimiento que esta Sociedad solicita. — Diciembre 29 de 1888.

Los interesados en vista de lo dictaminado desistieron de su petición.

Ministerio de Hacienda. Resolución ordenando el archivo de Enero 15 de 1889.

Tomo 8, pág. 206. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La fusión de dos o más empresas ferroviarias en una sola, se considera conveniente, ya que por regla general se consigue un mejor servicio público y un mayor beneficio para los accionistas.

**Sobre la fusión de los FF. CC. del Norte de Buenos Aires
y Central Argentino bajo la jurisdicción nacional**

Excmo. Señor:

Los representantes del Ferro-Carril Norte de Buenos Aires y del Central Argentino ponen en conocimiento de V. E., que los Directorios de estas empresas han llegado a un convenio por el que el primero de dichos caminos se incorpora al segundo. Piden en consecuencia, declare V. E. que los dos forman una sola empresa, bajo la jurisdicción Nacional, por ser Nacional el Central al que háse incorporado el del Norte.

Esta fusión o amalgamación, de dos o más empresas en una sola, es frecuente en Europa y Estados Unidos, y se considera por regla general que consulta el mejor servicio público y el beneficio de los accionistas.

Siendo la Empresa del Central Argentino la que recibe la incorporación de la del Norte, es ella, no es necesario decirlo, la que queda subsistente.

La del Norte, por el mismo hecho, desaparece, y, entrando a formar parte de una nueva entidad, sigue naturalmente la condición del todo, y viene así a quedar sujeto a la jurisdicción de la

Nación, bajo cuyos auspicios nació y continúa el primero de nuestros Ferro-Carriles Nacionales.

No veo por esto dificultad alguna en que haga V. E. sobre este particular la declaración que se solicita.

Y menos dificultad ofrece todavía la segunda solicitud de los representantes de las ya citadas empresas, con respecto a la doble vía cuya utilidad, y mejor podría decirse, cuya necesidad en un camino de tan grande movimiento, se impone de por sí. — Enero 10 de 1889.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Enero 11 de 1889.

Tomo 8, pág. 220. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

De conformidad al principio de libertad de cultos, no es necesario que el P. E. dicte disposición alguna para garantizar el libre ejercicio de la religión Ortodoxa Oriental.

Instalación de una Iglesia Ortodoxa Oriental en la Legación de Rusia

Señor Ministro:

Está de tal manera arraigada en nuestra legislación y en nuestras costumbres la más amplia tolerancia de todas las religiones, que no creo necesario dicte V. E. disposición alguna para garantizar el libre ejercicio del Culto Ortodoxo Oriental, según el Sr. Ministro de Rusia solicita. Bastará, a mi juicio, a satisfacer los deseos del Señor Ministro, haga saber V. E. al Señor Jefe de Policía de esta Capital que el Culto Ortodoxo se ejerce provisoriamente en la residencia de la Legación de aquella Nación, calle Talcahuano N.º 1032, en previsión de que, lo que no es de esperarse, algún auxilio le fuese requerido. — Enero 17 de 1889.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado, de Enero 31 de 1889.

=====

José Elías Marnan, solicita establecer un Templo Israelita.

Señor Ministro:

Repetiré a V. E. lo que digo en esta misma fecha en una solicitud análoga del Señor Ministro de Rusia, y sólo agregaré que, si fuese necesario, no puede V. E. vacilar en acordar el permiso que se solicita para establecer en esta Capital un Templo dedicado al Culto Israelita. — Enero 22 de 1889.

Tomo 8, pág. 222. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiendo consultado un profesor alemán de Derecho Comercial, por intermedio de nuestro representante en Berlín, acerca de las disposiciones de nuestra legislación aplicables al caso de pérdida y reemplazo de títulos públicos, corresponde que se le haga saber, que no hay en nuestro derecho disposición legal alguna al respecto, pero que llegado el caso, los principios generales del derecho se aplicarían para darle solución con justicia y equidad y como la expresión de la doctrina más aceptada en la República sobre la materia, debe el P. E. remitirle en copia la nota del Dr. Vélez Sársfield, al art. 731 del Código Civil.

**Sobre la legislación financiera Argentina concerniente a la
«pérdida y reemplazo de títulos públicos»**

Señor Ministro:

Poco podré agregar a los informes del Presidente del Crédito Público y del Señor Procurador del Tesoro.

A falta de disposiciones expresas, llegados algunos de los casos que motivan la comunicación del Señor Siegfried, los principios generales del derecho servirán, sin duda alguna, para darle solución en justicia y equidad.

Y así ha sucedido en los muy raros casos que han ocurrido entre nosotros.

En el reciente que recuerda el Señor Presidente del Crédito Público, el interesado decía que un pequeño número de fondos públicos habría sido quemado por el descuido de una sirvienta, sin que el hecho constalara de otra manera que por su simple afirmación.

ni constatará tampoco el número de títulos incendiados ni hubiera manera de investigarlo. La resolución del Gobierno no podía ser naturalmente sino una negativa absoluta.

En un caso anterior los Señores Baring Brothers pidieron la reposición de dos o tres títulos del Empréstito de 1822, inutilizados o perdidos, acompañando tales pruebas que alejaban todo motivo de vacilación o de duda.

El Congreso ordenó su reposición.

Más de una vez han tenido lugar robos o pérdidas de fondos públicos o de cédulas.

El más notable, sin duda, que recuerda el Sr. Presidente del Crédito Público; yo recuerdo otro que llamó también bastante la atención. Un número considerable de cédulas del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, fué robado al finado D. Juan Martín Estrada. Felizmente, él había tomado la precaución de anotar los números. Ocurrió inmediatamente, se publicaron los números en los diarios, se fijaron en la Bolsa, y entiendo que los cupones han sido pagados a los herederos de dicho finado, probablemente bajo una garantía que ponía al Banco a cubierto de toda eventualidad.

En varios otros casos de pérdida o robo, siempre que se ha tenido la precaución de anotar los números, se ha seguido el mismo procedimiento.

Terminaré diciendo a V. E. que, como la expresión de la doctrina más aceptada en la República, podía V. E. transmitir al Sr. Ministro Argentino en Berlín, copia autorizada de la nota del Codificador, Dr. Vélez Sársfield, al comentario 731 del Código Civil. — Febrero 12 de 1889.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Marzo 15 de 1889.

Tomo 8, pág. 114. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe el Gobierno Argentino adherirse a un proyecto de convención que tiene por objeto crear una Oficina Internacional para la traducción y publicación de las Tarifas Aduaneras de todos los países, lo que se reputa de gran conveniencia, mas debe para ello el P. E. solicitar previamente autorización del Congreso ya que se trata de un acto internacional que implica ciertas erogaciones para la Nación.

Conferencia Internacional de Bruselas, para la publicación de las tarifas de Aduana

Excmo. Señor:

Estoy de perfecto acuerdo con lo expuesto por la Dirección General y el Señor Procurador del Tesoro en los informes que anteceden.

Las ventajas para las naciones que hagan parte de la asociación proyectada, resultan de tal manera palpables de las consideraciones aducidas por el Señor Ministro Argentino en Bruselas y la Dirección General, que es de todo punto innecesario insistir en ponerlas más en evidencia.

Me limitaré a llamar la atención de V. E. acerca de la última parte del informe del Señor Procurador del Tesoro. — Marzo 28 de 1889.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución en junio 28 de 1889.

Tomo 7, pág. 437. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Entra en las facultades administrativas del Poder Ejecutivo el reconocer carácter diplomático con efecto retroactivo a la persona de nuestro Cónsul de Chile, atento a la índole de los trabajos por él realizados, esencialmente políticos, a la época en que nuestras relaciones con Chile fueron tan delicadas y el comercio con la nombrada República era prácticamente nulo.

El Sr. A. Arroyo, E. E. y Ministro Plenipotenciario en Bolivia, solicita se le reconozca su antigüedad de secretario de primera clase desde 1878

Señor Ministro:

Basta recorrer el memorándum que sirve de base a la declaración que el Sr. Arroyo solicita, para percibir que durante todo el tiempo en que las relaciones de la República con la de Chile fueron tan delicadas y vidriosas, los servicios que él prestó, con tanta dedicación, participaron mucho más del carácter diplomático que del consular que estaba investido. En realidad nuestras relaciones de comercio con Chile eran ninguna o por demás escasas en aquella época. Toda la atención de uno y otro Gobierno estaba entonces exclusivamente consagrada a las cuestiones de límites, a la situación política, y era a estos intereses esencialmente políticos a los que el Sr. Arroyo consagraba su tiempo y su inteligencia en el servicio de su país.

Creo por esto que la declaración que solicita sería un acto de justicia de parte de V. E., en cuyas facultades administrativas considero cabe perfectamente. — Julio 2 de 1889.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Julio 25 de 1889.

Tomo 8, pág. 101. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el Procurador Fiscal Federal, inicie juicio a fin de que una edición del Código Civil no autorizada por el P. E. sea destruida y castigados sus autores.

Félix Lajouane, denuncia que los Sres. Igon Hermanos, circulan una nueva edición del Código Civil sin autorización previa del P. E.

Señor Ministro:

A ser cierto el hecho que denuncia el Sr. Lajouane, los Sres. Igon Hermanos habrían incurrido en una violación culpable de la ley.

Corresponde, en consecuencia, remita V. E. estas actuaciones al Sr. Procurador Fiscal del Juzgado de Sección de esta Capital, al objeto de que inicie la acción a que haya lugar, para que la edición no autorizada sea destruída y castigados los que la han hecho y la expenden en contravención a la Ley. — Julio 31 de 1889.

Tomo 8, pág. 397. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde el pedido dirigido por la Legación de Italia al P. E. para que éste autorice al Banco de la Provincia de Buenos Aires a liquidar las sucesiones de los italianos que no pasen de seiscientos pesos, por cuanto si bien la iniciativa es justa ya que persigue que las sucesiones de poco capital no desaparezcan en gastos procesales, ello debe ser materia de una ley del Congreso.

Liquidaciones de sucesiones de italianos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires

Señor Ministro:

No veo cómo pudiera V. E. hacer las declaraciones, o acordar la autorización, que el Señor Cónsul de Italia solicita.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es un establecimiento de todo punto independiente en su administración del Gobierno General; y los Tribunales de Justicia aplican e interpretan las leyes con entera prescindencia de las autorizaciones o declaraciones del P. E., que sólo el Legislador puede hacer con carácter obligatorio.

No obstante esto, el hecho que el Real Consulado pone en conocimiento de V. E., es digno de tomarse en cuenta. Es bien sabido que las testamentarias de escaso capital desaparecen totalmente entre los gastos procesales ¿cómo remediarlo?

No veo otro camino que ocurrir al Congreso, y a este objeto, convendría pidiera V. E. mayores explicaciones al Señor Cónsul.

¿A qué documentos se refiere, y qué trámites deben, a su juicio, suprimirse? — Agosto 12 de 1889.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución en Agosto 19 de 1889.

Tomo 8, pág. 352. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No corresponde que se aprueben los estatutos de una Sociedad cuyo principal objeto es la emisión de obligaciones hipotecarias cuyos intereses y amortización serán pagados mensualmente por sorteo, lo que es contrario a la ley que suprimió las loterías ya que de hecho viene a constituir una de ellas, en forma menos garantida y sin tener un fin de beneficencia, única consideración en que podría fundarse la autorización al juego de lotería.

La Compañía Docks de Tránsito del Puerto de La Plata, solicita la aprobación de sus Estatutos

Señor Ministro:

No obstante su título Docks de Tránsito, el principal objeto de esta sociedad parece ser la emisión de obligaciones hipotecarias *cuyos intereses y amortizaciones serán pagados mensualmente por sorteo*, según extensamente se especifica en el art. 14, cap. 3.º.

Estos premios son desde 20.000 hasta 15 pesos, siendo los últimos los más numerosos, como es natural.

Es esta, pues, una repetición de las llamadas obligaciones con premio del Banco Constructor de La Plata.

Sabe V. E. que me opuse decididamente a la autorización que se concedió a dicho Banco, fundándome en que era ella contraria a la ley que suprimió las loterías, por cuanto, de hecho, venían a reaparecer bajo una forma mucho menos garantida, y sin la aplica-

ción de sus utilidades a objetos de beneficencia, única consideración que podía, hasta cierto punto, hacerlas disculpables.

Consecuente con mi parecer comprometido y que nada me induce a modificar, no puedo menos que pedir a V. E. con la misma decisión, no preste el asentimiento que se solicita.

Excuso repetir lo que dije a V. E. en el caso del Banco Constructor, y sólo recordaré que, al acordar V. E. la autorización para emitir las obligaciones con premio, fué bajo la inteligencia de que tal concesión no serviría de precedente para concesiones de igual naturaleza. — Agosto 19 de 1889.

Departamento del Interior. Resolución en contra de lo dictaminado. Agosto 21 de 1889.

Tomo 8, pág. 412. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Debe entenderse por «río navegable» desde el punto de vista legal: 1.º) aquéllos que de hecho se navegan a los fines del comercio, cualquiera que sea el caudal de sus aguas. 2.º) aquéllos sobre los que ha legislado el Congreso declarándolos hábiles para las operaciones de comercio. Son partes integrantes de todo río: el agua; el lecho, que es el suelo por donde corre; la playa o ribera interna, que es la parte comprendida entre las más altas y bajas mareas ordinarias; y lo que propiamente se llama ribera, que es la parte de tierra firme entre la línea de las más altas mareas ordinarias, hasta los treinta y cinco metros que fija el Código Civil o lo que las respectivas Municipalidades determinen.
- II. — Las riberas de los ríos y canales navegables pertenecen en propiedad a los dueños de los terrenos limítrofes con dichas riberas, los que deben ejercer sus derechos con las limitaciones que el Código Civil establece.
- III. — El lecho, y las playas de los ríos y canales navegables pertenecen en calidad de dominio a las Provincias en cuyo territorio se encuentran y no a la Nación, que por su parte, goza de igual derecho con respecto a los que se encuentren en territorios sometidos a su inmediata administración.
- IV. — Las aguas de los ríos y canales navegables no pertenecen a nadie y son de uso común para todos los habitantes.

V. — La jurisdicción sobre los ríos, canales, y sus riberas, será nacional o provincial según se trate de uno u otro dominio.

VI. — Las Provincias tienen perfecto derecho para autorizar a que se lleven a cabo construcciones sobre sus ríos o canales navegables y la Nación por su parte tiene poder indiscutible para impedir dichas obras o hacerlas demoler Si llegan a constituir obstáculos u obstrucciones que impidan la libre navegación de los mismos que por precepto constitucional al Estado Central le incumbe hacer cumplir.

La Sociedad General Pobladora y varios propietarios ribereños, piden la supresión de los puentes de Barracas y demás obstáculos que impiden la libre navegación del Riachuelo

Señor Ministro:

Tengo al despacho los asuntos siguientes relacionados con las riberas de los ríos navegables:

1.º) — D. Juan L. Caminos solicita se le conceda un área de treinta y cinco metros de ancho por cuatro o cinco leguas de largo sobre los arroyos Santa Ana y Marcaretá, para la fabricación de cal y corte de madera.

2.º) — El receptor de Rentas de Alvear consulta, si los terrenos inmediatos a aquel punto, frecuentemente anegados en las grandes crecientes, deben considerarse sujetos a la jurisdicción nacional.

3.º) — El Resguardo de la Ensenada hace presente que algunas personas cortan y plantan sauces y aun levantan ranchos sin permiso de la autoridad nacional en las riberas de aquella localidad.

4.º) La Receptoría de Mar del Plata, avisa que varias personas a las que había concedido el derecho de extraer piedra, arena y cascajo, se habían quejado de que la Municipalidad de aquella localidad sacaba a remate su extracción.

5.º) El Jefe de Policía comunica haberse visto en la necesidad de suspender el servicio de seguridad a causa de la obstrucción de la ribera del Riachuelo para algunos astilleros.

6.º) La Dirección General de Rentas considera necesario determinar con precisión la línea de la ribera en las Parroquias del Socorro y del Pilar porque los particulares avanzan hacia el río,

así que éste se retira, con menoscabo de los derechos del Fisco al que correspondería el aumento.

7.º) El Sub-Prefecto de Victoria consulta acerca del proceder que debe observar con respecto a los cercos que se construyen en los terrenos descubiertos por la bajante del río.

8.º) El Sub-Prefecto de la Plata comunica, que en la ribera de la Isla denominada «Santiago», se construyen algunas casas para fondas y posadas sin permiso de la autoridad de la Nación, en perjuicio del orden y de la tranquilidad pública.

9.º) La Prefectura Marítima de San Pedro solicita se dicten ciertas disposiciones conducentes a guardar el orden en la ribera.

10.º) El Sub-Prefecto Marítimo de San Nicolás, pide se le autorice conceder permiso a los capitanes de buques para tomar lastre en las barrancas del río en los lugares que él indique, mediante un impuesto de 50 centavos por tonelada.

11.º) El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, remite a resolución de V. E. un expediente sobre reglamentación de los trajes de baño en Mar del Plata.

12.º) D. Luis Queipo, de Gualeguaychú, solicita de V. E. permiso para establecer una balsa en el Río Nancuy.

13.º) La fábrica de papel de Zárate, solicita se le permita cortar junco y paja de los terrenos nacionales que no estén arrendados.

14.º) El Sub-Prefecto de Colón, consulta acerca del proceder que ha de observar respecto a la posesión de una isla denominada «El Marinero», por personas que pasan hacienda en pie del Estado Oriental.

15.º) El Sub-Prefecto de Colón, participa que el Gobierno de Entre Ríos ha dispuesto se ponga en posesión de las islas de su jurisdicción a Almada y Sanguinetti y pide se le diga qué ha de hacer.

16.º) El Sub-Prefecto de Victoria consulta sobre el proceder que deberá observar con motivo del impuesto que los propietarios de los terrenos ribereños pretenden cobrar a los que ejercen la industria de la pesca en los riachos y arroyos de aquella jurisdicción.

17.º) El Receptor de Rentas de Baradero da cuenta de que los propietarios ribereños han extendido sus alambrados hasta la lengua de agua, invadiendo las treinta y cinco varas de ribera que deben quedar expeditas.

18.º) Don Francisco Nolsi solicita en compra un pequeño terreno sobre la ribera en el puerto de San Nicolás.

19.º) El Sub-Prefecto del Rosario hace presente los inconvenientes de la construcción de un muelle por la empresa de gas de aquella Ciudad.

20.º) La Comisión administradora de las obras de Salubridad se queja de que varias empresas obstruyen las riberas del Riachuelo con construcciones y materiales.

21.º) La misma Comisión solicita autorización para vender la arena del cauce del arroyo Maciel, con lo que dice obtendrá una entrada mensual de mucha importancia.

22.º) El Departamento de Ingenieros consulta sobre si las autoridades de Entre Ríos pueden gravar con patente a un horno de ladrillos, que ha establecido el contratista de las obras y muelle de Concepción del Uruguay, frente al mismo puesto.

23.º) El Prefecto General de Marina acompaña la solicitud de un vecino de Entre Ríos, pidiendo se le dé posesión de una isla frente al puerto del Diamante, en lo que no ve inconveniente.

24.º) El Sub-Prefecto de Victoria dice que, a causa de la gran bajante del río, han quedado grandes médanos y campos descubiertos, a los que entra gran número de gente a ejercer la industria de la pesca y a matar nutrias y carpinchos; con este motivo consulta qué proceder ha de observar con respecto a las autoridades locales que mandan recorrer aquellos lugares, invadiendo su jurisdicción.

25.º) El Receptor de la Esquina pone en conocimiento del Sr. Ministro de Hacienda que varios dueños de terrenos colindantes con ríos navegables, no sólo se oponen a que se cobre a los que ocupan las riberas los derechos que establece la Ley de Sellos, sino que los cobran ellos, con la intervención de las autoridades provinciales.

26.º) D. J. Sánchez pide se intime a D. Amadeo Ferreyra desaloje los terrenos que ocupa con un establecimiento para la elaboración de sal en Bahía Blanca, por estar ellos comprendidos dentro de lo que está autorizado a ganar sobre el mar, y le han sido concedidos en propiedad por el Congreso, por la Ley de Septiembre 28 de 1886.

27.º) Recientemente, con motivo de una cuestión acerca de la extracción de arena por el Parque 3 de Febrero, el Ministro de

Hacienda requiere la opinión de esta Procuración General, acerca de la facultad del Gobierno Nacional para reglamentar y gravar la extracción de arena de las riberas, tanto en territorio Federal como en el de las Provincias.

28.º) Finalmente, el Jefe de Policía de la Capital comunica que en varias ocasiones la Prefectura Marítima ha tomado conocimiento de los crímenes y delitos cometidos en la ribera, instruyendo sumarios, con menoscabo de su jurisdicción, y pide se deslinde la jurisdicción territorial de la autoridad marítima de la que le corresponde a la Policía, en el concepto de que corresponde a la primera, a la Prefectura, la vigilancia de los Puertos y muelles y, que la segunda, la de Policía, se extiende hasta la ribera misma.

29.º) Con motivo de haber rehusado el Alcalde de las Carabelas la entrega del cadáver de un hombre, muerto en aquellas islas en Julio ppdo., el Sub-Prefecto del Tigre consultaba acerca de si la autoridad marítima debe levantar el sumario de los crímenes que se cometen en las islas; agrega el Sub-Prefecto, que si el derecho de intervenir en los crímenes que se cometen en las islas, compete a la Sub-Prefectura, considera oportuno se solicite del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, prevenga a las autoridades de su dependencia en aquellos lugares, no dificulten ni imposibiliten la acción de las autoridades de la Nación.

30.º) El Sr. D. S. Sáenz Valiente, solicita de V. E., se respete la propiedad de 8 lotes de terreno sobre el Río Paraná a inmediaciones del Rosario, que el Gobierno de Santa Fe vendió en 1852 y que hoy pertenecen a su señora esposa, por adjudicación que le fué hecha en la testamentaria del General Urquiza. El Departamento de Ingenieros reproduciendo un extenso dictamen del Asesor del mismo, sostiene que el Gobierno de Santa Fe, no pudo vender aquellos lotes, porque, estando cubiertos por las aguas del río en su mareas ordinarias, pertenecen al Gobierno de la Nación.

31.º) Por último la Sociedad General Pobladora, pide a V. E. obligue a las empresas de los FF. CC. del Sud de la Ensenada, a dejar expedita la obstrucción que importan sus puentes, para la navegación del Riachuelo de Barracas, cuya canalización le ha sido concedida por ley del Congreso.

Propiedad de las aguas, de las riberas y de los lechos de los ríos navegables

Es más fácil concebir, que definir lo que es un río. Entre las varias definiciones que he encontrado, paréceme la que mejor idea da de lo que es un río, la siguiente: agua que corre entre dos riberas más o menos caracterizadas.

No es sencillo hacer la división, que es la primera que ocurre, entre ríos navegables y los que no lo son.

¿Qué es lo que debe entenderse por ríos navegables en sentido legal?

Navegables son todos para botes y canoas, por poco que tengan agua para llamarse tales. Pero no es esto sin duda a lo que la ley se refiere.

Por extraño, que parezca, esta clasificación de los ríos navegables y de los que no lo son, es lo que más ha preocupado a la Unión Americana.

Según la ley inglesa, sólo es navegable el río sujeto al flujo y reflujo del mar.

Llevada a Estados Unidos esta regla calculada para los ríos de Inglaterra, pequeños como propios de una isla, condujo a las más grandes aberraciones cuando hubo de aplicarse a los grandes ríos del Continente Americano, sólo comparables a los mares.

Y tal es el poder de la tradición y el respeto a la ley en aquella nación, que numerosas Cortes de Justicia de los Estados, y aun la Corte Suprema Federal, llegaron a declarar en repetidas y muy meditadas resoluciones, que ríos como el Ohío, el Misisipi, no eran navegables, porque no recibían el flujo y el reflujo del mar, no obstante que corría sobre sus aguas el comercio de todas las naciones, como si dijéramos nosotros que el Uruguay y el Paraná no son navegables, porque no reciben el flujo y el reflujo del mar.

Al fin, después de muchos años de largas discusiones, como era natural, la verdad prevaleció, y hoy se entienden por ríos navegables aquéllos que *de hecho se navegan*. Poco importa que el caudal de agua sea escaso; basta hoy una o dos cuartas para vapores de cientos y miles de toneladas.

Puede también suceder que un río, aunque tenga las condiciones de navegabilidad, no sea reconocido como navegable, porque no se navega o no haya sido declarado navegable por ley.

En el conocido caso del Black-Bind Marsh Creecko, la Corte Suprema de Estados Unidos, declaró que no había lugar a la indemnización que pedía el dueño de un buque que se había ido a pique, a consecuencia de una represa construída en el arroyo de aquel nombre, porque no habiendo legislado sobre él el Congreso, el Estado de Delaware, por cuyo territorio corría, había podido autorizar legítimamente la construcción de la represa, en ejercicio de la facultad de reglamentar el comercio interno, reservado a los Estados por la Constitución, entre los no delegados por la Constitución al Gobierno General.

Entre nosotros el río o riacho de Goya, que puede apenas decirse navegable, pues una parte considerable del año sólo da paso a canoas. No obstante esto, la Corte Suprema, implícitamente lo ha declarado navegable, al resolver en favor de la justicia una cuestión de competencia, con ocasión de un homicidio perpetrado en sus riberas.

La circunstancia de existir oficinas fiscales en quel río o riacho, dijo la Corte, prueba de que el Congreso ha legislado sobre él y lo ha declarado navegable.

Puede decirse sobre este punto: primero, que son ríos navegables aquéllos que de hecho se navegan a los objetos del comercio; segundo, aquéllos sobre los que ha legislado el Congreso y los ha declarado hábiles para las operaciones del comercio.

A más del agua, son partes integrantes de todo el río, el lecho, que es el suelo por donde corre; la playa o ribera interna, que es la parte comprendida entre las más altas y más bajas crecientes ordinarias; y lo que propiamente se llama ribera, que es la parte de tierra firme entre la línea de las más altas mareas ordinarias, hasta los treinta y cinco metros de la ley o lo que las Municipalidades respectivas determinaren. En el Río de la Plata esta división no puede estar más caracterizada. Las aguas se retiran con frecuencia cuadras enteras, dejando en descubierto una inmensa playa, que constituye en este caso la *ribera interna*. Lo que vulgarmente se llama ribera, principia en la parte conocida por *verde*. En el Paraná y en el Uruguay la separación es menos marcada, pero no es di-

fácil trazarla por la observación de sus crecientes periódicas, y por el mismo aspecto de las tierras bañadas y abandonadas por las aguas sucesivamente, alternativamente, así como el carácter de la vegetación que en ellas se advierte con frecuencia.

Paso ahora a la cuestión tan debatida de la propiedad de estos tres grandes elementos constitutivos de los ríos.

Las aguas

Los ríos, se ha dicho con toda propiedad, son los caminos de Dios. Son como el aire, la luz, el agua de que todos los hombres tienen el derecho de gozar y de que a ninguno se puede privar. Son como los mares que sirven para la comunicación de las naciones, y que ninguna puede apropiarse para sí, para excluir a las demás.

La libertad de navegarlos es hoy de derecho universal; está consagrada por la conciencia humana y no puede ser perjudicada, ni por el abandono, ni por el tiempo, ni por la fuerza. *Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo*, decían las leyes de Partida, *son éstas: el aire, las aguas de la lluvia; cualquiera criatura que vive puede usar de estas cosas, según él fuera menester. Y los ríos y los puertos y los caminos públicos, pertenecen a todos los omes comunalmente, en tal manera, que también pueden usar de ellos los que son de otra tierra extraña, como los que moran o viven en aquella tierra do son*, Ley 3, Título 8, Partida 3; 6, Título 28, Partida 5.

Nuestro Código Civil, contiene declaraciones idénticas, art. 2339; es entre nosotros precepto constitucional la libre navegación de nuestros grandes ríos, librados sin reserva al comercio de todas las naciones.

Las riberas

Las cuarenta varas de ribera es una expresión tradicional. Al enunciarla, nadie pone en duda que esas cuarenta varas pertenecen al dominio público en general, y determinadamente a la Nación.

¿De dónde ha nacido esa preocupación popular? ¿En qué ley, en qué principio, en qué doctrina se apoya?

No lo sé, ni lo han sabido los Dres. Vélez Sársfield y Segovia, que no hacen mención de tales cuarenta varas en sus notas sobre el

C. C., ni han podido encontrar su origen los Dres. Camilo Mercado y G. Escalera Zubiría en sus interesantes estudios sobre la materia.

La primera vez que estas cuarenta varas de ribera aparecen en nuestra legislación, es en un decreto del año de 1823, durante la administración del General Rodríguez.

«Contrarían las leyes vigentes, dice el decreto, las zanjas abiertas en las orillas del Riachuelo; los propietarios de los terrenos de una y otra banda, deberían dejar sin zanjas un espacio de cuarenta varas por cada lado».

En 1826, Rivadavia ordenó nuevamente se dejaran libres estas cuarenta varas de ribera, y posteriormente aparecen las mismas cuarenta varas en varios decretos gubernativos, sin que ninguno diga cuáles son esas *disposiciones vigentes* a que se refería el primero.

El mismo redactor de nuestro Código Civil, no ha escapado a la influencia de estas cuarenta varas, que ha aceptado por norma al fijar en treinta y cinco metros el espacio que los dueños de terrenos limítrofes con ríos y canales navegables, deben dejar expedito para el uso público.

Sea, empero, cual sea el origen de esta tradición popular, el hecho es que ella se ha arraigado en la conciencia pública, a término de ser la que más ha contribuido a la creencia popular de que los ríos y sus riberas pertenecen al Gobierno de la Nación.

Voy a demostrar que las riberas pertenecen a los dueños de los terrenos limítrofes con los ríos y canales navegables, con las limitaciones que el Código Civil establece; y los ríos, sus playas y sus lechos, a las provincias cuyos territorios bañan o atraviesan, con las limitaciones establecidas por la Constitución.

Lo primero me será fácil, pues trataré de transcribir las disposiciones de nuestra legislación.

Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas en este mundo, son éstas; dice la ley de partida antes citada: el aire, e las aguas del mar, e la ribera, e por nada todo ome se puede aprovechar de la mar e de la ribera, pescando e navegando e fazendo todas las cosas que entiene a su pro son.

La ley 6, título 28, Partida 3, es todavía más explícita: *los ríos e los puertos e los caminos públicos, dice, pertenecen a todos los omes comunalmente, en tal manera, que también pueden usar de ellos los*

que son de otra tierra extraña, como los que moran o viven en aquella tierra do son. E como quiera que las riberas de los ríos son cuanto al Señorío, de aquellos cuyo son las heredades a que están ayuntadas; con todo eso, todo ome puede usar de ellas, ligando a los árboles que están y sus navíos; e adobando sus naves, e sus velas en ellas, e poniendo y sus mercaderías; e pueden los pescadores y poner sus pescados, e exugar sus redes, e usares de las riberas en todas las otras cosas semejantes, que pertenecen al arte, e al menester por que viven.

La ley 8 del mismo título 28, Partida 3, establece la limitación a esta regla general: *Molino, ni cañal, ni casa, ni torre, ni cabaña, ni otro edificio ninguno, dice, non puede ningún ome fazer nuevamente en los rios por los cuales los omes anden con sus navios, ni en las riberas de ellos porque se embargase el uso comunal de ellos. E si alguno lo fiziesse y de nuevo, o fuesse fecho antiguamente de que viniesse el año al uso comunal debe ser derribado, Ca non sería cosa guisada que el pro de todos los omes comunalmente se estorbásse por la pro de algunos.*

Estas sabias disposiciones que los Reyes de España tomaron de la legislación romana, y que son, puede decirse, de derecho universal, no podrían faltar en nuestros Códigos.

Artículo 2339 del Código Civil.

El especifica los bienes públicos del *Estado General o de los Estados particulares*, de que todos tienen el uso y goce, con sujeción a las prescripciones del mismo y a las ordenanzas generales o locales, en esta forma:

1.º *Los mares adyacentes del territorio de la República, hasta la distancia de una legua marina.*

2.º *Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros.*

3.º *Los ríos y sus cauces y todas las aguas que corren por cauces naturales.*

4.º *Las playas del mar, y las playas de los ríos navegables, en cuanto su uso sea necesario para la navegación, entendiéndose por playas del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan en sus más altas mareas y no en ocasiones extraordinarias de tempestades.*

5.º) *Los lagos navegables por buques de más de cien toneladas, y también sus márgenes.*

6.º) *Las islas formadas o qua se formen en el mar territorial, o en todas clases de ríos, o en los lagos navegables.*

Como se ve, en esta enumeración de los bienes públicos de la Nación o de las Provincias, según el caso, no están incluídas las famosas cuarenta varas de ribera, sino simplemente las playas, por la que, como hemos visto, no puede entenderse otra cosa sino la faja de tierra que las aguas del mar o de los ríos cubren o desocupan periódicamente.

Estas cuarenta varas están regidas por otras disposiciones del mismo Código.

«Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la navegación por agua, dice el art. 2639, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en este espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna». «Si el río o canal, agrega el artículo siguiente, atraviesa alguna ciudad o población, se podrá modificar por la respectiva Municipalidad el ancho de la calle pública, no pudiendo dejarla de menos de quince metros».

Vienen incluídas estas disposiciones entre las limitaciones del dominio privado, y lo son, en efecto, a la par que otras muchas que prolijamente enumera el Código en los numerosos artículos del título 6, libro 3. La misma limitación, la excepción, empero, confirma la regla, y es la prueba más acabada de que las riberas de los ríos navegables pertenecen a los propietarios de los terrenos que con ellos lindan, los que pueden ejercer sobre ellos todos los actos de dominio que no les hubiesen sido prohibidos. No pueden nacer construcción o cosa alguna que embarace el uso público y perjudique a la navegación, pero pueden siempre, bajo la misma condición, aprovechar los pastos, los árboles, las piedras, la arena, que sobre los treinta y cinco metros existieren. Y a más del beneficio directo tiene el propietario, como es consiguiente, la facultad de excluir a otros. Se ha visto, por ejemplo, solicitar permiso a la Autoridad Nacional para explotar las maderas y caleras que existieren en los treinta y cinco metros de un río de la Provincia de Corrientes.

¿Se concibe sin dificultad, cuántos perjuicios no originaría a los propietarios esta explotación y cómo impedir sin una costosa vigilancia, que no pasara de los treinta y cinco metros en cuestión?

Después de lo que dejo expuesto, en presencia del texto tan claro como explícito de nuestra legislación antigua y moderna, no se concibe cómo subsiste todavía, la idea equivocada de que las riberas pertenecen al Estado, General o Provincial, toda vez que el uso inmemorial o de larguísimo tiempo o una disposición expresa no las haya separado del dominio privado.

La ley de papel sellado establece el sello de un peso por el permiso para depositar transitoriamente maderas, fierros, etc., en las riberas, lo que implica en la Autoridad Nacional, la facultad de acordarlo.

Los Sres. Boyo, tenían en Campana un depósito de carbón, dentro de los treinta y cinco metros de ribera de los terrenos de la Estación del F. C. del Rosario. Pretendieron ser exonerados del sello en cuestión, bajo pretexto de que pagaban arrendamiento, a la empresa.

Esta hizo valer la exoneración de todo impuesto que le acuerda su concesión.

Mi opinión fué que el impuesto del sello, o cualquier otro, era independiente de los arreglos que los señores Boyo pudieran haber hecho con el ferrocarril, para ocupar sus terrenos, por cuanto la jurisdicción de la Nación sobre las riberas, era independiente de la propiedad de los terrenos, inalienable y superior a todo otro derecho.

En el mismo puerto de Campana, el Receptor de Rentas, señor Auvías, —tal es la confusión que existe sobre la materia—, consiente contra todo derecho, y no obstante las reiteradas reclamaciones de los propietarios, un depósito permanente de bebidas dentro de los treinta y cinco metros, que en las costas del Paraná, representan fuertes erogaciones por la necesidad de resguardarlos de las crecientes, mediante grandes y costosos terraplenes.

Propiedad de las riberas

Contra la opinión general, no me será difícil demostrar que las aguas, las playas y el lecho de los ríos navegables, pertenecen a las Provincias, cuyos territorios bañan o atraviesan, no a la Nación.

En ningún tiempo fué esto cuestión en los Estados Unidos, cuya jurisprudencia sobre el particular nos es perfectamente aplicable.

Cuando la revolución tuvo lugar, dice Fanny, al fundar la opinión de la Corte Suprema en el caso de *Martín de Waddie*, el pueblo de cada Estado se hizo soberano, y en este carácter asumió el derecho absoluto a todas sus aguas navegables, y a las tierras bajo de ellas, para el uso de la comunidad, con sujeción solamente a los derechos atribuidos entonces por la canalización, al gobierno General. 16 Peters, 410.

En los Estados Unidos, dice Honck en su grande obra sobre los ríos, las playas de los ríos y el suelo bajo ellos, pertenecen al Estado en que están situados, en su calidad de soberano. Esta es también la opinión de Kant, Pomeroy y demás tratadistas americanos, sin que después del conocido caso del *Pollard's lessee V. Hagar*, que sentó majestuosamente la jurisprudencia sobre la materia, pudiera citarse uno solo que sostuviera lo contrario.

El dominio eminente, la propiedad, en estos casos, sobre las riberas y el suelo bajo, los ríos navegables para todos los objetos municipales, dice otra de las resoluciones de las Cortes Americanas, pertenecen exclusivamente a los Estados dentro de su jurisdicción territorial; y ellos, y sólo ellos, tienen poder constitucional para ejercerlo. Conceder a los Estados Unidos el derecho de transferir a un ciudadano la propiedad de las riberas y del lecho de las aguas navegables, sería colocar en sus manos un arma que podría ser usada en gran perjuicio de la soberanía de los Estados y privar a éstos de la facultad de ejercer numerosos e importantes actos relativos a sus poderes policiales. Pero en la mano de los Estados, este poder nunca podría ser usado de manera que afectase el ejercicio de derecho alguno de dominio eminente o jurisdicción, con que los Estados Unidos han sido investidos por la Constitución.

Esta doctrina no es nueva entre nosotros; ha sido sostenida con gran lucimiento en épocas no muy remotas.

Pero fuerza es reconocer, ha hecho poco camino.

Con motivo del primer proyecto del Puerto Madero en 1869, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, siendo Gobernador el Sr. Emilio Castro y Ministro de Hacienda el Sr. P. Agote, sostuvo valientemente, contra la opinión del Presidente de la República, General Sarmiento, y de su Ministro de Hacienda, Dr. Vélez Sárs-

field, que los terrenos en que dicho Puerto iba a ser construído en la playa del río, frente a esta Ciudad, eran de propiedad de la Provincia.

Llevada la cuestión al Congreso para la aprobación del contrato, tuvo lugar en el Senado una de las discusiones más elevadas, más ilustradas y más patrióticas, que recuerdan nuestros anales parlamentarios. Daba realce excepcional al debate, la importancia de la materia, la extraordinaria expectación pública, la misma talla de los oradores, el Dr. Vélez Sársfield, grande figura histórica, redactor de nuestros Códigos, por una parte, y por la otra, el General Mitre, que descendía de la Presidencia, con su inmensa popularidad nunca desmentida.

La Provincia de Buenos Aires, decía el Dr. Vélez Sársfield, apenas será dueña del terreno en que está edificada su Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, ni ninguna provincia, tienen derecho al suelo, bajo las aguas, en los ríos navegables. Esto es preciso que lo sostengamos aunque se gaste doble cantidad, que la que se ha presupuestado en hacer el puerto para la Nación. Es preciso sostener este gran principio: de que la Nación puede trabajar sus puertos y sus aduanas sobre todos los ríos navegables.

La idea de la propiedad del suelo debajo del agua, continuaba el Dr. Vélez, fué una antigua doctrina que combatieron los romanos. Decían algunos, que el agua, en los ríos, era lo accesorio y el suelo lo principal; que, por consiguiente, prescindiendo del agua, todo el suelo que estaba cubierto por ella, era de propiedad del que ocupaba los terrenos inmediatos al agua, porque un río no puede pasar por el aire, y el que es dueño del río, es dueño de todas sus costas. Por consiguiente, el que legisla sobre el río, debe legislar sobre el suelo en que está sentado el río, porque no son cosas que se pueden dividir.

El juriseconsulto Ulpiano, continuaba el Dr. Vélez, discurriendo sobre el caso en que un río navegable cambiase su curso, y fuera a ocupar terreno de particular, pregunta: ¿Para quién se han perdido estos terrenos? Y responde diciendo que la ley romana había hecho una conquista verdadera para el derecho público, estableciendo que esos terrenos, como los ríos, eran de uso público, siendo, por consiguiente perdido para el particular.

A esto contestaba el General Mitre en los términos siguientes:

En el orden administrativo, en el sistema federal, decía, todo el territorio de la Nación se divide y subdivide en distintas soberanías equilibradas, cada una de las cuales gira armoniosamente dentro de su órbita. El Poder Nacional que preside el movimiento, no se ha reservado sino aquella parte de alta soberanía necesaria para dominar el conjunto, y en cuanto al territorio, no se ha dado más que el indispensable para residir, subordinándose por lo demás a la condición del propietario civil dentro de los límites de las soberanías territoriales de los Estados o Provincias. Como poder público representante de la propiedad común, hay un campo vasto en que ejerce una jurisdicción, o un imperio exclusivo y absoluto y es sobre la superficie de las aguas navegables. Esto no quiere decir que el Poder Nacional sea dueño de esas aguas; es simplemente regulador. La prueba es que donde el agua se retira, es el territorio adyacente el que gana; y donde, por un accidente, un río navegable se convirtiese en tierra firme, ganaría la nueva soberanía federal que sobre ellos se formase más adelante.

El Gobierno General no posee a título de soberanía en el orden federal, sino el terreno suficiente para pisar y moverse, y accidental y transitoriamente, los territorios que guarda en depósito para emanciparlos más tarde.

Estudiando la cuestión bajo otra faz, el General Mitre demostró de la manera más concluyente con la autoridad de los primeros tratadistas americanos y de la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, perfectamente aplicables a nosotros, de que en esta Nación no es hoy materia de duda, que las orillas y el lecho de los ríos navegables, son propiedad de los Estados, y no de la Nación.

Al salir de tan apasionadas discusiones pudieron notar los elocuentes oradores, que sin la autoridad de Ulpiano, ni de Zanoy ni Coleg, la cuestión estaba resuelta de hecho entre nosotros.

Los carros cargados de arena con permiso otorgado por la Municipalidad de esta Capital de la Provincia entonces, en presencia de la autoridad de la Nación, al pasar por las puertas del Congreso, daban testimonio inequívoco, de que de tiempo inmemorial habíase encontrado lo más lógico y natural, que el dominio de la tierra no se interrumpiera por la circunstancia de que las aguas las bañaran accidental o periódicamente.

Estrechado el Dr. Vélez en el terreno constitucional por la doctrina americana, que él mismo no negaba, había anticipado su defensa.

El principio que ha prevalecido en los Estados Unidos sobre la propiedad del suelo cubierto por las aguas de los ríos navegables, decía, no pueden ser aplicables absolutamente a nosotros, porque nosotros hemos permanecido siempre unidos en Nación, Nación que tiene derechos preexistentes, puede decirse, a la Constitución Nacional.

La revolución se hizo en 1810, agregaba; la Junta mandó que cada provincia enviase un diputado para el Gobierno General. Yo recuerdo todavía los nombres de algunos que habrán conocido a los Sres. Senadores. De aquí se mandó al Sr. Pueyrredón a Córdoba, después entró el Sr. Carrera mandado por el Gobierno Nacional. Cada Provincia siguió gobernada como antes estaba; ninguna constituyó cuerpo legislativo, y todas obedecían al Gobierno General que aquí se había creado.

¿Cuándo han sido, pues, independientes estas Provincias? ¿Quién me dirá que las banderas que están en la Catedral, no son de la Nación sino de las Provincias, que los grandes edificios que construyó el Gobierno Nacional cuando todavía no había Provincia de Buenos Aires, no son nacionales?

¿Quién me dirá que la tierra pública, fuera de los límites que las Provincias tenían señalados, no es de la Nación?

¿Y de quién es el Río de la Plata, agregaba, de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación? Yo he sostenido siempre que el Río de la Plata no es de la Nación, ni de la Provincia de Buenos Aires; que el Río de la Plata es de uso público para todas las naciones del Universo.

A esta patriótica inspiración, contestó el General Mitre, rechazando el cargo de localismo a que su actitud podía prestarse, con estas preciosas palabras que transcribo con placer, si quiera sean para señalar el camino recorrido en la larga y apasionada lucha entre los sentimientos de la nacionalidad y de la localidad, igualmente honrosos uno y otro.

«Entre el espíritu del discurso que acaba de pronunciar el Sr. Ministro, dijo el General Mitre, hay varios puntos de contacto que me es grato señalar.

«Uno y otro hemos profesado siempre la religión de la patria común, y la hemos confesado en los días de incertidumbre y de prueba. Guiados por las luces internas de nuestras conciencias, no nos ha ofuscado, ni el torbellino de las pasiones, ni el polvo del combate que impedía a los hermanos reconocerse entre sí. Y cuando más ardiente ha sido la lucha, más alto hemos levantado la bandera nacional, como un punto de reunión para todos.

«A su sombra me ha tocado la fortuna de hacer prevalecer los grandes principios de unión y libertad, bajo cuyos auspicios se ha asentado definitivamente la nacionalidad argentina».

Contestando a los antecedentes históricos en que el Dr. Vélez se apoyaba para desconocer la jurisprudencia americana, dijo el General Mitre lo siguiente, estudiando las cuestiones bajo una nueva faz que importa dilucidar:

«Lo que se ha dicho respecto a los trabajos de la Independencia, rememorando con palabras patrióticas aquella época en que levantamos la frente como hombres libres para constituir un pueblo libre, no es sino el punto de partida de la nacionalidad, bajo la base de la República, pero no es todavía la fuente de la organización política, aunque algunos antecedentes nos hayan ligado.

«Tras aquella serie de gloriosos combates, de viriles defensas, de patrióticas tareas, y de ensayos de constitución malogrados sin conseguir consolidar ni la unidad nacional, ni instituciones nacionales, vinieron los tristes días de la guerra civil. Este es mi punto de partida: la lucha colonial, la anarquía, la disolución política y social, a que llegamos después de haber conquistado la independencia, sin poder hacer fructificar las semillas de la libertad derramada por la mano generosa de nuestros padres. Pero de ese caos brota la luz, de aquel desorden surge un nuevo elemento de vida, y a pesar de tantas desgracias nos sentimos consolados, al ver prevalecer el principio vital de la nacionalidad sobre la base de la igualdad, resistiendo a las fuerzas disolventes que lo combaten sin aniquilarlo.

«Desde 1820 en adelante, el sufragio toma nueva forma, y de municipal se hace popular, los Congresos invisten nueva representación sobre distinta base, las Provincias empiezan a manifestar su personalidad política, ya de derecho, ya dando fórmula definitiva al hecho del aislamiento de los pueblos. Entonces hizo su verdadera apari-

ción en la escena el sistema federal, y el movimiento impreso por esas tendencias a la sociedad, se continúa y se complementa en nuestros días

«Durante aquella noche de aislamiento, la Provincia de Buenos Aires, que se encontró sola, que buscaba el amparo de sus hermanas y no lo encontró, que buscó la estrella que debía guiarla en aquellas tinieblas, y no la vió asomar en el horizonte de la Patria, concibió para sí y para sus hermanas las instituciones federales, que eran las únicas que nos podían salvar, dando base a la futura organización».

El General Mitre entró enseguida a demostrar cómo D. Bernardino Rivadavia, que ha sido conocido vulgarmente como el apóstol de la unidad, ha sido el verdadero fundador de nuestras instituciones federales, cómo las instituciones representativas que él fundó, dieron la vuelta a la América del Sud, como la habían dado nuestras armas; y de esto deducía que, si hay alguna raíz genealógica que pueda darse al orden de cosas presentes, es aquel momento supremo en que la nacionalidad, próxima a sucumbir, y en que las provincias anarquizadas trataron de salvarse y se salvaron en su capacidad de tales, ensayando con más o menos verdad, la reproducción del tipo de Buenos Aires, dándose soberanías locales, legislaciones provinciales, germen de las soberanías provinciales que la Constitución que nos rige ha consagrado. Es partiendo de esta base, de las Soberanías Provinciales, y no a título de la sucesión de los Reyes de España, dijo por último que el pueblo de la Provincia, se constituyó en Nación y formó un Gobierno General, entrando cada uno con sus límites territoriales, en los que van comprendidas las aguas navegables y el suelo por que corren.

La réplica del General Mitre era patriótica y perfectamente constitucional.

Por más que el Dr. Vélez deseara emanciparse de los antecedentes de la Unión Americana, a cada paso los encontramos, puesto que de ellos hemos tomado las instituciones que nos rigen.

Esta cuestión de los derechos fundados en las concesiones de los reyes que gobernaron la América antes de su emancipación, no es nueva. Fué extensamente debatida en la Corte Suprema Federal en los varios casos a que dieron lugar las enajenaciones de los Reyes de Inglaterra y de España.

En ellas hicieron valer los interesados el argumento de que, derivando sus derechos de los Reyes de España y de Inglaterra, debían ser respetados, por cuanto estuvo en las facultades de aquellos Soberanos acordarlos.

Con este motivo hizo la Corte Suprema la siguiente declaración, que nos es perfectamente aplicable, como lo es a todo país que pasa de una a otra Soberanía. Si fuera cierto, dijo la Corte, que los Estados Unidos adquirieron todo el territorio de Alabama, de la España, no podría de ello deducirse las consecuencias que se pretende.

No es posible admitir que el Rey de España, por Tratado o de otra manera, pudo transmitir a los Estados Unidos ninguna de sus prerrogativas reales, y mucho menos puede admitirse que tuviesen ellos poder o capacidad para ejercerlos. Cuando una Nación adquiere un territorio, por tratados o de otra manera, debe conservarlo con sujeción a la Constitución y a las leyes de su propio Gobierno, y no a las de la Nación que los cede. Véase Art. Ley de las Naciones 6, C.17, 210, 244, 245, y C.2, C.7, 80.

No obstante la luz que derramó sobre la materia aquella discusión memorable, en que el General Mitre en cinco grandes discursos, que serán leídos siempre con placer y con provecho, demostró de una manera concluyente el derecho perfecto de las Provincias a las tierras que ocupan sus aguas navegables, no obstante esto, digo, las vacilaciones, las dudas, subsisten siempre, y puede aún decirse que la buena doctrina ha sido vencida. Y no es porque hayan faltado voces autorizadas que la recordaran.

Al discutirse en 1884, en la Cámara de Diputados, el privilegio que solicitaba un Sr. Aubin para la elaboración de sal en la costa Sud de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. D. Nicolás A. Calvo, observó que las riberas y las playas del mar, que las salinas ocuparían, pertenecían a la Provincia.

No obstante esto, repito, el Congreso ha acordado a D. Amadeo Ferreyra, la construcción de un puerto en Bahía Blanca, concediendo al mismo tiempo en propiedad trescientas manzanas de las que conquistó sobre el mar.

Recientemente V. E. ha concedido al Hotel del Tigre el derecho construir casillas de baño ocupando la ribera y el lecho del río; a la Sociedad Puerto de San Nicolás, los terrenos que conquistare sobre el Paraná; a D. Guillermo Pinssolle el establecimiento de par-

ques de ostras en la costa Sud de la Provincia de Buenos Aires; a otro señor la extracción de arena frente a la ciudad del Paraná.

No me parece dudoso que si estas diversas concesiones fueran llevadas a la Corte Suprema, los poderes de V. E. para otorgarlas serían desconocidos, y las concesiones declaradas suspensivas, mientras no tuvieran el asentimiento de los Gobiernos de la Provincia.

En Octubre del año ppdo., el Ministerio del Interior, a cargo del Doctor Wilde, encomendó al Dr. Gualberto Escalera Zubiría, un estudio acerca de las condiciones en que se hallaban los terrenos de la ribera de la Capital del Rosario, que son, dice el decreto, por las leyes vigentes, del dominio público, a fin de recuperar los que hubieran sido indebidamente ocupados o vendidos, o dejar bajo el dominio privado los que sean legítimamente poseídos.

El Dr. Escalera Zubiría ha desempeñado su cometido de una manera que le hace alto honor.

Acaba de presentar en un folleto publicado recientemente, un estudio acabado de la materia, bajo el punto de vista de la ley civil. Bajo la faz constitucional en sus relaciones con la autoridad nacional, no ha escapado, empero, a la preocupación popular.

Partiendo de la base de que las playas o riberas internas, y el lecho de los ríos pertenece a la Nación, resume así la opinión que se le había pedido: las ventas hechas por el Gobierno de Santa Fe son írritas y nulas, porque bajo cualquier legislación a nadie le es permitido vender lo que no es suyo.

Eran estas ventas la causa eficiente del decreto, y llégame aquí, a mí también, la oportunidad de hacer enmienda honorable.

El Gobierno de Santa Fe vendió en 1855, varios lotes de terreno sobre el Río Paraná frente al Rosario. El Gobierno Nacional necesitó construir edificios fiscales sobre los terrenos vendidos y surgió con este motivo la cuestión acerca de la legitimidad de la venta.

Consultado el Dr. Francisco Pico, Procurador General en aquella época, dió su parecer en los términos siguientes, que se distinguen, sino por su doctrina, por su precisión y claridad: «Desde el año 1855, en que la ciudad del Rosario principió a tomar gran importancia, el Gobierno de Santa Fe, se puso a vender a vil precio todos los terrenos del bajo en que existe el edificio de la Aduana, de modo que colocó al Gobierno Nacional en la imposibilidad de ensanchar y dar comodidad a este edificio y de construir allí mismo

los edificios necesarios para el servicio. Pero no se contentó con hacer este mal, sino que vendió también la ribera y aun los terrenos que están siempre bajo las aguas hasta el canal.

Todo lo que en la solicitud se dice de ribera, de vía pública, agregaba el Dr. Pico, es completamente imaginable. Este terreno está siempre bajo el agua en todas las estaciones y cualquiera que sea la situación del río.

Con estos antecedentes, comprenderá V. E., decía por último, el Dr. Pico, que la cuestión no es si ha de pagar a Bustinza treinta metros más o menos, sino si el terreno que llama suyo, es o no de su legítima propiedad.

Desde luego, es evidente, que el Gobierno de Santa Fe no ha tenido facultad para vender el río Paraná, que pertenece al uso común de la Nación, y sobre el cual ningún particular puede establecer dominio en parte alguna de sus aguas. Por consiguiente, el título en que se apoya Bustinza es nulo y como si no existiera. Mi dictamen es que V. E. así lo declare».

Posteriormente, en 1887, surgió de nuevo esta cuestión de los lotes vendidos por el Gobierno de Santa Fe.

El Departamento de Ingenieros, siguiendo el parecer de su Asesor Letrado, el Dr. D. N. Matienzo, se adhiere a la opinión del Dr. Pico, que yo seguí también.

Hoy, con un estudio más detenido, reconozco el error y pienso que el Gobierno de Santa Fe estuvo en su derecho al vender los lotes en cuestión, y que su venta debe ser respetada, mientras no se pruebe lo que no se ha abogado, ni menos probado, que perjudica a la navegación.

Esta será hoy mi opinión en el caso de la Señora Urquiza de Sáenz Valiente, poseedora de parte de aquellos lotes vendidos por el Gobierno de Santa Fe.

A la verdad, no se concibe cómo ha podido pensarse de otra manera, si no es bajo la influencia persistente de la tradición popular a que antes me he referido, y de las nociones adquiridas de los Gobiernos Europeos, que hasta ahora nos han sido más familiares.

¿Por qué razón las tierras que cubren las aguas han de ser de la Nación y no de las Provincias? Los ríos son del público, se dice. Pero las Provincias representan también el público, y si el interés

de la comunidad ha de prevalecer, es natural y lógico que las aguas y la tierra sobre la que corren los ríos, pertenezcan a aquel representante de los intereses generales que mejor puedan utilizarlo. Bajo este concepto no puede desconocerse que las Provincias están en condiciones mucho más favorables que la Nación.

Por otra parte, la propiedad de la Nación sobre las riberas y los lechos de los ríos, sería, como ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos, un peligro serio para las Provincias.

La prescripción constitucional que limita en el Gobierno General la capacidad de poseer bienes, no como un simple particular, sino a título de Soberano, al estrecho lugar de su residencia, a los territorios nacionales, y a los bienes que adquiriese por compra o por cesión de las legislaturas respectivas, no puede ser mejor calculada, ni más sabia.

Si la Nación pudiese adquirir soberanía sobre los bienes que comprase o adquiriese por cualquier otro título dentro del territorio de una Provincia, sustituyendo la Soberanía de la Nación a la Soberanía de las Provincias, éstas estarían expuestas a desaparecer.

Supongamos por un momento que la Provincia de Buenos Aires no hubiese vendido su capital, y que en los terrenos que el puerto Madero conquista sobre el río, se levantara otra ciudad bajo la jurisdicción de la Nación. Tendríamos entonces una ciudad provincial frente a otra ciudad nacional, sin otro límite de sus jurisdicciones respectivas, que una estrecha calle. ¿Quién puede desconocer las perturbaciones, los conflictos, las cuestiones de competencia, a que en una situación semejante daría lugar a cada paso, en el orden judicial, económico y político, así de la Nación como de la Provincia? Y este peligro hipotético, llegaría a ser una realidad en Bahía Blanca y San Nicolás, si las concesiones a que antes he hecho referencia se hubiesen de guardar subsistentes.

Pero me he extendido demasiado sobre este particular.

Resumiendo lo expuesto, diré para terminar esta parte, que creo haber demostrado suficientemente las proposiciones que indiqué al principio, es decir:

1.º) Que las riberas de los ríos y canales navegables pertenecen a los dueños de los terrenos limítrofes.

2.º) Que las playas y el lecho de los ríos y canales navegables pertenecen a las provincias, no a la Nación.

Pasaré ahora a los otros puntos que debo dilucidar.

Jurisdicción sobre los ríos y sus riberas

Sentado el principio de que los ríos y sus lechos pertenecen a las provincias, y sus riberas al dominio privado con las limitaciones consiguientes, la materia de la jurisdicción viene a quedar singularmente simplificada, si no resuelta.

Si las provincias son dueñas de los ríos, es natural que tengan el poder de utilizarlos, de mejorarlos, de canalizarlos, pues de otra manera de poco les aprovecharía el dominio.

La ciudad de San Luis en Estados Unidos mandó construir un dique para ligar a la tierra firme la Isla «Bloody» sobre el Mississippi, dentro de sus propios límites. Habiendo hecho oposición el Estado de Illinois, la Corte sentó entonces esta doctrina que ha quedado subsistente:

Mientras los ríos queden abiertos a los ciudadanos de otros Estados y cuando ninguna obstrucción material o substancial se oponga a su navegación por los Estados por cuyo territorio corren, los ciudadanos de los otros Estados, no tienen derecho de quejarse.

Los Estados, dentro de su jurisdicción pueden hacer lo que les convenga con sus ríos, toda vez que no perjudiquen los derechos de los otros. Este poder es necesario a los Estados para el gobierno de sus propios negocios domésticos, y ha sido ejercitado por ellos desde la formación del Gobierno. Pueden cambiar las corrientes de los ríos, o pueden aún cegar alguno de sus canales, reconocidamente navegables, considerando siempre de dejar libre el río para todos aquéllos que tienen derecho de navegarlo.

Así concluye la Corte, admitiendo que el canal en cuestión sea incuestionablemente navegable; la ciudad de San Luis tiene, sin embargo, el poder de cegararlo para unir la isla a la tierra firme, si el canal principal queda asimismo abierto a la libre y no interrumpida navegación.

Así concluye la Corte, admitiendo que el canal de referencia sea fiere al Gobierno General para impedir que obstáculo alguno embarace el libre uso de esos caminos llamados de Dios, que sirven para la comunicación de los pueblos, y el comercio de las Naciones.

Este poder no nace del dominio de los ríos ni de la propiedad de la tierra, tiene su origen en la facultad que la Constitución confiere al Gobierno General para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras y las provincias entre sí, uno de los más esenciales e indispensables para el desempeño de la alta misión que le está conferida. Es este poder de jurisprudencia universal; la navegación, dice García Goyena, es de derecho público, y contra él no puede aprovechar la prescripción y otros títulos; la sociedad es siempre superior y antes que los particulares.

Para conservar aquel poder en toda su plenitud, no necesitaba la nación, ni el dominio, ni la propiedad de los ríos. Basta el conocido precepto constitucional que declara ley superior de la Nación las que dictara el Congreso y manda se cumplan, no obstante cualquiera disposición en contrario de las leyes o constituciones provinciales.

Es esta disposición la piedra angular de nuestro edificio social, para fortuna de la legislación, se ha incorporado a las costumbres. Si un particular o un Gobierno de Provincia, opusieran algún obstáculo a la libre navegación de los ríos, bastaría ocurrir a la justicia para hacerlo desaparecer, si no bastara la acción administrativa. La jurisdicción Nacional sobre los 15 ó 35 metros de ribera del C. C. fácilmente se comprende, sólo puede entenderse en materia civil, en cuanto sea necesario para hacer efectiva la limitación impuesta al propietario de no ejecutar obra alguna que perjudique el uso público.

Está, por consiguiente, en las facultades de la autoridad nacional, prohibir toda obra que perjudique el derecho que tiene todo ciudadano de usar de las riberas de los ríos a los objetos de la navegación.

En una causa seguida por el Dr. R. Capecchi contra Prader y Sansinena, por haber éstos levantado un cerco en la margen Sud del Riachuelo de Barracas, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, en terreno de su propiedad, impidiendo a Capecchi el acceso a un brete para el embarque de ganados, la Corte Suprema mandó levantar el cerco hasta dejar libre los treinta y cinco metros de la ley, a la que, dice la Corte a los expresados Prader y Sansinena, habían contravenido prolongándolo hasta el mismo río.

En cuanto a la jurisdicción criminal, la misma Corte Suprema ha declarado en más de una ocasión, que el conocimiento de los de-

litos cometidos dentro de los treinta y cinco metros corresponde a los Tribunales de la Provincia, y a la verdad, no se alcanza qué razón pudiera atribuir competencia a los de la Nación, sobre delitos comunes que tuvieran lugar en territorio, reconocidamente de propiedad y jurisdicción de la Provincia.

En 1885, Benito Quintana dió muerte a Filiberto Cabrasú, a uno o dos metros de la costa del río, cerca de la Ayudantía del puerto de Reconquista y de varias casas particulares, sujetas a la jurisdicción de la Sub-delegación política de Reconquista, Provincia de Santa Fe.

Habiéndose suscitado conflicto de competencia entre el Juez Federal de Corrientes y el del Crimen de Santa Fe, fué mi parecer el siguiente, que me permito transcribir para disipar las dudas que advertirá V. E. por las consultas al principio mencionadas, subsistentes todavía.

Un crimen cometido en territorio de alguna provincia o a algunas varas de las aguas navegables, en nada afecta los intereses de la navegación, ni los del comercio, y no hay razón que atribuya su conocimiento a los Tribunales de la Nación.

El artículo 3.º de la Ley de Jurisdicción y Competencia, de donde arranca la competencia de la Justicia Federal en casos de esta naturaleza, sólo se refiere a los ríos, islas y puertos, sin hacer mención de las riberas.

La conocida disposición del C. C. que limita los derechos del dominio privado dentro de los 35 metros de ribera, no puede considerarse fuente de jurisdicción, sino a los objetos que tal limitación han tenido notoriamente en vista, es decir, a la facilidad del tráfico, las conveniencias del comercio, la fiscalización de la renta.

La doctrina prevalente en las Cortes Americanas, paréceme de todo punto exacta y aplicable a las nuestras.

La jurisdicción del almirantazgo en materia criminal, dice Storny, abraza todos los delitos públicos cometidos en alta mar, ensenadas, puertos, bahías, a partir de la línea de las más bajas mareas. Allí es exclusiva la jurisdicción de los Tribunales del Almirantazgo, porque la de los Tribunales de Derecho Común está limitada a las ofensas cometidas en la extensión de un condado (en territorio de una provincia). Con respecto a las costas del mar, la jurisdicción

está dividida o alternada entre los Tribunales de Derecho Común y los del Almirantazgo (federales), siguiendo los límites de las altas y bajas mareas.

La Corte Suprema declaró corresponder la causa al conocimiento de la justicia local de Santa Fe.

Puentes

De lo que dejo expuesto, fluyen sin dificultad los dos principios que dominan la materia: 1.º) que las provincias tienen perfecto derecho para construir puentes sobre sus ríos navegables. 2.º) que la Nación tiene poder indiscutible para impedir su construcción y para hacerlos demoler, si son, o llegan a ser, un obstáculo, una *obstrucción*, en términos jurídicos, para la navegación.

Como dueñas de sus ríos, las provincias tienen el derecho indisputable de utilizarlos de la manera que crean conveniente; esto es natural. Es natural, empero, también, que al usar de su derecho no perjudique el de los demás, *ex non saria cosa guisada*, decía la ley de Partidas, *que el pro de todos los omes comunalmente, si estorvasse por la pro de algunos*. La libertad de los ríos sería una ilusión si cada provincia pudiera levantar obstrucciones en su curso, y no existiera un poder superior con la facultad de impedirselo.

Esta materia, como fácilmente se comprende, ha sido luminosamente debatida en los Estados Unidos, cuyo territorio surcado por tantos y tan grandes ríos y lagos, ha sido llamado para distinguirlo de los otros, continente de las aguas.

Las decisiones de las Cortes de los Estados y de la Corte Federal han sido siempre, como era de esperarse, en favor de la libertad; esto es, en el sentido de dejar libre y expedita la navegación de las obstrucciones que pudieran embarazarla o impedirla sustancialmente.

En 1832, la Legislación del Estado de Ohío, autorizó la construcción de una represa sobre el río Muskuigam, bajo la condición de que el concesionario pusiera compuertas para dejar libre paso de buques. La compuerta quedó inutilizada en una creciente y originó la pérdida de una goleta. Su dueño reclamó daños y perjuicios y la Corte se los acordó, porque dijo: —el permiso para la construcción de la represa debe entenderse de manera que no embarace la navegación; así que cuando la compuerta quedó inutilizada, la represa se convirtió en obstrucción— Hogg V. Zaneville.

En los casos ocurridos después, Cox y State, Sponer V. Mac Connel, Williams V. Beasdooley, etc., las Cortes confirmaron esta doctrina; fué, empero, el de Whelling Bridge, el que vino a sentar la jurisprudencia hoy por todos aceptada.

El Estado de Virginia concedió la construcción de un puente sobre el Río Ohío, cuyas dos márgenes le pertenecían, en un punto llamado Wheling.

El puente, que no era de abrirse, debía tener la elevación de noventa pies para dar paso a los buques de vela y vapor.

El Estado de Pensylvania se opuso, fundándose en que el puente en tales condiciones, era un obstáculo para los vapores que subían el río hasta su territorio, y perjudicaban considerablemente sus intereses.

Los constructores del puente contestaron que los noventa pies de elevación que tenía el puente, era bastante para dar paso a los vapores, exigiendo sólo de unos pocos, una pequeña modificación en la altura de las chimeneas.

Después de una prolija investigación de los hechos, y de una elaborada exposición de los principios que rigen la materia, la Corte Federal, declaró: que el puente era una obstrucción a la libre navegación del Ohío, que no era aceptable la doctrina de que los beneficios que ofrecía al tránsito público, pudiera compensarse con el perjuicio que irrogaba a la navegación; por cuanto, si el daño que sufría el Estado de Pensylvania pudiera parecer pequeño con relación a la magnitud de la obra, se trataba del interés de la navegación, que servía al transporte de millones de pasajeros y millones de valores en los ríos de la Unión.

De estos antecedentes deducía la Corte, que el puente debía ser colocado en condiciones de no ser una obstrucción, ya elevándolo hasta la altura de ciento diez pies, ya abriéndolo, o bien que, si no era esto posible, debía ser demolido.

Esta es, como he dicho, la jurisprudencia de los Estados Unidos, por todos admitida sin contradicción alguna.

Faltan entre nosotros precedentes, y si existieran, no podrían ser diversos, porque son las mismas las instituciones de uno y otro país, e idénticas las reglas de criterio para interpretarlas.

Haciendo ahora su aplicación al caso de los puentes de Barracas, el primero que ocurre entre nosotros, natural y lógicamente, llegamos a las conclusiones siguientes:

1.º) Que la Provincia de Buenos Aires, dueña de una y otra margen del Riachuelo pudo legítimamente autorizar su construcción.

No habiendo legislado hasta entonces el Congreso sobre la parte del río arriba de los puentes, poco navegable a la sazón, la provincia pudo lógicamente, autorizar su construcción aunque ello importara, en realidad, una obstrucción.

Tal fué la decisión de la Corte de Estados Unidos en el caso del Black Bird Harrish Creekeo, al rehusar la indemnización de daños y perjuicios por la pérdida de un buque, a consecuencia de una represa construída en un pequeño arroyo, con autorización del Estado de Delaware.

2.º) Que después que el Congreso ha legislado sobre esta parte del río y lo ha declarado navegable, los puentes en cuestión, si son una obstrucción, deben ser colocados en condición de que no lo sean, ya levantándolos o bien demoliéndolos.

Poco importa que presten grandes servicios a la vialidad de la provincia, como se dice; los beneficios y los perjuicios no se compensan en estos casos. Está de por medio el interés de la navegación que es superior e inalienable.

Toda construcción sobre los ríos, lleva por esto una condición expresa y siempre implícita, de que deberá levantarse, si en la práctica o con el tiempo llega a ser una obstrucción.

Si hoy se dejara subsistente un obstáculo cualquiera, bajo el pretexto de que hace más bien que mal, no habrá derecho para oponerse a otro en igualdad de circunstancias y de esta manera, llenaríase el río de pequeñas obstrucciones compensadas, y la navegación sería imposible al fin.

Poco importa también que la obra no sea de fácil ejecución, según se pretende.

Dado el progreso inmenso de la ciencia de los ingenieros y de la industria de los metales, no puede ofrecer hoy tampoco gran dificultad.

El recuerdo que se trae, no es feliz ni oportuno. Pueyrredón era un hombre de gran talento, como pintor, como arquitecto, pero no era ingeniero y carecía además de recursos para obras de tanta

magnitud. No es por esto de extrañarse que el puente que lleva su nombre, no llenara las condiciones de su contrato.

Queda sólo sobre este particular, la cuestión de hecho. ¿Son o no una obstrucción estos puentes?

Paréceme que basta enunciar esta proposición para decidirla sin que sea necesario ocurrir a la justicia, que sería, en definitiva, la autoridad llamada a resolverla.

Es bien sabido que estos puentes sólo dan paso a buques sin palos.

Esto no es navegación, ni puede ocurrir a nadie que para no tocar tales puentes, todos los buques, y digo todos, porque declarado navegable el río, todos tienen derecho a navegarlo, hayan de construirse sin palos exprofeso o habilitándose los existentes para quitarlos y ponerlos.

Es todo esto para mí tan claro, que me asiste la convicción de que las mismas empresas, lo han de reconocer y se han de apresurar a buscar medios fáciles y conciliatorios de salvar la dificultad en que ha venido a colocarlas la Sociedad Pobladora, apoyada en una ley del Congreso.

Conclusión

En esta larga exposición de los principios generales que rigen esta obscura y difícil materia, encontrará, V. E., espero, la solución a mi entender más en armonía con la letra y el espíritu de nuestras instituciones, a las diversas cuestiones sometidas a mi dictamen.

Le he dado una extensión inusitada que confío disculpará V. E., porque debía disipar dudas, cavilaciones y aun preocupaciones, persistentes en el sentimiento público, con singular tenacidad.

El respeto que debo, por otra parte, a las altas autoridades de la Nación, me imponían el deber de abundar en consideraciones, cuando mi opinión iba a encontrarse en desacuerdo con sus resoluciones. — Setiembre 10 de 1889.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Setiembre 17 de 1889.

Corresponde que el P. E. acepte una invitación que formula el Gobierno del Imperio Ruso para concurrir a un Congreso Penitenciario a celebrarse en San Petersburgo, debiendo al efecto designar delegado, en persona competente y munirlo de todos los antecedentes que sobre la materia existan en nuestro país, y si es posible de un estudio detallado de la tendencia de nuestra legislación y la experiencia dada por la práctica.

La Legación de Rusia, invita al Gobierno Argentino a concurrir al Congreso y Exposición Penitenciaria Internacional que se celebrará en San Petersburgo

Señor Ministro:

No es esta la primera vez que la República ha sido invitada a formar parte en Congresos de este género. En los Archivos del Ministerio encontrará V. E. la invitación que le fué dirigida ocho años atrás y recientemente la del año 85, para el último Congreso que tuvo lugar en Roma. En todas estas invitaciones fué siempre mi parecer que debiera V. E. aceptarlas, por cuanto, a más de la enseñanza que en estas Asambleas de los representantes de la ciencia jurídica, adquiere la República, era un deber de las Naciones civilizadas, concurrir en la esfera de su posibilidad, al Congreso de la Administración y gobierno en todas sus manifestaciones.

En el presente caso no podría ser otra mi opinión.

Sólo diré, como he dicho antes de ahora, que la indicación del Ministerio de Relaciones Exteriores no puede ser más oportuna. Para que la República esté debidamente representada es indispensable que la persona que nombrara V. E. al efecto, se presente munida de todos los antecedentes que sobre la materia existan entre nosotros, y si es posible, con un trabajo en que se estudie y detalle la tendencia especial de nuestra legislación y los resultados en bien o en mal, obtenidos. — Setiembre 16 de 1889.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Octubre 12 de 1889.

Tomo 3, pág. 458. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente la remisión de antecedentes al P. E. sobre denuncias contra un Juez Letrado del Territorio de Misiones, por cuanto de conformidad al art. 32 de la Ley de división y organización de los Territorios Nacionales, los jueces letrados sólo pueden ser removidos mediando las formalidades del juicio político.

Juan Bautista Romero sobre denuncia contra el Juez Letrado del Territorio de Misiones, D. Darío Quiroga

Señor Ministro:

Según la disposición explícita y terminante del artículo 32 de la ley de división y organización de los Territorios Nacionales, los Jueces Letrados de otros Territorios sólo podrán ser removidos en la forma establecida para la remoción de los funcionarios de su clase, en la Capital de la República. Es decir, en los términos de la Constitución para la administración de Justicia, por acusación ante el Senado.

No puede, pues, V. E., tomar en cuenta la petición del Sr. Romero. — Setiembre 21 de 1889.

Departamento de Justicia. Se adopta como resolución lo dictaminado. Septiembre 25 de 1889.

Tomo 8, pág. 380. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Aunque la ley expresamente no lo indique, entra en las facultades de las Corporaciones Municipales el llevar a cabo, con sus propios recursos, todas las obras que reputen de utilidad general.

La Municipalidad de Viedma, consulta si puede acordar concesiones para establecer aguas corrientes y vías de tranways

Señor Ministro:

Si no está expresa en la ley, está implícita, en la índole de toda corporación municipal, la facultad de llevar a cabo todas aquellas obras de utilidad general y reconocida, que pueda realizar con sus recursos propios, en beneficio de aquéllos que han confiado a su

celo, la gestión de los intereses inmediatos de la localidad en que viven.

En este sentido paréceme que podría V. E. contestar al Sr. Gobernador. -- Setiembre 23 de 1889.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Octubre 21 de 1889.

Tomo 8, pág. 422. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Si se concede la extradición de un condenado en rebeldía, corresponde que antes de la entrega se requiera la seguridad de que el reclamado será sometido nuevamente a juicio, por cuanto la condena en rebeldía en materia criminal es un procedimiento no autorizado por nuestra legislación.

Sobre la extradición de José Cavagna, por la Legación de Italia

Señor Ministro:

Tanto por el delito, como por los documentos acompañados, la extradición que solicita el Sr. Ministro de Italia, está comprendida en los términos de la ley y nada obsta a que pase V. E. estos antecedentes a la Justicia de la Nación, para las ulterioridades a que haya lugar.

Si acordara ella la extradición, habría llegado la oportunidad de que, antes de ordenar la entrega, requiriera la seguridad de que el reclamado fuera sometido nuevamente a juicio, puesto que ha sido juzgado en rebeldía, procedimiento contrario a nuestra legislación. — Setiembre 23 de 1889.

Recayeron resoluciones en esta causa, en Septiembre 26 de 1889 y Febrero 10 de 1893.

Tomo 8, pág. 414. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Los Gobiernos de Provincia, están obligados a prestar el concurso que los jueces federales les pidieren.
- II. — El auxilio de la fuerza pública que los jueces pueden solicitar para el cumplimiento de sus resoluciones es un remedio extremo que sólo deben ejercitarlo una vez agotados todos los recursos legales de que disponen para la efectividad de sus sentencias.
- III. — Los legisladores o convencionales de Provincia no gozan de inmunidad ante la justicia Nacional, ni ante autoridades de otra Provincia.

**El Juzgado Federal de San Luis, sobre negativa del Gobernador
a facilitarle el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de una resolución judicial**

Señor Ministro:

El Juez Federal de San Luis pide a V. E. por telégrafo, el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir una resolución del Juzgado, por haberle negado el Gobierno de la misma Provincia los medios que le ha pedido para llevarla a ejecución.

No dice el Sr. Juez en su telegrama qué resolución es la que ha de ejecutarse, ni por qué razón le niega el Gobierno de San Luis el auxilio que le ha pedido.

Como era natural V. E. encontró que alguna mayor explicación era necesaria, antes de proceder a una extremidad, siempre dolorosa, y al efecto se dirigió a aquel Gobierno, pidiéndole informara sobre lo que hubiera al respecto.

Con este motivo, el señor Juez Federal, manifestó que se trataba del cumplimiento de una orden de prisión librada contra el Juez del Crimen de la citada Provincia de San Luis, Dr. Jacinto S. Pérez, por haber faltado a los respetos debidos al Juzgado y no haber oblado la multa a que había sido condenado.

El Gobierno de San Luis contestó que no había prestado el auxilio que se le había pedido, por ser convencional el Dr. Pérez y gozar por ello de inmunidad en la Provincia.

Con razón dijo V. E. al dirigirse al Gobierno de San Luis, que sólo por un mal entendido podría explicar su negativa, puesto que los Gobiernos de Provincia están obligados a prestar el concurso que los Jueces Nacionales le pidieren.

A la verdad, si hay un hecho sobre todos resaltante en nuestra actualidad, es el predominio del Poder de la Nación sobre las autoridades de Provincia. En la lucha apasionada y ardiente entre el sentimiento de la localidad y el de la nacionalidad, el triunfo ha quedado, como era natural y forzoso, de la autoridad de la Nación, y como era natural e inevitable, también el triunfo ha ido más allá de los límites en que debía quedar, llegando bien puede decirse, puesto que es un hecho palpable a todos, a la exageración, que es de esperarse en bien de nuestras instituciones, sea transitoria.

El principio de la autoridad de la Nación, está sólidamente establecido; no hay insensato en la República que pretenda resistirlo, y como decía V. E., sólo un mal entendido explica el hecho inusitado de que no se preste acatamiento a sus resoluciones .

Si el Sr. Juez hubiera tenido esto presente, hubiera excusado dirigirse a V. E. por telégrafo, en asuntos que no revisten la urgencia requerida, y cuya resolución exige más detenidos antecedentes que los que pueden transmitirse por medio de excepción y muchas veces deficiente.

Ha debido, además, tener presente el Sr. Juez, que el recurso a la fuerza es un remedio extremo, a que sólo puede recurrirse después de agotados los medios conciliatorios.

Había condenado al Juez Pérez al pago de una multa o a prisión en su defecto.

Si no pagaba la multa, tratándose de un magistrado, antes de reducirlo a prisión, parecía natural, trabara embargo en sus bienes, en su sueldo, a cuyo respecto no podía alegar inmunidad.

Si el Gobernador de San Luis no prestaba el concurso pedido, bajo un pretexto a todas luces ilusorio y falso, antes de pedir un piquete de línea, era más sencillo dirigirse nuevamente al mismo Gobierno, haciéndole presente que es un principio elemental que no se discute entre nosotros, que los Diputados o Convencionales de Provincia no gozan de inmunidad de ningún género ante la Justicia Nacional, ni ante autoridades de distinta Provincia; y es mi convicción que hubiera esto bastado para que su resolución fuera cumplida.

Creo que hoy mismo, bastará le haga llegar V. E. al Gobierno de San Luis, previniéndole a la vez que, si no prestase el concur-

so que le ha pedido el Juzgado, V. E. dará orden a la autoridad militar más inmediata, para que se ponga a disposición del expresado Juez y haga se respeten y cumplan sus resoluciones. — Noviembre 28 de 1889.

Con la nota acordada se remitió copia del precedente dictamen al Sr. Gobernador de San Luis y después de haberse recibido comunicación de ese Gobierno, en la que entre otras cosas manifestaba que, para evitar una resolución extrema, se había resuelto poner a disposición del Sr. Juez la fuerza pública, se dictó resolución ordenando el archivo en Diciembre 14 de 1889.

Tomo 8, pág. 478. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No obstante que el art. 27 de la Ley que reglamenta el ejercicio de la medicina y farmacia de 1877, prohíbe a los farmacéuticos todo acuerdo con el médico para explotar ambas profesiones, puede una farmacia constituirse en Sociedad Anónima y figurar médicos entre los miembros de su Directorio.

La Sociedad Anónima «Farmacia Central Argentina», solicita la aprobación de sus Estatutos

Señor Ministro:

El establecimiento de una farmacia, es un negocio como cualquiera otro, y no cabe la menor duda de que puede ser materia de una Sociedad Anónima.

Tampoco es dudoso que los médicos pueden ser accionistas de una Sociedad semejante, ya al formarse, ya comprando las acciones en plaza.

El Departamento de Higiene observa que la Ley que reglamenta el ejercicio de la Medicina y de la Farmacia, prohíbe a los farmacéuticos todo acuerdo con el médico para explotar ambas profesiones, y advirtiéndole que en el Directorio de la Sociedad, cuyos estatutos vienen a la aprobación, figuran algunos médicos, encuentra que están ellos en contradicción con el espíritu de aquella Ley.

El interés remoto e indirecto que tiene el accionista de una Sociedad Anónima, no me parece que pueda interpretarse en este caso como un acuerdo entre la farmacia y el médico.

Es posible que este acuerdo se produzca, pero en tal caso, el Departamento, en virtud de las facultades de inspección que la ley le confiere, estará perfectamente habilitado para denunciar el hecho y hacerlo cesar.

Mientras tanto, por un peligro que considero remoto, no creo que, separándose de la regla general, deba V. E. denegar el asentimiento que se solicita para la formación de una Sociedad que puede prestar buenos servicios a la generalidad. — Diciembre 12 de 1889.

Departamento del Interior. Resolución en contra de lo dictaminado. Diciembre 27 de 1889.

Tomo 8, pág. 419. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Debe suprimirse en los Estatutos de una Sociedad Anónima, la disposición que autoriza a emitir certificados de depósito al portador, por cuanto al generalizarse el uso de estos certificados, podrían llegar a desempeñar funciones de moneda, cuya emisión no entra en las facultades de Bancos particulares y que sólo la ley puede autorizar.

Sobre creación de certificados de depósito al portador, por las Sociedades Anónimas

Señor Ministro:

No obstante lo expuesto por la Sociedad y la aprobación de igual cláusula de los Estatutos del Banco Unión Nacional, a que ella se refiere, me inclino a creer que es más conforme a nuestra legislación sobre moneda, la eliminación del artículo relativo a la emisión de certificados de depósito.

El Banco citado obtuvo autorización para emitir certificados por valor de *quinientos a mil pesos*. Se propone ahora la emisión de certificados de *cien a quinientos*, ¿por qué no se acordaría a otra sociedad la emisión de certificados de uno a cien?

V. E. ha prohibido ya la circulación de los vales *de uno a diez* y más pesos, que emitían algunos saladeros de Entre Ríos para facilitar el pago de salarios; y creo, con el Sr. Procurador del Tesoro, que debe poner también un límite a esta tendencia a emitir pa-

peles al portador, que no es la misión de los Bancos particulares y que sólo la ley puede autorizar.

Los Bancos dan libretas; pueden dar certificados, pero no al portador, ni por cantidades de cien a quinientos pesos, sino a nombre del que hizo el depósito, y por la cantidad que depositó.

En cuanto a la segunda observación del Sr. Procurador del Tesoro, después de las explicaciones que da el escrito que antecede, pienso que no hay razón en insistir en la supresión del artículo a que ellas se refieren.

Es por esto mi parecer que puede V. E. prestar el asentimiento que solicita la Sociedad «La Industrial», para extender sus operaciones a la Capital de la República, en la inteligencia de que no podrá emitir en ella los certificados de depósito en cuestión. — Marzo 6 de 1890.

Tomo 8, pág. 499. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde a las Municipalidades la reglamentación de la extracción de arena o piedras de los ríos navegables, estando limitada esta facultad por la Constitución Nacional, si dicha reglamentación perturba la libre navegación de los ríos o el comercio que por ellos se realiza.

El Subprefecto de Alvear, sobre el establecimiento de un impuesto por extracción de piedra de una cantera existente en el cauce del Río Uruguay

Excmo. Señor:

El 3 de noviembre del año ppdo. dí a V. E. el siguiente informe respecto de una solicitud de la Municipalidad del Paraná, en que pedía extraer del río 20.000 toneladas de arena, con destino al adoquinado de dicha ciudad:

Excmo. Señor:

«Debo partir de la base de que las playas y el lecho de los ríos y canales navegables pertenecen a las Provincias y no a la Nación, como ha sido ampliamente demostrado en un notable dicta-

men del 10 de septiembre de 1889, expedido por el entonces Procurador General de la Nación, hoy ministro de Relaciones Exteriores, señor Dr. Costa. La misma doctrina sostiene el señor Procurador del Tesoro, actual fiscal de las Cámaras, Dr. Marengo, en su dictamen de 5 de Marzo del corriente año, con cuyas conclusiones estoy también conforme.

V. E. desea mi opinión respecto de cuál haya de ser la autoridad provincial que deba tener a su cargo todo lo relativo a la extracción de arena en las playas de los ríos navegables; y no tengo duda de que este punto pueda ser objeto de decisión o resolución de las leyes de cada Provincia.

Me inclino a pensar, sin embargo, que el asunto por su propia naturaleza es, y debe ser de la exclusiva competencia de las autoridades municipales de cada Provincia. Así ha sucedido en la de Buenos Aires, en que la Municipalidad de esta ciudad, mientras perteneció a dicha Provincia, fué autorizada por la ley de 10 de Diciembre de 1867 para recaudar el impuesto de dos pesos por carro de arena; estableciendo, además, que su extracción no pudiera verificarse sin el permiso de la Municipalidad y bajo las condiciones que ella determinase.

Dicha ley fué reproducida por las de 30 de Noviembre de 1868, de 23 de Junio de 1870 y de 19 de Noviembre de 1873, elevando esta última el impuesto de dos a cinco pesos por cada carro de arena y atribuyendo a la Municipalidad la facultad de reglamentar dicha ley.

La extracción de la arena de los ríos navegables, como su reglamentación por las respectivas Municipalidades, deben tener una limitación que emana de la Constitución Nacional; y esa limitación consiste de que, con tales actos no puede ser estorbada ni perjudicada la libre navegación de los ríos, ni el comercio que por ellos se hace, cuya conservación y reglamentación se hallan al amparo de la autoridad nacional. — Noviembre 3 de 1890».

Lo mismo debe decirse de la extracción de piedra de la ribera de un río interior navegable; y así estoy conforme con lo que expone en su precedente informe la Dirección General de Rentas.

Nada más puedo decir a V. E., porque ignoro la resolución que V. E. haya dictado en el expediente mencionado, promovido por la Municipalidad de Paraná.

Si dicho expediente hubiera sido resuelto por V. E. sería conveniente lo mandara traer a su vista para tenerlo presente al dictar en éste la resolución que corresponde. — Marzo 11 de 1890.

En este estado se mandó el expediente al archivo.

Tomo 9, pág. 52. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La jurisdicción de la Prefectura General Marítima, es federal por su naturaleza y se extiende a todas las cuestiones, que se susciten dentro de los límites de los diques y dársenas, en su carácter de puertos. La jurisdicción fuera de los límites del agua: sobre los depósitos y almacenes fiscales; sobre los negocios y construcciones particulares y sobre la población que exista en estos lugares, corresponde a la justicia local y por consiguiente a la Policía, en la medida que determinen las leyes generales y reglamentos.

La Jefatura de Policía de la Capital, sobre deslinde de jurisdicción con la Prefectura Marítima

Señor Ministro:

El Sr. Jefe de Policía de esta Capital insiste en que deslinde V. E. sus atribuciones de las de la Prefectura Marítima, en cuanto se refiere a los Puertos, Muelles y riberas del río.

Entiende el Sr. Jefe que corresponde a la Prefectura Marítima la jurisdicción sobre Muelles y Puertos, y a la Policía, sobre la ribera misma. Dice, además, el Sr. Jefe, que con motivo de los trabajos del Puerto Madero, existe una gran zona de terreno en la que se han levantado depósitos y almacenes y se ha aglomerado una población considerable, a la que no puede extender la vigilancia necesaria, por no estar claramente marcada las atribuciones de una y otra repartición.

En el dictamen a que más de una vez he tenido ocasión de referirme y que acompaño ahora en copia, he expuesto por extenso la doctrina que conceptúo correcta y valedera, con respecto a la jurisdicción y propiedad de los ríos y sus riberas, en sus relaciones de derecho con la Nación y las Provincias.

Apoyado en la jurisprudencia americana y en las decisiones de nuestra Corte Suprema, creo haber colocado fuera de discusión las proposiciones siguientes:

1.º) Que la Nación no tiene capacidad constitucional para adquirir y poseer bienes en el territorio de una Provincia, si no es con el consentimiento expreso de la misma.

2.º) Que no mediando este consentimiento, que no se ha prestado, ni es de esperarse se preste, las riberas y los lechos de los ríos, y canales navegables, son propiedad de las provincias.

3.º) Que la jurisdicción que a la Nación corresponde sobre los ríos y sus riberas, está limitada a la necesaria para garantir la libertad de la navegación, en virtud del poder que la Constitución le confiere para reglamentar el comercio con las Naciones extranjeras y de las Provincias entre sí.

4.º) Que la jurisdicción sobre los 35 metros de ribera, aparte de la necesaria al objeto indicado, corresponde a las Provincias

La circunstancia de no existir hoy sino una sola autoridad en el Municipio, simplifica la cuestión, si bien no basta a resolverla del todo. La ley orgánica de los Tribunales de la Capital considera al Municipio en cuanto al funcionamiento de la Justicia, a la par de una Provincia, y atribuye en consecuencia a los Jueces llamados de la Capital, el conocimiento de todas aquellas causas, que en las Provincias caerían bajo la jurisdicción local; y a los Jueces de Sección, el de aquellos esencialmente de fuero federal.

Partiendo de esta base, tenemos entonces que la jurisdicción del Sr. Prefecto General de Marina, federal por su naturaleza, no se extiende en el caso en cuestión más allá de los límites de los diques y dársenas, en su carácter de puertos, como en realidad lo son.

La jurisdicción fuera de los límites del agua; sobre los depósitos y almacenes del fisco; sobre los negocios y construcciones particulares; sobre la numerosa población allí aglomerada; la jurisdicción sobre todo ésto, digo, corresponde a la justicia local del Municipio, y por consiguiente, a la Policía, en la parte y en la medida que las leyes generales y sus propios reglamentos, la tienen demarcada.

Creo que lo expuesto bastará a esclarecer las dudas que el Sr. Jefe de Policía ha traído a consideración de V. E., facilitando la marcha del Departamento. — Abril de 1890.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Julio 4 de 1890.

El trazado de una línea que divida la propiedad pública de la privada, no puede despojar a los propietarios cuyos terrenos afecta, de los derechos que las leyes les confieren, para hacerlos valer ante los Tribunales o el P. E. según corresponda.

**Los señores Bilbao y López, sobre protestas a la demarcación y
amojonamiento de la línea límite Oeste de la concesión
«Malecón y Puerto Norte»**

Señor Ministro:

Estoy de perfecto acuerdo con el Sr. Procurador del Tesoro, en cuanto afirma que la traza de una línea que divide la propiedad pública de la privada, no puede despojar a los propietarios cuyos terrenos afecta, de los derechos que las leyes les confieren.

En este caso, dicen encontrarse los dueños de las propiedades que lindan con la línea de la ribera trazada para determinar los límites del «Malecón Norte».

Han protestado usando de un derecho legítimo. Cumple ahora a ellos hacerlo valer, ocurriendo a V. E. o a los Tribunales, según estimen conveniente. — Mayo 16 de 1890.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Febrero 24 de 1891.

Tomo 8, pág. 504. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

A los efectos de la jubilación, los empleados provinciales convertidos en nacionales por la federalización del municipio, pueden computar el tiempo de servicios prestados en la Provincia siempre que hayan «continuado» desempeñando para la Nación el mismo servicio que prestaron a la provincia.

**Eduardo La Rosa, auxiliar del archivo General de los Tribunales,
pide jubilación**

Señor Ministro:

La manera como el Señor Contador interpreta la disposición que el Señor La Rosa invoca en su favor es perfectamente exacta. Al referirse a los empleados de las Provincias que pasaron a servir

a la Nación de 1853 a 62, de 1880 a 84, evidentemente la ley se refiere a los empleados que *continuaron* desempeñando en la Nación el servicio que prestaban en la Provincia.

De otra manera resultaría que, por el simple hecho de ingresar al servicio de la Nación, un empleado de Provincia adquiriría el derecho que le fueran reconocidos por la Nación los servicios prestados a la Provincia, lo que es absurdo.

En el presente caso, por ejemplo, el Señor Rosa ha servido 28 años a la Provincia de Buenos Aires, y sólo 7 a la Nación, en una oficina creada después de la federalización del Municipio. Era él empleado en un partido de campaña de la Provincia de Buenos Aires y entró a servir en el Archivo de los Tribunales de creación reciente. No hay, por consiguiente, la continuidad de servicios que la ley supone a consecuencia de los acontecimientos políticos de 1853, 62 y 80 sino un nuevo servicio que el Señor La Rosa entró a prestar, servicio que no le dá más derecho que el que la ley Nacional le confiera, sin tener para nada en cuenta sus servicios anteriores a la Provincia de Buenos Aires, por meritorios que fuesen, y que en todo caso sería ésta la que dehiere recompensar.

Estoy de perfecto acuerdo con el Sr. Contador General.— Mayo 19 de 1890.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Mayo 27 de 1890.

Tomo 9, pág. 14. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se deje sin efecto una resolución del Administrador de la Aduana de la Capital que exigió a comerciantes la fianza que para responder a errores de cálculo, la ley de sellos exige solamente para los despachantes.

No se considera conveniente el que se modifique la disposición legal citada a fin de que se exija a los comerciantes la fianza de los despachantes, por cuanto si bien estos últimos por regla general, son personas de poca responsabilidad, ocurre lo contrario con los comerciantes los que tienen además, mercaderías en depósito que constituyen suficiente garantía.

La Dirección General de Rentas, sobre la fianza por error de cálculo, que comprende sólo a los despachantes de Aduana

Señor Ministro:

Encuentro perfectamente fundada la resolución de la Dirección General, que deja sin efecto la obligación de dar fianza que el Administrador de la Aduana de esta Capital imponía a los señores Lenguas y Hermanos.

La ley de sellos exige fianza de los despachantes, para responder de los errores de cálculo cuya rectificación permite el artículo 433 de las ordenanzas; pero nada dice de los comerciantes.

La razón de esta distinción, entre despachantes y comerciantes, es obvia, según observa la Dirección General.

Los despachantes son, por regla general, personas de poca responsabilidad mientras que los comerciantes tienen casa establecida, mercaderías en depósito, y garantía bastante para responder por los errores a que el artículo antes citado se refiere, que es de suponer, sean pocos y de poca importancia.

No es entonces justo imponer a los comerciantes un gravamen de que la ley, al no mencionarlos, los ha exonerado.

El Señor Contador General indica la conveniencia de hacer extensiva esta fianza a los comerciantes en la ley de impuestos del año entrante.

No veo por mi parte la necesidad, pues no se ha hecho valer que la Aduana haya sufrido pérdidas por falta de la fianza en cuestión, y si no es necesaria no hay para que imponerla, pues es siempre un gravamen para el comercio. — Mayo 30 de 1890.

Ministerio de Hacienda. Resolución de Octubre 14 de 1892, que ordena el archivo por no haberse cumplido con la reposición de sellos.

Tomo 9, pág. 36. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No tiene facultad el Poder Ejecutivo para corregir errores de las leyes.

La Compañía constructora del Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba, sobre errores consignados en la ley de concesión de esa línea férrea

Señor Ministro:

«No considero que esté en las atribuciones de V. E. corregir los errores de las leyes, si es que de ellos adolecen. Y puesto que el mismo Señor Lokwood reconoce que, del tenor de la misma ley se desprende que al acordar la prolongación a la línea concedida ya a la *Empresa del Ferro-Carril Grand Sud de Santa Fe y Córdoba*, ella se refiere a la *Compañía Constructora y Limitada* que obtuvo la concesión originaria, no veo la necesidad de que haga V. E. la declaración que se solicita, reparando, según se pretende, un error que sólo puede reparar el Poder que en él incurrió. — Junio 23 de 1890.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 15 de 1890.

Tomo 9, pág. 71. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El nuevo Código de Comercio, no es aplicable a Sociedades constituidas con anterioridad a su vigencia, ni puede afectar a derechos adquiridos.

La Sociedad Anónima «La Mercantil», sobre la parte de las utilidades que se destina a la compensación de los iniciadores y directores

Señor Ministro:

La modificación que somete esta Sociedad a la aprobación de V. E. está reducida a fijar un sueldo al Gerente, en lugar del 5 % que se le acordaba en los Estatutos.

Así mismo, la parte de las utilidades que se separa como compensación a los iniciadores y directores, el 20 %, excede en mucho el máximun permitido por el nuevo Código de Comercio, artículo 321.

Se observa, sin embargo, a mi juicio, con razón que esta disposición no puede regir para las Sociedades creadas ya, pues vendría a herir derechos adquiridos. Y puesto que la reforma en cuestión tiene por objeto acercarse a los términos de la ley, pienso que debe V. E. prestar el asentimiento que se solicita, al objeto de que sea ella incorporada a los Estatutos ya aprobados por V. E. — Julio 5 de 1890.

Ministerio de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 18 de 1890.

Tomo 9, pág. 50. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Tiene facultad el Poder Ejecutivo para revocar, en un contrato de concesión de obra pública, la cláusula en virtud de la cual se reservó derechos para modificar o derogar la concesión cuando lo juzgue oportuno.

Sociedad Puerto de San Nicolás, solicita revocación del artículo 22 de la concesión del puerto

Señor Ministro:

El artículo 22 cuya eliminación se solicita, sólo tiene explicación plausible en la seguridad que a los contratistas asiste, de la sin-

ceridad y rectitud de los procedimientos de los Poderes Públicos de la Nación. Sólo así se concibe que una Empresa consiera en acometer obras que importan millones, bajo la amenaza de que, en cualquier momento, sin motivo justificado, sin indemnización de ningún género, sea obligada a abandonarlas.

Bien saben los concesionarios que el peligro de que esta ruinoso eventualidad se convierta en hecho es por demás remoto, bien saben que sólo en el caso de que abiertamente faltaran a las obligaciones que la concesión les impone; haría uso V. E. de la facultad que se reserva, bien saben por último, que está exclusivamente en sus manos evitar que ese caso llegue.

Esta fe robusta no la puede tener, empero, una Empresa extranjera, y es natural que, antes de comprometer sus capitales, exija asegurarse de que no quedarán libradas al arbitrio de una sola de las partes, y sin aquellas garantías de que nadie prescinde, aun en negocios mil veces menos importantes.

Por esto, la eliminación del citado artículo 22, en atención a las consideraciones que hace valer la Sociedad Puerto de San Nicolás, es justificada y atendible, en mi concepto.

No pienso con el Señor Procurador del Tesoro, que ella importa disminuir las garantías efectivas del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.

En primer lugar, está en el interés de los mismos cumplir fielmente sus compromisos pues su negocio estriba en la realización de las obras que, a la vez que prestarán importantes servicios al comercio, serán la fuente de los beneficios que legítimamente esperan.

Por otra parte, si ellos faltan a las condiciones de su contrato no faltan en nuestras leyes medios de obligarles a su cumplimiento.

Y, si se tiene en cuenta que el beneficio de la Empresa depende exclusivamente de las concesiones del Poder Ejecutivo, se comprende que el mismo Poder Ejecutivo tiene en sus manos el medio más fácil y expeditivo de obligarla a la fiel observancia de sus deberes, no permitiéndola por ejemplo, cobrar derechos por sus muelles, por sus depósitos, etc.

No considero tampoco fundada la observación de la Dirección General de Rentas.

Si el Poder Ejecutivo ha podido hacer, administrativamente, la concesión, bien puede de la misma manera retirar alguna de de sus cláusulas.

Si al fin la concesión consiste en permitir a la Empresa construir muelles, depósitos, etc., la Nación no tiene interés en construir tales muelles y depósitos en el territorio de las Provincias, y debe felicitarse de que otros los construyan como sucede en Estados Unidos, reservándose ella el derecho inalienable de fiscalizar y percibir la renta. Y siempre que una empresa particular llene esta necesidad debe la Nación felicitarse de que le sea permitido reservar sus recursos para localidades menos favorecidas.

Es por lo expuesto mi parecer, que nada obsta a que acepte V. E. la supresión del artículo 22, según se solicita. — Julio 16 de 1890.

Departamento de Hacienda. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 20 de 1890.

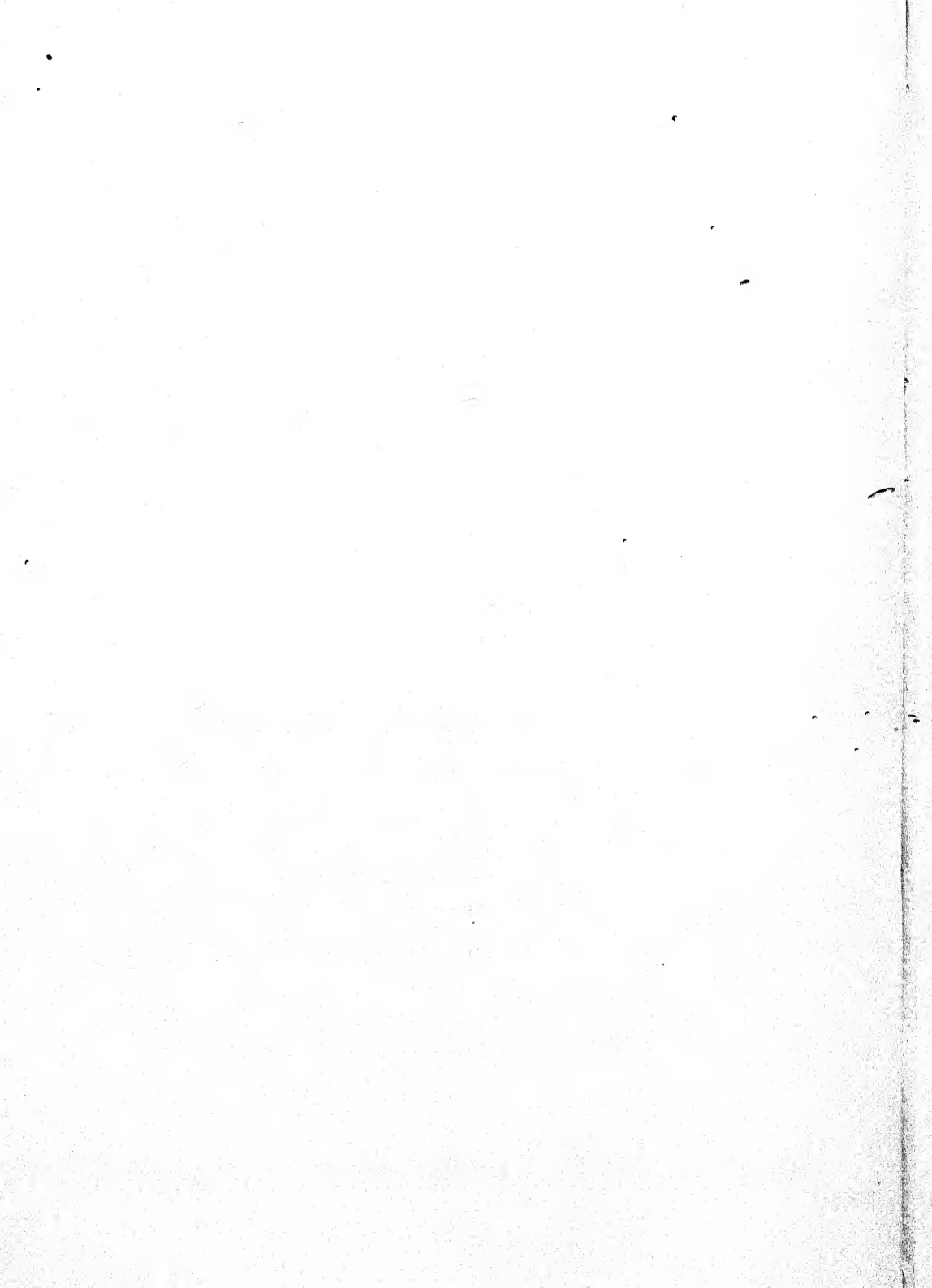
Tomo 9, pág. 57. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Dr. ANTONIO MALAVER

1890-1892



- I. — A falta de tratado, la extradición sólo puede otorgarse por la vía diplomática con arreglo a las disposiciones sobre la materia legisladas en el Código de Procedimientos en lo Criminal
- II. — Cumpliéndose con todos los requisitos del art. 651 del Código citado, procede la extradición no obstante la falta de uno de dichos recaudos, el testimonio del auto judicial que decreta la extradición.
- III. — No obstante que la lista de los valores sustraídos por los procesados y las disposiciones penales aplicables al caso, se presentan sin la debida autenticación, deben aceptarse por estar suscriptas por el Representante Diplomático del país que solicita la extradición.

**La Legación de Francia, sobre la extradición de los individuos
Campisi, Maggio y Diperi, acusados de heridas y robo**

Excmo. Señor:

S. E. el Señor Ministro de Francia solicita de V. E. la extradición de Felipe Campisi, Salvador Maggio y Francisco Diperi, residentes en esta Capital y procesados por el Señor Juez de Instrucción de Alger por los delitos de heridas y robo perpetrado en la persona de los hermanos Tabel; pidiendo igualmente la búsqueda y embargo de los valores robados que estén en su poder, a cuyos fines formula ambas peticiones a título de reciprocidad; acompaña tres mandatos de prisión de dichos procesados, expedidos por el mencionado Juez de Alger y la relación de los valores robados; y ofrece presentar una carta rogatoria de su Gobierno a efecto de regularizar el secuestro que solicita.

Sin duda porque no existe entre nuestra República y la Francesa tratado alguno para la extradición de criminales o procesados, no lo menciona el Señor Ministro francés; y sin duda por la misma razón y teniendo presente V. E. lo dispuesto en el artículo 652 del Código de Procedimientos en lo Criminal se ha servido V. E. pa-

sarme en consulta las referidas peticiones con los documentos que las acompañan.

Partiendo de esta base, esto es, de la falta de un tratado, la extradición sólo puede ser otorgada por la vía diplomática con arreglo al procedimiento y condiciones establecidas en el citado Código (art. 648).

Son requisitos según los términos del art. 651 y siguientes, que con la comunicación en que se solicita la extradición se acompañe testimonio del auto que la decreta y además los siguientes documentos: 1.º— Mandato de prisión expedido por tribunal competente con la designación exacta y la fecha del crimen o delito que la motivare. 2.º— Todos los datos y antecedentes necesarios para justificar la identidad de las personas requeridas. 3.º— Copia autenticada de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado, según la legislación respectiva.

Con excepción del testimonio del auto judicial que haya decretado la extradición de los procesados antes nombrados, hallo cumplidos los demás requisitos exigidos por nuestro Código, con los documentos presentados por el Señor Ministro de Francia.

Se acompañan en efecto, originales de tres mandatos de prisión expedidos por el Juez de Alger; y se expresa en todos ellos, que los crímenes inculcados son los de homicidio y de robo cometidos el 12 de Mayo de 1890 en el Departamento de Alger, en las personas de los hermanos Tabel, comerciantes; y en los mismos documentos consta la filiación de los procesados y las disposiciones penales aplicables a los hechos porque se les procesa. Se acompaña también la lista de los valores sustraídos por los procesados; y si bien esta lista y las disposiciones penales mencionadas no se presentan a V. E. en copias autenticadas, la respetabilidad del Representante de la República Francesa que las suscribe a V. E. me parece bastante para prestarle entera fe.

Creo por tanto procedente la extradición que se pide y si V. E. fuera de la misma opinión, debiera dirigirse al Juez Federal de esta Capital en la que se dice se hallan refugiados los procesados a fin de que proceda como lo disponen los artículos 653 y siguientes del citado Código; dando de esta resolución el correspondiente aviso

al Señor Ministro de Francia, según todo ello se encuentra decidido por el artículo 652 citado en el presente decreto de V. E. — Agosto 23 de 1890.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de Agosto 25 de 1890 que dispone se pasen los documentos al Señor Juez Federal Dr. Ugarriza.

Tomo 9, pág. 111. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Interesa al Poder Ejecutivo tomar conocimiento de la designación de un Ministro en Iglesia Protestante, a los efectos de las leyes de Registro de Estado Civil y Matrimonio Civil.

La Iglesia Episcopal, sobre el nombramiento de Pastor en la Comunidad Protestante de la Colonia «San Carlos», Santa Fe

Excmo. Señor:

Debo suponer que el Señor Carlos S. Dress, tiene acreditado ante V. E. el cargo de Superintendente de la Iglesia Metodista Episcopal y bajo ese supuesto, debo manifestar que no veo inconveniente en que se acceda a lo que pide sin que ello importe otra cosa que acreditar que el Reverendo Sr. D. Roberto Weismüller ejerce el cargo de Ministro de la Iglesia en la Colonia San Carlos de la Provincia de Santa Fe.

Nuestras Leyes han reconocido y reconocen aún la existencia de los Ministros de las iglesias disidentes. Así los artículos 55 y 57 de la Ley sobre Registro del Estado Civil de Noviembre de 1884 les imponía el deber de remitir al registro, para su inscripción copias de las actas de los matrimonios celebrados ante ellos, y aún cuando estas disposiciones han quedado derogadas por la Ley de Matrimonio Civil, de Noviembre de 1888 esta ley reconoce también la existencia de los mismos ministros o Pastores al imponerles, en su artículo 118 una penalidad si procediesen a la celebración de un matrimonio religioso sin tener a la vista el acta a que se refiere el artículo 47 de la misma ley.

Creo, por tanto, que, en vez de haber inconvenientes, es útil se sepa por V. E. y los Gobiernos Provinciales, quienes son las personas que ejercen tales cargos. — Agosto 29 de 1890.

Departamento de Justicia y Culto. Resolución de acuerdo a lo dictaminado. — Octubre 9 de 1890.

Tomo 9, pág. 133. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No existiendo tratados, la extradición se rige por los principios de la legislación interna del Estado que conoce de ella.
- II. — En nuestro sistema legal todo lo relativo a la extradición compete a la justicia Federal; le corresponde por consiguiente, resolver en definitiva cuando procede o cuando no debe hacerse lugar a ella.
- III. — Las disposiciones sobre «extradición» del Código de Procedimientos en lo criminal, siendo éste de sanción posterior derogan la ley de la materia de 25 de Agosto de 1885, y en consecuencia no debe hacerse lugar al pedido en que se omite el testimonio de que habla el art. 651 del Código citado.
- IV. — Considérase conveniente requerir del Honorable Congreso la reforma del art. 651 reemplazándolo por el 12 de la ley de 1885, por cuanto la sentencia de condenación o el auto de prisión emanados de Tribunal competente, son suficientes para requerir la extradición, sin necesidad de que venga también el testimonio literal del auto que la decreta.

La Legación de Francia, sobre la extradición de Mario Brun y Alois Sartoris, por sustracción de dinero

Excmo. Señor:

La legación de la República Francesa pide a V. E. después de haber examinado los considerandos de la sentencia de la Suprema Corte de fojas 146, algunas explicaciones complementarias, a fin de apreciar las consecuencias y hacer conocer a su Gobierno todo el alcance de la grave decisión a que se refiere.

Por nuestras leyes todo lo relativo a la extradición de criminales está diferido a la justicia Federal. A ella corresponde por consiguiente resolver en definitiva cuando procede, y cuando no debe hacerse lugar a ella. La Ley Nacional de 25 de Agosto de 1885, y posteriormente el Código de Procedimientos Criminales, en sus artículos 646 y siguientes, han reglamentado esta materia; y con arreglo a sus disposiciones ha sido dictada la referida sentencia de la Suprema Corte Federal.

El fundamento principal, que ha guiado a la Suprema Corte a declarar no haber lugar a la extradición pedida por el Señor Ministro de Francia, ha sido la falta de presentación del testimonio literal del auto judicial que haya decretado se solicitara dicha extradición, a cuyo auto se refiere en su primera parte el artículo 651 del citado Código. La Suprema Corte cuyas decisiones hacen cosa juzgada en todos los asuntos que son de su competencia, ha creído indispensable la presentación de tal documento, que, antes de fallar en definitiva y para mejor proveer, solicitó por su auto de fojas 141; contestando el Señor Ministro Francés, en su nota de 21 de Julio último, haber enviado a V. E. con su comunicación de 13 de Abril de 1888, todos los documentos que obraban en su poder.

El otro fundamento invocado por la Suprema Corte, consiste en establecer que en materia de extradición y en defecto de tratado, la demanda como los procedimientos que le conciernen son regidos y deben sustentarse en conformidad con la legislación interna del Estado que conoce de ella; debiendo los Jueces del País someterse a sus preceptos, sin que les sea dado prescindir de uno más que de otro, ni de ninguno de ellos.

Con este motivo debo manifestar a V. E. que al expedir mi informe de 23 del ppdo. mes de Agosto en el pedido de extradición hecho por el Señor Ministro de Francia, de los procesados de Alger, llamados Felipe Caprisi, Salvador Maggio y Francisco Diperi; sin tener conocimiento alguno de la decisión de la Suprema Corte que corre a fojas 146 de este expediente, manifesté opinión favorable a dicho pedido de extradición. En ese caso como en el presente, tampoco se acompañó testimonio literal del auto judicial que hubiera decretado se solicitara la extradición que se pedía, y al cual se refiere el citado artículo 651 del Código mencionado; y como tal originará probablemente una resolución igual de los Tribunales

Federales a la recaída en este expediente, sería tal vez el caso que se sirviera V. E. insinuar al Señor Ministro de Francia la necesidad de solicitar de su Gobierno el testimonio de dicho auto; así como la copia auténtica de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado, según la legislación respectiva; la Francesa, que exige el mismo artículo 651 en su parte final, por cuanto dichas disposiciones legales aparecían al pie de los mandatos de prisión librados por el Juez de Instrucción de Alger contra Campisi, Maggio y Dipperi, sin que tal copia, según mis recuerdos, se hallase debidamente autenticada, como lo exige nuestra ley.

Algo más podría hacer tal vez V. E. si lo considerase conveniente.

El artículo 12 de la ley de extradición de 25 de Agosto de 1885, a que antes me he referido, entre los documentos con que dispone que debe acompañarse todo pedido de extradición, sólo menciona la sentencia de condenación o el mandato de prisión, expedido por los Tribunales competentes; los datos y antecedentes que justifiquen la identidad de la persona requerida; y la copia de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado, según la legislación del país requirente. Pero no exige, como el art. 651 del Código de Procedimientos, *«un testimonio literal del auto que decreta esta diligencia»* (la extradición).

Esta última exigencia de nuestro Código, como que emana de una disposición posterior en fecha y aplicable especialmente a la Capital de la República, ha prevalecido, como debía prevalecer naturalmente en la sentencia de la Suprema Corte, pero en mi opinión V. E. podría promover la reforma de ese artículo 651 del Código, proponiendo al H. Congreso su reemplazo por el art. 12 citado de la Ley de Extradición de 1885.

Cuando un gobierno extranjero solicita la extradición de un condenado o un procesado contra quien se ha librado orden de prisión por Juez o Tribunal competente, no puede haber duda que proceda de aquel gobierno, porque este Tribunal o Juez ha solicitado de él, pida la extradición al gobierno del país en cuyo territorio se encuentra asilado tal condenado o procesado. Pretender que, además de la sentencia de condenación o del mandato de prisión emanados de Tribunal competente, venga también el auto del mismo Tribunal que haya decretado que el gobierno de su propia nación solicite

de un gobierno extranjero dicha extradición, me parece una exigencia que está fuera de lo que es razonable; y que sólo puede dar lugar a resoluciones que, si se justifican plenamente ante las disposiciones expresas de la Ley, no concurren a los fines que tratan de servir las leyes sobre extradición. — Setiembre 5 de 1890.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado de Octubre 15 de 1890.

Tomo 8, pág. 64. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La Ley General de Presupuesto es derogatoria de todas las que le preceden en fecha, en cuanto se refieran a los gastos de la Administración Pública. (En el caso el Embajador Argentino en Alemania y Rusia requería un pago invocando el art. 5 de la ley de 21 de Agosto de 1856; que los Presupuestos de 1889 y 1890 no autorizaban).

El E. E. y Ministro Plenipotenciario en Alemania y Rusia, sobre liquidación de los sobresueldos por doble representación diplomática

Excmo. Señor:

La Ley de Presupuesto general para el ejercicio de 1889, en el Departamento de Relaciones Exteriores, inciso 2.º, señala el sueldo uniforme de mil pesos mensuales para todos los Jefes de las Legaciones de primera clase que la República mantiene en el exterior.

El ítem 4.º de dicho inciso, se halla concebido en los siguientes términos: «Un Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en *Alemania y Rusia*: al mes, moneda nacional mil pesos».

Dada esta disposición, creo que la inteligencia que le dá la Contaduría General de la Nación, es correcta; y que debe entenderse derogada por ella la del artículo 5.º de la ley de 21 de Agosto de 1856.

Igual disposición contiene el Presupuesto sancionado por el Congreso para el ejercicio del corriente año; y creo por tanto que debe dársele la misma inteligencia que le dá la Contaduría.

Pero otra cosa debe decirse de la suma que se cobra por viático; puesto que en el decreto de Julio 14 último, de fojas 5 se hace

constar que el Señor Ministro Calvo «se ha trasladado de Berlín a San Petersburgo en cumplimiento de instrucciones que se le expedieron». Creo entonces que corresponde abonársele dicho viático de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.º de la ley de 21 de Agosto de 1856. — Setiembre 5 de 1890.

=====

Excmo. Señor:

A pesar de las constancias del expediente agregado, insisto en creer que la ley general de Presupuesto es derogatoria de todas las que le preceden en fecha, en cuanto se refieran a los gastos de la Administración Pública. Dicha ley de Presupuesto ordena o autoriza tales gastos; y es la ley superior a todas en ese punto, mientras dura su ejercicio. Por eso he creído que la opinión de la Contaduría General, es justa en cuanto indica que la ley de 1856 ha sido derogada por la Ley de Presupuesto, en cuanto al sobre-sueldo que debía gozar según aquélla, el E. E. y Ministro Plenipotenciario en Alemania y Rusia.

La resolución adoptada por V. E. en el caso del Señor Doctor Uriburu, cuyos antecedentes se han agregado a este expediente, no es sin duda conforme con las opiniones de la Contaduría General y del que firma, pero V. E. se ha de servir resolver en el presente caso, como en aquél, según viere ser de justicia. — Setiembre 22 de 1890.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución en contra de lo dictaminado. — Septiembre 27 de 1890.

Tomo 9, pág. 75. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se haga saber al Director General de Correos y Telégrafos en respuesta a su nota, en la que indica la necesidad de que la justicia federal dedique un interés solícito y preferente a las causas que afectan al orden, moralidad y dinero de esa Repartición; que con arreglo a los arts. 114 y 118 del Código de Procedimientos para la justicia federal sancionado por la ley N.º 2372, de Octubre de 1888, puede el Director de Correos dirigirse directamente a los Procuradores Fiscales, incitándoles a poner en inmediata tramitación las causas por él promovidas, y si esto aun no diera resultado, puede dirigirse al Procurador General para que éste proceda de conformidad a la facultad que le confiere el art. 116 del Código citado.

La Dirección General de Correos y Telégrafos, sobre la necesidad de que la Justicia Federal dedique interés preferente a las causas que afectan a la moralidad y dinero de esa repartición.

Excmo. Señor:

La Ley de Procedimientos en lo Criminal para los Juzgados Federales dictada en 1865, ha sido sustituida por el Código de Procedimientos en la misma materia sancionado por la Ley N.º 2372, de Octubre de 1888.

Por el art. 114 de dicho Código se atribuye el ejercicio del Ministerio Fiscal en los Tribunales Federales, o en territorios Nacionales, al Procurador General y a los Procuradores Fiscales titulares; o en su defecto a los especiales nombrados en cada caso por los Jueces de Sección o de dichos Territorios.

Como la Justicia Federal no puede en caso alguno proceder de oficio, corresponde a los Procuradores Fiscales según el artículo 118 del mismo Código promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que corresponden a la Justicia Federal, en el Distrito en que se ejercen sus funciones; asistir al examen de los testigos y verificaciones de otras pruebas, y ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las Leyes Penales y de Procedimientos; requerir de los Jueces el activo despacho de los procesos, deduciendo los reclamos necesarios; y vigilar el fiel cumplimiento de las Leyes y reglas del Procedimiento.

Al Procurador General corresponde, según el art. 116, cuidar de que los encargados de ejercer el Ministerio Fiscal en los Juzga-

dos inferiores, promuevan las gestiones que les correspondan y desempeñen fielmente los demás deberes de su cargo.

De esta suerte ha reglamentado el Código de Procedimientos el ejercicio de la acción pública confiado a los representantes del Ministerio Fiscal; y pienso que, siendo observadas, tales disposiciones bastan para que se haga efectivo el castigo de los delitos a que se refiere el Señor Director General de Correos y Telégrafos.

Pienso que dicho Señor Director puede dirigirse a los Procuradores Fiscales que hayan sido nombrados en las causas promovidas por él, incitándoles a cumplir con el deber que la ley les impone, con lo cual creo que tales causas se pondrían en inmediata tramitación.

Si lo que no es de esperarse, dichos funcionarios descuidasen todavía el cumplimiento de tal deber, el mismo Señor Director podrá comunicarlo al Procurador General para que éste pudiera usar de la facultad que le acuerda el art. 116 del Código de Procedimientos.

Podrá V. E. en fin disponer se pase nota a los Procuradores Fiscales Titulares que ejercen sus funciones ante los Jueces de Sección o de los Territorios Nacionales, comunicándoles la reclamación interpuesta por el Señor Director General de Correos y Telégrafos y requiriéndoles el cumplimiento de los deberes que les incumben según las disposiciones del mencionado artículo 118 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Septiembre 20 de 1890.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Setiembre 27 de 1890.

Tomo 9, pág. 149. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. acepte una invitación y envíe delegados a un Congreso Internacional, que tratará de la protección a la infancia abandonada y patronatos de detenidos.

La Legación de Bélgica, sobre el Congreso Internacional de Amberes, sobre patronato de detenidos y protección de los niños

Excmo. Señor:

Invitado el Gobierno de V. E. por el de Bélgica a enviar delegados al Congreso Internacional que debe reunirse en aquel país con el fin de tratar y de resolver las cuestiones que se relacionan con el patronato de los detenidos y la protección de los niños moralmente abandonados, soy de opinión de que V. E. debe apresurarse a aceptar esa invitación, enviando los delegados que se indican y designando los fondos que se asignarían por el Departamento de Justicia, como los solicita S. E. el Señor Ministro de Relaciones Exteriores.

La educación primaria es una obligación impuesta al Gobierno por nuestra ley Fundamental, pero tal obligación no se llenaría cumplidamente si se dejase abandonados a su propia dirección a los numerosos niños que no se hallan bajo la patria potestad, o bajo tutela y que abundan en las calles de nuestra populosa capital, entregados a su propia dirección y expuestos a perderse totalmente en el abandono en que se encuentran. La Escuela Primaria que dispensa la instrucción, instituída obligatoriamente por nuestras leyes, no es completa, sino es acompañada de asilos y de leyes que la reglamentan, que eviten que el deber de la educación sea burlado o se cumpla ineficazmente en muy numerosos casos.

La mejora de los detenidos por la inculpación de delitos o crímenes y la vigilancia de los que, habiendo cumplido sus condenas son puestos en libertad para evitar reincidan en los actos que motivaron la anterior condenación, son también asuntos de mayor interés social que deben preocupar justamente la atención de V. E. como ha preocupado la del Gobierno Belga.

Por fin la mendicidad y la vagancia, cuestiones de cuya solución debe tratar también el Congreso, no son de menor importancia, pues van siendo entre nosotros una verdadera enfermedad social

sin que sean bastantes a extirparlas los asilos que tenemos fundados y las leyes que castigan al vago.

En todas estas cuestiones nada tenemos estudiado ni resuelto en nuestro país, y es por tanto del mayor interés para nosotros tomar la participación que se nos ofrece.

Creo asimismo que debe V. E. ordenar se dé al programa del Congreso que se acompaña, la inmediata y extensa publicidad que solicita el Señor Ministro de Bélgica. — Setiembre 23 de 1890.

Tomo 9, pág. 151. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No procede que la Municipalidad cobre al Gobierno de la Nación las tasas del alumbrado, barrido y limpieza, correspondientes a edificios de propiedad nacional.

La Municipalidad de la Capital, sobre el impuesto de alumbrado, barrido, etc., a las dependencias de la Administración Nacional

Excmo. Señor:

Pienso que la Contaduría General está en lo justo y exacto, respecto de la petición deducida por el Sr. Intendente Municipal; pues no podría concebirse que el Gobierno de la Nación estuviera sujeto al pago de los impuestos que él mismo establece para atender a los gastos de la Administración y de los servicios que presta al público.

La Municipalidad es sólo una rama de la Administración Pública; y así como no sería admisible que ella pagara los impuestos de alumbrado y barrido por sus propios edificios, tampoco es dable que pretenda cobrarlos a V. E.

Si ella misma paga el impuesto de Aduana por los materiales que introduce, V. E. se los cobra por que existe una ley que obliga a pagarlos por todo lo que se introduce al país, no habiendo en ella excepción expresa, como no lo habrá respecto a la Municipalidad.

Si algo más pudiera decirse, sería que, la falta de pago que se imputa a V. E. está sobradamente compensada con los servicios

que V. E. presta a la Municipalidad, auxiliándola con frecuencia, como acaba de hacerlo últimamente. — Octubre 1.º de 1890.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 14 de 1890.

Tomo 9, pág. 137. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No procede la extradición si falta el testimonio literal del auto judicial que la decreta y el mandato de prisión expedido por tribunal competente; no es suficiente para considerar cumplido este último requisito, el mandato expedido por el Presidente de la República Francesa, aunque en él se mencione el auto de prisión.

La Legación de Francia, sobre la extradición de Gabriel Videaud, acusado de bancarrota fraudulenta

Excmo. Señor:

S. E. el Señor Ministro de Francia solicita de V. E. a título de reciprocidad, la extradición de Gabriel Videaud, ex agente de Negocios en Barbezieux, acusado de bancarrota fraudulenta.

No tiene la República celebrado un tratado de extradición con la Francia, y en tal caso dispone el artículo 648 del Código de Procedimientos Criminales, sancionado por ley del H. Congreso de Octubre de 1888 que la extradición será pedida y otorgada, *«por la vía diplomática, con arreglo al procedimiento y condiciones que se establecen en el mismo Código»*.

El artículo 651 siguiente, establece esas condiciones en esta forma:

«Con la nota comunicación en que se solicita la extradición ya «por las autoridades del país, o por las extranjeras, habrá de re-
«mitirse *un testimonio literal del auto que decreta esta diligencia*,
«y además los siguientes:

«1.º— La sentencia de condenación según la forma prescripta
«por la legislación respectiva, si se tratase de un condenado, o el
«*mandato de prisión expedido por Tribunales competentes* con la

«designación exacta y la fecha del crimen o delito que la motivara, «si se tratase de un procesado o presunto delincuente. *Estos documentos se enviarán originales o en copia auténtica.*

«2.º— Todos los antecedentes y datos necesarios para justificar «la identidad de la persona requerida.

«3.º— La copia autenticada de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado según la legislación respectiva».

Como V. E. podrá verlo, por las piezas agregadas por S. E. el Señor Ministro de Francia a su pedido de extradición, ellas no cumplen las condiciones exigidas por el artículo que acabo de transcribir de nuestro Código de Procedimientos Criminales.

Falta el testimonio literal del auto judicial que haya decretado se solicite de V. E. la extradición del procesado; y falta también el *mandato de prisión expedido por tribunal competente*, pues el que se acompaña y aun cuando en él, se mencione dicho auto, ha sido expedido por S. E. el Sr. Presidente de la República Francesa.

Hago estas observaciones a causa de que la Suprema Corte Federal, en una sentencia reciente recaída en la causa sobre la extradición de Marino Brun y Alvis Sartorio, solicitada también por el Señor Ministro de Francia, declaró que debían cumplirse rigurosamente los requisitos exigidos por nuestro Código de Procedimientos Criminales a falta de tratados especiales. Esa sentencia fué comunicada oportunamente a V. E. y supongo que lo fué también por V. E. al Señor Ministro de Francia, pues S. E. solicitó algunas explicaciones acerca de ella.

La Suprema Corte se fundó, para no hacer lugar a la extradición en el caso indicado, en la falta de testimonio literal del auto judicial del tribunal francés, que hubiera decretado se solicitara dicha extradición, y a cuyo auto se refiere en su primera parte el artículo 651 del citado Código de Procedimientos. Como V. E. podrá verlo, en el caso actual tampoco se acompaña dicho auto judicial.

Pienso en consecuencia, que, de acuerdo con lo exigido por la ley que dejo transcrita, no le es posible a V. E. acceder a la solicitud de S. E. el Señor Ministro de Francia.— Octubre 6 de 1890.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 7 de 1890.

Tomo 9, pág. 224. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — En virtud de lo que dispone el art. 179 de la ley orgánica de los Tribunales de la Capital, la Cámara en lo Civil, no debió excusarse de dar el informe que se le solicitó, acerca de las aptitudes y conducta del Escribano encargado de la Escribanía de Hipotecas y de la persona que se proponía al P. E. para su reemplazo.
- II. — El art. 180 de la ley orgánica de los Tribunales de 1886, que habla únicamente de Escribanos de Registro, es aplicable también al Escribano de Hipotecas y en consecuencia, de conformidad a esta disposición legal, debe nombrarse en la vacante dejada por el fallecimiento del titular de la Escribanía de Hipotecas, al adscripto de la misma.

Varios abogados y escribanos de la Capital, solicitan la reposición de D. Luis Guerello en el cargo de Jefe del Registro de Hipotecas

Excmo. Señor:

Creo que V. E. debe oír previamente al dictamen que se ha servido pedirme, a la Excm. Cámara de lo Civil de la Capital acerca de la solicitud que precede, tanto por que aquel Superior Tribunal ejerce superintendencia sobre los Tribunales y funcionarios inferiores de su ramo, según lo dispone el artículo 102 de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital de 12 de Noviembre de 1886, cuanto porque los Escribanos de Registro (a los que puede equipararse el de Hipotecas) no deben ser nombrados ni removidos por el Sr. Presidente de la República, sino previo informe de las Cámaras de lo Civil o Comercial según corresponda sobre sus aptitudes y conducta como también expresamente lo dispone el artículo 179 de la misma Ley Orgánica.

Evacuado que sea dicho informe, podría servirse V. E. disponer, si todavía lo cree necesario que vuelva este expediente a mi despacho. — Octubre 7 de 1890.

Excmo. Señor:

Es de lamentarse que la Excm. Cámara de lo Civil haya negado a V. E. el informe que le pidió en cumplimiento de lo dispuesto por la ley, y a fin de asegurar el mejor acierto en la resolución de este asunto; y que ese informe haya sido denegado en la creencia de que aquel Tribunal Superior se encontraba inhibido para darlo en mérito de los fundamentos, a mi juicio equivocados, expuestos en la vista precedente del Señor Fiscal de dicha Excm. Cámara.

Los Poderes Públicos, entre los cuales nuestra Constitución ha dividido el Gobierno de la Nación, son efectivamente independientes dentro de los límites demarcados a la esfera de acción de cada uno; pero ni nuestra Ley Fundamental ni otra alguna, ha prohibido que se presten recíprocamente el auxilio de sus luces, o se comuniquen los conocimientos de que pueden disponer, a fin de que cada uno ejerceite su acción de la manera más provechosa a los intereses públicos.

La misma Constitución y las Leyes exigen a veces el concurso de dos de esos Poderes para un mismo acto, sin que jamás se haya pretendido que ello importe transtornar o alterar la división de los mismos Poderes Públicos, ni puede ser motivo de recelos, ni suscite susceptibilidades entre los diversos ramos del Gobierno. Así, el Poder Ejecutivo y una rama del Legislativo concurren juntos para hacer el nombramiento de los Magistrados que integran el Poder Judicial, para el de los Ministros Públicos que representan a la Nación en el exterior y para el de los Jefes de alta graduación en el Ejército y Armada. Ni el Poder Judicial ha podido extrañar jamás que el nombramiento de sus miembros dependa de los otros dos Poderes Públicos, ni el señor Presidente de la República podría hallar limitadas sus atribuciones, porque en ciertos casos, para el nombramiento de un empleado público tenga necesidad de recabar el acuerdo de una rama del Poder Legislativo.

En esos casos las leyes han establecido, como garantía para la mejor provisión de ciertos empleos públicos que el nombramiento de los que deben desempeñarlos, así como su remoción, no se haga sin el acuerdo o informe previo de otro Poder, o de una rama de otro de los Poderes Públicos. Así también nombra y remueve a los Mi-

nistros plenipotenciarios y Encargados de negocios, con acuerdo del H. Senado Nacional. Y viniendo al presente caso, la ley orgánica de los Tribunales de la Capital, en el artículo 179 ha dispuesto textualmente que «Los escribanos de Registros serán nombrados y removidos por el Presidente de la República, previo informe de las Cámaras de lo Civil o Comercial, según corresponda sobre sus aptitudes y conducta».

Se ha pedido a V. E. la remoción del empleado que actualmente sirve a la Escribanía de Hipotecas; y en presencia de lo dispuesto en ese artículo 179 de la Ley que acabo de copiar, aconsejé a V. E. pidiera a la Excm. Cámara de lo Civil el previo informe que la misma Ley ordena, sobre las aptitudes y conducta del empleado que actualmente lo sirve y del que se proponía a V. E. para reemplazarlo.

No importaba esto otra cosa que pedir el cumplimiento de la ley, y agregué además, como fundamento que autorizaba la petición, que estaba ordenada por la ley tratándose de los Escribanos de Registro a los que podía equipararse el de Hipotecas y que ejerciendo dicha Excm. Cámara la Superintendencia que la misma ley le atribuye sobre todas las oficinas y funcionarios inferiores de su ramo, ella estaba en aptitud de poder expedir ese informe con el conocimiento exacto de los hechos que debían darle el ejercicio de la Superintendencia, y de que V. E. carecía en absoluto.

Se reconoce por el Señor Fiscal aunque con alguna dificultad, que el Escribano de Hipotecas puede equipararse por analogía a los de Registro pero se afirma que la disposición del artículo 179 antes citada, no es de aplicación, porque el fundamento de los peticionantes no es la ineptitud del actual empleado (que sólo se menciona según él de una manera incidental) sino la nulidad de su nombramiento por haberse hecho con violación de lo dispuesto por la ley.

En mi opinión las dos razones aducidas por los peticionantes se presentan por ellos del mismo modo, y revisten igual importancia; pero sea de ello lo que fuere, no podía caber duda de que el informe solicitado de la Excm. Cámara, sólo se refería y debía recaer sobre el punto respecto del cual lo ordena expresamente el artículo 179 de la Ley Orgánica de los Tribunales. No podía creerse que él se

solicitaba respecto de la legalidad o ilegalidad con que el Poder Ejecutivo hubiera hecho el nombramiento cuya revocación se solicitaba; porque acerca de este punto debía dictar su resolución según su propio criterio como lo dice el Señor Fiscal.

Creo, pues Excmo. Señor que el informe solicitado por V. E. de la Excm. Cámara es lo que estaba ordenado por la Ley y como era realmente procedente y podía servir en verdad a la mejor resolución de este asunto, no ha debido ser excusado como lo ha sido.

Y sin embargo, Excmo. Señor, denegado ese informe por la Excm. Cámara, ella dice a V. E. que a su juicio habría sido acto de justicia nombrar en propiedad Jefe de la Oficina de Embargos e Hipotecas al Escribano D. Luis Guerello en atención a su comportamiento durante el tiempo que se halló adscripto a la misma, con lo cual emite su opinión respecto de la legalidad del nombramiento del actual empleado (pues si era justo nombrar al Escribano Guerello, se sigue de ello que no fué justo nombrar al actual Regente); y se expide al mismo tiempo un certificado honroso para Guerello respecto de su comportamiento durante el tiempo en que estuvo adscripto a dicho Registro. Sólo queda omitido el informe sobre las aptitudes y conducta del Regente actual, que no acreditan los peticionantes en su solicitud y respecto de los que la Excm. Cámara ha tenido a bien guardar silencio.

Pasando ahora a expedir el dictamen que V. E. se ha servido pedirme debo manifestarle a V. E. que he de prescindir totalmente de la razón de ineptitud que alegan los solicitantes, respecto de la que ningún dato tengo que pueda desvirtuar en lo mínimo la presunción contraria de aptitud que para mí tiene el empleado que hoy sirve la Oficina de Hipotecas; presunción que se funda en el hecho de ser él un abogado de nuestro foro, de lo que se desprende naturalmente que debe tener no sólo las requeridas sino mayores aptitudes, aun de las que son indispensables para ejercer debidamente el oficio de Escribano en cualquiera de sus ramificaciones.

En cuanto al modo como fué nombrado el actual Escribano de Hipotecas, mi opinión se ha formado en el estudio de los antecedentes que mediaban y de las leyes aplicables al caso las que paso a exponer a V. E.

Al fallecimiento del Escribano de Hipotecas Don José Fernández se hallaba como adscripto en su oficina Don Luis Guerello, en virtud del Decreto de 30 de Marzo de 1886 (Registro Nacional, página 294). Dicho decreto dice textualmente «Habiéndose llenado los requisitos exigidos por el Artículo 171 de la ley de 15 de Diciembre de 1881, el Vice Presidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta:

«Artículo 1.º— Queda adscripto a la Escribanía de Registro de Hipotecas, Embargos, e Inhibiciones a cargo de D. José Fernández, el Escribano Don Luis Guerello, con sujeción a la adjunta responsabilidad que establece la ley citada.

«Art. 2.º— Comuníquese, publíquese, y dése al Registro Nacional. — Madero. E. Wilde».

El artículo 171 de la Ley de 1881 cuyos requisitos expresa el preámbulo del Decreto anterior, haber sido llenados, permiten que cada Escribano de Registro pudiera tener un Escribano adscripto, que debía ser nombrado en la misma forma y condiciones que los titulares y funcionaría con la responsabilidad conjunta del Jefe de la Oficina.

Habiendo sido nombrado Guerello, por el Decreto antes copiado, como adscripto a la Escribanía de Fernández, en virtud de ese art. 171 que sólo habla de los Escribanos de Registro, pude decir a V. E. con propiedad en mi anterior dictamen; que el Escribano de Hipotecas estaba equiparado a los de Registro; pude decir más, esto es que V. E. los había equiparado al nombrar a Guerello en el Decreto antes citado, llamando en su artículo 1.º a la Oficina de Hipotecas, «Escribanía de Registro de Hipotecas, Embargos e Inhibiciones» y haciéndolo así en virtud sólo de la disposición del art. 171 de la Ley de 15 de Diciembre de 1881 que habla únicamente de los Escribanos de Registro. Esto es lo que el Señor Fiscal ha admitido, que uno y otro sean equiparados; no hay para qué insistir más en la demostración de ese punto.

Este art. 171 de la Ley de 1881 forma la primera parte del Art. 180 de la Ley Orgánica de los Tribunales, actualmente en vigencia, del 12 de Noviembre de 1886; y dice textualmente (Registro Nacional, 2.º semestre, pág. 475):

«Cada Escribano de Registro podrá tener un Escribano adscripto a su oficina y será nombrado en la misma forma y condiciones de los Titulares y funcionará con la responsabilidad conjunta del Jefe de la Oficina.

«El Escribano adscripto reemplazará al Titular en los casos del art. 178 (enfermedad, ausencia u otro impedimento transitorio), como así también en los de renuncia o muerte, debiendo en estos últimos casos prestar la fianza preceptuada en el art. 173 y tomar posesión de la Oficina previo inventario».

Como antes lo he dicho, el primer inciso de este artículo 180 de la ley vigente es idéntico en sus términos al art. 171 de la ley de 1881 siendo el 2.º inciso de aquél el nuevamente introducido en la ley vigente de 1886.

En este mismo inciso 2.º se hallaba, a mi ver, claro el derecho del Escribano Guerello para ser nombrado reemplazante del Jefe de la Oficina de Hipotecas D. José Fernández, a la muerte de éste. «El Escribano adscripto, dice el inciso 2.º del art. 180, reemplazará al Titular en los casos de renuncia o muerte»; y el modo imperativo en que está puesto el verbo reemplazar no me deja duda de que debió ser nombrado el Escribano Guerello y de que V. E. infirió agravio a su derecho nombrando otro empleado para un puesto al que aquél estaba llamado expresamente por la ley.

Pienso que V. E. en virtud de la atribución 10.ª del artículo 86 de la Constitución Nacional, que le confiere el derecho de nombrar por sí sólo a todos los empleados de la Administración cuyo nombramiento no esté reglado de otra manera por la misma Constitución, pudo tal vez vetar una disposición como la del inciso 2.º del art. 180 de la Ley Orgánica de los Tribunales de 1886, que ordenaba en caso de renuncia o muerte del Jefe de una Oficina de Registro el nombramiento del Escribano adscripto en su reemplazo. Pero pienso también que cuando V. E. no ha observado tal disposición y la ha promulgado como la Ley de la Nación, deben ser cumplidos sus mandatos y respetados los derechos que en ellos se fundan.

Esta es mi opinión en el caso ocurrente. El Escribano Guerello era el legítimo reemplazante, en virtud de su adscripción a la Escribanía de Registro de su finado Jefe D. José Fernández y me

confirma en ello no sólo la disposición legal en que la fundo, sino el muy respetable juicio de la Excm. Cámara de lo Civil, en cuanto dice que «habrá sido acto de justicia nombrar en propiedad Jefe de Oficina de Embargos e Hipotecas al Escribano D. Luis Guerello, en atención a su comportamiento durante el tiempo que se halló adscripto a la misma». Acto de justicia es el que es conforme y se ajusta a los preceptos de la ley y habría sido conforme con esta y ajustado a la disposición del artículo 180 antes citado el nombramiento del Escribano D. Luis Guerello para Jefe de la Oficina de Hipotecas.

V. E. sin embargo resolverá en la solicitud de los Abogados y Escribanos peticionantes, como en su ilustración lo juzgare más conveniente. — Octubre 27 de 1890.

Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 31 de 1890.

Tomo 9, pág. 179. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No tiene facultad el P. E. para hacer cumplir sentencias judiciales; el mismo Tribunal que la dictó tiene competencia para entender en su ejecución.
- II. — No habiendo dado cumplimiento el Gobierno de Entre Ríos a una sentencia de la Suprema Corte Nacional, que condenó a la Provincia a indemnizar a un súbdito inglés, corresponde que el P. E. exhorte a dicha Provincia a su cumplimiento, por cuanto tratándose de un extranjero, ello afecta en cierto modo a la Nación.

La Legación de S. M. Británica, sobre la reivindicación de la Isla «Lechiguanas», en favor del señor G. Wallace

Excmo Señor:

S. E. el Señor Ministro de Inglaterra solicita de V. E. «se lleve a cabo pronta y decisivamente y en todas sus partes, no parcialmente como ha sucedido» — la sentencia que acompaña, dictada por la Suprema Corte Federal en 14 de Marzo de 1889, en la causa seguida por D. Guillermo Wallace contra la Provincia de Entre

- Ríos solicitando ser restablecido en la posesión de la isla llamada «Lechiguanas» del Río Paraná, de que fué despojado por orden del Gobierno de dicha Provincia, con más la indemnización de daños y perjuicios.

Esa sentencia de la Suprema Corte declaró «que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos está obligado a restituir al Señor Wallace a la posesión en que se ha hallado de la isla antes mencionada, y a indemnizarle además los perjuicios que por causa de la desposesión se le hubiesen ocasionado con costas», y ellas han sido cumplidas en cuanto a la restitución de la posesión, no así en cuanto a la indemnización de los perjuicios. El Señor Ministro inglés solicita por ello de V. E. el pronto cumplimiento de esta última parte.

V. E. sin embargo no tiene facultad por la Constitución ni por las leyes que nos rigen, de hacer cumplir las sentencias de los Tribunales. Es el Juez o Tribunal que ha dictado la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (en este caso la Suprema Corte Nacional), el que es competente para entender en su ejecución.

La ejecución de la sentencia que condena al pago de frutos, daños, perjuicios o réditos, puede dar lugar a un nuevo juicio, el cual es sólo del exclusivo resorte de los Tribunales de Justicia. El artículo 15 de la ley de Procedimientos Federales de 14 de Setiembre de 1863 dispone que: «La sentencia que contenga condenación de frutos, réditos o daños fijará o bien la cantidad de la condenación, si resultare líquida o al menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación: y cuando no haya méritos para lo uno ni para lo otro, se reservará para el juicio correspondiente la acción sobre los frutos, réditos o daños».

La sentencia dictada por la Suprema Corte en la acción promovida por el Señor Wallace condenó a la Provincia de Entre Ríos a satisfacer al actor los perjuicios que se le hubieran ocasionado: pero sin determinar su importe líquido, ni establecer las bases sobre qué debiera hacerse su liquidación, la que según los términos del artículo de la ley, que acabo de copiar, equivale a dejar la prueba de dichos perjuicios y su liquidación para un juicio subsiguiente que debió promover el Señor Wallace ante la misma Corte, una vez que comprendió que no podía arreglar este punto extrajudicialmente con el Gobierno de Entre Ríos. Como se ve claramente, V. E. no podría en ejercicio de sus facultades constituciona-

les, apreciar y decidir sobre la cuenta que presenta el Sr. Wallace del importe de los perjuicios que ha sufrido. Sería necesario que V. E. oyese sobre ello al Gobierno demandado, que admitiera las pruebas que a su respecto se ofrecieran por ambas partes, y que decidiera en fin acerca del importe de tales perjuicios y nada de esto puede hacer V. E. porque son actos de la exclusiva competencia de los magistrados judiciales.

Solamente una acción creo que puede ejercitar V. E. en obsequio a la interposición de S. E. el Señor Ministro de Inglaterra y paso a indicarla.

Condenado el Gobierno de Entre Ríos por actos que el más alto Tribunal de la Nación ha considerado ilegítimos, ha debido apresurarse a dar satisfacción al vecino extranjero que fué víctima de ellos.

Y no la ha dado, ni la dará cumplidamente, mientras la sentencia de la Suprema Corte no obtenga el más exacto y total cumplimiento.

Ha devuelto la posesión de la isla de que injustamente privó al Señor Wallace; pero le debe aún el reconocimiento de los perjuicios que le causó y de las costas que le obligó a sufragar.

Un Gobierno no debiera dar lugar a ser demandado por el cumplimiento de una obligación declarada por sentencia, cuyo cumplimiento es forzoso para él; y la cuestión sobre el monto y pago de los perjuicios que se le reclaman ha podido y debido, como puede y debe ser arreglado por él, sin que el vecino extranjero se vea en la necesidad de promover un nuevo litigio para obtener su pago.

Cumple al crédito del Gobierno de Entre Ríos, y afecta en cierto modo al de la Nación, de que aquella Provincia forma parte, procurar con la mayor puntualidad la satisfacción de todos los deberes y obligaciones que pesan sobre él, principalmente en relación con los ciudadanos o súbditos extranjeros que tanto empeño hemos puesto y ponemos a atraer a nuestro suelo, como factores de nuestro progreso y engrandecimiento y a los que ofrecemos una legislación que garantiza ampliamente su seguridad, su libertad y su propiedad.

Pienso por tanto Excmo. Señor, que dirigiéndose V. E. en este sentido, que no le es vedado por nuestras leyes, al Gobierno de

Entre Ríos, se obtendrá que el Señor Wallace quede satisfecho del crédito que reclama, de otra suerte, mi opinión es que tendrá que continuar ante la Suprema Corte el juicio que antes entabló, para que se cumpla como debe serlo lo resuelto definitivamente en la sentencia que en testimonio obra en el presente expediente. —Octubre 7 de 1890.

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 10 de 1890.

Tomo 9, pág. 162. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que se haga saber a nuestro representante diplomático en Bolivia que los empréstitos forzosos exigidos por el Gobierno Boliviano violando el art. 8 del Tratado de 1868 —que establece que los ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes estarán exentos en el territorio del otro, de toda contribución de guerra, préstamos forzosos y requisiciones militares, con cualquier motivo que se exijan— deben restituirse a nuestros nacionales, no sólo lo que corresponde a capital sino también a intereses y pagarse las indemnizaciones que tuvieron lugar por perjuicios ocasionados a los acreedores, provenientes de las exigencias del Gobierno Boliviano.

Reclamo contra el Gobierno de Bolivia, de la viuda del ex Cónsul General Argentino, don Angel Marquiegui, por empréstito forzoso

Señor Ministro:

El tratado de 1868 vigente entre esta República y la de Bolivia (Art. 8) establece que los ciudadanos de cada una de ellas estarán exentos en el territorio de la otra, de toda contribución de guerra, préstamos forzosos y requisiciones militares, con cualquier motivo que se exijan.

El empréstito forzoso impuesto en 1871 al ciudadano argentino y Cónsul nuestro en aquella época en Bolivia, D. Angel Marquiegui, iba contra la estipulación mencionada; y tal vez por eso el Gobierno de aquella Nación admitió siempre como legítima la recla-

mación, que para su pago, así como para el de la indemnización correspondiente interpuso dicho Señor Marquiegui.

A estar a los términos de la última comunicación de nuestro Ministro Residente en Bolivia, el Gobierno de aquel país, ha pagado a los herederos del reclamante el capital exigido por vía de préstamo, sin abonarle intereses ni otra suma por resarcimiento de daños causados; y en la conferencia tenida por nuestro ministro con el de Relaciones Exteriores de aquella República, este señor le ha manifestado que el Gobierno Boliviano, «no podía aceptar el precedente de pagar intereses por estas deudas, en razón de que en su mayor parte son muy antiguas, y en veinte o treinta años subirían a sumas fuertísimas que la República no podría satisfacer».

Le dijo, además que, «el apoderado de la familia Marquiegui, que era el Dr. Ortiz Reyes, actual Vice-Presidente de la República, había aceptado en nombre de ella tal resolución, y que por consiguiente una vez hecho el pago de los 4.000 bolivianos que importaba el empréstito, el Gobierno daba por terminado el asunto».

Siendo exacto el hecho, como no puedo menos de creerlo, de que aquel apoderado de la familia de Marquiegui ha aceptado sin observación el pago del Capital, sin reserva alguna respecto de los intereses y de toda otra indemnización, creo también que el asunto promovido por el Señor Marquiegui, y que fué objeto de reclamación diplomática, queda totalmente terminado. V. E. no puede llevar su protección más allá de los límites que los mismos interesados le determinan.

Pero el Señor Ministro Argentino, a causa de que existen aún sin solucionarse ante el Gobierno de Bolivia otras reclamaciones análogas que ascienden a fuertes sumas a causa de los intereses, pide a V. E. se sirva darle instrucciones a fin de ajustar a ellas su conducta.

Desea el Señor Ministro saber: «si en reclamaciones análogas a la del Señor Marquiegui debe o no insistir pidiendo el pago de intereses; y yendo más lejos, si debe solicitar además indemnización o resarcimiento de daños causados directamente».

Si como queda dicho, los ciudadanos argentinos están exentos en Bolivia, en mérito de lo convenido en el art. 8.º del Tratado de 9 de Julio de 1868, de toda *contribución de guerra, préstamos forzados y requisiciones militares*, es indudable que, en caso de haberse

indebidamente exigido un empréstito forzoso, tiene el ciudadano argentino que ha sufrido tal perjuicio en sus bienes, el derecho de que le sea pagado el capital que fué obligado a prestar. Pero con sólo el pago del capital la deuda no queda cancelada. El uso del dinero tiene su precio; y este precio es el interés que devenga; y que aun en el caso de no haber sido pactado, la ley de todas las Naciones lo hace correr una vez que el deudor ha incurrido en demora.

Si además de la mora, el acreedor ha sufrido otro género de perjuicios, creo también de toda justicia y equidad que su importe debe ser satisfecho por quien sin derecho los causa.

El Gobierno de Bolivia, que en el caso del Señor Marquiegui reconoció en diversas ocasiones la justicia de sus reclamos (lo que significa la injusticia del préstamo forzoso que fué obligado a hacer, y de la presión y mal tratamiento que sufrió en ella), el Gobierno de Bolivia, repito, no podría desconocer que, teniendo por justo, y mandándole verificar el pago de un capital de un empréstito forzoso exigido a un ciudadano argentino, está en igual obligación respecto del pago de intereses de ese mismo capital y de los demás daños causados, como una consecuencia que emana de la estipulación del art. 8.º del Tratado mencionado, de los principios y reglas de la legislación universal y aún de la misma naturaleza de las cosas. Respecto del pago de intereses, sólo podría excepcionarse de verificarlo alegando la prescripción, si, según la Ley de aquella República, por falta de reclamación el sólo transcurso del tiempo hubiera extinguido la deuda.

Si V. E. encontrase justas estas observaciones podría indicar al Señor Ministro Argentino en Bolivia, que llegado el caso, emplee su intervención oficiosa a fin de obtener con el pago del capital, el de los intereses e indemnizaciones por los perjuicios que sean consecuencia necesaria y directa de los empréstitos forzosos exigidos a Argentinos, debiendo dar cuenta a V. E. de los resultados que obtuviese. — Octubre 22 de 1890.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Se acepta como resolución lo dictaminado. — Octubre 27 de 1890.

I. — No ofreciendo reciprocidad el Gobierno Inglés, no corresponde que se acuerde la extradición que solicita, por cuanto no estando aún sancionado el tratado de la materia entre ambos países, el caso debe regirse por las disposiciones del Código de Procedimientos que declara la procedencia de la extradición «según el principio de reciprocidad».

II. — En el caso no procedería tampoco la extradición por faltar el testimonio literal del auto judicial que decreta la medida y la copia autenticada de las disposiciones penales aplicables al caso, según la legislación del país requirente (art. 651 — Cód. de Procedimientos).

Caso de extradición de James Coupe: la Legación de Inglaterra dice que su Gobierno no ofrece reciprocidad

Excmo. Señor:

Al solicitar de V. E. el Señor Ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, la extradición de James Coupe, acusado de falsificación y malversación, hace presente que la ley actualmente en vigor en el Reino Unido respecto a extradición, no faculta al Ejecutivo para conceder la entrega de un criminal fugado que se haya refugiado allí o en cualquier país con quien la Gran Bretaña no tenga celebrado un tratado que concuerde con lo estipulado en la ley de extradición de 1870.

Agrega el Sr. Ministro que «el Gobierno de S. M. no está habilitado para prometer la reciprocidad, y tan solo puede solicitar la entrega de Coupe como acto de cortesía internacional, mientras se efectúa próximamente, según espera dicho Gobierno, el canje de las ratificaciones del Tratado de Extradición, firmado ya entre la Gran Bretaña y la República Argentina».

Dadas estas declaraciones de S. E. el Sr. Ministro de la Gran Bretaña, las disposiciones de nuestras leyes y la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia Nacional, mi opinión es que V. E. no puede acceder al pedido de extradición que le ha sido dirigido.

Desde luego el Sr. Ministro de Inglaterra declara a V. E. que no puede ofrecer la reciprocidad, al mismo tiempo que consta

de su misma comunicación, que no existe todavía un Tratado que haga obligatorio para ambos países, el concederse recíprocamente la extradición de los criminales o acusados en un país que se hayan refugiado en el otro. Debemos pues juzgar el caso según los términos de nuestra propia legislación.

La ley de extradición del 25 de Agosto de 1885 estableció en su artículo 1.º que: «El Gobierno de la República Argentina podrá «entregar a los Gobiernos extranjeros, *con la condición de reciprocidad* a todo individuo perseguido, acusado o condenado «por los Tribunales de la Potencia requirente, siempre que se «trate de un crimen o delito de los que se indican en la presente «ley y de conformidad a las reglas en ella establecidas».

Con posterioridad a esta ley ha sido dictada la de Octubre de 1888 que mandó observar desde el 1.º de Enero de 1889 como ley de la Nación, el Código de Procedimientos en materia Penal, que hoy nos rige; y siendo de fecha posterior a la citada ley de 1885, es derogatoria de ésta, en todo aquello en que sus disposiciones no se hallen enteramente de acuerdo.

El citado Código de Procedimientos establece las reglas que deben observarse en los casos de extradición; las disposiciones de los artículos 646 a 676; y el primero de ellos establece que: «La extradición de delinquentes, sea que se solicite por la República o que «se otorgue por ella a solicitud de otra Nación, sólo procede:

«1.º En los casos que determinen los Tratados existentes.

«2.º A falta de Tratado, en los casos en que sea procedente «la extradición *según el principio de reciprocidad*; o la práctica «uniforme de las Naciones».

Si no hay todavía entre la República Argentina y la Gran Bretaña un Tratado que las obligue a concederse la extradición de sus criminales o procesados y si el Gobierno de esta última Nación, declara no hallarse autorizado para ofrecer a V. E. la reciprocidad, pienso que el caso que se ofrece a la resolución de V. E. no puede solucionarse según el deseo que manifiesta S. E. el Sr. Ministro del Reino Unido, porque, en falta de Tratado, solo podría acordarse a título de reciprocidad, y ésta no ha podido ser ofrecida a V. E. no existiendo, según lo entiendo, práctica uniforme de las Naciones, que acuerde la extradición a falta de Tratado y de oferta de reciprocidad.

No es este sin embargo el único inconveniente que el caso de que me ocupo ofrece para que V. E. pueda aceptar la solicitud que se le dirige.

Entre los documentos que acompañan a la comunicación de S. E. el Sr. Ministro del Reino Unido, no he hallado el *testimonio literal del auto judicial* que haya decretado se solicite de V. E. la extradición que se pide, ni la copia autenticada de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado, según la legislación inglesa, como lo exige expresamente el artículo 651 del citado Código de Procedimientos.

Como por el mismo Código (art. 652) en caso de creerse procedente la solicitud de extradición; V. E. debe pasar al Juez de Sección, la petición que le haya sido dirigida con sus antecedentes, para que dicho Juez resuelva si hay o no lugar a concederla, de cuyo fallo puede apelarse por ante la Suprema Corte (art. 659) resulta que, el procedimiento para la extradición está confiado por nuestra ley al Poder Judicial, haciendo sus resoluciones cosa juzgada en esta materia.

Ahora bien, Exemo. Señor; V. E. recordará que no ha mucho tiempo la Suprema Corte Federal falló en un pedido de extradición: que esto no procedía por no haberse acompañado por el representante del Gobierno requirente el testimonio del auto judicial, por el que se hubiera decretado se solicitara de V. E. la extradición que se pedía. La Suprema Corte, declaró entonces que en materia de extradición y en defecto de Tratado, la demanda como los procedimientos que le conciernen, son regidos y deben sustanciarse de conformidad con la legislación interna del Estado que conoce de ella, debiendo los jueces del país someterse a sus preceptos, sin que les sea dado prescindir del uno más que del otro, ni de ninguno de ellos.

En vista de las consideraciones apuntadas, es mi opinión que V. E. no puede aceptar el pedido de extradición a que se refiere el presente expediente. —Octubre 23 de 1890.—

Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Octubre 24 de 1890.

Tomo 9, pág. 228. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es de exclusiva competencia de las autoridades Municipales todo cuanto se relaciona con la extracción de arena de las playas y ríos navegables, reconociendo como única limitación la jurisdicción que por precepto constitucional a la Nación le corresponde cuando se estorba o perjudica la libre navegación de los ríos o el comercio que por medio de ellos se realiza.

**La Municipalidad del Paraná, pide autorización para establecer
un impuesto sobre extracción de arena de la ribera, bancos
e islas del Río Paraná**

Excmo. Señor:

Debo partir de la base de que las playas y el lecho de los ríos y canales navegables, pertenecen a las provincias y no a la Nación, como ha sido ampliamente demostrado en un notable dictamen de 10 de Setiembre de 1889, expedido por el entonces Procurador General de la Nación, hoy Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Dr. Costa. La misma doctrina sostiene el Sr. Procurador del Tesoro, actual Fiscal de las Cámaras, Dr. Marengo, en su dictamen de 5 de Marzo del corriente año, con cuyas conclusiones estoy también conforme.

V. E. desea mi opinión respecto a cuál haya de ser la autoridad provincial que debe tener a su cargo todo lo relativo a la extracción de arena de las playas de los ríos navegables; y no tengo duda de que este punto pueda ser objeto de una decisión o resolución de las leyes de cada Provincia.

Me inclino a pensar, sin embargo, que el asunto, por su propia naturaleza es y debe ser de la exclusiva competencia de las autoridades Municipales de cada Provincia.

Así ha sucedido en la de Buenos Aires, en la que la Municipalidad de esta Ciudad, mientras perteneció a dicha Provincia, fué autorizada por ley de 10 de Diciembre de 1867 para recaudar el impuesto de dos pesos por carro de arena; estableciendo además, que su extracción no pudiera verificarse sin el permiso de la Municipalidad, y bajo las condiciones que ella determinase.

Dicha ley fué reproducida por las de 30 de Noviembre de 1868, de 23 de Junio de 1870 y de 19 de Noviembre de 1873; elevando esta última el impuesto de dos a cinco pesos por cada carro

de arena y atribuyendo a la Municipalidad la facultad de reglamentar dicha ley.

La extracción de la arena de los ríos navegables, como su reglamentación por las respectivas Municipalidades, deben tener una limitación que emana de la Constitución Nacional; y esa limitación consiste en que con tales actos no pueda ser estorbada ni perjudicada la libre navegación de los ríos ni el comercio que por ellos se hace, cuya conservación y reglamentación se hallan al amparo de la Autoridad Nacional. —Noviembre 3 de 1890.—

Departamento del Interior. Resolución de Enero 30 de 1891, autorizando a la Municipalidad de Paraná, a extraer arena del río y dejando lo relativo a la jurisdicción, para tratarse en su oportunidad.

Tomo 9, pág. 16. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Con arreglo al art. 48 del Código Civil, corresponde el retiro de las «personería jurídica» de entidades que infringen las disposiciones sobre juegos prohibidos.

El Jefe de Policía de la Capital sobre juegos prohibidos en ciertos Clubes

Excmo. Señor:

V. E. ha concedido al Club Internacional, al Anglo German Club y al Club Nacional, el carácter de personas jurídicas, sin que según el informe que precede conste, se haya hecho después de 1885, igual concesión al Club de Extranjeros.

El carácter de persona jurídica solo puede ser acordado por V. E. en las condiciones que establece, en su parte final, el artículo 33 del Código Civil, esto es, que las asociaciones que solicitan ese carácter «tengan por principal objeto el bien común».

En los Estatutos o Reglamentos que constan de los expedientes agregados, hallará V. E. que los objetos de dichas asociaciones se hallan de acuerdo con la ley; pues toca al bien común que haya centros de sociabilidad y de honesta recreación, en que se culti-

ven y estrechen las relaciones de amistad entre los asociados.

Pero el Sr. Jefe de Policía comunica a V. E. que en los Clubes que quedan nombrados «se juega por dinero al ferrocarril *cobrándose coima*»; y como todos ellos tienen Estatutos aprobados por V. E. ha creído deber abstenerse de todo procedimiento y poner el hecho en conocimiento de V. E. a fin de que tome la resolución que corresponda.

Se juega en esos Clubes Sociales al ferrocarril y se cobra coima. Estos hechos son contrarios a las leyes, y al bien común de los asociados; y se hallan prohibidos entre nosotros por nuestras más antiguas disposiciones patrias.

El Reglamento Policial de 11 de Marzo de 1812 prohíbe toda clase de juegos de azar, bajo pena de multa, de cerrarse la casa en que tales juegos tengan lugar, y de arresto a los jugadores.

Por decreto de 19 de Agosto de 1816 del Director Supremo del Estado, se declararon nuevamente prohibidos dichos juegos y en vigor las leyes que hablan sobre los jugadores y los que mantienen casas de juegos, condenándolos a penas deshonrosas y correcciones corporales.

El Cabildo de esta Capital, por resolución de 12 de Febrero de 1820, prohibió también el juego de la ruleta; y por decreto de Mayo 10 de 1821, se prohibieron nuevamente los juegos llamados de ruleta y perfecta unión.

Así pues, no nos faltan disposiciones que prohiban los juegos que, como los que hacen en los Clubes mencionados, sólo pueden dar por resultado la ruina de los que en ellos se comprometen.

El nombre de ferrocarril con que se designa al que se hace en los mencionados Clubes, le habrá sido tal vez dado para significar la rapidez con que pasa el dinero de unos jugadores al bolsillo de los otros, engañosamente, porque al fin ese dinero ha de quedar, por vía de coima, en las cajas del Club.

V. E. no puede haber pensado autorizar una casa de juego, cuando prestó su aprobación a los Estatutos o Reglamentos de los Clubes denunciados. Nada hay más contrario al bien común, que el desarrollo que ha tomado en nuestra sociedad la pasión del juego; que se ha convertido ya en una verdadera epidemia que, en

el orden moral, causa tantos males como las epidemias que nos afligen en ocasiones en el orden físico.

Las personas jurídicas pueden dejar de existir «por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la autorización legal» (artículo 48, Código Civil).

El codificador, explicando su pensamiento en la nota con que acompaña el artículo que acabo de citar se explica así: «Las personas jurídicas pueden ser disueltas por la decisión sola de la autoridad pública, si ellas vienen a comprometer los intereses generales, pues que sólo el interés público, y no intereses individuales, religiosos o industriales, por grandes que sean, son el motivo de la autorización para su creación».

Que los Clubes sociales convertidos en casas de juego, comprometen los intereses generales, es fuera de toda duda, en mi opinión; pues atraen e inducen a los ciudadanos y principalmente a los jóvenes, a abandonar el trabajo, y a buscar en el juego la fortuna por un camino rápido, aunque generalmente jamás llega a obtenerse o a conservarse.

Creo pues que V. E., en presencia del oportuno aviso que le ha sido dado por el Sr. Jefe de Policía, se halla en el caso de retirar la autorización dada a los tres Clubes convertidos en personas jurídicas, y la aprobación que prestó a sus Estatutos o Reglamentos, en virtud de haberse abusado de tales autorizaciones.

Respecto de uno de dichos Clubes, el Anglo German, ya el anterior Jefe de Policía, por su nota de 25 de Febrero del corriente año, comunicó a V. E. que en él se jugaba; y pidió se suspendiese o se negara la autorización que le había sido concedida.

El Procurador de la Nación Dr. Costa, creyó también que podía retirársele la autorización concedida; pero como medida equitativa, recomendó una vigilancia especial por parte de la Policía, y que se llamara a la persona que se hallaba al frente del Club, y le hiciese saber: que si no lo colocaba en las condiciones de honorabilidad y decoro requeridos, V. E. procedería sin más trámite a retirar la autorización que le concedió, para promover su disolución.

V. E. ordenó se hiciera saber al interesado, se presentara en Secretaría, sin duda para que se le hiciera la prevención indicada por el Sr. Dr. Costa, pero no consta que así se procediera.

Yo creo que tales prevenciones no son indispensables, cuando se trata de una violación flagrante de la ley, que es conocida, y que obliga a todos.

Si V. E. creyera sin embargo que, por no haberse cumplido la que mandó hacer, fué necesario repetirla, yo me permitiría indicar se comisionara al efecto al Sr. Jefe de Policía, encargándole V. E. que, redoblando su vigilancia, respecto de dichas casas, procediera a dar inmediato aviso si reincidieran en el juego, para privarles del carácter de persona jurídica, y ordenar su inmediata liquidación.

Sería conveniente que V. E. ordenara también la publicación de la resolución que tenga a bien adoptar; a fin de que ella sirva de prevención a las demás asociaciones que se encuentren en el mismo caso que las antes nombradas, y puedan arreglar su conducta al precepto de la ley y mandato de V. E. —Noviembre 5 de 1890.

Ministerio del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Noviembre 7 de 1890.

Tomo 9, pág. 214. Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Habiéndose recurrido a la «vía contenciosa-administrativa» ante la justicia federal, reclamando de una resolución de la Dirección General de Aduanas, no corresponde que luego se dirija igual petición al P. E. por la «vía administrativa», por cuanto de conformidad al Decreto de 26 de Diciembre de 1879, ambas vías son excluyentes y en consecuencia la elección de una, implica la renuncia a la otra.

Multa al vapor «Belle Isle», por conducir carga al puerto de Buenos Aires que era destinada al de Montevideo

Excmo. Señor:

Sería conveniente se sirviera V. E. ordenar se agregue por quien corresponda, sin acumularse, el expediente seguido ante la

Aduana con motivo de la condena impuesta al vapor Belle Isle, y que fecho vuelva a mi despacho. —Octubre 3 de 1890.—

Excmo. Señor:

Los informes que preceden de la Dirección General de Rentas y de la Aduana, al expresar la causa que dió lugar al comiso a que se refiere S. E. el Sr. Ministro de S. M. Británica, hacen constar que la resolución dictada por el Administrador de Rentas fué apelada por el interesado por ante el Señor Juez Federal Dr. Ugarriza, que fué otorgado dicho recurso; y que hasta la fecha no ha sido definitivamente resuelto.

Según el artículo 1063 de las Ordenanzas de Aduana, aprobada por ley de 5 de Octubre de 1876, «cuando la resolución (del «Administrador de Rentas) fuese condenatoria, los dueños o consignatarios de las mercaderías o transportes condenados, *podrán entablar la vía contenciosa* ocurriendo a la *Justicia Nacional, haciéndolo* «saber por escrito al Administrador en el perentorio término de tres días hábiles, contados desde el de la notificación de dicha resolución».

«Si la sentencia del Juez quedare ejecutoriada, —dispone el «artículo 1071 de las mismas Ordenanzas—, se devolverá el expediente al Administrador de la Aduana de que proceda, para su «ejecución; pero, si se reclamase de ella por cualquiera de las partes «se otorgará la apelación para ante la Suprema Corte en la forma «y caso que la ley previene para el juicio ordinario».

Resultando de los informes mencionados, que los perjudicados por la resolución de la Aduana han entablado *la vía contenciosa* de que habla el artículo 1063 citado de las Ordenanzas, ocurriendo ante el Sr. Juez Federal, me parece forzoso que deben esperar la resolución que dé al caso la Justicia Nacional, siguiendo el procedimiento por todas las instancias que permiten dicho artículo y el 1071.

El decreto de 26 de Diciembre de 1879, mandado observar para que sirva de precedente en los casos ocurrentes (Registro Nacional, página 383) permite a los que han sufrido una resolución condenatoria de los Administradores de Rentas optar, entre tomar *la vía contenciosa* que les ofrece el artículo 1063 de las Ordenanzas de Aduana, u ocurrir directamente al Gobierno contra dicha reso-

lución, buscando por la *vía administrativa* la enmienda del perjuicio sufrido. Pero adoptando la *vía administrativa*, debe entenderse establece dicho decreto, que renuncian voluntariamente a la *contenciosa*, por cuanto quedan terminados estos asuntos con la resolución del Gobierno, sin que sea permitido recurrir de ella a la Justicia Nacional.

Creo, pues, Excmo. Señor, que según las disposiciones que dejo citadas, los interesados en el comiso declarado por la Aduana, pudieron elegir entre ocurrir a V. E. renunciando el recurso ante la Justicia Nacional; o recurrir ante ésta, como se dice que lo han hecho. Elegida la *vía contenciosa*, creo que se hallan en el caso de esperar la resolución definitiva que en ella obtengan; no estando en las facultades de V. E. intervenir de modo alguno, dada la elección antes dicha, hecha por los interesados. — Diciembre 15 de 1890.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Enero 2 de 1891.

Tomo 9, pág. 165. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Con arreglo a las Convenciones Consulares vigentes, y a la Resolución de la Intendencia Municipal de 28 de marzo de 1890, la exención de contribuciones municipales, a favor de los edificios de los Cónsules, tiene lugar cuando, en ellos se encuentran instaladas «la totalidad» de las oficinas consulares. La casa en que habita el Cónsul y su familia no goza de exención aunque en ella tenga el Cónsul instalado su despacho.

La Legación de Italia, sobre Impuestos Municipales cobrados al señor Cónsul de esa Nación

Excmo. Señor:

S. E. el Señor Ministro de Italia reclama de V. E. se impartan las instrucciones necesarias, a fin de que la Intendencia Municipal de esta Capital devuelva al Señor Cónsul de la misma Nación, los impuestos municipales que ha percibido durante la permanencia de dicho Señor Cónsul en la casa que habita, cuyo impuesto, dice, está, a cargo de arrendatarios, y para que no siga cobrándosele en adelante.

Funda el Señor Ministro su petición en el intercambio de notas que tuvo lugar el 16 y 17 de Agosto de 1871, entre la Legación de Italia y el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República, por las que quedó asegurado a los respectivos gobiernos, el tratamiento de la Nación más favorecida; y en que así como en el art. 7 de la Convención Consular entre la República Argentina y la del Perú, y en el art. 9 de la vigente con el Reino de Portugal, estatúyese que los Cónsules enviados *están exentos de todo impuesto* así cree que debe hacerse extensivo ese tratamiento a los Reales Cónsules de su Nación, residentes dentro del territorio de la República.

Los informes producidos por la Intendencia Municipal de la Capital demuestran, Excmo. Señor, que el Real Consulado de Italia ocupa la casa situada en la calle Alsina N.º 1455; por lo cual, y hallándose ella comprendida en las disposiciones del decreto de Abril último, expedido por la Intendencia, dicha casa está exonerada del pago del impuesto general, y no se ha hecho respecto de ella cobro alguno.

En Enero 18 del corriente año, según datos que me han sido comunicados por la Oficina Municipal de Rentas, esta Oficina consultó a la Intendencia Municipal respecto de algunas dudas que le ocurrían para la debida aplicación de la ordenanza de Impuestos Municipales, sancionada para el año económico de 1889 y que se ha declarado en vigencia para el año corriente. Entre los puntos consultados, figuraba el siguiente:

¿Las casas de propiedad particular ocupadas *en su totalidad* por oficinas públicas nacionales o municipales, como ser Escuelas, Comisarías de Policía, Juzgados de Paz, etc., etc., deben pagar el impuesto general, así como las Legaciones y Consulados? Hasta ahora unos propietarios pagan y otros se niegan a hacerlo, previniéndole que a aquéllos se le aplica la cuota menor como casas de familia».

Consultado el Asesor Letrado de la Municipalidad, opinó en dictamen de 16 de Febrero último: «En el 1.º caso la Ley no distingue; por lo tanto, debe aplicárseles el impuesto».

En 28 de Marzo del corriente año, la Intendencia Municipal dictó la siguiente resolución:

«Hágase saber a la Oficina de Rentas que, para la aplicación del impuesto, debe observar las siguientes reglas:

«Las casas de propiedad particular ocupadas *en su totalidad* por oficinas públicas, nacionales, provinciales o municipales, legaciones y consulados extranjeros, no deberán pagar impuesto alguno».

Fundada en esta disposición, dice la Oficina Municipal de Rentas, no se cobra impuesto alguno municipal a la casa calle Alsina N.º 1455, ocupada *en su totalidad* por el Real Consulado Italiano.

Pero el Señor Cónsul de Italia ocupa con su familia la casa en la misma calle N.º 1451, la que es contigua a la otra que ocupan las Oficinas del Consulado; siendo de notar que el Señor Cónsul tiene su despacho, no en la casa en que están las Oficinas del Consulado, sino en la que habita con su familia, habiendo abierto comunicación entre ambas casas para su mayor comodidad y más fácil acceso a sus Oficinas. Así lo dice el informe de fojas 9; siendo respecto a esta última casa que ocupa con su familia, que se ha cobrado el impuesto; y que la Oficina Municipal de Rentas considera comprendida en la Resolución de la Intendencia de 28 de Marzo que queda transcrita.

Con arreglo a esta resolución, me parece indudable que la casa que ocupa con su familia el Señor Cónsul, aunque en ella tenga su despacho, está sujeta al impuesto; puesto que no se halla ocupada *en su totalidad* con las Oficinas del Consulado, que se hallan en la casa contigua.

S. E. el Señor Ministro de Italia establece sin embargo el hecho de que, las Convenciones Consulares con el Perú y el Reino de Portugal, que puede invocar el de Italia, declara exentos de todo impuesto a los Cónsules enviados por dichas naciones; y leyéndolas atentamente, pienso que es necesario hacer alguna distinción.

El art. 7 de la Convención Consular de 5 de Mayo de 1874, entre nuestra República y la del Perú, estatuye que: «Los Cónsules Generales, Cónsules, Vice-Cónsules y Agentes Consulares, ciudadanos del Estado que los nombrare, estarán exentos de cualquier cargo o servicio público, *como también de contribuciones persona-*

les directas y de toda contribución Extraordinaria». (Colección de Tratados, tomo 2, pág. 480).

El art. 9.º de la Convención Consular celebrado con el Reino de Portugal en 24 de Diciembre de 1878 (dicha colec. tomo 3.º pág. 198), establece que: «Cuando los cónsules generales, cónsules, vice-cónsules o agentes consulares fuesen ciudadanos o súbditos del Estado que los nombra, no se les podrá imponer carga alguna o servicio público, y *estarán exentos de contribuciones personales directas y de otra cualquiera contribución extraordinaria*».

Como V. E. lo ve, el impuesto general municipal no puede ser colocado entre las *contribuciones personales directas* a que se refieren ambas Convenciones Consulares; y mucho menos podría calificarse de contribución extraordinaria.

Que no es un impuesto personal el que cobra la Municipalidad, lo demuestra el hecho de que no grava a las personas, ni a los inquilinos de las fincas, como por falta de información exacta lo ha comprendido S. E. el Señor Ministro de Italia. Ese impuesto no es personal, sino *real*; puesto que grava a la propiedad y debe ser satisfecho por los propietarios y no por los inquilinos o arrendatarios de las fincas. El artículo 2.º de la antes citada Ordenanza de impuestos, vigentes en el año anterior y en el que expira, resuelve toda duda al respecto. «El impuesto general municipal dice, de limpieza, alumbrado y barrido, *será pagado* por los propietarios durante el año 1889, por trimestres adelantados».

En consecuencia de estas disposiciones, es mi opinión, Excmo. Señor, que la casa que ocupa con su familia el Real Cónsul de Italia, está sujeta al impuesto municipal, estando exenta de él, la contigua, que ocupan *en su totalidad* las oficinas del Consulado; y que es de esperarse que, dada la ilustración y rectitud de S. E. el Sr. Ministro de Italia, reconocerá sin dificultad, que, no tratándose de ningún impuesto personal, ni extraordinario, que deba ser pagado por los inquilinos o arrendatarios, si no que grava solo a los propietarios, ha de reconocer la justicia y la equidad con que la Municipalidad ha procedido en el cobro del impuesto de que se trata.

Sin embargo, V. E. en su superior juicio, resolverá como lo estime más acertado. —Buenos Aires, Diciembre 16 de 1890.—

Departamento de Relaciones Exteriores. Se adopta como resolución lo dictaminado. — Diciembre 19 de 1890.

Tomo 9, pág. 154. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Corresponde que el P. E. apruebe una escala de aumentos de tarifas ferroviarias, que se solicita en razón de la depreciación de nuestra moneda de curso legal.

La autorización para el aumento de las tarifas debe hacerse en la inteligencia de que serán disminuidas en la misma proporción, tan pronto tenga lugar una mayor valorización de nuestra moneda.

El F. C. Buenos Aires a Rosario, sobre el aumento de sus tarifas

Excmo. Señor:

Si como lo manifiesta a fs. 6 la Oficina de Contabilidad y Central de Ferro-Carriles Nacionales, la Empresa de Buenos Aires al Rosario fué autorizada por V. E. en 23 de Octubre de 1889 a elevar sus tarifas en un 30 %, siendo el precio del oro de 161 a 180: si habiendo subido más tarde dicho precio del oro, la autorizó también en 30 de Diciembre del mismo año 89, a elevar dichas tarifas en un 60 %, parece desde luego natural y equitativo que cuando el precio del oro sea elevado hasta 300, se eleven igualmente las tarifas proporcionalmente. La misma razón que aconsejó los aumentos anteriores, autorizaría el que nuevamente se propone.

Si la escala que se indica en el escrito de fs. 1, es, o no, la que corresponde en relación con los aumentos anteriores autorizados, no me toca apreciarlo; pero si en realidad fuera la que correspondiese, no veo inconveniente en que sea aprobada por V. E.

Es desde luego justo, que cuando suben los artículos y el precio del trabajo de que indispensablemente necesita una Empresa de transporte, suban en proporción los precios de los pasajes y de la conducción de las mercaderías.

Al aprobar esa escala de precios, V. E. lejos de hacer una delegación de facultades en favor de la Empresa, pondría en ejercicio las que la ley le acuerda prestando su asentimiento a la progresiva elevación o disminución de las tarifas con arreglo a la base razonable del mayor o menor valor de nuestra moneda de curso legal.

Al autorizar la elevación de las tarifas, V. E. debería declarar, en mi opinión, que ellas serían disminuidas en la misma proporción, así que tuviera una mayor apreciación nuestra moneda de curso legal.

Y para la completa seguridad de que no se mantendría una tarifa más alta de la que en justicia correspondiera, V. E. podría disponer que la Empresa le hiciera saber toda alteración que en más o en menos introdujera en sus tarifas con sujeción de la vigilancia que a este respecto debiera recomendarse a la Oficina encargada de la inspección de los Ferro-Carriles. — Diciembre 18 de 1890. .

RESOLUCION:

Departamento del Interior:

Buenos Aires, Enero 16 de 1891. — Visto lo solicitado por la Empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires a Rosario sobre modificación de las tarifas vigentes, a causa del alza en el precio del oro, lo informado por el Departamento de Obras Públicas, la Dirección de Ferro-Carriles y la Contaduría General, lo dictaminado por el Procurador General de la Nación y considerando que es razonable que el aumento de esas tarifas guarde una relación equitativa con el precio actual del oro.

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Art. 1.º — Queda facultada la Empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires a Rosario para fijar el aumento de sus tarifas con relación al precio del oro, con arreglo a la escala siguiente:

Precio del oro: 241 a 260, aumento en la tar. nor. 70 %									
»	»	»	261	»	280,	»	»	»	80 »
»	»	»	281	»	300,	»	»	»	90 »
»	»	»	301	»	320,	»	»	»	100 »

Por cada 20 (veinte) puntos más que suba el oro, 10 (diez) % de aumento sobre la tarifa normal. Queda entendido que cuando bajase el precio del oro, se hará la rebaja proporcional en las tarifas aumentadas con sujeción a esta misma escala.

Art. 2.º — La Dirección de Ferro-Carriles vigilará el cumplimiento de este decreto; y cuidará que los cambios en las tarifas que se efectúen en razón de los aumentos autorizados, se anuncien al público con la conveniente anticipación.

Art. 3.º — Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional. —Pellegrini — Julio A. Roca.

Tomo 9, pág. 107. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No hay ley alguna que autorice al P. E. a abonar honorarios a abogados nombrados de oficio, que han hecho defensas en juicio a pobres de solemnidad.

El Juzgado Federal de la Provincia de Buenos Aires, sobre honorarios del Dr. D. Alberto Oteiza como defensor ad-hoc

Excmo. Señor:

El Señor Juez Federal de la Provincia de Buenos Aires eleva a V. E. a los efectos consiguientes esto es, a efecto de que V. E. mande abonarlas, las regulaciones de honorarios practicadas a favor del abogado defensor, nombrado de oficio, de Carlos Barbero y Miguel Zambrano, procesados por aquel Juzgado; y soy de opinión de que V. E. no debe decretar tal pago porque no hay deuda de la Nación procedente de tales honorarios y porque, V. E. no puede disponer de los dineros públicos sino en cumplimiento de las leyes.

No es nuevo el caso promovido por el Señor Juez Federal de La Plata. Ya en 11 de Junio de 1874, el Juez de Sección en lo Criminal de esta Capital, solicitó de V. E. el pago de honorarios de otro abogado que había sido nombrado de oficio por ese Juzgado, defensor de los procesados en 68 causas criminales.

Oído por V. E. el Procurador General de la Nación que lo era entonces el Señor Doctor Francisco Pico, se expidió en los

términos siguientes: «Excmo. Señor. Es la primera vez que veo cobrar honorarios por defender pobres ante los Tribunales y cobrarlos al Gobierno, que ninguna intervención tiene en este negocio. Los únicos honorarios que la ley manda pagar al Gobierno son los de los Señores Conjueces de la Corte Suprema y no hay ley alguna que le mande pagar los de los defensores de pobres acusados.

«Lo que manda la Ley 16, título 16, lib. 2.º de las Recopiladas es que los abogados están obligados a defender a los pobres gratuitamente: de gracia y por amor de Dios, son las palabras de la Ley.

«Será curioso preguntar al Juez en qué fundamento legal se ha apoyado para mandar regular estos honorarios y para pretender que el Gobierno los pague.

«Debo advertir a V. E. que no sólo el Dr. N. es el que ha defendido en Buenos Aires, pobres de solemnidad, sino muchos otros abogados y en las Provincias muchísimos, y que si el Gobierno tuviera condescendencia en este caso, levantaría una nube de acreedores y tendría que agregar al Presupuesto una cuantiosa suma con este objeto.

«Conociendo el carácter modesto y escrupuloso del Dr. N. no puedo creer que haya hecho esta solicitud de *motu proprio* sino por malos consejos.

«En consecuencia soy del dictamen que V. E. conteste al Juez que no hay Ley alguna que le obligue a pagar estos honorarios y que no puede reconocer la obligación que arbitrariamente quiere imponérsele.

13 de Junio de 1874. — *Francisco Pico*».

En consecuencia del precedente informe V. E. tuvo a bien resolver en la misma forma. «Por los fundamentos de la vista precedente, no hay lugar al pago que se solicita. Hágase saber. — *Sarmiento*. — *Juan C. Albarracín*».

El informe y decreto precedente, se hallan en el tomo 4.º, pág. 630 de los Informes del Procurador General de la Nación.

Reproduciendo cuanto dejo transcripto, sólo podría agregar que al dictar V. E. análoga resolución en el presente expediente, conviene se sirva mandar se publique e inserte en el Registro Na-

cional, a fin de que sea conocida por Jueces y abogados y se eviten en lo sucesivo reclamaciones de este género. — Diciembre 22 de 1890.

Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Diciembre 27 de 1890.

Tomo 9, pág. 247. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

En un contrato de compra-venta de tierras públicas, no habiendo tenido lugar la tradición de la cosa vendida, no se adquiere su dominio. En el caso no medió, ni la tradición real, ni las simbólicas autorizadas por el antiguo derecho español — *brevi manu; longa manu, simbólica, constitutum possessorium* — los que se analizan minuciosamente. El comprador en tal caso, sólo tiene una acción personal para pedir la entrega de las tierras y siempre que dicha acción no se haya extinguido por prescripción.

Aun cuando la Nación hubiera poseído a nombre del comprador —lo que no se ha probado— si se demuestra que por actos posteriores, entendió poseer a nombre propio, tiene lugar la interversión del título y, en consecuencia, se opera a favor de la Nación la prescripción liberatoria, si ha transcurrido el término legal para ello.

La sucesión de D. Florentino Castellanos, sobre posesión de terrenos ubicados en esta Capital

Excmo. Señor:

D. Agustín Ferrer en representación de los herederos del Dr. D. Florentino Castellanos, solicita de V. E. les ponga en posesión de unos terrenos ubicados en esta Capital, que compró al Gobierno en el año 1832, con la extensión de dos cuerdas cuadradas y setenta y tres centésimos de otra, contiguos a la «Pólvora» llamada de Cuelli, y bajo los linderos que cita.

Expone que el Dr. Castellanos, comprador de estos terrenos, tuvo que emigrar del país durante la tiranía de Rosas; y que fué a establecerse en Montevideo donde murió, y donde, desde entonces, se hallan arraigados sus herederos.

Que a su muerte la mayor parte de dichos herederos se hallaban en Europa donde aun siguen viviendo, y que otros eran

menores y continuaron en la República Oriental, y que por trastornos de aquellas épocas, *se extraviaron los documentos de propiedad que recién han podido encontrar*, después de multiplicadas diligencias.

Que el caso que somete a la resolución de V. E. es el siguiente:

«El Gobierno vende un terreno y otorga el título correspondiente, que debido a circunstancias fortuitas *se extravía*».

«Pasado un tiempo, *y estando siempre el Gobierno en posesión del terreno por él mismo vendido*, se presentan sus legítimos dueños con la escritura correspondiente, y piden que le sea entregado».

Tal es la cuestión que el recurrente plantea; y que resuelve sin dificultad en favor de sus representados, pidiendo se les haga entrega de los terrenos expresados.

Esa cuestión, sin embargo, no es tan sencilla, como va a verlo V. E.

I

El contrato de compraventa, por el antiguo Derecho Español, como por nuestro Código Civil, no transmitía, por sí solo la propiedad de la cosa vendida. Contrato consensual, como era y como es, la Ley 28, tít. 5.º, part. 5.ª, establecía las acciones y obligaciones correlativas que de él nacían para los otorgantes, para el vendedor y para el comprador. «Pagar debe el comprador al vendedor el precio que el prometió e aquel que hizo la vendita, *debe al otro entregar* (esto es, poner en posesión) *en aquella cosa que vendió*, con todas las cosas que pertenezcan a ella o le son ayuntadas».

La tradición de la cosa vendida era pues indispensable para que el comprador adquiriera *la propiedad* de la cosa comprada por él, y mientras esa tradición no se hiciera, no podría el comprador considerarse propietario, ni ejercitar contra terceros las acciones de reivindicación y otras que nacen del dominio; sólo tenía una *acción personal* contra su vendedor —la que le da la Ley 28 que acabo de copiar— para que le entregase o le diese posesión de la cosa que le había comprado.

Al plantear su cuestión, el reclamante declara, que el Gobierno vendedor *siempre estuvo en posesión del terreno por él mismo vendido*; o lo que es lo mismo, que no hizo tradición de dicho terreno a su comprador el Señor Castellanos.

Si la tradición de la cosa vendida no tuvo lugar: si ella no fué reclamada al vendedor por el comprador en los 58 años que van transcurridos desde la fecha del contrato de compra-venta (1832), tratándose de una acción puramente personal, es evidente que dicha acción se encuentra prescripta hace ya muchos años. La Ley 63 de Toro es concluyente acerca de este punto: «El derecho de executar por obligación personal se prescriba por diez años, y la *acción personal* y la *executoria* dada sobre ello, se prescriba por veinte años».

En el año de 1852 vencieron los veinte años en que el Dr. D. Florentino Castellanos pudo exigir del Gobierno la entrega del terreno que le había vendido. Después de aquella fecha, su acción como puramente personal, caducó por su inacción: no se requiere más que ésta para que la prescripción liberatoria produzca sus efectos.

Para que empezara a correr esta prescripción, sólo se requería que la acción prescriptible hubiera nacido; y nació en la misma fecha del contrato de compra-venta según los términos antes transcritos de la ley 28 Tit. 5.º Part. 5a.

Es evidente, dice Maínez, que no puede haber prescripción antes de que exista la acción que debe prescribirse y por eso es indispensable determinar con precisión, el momento en que una acción empieza a existir: — La existencia de un derecho; y después, una lesión de ese derecho. Desde el momento en que a-se verifica en las *acciones in rem* siempre que cualquiera nos impi-bas condiciones están juntas, empieza a correr la prescripción. Esto da el ejercicio de nuestro derecho. Todo acto que produce semejan-te resultado, implica, en efecto, una lesión de nuestro derecho; y esta lesión nos da, a la vez, la *acción y la persona* contra quien de-bemos dirigirla.

La *actio impersonem* nace desde que podemos exigir la ejecu-ción de la obligación que le sirve de fundamento porque desde ese momento, comenzamos a ser lesionados por la falta de ejecución (Droit Romain, tomo 1.º D. 146, pág. 144).

II

Pudiera sostenerse tal vez por el reclamante que, si no se efectuó la tradición real o material del terreno que compró el Dr.

Castellanos, ella tuvo lugar en una de las diversas formas que nuestro antiguo Derecho permitía y que habiendo tenido lugar la venta bajo el imperio de esa antigua Legislación, el punto debe ser considerado con arreglo a sus disposiciones. Anticipándome a esa objeción, paso a tratar las diversas formas de tradición que admitían las leyes de Partida, para ver si alguna de ellas fué empleada respecto del terreno vendido al Dr. Castellanos.

1.º) La Ley 47, Tít. 28, Part. 3.ª, supone el caso de que uno tenga arrendado, prestado o encomendado a otro, alguna cosa suya; y después de eso se la vendiese. La ley dispone en tal caso que, «*maguer estonce non estoviesse la cosa delante, nin lo apoderasse della, con todo eso gana el señorío della* aquel a quien la vende, o la da». Esta manera de tradición llamada *brevimanu*, no pudo tener lugar: porque el Dr. Castellanos no llegó a ser arrendatario ni enfiteuta del terreno que posteriormente se le vendió. Resulta del expediente que siguió D. Francisco Remigio Castellanos, y que en testimonio ha agregado el Sr. Jefe del Archivo General, que aquel Sr. hizo la denuncia, ante el Juez de 1.ª Instancia Dr. Gamboa, de ser público y baldío el terreno que pidió con arreglo a la ley de la materia; que se produjo la información correspondiente; que dicha denuncia fué admitida por el Juez declarando público y baldío el terreno denunciado, mandándole presentarse ante el Gobierno; y que éste, por decreto de 11 de julio de 1829 se lo concedió en enfiteusis, bajo las condiciones y canon establecidos por la ley de 16 de Febrero de 1828; debiendo practicarse la mensura de dicho terreno por un agrimensor competente.

Por resolución superior de 21 de Junio de 1830, se mandó pasar el expediente al Ministerio de Hacienda, para que celebrase el contrato correspondiente, y el Ministerio lo pasó enseguida al Colector General a los fines expresados en la anterior resolución.

Ahí quedó parado el expediente, hasta que el 20 de Febrero de 1832 hizo D. Francisco Remigio Castellanos la siguiente declaración: «*Transfiero a mi hijo Florentino, los derechos y acciones que me acuerda el decreto de 21 de Junio de 1830*».

Estos derechos y acciones no eran otros que para obtener el contrato de enfiteusis, a que hacía referencia el decreto mencionado en la cesión.

El Colector General manifestó que no podía otorgarse el contrato enfitéutico porque no constaba el área y el valor del terreno, cuyas circunstancias eran sustanciales; y propuso el nombramiento del Recaudador Uzin y del Maestro Mayor Avila, para que efectuasen la medición y avalúo; con lo que se manifestó conforme el Gobierno por medio del decreto de Mayo de 1831.

Efectuadas esas operaciones, el mismo Colector General manifestó al Sr. Ministro de Hacienda los valores que como canon fijaba la ley para los terrenos de pastoreo que se daban en enfiteusis, y que ninguna ley fijaba la regla que debiera observarse respecto a los terrenos de *pan llevar*, a cuya clase correspondía el concedido a Florentino Castellanos: que el Colector se encontraba por ello embarazado para estipular con el interesado el canon que debía pagar; y a fin de proceder luego a la escrituración ordenada, solicitaba la resolución conveniente, agregando que, mientras no se dictase la ley que hubiera de regir en tales casos, creía el medio más adoptable el de regular el canon por un tanto por ciento del valor de los terrenos, indicando el dos por ciento como un interés muy regular.

A los cinco días de elevada esta consulta, y sin que mediara, ni hubiera mediado antes, solicitud de compra del Dr. Castellanos, en 9 de Mayo de 1832, el Gobierno, dictó el siguiente decreto:

«*Se concede en propiedad* al Dr. D. Florentino Castellanos el terreno que se indica por la cantidad de cuatrocientos veinte y cinco pesos; y pase al Colector General para la entrega y otorgamiento de la escritura correspondiente. Hay una rúbrica. (Firmado. — Rosas)»

Es de advertir, Excmo. Señor, porque merece se tenga en cuenta, que la tasación practicada por el Maestro Mayor Avila, elevó el valor del terreno a la suma de ochocientos veinte y cinco (825) pesos; que sobre dicha tasación no recayó resolución alguna y que, sin embargo, el decreto que concede en propiedad el terreno tasado, al Dr. Castellanos, le manda pagar solamente la mitad no exacta sino aproximada, del valor de tasación, sin dar razón alguna para ello.

Esa suma de cuatrocientos veinte y cinco pesos, fué la que pagó el Dr. Castellanos; otorgándosele luego la escritura de propiedad.

Como ha podido notar lo V. E. el contrato enfitéutico no llegó a otorgarse; siendo ésta falta de tal naturaleza que, dicho con-

trato sin la escritura pública, no vale: «e tal pleyto como este, dice la ley 28, tit. 8.º, part. 5.ª, debe ser fecho con placer de ambas las partes e por escrito ca de otra guisa non valdría». Comentando esta ley, Gregorio López; dice: «Que la escritura es indispensable; a más de esta Ley lo prueba la Ley 3, tit. 14, part. 1.ª, con aquellas palabras «E debese facer por carta de Escribano Público. Adviértese, agrega el glosador, que la escritura se requiere, tanto para la sustancia, como para la prueba del acto».

Puédese agregar también que la Ley 69, tit. 18, part 3.ª, hace suponer que la enfiteusis ha de constar de escritura pública, en el hecho de poner el modelo de una escritura de ese contrato hecha ante Escribano Público; y que el decreto de 24 de Diciembre de 1823, ordenó se llevase un *Registro Público* especial de contratos enfiteúuticos otorgados en la Provincia de Buenos Aires.

Si, pues, el Dr. Castellanos, no llegó a ser enfiteuta del terreno que después se le vendió, tampoco puede decirse que se efectuó en su favor la tradición *brevimanu* del expresado terreno con arreglo a la Ley 47, tit. 28, part. 3.ª.

2.º — La Ley 6, tit. 30, de la part. 3.ª, admite otra forma de tradición, que en el Derecho Romano se llamaba *longa manu*. «Si un ome vendese a otro alguna cosa o gela diesse o gela enagenasse en alguna otra manera; e estando la cosa delante, dixesse el que la enagenava al otro, *que lo apoderaba en ella viendoli ambos a dos maguer esta atal no la entre, nin la tenga corporalmente, abondale tal apoderamento de vista, para ganar la tenencia della*».

Sin duda alguna que no fué la tradición *longa manu* la que pudo tener lugar en el caso del Dr. Castellanos, pues no fué posible que el Gobierno vendedor y el comprador tuvieran a la vista la cosa vendida en el acto de la venta, para que pudiera verificarse esa forma de tradición.

3.º — La Ley 7 siguiente del mismo tit. 3.º de la part. 3.ª admite, otra forma de tradición, llamada *simbólica*, la que se verifica por la entrega de las llaves, con la que se entienden entregadas las mercaderías que se hallan en la casa.

Y la Ley 8 siguiente trae otra forma de esta misma especie de tradición: «Dando algún ome a otro, heredamiento, o tra cosa cualquier, apoderándole de las cartas porque la el ovo, o fagiendo

otra de nuevo e dandogela, gana la possession, maguer non le apodere de la cosa dada, corporalmente».

Que el Gobierno no entregó al Dr. Castellanos los títulos por los cuales adquirió de los Cuelli, en 23 de Julio de 1792, el terreno vendido, lo demuestra el informe de fs. 18 de la Contaduría General, en el que se transcribe el título de compra por el cual el mismo Gobierno adquirió el terreno de que es parte el que vendió el Dr. Castellanos. Los herederos de éste no están pues comprendidos en la primera parte de la ley 8 citada, que hace consistir la tradición simbólica en la entrega de título por el cual el vendedor adquirió la cosa que enajenó.

Veamos si esa forma de tradición pudo verificarse por la entrega de la nueva escritura de venta que le otorgó el Colector de la Aduana, a que se refiere la segunda parte de la misma Ley.

A fojas 8 se encuentra el testimonio presentado por el mismo reclamante Ferrer, de la escritura otorgada en 15 de Mayo de 1832 por el Colector General D. Manuel José de Lavallea a favor de D. Florentino Castellanos, del terreno que reclama; trayendo dicho testimonio las siguientes notas que lo terminan:

«Es copia fiel de su matriz que obra al folio 4 del Registro de Aduana de 1832, llevado por el Escribano D. Manuel Sarmiento, que existe archivado en esta oficina. Y en virtud de lo ordenado por S. S. el Sr. Juez de 1a. Instancia, en lo Civil Dr. D. Angel Pizarro, en su mandamiento de fecha 6 del corriente, expido el presente testimonio que sello y firmo en Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve». *Dámaso Salvatierra*. — Archivero General.

«*Nota*. — Al margen de su matriz se encuentra la anotación siguiente: Buenos Aires, Julio 16 de 1874. Con esta fecha en virtud de mandato superior, se dió testimonio de esta escritura en tres sellos de a diez pesos. Conste», — Firmado: (*Salvatierra*).

Al otorgarse la escritura de venta en 1832, no se dió al Dr. Castellano testimonio de ella: luego no tuvo lugar la entrega del nuevo título en que la Ley 8 tit. 30 part. 3a. hace consistir la tradición simbólica.

Es verdad que el reclamante asegura que la entrega del título tuvo lugar; que lo perdieron el Dr. Castellanos o sus herederos.

ros; pero agrega «que recién han podido encontrarlo después de multiplicadas diligencias». Y sin embargo, Excmo. Sr., el título que se acompaña, el que recién han podido encontrar, es un testimonio expedido en 8 de Agosto de 1889 por mandato del Sr. Juez Dr. Pizarro, de fecha 6 del mismo mes.

No es exacto pues que se diera testimonio de la escritura de 1832, ni de su fecha, ni muchísimos años después; porque el mismo, que según la nota final del Archivero General se halla anotado al margen de la matriz como dado en 16 de Junio de 1874, parece no haberse expedido: «En cuanto al testimonio, que se hace constar al margen de la escritura relacionada, haberse expedido, (dice el mismo Archivero General en un último informe de 18 de Octubre último) como se vé, no ha sido firmada la anotación por el Escribano, y no hay constancia autorizada de haberse dado ninguna otra copia que la expedida por esta oficina».

Aun cuando fuera exacto que en 1874 se hubiera expedido el testimonio anotado al margen de la escritura matriz, se tendría que él habría sido dado después de más de 20 años de prescripta la acción para pedirlo.

Pero no admito que tal testimonio se expidiera, mientras no sea exhibido ante V. E.

No ha tenido lugar la tradición simbólica del terreno vendido al doctor Castellanos, de ninguno de los modos que establece la Ley de Partida.

4º.— Una última forma o manera de tradición admite la Ley 9 tit. 30 de la par. 3a. llamada *constitutum posessorium*.

La Ley supone el caso de que uno enajene en favor de otro una heredad, a condición de retener el usufructo; o después de haberla enajenado, y antes de entregarla al adquirente, la arrienda al comprador «e en cualquier destos casos *dezimos que gana la possession de la cosa aquel a quien es enagenada*, e aun ha el señorio en ella, ben assi como si *fuesce apoderado corporalmente della*. «Eso mismo sería, concluye dicha Ley si aquel que enagenaba, la «cosa, dixesse: otorgo que de aquí adelante tengo la *possession della* «en nuestro nombre».

Tampoco ha mediado entre el Gobierno y el Dr. Castellanos el *constitutum posessorium* de esta Ley.

Por consiguiente: ni real o materialmente, ni bajo ninguna de las otras formas que nuestra Legislación admitía, se dió al Dr. Florentino Castellanos tradición del terreno que le fué vendido. No habiéndosele hecho esa tradición, no pudo adquirir el dominio de terreno que había comprado; ni por consiguiente pueden deducir sus herederos, ninguna de las acciones que solo podían nacer de un dominio de que carecen. Solo tendrían la acción personal para pedir la entrega de la cosa: pero, como queda dicho, esa acción personal hace ya mucho tiempo quedó extinguida por la prescripción.

El contrato de compra-venta no confiere por sí solo la propiedad de la cosa vendida según la Ley 28, tit. 5.º parte 5.ª sólo da acción personal al comprador para pedir la entrega de la cosa vendida.

III

Aun admitiendo por vía de hipótesis que, cuando se celebró el contrato de venta en favor del Dr. Castellanos, se hubiera dado a éste la posesión del terreno vendido; aun admitiendo que dicho Dr. Castellanos, hubiera quedado por tales hechos, constituido en verdadero propietario del terreno en cuestión, él habría perdido todo derecho de dominio sobre ese bien raíz por el abandono que hizo de su posesión (suponiendo siempre que lo adquirió alguna vez, lo que no aceptó) por un espacio de tiempo mayor que el de treinta años.

Su apoderado manifiesta, por vía de explicación, que «el Dr. «Castellanos tuvo que emigrar de este país durante la época nefasta de la tiranía de Rosas, y fué a establecerse a Montevideo «donde murió, y donde desde entonces se hallan arraigados sus herederos».

Si emigró durante la tiranía de Rosas, aunque no se indica la fecha, debo suponer de que fué por el año de 1840; y desde éste hasta la fecha de su demanda, 1889, van corridos próximamente cincuenta años durante los cuales, ni el Dr. Castellanos, ni sus herederos, han estado en posesión del terreno que hoy reclaman.

Cualquiera que sea la fecha en que se fije la emigración del Dr. Castellanos, como ella tuvo lugar durante la tiranía de Rosas, siempre sería anterior al año de 1852, en que dicha tiranía conclu-

yó. Siempre tendríamos pues, que desde 1852 hasta 1889 en que se ha deducido la reclamación que forma el objeto de este expediente, han corrido más de treinta años, mucho mayor tiempo que el que la Ley exige para que los herederos de Castellanos pierdan todo derecho al terreno adquirido por su señor padre.

«Perezozo siendo algún *ome treynta años* continuadamente, que «non demandasse en juycio sus deudas, a aquellos que gelas deviessen, «podiéndolo fazer, si dende adelante gelas quisiessen demandar, por- «derse y amparar contra él por este tiempo, e non serían temidos «de gelas pagar si non quisiessen».

Esta Ley quedó reformada por la 63 de Toro, que es la Ley 6 tit. 15 libro 4 de la Recopilación Castellana, según la cual, la acción personal se prescribe por veinte años, y la mixta de personal y real se prescribe por treinta años.

La disposición de estas Leyes ha sido resumida por nuestro Legislador en el Art. 4017 del Código Civil en estos términos: *Por solo el silencio o inacción del acreedor*, por el tiempo designado por la Ley, *queda el deudor libre de toda obligación*. Para esta prescripción no es preciso justo título ni buena fe».

Estas disposiciones se aplican a la prescripción *extractiva* de derecho o a la acción deducida por los Castellanos; abandonan por más de treinta años el ejercicio del derecho para pedir la posesión del terreno comprado por su causante; pues lo han perdido completamente y no pueden intentarlo ya.

Puede también oponérseles la prescripción adquisitiva, o sea, la usucapion.

«Treinta años continuadamente, dispone la ley 21 tit. 29 part. 3.º, «o dende arriba, seyendo algún *ome tenedor* de alguna cosa, *por cual* «manera quien que aviese la tenencia, que non le moviessen «pleyto sobre ella en todo este tiempo, *ganarla y a maguer; fuesse* «la cosa fundada, o forcada, o robada; e maguer que el Señor della «gela quisiese demandar, dende adelante non sería temido de res- «ponderle sobre ella amparandose por este tiempo.»

La misma disposición contienen los arts. 4015 y 4016 del Código Civil.

«Preseríbese también, dice el primero, la propiedad de cosas inmuebles y los demás derechos reales, por la posesión continuada de treinta años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad

de título y de buena fe de parte del poseedor, y sin distinción entre presentes y ausentes».

«Al que ha poseído durante treinta años, dispone el art. 4016, sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta ni la nulidad del título, ni la mala fe en la posesión».

Que la Provincia de Buenos Aires, primero, y la Nación actualmente, han estado, y está ésta, desde hace más de treinta años, en posesión continua del terreno reclamado, es un hecho constante, confesado por el representante de los herederos Castellanos. Es en virtud de esa posesión, tenida, *animo domini*, que la Nación ha dispuesto establecer en dicho terreno el Departamento de Agricultura que allí existe. Si no tuviera otros títulos, la Nación sería dueña de ese terreno por esa posesión de más de treinta años: no estando obligado a responder a nadie que lo reclame *aunque fuera su verdadero dueño*, con arreglo a lo dispuesto en la ley 21, tít. 29, part.3a., antes citada.

IV

Ocupándose de la prescripción, el representante de los herederos Castellanos, dice en el último escrito que ha presentado a V. E. que la tradición de la cosa no era necesaria para adquirir la propiedad; bastando el contrato de compra-venta que quedaba perfeccionado mediante el simple consentimiento de las partes en el precio y en las cosas.

Sufre en esto un error evidente; puesto que, si la compra-venta como contrato consensual que era, y que es, quedaba perfecto con sólo el consentimiento, de él nacían solamente acciones *personales* para el comprador y vendedor: y la propiedad de la cosa vendida solo se transmitía al primero mediante una de las formas de tradición establecidas por las leyes que con sus propios términos dejo demostrado.

Constando que el Gobierno vendió el terreno que se le reclama, pregunta el apoderado de los Castellanos —¿Quién lo poseyó legalmente?— y contestó:

«Si fué el vendedor, es evidente que nunca lo poseyó *animo domini*, o sea con la intención de hacerlo suyo, pues que el poseedor precario no puede prescribir a su favor. Tanto valdría como acordar

la usurpación al inquilino que, por más de treinta o cuarenta años, hubiese estado ocupando la cosa arrendada».

Es este otro error del reclamante, que rectifica enseguida cuando agrega que «el Dr. Castellanos *nunca tuvo necesidad de entrar en su goce*, desde que el contrato de compra-venta había quedado perfeccionado mediante el pago del precio y la escrituración consiguiente».

No, Excmo. Señor: el contrato de compra-venta jamás transmitió por sí solo al comprador *la propiedad* de la cosa vendida; sólo le dió una acción personal para pedir su entrega, y si ésta acción se extinguió por la prescripción, por el abandono que de ella hizo el que la tenía, jamás adquirió tampoco la propiedad del bien que había comprado.

¿Quién poseyó el terreno, cuando se confiesa en el párrafo que acabo de transcribir, que el Dr. Castellanos jamás entró en su goce? Continuó poseyéndolo el mismo Gobierno que lo poseía desde 1792, en que lo adquirió de los Cuelli, y entró a poseer con el establecimiento de la «Pólvora» que en él existía.

Esta respuesta procede de los hechos que han ocurrido y de las disposiciones del Derecho que quedan expuestas.

Que el Gobierno poseía el terreno vendido es indudable; que al venderlo a Castellanos no le hizo tradición de esa posesión por ninguno de los modos que permitía nuestro antiguo Derecho, es también indudable, según queda ampliamente demostrado en este informe; ¿Quién ha poseído, pues, ese terreno? El Gobierno mismo que lo poseía desde tantos años atrás; y que no habiendo entregado esa posesión, la conservó y retuvo en su poder.

Esa posesión se mantuvo con el mismo carácter que tenía, esto es, *animo domini*; porque sólo habiendo entregado a Castellanos el título de venta, que no le entregó, se habría modificado el carácter de esa posesión. Solo así le habría transmitido el dominio.

Pero no entregando el título ni la posesión el Gobierno continuó siendo dueño, y su posesión continuó también *animo domini*, si bien con la obligación personal de hacer la entrega, siempre que le fuera requerida en tiempo. No se reclamó en oportunidad: se perdió el derecho para hacerlo; la propiedad ha continuado siendo fiscal.

Se alega también que así en lo antiguo como en lo moderno, nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su posesión; pero para hacer este argumento es preciso empezar por probar, lo que no se ha intentado siquiera, que el Dr. Castellanos fué alguna vez poseedor del terreno en cuestión y que el Gobierno mantenía esa posesión en su nombre.

Tampoco es exacto en lo antiguo como en lo moderno, que no puede cambiarse el título con que se posee.

La interversión del título consiste precisamente, en *el cambio que se opera en el título en virtud del cual una persona posee un bien cualquiera*.

«Hay dos medios de interversión, dice Vazeille: el 1.º es el indicado por la Ley *Cum nemo ... ac quel rest poss* que admite el cambio de posesión por efecto de una causa extraña, *aliqua, extrinsecus accidente causa*; mientras que el *medio*, de la contradicción ha sido introducido como excepción de la máxima *Nemo, potes sibi mutare causam possessionis*. Negar el derecho que se había reconocido en un principio, declarar que se quiere poseer para sí, cuando se ha empezado a poseer para otra, es mudarse, por sí mismo, la causa de su posesión. Pero una vez advertido el propietario, si no lo impide, ¿por qué no sería reconocido el cambio? En el hecho de sufrirlo, se *presume* que abandona la posesión que el autor de la contradicción mantenía para él» (*Traité des Prescription*, tomo 1.º, párraf. 146, pág. 148).

La misma doctrina enseña nuestro Código Civil. Se pierde la posesión, cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta *por actos exteriores*, la intención de privar al poseedor de disponer de las cosas, y cuando sus actos producen ese efecto (Art. 2458 Cód. Civil). La misma doctrina se encuentra consignada en la Ley 13 tit. 30 part. 3a.

Así pues aun cuando el Gobierno hubiera poseído a nombre de Castellanos, habría interverido el título de su posesión, demostrando por actos posteriores, que entendía poseer en su propio nombre.

Volviendo a preguntarse el reclamante si el Fisco, desde el instante en que vendió pudo poseer a nombre propio lo mismo que había vendido, cita las Leyes 47, tit. 28; y 13 título 30 de la

partida 3 como pertinentes al caso, sosteniendo que ellas lo resuelven en el sentido de sus pretensiones.

No ha advertido, sin embargo, al invocar tales Leyes, que la 47, supone el caso de que el comprador sea de antemano arrendatario o mutuario de la cosa que compra, en cuyo caso resuelve que no es necesario la tradición para que adquiera el dominio de lo comprado y que la Ley 13, supone el caso de que el arrendatario abandone maliciosamente la cosa que tiene arrendada, a fin de que otro se apodere de ella; y resuelve entonces que el propietario no pierde por eso la posesión. Pero el apoderado de los Castellanos no se ha fijado en que el causante de estos *jamás fué arrendatario ni enfiteuta*, como antes queda demostrado, porque no se otorgó la escritura de enfiteúsis; y que entonces, no teniendo posesión alguna del terreno, no ha podido verificarse el *constitutum possessorium* de que habla otra Ley de Partida que antes dejó citada.

Contestado lo sustancial de los escritos del apoderado de los Castellanos, réstame sólo hacer presente a V. E. que, no son nuevas las reclamaciones del género de la presente que se han suscitado ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hace algunos años D. Gabino Chanteyro ocurrió ante él, reclamando considerable extensión de terrenos donados a sus antecesores, en la Cañada Honda, pedía la devolución de los que el Gobierno no hubiera enajenado; y se fundaba en un título cuya legitimidad no podía ponerse en duda, desde que él había sido otorgado por el Estado mismo, y existía constancia de él en los archivos de la Provincia.

El defensor de ésta, entre otras excepciones, opuso la de prescripción contra cualquiera acción real o personal que dedujera el reclamante: y desestimadas éstas por el Gobierno de la Provincia, la causa fué llevada ante la Suprema Corte Federal; la que, en 10 de junio del corriente año, la sentenció, decidiendo respecto de la excepción de prescripción alegada:

«Que es una regla universal de Derecho y un precepto expreso de ley que pueden prescribirse todas las cosas que están en el comercio a no haber una disposición especial en contrario».

«Que igualmente, lo pueden adquirir por prescripción todos aquellos contra quienes se puede adquirir por la misma vía».

«Que, el Estado, las Municipalidades y todas las demás personas jurídicas, públicas o privadas, siendo susceptibles de adquirir, de enajenar, de contraer obligaciones, y de ejercer, por el «Ministerio de sus representantes, todos los actos que no le sean «expresamente prohibidos, no pueden quedar exentos de aquellas «reglas, y las legislaciones positivas, en general, así lo consagran «expresamente».

«Que no se comprendería, por otra parte porque el Estado, «como las Municipalidades, que por leyes anteriores como por las «vigentes, podían y pueden perder sus cosas por prescripción, y que «a la vez tienen privilegios singulares y especiales, de que carecen «las personas naturales que estarían sujetas, en lo que respecta a «aquel modo de adquirir, a una legislación distinta».

«Que si el Estado no pudiese, además, prescribir por sí mismo, «no estaría impedido sin embargo, de hacer valer la prescripción «ganada personalmente por su sucesores, ni inhibido por consiguiente de oponerla en el presente caso» .

«Que estas conclusiones son de mayor fuerza aún, aplicadas «a la prescripción liberatoria opuesta a la acción personal deducida por el cobro del valor de los terrenos enajenados por la Provincia demandada; pues ellas no descansan en otro fundamento, «ni exigen otro requisito que el silencio e inacción del acreedor «durante el tiempo marcado por la ley para el efecto».

«Por estos fundamentos que hacen innecesario apreciar las demás exposiciones deducidas en estos autos: se declara no haber «lugar a la demanda interpuesta; y absuelta, en consecuencia, de «ella a la Provincia de Buenos Aires». *Benjamín Victorica, Federico Ibaguren, C. S. de la Torre, Luis V. Varela, Abel Bazán.*

=====

Después de esta sentencia del más alto Tribunal de la Nación en que declara procedente la excepción de prescripción treintenaria opuesta por el Estado contra el pedido de posesión o entrega de tierras abandonadas por larguísimos años, nada tengo que agregar, Excmo. Señor, si nó es indicar a V. E. que en mi opinión la re-

clamación de los herederos Castellanos debe ser desestimada por V. E. como destituida de todo fundamento legal. Diciembre 26 de 1890.

Resolución de conformidad con lo dictaminado. Julio 25 de 1891.

Tomo 8, pág. 432. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

A fin de que las causas criminales y aquellas en que está interesada la hacienda pública, no sufran otras demoras que las legales del procedimiento, corresponde que el P. E. se dirija a los Procuradores Fiscales Federales, ordenándoles que diariamente se impongan de las causas por ellos iniciadas, urgiendo su tramitación.

El Ministerio de Hacienda, sobre demora de los Agentes Fiscales en las causas por defraudación al Fisco

Hacmo. Señor:

Sin perjuicio de que V. E. tenga a bien adoptar como resolución la indicación de S. E. el Sr. Ministro de Hacienda contenida en el decreto precedente, creo igualmente que convendría hacer lo mismo respecto de la indicación hecha por el Sr. Juez Federal de la Provincia de Entre Ríos, en su informe de fojas 5 y 6, esto es, que V. E. se sirviera ordenar también que los Procuradores Fiscales concurren diariamente al despacho de los Jueces Federales, a efecto de imponerse del estado de las causas en que intervienen a fin de pedir lo necesario para acelerar su terminación.

Es del mayor interés público que las causas criminales y aquellas en que se halla interesada la Hacienda Pública, no sufran otras dilaciones que las que señalan las leyes que rigen el procedimiento; y que los funcionarios que han sido creados para ejercitar la acción pública, lo hagan con la mayor celeridad y el mayor empeño posible. Por tal razón, y además de adoptar las medidas que quedan indicadas, podría servirse V. E. dirigir una nota circular a todos los Procuradores Fiscales excitando su celo, a fin de que, presten la debida atención a dichas causas para que no sufran demora. Enero 20 de 1891.

Ministerio de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Febrero 4 de 1891.

Tomo 9, pág. 295. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

Debe el P. E. nombrar delegados a un Congreso Penitenciario Internacional, y dirigirse a la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara en lo Criminal y a la Dirección de la Penitenciaría, para que formulen a la brevedad posible, las proposiciones que crean convenientes para someterlas a las deliberaciones del Congreso.

Congreso Internacional Penitenciario a celebrarse en París en 1895

Excmo. Señor:

Considero de la mayor utilidad para la reforma de los delinquentes la reunión de los Congresos penitenciarios que han tenido lugar en los últimos años, y que tanto contribuyen a la mejora de las Leyes Penales.

Hemos construído una Cárcel Penitenciaria; pero seguramente no se aplica en ella ningún sistema que llevado ordenadamente, pueda ofrecernos resultados satisfactorios.

Es pues indispensable aprovechar toda oportunidad que se nos ofrezca para obtener el progreso de la penalidad, que no tiene por único fin la represión, ni la expiación sino que debe proponerse muy principalmente la mejora de los condenados.

Invitado V. E. a hacerse representar en el 5.º Congreso Penitenciario Internacional que debe reunirse en París en 1895, no puede menos, en mi opinión, de nombrar oportunamente sus delegados, y pidiéndosele por S. E. el Señor E. E. y Ministro Plenipotenciario de la República Francesa, haga conocer lo más pronto posible, las proposiciones que sus administraciones penitenciarias desearan someter a las deliberaciones de dicho Congreso, así como los trabajos que ellas se propongan presentar, creo también que V. E. podría dirigirse a la Suprema Corte de Justicia Nacional, a la Exma. Cámara de lo Criminal de la Capital y a la Dirección de la Penitenciaría con copia de la nota que precede del Señor Ministro Francés, pidiéndoles que, a la brevedad posible, se sirvan hacerle las indicaciones que se solicitan, y que dichos Tribunales y Dirección están en mejor aptitud de presentar. Febrero 21 de 1891.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Febrero 28 de 1891.

- I. — La emisión de acciones, que representan dos especies distintas de moneda —oro sellado y papel curso legal— es contraria al art. 326 del Cód. de Comercio y a los arts. 7 y 8 de la ley de Monedas.
- II. — Deben eliminarse de los estatutos, las cláusulas que limiten la responsabilidad de los cedentes —en caso de cesión de acciones— por cuanto dicha responsabilidad está consagrada en forma amplia por el art. 322 del Cód. de Comercio.
- III. — No contraría prescripción legal alguna, el que la Asamblea General de Accionistas delegue en el Directorio, la facultad de aceptar o no las modificaciones o adiciones que el P. E. pueda hacer a los estatutos que se presentan a su aprobación.

El Banco de Comercio, sobre las facultades de las Asambleas de Accionistas y sobre emisión de acciones

Excmo. Señor:

Algunas observaciones debo hacer a los Estatutos reformados del Banco del Comercio que han sido sometidos a la aprobación de V. E.

Al artículo 8.º que expresa las acciones en que se divide el capital social le ha sido agregado un segundo inciso, por el que se establece que las dos series de acciones a emitirse podrán serlo indistintamente en oro sellado o en moneda legal, según lo proponga el directorio o lo resuelva la asamblea de accionistas, siendo entendido que las acciones emitidas en oro sellado, percibirán el dividendo en igual especie y en proporción a las utilidades adquiridas.

Pienso, Excmo Señor, que este segundo inciso no debe ser aprobado por V. E.: 1.º porque contra la disposición del art. 326 del Código de Comercio, él tiende a dividir el capital social en acciones de diverso valor, cuando dicho artículo prescribe que todas las acciones han de ser de igual valor, y 2.º porque contraviene también a la disposición de los artículos 7.º y 8.º de la Ley de Monedas de 5 de Noviembre de 1881, según los cuales queda prohibida la circulación legal de toda moneda extranjera de oro, desde que se hayan acuñado ocho millones de pesos en moneda de oro nacional; debiendo fijar V. E. la época de hacerse efectiva esta prohibición, después de lo cual, ningún Tribunal, oficina o funcionario público, pue-

de admitir gestión, ni dar curso a acto alguno que represente o exprese cantidades en dinero que no sean de moneda nacional, con excepción de aquellos actos y contratos que hubieran debido ejecutarse fuera del país. Entiendo que V. E. ha declarado últimamente, haber llegado el caso de cumplirse estas disposiciones de la Ley de Monedas, y si pudiera decirse que en la letra de los artículos citados no se halla comprendida una prohibición, de lo que establese el 2.º inciso del art. 8.º de los Estatutos de que me ocupo, creo no podrá negarse que lo está en el espíritu de aquella Ley.

En efecto, nuestra Ley de Monedas creó la unidad monetaria de la República en el peso nacional: el curso forzoso bajo el cual nos encontramos, es sólo un accidente a cuya desaparición tienden todos los esfuerzos de las autoridades nacionales. No puede pues admitirse que, en una sociedad comercial, que según su carta fundamental ha de durar treinta años, las acciones que representan su capital, estén a su vez representadas en dos especies distintas de monedas, una de oro sellado y otra de papel curso legal, y que los dividendos hayan de ser pagados a unos accionistas en una especie de moneda y a los demás en otra.

La supresión del 2.º inciso de dicho artículo 8.º de los Estatutos, que creo V. E. debería ordenar, dejaría el resto de dicho artículo 3.º perfectamente correlacionado con el artículo 7.º, que establece el capital social en pesos nacionales, y conforme con lo dispuesto por dichas Leyes.

El artículo 11 de los mismos Estatutos establece que, en caso de cesión de acciones cuyo importe no haya sido totalmente satisfecho, los cedentes serán responsables hasta la concurrencia de su valor nominal a la Sociedad; lo cual es conforme con el artículo 322 del Código de Comercio que se cita en el mismo artículo, pero aquel artículo de la Ley no autoriza, ni es por tanto admisible, la excepción que el artículo 11 de los Estatutos reformados establece en su parte final, siendo ella la de que, «si la transferencia de las acciones fuese hecha con la aprobación de la administración del Banco, haciéndolo constar en los libros y títulos provisorios, cesará la responsabilidad de los cedentes, recayendo únicamente sobre los poseedores». V. E. tampoco debe aprobar esta parte final del citado artículo 11 que debe concluir donde dice: «Código de Comercio artículo 322». No sólo este artículo de la Ley comercial establece la

responsabilidad de los cedentes al completo pago de las acciones, sino que la misma responsabilidad se hallaba también claramente establecida por los artículos 413, 414 y 415 del anterior Código de Comercio, aun cuando la cesión estuviera anotada en los libros de la Compañía y debiendo hacerse efectiva desde el último titular hasta el suscriptor primitivo de la acción.

La aceptación o aprobación de la cesión por la administración del Banco, no puede bastar a librar a los cedentes de la responsabilidad que la Ley les impone.

El artículo 38 de los Estatutos reformados necesita para ponerlo en perfecta conformidad con las disposiciones del artículo 350 del Código de Comercio, que se le agregue como un tercer inciso el siguiente:

«Ningún accionista, cualquiera sea el número de sus acciones, podrá representar más del décimo de los votos presentes en la asamblea», y así se ha de servir V. E. resolverlo, si lo considera justo.

Finalmente, en el inciso 3.º del artículo 54 de los Estatutos reformados, se cita, por equivocación, sin duda, el art. 334 del Código de Comercio, siendo el que ha debido citarse el 364, por ser el que sirve de apoyo y complemento.

Como por el art. 72, último de los Estatutos reformados, el directorio del Banco ha sido plenamente autorizado para aceptar las modificaciones y adiciones que V. E. hiciera a dichos Estatutos podría V. E. conferirle vista de las observaciones que preceden y si las aceptara el directorio, y si V. E. las hallara fundadas, podría prestar la aprobación que se solicita a dichos Estatutos, con las modificaciones indicadas en el presente informe. — Enero 19 de 1891.

Excmo. Señor:

En el art. 72 último de los Estatutos reformados del Banco de Comercio sancionados por la Asamblea de Accionistas de 14 de

agosto de 1890, según el acta transcrita en la parte pertinente en el escrito de 4 de Diciembre ppdo. se dice textualmente:

Art. 72. — El Directorio queda plenamente autorizado para aceptar las modificaciones y adiciones que el P. E. hiciese a los presentes estatutos.

Igual disposición contenía el art. 70 del Estatuto anterior reformado en 15 de Julio de 1887 que en folleto encabezaba el presente expediente.

Dada esta autorización conferida al Directorio por la Asamblea General de Accionistas, no tuve inconveniente en manifestar en mi informe anterior que, si el Directorio aceptaba las modificaciones que proponía respecto de las reformas últimamente introducidas por los Estatutos, se sirviera V. E. prestarle la aprobación solicitada, si se hallaba conforme con dichas modificaciones.

El Directorio del Banco de Comercio las ha aceptado todas según resulta del acta que se acompaña, de su sesión de 29 de Enero último y visto nuevamente este expediente, no tengo inconveniente que oponer a que V. E. se sirva aprobar los Estatutos reformados con las modificaciones de mi informe anterior.

Corresponde en verdad a la Asamblea General de Accionistas resolver en la reforma de los Estatutos de una Sociedad Anónima y es igualmente de su resorte aceptar o no las modificaciones que V. E. encuentre justo o conveniente introducir.

Pero no encuentro en nuestra Ley Comercial, ni en otra alguna la prohibición de que pueda la Asamblea General de Accionistas delegar en el Directorio la facultad de aceptar o no las modificaciones o adiciones que V. E. pueda hacer a los Estatutos que se presentan a su aprobación, como lo establece el art. 72 de los que le han sido sometidos.

Por el contrario, el art. 346 del Código de Comercio indica que los derechos y obligaciones de los Directores y Síndicos de una Sociedad Anónima, deben ser regidos: 1.º por el Código de Comercio, 2.º por los Estatutos y Resoluciones de la Asamblea General; y 3.º por las reglas del mandato.

Si tenemos pues la resolución de la Asamblea General, consignada en el citado art. 72 de los Estatutos reformados, si la teníamos ya en el art. 70 de los Estatutos vigentes que encabeza este expediente, me parece indudable que entra en las facultades del Directorio

aceptar las modificaciones propuestas en mi anterior informe. En las reglas del mandato (art. 225 y 226 del Código de Comercio) que en último término deben servir de guía al Directorio, tampoco existe nada que sea contrario a la disposición del art. 70 de los antiguos Estatutos y 72 de los que han sido reformados últimamente.

Reitero por tanto a V. E. mi opinión de que los últimos pueden ser aprobados con las modificaciones indicadas en mi informe de 19 de Enero último. Febrero 19 de 1891.

Ministerio de Hacienda. — Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Febrero 23 de 1891.

Tomo 9, pág. 253. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Con arreglo al principio de que las leyes deben ampliarse en su interpretación cuando son favorables y restringirse cuando establecen penas o privan de derechos, debe considerarse que la Ley N.º 2704, que acordó pensión a viudas «e hijos menores» de civiles y militares muertos a raíz de los sucesos de julio de 1890, al no distinguir entre hijos legítimos y naturales, comprende también a estos últimos.
- II. — No corresponde la oposición fundada en la Ley General de Pensiones Militares de 1865, que excluye de sus beneficios a los hijos naturales por cuanto la Ley 2704 en su art. 2.º, expresamente prescinde de lo que establecen leyes análogas.
- III. — No pueden limitarse los efectos de una ley especial que comprende a la vez civiles y militares, aplicando disposiciones de una ley general, dictada exclusivamente para estos últimos.

El hijo natural del agente de policía, M. Marcos, muerto éste en la revolución de Julio, pide pensión

Excmo. Señor:

La Ley N.º 2704, de 2 de Agosto de 1890, acordó «pensión de sueldo íntegro a las viudas e hijos menores de todos los empleados «y militares, cualquiera que sea su jerarquía, que hayan fallecido «o fallezcan al servicio de la Nación a consecuencia de las heridas «recibidas en los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de Julio de 1890».

Como se vé, esta Ley no hace distinción alguna entre los hijos legítimos y los naturales de los fallecidos al servicio de la Nación a consecuencia de los hechos que menciona.

Bastaría, en mi opinión, esta falta de distinción entre unos y otros hijos, para que a todos comprendiera el favor acordado por la Ley. Es una regla de interpretación que la de las leyes favorables debe ser ampliada; y restringida solamente la de aquellas que se llaman odiosas porque establecen una pena, o privan de algún derecho o beneficio.

Esta sola consideración me movería a no estar de acuerdo con las opiniones expuestas en los informes que preceden.

En el del señor Presidente de la Contaduría General, se dice que la pensión que se pide «según los términos de la Ley debe ser solamente a los *hijos legítimos* y no a los naturales». Pero acaba de ver V. E. por los mismos términos de la Ley que dejo copiados, que ellos no autorizan tal conclusión; puesto que en la expresión *hijos menores* caben tanto los legítimos como los naturales.

Se dice también en el mismo informe que «las personas favorecidas por la mencionada Ley no pueden quedar en mejores condiciones que las comprendidas en la Ley General de Pensiones Militares, según la cual sólo tienen derecho a pensión los hijos legítimos».

En efecto, según el inciso 4.º del artículo 20 de la Ley N.º 162, de 9 de Octubre de 1865, sobre Pensiones y Retiros militares, para obtener la pensión se requiere «legitimidad del matrimonio o en caso de filiación». Pero la Ley especial de 2 de Agosto de 1890 es una Ley especial que en nada se refiere a la Ley General de Pensiones Militares.

Esa misma Ley demuestra en su artículo 2.º que prescinde en sus disposiciones de lo que establecen leyes análogas; pues en dicho artículo 2.º, concede jubilación con dos tercios del sueldo de que gozará al empleado policial o militar que hubiera quedado inutilizado para el servicio, cualquiera que fuera el tiempo de éste; no obstante que por la Ley general de jubilaciones no tendría semejante derecho, pues sus artículos 2.º y 3.º sólo la acuerdan a los que tengan más de quince años de servicios y éste con una cuarentava parte del sueldo por cada uno de esos años.

No creo por consiguiente que puedan limitarse los efectos de una ley especial, que comprende a la vez empleados civiles (los de

Policía y Militares), aplicando disposiciones de una ley general, dictada exclusivamente para estos últimos.

Hay además otras consideraciones que influyen en mi ánimo para sostener esta opinión.

En el tiempo que fué dictada la Ley General de Pensiones Militares, imperaban en nuestra Legislación, respecto de los hijos naturales, principios muy diversos de los establecidos en nuestro Código Civil que rige desde 1871.

Según este Código (art. 328) el padre y la madre tienen sobre sus hijos naturales los mismos derechos y autoridad que los padres legítimos sobre sus hijos: el padre y la madre tienen el deber (art. 330) de criar a sus hijos naturales, proveer a su educación, darles la enseñanza primaria, y costearles el aprendizaje de una profesión u oficio; están obligados (art. 331) a dar a sus hijos naturales los alimentos necesarios; y esta obligación incumbe a los herederos de los padres, siendo recíproca entre padres e hijos (art. 369).

El mismo Código ha dado a los hijos naturales (art. 3596) una porción legítima en los bienes del padre, que es, de la mitad de dichos bienes, si el testador no deja descendientes legítimos, ni viudo o viuda; disminuyéndola, sin privarlo de una parte de ellos, cuando existen parientes legítimos.

Ab intestato, no habiendo descendientes ni ascendientes legítimos, ni viudo o viuda, los hijos naturales son herederos universales de sus padres (art. 3577); si sólo queda viudo o viuda, los hijos naturales dividen por partes iguales la herencia (art. 3578); si quedan descendientes legítimos la parte del hijo natural será siempre la cuarta parte de la del hijo legítimo (art. 3579); y si quedasen ascendientes legítimos la mitad de la herencia corresponde a los hijos naturales.

Nuestro Codificador ha equiparado, en cuanto al derecho, a los hijos naturales con los legítimos; y así lo expresa claramente en la nota con que ilustra el artículo 3579 antes citado: «Nosotros creemos, dice, que el derecho del hijo natural en la sucesión del padre o madre, es absolutamente, salvo la cantidad, de la misma naturaleza de ese derecho son infinitas; el hijo natural goza del derecho de acrecer; la colación es debida al hijo natural por los herederos legítimos; los hijos naturales tienen los mismos derechos que

todo heredero respecto de terceros adquirentes, a los cuales hubiesen sido transferidos los inmuebles de la sucesión por un heredero legítimo».

La condición del hijo natural ha cambiado pues, según nuestra Legislación, después que fué sancionada la Ley General de Pensiones Militares.

A mi juicio, la de 2 de Agosto de 1890, al acordar a las viudas e hijos menores a que se refiere, el sueldo íntegro de que gozaban sus respectivos esposos o padres, sólo ha querido proveer a la subsistencia de tales viudas y huérfanos, reemplazando al muerto, y sustituyéndose el Estado en la obligación que aquel tenía de proveer a la alimentación de esas personas. Si pues, la obligación que tiene el padre de alimentar a sus hijos, y de darles un oficio o profesión, comprende de la misma manera a los naturales que a los legítimos, no alcanzo la razón de derecho que haga excluir a los unos, cuando la ley no los excluye expresamente.

Y hallando comprobado, por la partida de fs. 1 la filiación natural del menor Ramón Marcos con relación a su padre Manuel Marcos; y la muerte de éste como consecuencia de las heridas recibidas el 26 de Julio último, según el informe de fs. 4 vuelta, del Comisario de Ordenes de la Policía, creo, que V. E. se halla en el caso de acordarle la pensión con que lo favorece la Ley de 2 de Agosto dictaminado. Marzo 23 de 1891.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Marzo 23 de 1891.

Tomo 9, pág. 139. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Carece de facultades el P. E. para rever resoluciones judiciales.

El Director de la Penitenciaría, no creyendo suficiente la penitencia disciplinaria, consulta la regla de conducta que debe observar cuando dos presos correccionales se traben en lucha

Excmo. Señor:

V. E. nada puede resolver en la consulta que le dirige el Sr. Director de la Penitenciaría. Los detenidos en ese establecimiento

por hallarse procesados o condenados, se encuentran sujetos, como los que están libres, a los jueces ordinarios, por los delitos o crímenes que cometan.

Tratándose de lesiones producidas en riña, siempre que la pena no exceda de la de arresto de un mes a un año, su juzgamiento corresponde al Juez Correccional, con apelación para ante la Exema. Cámara de lo Criminal de la Capital (arts. 66 y 67 de la ley orgánica de los Tribunales del 12 de Noviembre de 1886).

Si el Sr. Juez Correccional ha dado por compurgado el delito a la que la precedente nota se refiere con la penitencia impuesta al heridor, debe suponerse que ha sido porque la herida habrá sido leve, en cuyo caso el artículo 120 del Código Penal le impone la pena de arresto de un mes a un año.

En todo caso, sin embargo, no entra en las atribuciones de V. E. rever las resoluciones de los magistrados judiciales en los asuntos de su competencia y así pienso que debe limitarse al estricto cumplimiento de lo que dispongan los Jueces o Tribunales, en los casos de delitos o crímenes cometidos por los detenidos o presos en la penitenciaría. —Marzo 20 de 1891.—

Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. Marzo 23 de 1891.

Tomo 9, pág. 340. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I. — No debe el P. E. aceptar un pago a plazos que se ofrece para cubrir un desfalco que tuvo lugar en una Oficina de Correos, cuyo sumario se tramita ante el Juez Federal; debe la recurrente para ello, dirigirse al mismo Juez Federal, por cuanto el P. E. no puede tomar intervención en asuntos sometidos a los jueces, que actúan independientemente de la autoridad del Ejecutivo.

II. — Si se ofreciera el pago total, no en cuotas, podría el P. E. aceptarlo, debiendo, una vez verificado, comunicarlo al juez de la causa.

La esposa de D. R. Carbia, propone abonar a plazos el desfalco que dejó su marido en la Oficina de Franqueo de la Dirección de Correos y Telégrafos

Excmo. Señor:

El Sr. Juez Federal de esta Capital Dr. Ugarriza, conoce actualmente del sumario levantado con motivo del desfalco que apa-

reció en la Oficina del Correo de que era Jefe D. José Rómulo Carbia; habiendo dicho Sr. Juez ordenado el embargo de las propiedades que figuran en la relación de foja 1 a las responsabilidades de dicho juicio.

Si la Sra. esposa de dicho Carbia ofreciera el inmediato pago, en dinero de la suma que se ha encontrado faltar, y de que él se la declarado responsable, pensaría que V. E. debiera aceptar el pago, y comunicarlo al Sr. Juez Federal, después de haberse verificado, para que produjera tal hecho, en la causa, los efectos a que hubiere lugar.

Pero no tratándose del pago inmediato, sino de que V. E. conceda plazos para verificarlo, creo, como la Contaduría General, que V. E. no puede aceptar la proposición que se le hace; y que, hallándose el caso sometido a la justicia ordinaria, la recurrente debe ir ante el Sr. Juez Federal con las proposiciones que crea convenientes. V. E. no puede tomar intervención en asuntos sometidos a los jueces, ni estorbar, ni paralizar su acción, del todo independiente de la autoridad de V. E. — Marzo 23 de 1891.

Ministerio del Interior — Resolución de conformidad con lo dictaminado. Marzo 24 de 1891.

Tomo 9, pág. 336. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — El auto de «habeas corpus», es la resolución del magistrado por la que se ordena sean traídos a su conocimiento los antecedentes del individuo arrestado, que interpuso el recurso de «habeas corpus» para ordenar en seguida su sometimiento a juicio o su libertad, según corresponda.
- II. — Si durante el estado de sitio, el Jefe de Policía arresta o detiene a personas cumpliendo órdenes del Presidente de la República, en ejercicio este último de la facultad que le acuerda el art. 23 de la Constitución, no procede el auto de «habeas corpus» como consecuencia del respectivo recurso— y debe el Jefe de Policía, si tiene lugar dicho auto, informar al magistrado requirente que ha procedido en virtud de órdenes del jefe de la Nación, expedidas en uso de atribuciones constitucionales y acerca de cuyo ejercicio, jueces y tribunales no están llamados a decidir.

III. — Si durante la vigencia del estado de sitio, la detención o arresto la realiza el Jefe de Policía, no ya por orden del Presidente, sino en uso de facultades propias, reprimiendo hechos que merecen pena, el auto de «habeas corpus» como consecuencia del recurso interpuesto, es procedente, y debe en tal caso el Jefe de Policía, ordenar se proceda de conformidad con los arts. 617 y siguientes del Código de Procedimientos en lo Criminal.

El Jefe de Policía de la Capital, sobre el recurso de «Habeas Corpus», interpuesto por varios detenidos en el Departamento de su dirección, durante el estado de sitio

Excmo. Señor:

La consulta que dirige a V. E. el Señor Jefe de Policía, no tiene por principal objeto dar solución al auto de *habeas corpus* corriente a foja 1, pues como lo dice en la nota que precede, en dicho caso «no se trata de medida ejecutada por causa de interés político; los individuos recurrentes se han hecho pasibles de las penas que impone la Policía en uso de sus facultades, a quienes infringen sus disposiciones vigentes: y es por esta causa que se encuentran detenidos en ese Departamento.

El caso que ha motivado el recurso de foja 1 se encuentra pues, a mi juicio, claramente comprendido en las disposiciones de los artículos 617 y siguientes del Código de Procedimientos en lo Criminal.

El Señor Juez Doctor Pérez, ante quien ha sido llevado dicho recurso, pide al Señor Jefe de Policía el informe que autoriza el art. 629 de dicho Código; y el Señor Jefe debe expedirlo sin demora, a fin de que el juzgado requerido, pueda adoptar la resolución a que lo autoriza el art. 634 del citado Código.

El auto de *habeas corpus* es la resolución del magistrado por la que se ordena sean traídos a su conocimiento los antecedentes del individuo arrestado, para ordenar enseguida su sometimiento a juicio o su libertad, según los casos. Todos los habitantes de la Nación según el art. 14 de nuestra Constitución, gozan del derecho de entrar, permanecer, transitar, y salir del territorio argentino, y de este derecho nadie puede ser privado, sino en virtud de hallarse

procesado o condenado, y en el caso a que se refieren los art. 23, 53, 67 inciso 26 y 86 inciso 19 de la misma Ley Fundamental.

Según estas disposiciones, en caso de conmoción interior, o de ataque exterior, que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la Provincia o Territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. *Su poder se limitará en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.*

En caso de ataque exterior puede declarar el estado de sitio el Presidente de la Nación, con autorización del Senado; en caso de conmoción interior dicha facultad corresponde al Congreso; y sólo en el receso de éste, corresponde la misma facultad al Presidente de la República, quien la ejerce con las limitaciones prescriptas en el Art. 23.

La consulta del Sr. Jefe de Policía se refiere propiamente, a si, durante el estado de sitio y en los casos de arresto o detención de personas que ella ejecute obedeciendo las órdenes del Sr. Presidente de la República, procede, o no, el recurso de *habeas corpus*, esto es; si los Jueces ordinarios tienen el derecho de investigar las causas que han motivado la detención de un individuo, ordenada en virtud de las facultades que la Constitución acuerda al Sr. Presidente de la República durante el estado de sitio, a fin de que dicho Juez pueda decretar el sometimiento a juicio o la libertad del detenido.

Basta, a mi juicio, enunciar la cuestión, para que su resolución se imponga desde luego.

El Código de Procedimientos en lo Criminal ha creado un *recurso de amparo de la libertad* contra toda orden de un funcionario público *tendiente a restringir sin derecho*, la libertad de una persona. Así se expresa el artículo 617 de dicho Código; de suerte que, se ve claramente que, no tratándose de una detención o arresto ordenado *sin derecho*, el auto de *habeas corpus* no procede.

Ahora bien: cuando el Sr. Jefe de Policía, procediendo por orden del Sr. Presidente de la República, detiene o arresta a una

persona durante el estado de sitio, no ejecuta una detención o arresto ilegal o sin derecho, el auto de *habeas corpus* no procede.

Del ejercicio que el Sr. Presidente haga de esa facultad constitucional, no debe cuenta a los Jueces y Tribunales ordinarios; y así; estos no podrían, en caso alguno, pretender llamar a juicio los antecedentes que hubiesen motivado un arresto durante el estado de sitio, para decretar la libertad o el sometimiento a juicio del detenido.

Así dice Pashall, en sus anotaciones a la Constitución de los Estados Unidos, que el Presidente no está «obligado a contestar a un auto de *habeas corpus*». No es responsable al Judicial como Presidente. Los Tribunales no pueden revisar sus actos políticos» (Tomo 1.º página 263 de la traducción del Sr. Calvo).

Bump, en sus Decisiones Constitucionales de los Estados Unidos, trae la siguiente resolución: «La suspensión del privilegio del auto de *habeas corpus* siendo la autorización virtual de arrestar sin causa legal ordinaria u orden de Juez competente, se deduce, que tales arrestos durante la suspensión, y cuando está hecha en obediencia a la orden o autoridad del empleado a quien se ha investido con ese poder, son prácticamente legales, y las personas que lo hacen no son responsables a la acción de daños y perjuicios por el hecho» (Mac Call v. Mac Dowell, 1 Deady 233; S. C. Abb. C. C. 212).

Como lo ve V. E. las facultades de que usa la autoridad de los Estados Unidos para detener o arrestar a las personas durante el estado de sitio, se conocen bajo el nombre de suspensión del privilegio del auto de *habeas corpus*, y es evidente entonces que hallándose suspendido dicho privilegio, no es posible que el detenido, ni otro por él, pueda usarlo útilmente.

En consecuencia, soy de opinión, que V. E. podrá resolver la consulta del Sr. Jefe de Policía, disponiendo: que, en casos como el del recurso de foja 1 en que la detención ha sido ordenada en virtud de hechos de pena que pueda imponer la Policía, en uso de sus facultades a los que infligen sus disposiciones, y en otros análogos, a los cuales se aplica el privilegio del auto de *habeas corpus*, debe el Sr. Jefe proceder, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones antes citadas del Código de Procedimientos en lo Criminal; y que, en los casos en que la detención o arresto hayan sido ejecutados por la Policía en cumplimiento de órdenes recibidas de S. E.

el Sr. Presidente de la República, en ejercicio de la facultad constitucional que le compete durante el estado de sitio, y en lo que por consiguiente no procede el auto de *habeas corpus*, si se interpusiera este recurso contra dicha detención o arresto, el Sr. Jefe debe limitarse a informar al Sr. Juez requiriente, que ha procedido en virtud de órdenes del Jefe de la Nación expedidas en uso de atribuciones propias, ejercidas constitucionalmente y acerea de cuyo uso los Jueces y Tribunales no están llamados a decidir. Abril 2 de 1891.

Ministerio del Interior. Resolución de Abril 30 de 1891 ordenando el archivo.

Tomo 9, pág. 355. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El tiempo de servicios prestados en calidad de Cónsul de la República en el extranjero, no puede computarse a los efectos de la jubilación, por cuanto la Ley de Jubilaciones de 15 de noviembre de 1887, se refiere a empleados directamente retribuidos por el Estado, y los Cónsules perciben remuneración en forma indirecta, cobrando los derechos fijados en el arancel, que son satisfechos por los particulares que requieren su intervención.

El señor Jacinto Villegas, ex Ministro Plenipotenciario de la República en el Perú, pide su jubilación

Excmo. Señor:

El artículo 12 de la Ley de Jubilaciones del 15 de Noviembre de 1887, se halla concebido en los siguientes términos:

«Los empleados permanentes de la Administración General de la Nación *directamente retribuidos por el Estado*, que sean ciudadanos naturales o naturalizados, tendrán derecho a su jubilación de conformidad a las disposiciones de la presente Ley».

Como V. E. lo vé, para tener derecho a la jubilación es indispensable que el empleado que la solicita haya sido *directamente retribuido por el Estado*.

Los Cónsules de la Nación en el extranjero no han recibido, ni reciben por sus servicios directamente de la Nación, sino indirectamente, percibiendo los derechos establecidos por arancel, y que son satisfechos por los particulares que los reclaman.

Creo por consiguiente, que los servicios consulares prestados por el Señor Villegas no pueden ser computados a los efectos de la jubilación que solicita; y que el tiempo en que los prestó debe ser rebajado del cómputo hecho por la Contaduría General en su informe de fojas 7.

Los servicios diplomáticos del Señor Villegas le dan, si, derecho a ser jubilado; pero computados según lo dispone el art. 4.º inciso 2.º de dicha Ley, no alcanzan a los treinta años que exige el inciso 2.º del art. 2.º para que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 3.º sea decretada su jubilación con goce de sueldo íntegro.

Le corresponde entonces, con arreglo a lo dispuesto en el art. 2.º inciso 3.º y el art. 3.º de dicha Ley de Jubilaciones, percibir por vía de jubilación, una cuarentava parte del sueldo de que gozaba por cada año de servicios.

Si V. E. lo juzgase así, podría servirse disponer vuelva este expediente a la Contaduría General, para que haga el cómputo de los años de servicios diplomáticos del Señor Villegas; y liquide la suma que le corresponde por jubilación con arreglo a las disposiciones que dejo citadas. — Abril 13 de 1891.

Resolución:

Buenos Aires, Abril 16 de 1891. — Considerando atendibles las observaciones del precedente dictamen en cuanto a lo que se refiere a los Cónsules en general, pero teniendo presente que los Cónsules Generales están asimilados a los Ministros Diplomáticos y Encargados de Negocios por la exención acordada a dichos funcionarios en el artículo 250 de las Ordenanzas de Aduana y también por la naturaleza más amplia de sus atribuciones no obstante la forma en que son remunerados sus servicios; visto lo informado por el Departamento Nacional de Higiene respecto de la imposibilidad física en que se encuentra el recurrente para continuar ocupándose de trabajos mentales de responsabilidad, y atendiendo al cómputo formulado por la Contaduría General del tiempo a que ha servido el ex Ministro Plenipotenciario en el Perú D. Jacinto Villegas que se eleva, con arreglo al inciso 2.º artículo 4.º de la Ley de Jubilaciones, a treinta años y siete meses.

El Presidente de la República,

DECRETA:

Artículo 1.º Acuérdase al ex Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en el Perú, D. Jacinto Villegas, la jubila-

ción que solicita con el goce del sueldo íntegro de su clase, que se pagará de Rentas Generales, imputándose a la Ley N.º 2219 del 15 de Noviembre de 1887, mientras no se incluye en el Presupuesto General.

Art. 2.º Comuníquese, publíquese, y dése al Registro Nacional. —PELLEGRINI. —EDUARDO COSTA.

Tomo 9, pág. 325. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Por el hecho de que la Ley de Aduana (año 1891) no haga distinción entre «frutas secas» y «frutas en conserva», no pueden considerarse a estas expresiones como sinónimas, ya que por el uso y el idioma tienen significación diversa y en consecuencia, el derecho especial con que grava a la «fruta en conserva» el art. 1.º, inciso 1.º de la Ley citada, no puede ser aplicable a la pasa de uva considerada como «fruta seca».

Varios fabricantes de vinos reclaman del derecho impuesto a las pasas de uva

Excmo. Señor:

La cuestión que se debate en este expediente consiste en averiguar si las pasas de uva principalmente las de corinto, que se emplean en la fabricación de vinos se hallan o no, comprendidas en el inciso 1.º artículo 1.º de la Ley de aduana vigente del año, que grava con el derecho del 60 % *las frutas en conserva en cualquier forma*.

La cuestión está resuelta decidiendo si las pasas de uva son o no, frutas en conserva.

La Dirección General de Rentas en su informe de fojas 6 la ha decidido afirmativamente, exponiendo que bajo la misma denominación de frutas en conserva fueron comprendidas las pasas de uva, los higos secos, las manzanas, *peras* o *guindas secas*, ciruelas, *dátiles* descarozados, duraznos, etc., que el año pasado pagaban el 25 %.

Por toda razón o fundamento de la inteligencia que la Dirección de Rentas da en este punto a la Ley de Aduana, agrega «que créese que no podrían considerarse las pasas y las demás frutas secas mencionadas, sino con el derecho que según la designación clara se le ha asignado». Agrega, «que faltaría averiguar si la pasa a que se refieren los peticionantes *es de una clase especial*

para vinos, que en el país no se produce»; lo que parece querer indicar que, si se tratara de tal clase de pasas, podría no ser considerada como fruta en conserva.

El Departamento de Agricultura apoya la opinión de la Dirección de Rentas. No habiendo la Ley de Aduana, dice, hecho distinción entre las frutas *conservadas* y las frutas *secas*, pues las incluye a ambas bajo una misma denominación de frutas *conservadas* en cualquier forma, es indudable como lo manifiesta la Dirección de Rentas, que están comprendidas unas y otras entre los artículos gravados con el derecho de 60 %; y si ello es así, ante la prescripción clara de la Ley, no es posible hacer otra cosa que aplicarla.

Si la Ley se hubiera expresado tan claramente como lo supone el Departamento de Agricultura, pienso que la cuestión suscitada por los fabricantes de vinos, no habría sido propuesta a la resolución de V. E.

Porque la Ley de Aduana no es clara, en mi opinión, en este punto, es que tal cuestión se ha promovido; y a fin de que V. E. pueda resolverla con la justicia y equidad en que siempre inspira sus actos, le presentaré las observaciones que me ha sugerido el estudio del punto en cuestión.

He de prescindir completamente de cuanto se dice en relación a la protección de la industria del país; ya, porque no estoy plenamente convencido de la conveniencia pública de esa protección en las circunstancias porque nuestro país pasa actualmente, pues ella no abarata los artículos que el país produce y cuyo consumo es de absoluta necesidad; ya porque tal cuestión es incidental y casi ajena completamente a la cuestión que V. E. debe resolver.

Se trata aquí simplemente de la interpretación de una prescripción de la Ley de Aduana, y a ella debe concretarse la discusión.

La Dirección de Rentas no da razón alguna que deba tenerse en cuenta para fundar la interpretación que adopta.

Es el Departamento de Agricultura el que dice que la Ley no ha hecho distinción entre las frutas *conservadas* y las frutas *secas*, pues las incluye a ambas bajo una misma denominación de *frutas conservadas en cualquier forma*. Pero ésto no es absolutamente exacto: para que ello fuera cierto, era menester, que la Ley no

se hubiera expresado en esos términos; sino en estos otros: frutas secas o en conserva en cualquier forma: sólo así podrían decirse gravados del mismo modo las unas y las otras.

Pero la Ley no se ha expresado así. Empieza por decir, en su artículo 1.º que toda *mercancía extranjera pagará*, a su importación para el consumo, el derecho de 25 % y exceptúa enseguida, de esta regla general, y grava con el derecho de 60 % las frutas en conserva en cualquier forma.

Están incluidas en la excepción las frutas secas? No seguramente, si frutas secas y frutas en conserva no son expresiones sinónimas. Si las frutas secas son cosa distinta de las frutas en conserva, me atrevería a afirmar que, en vez de hallarse gravadas con el derecho del 60 %, lo están solamente con el 25 %, que es el aplicable, según la Ley, a toda mercadería que no sea de las exceptuadas por ella misma.

Incluso unius, exclusio alterius.

Ahora bien: frutas en conserva y frutas secas son la misma cosa?

Me inclino a pensar que no; y que es fundado cuanto al respecto dice el Sr. Joselín Huergo en su último escrito.

Es indudable que las almendras sin cáscara o con ella, y que las nueces son frutas secas. Pues, bien, la Tarifa de Avalúos, bajo los números 122 y 123 los primeros, y 232 las últimas, las considera de distinta manera que a las frutas en conserva. A dichas almendras y nueces les asignan los números indicados el 25 %, y a las frutas en conserva en cualquier forma como lo dice la Ley, esto es, al jugo o compota, en almibar, conservadas en agua, o al natural, y aguardiente, en latas, frascos de vidrio, o en cualquier otro envase, les aplica el derecho de 60 % en los números 200 a 203 de la misma tarifa de Avalúos.

Tenemos pues, que la misma Tarifa de Avalúos no ha entendido que todas las frutas secas sean frutas en conserva de las expresadas en la Ley de Aduana.

Es regla de interpretación, que no debe hacerse novedad en la inteligencia de las palabras a que siempre se ha dado un sentido determinado.

Minime sunt mutanda, que interpretationem certam semper habuerunt-Ley 23 tit. 3.º, Libro 1.º, Digesto de Legibus.

«Conserva, dice el Diccionario de la Academia Española, fruta

hervida con almíbar o miel hasta que se pone algo más espesa que engrudo, lo que se hace para que aquella se conserve, y de ahí le viene el nombre *Salgama*.

Salgama, según el Gran Diccionario de la lengua Latina de Freund, significa, cosas puestas en salmuera.

El Diccionario Enciclopédico Hispano Americano, que aun está en vía de publicación, dice así:

«*Conserva*, fruta hervida con almíbar o miel hasta que toma un punto muy subido, lo cual se hace para que conserve pimientos, pepinos y otras cosas que se conservan en vinagre».

«*Conservas alimenticias*, carnes, pescados, legumbres, etc., que en virtud de cierta preparación y envasados herméticamente, se conservan comestibles durante mucho tiempo».

Fruta seca, dice Larousse en su Gran Diccionario del siglo XIX, es la fruta naturalmente desprovista de pulpa, como las nueces o desecada para ser consumida en este estado, como las uvas secas, los higos secos, etc.

Creo pues que hay en realidad diferencia entre frutas *en conserva*, y frutas *secas*; y una vez que ella existe, no es posible, en equidad, aplicar a ambas el impuesto con que la ley ha gravado a una de ellas tan solamente.

Si una y otra expresión, frutas *en conserva* y frutas *secas*, tienen por el uso y en el idioma una significación diversa, es regla de buena interpretación no alterar el sentido que el uso les ha dado, y no confundir a las dos en el mismo significado.

Por estas consideraciones pienso, que V. E. podría declarar, que las pasas de uva, o por lo menos las de corinto, están comprendidas en la disposición general del Art. 1.º de la Ley de Aduana, esto es, sujeta su importación al pago del derecho del 25 % del mismo modo que la Tarifa de Avalúos grava en los Nros. 122 y 123 a las almendras, y en el N.º 232 a las nueces, que son también frutas secas como las pasas de uva. Abril 17 de 1891.

Ministerio de Hacienda. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Junio 12 de 1891.

- I. — No se reputan desertores dos tripulantes de un buque de guerra chileno, que luego de sublevarse por móviles políticos fueron reducidos por la fuerza y en calidad de presos, bajados a tierra. Sólo el hecho del abandono voluntario del buque constituye desertión.
- II. — Habiendo sido calificada la sublevación por sentencia judicial, como delito político, y a su vez la desertión de dos tripulantes como acto preparatorio de la sublevación o como delito conexo a ella, no procede la extradición de los desertores, atento a la prohibición del art. 7.º de la Convención con la República de Chile de 9 de Julio de 1869 y del art. 3.º, inciso 2.º de la Ley Nacional de Extradición de 1885.

Caso de extradición de los marineros del buque de guerra chileno «Pilcomayo», sublevados en el puerto de Buenos Aires

Excmo Señor:

Los tripulantes de la cañonera chilena Pilcomayo, a que se refiere el Sr. Ministro de Chile en la nota que precede, hallándose detenidos a su pedido y por orden de V. E. en la Prefectura Marítima interpusieron el recurso de *habeas corpus* que les fué otorgado por sentencia confirmatoria de la Suprema Corte, que mandó fueran puestos inmediatamente en libertad.

Entiendo que esta sentencia cuya fecha es anterior por un día a la nota del Sr. Ministro de Chile, ha tendo el debido cumplimiento y desde luego, no hallándose ya detenidos dichos tripulantes bajo la custodia de autoridades argentinas, no podrá V. E. acceder a la solicitud que se le dirige, para que disponga lo conveniente «a fin de que los detenidos vuelvan a bordo de la Cañonera Pilcomayo».

Para ello sería necesario que V. E. ordenara nuevamente su detención y habiendo cesado ya el estado de sitio, no se comprende en las facultades constitucionales de V. E. la de decretar tal medida.

El Sr. Ministro de Chile invoca, en apoyo de su solicitud: 1.º ser el que pide uno de los servicios que se otorgan los países entre sí aun los no ligados por tratados de extradición, «de conceder auxilio a los comandantes de buques en los puertos adonde arriban para la aprehensión de desertores que forman parte de su equipaje»; y 2.º la petición que deduce, en subsidio «de la extradición de dichos marineros, por los delitos comunes, que han cometido conforme al

tratado vigente entre la República Argentina y la de Chile sobre la materia».

Respecto del primero de estos fundamentos, no me parece que todos los tripulantes de la Pilcomayo puedan ser considerados *desertores* del buque en que servían. El Sr. Calvo define al desertor diciendo, que es el «militar o marino que deserta, abandona su puesto y su bandera». La ley considera como desertor al soldado que, sin permiso abandona su cuerpo, su puesto o se pasa al enemigo y al marino *que se ausenta de a bordo sin autorización* y no vuelve antes de la expiración del tercer día (Dictionnaire de Droit International, vo. *deserteur*).

Pero los tripulantes de la Pilcomayo no salieron del buque por acto propio o voluntario. El Señor Ministro de Chile dice al principio de su nota, que después de la sublevación que efectuaron el Comandante del buque *pidió y obtuvo* de la Prefectura Marítima *que, por dos o tres días, se mantuvieran en tierra en clase de detenidos, a diez de los tripulantes en servicio y a dos de los asaltantes que poco antes habían desertado*.

A sólo dos individuos podría considerarse pues, como verdaderos desertores, por el hecho de haber abandonado voluntariamente el buque en que servían; los demás no revisten en mi opinión tal carácter pues sólo por la fuerza y en calidad de presos abandonaron el mismo buque, habiendo recobrado su libertad en esta Capital en virtud de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia Nacional en la sentencia que dejo mencionada.

Respecto de los únicos tripulantes que podían considerarse verdaderos desertores, podría decirse que, debieran ser entregados al Señor Ministro de Chile, que los solicita, en virtud de lo dispuesto en el Art. XXVII del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación celebrado por la nuestra con aquella República en 30 de Agosto de 1885, aprobado por Ley del Congreso en 26 de Setiembre del mismo año y cuyas ratificaciones fueron canjeadas en Santiago de Chile en 29 de Abril de 1856.

Supongo en vigencia dicho Tratado y en el Artículo XXVII que dejo citado, se dispone que: «Los Agentes Consulares tendrán facultad de requerir el auxilio de las autoridades locales para la prisión, detención y custodia de los desertores de los buques, y para este objeto se dirigirán a las *autoridades competentes*, y pedirán los dichos desertores por escrito y con documentos comprobando

tes de que es tal desertor y *en vista de esta prueba* no se rehusará la entrega. Semejantes desertores luego que sean arrestados, se pondrán a disposición de dichos Agentes Consulares, y pueden ser depositados en las prisiones públicas a solicitud y expensas de los que los reclaman para ser enviados a los buques, a que correspondan, o a otros de la misma nación; pero si no fuesen enviados dentro de dos meses contados desde el día de su arresto, serán puestos en libertad y no volverán a ser presos ni molestados por la misma causa».

Pero sin tener en consideración que no se ha acompañado por el Señor Ministro de Chile la prueba de la deserción, en vista de la que debe hacerse la entrega de los desertores que se reclamen; y que la petición no debe dirigirse a V. E. en el caso previsto por el Tratado, sino a las autoridades competentes (que no pueden ser otras en mi opinión, que las judiciales, por ser las únicas que pueden decretar ordinariamente la prisión o detención de las personas), prescindiendo digo, de todo esto, encuentro una razón más general y concluyente que obstaría en mi concepto a la detención de los dos únicos tripulantes de la «Pilcomayo» que podrían considerarse verdaderamente desertores, si el hecho se hallara debidamente justificado.

Esa razón se encuentra expresada en la ya recordada sentencia de la Suprema Corte Nacional. La deserción de los dos tripulantes o debe considerarse como *acto preparatorio* de la sublevación efectuada posteriormente en el buque chileno, o es un delito conexo con el de dicha sublevación.

Ahora bien: la sublevación mencionada ha sido considerada por la Suprema Corte como un *delito político*: «Los antecedentes todos de esta causa, ha dicho en el primero de los considerandos de su sentencia, conducen necesariamente a establecer que los hechos imputados a los reclamantes... han sido cometidos con un fin esencialmente político y con el pensamiento sólo de prestar ayuda y cooperación al partido político levantado en armas y actualmente en guerra contra el Gobierno de su país; y respecto de los delitos conexos con el de sublevación, dice la misma Suprema Corte, en el cuarto de los considerandos de su sentencia: «Que tratándose de *delitos conexos* con delitos políticos, las disposiciones de la Legislación positiva del país (véase art. 3.º del inciso 2.º de la Ley Nacional de 25 de Agosto de 1885) y los principios universales, consagran como

una regla invariable, la inviolabilidad de las personas comprometidas en ellos, una vez salidas de los límites jurisdiccionales del país contra el cual se han llevado a cabo y colocan a sus autores bajo la garantía moral del Estado sobre el territorio del cual se encuentran.

Y aun cuando el mismo Supremo Tribunal agrega, en el considerando siguiente, que contra esta regla de justicia de humanidad y buena política que hace parte del derecho público nacional y que consagran las prácticas y tratados internacionales del mundo civilizado, sólo podría invocarse un precepto expreso de la legislación propia a un tratado competente concluido, debe tenerse en cuenta, que no podría invocarse la disposición del art. XXVII que dejó copiada del *Tratado de Paz, Comercio y Navegación* de 1885, por que en la *Convención de extradición* con la misma República de Chile celebrada en 9 de Julio de 1861, de fecha posterior, se convino que sólo podría dar lugar a la extradición la insurrección del equipaje o tripulación de una nave, cuando los individuos que componen dicha tripulación o equipaje *se hubieran apoderado de la embarcación o la hubieran entregado a piratas* (art. II, inciso XVI) y que «en ningún caso el fugitivo que hubiera sido entregado a alguno de los dos gobiernos *podrá ser castigado por delitos políticos* anteriores a la fecha de la extradición, o conexos con ellos, ni por otro crimen o delito que no sea de los enumerados en la presente Convención (art. VII).

Aguegue esto V. E. que el art. 3.º, inciso 2.º de la Ley Nacional de Extradición de 25 de Agosto de 1885 citada por la Suprema Corte dice textualmente que: «No se considerará la extradición... 2.º Cuando los delitos cometidos *tuviesen un carácter político o fuesen conexos con delitos políticos*», y pienso que se considerará obligado a resolver que no es posible acceder a la petición del Señor Ministro de Chile, a un respecto de los dos marineros que manifiestan ser verdaderos desertores.

No revistiendo tal carácter de desertores los demás tripulantes que estuvieron detenidos en la Prefectura Marítima de esta capital, la disposición del art. XXVII del tratado de 1856 no les es absolutamente aplicable.

Queda la extradición que subsidiariamente solicita dicho señor Ministro respecto de todos los tripulantes que menciona, fundándola en el tratado que dice hallarse vigente entre esta República y la de Chile.

Respecto de este segundo fundamento, invocado por el señor Ministro de Chile, debo manifestar ante todo a V. E. que la Convención de extradición que se menciona no está en vigencia, según resulta del informe expedido en 6 de Noviembre último por el Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, en nota del 6 del mismo mes, en que solicité de V. E. conocimiento exacto de los Tratados de Extradición celebrados entre nuestro Gobierno y las naciones extranjeras. En dicho informe se expresa que los únicos tratados de extradición actualmente en vigencia, son los celebrados con la República Oriental del Uruguay, con la del Paraguay, con España y Bélgica por lo que, debo suponer que la *Convención* celebrada con la República Chilena quedó concluida por la expiración de su término y por la voluntad de alguna de las Partes Contratantes, según lo dispuesto en el art. XIV de dicha Convención.

Fuera del caso de un tratado vigente, la extradición sólo puede ser pedida y otorgada en las condiciones que determinan los artículos 646 y siguientes de nuestro Código de Procedimientos en lo Criminal. Entre esas condiciones, figuran las de que se acompañen testimonios auténticos del auto judicial que haya decretado se solicite la extradición y de la sentencia de condenación si se tratase de un condenado, o el mandato de prisión expedido por Tribunales competentes si se tratase de un procesado.

Con éstos y los demás requisitos que la ley señala, ha de solicitarse la extradición a falta de tratados, pero sólo puede otorgarse en los casos en que sea procedente según el principio de reciprocidad o la práctica uniforme de las Naciones (Art. 646 in fine).

Pero ni aquellos requisitos han sido cumplidos, ni se ofrece a V. E. la reciprocidad, ni la extradición que se pide parece conforme con la práctica uniforme de las Naciones.

Parto, Excmo. Señor, de la base que el delito porque se pide la extradición es un delito político, según lo ha decidido nuestra Suprema Corte Nacional en la sentencia antes mencionada, declarando en su cuarto considerando, que sus autores según los principios universalmente consagrados en el derecho público internacional, gozan de inviolabilidad una vez salidos de los límites jurisdiccionales del país contra el cual se han levantado, y los colocan bajo la garantía moral del Estado sobre el territorio en el cual se encuentran. Bajo este concepto no creo que V. E. pueda tampoco acordar la extradición solicitada. — Abril 27 de 1891.

Departamento del Interior. Se adopta como resolución lo dictaminado. Abril 29 de 1891.

Tomo 9, pág. 375. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No estando incluido el «palo de tabaco» en la Tarifa de Avalúos y correspondiéndole por la Ley de Aduana de 1891 N.º 2776, un derecho de 55 %, corresponde que éste sea aplicado sobre su valor en depósito, que debe determinarlo la Dirección General de Rentas, oyendo previamente a los Vistas encargados del despacho de tabaco, y a los delegados de los industriales que se ocupan de la venta de dicho artículo.

Aduana de la Capital, consulta respecto a Ley de Aduana, en la parte referente a palos de tabaco

Excelentísimo señor:

Los palos de tabaco que se importan no figuran enumerados en las leyes de Aduana, ni en la Tarifa de Avalúos vigente para el corriente año. De aquí que el Contador Interventor de la Aduana de la Capital, en la nota que encabezan estos expedientes de fecha 4 de Abril ppdo., consulte, por haber resuelto la Dirección General de Rentas se declare valor a dichos palos de tabaco, sin decidir *a lo que se refiere al nacional* «cuál de las clasificaciones determinadas en la Ley N.º 2772 de Adicional, corresponde aplicar a los palos de tabacos».

El Sr. Administrador de Rentas, a quien se dirige la anterior consulta para que la eleve a la Dirección General de Rentas, se limita a pasarla, pidiendo su pronto despacho; la Dirección de Rentas a su vez, la eleva a V. E. para su resolución, sin emitir opinión ni abrir dictamen respecto del punto consultado.

V. E. en este caso y por cuanto los dos expedientes unidos no traen más que lo expresado, pide dictamen al Sr. Procurador del Tesoro y en seguida al que firma.

Me parece que lo más regular sería, que las reparticiones u oficinas públicas, que tienen a su cargo exclusivo una parte del servicio público, en el que llegan a adquirir una competencia especial, fueran las que, en casos como el presente, sirvieran de ase-

sores técnicos, por decirlo así, a V. E. aconsejando la resolución que debiera adoptar.

Los abogados, que sólo hemos estudiado el derecho, somos, sin duda, completamente ignorantes, o poco menos, respecto a lo que ocurre en muchos ramos del servicio público, y en especial en el de Aduana, con la cual, al menos por mi parte, he tenido casi nada que hacer.

Debiendo cumplir el mandato de V. E. que precede, de que manifieste mi opinión respecto de la ante dicha consulta, la expondré a V. E. fundándola en el estudio de las leyes que hacen el caso.

La Ley de Aduana para el corriente año, N.º 2776 grava en su artículo 1.º con el derecho de 25 % sobre su valor en depósito, toda mercadería de procedencia extranjera con excepción de *los cigarros de toda clase* que deban pagar el 60 % y de *los tabacos en general*, que deben pagar el 55 % Prescindiendo de los demás artículos gravados, que no hacen a la cuestión.

Los palos de tabaco no son cigarros de ninguna especie: luego, no pueden en mi opinión dejarse de comprender en la enunciación del inciso 2.º, artículo 1.º de la misma Ley, que grava con el 55 % *a los tabacos en general*.

En esta enunciación se comprende sin duda el palo y la hoja del tabaco; pienso por consiguiente, que a los palos de tabaco les corresponde el derecho del 55 %.

La Ley N.º 2772 complementaria de la de Aduana, antes citada crea en su artículo 3.º un derecho adicional, entre otras mercaderías, para los cigarros habanos, los cigarros en general, el tabaco habano en hoja, el mismo en picadura, el tabaco de otras procedencias en hoja o picadura, el tabaco paraguayo en picadura y los cigarrillos en general.

En toda esta enunciación no figuran los palos de tabaco; luego no han sido gravados por la ley con un derecho adicional, y deben pagar sólo el 55 %, con que los grava la Ley N.º 2776 citada.

Pero la Tarifa de Avalúos aprobada por V. E. por decreto de Noviembre 19 de 1890, no ha incluido, desde los números 261 a 268, los palos de tabacos. Fija sólo los valores y el derecho de 55 % que deben pagar los tabacos en hojas, del Paraguay, de la Habana, y de otros países, el tabaco negro en rama o picado, la picadura de la Habana, y el tabaco para fumar en pipa. Es pues necesario

para aplicar el derecho que la ley establece a los palos de tabaco, determinar cuál es el valor de éstos en depósito.

La Tarifa de Avalúos ha sido hecha por la Dirección General de Rentas, con la colaboración de los Vistas de Aduana de Buenos Aires, y de los delegados de los diversos centros comerciales e industriales de esta Capital.

Así se expresa en la nota de 8 de Noviembre último, de la misma Dirección cuando la Tarifa fué sometida a la aprobación de V. E.; y así debía sin duda procederse, desde que se trataba de determinar el valor de todas las mercaderías y manufacturas que se introducen a nuestro país.

Pero tratándose ahora de fijar el valor a un sólo artículo, los palos de tabaco, bastaría que él fuese determinado por la misma Dirección de Rentas oyendo la opinión del Vista o Vistas que tienen a su cargo el despacho de tabacos, y a los delegados de los centros industriales que se ocupan de la venta de dicho artículo o del negocio de cigarrería.

Creo en consecuencia que los palos de tabaco deben pagar a su importación el derecho de 55 %; y que su valor en depósito, debe ser determinado por la Dirección de Rentas en la forma que acabo de indicar. Mayo 4 de 1891.

Ministerio de Hacienda. — Resolución en Junio 12 de 1891.

Tomo 9, pág 382. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No corresponde que se haga lugar a un pedido de extradición fundado en la Ley de la materia de 1885, por cuanto sancionado el Código de Procedimientos en lo Criminal, las disposiciones de éste sobre extradición son las que rigen, quedando en consecuencia derogada la ley anterior.
- II. — La decisión de la Suprema Corte Nacional, en virtud de la cual la extradición a falta de tratados, debe regirse por las prescripciones de la legislación interna del Estado que conoce de ella, hace jurisprudencia para casos análogos ya que la extradición es siempre materia de la justicia federal.
- III. — No corresponde que se haga lugar a un pedido de extradición en que se omite el testimonio literal del auto que decreta esa diligencia, requisito exigido por el artículo 651 del Código de Procedimientos en lo Criminal.

Extradición de Juan Bautista Sambuceti, solicitada por la Legación de Italia

Excmo. Señor:

El pedido de extradición de Juan Bautista Sambuceti, dirigida a V. S. en 3 de Febrero de 1888 por S. E. el Señor Ministro de Italia, fué bien fundado en la Ley de 25 de Agosto de 1885, que era la vigente en aquella fecha.

Pero por la N.º 2372 de Octubre de 1888 fué sancionado el Código de Procedimientos en lo Criminal, que está en vigencia desde el 1.º de Enero de 1889, y que en sus artículos 646 y 647, se ocupa *«del procedimiento en los casos de extradición de criminales»*. Este Código, como posterior en fecha a la citada Ley de 25 de Agosto de 1885, es derogatorio de ésta, y sus prescripciones son por tanto, de preferente observancia.

El artículo 651 de dicho Código determina los requisitos con que, en falta de tratados, puede ser solicitada y otorgada la extradición de criminales; siendo el primero de ellos, que habrá de acompañar al pedido de extradición *un testimonio literal del auto que decreta esa diligencia*, esto es, un testimonio literal de la providencia del Juez o Tribunal que entiende en la causa, y en que resuelva se solicite dicha extradición.

Tal documento no se halla en este expediente entre los remitidos a V. E. por el Señor Ministro de Italia; y soy de opinión entonces, que V. E. no puede darle ulterior tramitación, y que correspondería hiciera presente a dicho Señor Ministro esa exigencia de nuestra Ley vigente, a efecto de que recabe de los Tribunales de Italia el testimonio del auto mencionado.

V. E. sabe, por haberlo expresado en otros expedientes análogos, que ésta no es una opinión particular mía; sino de ella, es la expresión de una resolución de la Suprema Corte de Justicia Federal, lo que, en el caso de haberse solicitado la extradición de Marius Brun y Alois Sartoris por el Señor Ministro Francés declaró que, en materia de extradición y en defecto de Tratados, la demanda, como los procedimientos que le conciernen, son regidos, y deben sustanciarse en conformidad con la legislación interna del estado que conoce de ella, debiendo los jueces del país someterse a sus preceptos, sin que les sea dado prescindir de uno más que del otro, ni de ninguno de ellos.

Correspondiendo lo relativo a la extradición de criminales a la justicia federal, la decisión de la Suprema Corte a que acabo de referirme, hace jurisprudencia; y creo que, llegado el caso aplicaría igual resolución a la extradición que solicita S. E. el Señor Ministro de Italia. Pienso que, por tanto, debe salvarse la deficiencia que se nota en los recaudos con que dicho Señor Ministro ha acompañado la solicitud.

Observo además, que las disposiciones del Código Penal Italiano en vigencia, que se acompaña, no vienen en la forma de «*copia autenticada*» que exige el art. 651, último inciso de nuestro Código de Procedimientos en lo Criminal, sino en copia simple sin firmar. Convendría también llenar esta deficiencia para evitar todo inconveniente ulterior.

Lo mismo debo decir de los datos que se acompañan para comprobar la identidad de la persona requerida, que también vienen sin firma. Abril 6 de 1891.

Departamento de Relaciones Exteriores. — Se adopta como resolución el dictamen, en Abril 6 de 1891.

Excmo. Señor:

El arresto provisorio de un extranjero, dispone el art. 673 de nuestro Código de Procedimientos en lo Criminal, podrá «ordenarse también a pedido de un Ministro Diplomático hasta tanto lleguen los documentos necesarios para presentar el pedido de extradición y serán aplicables a este caso, las disposiciones de los artículos precedentes». La disposición del artículo 672, establece que, el arrestado provisoriamente será puesto en libertad, si en el término de quince días, tratándose de un país limítrofe, y de mes y medio tratándose de otros, no recibiese el Gobierno Argentino el pedido diplomático de extradición en debida forma.

Con arreglo a la disposición legal que dejo transcrita creo fundado el pedido que precede de S. E. Señor Ministro de Italia; y que V. E. deberá proveer de conformidad con lo que él solicita. — Mayo 18 de 1891.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Se adopta como resolución el dictamen en Mayo 18 de 1891.

Tomo 8, pág. 18. — Inf. de los Consej. Leg. del P. R.

=====

El artículo 4.º de la Ley de tarifas postales y telegráficas para el año 1890, N.º 2679 (que permite los despachos en clave), al establecer una regla contraria al artículo 79 de la Ley de 7 de Octubre de 1875, siendo de fecha posterior, ha derogado a esta última.

La derogación de la disposición citada, debe serlo en la inteligencia de que quedan subsistentes las prohibiciones del artículo 30 de la Ley de telégrafos nacionales.

La Dirección de Correos, sobre la transmisión de telegramas particulares de clave o de código

Excmo. Señor:

Me parece perfectamente aceptable la resolución que propone a V. E. el Señor Director General de Correos y Telégrafos.

El art. 79 de la Ley de 7 de Octubre de 1875 está concebido en estos términos: «Es prohibido el empleo en los despachos (te-

legráficos) de cifras secretas con excepción de los despachos oficiales».

Pero, el art. 4.º de la ley de tarifas postales y telegráficas para 1890, número 2679, vigente en la actualidad, establece, en su art. 4.º, una regla contraria, en los siguientes términos: «Los telegramas de código, se admitirán bajo las siguientes condiciones: 1.º Cobrar veinte centavos por cada palabra, etc. etc.».

No me cabe duda de que esta disposición como posterior en fecha, debe ser considerada como derogatoria de la del art. 79 de la ley citada anteriormente.

Pero hay otras disposiciones en la ley de 1875, que no pueden considerarse derogadas por la de tarifa postal y telegráfica; y es necesario entonces buscar la manera de salvar esas disposiciones, que no podrían ser desconocidas.

Los artículos 28 y 29 de la Ley de telégrafos de 1875, establecen el derecho de todos los habitantes de la República de hacer uso de los telégrafos abiertos al servicio público, y la obligación de las oficinas telegráficas de admitir y transmitir por sus líneas, los despachos que le fuesen entregados con ese objeto.

Pero el art. 30 siguiente exceptúa de lo dispuesto en los anteriores, los despachos en que se incitase a la traición, rebelión o sedición; los concebidos en términos contrarios a la moral y buenas costumbres; y los que tuviesen por objeto cometer un delito, o se propusieran entorpecer la acción de la justicia para la aprehensión de los criminales, o por cualquier otro acto de su ministerio.

Si la Ley de Tarifas de 1890 ha derogado el art. 79 de la de telégrafos nacionales, en cuanto a los telegramas de código, sus cifras secretas, no ha hecho ni podido hacer lo mismo, respecto de las excepciones consignadas en el art. 30 de la misma Ley, porque las administraciones telegráficas, en ningún caso, podrían prestarse a transmitir despachos que tuvieran un fin delictuoso, que se propusieran entorpecer la acción de la justicia, o que emplearan palabras contrarias a la moral y buenas costumbres.

Siendo forzoso salvar esta disposición de la ley, creo que la forma en que lo propone el Sr. Director de Correos y Telégrafos, consulta a la vez esta necesidad y los intereses del comercio, estando éstos garantidos en la disposición del art. 31 de la citada ley de telégrafos, que impone a todo empleado de ese servicio, el deber de

guardar secreto absoluto y riguroso sobre el contenido de los despachos, cuya transmisión le sea confiada. — Junio 4 de 1891.

Departamento del Interior. Resolución de conformidad con lo dictaminado. Junio 8 de 1891.

Tomo 9, pág. 400. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

No tiene facultad el P. E. para rever una sentencia del Superior Tribunal de la Provincia de Santa Fe, que confirmó un fallo de 1.^a instancia en el que se ordenaba a un Vice-Cónsul Británico el uso de papel sellado en las comunicaciones oficiales dirigidas a un Juez; a la Suprema Corte Nacional corresponde conocer en la cuestión en virtud de la jurisdicción originaria que le confiere el artículo 1.^o inciso 4.^o de la ley de Septiembre de 1863.

El Vicecónsul Británico en el Rosario, sobre la obligación que le imponen las autoridades judiciales de Santa Fe de dirigirse por escrito a ellas en papel sellado.

Excmo. Señor:

S. E. el Sr. Ministro de S. M. B. se queja en la comunicación que precede, de una sentencia del Superior Tribunal de la Provincia de Santa Fe, por la que se ha decidido, confirmando un fallo del Juez de 1a. Instancia Dr. D. Serafín Alvarez, que el Sr. Vice-Cónsul inglés residente en el Rosario, debe dirigir sus comunicaciones oficiales a dicho Sr. Juez, en papel sellado de valor de cincuenta centavos, y considerando insostenible tal pretensión de parte de las autoridades provinciales, insinúa a V. E. imparta sus órdenes a fin de hacerla cesar.

Las decisiones de los Tribunales de Provincia no están sometidas por nuestra Constitución, a una reforma cualquiera que ella sea, por parte de V. E. y no creo, en consecuencia que esté en manos del Poder Ejecutivo Nacional deferir a la indicación del Sr. Ministro de S. M. B.

Ella se funda sin duda, en los privilegios y exenciones de que deben gozar los Ministros Diplomáticos y los Cónsules y Vice-Cónsules de las Naciones extranjeras acreditados ante nuestro Gobierno.

Pero la ley, que en el caso ocurrente ninguna facultad ha atribuído a V. E. da a la Suprema Corte Nacional jurisdicción originaria en 1a. Instancia, para conocer «de las causas en que se versen los privilegios y exenciones de los Cónsules extranjeros *en su carácter público*» (artículo 1.º, inciso 4.º de la Ley de 14 de Septiembre de 1863 sobre Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Nacionales).

El Sr. Calvo, ocupándose de los derechos de los Cónsules en su *Dictionnaire de Droit International* tomo 1, página 192, dice que los Cónsules «están exentos de toda contribución personal y directa, de todo servicio personal y del alojamiento de militares»: por lo que creo que deben estarlo en sus comunicaciones oficiales, del uso del papel sellado.

Pero lo repito, no creo que, entre las atribuciones de V. E. se halla la de enmendar la resolución del Superior Tribunal de Santa Fe; sino que, el Sr. Vice-Cónsul inglés del Rosario, debe dirigir su acción ante la Suprema Corte Federal promoviendo la demanda correspondiente contra dicha resolución, a fin de que ese alto tribunal la deje sin efecto. Junio 5 de 1891.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. Junio 26 de 1891.

Tomo 9, pág. 444. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

6

=====

Habiendo el P. E. conmutado una pena de trabajos forzados por otra pecuniaria, procede que de conformidad al artículo 376 del Código de Procedimientos en lo Criminal, se le acuerde al reo la excarcelación bajo fianza que solicita.

El Dr. Salvador J. Socas, sobre su garantía personal para que sea puesto en libertad el condenado Miguel González

Excmo. Señor:

Habiéndose servido V. E. conmutar la pena impuesta a D. Miguel González por el Sr. Juez Federal de Entre Ríos, una vez que se presentó en el Departamento de Policía de esta Capital, por pena pecuniaria, en vez de la de trabajos forzados a que había

lo condenado, no veo inconveniente para que sea dicho preso excarcelado mediante la fianza que se ofrece.

La excarcelación bajo fianza está admitida por nuestro Código de Procedimientos en lo Criminal, cuando el hecho que motiva la prisión tenga solo pena pecuniaria. (Art. 376).

La fianza que en este caso corresponde es la de *juzgado y sentenciado* esto es, la de pagar la pena pecuniaria que el Juzgado señala y la multa que imponía la sentencia; todo de acuerdo con decreto de conmutación.

En cuanto al fiador propuesto, toca a V. E. resolver sobre su aceptación. Junio 30 de 1891.

Departamento de Justicia. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. Julio 16 de 1891.

Tomo 9, pág. 447. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Mediando tratados de extradición, son las prescripciones de estos las que deben regir el caso, con prescindencia de las disposiciones sobre la materia del Código de Procedimientos en lo Criminal.
- II. — La enunciación de los delitos que pueden dar lugar a la extradición en el tratado con la República Oriental de 1865, es de carácter limitativa y en consecuencia, no puede acordarse dicha medida si se pide por los delitos de violación y estupro que el tratado no contempla.

La Legación de la República Oriental del Uruguay, sobre la extradición de José Pan, procesado por violación de menores

Excmo. Señor:

«La extradición de criminales, dispone el art. 646 de nuestro Código de Procedimientos en lo Criminal, sea que se solicite por la República, o que se otorgue por ella a solicitud de otra Nación, *sólo procede en los casos que determinen los tratados existentes.*

Habiendo tratados, dispone el art. 648 del mismo Código la extradición, será pedida u otorgada *«en la forma y con los requisitos que aquellos prescriben».*

Ahora bien: con la República Oriental del Uruguay, tiene la nuestra celebrado el Tratado de 14 de Junio de 1865, aprobado por Ley del Congreso de 16 de agosto, y cuyas ratificaciones fueron canjeadas en la Ciudad de Montevideo el 28 de Setiembre del mismo año.

En el art. 1.º de dicho Tratado se establece, de una manera expresa, que las Altas Partes Contratantes, siendo requeridas entre sí, se obligan a entregar «a las personas acusadas de los crímenes de homicidio alevoso, de incendio voluntario, de fabricación, introducción o expendio de monedas metálicas, o notas de Bancos autorizadas, falsas, o de sellos o escrituras públicas y letras de cambio falsas, sustracción de valores cometida por empleados o depositarios públicos, o efectuadas por cajeros de establecimientos públicos o de casas de comercio, cuando las leyes señalen a este crimen pena afflictiva o infamante, los acusados de bancarrota fraudulenta». (Colección de Tratados, tomo 2.º, páginas 243 a 248).

Que la expresión de crímenes o delitos para que se acuerde la extradición entre ambos países es limitativa, lo demuestra el hecho de que nuestra ley antes citada, aprobatoria de dicho tratado, suprimió de la enumeración hecha en su art. 1.º las expresiones de *tentativa de homicidio* y la de robo, que comprendían estos casos de justicia entre los de extradición.

Pues bien, Excmo. Señor, entre los casos en que el tratado obliga a la extradición, no se encuentra el crimen de violación ni el de estupro por que se pide la de José Pan. Y no obstante que el art. 128 de nuestro Código penal, impone a la violación la pena de seis a diez años de Penitenciaría, si la mujer violada es menor de doce años, y que el art. 130 siguiente impone la prisión de uno a tres años al que estuprase a una mujer vírgen, mayor de doce y menor de quince años, con todo, como la extradición *sólo procede en los casos que determinen los Tratados existentes*, según la disposición citada del art. 646 del Código de Procedimientos en lo Criminal, mi opinión es que V. E. no puede acceder a la solicitud que le ha sido presentada por el Señor Ministro Oriental. Julio 4 de 1891.

Departamento de Relaciones Exteriores. — Se adopta como resolución el dictamen que antecede. Julio 4 de 1891.

Excmo. Señor:

Si la extradición *sólo procede*, según nuestras leyes, en los casos determinados en los Tratados existentes con las Potencias extranjeras, como expresamente lo dispone el art. 646 de nuestro Código de Procedimientos en lo Criminal, según lo expuse en mi anterior informe; y si S. E. el Señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay, reconoce fundadas las conclusiones de dicho informe, como se ha servido manifestarlo en la nota que precede; si por otra parte, el delito porque se procesa a José Pan, no se halla incluído en los enumerados en el Tratado de extradición celebrado con la República Oriental del Uruguay; me parece evidente, Excmo. Señor que no es posible que varíe en la opinión que emití a V. E. anteriormente.

Obligado a fundar esa opinión en el texto de las leyes que rigen el caso, —y por más exactas y dignas de atención que considere las razones de otro orden que se expongan—, es claro que no debo considerar como incluídos en aquellos, los que evidentemente se encuentran fuera de sus prescripciones.

Considero exactísimo que los crímenes porque se halla procesado José Pan, no son inferiores en cuanto al grado de criminalidad que el agente manifiesta, a algunos de los enumerados en el art. 1.º del Tratado de extradición celebrado con la República Oriental del Uruguay.

Pero ¿qué consecuencia pueden legalmente deducirse de esta opinión?

En mi concepto, únicamente, la de que dicho Tratado debería ser ampliado al punto de contener, entre los delitos que puedan motivar la extradición, los de que está acusado José Pan; pero no la de incluirlos, por una interpretación extensiva de la Ley, inadmisibles siempre en materia penal, entre los expresamente designados en aquella.

Soy, por tanto, de dictamen que, no obstante las observaciones de S. E. el Señor Ministro Oriental, hechas en la comunicación que precede, no puede V. E. acceder a su solicitud. Septiembre 21 de 1891.

Departamento de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. Septiembre 25 de 1891.

Tomo 9, pág. 458. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

De conformidad al artículo 42 de la Ley de la materia, el registro de marcas extranjeras sólo puede ser pedido por el propietario de la misma, o su representante debidamente autorizado.

Los Sres. La Rocha y Cía., sobre la marca «Hoyo de Monterrey»

Excmo. Señor:

La marca «Hoyo de Monterrey» es sin duda una marca extranjera, desde que D. José Gener, domiciliado en La Habana, señala con ella los productos de su fabricación, como lo demuestra el poder que obra a fojas 2 del expediente agregado, otorgado por él a favor de D. Ramón M. Blanco.

Ahora bien: «Para que las marcas extranjeras, dispone el art. 42 de la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio, gocen de las garantías que dicha ley acuerda, deberán ser registradas con arreglo a sus prescripciones. *Los propietarios de ellas, o sus agentes, debidamente autorizados, son los únicos que pueden solicitar el registro.*»

De acuerdo con esta disposición, D. Ramón M. Blanco, apoderado de D. José Gener, ha solicitado y obtenido, como lo demuestra la foja que precede, el registro de la expresada marca; y lo ha obtenido, porque, según los términos de dicha disposición, era el único que podía solicitarla.

Registrada, como lo está, dicha marca, no es posible acceder a tal pretensión por parte de los señores La Rocha y Cía., quienes, según el mismo art. 42, carecen de todo derecho para pretender el registro de una marca extranjera, no estando debidamente autorizados por su propietario.

Por estas consideraciones y las demás expuestas en el informe del Sr. Procurador del Tesoro, de fojas 24 del expediente agregado, soy de opinión que la resolución de la Oficina de Patentes,

corriente a fojas 12 del citado expediente, debe ser confirmada por V. E. Agosto 14 de 1891.

Ministerio del Interior. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. Diciembre 30 de 1891.

Tomo 9, pág. 264. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Los estatutos de una Sociedad Anónima y las reformas al mismo deben ser discutidas y aprobadas por la asamblea general de socios, convocada en legal forma.

La Sociedad Anónima «Saladero de Bahía Blanca», sobre aprobación de las reformas de sus Estatutos

Señor Ministro:

Nada tengo que observar con respecto a los Estatutos que presenta a la aprobación de V. E. la Sociedad Anónima «Saladero de Bahía Blanca». Sírvasé V. E. proveer en todo según su Directorio solicita. — Junio 13 de 1884.

Excmo. Señor:

En los estatutos reformados de la Sociedad Anónima «Saladero de Bahía Blanca» sólo encuentro que observar el Art. 19 que establece que cada acción, da derecho a un voto; pero que ningún accionista podrá tener más de seis votos, cualquiera sea el número de acciones que posea por sí o por representación.

Falta a este artículo consignar el límite que establece el segundo inciso del art. 350 del Código de Comercio concebido en los siguientes términos. «Ningún accionista cualquiera que sea el número de sus acciones, podrá representar más del décimo de los votos conferidos por todas las acciones emitidas, ni más de dos décimos de los votos presentes en la asamblea».

Esta disposición legal debe ser agregada como segundo inciso, al citado artículo 19 de los Estatutos reformados.

Pero tengo otra observación que se refiere a la forma en que estos estatutos han sido reformados.

No lo han sido por la Asamblea General de Socios, según el acta, de fs. 1.^a sino por una comisión compuesta de sólo 4 accionistas nombrados en comisión, según se dice en dicha acta, en una asamblea anterior de 19 de Mayo ppdo.

Los estatutos de una Compañía y por consiguiente su reforma deben ser discutidos y aprobados por la Asamblea General de Socios, convocada en forma.

Así lo establece el art. 17, inciso 3.^o de los Estatutos vigentes, que en folleto impreso corre a fs. 2; agregando que debe anunciarse «en los avisos de convocación la moción del cambio propuesto».

No es posible, pues, que V. E. apruebe la reforma proyectada, sin que conste que ella ha sido aceptada previamente por la Asamblea de Accionistas debidamente convocada y sin que se acompañen a V. E. los diarios en que se hayan publicado los avisos de dicha convocatoria, y copia en forma del acta de la sesión en que las reformas propuestas hayan sido aceptadas con la constancia del número de accionistas y acciones representadas por ellos, que se hallaron presentes en esa Asamblea.

Sírvase V. E. resolver que los Estatutos reformados que se presentan su aprobación, sean previamente sometidos a la aceptación de la Asamblea General de Socios en la forma que queda indicada y aún cuando no puedo dudar que los Estatutos impresos vigentes que corren a fojas 2, son una copia fiel de los aprobados por V. E. en 19 de junio de 1884, se ha de servir también mandar se agregue, sin acumularse el expediente en que deben constar dichos Estatutos originales, con la aprobación que V. E. se sirvió prestarles. Agosto 27 de 1891.

Excmo. Señor:

Cumpliendo lo dispuesto por V. E. se han acompañado los periódicos en que constan la convocatoria de la asamblea y el acta que expresa su reunión, en número autorizado en segunda citación, así como la discusión de las reformas de sus Estatutos.

Tal cual hoy se presentan no contienen irregularidad contradictoria con las disposiciones del Código de Comercio, que por otra parte están legalmente incorporadas al régimen de toda sociedad comercial. Opino en consecuencia, que dando V. E. su aprobación a las reformas de los Estatutos de la Sociedad «Saladero de Bahía

lanca», podrá disponer su inscripción en el registro respectivo.
agosto 20 de 1892.

Sabiniano Kier.

*Departamento de Justicia. — Resolución de conformidad con
dictaminado. Septiembre 16 de 1892.*

Tomo 7, pág. 79. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La facultad que el artículo 342 del Código de Comercio acuerda al P. E. para fiscalizar el funcionamiento de las sociedades anónimas, se extiende al cumplimiento de las leyes y estatutos, a las condiciones de la concesión y las obligaciones estipuladas en favor del público, pudiendo los agentes nombrados a tal fin, asistir a todas las sesiones del directorio y asambleas generales y hacer constar en las actas sus reclamaciones.

Compañía de Seguros «La Nacional», solicita la aprobación de las reformas introducidas en sus Estatutos, y que se aclare el decreto en la parte referente al nombramiento de inspector.

Excmo. Señor:

En otro expediente seguido por don José J. García por la Compañía de Seguros «La Hispano Argentina» haciendo reclamación análoga a la que hace don Angel Estrada en nombre de «La Nacional», expedía a V. E. en 12 de Febrero del año corriente el siguiente informe:

Excmo. Señor:

«Al aprobar los Estatutos de varias Sociedades Anónimas establecidas últimamente, V. E. se ha reservado la facultad de nombrar un inspector para el examen de los libros y papeles y lo mismo ha hecho en el que aprobó los de «La Hispano Argentina».

«El Presidente de esta Sociedad de Seguros, fundado en la disposición del art. 342 del Código de Comercio que autoriza a V. E. a ordenar la fiscalización de las Sociedades Anónimas que exploten concesiones hechas por la autoridad o que tuvieran constituido en su favor algún privilegio, solicita de V. E. la reposición

de dicho Decreto, suprimiendo de él la facultad reservada, por no estar ella de acuerdo con la disposición del citado artículo.

«Pero entiendo que V. E. al reservarse la facultad antes dicha, no ha hecho uso de la que le acuerda el citado artículo 342 del Código de Comercio, porque la fiscalización que este artículo autoriza es mucho más extensa que la que V. E. se ha reservado mandar practicar.

«En efecto V. E. sólo se ha reservado nombrar una persona que examine los libros y papeles de la Compañía; mientras que la fiscalización autorizada por dicho artículo 342, se extiende al cumplimiento de las Leyes y Estatutos y especialmente al de las condiciones de la concesión y las obligaciones estipuladas en favor del público, pudiendo los agentes nombrados a tal fin, asistir a todas las sesiones del Directorio y de la Asamblea General y hacer en las actas sus reclamaciones.

«Si la inspección ordenada por V. E. en el caso en que llegara a decretarla no ha de pasar según los términos del Decreto que se reclama, del examen de los libros y documentos de la Compañía, esa fiscalización no es pues la del artículo 342 del Código; y si se halla fuera de las prescripciones de éste, no creo que pueda decirse que va contra ellas.

«Si la autorización de V.E. es indispensable para que toda Compañía Anónima adquiriera el carácter de persona jurídica y si puede retirar la autorización concedida cuando se demuestre que la Compañía no puede llenar el fin para que fué creada (Art. 370 del C. de Comercio) me parece indudable el derecho que tiene V. E. de ordenar la investigación que juzgue conveniente, a los efectos de mantener o de retirar la investigación que haya dado a una Sociedad Anónima.

«Es natural suponer que, de tal facultad no hará uso V. E. caprichosamente y que sólo ordenará el examen de libros y papeles cuando quejas u otros motivos fundados lo obliguen a proceder de tal manera.

«Llegado ese caso no veo razón que pueda oponerse a que V. E. ordene un examen que sería indispensable para hacer uso de la facultad que le acuerda en su parte final el citado artículo 370, del Código de Comercio. Febrero 12 de 1881».

Después del informe que precede V. E. se sirvió comunicarme con fecha 19 de Marzo siguiente, el Decreto que dice así «Ministe-

rio del Interior, 3a. Sección: De acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nación, no ha lugar a la modificación solicitada por la Sociedad «La Hispano Argentina», del decreto de fecha 6 de Diciembre ppdo. en la parte referente al nombramiento por el Gobierno de un Inspector para el examen de los libros y documentos de la mencionada Sociedad. Comuníquese y archívese.

En consecuencia creo que igual resolución debe dictarse en el presente expediente. — Octubre 1.º de 1891.

Tomo 7, pág. 523. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

El Procurador General de la Nación, solicita una nueva publicación oficial de una nota dirigida por el Ministerio de Hacienda un Agente Fiscal, por aparecer publicadla con conceptos distintos de los que tuvo en cuenta al dictaminar.

Sobre sobreseimiento en los casos de defraudación aduanera

Buenos Aires, Octubre 1º de 1891. — A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda Dr. D. Vicente F. López.

La publicación oficial de los antecedentes que han motivado la resolución del Ministerio de Hacienda, negando a los Procuradores Fiscales derecho de desistir de las acciones deducidas o pedir sobreseimiento de las causas fiscales sin autorización superior, hecha en «La Nación» de ayer, y sin duda ordenada por V. E. me pone en la necesidad de ocurrir ante V. E. rogándole se sirva disponer se haga en el mismo diario, una nueva publicación oficial de los mismos documentos, haciéndose constar además que con ella se corrige el error padecido en la anterior.

No me mueve, Excmo. Señor, a dar este paso el hecho de que V. E. en el decreto con que termina dicha publicación oficial, se haya separado totalmente de las opiniones que manifesté al contestar la consulta que me hizo el Procurador Fiscal Dr. Viale, porque, aunque mantengo íntegramente esa opinión, que conceptúo conforme a las leyes y doctrinas que enuncié, reconozco en V.

E. el derecho de tener una opinión enteramente contraria y de expresarla también en una resolución gubernativa.

Lo que me impulsa a dirigirme a V. E. es el error padecido al hacer dicha publicación oficial; error que no he atribuído por un solo momento a V. E. pero que se ha cometido indudablemente a pesar de su deseo y de su mejor voluntad.

Ese error consiste, en el primer documento que figura entre los publicados, esto es, en la nota sin fecha que dirigió V. E. al Sr. Agente Fiscal, Dr. Viale.

En esa nota aparece V. E. manifestándole haber observado con extrañeza, que en muchos de los asuntos iniciados por la Administración de Rentas, por defraudaciones aduaneras, que pasaban a proseguirse en esa Fiscalía, se entraba en transacciones y arreglos con los deudores; le previene en seguida se abstenga de transar, porque en definitiva, esas transacciones pueden dar lugar a desvirtuar lo que la ley pena con notoria severidad, y concluye diciéndole que, en los casos en que por excepción conviniera el arreglo antes de formalizarlo debe de consultarlo con V. E. quien le dará la norma a que deba ajustar las ulteriores del juicio.

Si la nota de V. E. hubiera estado concebida en los términos en que ha sido publicada y que dejo extractados, mi contestación a la consulta del Procurador Fiscal, habría sido totalmente contraria a lo que fué, porque sabría con anterioridad, que por disposición expresa del artículo 841 del Código Civil: «No pueden hacer transacciones los agentes del Ministerio Público, tanto Nacionales como Provinciales».

Pero el caso de la nota del 31 de Agosto último que V. E. pasó al Señor Procurador Fiscal Dr. Viale, no hablaba de las transacciones, ni de los arreglos de que exclusivamente habla la nota publicada, como que fuera la pasada a aquel funcionario.

En dicha nota de 31 de Agosto, que he visto original y que tengo en copia enviada por el Dr. Viale al hacerme la consulta que contesté con la mía, de 4 de Setiembre, V. E. dice al Sr. Procurador Fiscal, haber observado que en muchos de los asuntos iniciados por la Administración de Rentas, que aquel debe proseguir, «se pide el sobreseimiento de la causa», que encontrando pernicioso y sin fundamento legal este procedimiento le recuerda «que su misión es continuar la acción iniciada por la Aduana y en ningún

caso pedir por sí el sobresimiento» y le previene que cuando la excepción «llegase el caso en que, a juicio del Procurador Fiscal, se impusiera el sobreseimiento, antes de solicitarlo del Juzgado deberá consultarlo a ese Ministerio que será quien le dé la norma a que debe ajustarse las ulterioridades del juicio».

Como lo verá fácilmente V. E. la nota pasada al Procurador Fiscal no es la misma que aparece publicada como tal; y por mi parte, no puedo aceptar en silencio el error padecido en la publicación oficial, porque él me coloca en una situación que no debo calificar.

Si V. E. en la nota realmente pasada (de que adjunto copia) hubiera hablado de transacciones y arreglos, ordenando al Procurador Fiscal que se abstuviera de realizarlos, mi opinión habría sido, según antes lo he dicho, la de que V. E. tenía, completa razón. Pero no habría llegado el caso de decirlo porque el Sr. Procurador Fiscal no podía ignorar que la ley le prohibía tales actos, y no me habría dirigido la consulta que contesto.

Tales como aparecen en la publicación oficial la nota de V. E. y la mía dirigidas ambas al Sr. Procurador Fiscal, mis opiniones son enteramente discordantes con el punto consultado, pues este se refería a transacciones y mi nota al sobreseimiento. Solamente no habiendo leído, ni estudiado el punto objeto de la consulta, podía haberme yo expedido en los términos en que lo hice.

Dada la explicación que dejo hecha, la alta ilustración y la integridad que reconozco en V. E. convendrá y fácilmente, en que no es posible que acepte, no debo aceptar, que la publicación oficial que ha sido hecha, quede sin que sea explícitamente rectificada mediante una nueva publicación oficial que V. E. tenga a bien ordenar en el mismo diario y con la premura que el caso requiere.

Tal es la petición con que me permito molestar la recargada atención de V. E. rogándole el más pronto despacho.

Aprovecho esta oportunidad para presentar a V. E. las seguridades de mi mayor respecto y consideración.

Ministerio de Hacienda:

Atento lo expuesto por el Sr. Procurador General de la Nación y resultando que la nota pasada al Sr. Procurador Fiscal, no concuerda con la que ha sido publicada en «La Nación» de Octu-

bre 30, hágase nueva publicación de esta nota y del asunto que la motiva. Avísese en respuesta al Sr. Procurador Fiscal General, lo resuelto y archívese. Octubre 2 de 1891.

Tomo 9, pág. 533. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

- =====
- I. — Corresponde el retiro de la personería jurídica de los clubes sociales, que infrinjan las disposiciones sobre juegos prohibidos.
 - II. — Debe autorizarse a los agentes de policía, la libre entrada a los locales de asociaciones con personería jurídica, a fin de constatar las violaciones a las leyes sobre juego.

La Jefatura de Policía, sobre juegos prohibidos de azar en los clubes sociales de la Capital

Excmo. Señor:

El Sr. Jefe del Departamento de Policía se dirige a V. E. con la nota que precede, manifestándole: «que recibe con frecuencia denuncias formales y serias, de que en la totalidad de los Clubes Sociales establecidos en esta Capital, se organizan partidas de juegos de azar, que están prohibidos por disposiciones vigentes», que este juego ha tomado en estos últimos tiempos, proporciones alarmantes, concurriendo con su influencia al malestar económico por el que actualmente pasa la población de la Capital, pues su resultado inmediato a más de la desmoralización que entraña, es el desequilibrio de los recursos con que cuenta cada individuo y cada familia: que él persigue el juego de azar con todo rigor en los puntos en que la Policía puede legalmente sorprender y adoptar medidas de represión contra los que infrinjan la Ley; siendo estos puntos las casas de juego particulares, los garitos que se establecen clandestinamente con el único objeto de jugar: que existen otros locales provistos de mayores comodidades, a donde concurre gente de mejor esfera social, y en los cuales impunemente se pierden y se ganan crecidas sumas de dinero en juegos prohibidos, que esos cen-

os son los Clubes sociales, cuya existencia legal está garantida por autorización del Gobierno, y cuyos Estatutos condenan el juego de azar como inmoral y pernicioso: que por fundadas que sean las denuncias que tiene la Policía, no puede penetrar a esos recintos, en el carácter de la autoridad que inviste para hacer cumplir la ley y vigilar que se respete el compromiso contraído ante el Poder Público, al dar a la institución existencia jurídica y a fin de que no se siga violando la ley, solicita de V. E. una medida general, según la cual se acuerde a la Policía la facultad de penetrar a todos los Clubes Sociales, aunque tengan Estatutos aprobados por el Gobierno, con el fin exclusivo de comprobar, si son ciertas las denuncias que se reciben y evitar que se infrinjan las disposiciones existentes que prohíben los juegos de azar.

Nada más digno de aplauso y de aprobación por parte de V. E. que el celo que demuestra y el noble empeño que pone el Sr. Jefe de Policía para conseguir extirpar esta llaga social que se denomina juego de azar; y que según lo manifiesta a V. E. ha invadido en los últimos años todas las clases de la sociedad.

No es esta la primera vez que el mismo Señor Jefe de Policía trae a la consideración de V. E. este mismo asunto.

En el año anterior comunicó que, en el «Anglo German Club» y en los «Club Internacional», «Nacional» y de «Extranjeros», se jugaba también, y en 5 de Noviembre de dicho año, expedí a V. E. el siguiente informe: «Excmo. Señor: V. E. ha concedido al Club Internacional, al «Anglo German Club» y al «Club Nacional», el carácter de personas jurídicas sin que, según el informe que precede, conste se haya hecho después de 1885, igual concesión al «Club de Extranjeros».

El carácter de persona jurídica sólo pudo ser acordado por V. E. en las condiciones que establece en su parte final el artículo 33, del Código Civil, esto es, que las asociaciones que solicitan ese carácter «tengan por principal objeto el bien común».

«En los Estatutos o Reglamentos que constan de los expedientes agregados, hallará V. E. que los objetos de dichas asociaciones

se hallan de acuerdo con la ley; pues toca al bien común que haya centros de sociabilidad y de honesta recreación, en que se cultiven y estrechen las relaciones de amistad entre los asociados.

«Pero el Señor Jefe de Policía comunica a V. E. que en los Clubes que quedan nombrados, «se juega por dinero al ferro-carril cobrándose coima», y como todos ellos tiene Estatutos aprobados por V. E. ha creído deber abstenerse de todo procedimiento y poner el hecho en conocimiento de V. E. a fin de que tome la resolución que corresponda.

«Se juega en esos clubes sociales al ferro-carril, se cobra coima. Estos hechos son contrarios a las leyes y al bien común de los asociados y se hallan prohibidos entre nosotros por nuestras más antiguas disposiciones patrias.

«El reglamento policial de 11 de Marzo de 1812, prohíbe toda clase de juegos de azar bajo pena de multa, de cerrarse la casa en que tales juegos tengan lugar y arresto a los jugadores.

«Por decreto 19 de Agosto de 1816 del Director Supremo del Estado se declaran nuevamente prohibidos dichos juegos, y en rigor las leyes que hablan sobre los jugadores condenándolos a penas deshonrosas y correcciones corporales.

«El Cabildo de esta Capital, por resolución de 12 de Febrero de 1820 prohibió también el juego de la ruleta, y por Decreto de Mayo 10 de 1821, se prohibieron nuevamente los juegos llamados de ruleta y perfecta unión.

«Así pues, no nos faltan disposiciones que prohiban los juegos que, como los que se hacen en los Clubes mencionados, sólo pueden dar por resultado la ruina de los que en ellos se comprometen. El nombre de ferro-carril con que se designa el que se hace en los mencionados Clubes, le había sido dado tal vez para significar la rapidez con que pasa el dinero de unos jugadores al bolsillo de los otros engañosamente, porque al fin ese dinero ha de quedar, por vía de coimas en las cajas del Club.

«V. E. no puede haber pensado autorizar una casa de juego, cuando ha puesto su aprobación a los Estatutos o Reglamentos de los Clubes mencionados.

«Nada hay más contrario al bien común que el desarrollo que ha tomado en nuestra sociedad la pasión del juego, que se ha con-

vertido ya en una verdadera epidemia, que en orden moral causa tantos males como las epidemias que nos afligen en ocasiones, en el orden físico.

«Las personas jurídicas pueden dejar de serlo por disolución en virtud de la ley no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la autorización legal (Art. 48 del Código Civil)».

«El Codificador explicando su pensamiento en la nota con que acompaña el artículo que acabo de citar, se expresa así: «las personas jurídicas pueden ser disueltas por la disposición sola de la autoridad pública, si ellas vienen a comprometer los intereses generales pues que sólo el interés público y no intereses individuales, religiosos, o industriales, por grandes que sean, es el motivo de la autorización para su creación».

«Que los clubes sociales convertidos en casas de juego, comprometen los intereses generales, es fuera de toda duda, en mi opinión; pues atraen e inducen a los ciudadanos, y principalmente a los jóvenes a abandonar el trabajo que sólo ofrece seguros, pero tardíos provechos, y a buscar en el juego la fortuna por un camino rápido, aunque generalmente jamás llega a obtenerse o a conservarse.

«Creo pues que V. E. en presencia del oportuno aviso que le ha sido dado por el Señor Jefe de Policía se halla en el caso de retirar la autorización dada a los tres Clubes convertidos en personas jurídicas y la aprobación que prestó a sus Estatutos o Reglamentos en virtud de haberse abusado de tales autorizaciones.

«Respecto de uno de dichos Clubes, el «Anglo Germán» ya el anterior Jefe de Policía por una nota de 25 de Febrero del corriente año, comunicó a V. E. que en él se jugaba y pidió se suspendiera o se negara la autorización que le había sido concedida».

«El Procurador de la Nación Sr. Dr. Costa, creyó también que podría retirarse la autorización concedida, pero como medida equitativa recomendó una vigilancia especial por parte de la Policía, y que se llamara a la persona que se hallara al frente del Club, y le hiciera saber, que si no lo colocaba en las condiciones del honorabilidad y decoro requeridas, V. E. procedería sin más trámites para disponer su disolución y V. E. ordenó se hiciera saber al interesado se presentara en Secretaría, sin duda para que se le hiciera

la prevención indicada por el doctor Costa, pero no consta que así se procediera».

«Yo creo que tales prevenciones no son indispensables cuando se trata de una violación flagrante de la ley, que es conocida y que obliga a todos.

«Si V. E. creyera sin embargo que por no haberse cumplido la que mandó hacer fuera necesario repetirla, yo me permitiría indicarle comisionara al efecto al Señor Jefe de Policía, encargándole V. E. que, redoblando su vigilancia respecto de dichas casas, procediera a dar inmediato aviso si reincidieran en el juego, para privarlas del carácter de persona jurídica y ordenar su inmediata liquidación.

Sería conveniente que V. E. ordenara también, la publicación de la resolución, que tenga a bien adoptar, a fin de que ella sirva de prevención a las demás asociaciones que se encuentren en el mismo caso que las antes mencionadas, y puedan arreglar su conducta al precepto de la ley y mandato de V. E. Buenos Aires, Noviembre 5 de 1890.

«V. E. entonces dictó el siguiente decreto:

«Departamento del Interior. Buenos Aires, noviembre 7 de 1891.

Visto lo expuesto en la precedente nota por el Jefe del Departamento de Policía de la Capital de la que resulta que en los Centros Sociales «Club Internacional», «Anglo Germán» y «Club de Extranjeros», se ha comprobado tener lugar juegos de azar, lo que importa una transgresión de las condiciones de la autorización legal, y de acuerdo con lo dictaminado por el Señor Procurador General de la Nación. —

El Presidente de la República—,

D E C R E T A :

«Artículo 1.º — Desde esta fecha cesan los efectos de los respectivos decretos por los cuales se reconoció en el carácter de persona jurídica a los Centros Sociales «Club Internacional», «Anglo Germán Club», «Club Nacional» y «Club de Extranjeros».

Art. 2.º — Comuníquese esta resolución al Departamento de Policía de la Capital a los efectos consiguientes, publíquese y dese al Registro Nacional. — *Pellegrini. — Julio A. Roca.*

La resolución que nuevamente solicita el Sr. Jefe de Policía no puede en su concepto serle negada ni discordar con los principios establecidos por V. E. en lo que acabo de copiar.

Pienso pues que V. E. deberá dictar su decreto disponiendo:

1.º Que en todos los Clubes Sociales o cualesquiera otras Asociaciones sin distinción alguna, que hayan obtenido de V. E. el carácter de personas jurídicas, queda absolutamente prohibido todo juego de azar bajo pena de serles retirada la autorización, y el carácter que V. E. les acordó sin perjuicio de las otras penas que establecen las disposiciones vigentes.

2.º Que sólo al efecto de que pueda probarse la observación o inobservancia de la anterior prohibición, los agentes de Policía tendrán libre entrada en dichos Clubes Sociales o en los locales de las otras Asociaciones erigidas en personas jurídicas, apercibiéndose desde ya a sus directores de que en caso de oponerse a que esta disposición tenga debido cumplimiento, V. E. con el sólo aviso del Señor Jefe de Policía, les retirará la personería jurídica que les concedió.

3.º Que el mismo Señor Jefe de Policía, sea el encargado de comunicar a los directores o gerentes de todos los Clubes Sociales y demás asociaciones radicadas en esta Capital, la resolución que V. E. tenga a bien adoptar haciendo constar en forma, su conformidad o disconformidad y participándolo a V. E. a los efectos a que hubiese lugar.

Las personas jurídicas sólo han podido crearse, por disposición expresa de la ley, cuando tienen por principal objeto el bien común, de suerte que cuando conspiran contra éste, cuando abusan de la autorización que obtuvieran o incurrir en transgresiones de sus condiciones o cláusulas, esa autorización puede serles retirada. «Las personas jurídicas pueden ser disueltas, ha dicho nuestro Codificador por la decisión sólo de la autoridad pública, si ellas vienen a comprometer los intereses generales, pues que sólo el interés público, no intereses generales, religiosos, o industriales, por grandes que sean, es el motivo de la autorización para su creación (Nota del artículo 48 del Código Civil). 2 de Octubre de 1891.

Departamento del Interior. — Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Febrero 6 de 1892.

Tomo 9, pág. 560. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — Las mismas razones en que se fundan los privilegios de que gozan los Ministros Diplomáticos extranjeros, en virtud de los cuales están exentos de todo impuesto personal y de la jurisdicción del país en que residen, deben hacerse valer para liberar del impuesto de contribución territorial al edificio de una Legación, cuando pertenece en propiedad a un país extranjero.
- II. — Si la ley del país en que está situada la Legación no prevé expresamente para ésta, la exención de pago de contribución directa, ello debe ser materia de una convención internacional en base a la reciprocidad; por cuanto ninguna propiedad raíz puede escapar al influjo del «dominio eminente» que sobre ellas tiene el soberano del país de su situación.

Casa de la Legación Argentina en Montevideo. — El Gobierno Oriental cobra el impuesto de Contribución Directa

Excmo. Señor:

La independencia de los Ministros Públicos sería imperfecta, y mal establecida su seguridad, si la casa donde habita no gozara de una entera libertad, y si ella no fuera inaccesible a los Jueces ordinarios. El Ministro Público podría ser molestado bajo mil pretextos, descubiertos sus secretos por la visita de sus papeles, y su persona expuesta a insulto o vejaciones. Todas las razones que establecen su independencia y su inviolabilidad concurren pues también, a asegurar la inmunidad de su hotel. Así se expresa Vattel agregando que «se considera por lo menos, en todos los casos ordinarios de la vida, que el hotel de un Embajador, lo mismo que su persona, quedan fuera del territorio». (Le Droit de Gents, París, 1835, tomo 2.º página 390).

Si bien es doctrina uniforme que, como consecuencia de los privilegios de que goza un Ministro Público, él está exento de to-

lo impuesto personal y de la jurisdicción del país en el cual reside, no he podido hallar consignado el principio según el cual, deba gozar de igual libertad de impuesto territorial o de contribución directa, la finca ocupada por una Legación cuando ella pertenece en propiedad al Gobierno extranjero que la ha acreditado. Sin duda por que el caso no es frecuente, no se habrá consignado una regla semejante.

Que parece sin embargo, indudable, que las mismas razones que han hecho aparecer, en favor de los Ministros Diplomáticos, la exención de la jurisdicción del país en que están acreditados y la libertad de todo impuesto personal o que grave sus bienes muebles, fundan igual excepción respecto de los que gravan la propiedad territorial de la Casa de la Legación, cuando ésta pertenece al Gobierno de la Nación que representa ese Ministro Diplomático.

No sería en verdad admisible que en el caso que motiva este informe, por ejemplo, y no habiéndose pagado oportunamente el impuesto de Contribución Directa que adeuda la Casa de la Legación Argentina en la ciudad de Montevideo, nuestro Gobierno, propietario de ella, se viera penado con multa o ejecutado por tal causa. El decoro, la soberanía, e independencia de una Nación, resisten que puedan emplearse tales medios, en cualquier caso, por otra Nación amiga.

Y sin embargo, los bienes raíces situados en un país están sujetos a la Legislación exclusiva de ese mismo país; y si la ley que establece el impuesto de Contribución Directa que pesa sobre ellos, no hace excepción en el caso en que una propiedad pertenezca a un Gobierno extranjero, no creo que este Gobierno pueda excusarse de su pago porque la *lex loci rei sitae* debe ejercer todo su imperio, y ninguna propiedad raíz puede escapar al influjo del *dominio eminente* que sobre ella tiene el soberano del país de su situación.

Para evitar pues las desinteligencias o conflictos a que pudiera dar lugar el hecho de ser nuestro Gobierno el propietario de la finca que ocupa la Legación Argentina en la ciudad de Montevideo, y dada la manifiesta buena voluntad del Excmo. Gobierno de aquella República, expresada en la nota de S. E. el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de 16 de Noviembre de 1888, soy de opinión que V. E. podría dar sus instrucciones a nuestro E. E. y M. P. en aquella República, para que pudiera ajustar con aquel Excmo.

Gobierno, bajo la base de la reciprocidad, un convenio internacional, según el cual las propiedades adquiridas por uno u otro Gobierno para residencia de sus Legaciones o Consulados, estarían exentas de todo impuesto territorial o de otro género, ya nacional, provincial o municipal que por las leyes de cada país afectara dichas propiedades.

No creo que pueda ocurrir ninguna dificultad para la celebración de tal Convenio, que consultaría los intereses de ambos países

Entiendo que sin que él exista, en la práctica se observa algo análogo respecto de los buques de guerra extranjeros que entran en nuestros puertos y usan de los muelles establecidos en ellos, informándome que están completamente libres de los derechos que pagan los buques mercantes.

Sobre todo V. E. en su ilustración, resolverá como lo juzgue más conveniente. Octubre 7 de 1891.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de Febrero 12 de 1892. Instruyendo al Representante Argentino en el Uruguay, para que negocie la firma de un protocolo sobre exención recíproca de impuesto territorial, a las propiedades de ambos gobiernos en el país del otro, con destino a la exclusiva residencia de sus Representantes Diplomáticos. Agregado a sus antecedentes el proyecto de Protocolo, pasó nuevamente a dictamen de la Procuración General.

Excmo. Señor:

Con maduro examen de los antecedentes relativos a la Contribución Directa exigida por la Dirección General de Rentas de la República Oriental del Uruguay, y de las doctrinas del Derecho Internacional, dominantes al respecto, según la exposición de sus más autorizados intérpretes, V. E. se sirvió autorizar al Ministro Argentino, para formular un Protocolo, estipulando la exención del impuesto territorial a las propiedades que cada una de las partes contratantes posea en el país de la otra, con el especial objeto de servir de residencia al personal de la Legación.

S. E. el Sr. Ministro Argentino, remite a V. E. el Protocolo propuesto por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, de la República Oriental. Encuentro que en él se salvan los inconvenientes que V. E. tuvo en vista al autorizar su negociación; pues por él,

os edificios que en una y otra República adquirieran los Gobiernos respectivos, para la residencia de sus Legaciones, quedan exentos en uno y otro país, del pago de todo impuesto o contribución inmobiliaria. La salvedad que se expresa al final del Protocolo, relativa al dominio eminente de cada Estado, es de Derecho Internacional, y siendo recíproca, no afecta, y sí consulta, derechos inalienables de la Soberanía Territorial.

A mi juicio nada obsta a que V. E. pueda en consecuencia acordar su superior aprobación. Sabiniano Kier. Abril 1.º de 1892.

Departamento de Relaciones Exteriores. — Resolución de mayo 17 de 1892, aprobado el Protocolo de referencia, el cual sería sometido oportunamente a la consideración del H. Congreso.

Tomo 8, pág. 494. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

I. — Ante la queja presentada a la Dirección General de Ferrocarriles, contra el juzgado federal de San Juan por morosidad en el despacho de una causa, en la que están en juego circunstancias previstas en los artículos 57 y 58 de la Ley general de ferrocarriles, tiene personería la Dirección General en virtud del artículo 67, inciso 3.º de la mencionada Ley, para dirigirse directamente al Juez Federal, requiriendo pronto despacho y si no obtuviera resultado favorable, puede ocurrir en queja a la Suprema Corte y aún apercibir al Juez negligente.

II. — Es improcedente la presentación ante el Director de Ferrocarriles, contra el juzgado federal de San Juan equivalente y daños y perjuicios; ello es materia exclusiva del Poder Judicial.

D. Eleodoro Martínez, sobre queja de los procederes de la Empresa de San Juan y Mendoza, en el asunto referente a la devolución del F. C. Gran Oeste Argentino y de los Juzgados Federales ción de unas mercaderías.

Excmo. Señor:

El comerciante de la Provincia de San Juan Don Eleodoro Martínez, ocurre ante el Señor Director General de Ferrocarriles,

en queja contra la administración del Gran Oeste y en demanda de la devolución de las mercaderías detalladas en su escrito, o su valor equivalente con más los daños y perjuicios que le han sido ocasionados; y expone además: que hace veinte meses más o menos tiene demandada ante el Juzgado Federal de la Provincia de San Juan, a la Administración del Ferrocarril Gran Oeste Argentino, por distintos valores que acusan las cuentas adjuntas, comprobadas por las cartas de porte que confirman una negligencia culpable o criminal complicidad por parte de dicha Empresa. En efecto, agrega: ¿Cómo se comprende si no el extravío de ciento treinta bolsas de azúcar y de cien cajones de kerosene? Que a pesar de las gestiones, hechas hasta hoy, no le ha sido posible conseguir la devolución de esas mercaderías, ni el valor que ellas representan, merced a la lentitud con que marcha el Juzgado Federal, como si fuera una dependencia del Gran Oeste, de tal manera favorece los intereses de esa empresa, amparada hasta cierto punto de la impunidad; lo que es un nuevo incentivo para los autores de numerosos robos que diariamente sufre el comercio.

El Sr. Director de Ferrocarriles, al enviar a V. E. la queja que queda extractada, «llama muy especialmente la atención de V. E. sobre las graves insinuaciones contenidas, así en la presentación del comerciante Martínez, como en el informe de la Oficina de Contabilidad, en relacion a la inmunidad aparente de que goza aquella Compañía ante los Juzgados de San Juan y Mendoza, por la excesiva demora con que tramitan ellos los reclamos del comercio de esas provincias».

De desear habría sido, Exmo. Sr. que el Sr. Director General de Ferrocarriles, hubiere propuesto a V. E. de acuerdo con el contrato de concesión de dicho Ferrocarril y demás leyes relacionadas con él las medidas de orden administrativo que V. E. pudiese adoptar, para hacer cesar o corregir en lo posible los vicios o defectos que se denuncian.

Las diversas administraciones públicas, en cuanto concierne a los asuntos de que están encargadas, son y deben ser verdaderos asesores técnicos o especiales de V. E., porque están en mejor aptitud y tienen mayores conocimientos que les proporciona su exclusiva dedicación a su solo ramo del servicio público, que los Asesores Letrados que no siempre disponen de tales conocimientos.

Así, la Ley N.º 2274 del 21 de Julio de 1888, que creó la Dirección de Ferrocarriles Nacionales, le impuso entre sus deberes y atribuciones, la de fijar las instrucciones que han de observar los inspectores de los Ferrocarriles que se construyan o se exploten por cuenta de la Nación o con su garantía (art. 4.º), e informar a V. E. acerca de los reclamos que formularsen los particulares contra las Administraciones de los Ferrocarriles de la Nación.

Son Ferrocarriles Nacionales, sujetos a la inmediata inspección y vigilancia de las autoridades de la Nación y al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nacional de Ferrocarriles, los que se construyen en territorios Nacionales, los que tuviesen garantido del Gobierno Nacional un interés mínimo sobre el capital empleado, y aquellos cuya explotación y construcción fuese autorizada por ley especial del Congreso.

El presente expediente no consigna que el Ferrocarril Gran Oeste Argentino está garantido por la Nación; pero aunque lleva diverso nombre es indudable que él es uno de los dos cuya construcción contrató, aprobado por V. E. con el Sr. D. Juan E. Clark, según contrato aprobado por V. E. en 26 de enero de 1874 que se halla a la página 75 del Registro Nacional de ese año.

Si ese fuese el contrato celebrado para la construcción del Gran Oeste Argentino, su art. 3.º garantizó al concesionario el interés del 7 por ciento sobre el capital a emplearse en él, y desde luego estaría sujeto a las disposiciones de la Ley General de Ferrocarriles.

Esta ley en su art. 57 establece las funciones de los Inspectores que V. E. puede nombrar para cada Ferrocarril Nacional, los que actualmente dependen de la Dirección General; y entre ellas figura la de «denunciar ante el Juez Federal respectivo los casos de infracción de la presente ley, acompañando los antecedentes relativos al hecho, para los efectos civiles o criminales a que hubiese lugar».

Según el art. 67, inciso 3.º de la Ley General de Ferrocarriles, la Dirección General tiene personería para denunciar ante el Juez, las infracciones de la misma ley, y como ella, según, los arts. 57 y 58 impone a las Empresas de Ferrocarriles garantidos, las mismas obligaciones y responsabilidades por pérdidas, averías o retardo en la entrega de las mercaderías, que el Código de Comercio

impone a los encargados y los que establecen las leyes generales sobre transportes, cuya responsabilidad se extiende a los perjuicios ocasionados por culpa de sus empleados, soy de opinión, que dicha Dirección ha podido y puede dirigirse al Juez Federal respectivo, en casos como el que ha dado lugar a la queja del comerciante Martínez.

Y si la Dirección tiene derecho para denunciar ante los jueces, los casos de infracción de la Ley General de Ferrocarriles, me parece que es una consecuencia que naturalmente se desprende de tal atribución, la de instarlos por el pronto despacho de las causas que sobre ella se vencen, cuando el retardo sea tan grande como el que se menciona en la queja del Sr. Martínez.

Creo más, Excmo. Sr., si a pesar de las instancias hechas por la Dirección a uno de los Jueces Federales, no obtuviera resultado alguno, podría indicar al particular perjudicado que ocurriera en queja ante la Suprema Corte o quejarse ella misma y aun apereibir al Juez negligente.

Los servicios que prestan los Ferrocarriles son de un interés general y por tal causa la ley ha dado a la Dirección General de Ferrocarriles, la personería a que me he referido y no podrá quedar ella sujeta a la acción o inacción de un Juez y restringida a no poder buscar ante los Jueces superiores el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de las Empresas, porque la misma ley no llenaría entonces los fines que se propuso.

La Suprema Corte ha declarado en la resolución que se halla en el tomo 27, página 389 de sus Fallos, que puede apereibir a un Juez Federal cuando su morosidad en el despacho sea notoria y este es entonces, el recurso que ha debido emplear el comerciante Martínez para obtener que sus acciones contra la Empresa del Gran Oeste Argentino sean debidamente atendidas y juzgadas.

La presentación ante el Director de Ferrocarriles en demanda de la devolución de sus mercaderías o su valor equivalente, con más daños y perjuicios, es a todas luces improcedente y nada puede resolver V. E. a su respecto, tratándose de una acción que debía ser sometida y que lo ha sido en efecto al Juez competente.

Todo lo que puede hacer V. E. en mi opinión, es dirigirse al Sr. Presidente de la Suprema Corte pidiéndole que tomando en cuenta la queja del recurrente Martínez, y lo expuesto por el Di-

rector General de Ferrocarriles, tenga a bien recomendar al Juez Federal de la Provincia de San Juan, el más pronto despacho del asunto que lo motiva en mérito de las razones que median de interés general. Octubre 16 de 1891.

Departamento de Justicia. — Resolución de Diciembre, 4 de 1891, dando vista al interesado para que ocurra donde corresponda.

Tomo 9, pág. 518. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Encuadra en las facultades del P. E. dirigirse a los Procuradores Fiscales de la Nación, en vísperas de un acto electoral, a fin de hacerles saber el propósito del P. E., de conservar una estricta imparcialidad y asegurar a los partidos y a los ciudadanos el libre ejercicio del sufragio, incitando a dichos Procuradores Fiscales a que deduzcan todas las acciones que nazcan de hechos punibles, previstos y penados por las leyes electorales y Código Penal.

Intervención del Gobierno en los asuntos relacionados con el derecho de sufragio

Señor Ministro:

Habiéndome manifestado V. E. en la conferencia a que se sirvió llamarme en el día de la fecha, su deseo de que formule por escrito mi opinión respecto del punto que se sirvió consultarme, paso a hacerlo en los términos que expreso a continuación:

S. E. se sirvió significarme, que el Excmo. Gobierno Nacional deseaba por los medios a su alcance y sin inmiscuirse en lo que corresponde al Poder Judicial de la Nación, hacer de su parte todo lo que sea posible a fin de asegurar a todos los ciudadanos de la República el más libre ejercicio de su derecho en lo que concierne a los actos electorales y a los preparativos de dichos actos a que han sido llamados, impidiendo que las autoridades subalternas o personas privadas pueden estorbarlos o consentir hechos que las leyes reprimen.

Las leyes electorales así como las que designan los crímenes cuyo juzgamiento compete a los Tribunales Nacionales y el Código

Penal, han declarado cuales son los actos prohibidos imponiéndoles su penalidad. Pueden verse los artículos 63 y siguientes de la ley de Elecciones Nacionales de 16 de Octubre de 1877, los artículos 20, 33, 34 y 35 de la Ley de 14 de Setiembre de 1863, que señala los crímenes de jurisdicción nacional y los artículos 227, 228, 231 y 237 del Código Penal.

Según el artículo 71 de la ley de Elecciones antes citada, corresponde al juez nacional de Sección la imposición de las multas que establecen los artículos anteriores debiendo conocer, breve y sumariamente a instancia o requisición del Ministerio Público, o de cualquier ciudadano, de las infracciones cometidas.

Creo por tanto que V. E., sin cometer acto alguno de los que la constitución reserva al Poder Judicial, podría dirigirse a los procuradores Fiscales de la Nación, manifestándoles cual es la actitud que el Gobierno Nacional ha resuelto guardar en los actos electorales y en los relacionados con estos, expresándoles que esa actitud consiste en conservar la más severa imparcialidad y en asegurar a todos los partidos y a todos los ciudadanos el más libre ejercicio del sufragio, impidiendo el que sea violentado o coartado en manera alguna y que el medio más eficaz y legítimo que se ofrece para obtener tal resultado es el de la más pronta y fiel aplicación de las penas con que la ley de Elecciones Nacionales y demás disposiciones vigentes castigan los delitos o faltas que se cometan contra el derecho electoral de los ciudadanos y que, estando los Procuradores Fiscales encargados por las mismas leyes de deducir ante los jueces Federales las acciones que nacen de los hechos punibles cuya aplicación corresponde a la Justicia Nacional, incita V. E. el celo de dichos Procuradores Fiscales para promover las causas y pedir la aplicación, de las penas legales, en todos los casos en que ello proceda según derecho.

Creo que es esto lo que podría hacer V. E. con legítimo título y sin que tal procedimiento pudiera ser observado, porque de la fiel y rigurosa aplicación de las leyes debe esperarse la completa regularidad de conducta de los ciudadanos convocados a los actos electorales.

Dejando cumplida la indicación recibida, tengo el honor de saludar a V. E. con mi más respetuosa consideración.

=====

- I. — El Código de Procedimientos en lo Criminal distingue dos situaciones: La extradición, que a falta de tratado prospera en base al principio de la reciprocidad —artículo 646— y el arresto provisorio a pedido de un Ministro Diplomático, que no puede fundarse en la reciprocidad, sino que debe ser solicitado por un país ligado con la República por tratado de extradición —artículo 671—.
- II. — Un telegrama, en el que se expresa solamente el crimen de que se halla acusada la persona cuya detención provisional se solicita, no es requisito suficiente a los efectos del artículo 671 del Código citado, que exige se invoque una sentencia u orden de prisión.

La Legación de Francia, sobre el caso de extradición de Bartolomé Crespo, acusado de asesinato seguido de robo .

Excmo. Señor:

Según la disposición del artículo 673 del Código de Procedimientos en lo Criminal, «el arresto provisorio de un extranjero podrá ordenarse a pedido de un Ministro Diplomático, hasta tanto lleguen los documentos necesarios para presentar el pedido de extradición, y serán aplicables a este caso las disposiciones de los dos artículos precedentes».

En el artículo 671, al que se refiere el que acabo de copiar, exige, para que el arresto provisorio pueda ser decretado *«que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden de prisión y se determine con claridad la naturaleza del delito condenado o perseguido»*.

En el telegrama dirigido a S. E. el Señor Ministro de Francia por el Señor Procurador de la República en Marsella, que en copia se acompaña, se expresa solamente el crimen de que se halla acusada la persona refugiada cuya detención provisional se solicita; pero no se invoca, como lo exige el artículo 671 citado, la existencia de una orden de prisión librada contra él por la justicia de Francia.

El mismo artículo 671 exige igualmente, que el arresto provisorio de un extranjero sea solicitado por un país ligado con la República por tratado de extradición, cuyo tratado no existe entre nuestro país y la Francia.

Es cierto que el artículo 646 del mismo Código, autoriza la extradición, a falta de tratado, en los casos en que sea procedente, según el principio de reciprocidad o la práctica uniforme de las naciones. Pero podría muy bien decirse que lo resuelto para los casos de extradición no lo está para el caso en que sólo se trata del arresto provisional de un individuo cualquiera; que el pedido de aquella se instruye con documentos que no se requieren para la segunda; y, en fin, que nuestra ley hace distinción de ambos casos, admitiendo en el de extradición, a falta de tratado, el principio de la reciprocidad; y exigiendo en el de arresto provisorio, la existencia de un tratado de extradición.

En consecuencia de las observaciones que preceden, soy de opinión, que V. E. no se halla en el caso de acceder a la petición de S. E. el Señor Ministro de Francia. — Octubre 28 de 1891.

Departamento de Relaciones Exteriores.— Se adopta como resolución el dictamen que antecede. — Octubre 28 de 1891.

Tomo 9, pág. 615. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

Es improcedente el pedido de amparo formulado por un ciudadano argentino ante nuestra Legación en Bolivia, por vejámenes que le fueran causados por un jefe revolucionario boliviano, por cuanto de conformidad al artículo VI del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de 9 de Julio de 1868 celebrado con la mencionada República, debe el reclamante dirigir su acción ante los mismos Tribunales Bolivianos.

El Encargado de Negocios en Bolivia, sobre el caso de prisión y despojo en esa República, del ciudadano argentino Manuel Vespa

Excmo. Señor:

El artículo VI del tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación celebrado con la República de Bolivia el 9 de Julio de

1868, citado en la nota que precede de la Legación Argentina en aquella República, resuelve el caso a que dicha nota se refiere.

Tampoco se podrán entablar reclamaciones diplomáticas, dice en su segundo inciso el mencionado artículo VI, por las violaciones de propiedad o ataques personales que los Ciudadanos de las Repúblicas, contratantes sufran en la otra, por consecuencia de una conmoción intestina, *en cuyo caso aquellos sólo podrán emplear las acciones que las Leyes conceden a los nacionales*. El Señor Manuel Vespa ha sufrido vejámenes de que se queja, de un Jefe revolucionario, el Coronel Domingo Ardaya y se halla por tanto en el caso, no de pedir el amparo de la Legación Argentina, sino de ejercitar contra dicho jefe las acciones que las leyes de Bolivia acuerdan a sus nacionales por las violaciones que hayan sufrido en su propiedad y por los ataques personales que les hayan sido inferidos.

Creo que en este sentido debe V. E. contestar la nota que precede. — Buenos Aires, Noviembre 10 de 1891.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Se adopta como resolución lo dictaminado. — Noviembre 10 de 1891.

Tomo 9, pág. 603. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La emisión de boletos hecha por un Empresa de Tranvías por un valor equivalente a moneda de cobre, para sustituir a ésta, como remedio a su escasa cantidad en circulación, implica una violación al artículo 67, inciso 10 de la Constitución Nacional y contraría el régimen establecido por la Ley de Moneda.

Sobre circulación de vales por las empresas de tranvías

Excmo. Señor:

Si las boletas acompañadas a la nota dirigida por V. E. al Señor Jefe de Policía, no son moneda, han sido hechas y entregadas al público en tal carácter una vez que su objeto es el de cancelar con el que la recibe una obligación aunque pequeña, de la Empresa emisora.

Pero sólo la autoridad pública, sólo la Ley (art. 67, Inciso 10 de la Constitución Nacional) tiene poder de sellar moneda, fijar

su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para toda la Nación.

Si se adoptaran las ideas emitidas por el Señor Presidente de la Compañía de Tranvías Ciudad de Buenos Aires, esto es, que con la emisión de tales boletos, sólo ha hecho la Empresa que dirige, uso del crédito que tiene, tendríamos pronto que cada casa de comercio, no sólo las que venden por mayor si no también todas aquellas que despachan en detalle, emitirán boletas análogas en pago de las sumas que deben entregar en moneda de curso legal, y la Capital y el país entero se verían pronto llenos de innumerables emisiones de billetes, boletas y títulos de todo género y de toda especie, representativos de la moneda fraccionada.

Pero esto, sería completamente inaceptable en presencia de la Ley de monedas y de las que han concedido los Bancos la facultad de emitir en condiciones dadas.

Se alega que hay escasez de moneda de cobre y que las boletas de que se trata se reciben voluntariamente. Si aquel hecho es cierto, no creo que lo sea igualmente exacto el recibo voluntario de la boleta. Lo que habrá es que se recibe de buena o mala gana y sólo porque por dos centavos no puede hacerse cuestión con un mayoral de tranvías.

Pero si es cierto el hecho de que no hay cobres en cantidad necesaria, él no puede autorizar la emisión y entrega de las boletas referidas y sólo podría dar lugar a que las Empresas que, como las de tranvías lo necesitan para sus cambios, ocurran ante V. E. pidiéndole cumpla esa necesidad, ya ordenando la acuñación de una cantidad mayor de cobre, que la Casa de Moneda daría en cambio de billetes de mayor valor a dichas Empresas, ya adoptando otras medidas que pudieran producir el resultado que se busca.

La emisión y entrega de las boletas que motivaron la referida nota de V. E. no puede admitirse en mi opinión, como ejercicio de un derecho legítimo de las Empresas y pienso por tanto que debe mantenerse la resolución recurrida sin perjuicio de la adopción de las medidas tendientes a proveer de moneda de cobre del valor de uno y dos centavos, cuya escasez es notoria en esta Capital. Noviembre 19 de 1891.

Departamento de Hacienda. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. Noviembre 23 de 1891.

Tomo 9, pág. 619. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

La corrida de toros, constituye un acto punible en los términos del artículo 1.º de la ley N.º 2786, aunque expresamente la ley no lo declare.

La Sociedad Protectora de Animales sobre una corrida de toros que ha de efectuarse en el Rosario de Santa Fe

Excmo. Señor:

La ley N.º 2786 no me ha sido comunicada; y, siendo la fecha de su promulgación la de 3 de Agosto del corriente año, tampoco se halla en el Registro Nacional, que aún no ha sido publicado.

He podido, con todo, imponerme de ella leyéndola en la página 38 del décimo informe anual —año 1891— de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, y en vista de ella creo fundada la queja que precede, dirigida a V. E. por el Sr. Presidente de dicha Sociedad.

Decláranse actos punibles (dispone el art. 1.º de la citada Ley) *los malos tratamientos ejercitados con los animales*, y las personas que los ejerciten, sufrirán una multa de dos a cinco pesos, o en su defecto arresto, computándose dos pesos por cada día de arresto.

En la primera parte de este artículo se hallan sin duda comprendidas las corridas de toros, pues en ella por naturaleza misma de los actos que se ejecutan con los toros que se corren, importan todos ellos *malos tratamientos* que, no sólo prohíbe la ley, sino que los declara punibles.

La Ley de la Provincia de Buenos Aires, de 5 de Agosto de 1886, era más expresa: «Queda prohibido, decía, el establecimiento de plazas o circos para corridas de toros en todo el territorio del Estado». Pero no obstante que la N.º 2786 del H. Congreso Nacional no se ocupa especialmente de corridas de toros, no puede

dudarse por la razón antes expuesta, de que se encuentran comprendidas en su disposición.

Si las corridas de toros, son para la ley actos punibles, es una consecuencia necesaria la de que son igualmente actos ilícitos, y por tanto prohibidos. No podría decirse con razón de que pagando la multa, o sufriendo el arresto con que dicha ley castiga el acto punible, podría éste, continuar ejecutándose libremente porque no hay libertad para ejercitar los actos que la ley declara ilícitos y merecedores de pena.

Soy pues, de opinión que V. E. cumpliendo la ley citada, no debe consentir que se establezcan en la República, plazas o corridas de toros.

En la nota que precede, manifiesta el Sr. Presidente de la Sociedad Protectora, que V. E. se dirigió al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, pidiéndole que hiciera respetar y cumplir en todas sus partes la ley N° 2786; pero que a pesar de ello, en la ciudad de Rosario, ha tenido lugar una corrida de toros y se anuncian otras, como lo comprueba el programa que acompaña, por lo que pide nombre V. E. un agente especial que haga respetar y cumplir dicha ley, sirviéndose para ello de las fuerzas de la Nación, si fuere necesario.

Me imagino que S. E. el Sr. Gobernador de dicha Provincia, no habrá tenido conocimiento del hecho denunciado o no lo habrá creído comprendido en las disposiciones de la ley; pero no puede suponerse en él, la intención de no prestar la debida obediencia o de negarse a hacerla cumplir. Y siendo dicho Señor Gobernador, agente natural y constitucional de V. E. para el cumplimiento de las leyes dictadas por el H. Congreso, soy de opinión que bastará que V. E. declare que las corridas de toros están comprendidas en la ley N.º 2786 y que le recomiende que, haciendo cumplir la citada ley, no consienta dichas corridas en la Provincia de su mando. Noviembre 30 de 1891.

Departamento del Interior. — Se adopta como resolución lo dictaminado. Diciembre 4 da 1891.

Un telégrafo construído por la Provincia de Buenos Aires, que liga a esta Provincia con la Capital Federal, se reputa de carácter nacional de conformidad al artículo 2.º de la ley de telégrafos nacionales, y en consecuencia, sujeto a las prescripciones de esta ley y de las demás leyes nacionales que se dicten. Debe la empresa propietaria del telégrafo, someter su tarifa a la aprobación del Poder Ejecutivo y aplicarse al respecto, el artículo 6.º de la mencionada ley de Telégrafos Nacionales.

La Dirección de Correos y Telégrafos, reclama del F. C. del Oeste de la Provincia de Buenos Aires el restablecimiento de las tarifas telegráficas por hallarse sujeto a la jurisdicción Nacional.

Excmo. Señor:

La Ley de 7 de Octubre de 1875 sobre Telégrafos Nacionales dispone:

1.º «Que el servicio de todos los telégrafos nacionales existentes en la República y de los que en adelante se establecieren, así como las relaciones de la vida civil a que ellos pudieran dar lugar estarán sujetos a las prescripciones de dicha ley y a las demás que dictare el Congreso con idéntico objeto» (Artículo 1.º).

2.º «Consideránse nacionales a los efectos del artículo anterior. . . Los que ligaren un territorio federal con una o más Provincias» (Artículo 2.º).

3.º «Las Provincias podrán construir o autorizar la construcción de telégrafos dentro de los límites de su territorio respectivo, sin intervención del gobierno general. . . . Estos telégrafos quedarán sujetos a las prescripciones de la presente Ley, en aquellos puntos en que ella establece y reglamenta relaciones de derecho civil, comercial y penal» (Artículo 3.º).

4.º «Las empresas respectivas fijarán de acuerdo con el P. E. la tarifa de las comunicaciones telegráficas que se dirijan por los telégrafos autorizados por la Nación. En caso de acuerdo entre las Empresas y el P. E. sobre este punto, la dificultad será sometida a tres árbitros nombrados uno por cada parte y el tercero por los dos reunidos. Si estos dos no se acordaren en la persona del tercero, este deberá ser designado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia».

«De la resolución de los árbitros no habrá lugar a recurso alguno». (Artículo 6.º de la ley citada).

No puede dudarse que el Telégrafo del Ferrocarril del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, liga a esta provincia con la Capital de la República, y que por tanto, se halla comprendido en la disposición del art. 2º antes transcripto de la mencionada Ley.

Si esto es así; si dicho Telégrafo es considerado nacional por la Ley, tampoco puede dudarse de que está sujeto a sus prescripciones y demás Leyes Nacionales que se dicten, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1º de la mencionada Ley.

El hecho de no haber sido autorizado el establecimiento del Telégrafo por el P. E. Nacional, como lo establece el art. 4º de la Ley de Telégrafos, sino por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nada significa porque según el art. 3º de la misma Ley, las Provincias pueden construir o autorizar la construcción de Telégrafos dentro de su territorio y estos telégrafos quedan sujetos a las prescripciones de la Ley Nacional.

La Provincia de Buenos Aires, construyó los telégrafos de sus Ferrocarriles, haciendo uso de su derecho; pero la Empresa que le ha sucedido en su propiedad, no puede negarse con igual derecho a la sumisión que debe a la Ley Nacional, una vez que se halla comprendida en sus disposiciones.

En relación con la fijación de las tarifas que determinen lo que dichas Empresas pueden cobrar por las comunicaciones telegráficas, el art. 6º de la Ley general de 7 de Octubre de 1875, dispone que la tarifa sea fijada de acuerdo con el P. E.; y que si no se obtuviera dicho acuerdo, la dificultad se resuelva por medio de árbitros, nombrados en la forma que señala y cuyo fallo no daría lugar a recurso alguno.

Si se dijera que este artículo 6º sólo se refiere a las comunicaciones telegráficas que se dirijan por los telégrafos autorizados por la Nación; y que la sujeción a la ley que ésta impone a los telégrafos construídos por las Provincias o con su autorización, se refiere sólo a «aquellos puntos en que ella establece y reglamenta relaciones de derecho civil, comercial o penal», podría contestarse con razón, respecto del primer punto, que todos los telégrafos que la ley considera nacionales, deben naturalmente entenderse autorizados por la Nación; y respecto del 2º, que la Ley en cuanto ordena que las tarifas con arreglo a las cuales deba cobrarse al público, por la trasmisión de las comunicaciones telegráficas,

establece entre la Empresa y los particulares que la ocupan, una relación de derecho civil, que sujeta a aquélla, a las disposiciones de la misma Ley.

Pienso en consecuencia que la Dirección de Telégrafos Nacionales ha procedido bien, en las reclamaciones que ha dirigido a la Empresa del Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires; y que esta Empresa carece de razón fundada al sostener que el conflicto que dice existir, debe ser resuelto entre el Poder Ejecutivo y el Gobierno de la Provincia.

Cuando se trata del cumplimiento de una Ley nacional, no puede existir tal conflicto entre los poderes de la Nación y los de una Provincia que no está obligada a cumplirla, porque la Ley no le concierne. En el caso actual no es la Provincia de Buenos Aires, sino la Empresa propietaria del Telégrafo la que debe someter su tarifa al acuerdo o aprobación de V. E. y las relaciones entre V. E. y la Empresa están, a mi juicio, claramente establecidas en las disposiciones del artículo 6.º antes citado. Si V. E. no presta su aprobación a la tarifa que se le someta, la Empresa podrá pedir el nombramiento de los arbitradores a que tienen derecho y habrá de estarse en definitiva a lo que tales jueces resuelven. Pero en ningún caso la Empresa podrá alterar la tarifa que esté rigiendo, ni aun con la autorización del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, si antes no media el acuerdo o aprobación de V. E.

Pienso que la inteligencia que he dado a las disposiciones de la Ley General de Telégrafos, en lo relativo al punto discutido en este expediente es la que le corresponde; y en tal sentido podría servirse V. E. resolver la consulta del Señor Director de Correos y Telégrafos. — Diciembre 5 de 1891.

Departamento del Interior. — Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Abril 12 de 1891.

Tomo 9, pág. 587. — Inf. de los Consej. Leg. del P. E.

=====

- I. — No encontrándose mencionada una sustancia en la clasificación del Código de Minería; ello debe ser materia de una ley.
- II. — Corresponde conceder —con carácter provisorio— la explotación de una sustancia no enunciada en el Código de Minería, sujetándola a las condiciones de la categoría a que más se aproxima y hasta tanto la ley no lo resuelva definitivamente.

Excmo. Señor:

Opino de perfecta conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro que tratándose de una especialidad no mencionada en el Código de Minería, la categoría que corresponde según la clasificación del C. de Minas debe ser materia de una ley del Congreso.

Esto no obstante, atendiendo a la conveniencia que resultaría de no dejar definitivamente abandonadas fuentes incontestables de riquezas y a que los mismos trabajos emprendidos desde ya podría proporcionarles elementos prácticos para la más acertada apreciación en la clasificación definitiva de la ley, opino también que V. E. con carácter provisorio y sujetando a los interesados a lo que en definitiva establezca la ley que V. E. solicite del Honorable Congreso, podría conceder la explotación pedida, sujetándola por ahora a las condiciones de la segunda categoría a que se refiere el artículo 4.º inciso 6.º del C. de Minería, a que más se aproxima según el informe del Departamento Técnico de Minas y Geología.

Este temperamento provisorio está indicado en el comentario del artículo 6.º del mismo C. de Minería, cuando en la página 23 edición Oficial expresa, «que si hubiera verdadero perjuicio para el empresario o para la sociedad el esperar la sanción de una ley, que muchas veces ofrece dilaciones indefinidas, la autoridad entonces, haría la concesión con calidad de dar cuenta a las Cámaras».

Si V. E. se sirviese adoptar este temperamento provisorio, convendría oír nuevamente al Departamento Técnico acerca de las condiciones y obligaciones de los concesionarios. — Julio de 1892.

=====

Un contraproyecto de tratado de extradición que presenta el Cónsul de los Países Bajos merece las siguientes observaciones:

- 1.º) Que los atentados contra el Soberano o Jefe de Estado con el designio de hacerlo incapaz de reinar que el artículo 2.º inciso 1.º indica como causa de extradición, sea tenido como tal, siempre que no configuren delitos de carácter político, que de conformidad con el inciso 2.º artículo 3.º del mismo proyecto y nuestra ley de la materia de 25 de agosto de 1885, están excluidos de la extradición.
- 2.º) El inciso 2.º se refiere a delitos cometidos por actos de violencia en público, en reunión de gente, contra personas o propiedades; si revisten carácter político, deben quedar excluidos.
- 3.º) El artículo 6.º establece que los individuos requeridos por delitos que merecen pena capital, según la ley del Estado requiriente, no serán entregados sino bajo la condición de que dicha pena no les será aplicada; lo que está conforme con el artículo 667 de nuestro Código de Procedimientos en lo Criminal.
- 4.º) Debe consignarse en el proyecto que sólo los jueces de jurisdicción superior —de Instrucción y de Sentencia— puedan solicitar la prisión preventiva a los efectos del artículo 11 del mismo proyecto.

Tratado de extradición, entre la República Argentina y los Países Bajos

Excmo. Señor:

El contra-proyecto presentado a la consideración de V. E. por el Señor Cónsul de los Países Bajos, en sustitución del Gobierno Argentino, no contiene en general diferencias sustanciales; ni contradice las disposiciones de nuestras leyes sobre extradición de criminales. Hay sin embargo, algunas, sobre las que creo deber, solicitar la atención de V. E.

En su artículo 2.º, el inciso 1.º, consigna expresamente, como causa de extradición, el atentado contra la vida o la libertad del Soberano, Jefe del Estado, con el designio de hacerlo incapaz de reinar.

Este inciso, no se encuentra en el proyecto Argentino, cuyo artículo 2.º) se refiere, en general al homicida, asesino, parricida, etc., etc. Pero si pueden ocurrir dudas respecto a su aceptación, en el supuesto de importar, en general, tal atentado, un delito político excluido de la extradición por el artículo 3.º de nuestra ley de 25 de Agosto de 1885, tal duda, a mi juicio desaparece ante el inciso 2.º del artículo 3.º del mismo contraproyecto, que de confor-

midad con el proyecto y ley Argentina, reconoce «que la extradición no tendrá lugar por los delitos políticos o hechos conexos con delitos políticos».

El atentado contra la vida o la libertad de un Jefe de Estado, puede ser un delito del derecho común, punible por todos los Códigos Criminales, y objeto por consiguiente de la extradición, o un delito político o hecho conexo con el delito político, en cuyo caso el contra-proyecto de acuerdo con nuestra ley de 1885, reconoce no ser procedente la extradición.

Armonizados así el artículo 2.º con el 3.º del contra-proyecto, opino que el artículo 3.º de la ley de extradición de 1885, no se opone a la admisión de la base proyectada. Es de notarse, sin embargo, que en los tratados anteriores celebrados por la Nación Argentina con otras potencias; como el Reino de Italia en 1868 —el Imperio del Brasil 1869— el Reino de Portugal en 1878 y el de España 1881— no se hace distinción especial de atentados contra la vida o libertad del Jefe de Estado, lo que puede proceder de haberse considerado incluidos tales hechos como delitos comunes en la clasificación genérica de homicidio, asesinato, etc., cuando no tiene el carácter político que los excluye de la extradición.

El inciso 21 del proyecto del Gobierno de los Países Bajos, es más explícito y extenso, en sus propósitos, que el nuestro.

Al robo cometido con violencia que expresa el inciso 2.º del proyecto Argentino, el contra-proyecto antepone los actos de violencia cometidos en público, por reuniones de gente, contra personas o propiedades.

Debiendo comprenderse definitivamente excluidos, los actos de violencia ejercidos como delitos políticos conexos, con sujeción al texto expreso del Artículo 3.º de ambos proyectos, este inciso no puede referirse sino a los delitos comunes que pueden ser consumados en reuniones tumultuarias, como homicidio, incendio, saqueo, destrucción de propiedades, etc., etc. y tales delitos punibles con pena mayor de un año de prisión. Pueden y deben ser incluidos entre los que autoriza la extradición.

El Artículo 6.º del contra-proyecto pretende que los individuos requeridos por delitos que merecen pena capital, según la legislación del Estado requiriente, no serán entregados sino bajo la condición de que dicha pena no les será aplicada. Esta prevención no

se encuentra en el proyecto argentino. No obstante, estando la pena de muerte suprimida en los Códigos de muchos Estados —siendo principio uniformemente aceptado, el de la reciprocidad universal, y prescribiendo el artículo 667 de nuestro Código de Procedimientos en lo Criminal «que cuando el delito que motiva la solicitud de extradición, tenga una pena menor en la República, el encausado no será extraído sino a condición de que los tribunales del País que lo reclama, le impondrán la pena menor» opino que V. E. debería aceptar la base proyectada; como complemento del art. 6.º

El artículo 7.º del proyecto del Gobierno Argentino, no resulta incluído en el contra-proyecto que analizo. Graves consideraciones de orden público y moralidad administrativa aconsejan su aceptación.

En el estado actual de la civilización universal, no es posible sin la ofensa de la vindicta pública, dejar impunes los grandes crímenes, por el hecho de haberse refugiado el criminal en el Estado de que es ciudadano.

Si ese Estado no debe entregar entonces a sus súbditos a una jurisdicción extraña, debe juzgarle con arreglo a sus leyes. Así fué establecido por diversos tratados, y prescriptos por el artículo 5.º de la ley de extradición para la República Argentina. Opino que V. E. debería en consecuencia, insistir al respecto, en la conveniencia de conservar en el proyecto en formación, el artículo 7.º propuesto por el Gobierno Argentino.

Las demás actuaciones que considero de mero detalle, si bien no afectan nuestra legislación en lo criminal, tampoco obstaculizan la aceptación de las bases comunes a ambos proyectos. — Julio 7 de 1892.

Excmo. Señor:

Según nuestras leyes de jurisdicción y procedimientos, los Jueces Correccionales conocen de los delitos en que la pena no exceda de un año de prisión. Pudiendo entonces imponer *pena de un año*, les correspondería la atribución de solicitar prisión preventiva contra los inculpados sujetos a su jurisdicción y pasibles de aquella pena, si es exacto según mis recuerdos, que el proyecto autoriza la extradición por delitos sujetos a pena no menor de un año de prisión.

No obstante, siendo esa pena máximun de Jurisdicción Correccional y muy difícil apreciar desde el primer momento la oportunidad de su aplicación, mucho más cuando en la práctica, son en general hechos sin trascendencia los que van a aquel Juzgado, quizá podría suprimirse su enunciación en el tratado, y designar sólo los Jueces de Jurisdicción superior.

Estos, a quienes incumbe el derecho de dictar órdenes de prisión, son los de Instrucción y los de Sentencia en lo Criminal. — Julio 22 de 1892.

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Julio 22 de 1892.